LXIII LEGISLATURA
CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

AÑO III SESIÓN ORDINARIA PRIMER PERIODO LXIII CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO NÚMERO 100

GUANAJUATO, GTO., 26 DE OCTUBRE DE 2017

SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO. SESIÓN ORDINARIA. TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. PRIMER PERIODO ORDINARIO. 26 DE OCTUBRE DEL AÑO 2017. [1]

SUMARIO

- Lista de asistencia y comprobación del quórum. 5
- Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día. 5
- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión ordinaria, celebrada el día 19 de octubre del año en curso. 8
- Dar cuenta con las comunicaciones y correspondencia recibidas. 16
- Presentación de la iniciativa de Ley de Seguridad Social del Estado de Guanajuato, formulada por el Gobernador del Estado. 19
- Presentación de la iniciativa formulada por la diputada Luz Elena Govea López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a efecto de reformar diversas disposiciones del Código Civil para el Estado de Guanajuato. 55
- Presentación de la iniciativa por la que se adicionan los artículos 18 bis y 19 bis a la Ley de Seguridad Social del Estado de Guanajuato, formulada por el diputado Alejandro Trejo Ávila de la Representación Parlamentaria del Partido Nueva Alianza. 58
- Presentación de la iniciativa formulada por las diputadas y los diputados integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, y la diputada Presidenta del Congreso del Estado, a efecto de reformar la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, y la creación de la Ley de Seguridad Privada para el Estado y los Municipios de Guanajuato. 61
- Presentación de la iniciativa formulada por la diputada María Guadalupe Velázquez Díaz del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a efecto de reformar el artículo 15 a la Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado y los Municipios de Guanajuato. 78
- Presentación de la iniciativa de Ley de Fomento, Difusión y Derechos Culturales para el Estado de Guanajuato, formulada por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 82
- Presentación de los informes de resultados formulados por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, relativos a las revisiones practicadas a las cuentas públicas de la

[1] **Artículo 151 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.** »Lo acontecido en las sesiones a las que se refiere este Capítulo, será consignado en un medio de difusión oficial denominado Diario de los Debates, en el que se publicará la fecha y lugar donde se verifiquen el sumario, nombre de quien presida, copia fiel del acta de la sesión anterior, la trascripción de la versión en audio de las discusiones en el orden que se desarrollen e inserción de todos los asuntos con que se dé cuenta, lo anterior en un plazo de veinticuatro horas posteriores a la sesión. No se publicarán las discusiones y documentos relacionados con las sesiones privadas cuando se esté en los supuestos del artículo 73 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato. Lo anterior se aplicará en lo conducente a las Comisiones Legislativas. »

Universidad de Guanajuato, correspondientes al tercer y cuarto trimestres del ejercicio fiscal de 2015; y de las administraciones municipales de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, por el periodo comprendido de julio a diciembre de 2015; así como de Atarjea, Ocampo y Silao de la Victoria, por el ejercicio fiscal de 2016; asimismo a las operaciones realizadas con recursos del Ramo 33 y de obra pública de los municipios de Celaya y Guanajuato, por el ejercicio fiscal de 2016. 99

- Propuesta y, en su caso, aprobación del punto de acuerdo suscrita por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, a efecto de formular un respetuoso exhorto a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que refrende una inversión al menos comparable a la del año 2016, en cuanto a los recursos del Fondo Metropolitano asignado a las Zonas Metropolitanas correspondientes al Estado de Guanajuato para el ejercicio fiscal del año 2018. 103

- Propuesta y, en su caso, aprobación del punto de acuerdo presentado por diputadas y diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática; y de las Representaciones Parlamentarias de Movimiento Ciudadano y de Nueva Alianza y del diputado David Alejandro Landeros, por el que se formula un respetuoso exhorto al Senado de la Republica con la finalidad que una vez recibida la información sobre los motivos de la remoción del Dr. Santiago Nieto Castillo, del cargo de fiscal especializado en la Atención de Delitos Electorales, le dé el carácter de información pública y se ponga a disposición de la ciudadanía a través del portal de internet del propio Senado, además solicitamos que la Cámara analice y estudie la separación del Fiscal antes mencionado y en caso de ser conducente se ejerza su facultad constitucional para objetar la referida remoción con la finalidad de que se restablezcan las condiciones de legalidad y certeza jurídica en la Fiscalía Especializada, brindando con ello la seguridad a los mexicanos del compromiso del Poder Legislativo Federal en el combate a la corrupción y la preservación de la democracia en nuestro país. 106

- Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen formulado por las Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización y de Gobernación y Puntos Constitucionales, relativo a la iniciativa de Ley de Austeridad para el Estado de Guanajuato y sus Municipios, formulada por el diputado David Alejandro Landeros de la Representación Parlamentaria del Partido MORENA. 110

- Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen presentado por las Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización y de Gobernación y Puntos Constitucionales, relativo a dos iniciativas formuladas por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional ante esta Sexagésima Tercera Legislatura y una, formulada por la diputada y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México ante la Sexagésima Segunda Legislatura, a efecto de reformar y adicionar diversos artículos de la Ley de Alcoholes para el Estado de Guanajuato. 116

- Manifestándose a favor del dictamen, interviene el diputado Juan José Álvarez Brunel. 130

- El diputado Juan Antonio Méndez Rodríguez interviene en pro del dictamen puesto a consideración. 132

- Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen presentado por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, relativo a la iniciativa a efecto de reformar la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, en materia de designación del titular del organismo estatal de protección de los derechos humanos, suscrita por las diputadas y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, ante esta Sexagésima Tercera Legislatura. 133

- El diputado Rigoberto Paredes Villagómez interviene para fundamentar el dictamen en los términos del artículo 178, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. 146

- A favor del dictamen, interviene la diputada Libia Dennise García Muñoz Ledo. 147

- Manifestándose a favor del dictamen, interviene la diputada María Soledad Ledezma Constantino. 148

- Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas públicas municipales de Acámbaro, Gto., por el periodo comprendido de julio a diciembre del ejercicio fiscal del año 2014. 151

- Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas públicas municipales de Jerécuaro, Gto., por el periodo comprendido de enero a junio del ejercicio fiscal del año 2015. 161

- Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las operaciones realizadas con recursos del Ramo 33 y de obra pública por la administración municipal de Huanímaro, Gto., correspondientes al periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 2016. 169

- Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las operaciones realizadas con recursos del Ramo 33 y de obra pública por la administración municipal de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Gto., correspondientes al periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 2015. 176

- Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las operaciones realizadas con recursos del Ramo 33 y de obra pública por la administración municipal de Manuel Doblado, Gto., correspondientes al periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 2015. 186

- Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las operaciones realizadas con recursos del Ramo 33 y de obra pública por la administración municipal de Irapuato, Gto., correspondientes al periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 2016. 196

- Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas públicas municipales de Jaral del Progreso, Gto., por el periodo comprendido de julio a diciembre del ejercicio fiscal del año 2015. 205

- Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas públicas municipales de Doctor Mora, Gto., por el periodo comprendido de julio a diciembre del ejercicio fiscal del año 2015. 213

- Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al informe de resultados de la auditoría de desempeño practicada a la administración municipal de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Gto., correspondiente al periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 2016. 220

- Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al informe de resultados de la auditoría de desempeño practicada a la administración municipal de Salamanca, Gto., correspondiente al periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 2016. 229

- Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al informe de resultados de la auditoría de desempeño practicada a la administración municipal de Tierra Blanca, Gto., correspondiente al periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 2016. 238

- Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al informe de resultados de la auditoría de desempeño practicada a la administración municipal de Doctor Mora, Gto., correspondiente al periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 2016. 247

- Presentación de la propuesta que suscriben la diputada y los diputados integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, relativa a la modificación en la integración de las Comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y Para la Igualdad de Género de esta Sexagésima Tercera Legislatura. 256

- Asuntos generales. 257

- La diputad Beatriz Manrique Guevara, interviene con el tema »sector salud» 257

- Intervención de la diputada Arcelia María González González, presenta un Punto de Acuerdo respecto al presupuesto. 259

- **Intervención del diputado Juan Carlos Muñoz Márquez, para presentar una propuesta de Punto de Acuerdo, a través del cual se instruye a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato para que integre el expediente relativo a la Auditoría Integral practicada a la administración pública municipal de León, Gto.** **262**

- **Clausura de la sesión.** **264**

PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA ANGÉLICA CASILLAS MARTÍNEZ.

LISTA DE ASISTENCIA Y COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM.

-La C. Presidenta: Buenos días. Se pide a la secretaría certificar el quórum conforme al registro de asistencia del sistema electrónico.

Informo a la Asamblea que las diputadas María Alejandra Torres Novoa y Luz Elena Govea López, así como el diputado Santiago García López, no estarán presentes en esta sesión, tal como se manifestó en los escritos remitidos previamente a esta presidencia, de conformidad con el artículo 28 de nuestra Ley Orgánica; en consecuencia, se tienen por justificadas las inasistencias.

-La Secretaría: Con todo gusto presidenta.

(Pasa lista de asistencia)

¿Falta alguna diputada o algún diputado de emitir su voto?

La asistencia es de 30 diputadas y diputados. Hay quórum señora presidenta; 31 ya con la diputada Verónica Orozco Gutiérrez.

-La C. Presidenta: Siendo las once horas con treinta y un minutos, se abre la sesión.

Se instruye a la secretaría a dar lectura al orden del día.

LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA.

-La Secretaría: Con gusto presidenta.

(Leyendo) **»PODER LEGISLASTIVO. SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO. SESIÓN ORDINARIA. TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. PRIMER PERÍODO ORDINARIO. 26 DE OCTUBRE DE 2017. PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA ANGÉLICA CASILLAS MARTÍNEZ.**

Orden del día: 1. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día. **2.** Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión ordinaria, celebrada el día 19 de octubre del año en curso. **3.** Dar cuenta con las comunicaciones y correspondencia recibidas. **4.** Presentación de la iniciativa de Ley de Seguridad Social del Estado de Guanajuato, formulada por el Gobernador del Estado. **5.** Presentación de la iniciativa formulada por la diputada Luz Elena Govea López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a efecto de reformar diversas disposiciones del Código Civil para el Estado de Guanajuato. **6.** Presentación de la iniciativa por la que se adicionan los artículos 18 bis y 19 bis a la Ley de Seguridad Social del Estado de Guanajuato, formulada por el diputado Alejandro Trejo Ávila de la Representación Parlamentaria del Partido Nueva Alianza. **7.** Presentación de la iniciativa formulada por las diputadas y los diputados integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, y la diputada Presidenta del Congreso del Estado, a efecto de reformar la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, y la creación de la Ley de Seguridad Privada para el Estado y los Municipios de Guanajuato. **8.** Presentación de la iniciativa formulada por la diputada María Guadalupe Velázquez Díaz del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a efecto de reformar el artículo 15 a la Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado y los Municipios de Guanajuato. **9.** Presentación de la iniciativa de Ley de Fomento, Difusión y Derechos Culturales para el Estado de Guanajuato, formulada por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

10. Presentación de los informes de resultados formulados por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, relativos a las revisiones practicadas a las cuentas públicas de la Universidad de Guanajuato, correspondientes al tercer y cuarto trimestres del ejercicio fiscal de 2015; y de las administraciones municipales de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, por el periodo comprendido de julio a diciembre de 2015; así como de Atarjea, Ocampo y Silao de la Victoria, por el ejercicio fiscal de 2016; asimismo a las operaciones realizadas con recursos del Ramo 33 y de obra pública de los municipios de Celaya y Guanajuato, por el ejercicio fiscal de 2016. **11.** Propuesta y, en su caso, aprobación del punto de acuerdo suscrita por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, a efecto de formular un respetuoso exhorto a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que refrende una inversión al menos comparable a la del año 2016, en cuanto a los recursos del Fondo Metropolitano asignado a las Zonas Metropolitanas correspondientes al Estado de Guanajuato para el ejercicio fiscal del año 2018. **12.** Propuesta y, en su caso, aprobación del punto de acuerdo presentado por diputadas y diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática; y de las Representaciones Parlamentarias de Movimiento Ciudadano y de Nueva Alianza y del diputado David Alejandro Landeros, por el que se formula un respetuoso exhorto al Senado de la Republica con la finalidad que una vez recibida la información sobre los motivos de la remoción del Dr. Santiago Nieto Castillo, del cargo de fiscal especializado en la Atención de Delitos Electorales, le dé el carácter de información pública y se ponga a disposición de la ciudadanía a través del portal de internet del propio Senado, además solicitamos que la Cámara analice y estudie la separación del Fiscal antes mencionado y en caso de ser conducente se ejerza su facultad constitucional para objetar la referida remoción con la finalidad de que se restablezcan las condiciones de legalidad y certeza jurídica en la Fiscalía Especializada, brindando con ello la seguridad a los mexicanos del compromiso del Poder Legislativo Federal en el combate a la corrupción y la preservación de la democracia en nuestro país. **13.** Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen formulado por las Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización y de Gobernación y Puntos Constitucionales, relativo a la iniciativa de Ley de Austeridad para el Estado de Guanajuato y sus Municipios, formulada por el diputado David Alejandro Landeros de la Representación Parlamentaria del Partido Morena. **14.** Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen presentado por las Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización y de Gobernación y Puntos Constitucionales, relativo a dos iniciativas formuladas por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional ante esta Sexagésima Tercera Legislatura y una, formulada por la diputada y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México ante la Sexagésima Segunda Legislatura, a efecto de reformar y adicionar diversos artículos de la Ley de Alcoholes para el Estado de Guanajuato. **15.** Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen presentado por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, relativo a la iniciativa a efecto de reformar la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, en materia de designación del titular del organismo estatal de protección de los derechos humanos, suscrita por las diputadas y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, ante esta Sexagésima Tercera Legislatura. **16.** Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas públicas municipales de Acámbaro, Gto., por el periodo comprendido de julio a diciembre del ejercicio fiscal del año 2014. **17.** Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas públicas municipales de Jerécuaro, Gto., por el periodo comprendido de enero a junio del ejercicio fiscal del año 2015. **18.** Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las operaciones realizadas con recursos del Ramo 33 y de obra pública por la

administración municipal de Huanímaro, Gto., correspondientes al periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 2016. **19.** Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las operaciones realizadas con recursos del Ramo 33 y de obra pública por la administración municipal de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Gto., correspondientes al periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 2015. **20.** Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las operaciones realizadas con recursos del Ramo 33 y de obra pública por la administración municipal de Manuel Doblado, Gto., correspondientes al periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 2015. **21.** Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las operaciones realizadas con recursos del Ramo 33 y de obra pública por la administración municipal de Irapuato, Gto., correspondientes al periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 2016. **22.** Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas públicas municipales de Jaral del Progreso, Gto., por el periodo comprendido de julio a diciembre del ejercicio fiscal del año 2015. **23.** Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas públicas municipales de Doctor Mora, Gto., por el periodo comprendido de julio a diciembre del ejercicio fiscal del año 2015. **24.** Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al informe de resultados de la auditoría de desempeño practicada a la administración municipal de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Gto., correspondiente al periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 2016. **25.** Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al informe de resultados de la auditoría de desempeño practicada a la administración municipal de Salamanca, Gto., correspondiente al periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 2016. **26.** Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al informe de resultados de la auditoría de desempeño practicada a la administración municipal de Tierra Blanca, Gto., correspondiente al periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 2016. **27.** Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al informe de resultados de la auditoría de desempeño practicada a la administración municipal de Doctor Mora, Gto., correspondiente al periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 2016. **28.** Presentación de la propuesta que suscriben la diputada y los diputados integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, relativa a la modificación en la integración de las Comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y Para la Igualdad de Género de esta Sexagésima Tercera Legislatura. **29.** Asuntos generales.»

Son todos, diputada presidenta.

-La C. Presidenta: Muchas gracias diputada secretaria.

Esta presidencia da cuenta de la presencia del diputado Éctor Jaime Ramírez Barba y del diputado Mario Alejandro Navarro Saldaña.

Esta presidencia a nombre del Congreso del Estado, da la más cordial bienvenida a los alumnos de la Universidad «INCARNATE WORD» del municipio de Irapuato, Gto., invitados por la diputada Arcelia María González González. ¡Sean ustedes bienvenidos!

La propuesta del orden del día está a consideración de las diputadas y de los diputados. Si desean hacer uso de la palabra, indíquenlo a esta presidencia.

En virtud de que ninguna diputada y ningún diputado desean hacer uso de la palabra, se ruega a la secretaría que en votación económica, a través del sistema electrónico, pregunte a la Asamblea si es de aprobarse el orden del día, puesto a su consideración. Para tal efecto, se abre el sistema electrónico.

-La Secretaría: Por instrucciones de la presidencia, en votación económica mediante el sistema electrónico, se consulta a las diputadas y a los diputados si están por aprobar el orden del día.

(Votación)

¿Falta alguna diputada o algún diputado de emitir su voto?

-La C. Presidenta: Se cierra el sistema electrónico.

-La Secretaría: Diputada presidenta, le informo que se han registra do 32 votos a favor y ninguno en contra.

-La C. Presidenta: Muchas gracias diputada secretaria. Para desahogar el siguiente punto del orden del día, se propone se dispense la lectura del acta de la sesión ordinaria celebrada el 19 de octubre del año en curso, misma que les fue entregada con anticipación. Si desean registrarse con respecto a esta propuesta, indíquenlo a esta presidencia.

Al no registrarse participaciones, se pide a la diputada secretaria que en votación económica, a través del sistema electrónico, pregunte a las diputadas y a los diputados si se aprueba la propuesta sobre dispensa de lectura. Para tal efecto, se abre el sistema electrónico.

-La Secretaría: Por instrucciones de la presidencia, en votación económica mediante el sistema electrónico, se consulta a las diputadas y a los diputados si se aprueba la propuesta sobre dispensa de lectura.

(Votación)

¿Falta alguna diputada o algún diputado por emitir su voto?

-La C. Presidenta: Se cierra el sistema electrónico.

-La Secretaría: Diputada presidenta, le informo que se registraron 32 votos a favor y ningún voto en contra.

[2] ACTA NÚMERO 75
SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUANAJUATO
SESIÓN ORDINARIA
PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES CORRESPONDIENTE AL TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL
SESIÓN CELEBRADA EL 19 DE OCTUBRE DE 2017
PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA ANGÉLICA CASILLAS MARTÍNEZ

En la ciudad de Guanajuato, capital del Estado del mismo nombre, en el salón de sesiones del recinto oficial del Congreso del Estado Libre y Soberano de Guanajuato se reunieron las diputadas y los diputados integrantes de la Sexagésima Tercera Legislatura, para llevar a cabo la sesión ordinaria previamente convocada, la cual tuvo el siguiente desarrollo: -
La secretaría por instrucciones de la presidencia certificó el quórum conforme al registro de asistencia del sistema electrónico; se registró la presencia de treinta diputadas y diputados. Las diputadas Irma Leticia González Sánchez, Verónica Orozco Gutiérrez, Libia Dennise García Muñoz Ledo y María Beatriz Hernández Cruz, se incorporaron a la sesión durante el desahogo del punto uno del orden del día; la diputada María Alejandra Torres Novoa y el diputado Jesús Gerardo Silva Campos, durante el desahogo de los puntos tres y nueve del orden del día respectivamente. - - - - - - - - - - -
Comprobado el quórum legal, la presidencia declaró abierta la sesión a las once horas con veintiocho minutos del diecinueve de octubre de dos mil diecisiete.- - - - - - - - - -
La secretaría por instrucciones de la presidencia dio lectura al orden del día, mismo que resultó aprobado en votación económica por unanimidad de los presentes, a través del sistema electrónico, sin discusión,

[2] Para efecto del Diario de los Debates, el acta se plasma en su integridad.

con treinta y dos votos a favor.- - - - - - - - - - -
La presidencia, a nombre del Congreso del Estado, dio la bienvenida a los alumnos de la Universidad Continente Americano del municipio de Cortazar, Guanajuato, a los alumnos de la Telesecundaria cuatrocientos treinta y siete, así como del jardín de niños «José Vasconcelos», y a ciudadanos, de la comunidad «La Bolsa» del municipio de Jaral del Progreso, Guanajuato, invitados por la diputada Verónica Orozco Gutiérrez. - - - - - -
Previa aprobación de dispensa de su lectura por unanimidad de los presentes, con treinta y tres votos a favor, se aprobó en votación económica por unanimidad de los presentes, a través del sistema electrónico, sin discusión, el acta de la sesión ordinaria celebrada el doce de octubre del año en curso, con treinta y tres votos a favor. -
La secretaría dio cuenta con las comunicaciones y correspondencia recibidas, y la presidencia dictó los acuerdos correspondientes. -
La presidencia dio cuenta con la iniciativa suscrita por las diputadas y los diputados integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, por la que se reforman y derogan diversos artículos de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato y del Reglamento de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, turnándose a las Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización y de Gobernación y Puntos Constitucionales, con fundamento en los artículos ciento doce fracción novena y ciento once fracción novena; así como en el último párrafo de dichos artículos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, para su estudio y dictamen. -
La presidencia dio cuenta con la iniciativa formulada por el diputado Lorenzo Salvador Chávez Salazar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a efecto de adicionar los párrafos tercero y cuarto al artículo ciento setenta y uno, y derogar el artículo ciento sesenta y nueve de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, turnándola a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con fundamento en el artículo ciento once, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, para su estudio y dictamen. - - - - - - - - - - - - -
A petición de la presidencia, la diputada María Guadalupe Velázquez Díaz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, dio lectura a la exposición de motivos de la iniciativa por la que se adiciona el artículo ciento sesenta y siete bis, con un primer y segundo párrafos a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato. Agotada la lectura, se turnó a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, para su estudio y dictamen, con fundamento en el artículo ciento once, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado. - - - - - - - - - - - - - - - - -
A petición de la presidencia, el diputado Rigoberto Paredes Villagómez, dio lectura a la exposición de motivos de la iniciativa formulada por él y por el diputado Santiago García López, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, mediante la cual se adicionan diversos artículos a la Constitución Política para el Estado de Guanajuato. Agotada la lectura, se turnó a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, para su estudio y dictamen, con fundamento en el artículo ciento once, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado.
Enseguida, la diputada Leticia Villegas Nava, dio lectura a la exposición de motivos de la iniciativa formulada por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, a efecto de reformar diversas disposiciones del Código Civil para el Estado de Guanajuato. Agotada la lectura, se turnó a la Comisión de Justicia, con fundamento en el artículo ciento trece, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, para su estudio y dictamen. -
La diputada María Beatriz Hernández Cruz dio lectura a la exposición de motivos de la iniciativa formulada por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal del Estado de Guanajuato; de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Guanajuato, y de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato. Agotada la lectura, se turnó la parte correspondiente del Código Penal del Estado de Guanajuato, a la Comisión de Justicia, con fundamento en el artículo ciento trece, fracción segunda; lo relativo a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de

Guanajuato, a la Comisión para la Igualdad de Género, con fundamento en el artículo ciento dieciséis, fracción primera; y lo correspondiente a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, a la Comisión de Asuntos Electorales, con fundamento en el artículo ciento tres, fracción primera, todos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, para su estudio y dictamen. - - - - - - - - - - - - - -

La presidencia dio cuenta con el oficio formulado por las diputadas y los diputados integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, a través del cual remitieron los expedientes que contienen las propuestas para el nombramiento del titular de la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción, por lo que de conformidad con el artículo tercero transitorio del decreto número doscientos siete de reformas y adiciones a la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de Guanajuato, se turnaron a las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia, para su estudio y dictamen.

La presidencia solicitó a las diputadas y a los diputados, abstenerse de abandonar el salón de sesiones durante las votaciones. - - - - - - - -

La secretaría por instrucciones de la presidencia, dio lectura al oficio por el que se remitió la propuesta del proyecto de presupuesto de egresos del Poder Legislativo para el ejercicio fiscal del año dos mil dieciocho, presentado por la Comisión de Administración, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo ciento dos, fracción cuarta de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado. Agotada la lectura, se sometió a consideración la propuesta, al no registrarse participaciones, resultó aprobada en votación nominal por unanimidad de los presentes, a través del sistema electrónico, sin discusión, con treinta y cinco votos a favor. En consecuencia, la presidencia con fundamento en el artículo veintiséis de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato, ordenó remitir al Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, el proyecto de presupuesto de egresos aprobado, para que se incorporara a la iniciativa de Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato, para el ejercicio fiscal de dos mil dieciocho. - - - - - - -

La presidencia, a nombre del Congreso del Estado, dio la bienvenida al licenciado Sadot Sánchez Carreño, Director General del Centro de Estudios de Derecho e Investigación Parlamentaria de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión; así como a investigadores de dicho Centro, participantes de la jornada conmemorativa dos mil diecisiete, Centenario de la Constitución Política de Guanajuato. - - - - - - - - - - - - - - - -

Con el objeto de agilizar el trámite parlamentario de la propuesta de punto de acuerdo formulada por las diputadas y el diputado integrantes de la Comisión de Hacienda y Fiscalización; así como de los dictámenes presentados por las Comisiones de: Gobernación y Puntos Constitucionales; Juventud y Deporte; Educación, Ciencia y Tecnología y Cultura, y Hacienda y Fiscalización, contenidos en los puntos del doce al treinta y nueve del orden del día, y en virtud de haberse proporcionado con anticipación los asuntos materia de la presente sesión, así como encontrarse en la Gaceta Parlamentaria, la presidencia propuso dispensar su lectura para que fueran sometidos a discusión y posterior votación. Puesta a consideración la propuesta, resultó aprobada en votación económica por unanimidad, a través del sistema electrónico, sin discusión, con treinta y seis votos a favor; por lo que se procedió a desahogar el orden del día en los términos aprobados. - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Se sometió a la Asamblea declarar de obvia resolución la propuesta del punto de acuerdo formulado por las diputadas y el diputado integrantes de la Comisión de Hacienda y Fiscalización, que contiene la recomendación sobre los montos máximos de las remuneraciones de los integrantes de los ayuntamientos del Estado de Guanajuato para el ejercicio fiscal del año dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo ciento setenta y siete de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y en los términos solicitados por él y las proponentes, la presidencia sometió a consideración declarar de obvia resolución la propuesta de punto de acuerdo, resultando aprobada la obvia resolución por unanimidad, al computarse treinta y seis votos a favor, sin discusión. Enseguida, se sometió a discusión la propuesta de punto de acuerdo; al no registrarse intervenciones se recabó votación nominal, a través del sistema electrónico, resultando

aprobada por unanimidad, al computarse treinta y seis votos a favor. Sometida a discusión en lo particular, no se registraron reservas, por lo que la presidencia declaró tener por aprobados los artículos contenidos en el punto de acuerdo y ordenó la remisión del acuerdo aprobado junto con sus consideraciones a los cuarenta y seis ayuntamientos; así como al Ejecutivo del Estado, para su publicación en el periódico Oficial del Gobierno del Estado, e instruyó a la Dirección de Comunicación Social de este Congreso, para que procediera a la publicación del acuerdo aprobado con sus consideraciones, en un diario de amplia circulación en cada Municipio. - - - - - - - - - - -

Como siguiente punto en el orden del día fue sometido a discusión el dictamen suscrito por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, relativo a la iniciativa formulada por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, a efecto de adicionar un segundo párrafo al artículo cuarenta y uno de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato. Se registró la participación del diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, para hablar a favor del dictamen, agotada su participación, se recabó votación nominal a través del sistema electrónico y resultó aprobado por unanimidad, al registrarse treinta y seis votos a favor. Acto seguido, la presidencia ordenó con fundamento en el artículo ciento cuarenta y cinco de la Constitución Política Local la remisión de la minuta aprobada junto con su dictamen a los ayuntamientos del Estado como parte del Constituyente Permanente. - - - - - - - - - - - - - -

Se sometió a discusión en lo general el dictamen presentado por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, relativo a dos iniciativas la primera, de reformas a la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, formulada por el diputado Eduardo Ramírez Granja de la Representación Parlamentaria del Partido Movimiento Ciudadano; y la segunda, por la que se reforma el artículo cincuenta y seis, fracción quinta de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, suscrita por la diputada María Guadalupe Velázquez Díaz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, ambas en materia de participación ciudadana, ante esta Sexagésima Tercera Legislatura. Se registraron las participaciones del diputado Eduardo Ramírez Granja, de la diputada María Guadalupe Velázquez Díaz y del diputado Alejandro Navarro Saldaña para hablar a favor del dictamen. Agotadas las participaciones, se recabó votación nominal a través del sistema electrónico y resultó aprobado por unanimidad, al registrarse treinta y seis votos a favor. Acto seguido, se sometió a discusión en lo particular, al no haberse registrado reservas, la presidencia declaró tener por aprobados los artículos contenidos en el dictamen y ordenó con fundamento en el artículo ciento cuarenta y cinco de la Constitución Política Local, la remisión de la minuta aprobada junto con su dictamen a los ayuntamientos del Estado como parte del Constituyente Permanente. - -

La presidencia, a nombre del Congreso del Estado, dio la bienvenida a los alumnos de la Universidad de León, plantel Juárez, invitados por la diputada Irma Leticia González Sánchez. -

La presidencia sometió a discusión el dictamen presentado por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, relativo a la iniciativa de adición de un artículo uno bis a la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, suscrita por la diputada Luz Elena Govea López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en materia indígena, ante esta Sexagésima Tercera Legislatura. Se registraron las participaciones de las diputadas Luz Elena Govea López y María del Sagrario Villegas Grimaldo para hablar a favor del dictamen. Agotadas las participaciones, se recabó votación nominal a través del sistema electrónico y resultó aprobado el dictamen por unanimidad de los presentes, al registrarse treinta y cinco votos a favor. Acto seguido, la presidencia ordenó con fundamento en el artículo ciento cuarenta y cinco de la Constitución Política Local, la remisión de la minuta aprobada junto con su dictamen a los ayuntamientos del Estado como parte del Constituyente Permanente. - - - - - - - - - - - - - -

Se sometió a discusión en lo general el dictamen presentado por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, relativo a la iniciativa suscrita por el diputado Eduardo Ramírez Granja de la Representación Parlamentaria del Partido Movimiento Ciudadano, ante la Sexagésima Tercera Legislatura, a efecto de reformar y adicionar diversas disposiciones a las leyes Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de

Guanajuato; de Fomento a la Investigación Científica, Tecnológica y a la Innovación para el Estado de Guanajuato; de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios, y Anticorrupción en Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato. Se registró la participación del diputado Eduardo Ramírez Granja para hablar a favor del dictamen. Agotada su participación, se recabó votación nominal a través del sistema electrónico y resultó aprobado por unanimidad, al registrarse treinta y seis votos a favor. Acto seguido, se sometió a discusión el dictamen en lo particular, al no haberse registrado reservas, la presidencia declaró tener por aprobados los artículos contenidos en el dictamen, e instruyó remitir al Ejecutivo del Estado el decreto aprobado, para los efectos constitucionales de su competencia. -

Agotado el punto diecisiete del orden del día, el diputado J. Jesús Oviedo Herrera se retiró de la sesión con permiso de la presidencia. - - -

Se sometió a discusión el dictamen emitido por la Comisión de Juventud y Deporte, relativo a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley para la Juventud del Estado de Guanajuato, formulada por el diputado Lorenzo Salvador Chávez Salazar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional ante la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado. No habiendo participaciones, se recabó votación nominal, a través del sistema electrónico, resultando aprobado el dictamen por unanimidad de los presentes, con treinta y cuatro votos a favor. En consecuencia, la presidencia instruyó a la Secretaría General, para que procediera al archivo definitivo de la iniciativa referida en el dictamen aprobado. - -

Se sometió a discusión en lo general el dictamen presentado por la Comisión de Juventud y Deporte, relativo a la iniciativa de Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de Guanajuato, formulada por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, ante la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado. Se registraron las participaciones de la diputada Araceli Medina Sánchez y del diputado Lorenzo Salvador Chávez Salazar para hablar a favor del dictamen. Agotadas las participaciones, se recabó votación nominal a través del sistema electrónico y resultó aprobado por unanimidad de los presentes, al registrarse treinta y tres votos a favor. Acto seguido, se sometió a discusión en lo particular, al no registrarse reservas, la presidencia declaró tener por aprobados los artículos contenidos en el dictamen, e instruyó remitir al Ejecutivo del Estado el decreto aprobado, para los efectos constitucionales de su competencia. - -

Se sometió a discusión en lo general el dictamen presentado por la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología y Cultura, relativo a la iniciativa mediante la cual se reforman los artículos tres fracciones quinta y décima segunda, diecisiete fracción sexta, veinticinco fracciones tercera y cuarta, y la denominación del Capítulo Sexto por la de Fomento a la Cultura de la Paz en el Entorno Escolar, con los artículos cuarenta y cinco, cuarenta y seis y cuarenta y siete y se adicionan las fracciones décima tercera y décima cuarta al artículo tres, y la fracción sexta al artículo veinticinco, los artículos cuarenta y ocho y cuarenta y nueve, y el Capítulo Séptimo denominado Responsabilidades, con los artículos cincuenta, cincuenta y uno, cincuenta y dos, cincuenta y tres y cincuenta y cuatro de la Ley para una Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar para el Estado de Estado de Guanajuato y sus Municipios, suscrita por las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología y Cultura de la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato. Se registraron las participaciones de la diputada Estela Chávez Cerrillo, y de los diputados Alejandro Trejo Ávila e Isidoro Bazaldúa Lugo para hablar a favor del dictamen. Agotadas las participaciones, se recabó votación nominal a través del sistema electrónico y resultó aprobado por unanimidad de los presentes, al registrarse treinta y tres votos a favor. Acto seguido, se sometió a discusión en lo particular, al no registrarse reservas, la presidencia declaró tener por aprobados los artículos contenidos en el dictamen, e instruyó remitir al Ejecutivo del Estado el decreto aprobado, para los efectos constitucionales de su competencia. -

Durante el desarrollo del punto diecinueve del orden del día, la diputada María Alejandra Torres Novoa se retiró de la sesión y la diputada Leticia Villegas Nava al término del

punto diecinueve, ambas con permiso de la presidencia. -
En actos sucesivos, se sometieron a discusión uno a uno los dictámenes emitidos por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, agendados en los puntos del veinte al treinta y siete del orden del día, relativos: 1. Al informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas públicas municipales de León, Guanajuato, por el periodo comprendido de enero a junio del ejercicio fiscal del año dos mil quince; 2. Al informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas públicas municipales de Celaya, Guanajuato, por el periodo comprendido de julio a diciembre del ejercicio fiscal del año dos mil quince; 3. Al informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas públicas municipales de Guanajuato, Guanajuato, por el periodo comprendido de enero a junio del ejercicio fiscal del año dos mil quince; 4. Al informe de resultados de la auditoría de desempeño practicada a la administración municipal de Xichú, Guanajuato, correspondiente al periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre del ejercicio fiscal del año dos mil dieciséis; 5. Al informe de resultados de la auditoría de desempeño practicada al Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, con enfoque de consistencia y resultados del Programa E011 «Calidad del Aire», correspondiente al periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre del ejercicio fiscal del año dos mil dieciséis; 6. Al informe de resultados de la auditoría de desempeño practicada a la administración municipal de Apaseo el Grande, Guanajuato, correspondiente al periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre del ejercicio fiscal del año dos mil dieciséis; 7. Al informe de resultados de la auditoría de desempeño practicada a la administración municipal de Atarjea, Guanajuato, correspondiente al periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre del ejercicio fiscal del año dos mil dieciséis; 8. Al informe de resultados de la auditoría de desempeño practicada a la administración municipal de Huanímaro, Guanajuato, correspondiente al periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre del ejercicio fiscal del año dos mil dieciséis; 9. Al informe de resultados de la auditoría de desempeño practicada a la administración municipal de Manuel Doblado, Guanajuato, correspondiente al periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre del ejercicio fiscal del año dos mil dieciséis; 10. Al informe de resultados de la auditoría de desempeño practicada a la administración municipal de Moroleón, Guanajuato, correspondiente al periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre del ejercicio fiscal del año dos mil dieciséis; 11. Al informe de resultados de la auditoría de desempeño practicada a la administración municipal de Purísima del Rincón, Guanajuato, correspondiente al periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre del ejercicio fiscal del año dos mil dieciséis; 12. Al informe de resultados de la auditoría de desempeño practicada a la administración municipal de San José Iturbide, Guanajuato, correspondiente al periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre del ejercicio fiscal del año dos mil dieciséis; 13. Al informe de resultados de la auditoría de desempeño practicada a la administración municipal de Santa Catarina, Guanajuato, correspondiente al periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre del ejercicio fiscal del año dos mil dieciséis; 14. Al informe de resultados de la auditoría de desempeño practicada a la administración municipal de Santiago Maravatío, Guanajuato, correspondiente al periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre del ejercicio fiscal del año dos mil dieciséis; 15. Al informe de resultados de la revisión practicada a la cuenta pública del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, correspondiente al tercer y cuarto trimestres del ejercicio fiscal del año dos mil quince; 16. Al informe de resultados de la revisión practicada a la cuenta pública del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato, correspondiente al ejercicio fiscal del año dos mil dieciséis; 17. Al informe de resultados de la revisión practicada a la cuenta pública de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, correspondiente al ejercicio fiscal del año dos mil dieciséis; y 18. Al informe de resultados de la revisión practicada a la cuenta pública del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, correspondiente al ejercicio fiscal del año dos mil dieciséis. Al no haberse registrado participaciones, en votación nominal a través del sistema electrónico, resultaron aprobados: el punto veinte por mayoría de los presentes, con veintidós votos a favor y ocho en contra

y las abstenciones razonadas de las diputadas Beatriz Manrique Guevara y María Soledad Ledezma Constantino; el punto veintiuno por mayoría de los presentes, con veinticuatro votos a favor y ocho en contra; los puntos veintidós y veintitrés por unanimidad de los presentes, con treinta y tres votos a favor; el punto veinticuatro por unanimidad de los presentes, con treinta y dos votos a favor; los puntos veinticinco y veintiséis por unanimidad de los presentes, con treinta y un votos a favor; los puntos veintisiete y veintiocho por unanimidad de los presentes, con veintiocho votos a favor; el punto veintinueve por unanimidad de los presentes, con treinta votos a favor; el punto treinta por unanimidad de los presentes, con veintinueve votos a favor; los puntos treinta y uno y treinta y dos por unanimidad de los presentes, con treinta y un votos a favor; el punto treinta y tres por mayoría de los presentes, con treinta votos a favor y uno en contra; los puntos treinta y cuatro y treinta y cinco por unanimidad de los presentes, con veintiocho y veintinueve votos a favor respectivamente; y los puntos treinta y seis y treinta y siete por unanimidad de los presentes, con treinta y un votos a favor. En consecuencia, en los dictámenes aprobados la presidencia ordenó, respectivamente en los puntos veinte, veintiuno y veintidós, la remisión de los acuerdos aprobados al titular del Poder Ejecutivo del Estado para su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y de los acuerdos aprobados junto con sus dictámenes y los informes de resultados a los ayuntamientos de León, Celaya y Guanajuato; así como a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, para los efectos de su competencia; en el punto veintitrés, la remisión del acuerdo aprobado junto con su dictamen y el informe de resultados al ayuntamiento de Xichú, Guanajuato, así como a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, para los efectos de su competencia; en el punto veinticuatro, la remisión del acuerdo aprobado junto con su dictamen y el informe de resultados al Gobernador del Estado, al Secretario de Finanzas, Inversión y Administración, al Consejo Directivo y al Director General del Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato, así como a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, para los efectos de su competencia; en los puntos del veinticinco al treinta y tres, la remisión de los acuerdos aprobados junto con sus dictámenes y los informes de resultados a los ayuntamientos de Apaseo el Grande, Atarjea, Huanímaro, Manuel Doblado, Moroleón, Purísima del Rincón, San José Iturbide, Santa Catarina y Santiago Maravatío; así como a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, para los efectos de su competencia; en los puntos treinta y cuatro, treinta y cinco, treinta y seis y treinta y siete respectivamente, la remisión de los acuerdos aprobados al titular del Poder Ejecutivo del Estado para su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y de los acuerdos aprobados junto con sus dictámenes y los informes de resultados a la Junta de Gobierno y Coordinación Política, a la Comisión de Administración, a la Magistrada Presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, al Procurador de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato y al Magistrado Presidente del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato; así como a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, para los efectos de su competencia. Asimismo, en el caso del dictamen contenido en el punto treinta y cuatro declaró que dicha presidencia daría seguimiento a las acciones derivadas del acuerdo aprobado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

En los puntos veintinueve y treinta y cuatro del orden del día, los diputados Guillermo Aguirre Fonseca y Santiago García López se retiraron de la sesión, con permiso de la presidencia. -

Enseguida, se sometió a discusión en lo general el dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo a la iniciativa formulada por el Gobernador del Estado, a efecto de que se autorice al Poder Ejecutivo por conducto del Fideicomiso denominado «Ciudad Industrial Celaya», previa desafectación del dominio público del Estado, la donación de un bien inmueble ubicado en el municipio de Celaya, Guanajuato, en favor de dicho Municipio, para que lo destine a áreas deportivas, recreativas y de sano esparcimiento. Al no registrarse intervenciones, se recabó votación nominal por el sistema electrónico y resultó aprobado en lo general el dictamen por unanimidad de los presentes, con treinta y un votos a favor. Enseguida, se sometió a discusión en lo particular, al no registrarse reservas de artículos, la presidencia declaró

tener por aprobados los artículos contenidos en el dictamen, e instruyó remitir al Ejecutivo del Estado el decreto aprobado, para los efectos constitucionales de su competencia. - -
Enseguida, se sometió a discusión en lo general el dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo a la iniciativa a efecto de que se autorice al Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, previa desafectación del dominio público del Estado, la enajenación a título oneroso de diversos bienes inmuebles de propiedad estatal, ubicados en los municipios de San Miguel de Allende, San Francisco del Rincón, Pénjamo, Abasolo, León, Silao de la Victoria y Guanajuato, así como la enajenación de un bien inmueble de propiedad estatal ubicado en el municipio de Nogales, Sonora. Al no registrarse intervenciones, se recabó votación nominal por el sistema electrónico y resultó aprobado en lo general el dictamen por unanimidad de los presentes, con treinta y un votos a favor.
Enseguida, se sometió a discusión en lo particular, al no registrarse reservas de artículos, la presidencia declaró tener por aprobados los artículos contenidos en el dictamen, e instruyó remitir al Ejecutivo del Estado el decreto aprobado, para los efectos constitucionales de su competencia. - - - - - - - -
En el apartado correspondiente a los asuntos de interés general se registraron las intervenciones del diputado Juan Carlos Muñoz Márquez, para hablar del tema Roberto Plasencia; de la diputada Luz Elena Govea López con el tema «Código Civil lenguaje no apropiado», durante su intervención presentó una iniciativa, la presidenta con fundamento en el artículo ciento cincuenta y dos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, determinó que se enlistaría en el orden del día de la siguiente sesión; y del diputado David Alejandro Landeros con el tema «Homenaje al día diecinueve de septiembre», durante su intervención solicitó un minuto de silencio por los ciudadanos caídos en el terremoto, propuesta que fue obsequiada por la presidencia. -
La secretaría informó que el quórum de asistencia a la presente sesión fue de treinta y seis diputadas y diputados, de igual manera informó que los diputados J. Jesús Oviedo Herrera, Guillermo Aguirre Fonseca, Santiago García López y las diputadas María Alejandra Torres Novoa y Leticia Villegas Nava, se retiraron de la sesión, con permiso de la presidencia. -
La presidencia expresó que, al haberse mantenido el quórum de asistencia a la presente sesión con treinta y un diputadas y diputados, no procedería a instruir a la secretaría a un nuevo pase de lista y levantó la sesión a las quince horas con cincuenta y un minutos e indicó que se citaría para la siguiente por conducto de la Secretaría General. -
Todas y cada una de las intervenciones de las diputadas y de los diputados registradas durante la presente sesión, se contienen íntegramente en versión mecanográfica y forman parte de la presente acta. **Damos fe. Angélica Casillas Martínez. Diputada Presidenta. Luz Elena Govea López. Diputada Vicepresidenta. Elvira Paniagua Rodríguez. Diputada Secretaria. Araceli Medina Sánchez. Diputada Secretaria. «**

-La C. Presidenta: Gracias diputada secretaria. En consecuencia, procede someter a consideración de este Pleno el acta de referencia. Si desean hacer uso de la palabra, indíquenlo a esta presidencia.

Al no registrarse intervenciones, se solicita a la secretaría que en votación económica, a través del sistema electrónico, pregunte a las diputadas y a los diputados si es de aprobarse el acta. Para tal efecto, se abre el sistema electrónico.

-La Secretaría: En votación económica, a través del sistema electrónico, se consulta a las diputadas y a los diputados si se aprueba el acta.

(Votación)

¿Falta alguna diputada o algún diputado de emitir su voto?

-La C. Presidenta: Se cierra el sistema electrónico.

-La Secretaría: Señora presidenta, le informo que se registraron 33 votos a favor y ningún voto en contra.

-La C. Presidenta: Gracias.

Se instruye a la secretaría dar cuenta con las comunicaciones y correspondencia recibidas.

-La Secretaría: Con gusto.

DAR CUENTA CON LAS COMUNICACIONES Y CORRESPONDENCIA RECIBIDAS.

I. Comunicados provenientes de los Poderes de la Unión y Organismos Autónomos.

-La Secretaría: La Presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Senado de la República envía el informe de actividades de la citada Comisión, correspondiente al segundo año de ejercicio de la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso de la Unión.

-La C. Presidenta: Enterados y se turna a la Comisión para la Igualdad de Género.

-La Secretaría: El Vicepresidente de la Cámara de Senadores comunica la elección de una Secretaria de la Mesa Directiva para el tercer año de ejercicio de la Sexagésima Tercera Legislatura.

El Secretario de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, comunica el trámite que se otorgó al exhorto formulado por esta Legislatura, a efecto de que, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, considere recursos para el Fondo de Apoyo al Migrante, a efecto de generar acciones que permitan apoyar efectivamente a los migrantes guanajuatenses en retorno.

-La C. Presidenta: Enterados.

-La Secretaría: La Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores comunica el acuerdo derivado de la consulta de las iniciativas a efecto de reformar y adicionar diversos artículos de la Ley de Fiscalización Superior del Estado.

-La C. Presidenta: Enterados y se informa que se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización y de Gobernación y Puntos Constitucionales.

II. Comunicados provenientes de los Poderes del Estado y Organismos Autónomos.

-La Secretaría: El Director General del Instituto de Ecología del Estado envía respuesta a la solicitud de información formulada por la Comisión de Turismo, respecto al monto invertido del programa FOAM para proyectos ecoturísticos en el periodo del año 2013 al 2017, y de la petición de que se realicen las gestiones para apoyar con infraestructura y otorgar capacitaciones a los prestadores de servicios de turismo de aventura del municipio de Tierra Blanca, Gto.

La Directora de Atención a la Cadena Productiva Artesanías e Industrias en Desarrollo de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable remite contestación a la consulta formulada por la Comisión de Turismo, sobre el porqué los productos del municipio de Tierra Blanca, Gto., no han sido apoyados para que pertenezcan a la Marca «Gto».

-La C. Presidenta: Enterados y se informa que se turnaron a la Comisión de Turismo.

-La Secretaría: El Magistrado Presidente del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato envía opinión derivada de la consulta de la iniciativa de reforma al artículo 76 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato.

-La C. Presidenta: Enterados y se informa que se turnó a la Comisión de Asuntos Municipales.

-La Secretaría: Copias marcadas al Congreso del Estado de los oficios signados por el Director General de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, por medio de los cuales solicita a diversas autoridades estatales y municipales, información sobre las acciones implementadas, señalando el estatus en que se encuentran, respecto de cada una de las observaciones en que se determinaron presuntas responsabilidades administrativas.

-La C. Presidenta: Enterados.

-La Secretaría: La Coordinadora General Jurídica del Estado remite comentarios derivados de la consulta de las iniciativas a efecto de reformar y adicionar diversos artículos de la Ley de Fiscalización Superior del Estado y de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato.

-La C. Presidenta: Enterados y se informa que se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización y de Gobernación y Puntos Constitucionales.

-La Secretaría: La Coordinadora General Jurídica del Estado envía opinión derivada de la consulta de dos iniciativas de reformas y adiciones del Código Penal del Estado de Guanajuato, una en materia de incremento de penas y otra, en materia de alienación parental como delito.

-La C. Presidenta: Enterados y se informa que se turnó a la Comisión de Justicia.

-La Secretaría: La Coordinadora General Jurídica del Estado remite opinión derivada de la consulta de la iniciativa a efecto de reformar y adicionar diversos artículos de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para el Estado de Guanajuato.

-La C. Presidenta: Enterados y se informa que se turnó a la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables.

-La Secretaría: El Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato remite información relativa al estado que guardan las denuncias presentadas por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, por la Comisión de Delitos en Contra de la Administración Municipal de León, Gto., 2012-2015.

-La C. Presidenta: Enterados y se deja a disposición de las diputadas y de los diputados de esta Sexagésima Tercera Legislatura del Estado.

III. Comunicados provenientes de los ayuntamientos del Estado.

-La Secretaría: Los secretarios de los ayuntamientos de Purísima del Rincón, San José Iturbide y Valle de Santiago, comunican los acuerdos derivados de la consulta de la iniciativa por la que se adicionan dos párrafos al artículo 94 de la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus Municipios.

-La C. Presidenta: Enterados y se informa que se turnaron a la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones.

-La Secretaría: El Secretario del Ayuntamiento de Coroneo, Gto., comunica el acuerdo derivado de la consulta de la iniciativa de Ley de Austeridad para el Estado de Guanajuato y sus Municipios.

Los secretarios de los ayuntamientos de Coroneo y Moroleón, comunican los acuerdos derivados de la consulta de las iniciativas de reformas y adiciones de diversos artículos de la Ley de Alcoholes para el Estado de Guanajuato.

El Secretario del Ayuntamiento de Coroneo, Gto., comunica el acuerdo derivado de la consulta de las iniciativas a efecto de reformar y adicionar diversos artículos de la Ley de Fiscalización Superior del Estado y de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato.

-La C. Presidenta: Enterados y se informa que se turnaron a las Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización y de Gobernación y Puntos Constitucionales.

-La Secretaría: El Secretario del Ayuntamiento de Coroneo, Gto., comunica el trámite que se otorgó al Decreto número 199, mediante el cual se autorizó a dicho Ayuntamiento, la contratación de un crédito.

Presentación de la información financiera correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2017 del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Jaral del Progreso, Gto.

-La C. Presidenta: Enterados y se turnan a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato.

-La Secretaría: El Secretario del Ayuntamiento de San José Iturbide, Gto.,

envía respuesta a la solicitud de información sobre las acciones implementadas o realizadas al interior de las escuelas en materia de protección civil.

-La C. Presidenta: Enterados y se informa que se turnó a la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología y Cultura.

-La Secretaría: El Presidente Municipal, la Regidora de la Comisión de Desarrollo Económico y Turismo, y el Director de Desarrollo Económico y Turismo de Acámbaro, Gto., solicitan se lleve a cabo una reunión con la diputada federal Yulma Rocha Aguilar, el Presidente del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, el Delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Guanajuato y el Secretario de Turismo del Estado, para que se gestione la donación de los antiguos talleres del ferrocarril en dicho Municipio, y se establezca una estrategia y fechas para la gestión en comento.

-La C. Presidenta: Enterados y se turna a la Comisión de Turismo.

-La Secretaría: El Secretario del Ayuntamiento de Moroleón y el Director General de Apoyo a la Función Edilicia del Municipio de León, comunican los acuerdos derivados de la consulta de la iniciativa a efecto de reformar y adicionar diversos artículos de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para el Estado de Guanajuato.

-La C. Presidenta: Enterados y se informa que se turnaron a la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables.

-La Secretaría: El Secretario del Ayuntamiento de San Francisco del Rincón y el Director General de Apoyo a la Función Edilicia del Municipio de León, comunican los acuerdos derivados de la consulta de la iniciativa de reforma al artículo 76 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato.

-La C. Presidenta: Enterados y se informa que se turnaron a la Comisión de Asuntos Municipales.

-La Secretaría: El Director General de Gestión Ambiental de León, Gto., envía respuesta a la consulta de la propuesta de punto de acuerdo a efecto de exhortar al Ayuntamiento de León, Gto., para que, garantice el Derecho Humano a un medio ambiente saludable, y en ejercicio de sus facultades inicie o reactive proyectos de forestación del predio propiedad municipal, que se ubica en la comunidad de «Albarradones».

-La C. Presidenta: Enterados y se informa que se turnó a la Comisión de Medio Ambiente.

-La Secretaría: Copias marcadas al Congreso del Estado del escrito que suscriben regidores del Ayuntamiento de San Diego de la Unión, Gto., dirigidos a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, por medio del cual presentan denuncia por presuntas faltas administrativas en contra del Presidente y el Tesorero Municipal, y el encargado del despacho de la Secretaria de Ayuntamiento de dicho Municipio.

-La C. Presidenta: Enterados.

-La Secretaría: El Director General de Asuntos Jurídicos del municipio de Irapuato, Gto., solicita la duplicidad de término, contemplada en el artículo 52 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato antes vigente, a efecto de ejercer las acciones civiles consideradas en el informe de resultados, dictamen y acuerdo, relativos a la revisión practicada a las operaciones realizadas con recursos de los fondos del Ramo 33 y de Obra Pública, por la Administración Municipal, correspondientes al periodo comprendido de enero a diciembre del ejercicio fiscal del año 2015.

-La C. Presidenta: Enterados y se informa que se remitió a la Junta de Gobierno y Coordinación Política.

IV. Comunicados provenientes de los Poderes de otros estados.

-La Secretaría: La Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca comunica la instalación y la integración de la

Diputación Permanente, del segundo receso del primer año de ejercicio legal.

La Quincuagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo comunica la elección del Presidente y la Vicepresidenta de la mesa directiva, que fungirá durante el segundo mes del primer período ordinario de sesiones, del segundo año de ejercicio constitucional.

-La C. Presidenta: Enterados.

V. Correspondencia proveniente de particulares.

-La Secretaría: Copia marcada al Congreso del Estado del escrito suscrito por el ciudadano José Raymundo Sandoval Bautista de la Ciudad de México, dirigido al Gobernador del Estado de Guanajuato, a través del cual manifiesta que avala el trabajo que realiza la organización «NIMA», y exhorta al Gobierno del Estado, a emitir medidas de protección acordes a la situación y en diálogo con dicha organización con relación a presuntas violaciones a derechos humanos y delitos cometidos en el albergue «La Ciudad de los Niños, A.C.» en Salamanca, Gto.

Copia marcada al Congreso del Estado del escrito mediante el cual el ciudadano Diosdado Guerrero Suaste del municipio de Comonfort, Gto., solicita al Gobernador del Estado, se le dé respuesta a su solicitud para prestar servicio de transporte de la comunidad el «Morales» al municipio de San Miguel de Allende, Gto.

-La C. Presidenta: Enterados.

-La Secretaría: Copia marcada al Congreso del Estado del escrito suscrito por el ciudadano Constantino Aguirre Sánchez, dirigido al Agente del Ministerio Público Investigador de Romita, Gto., a través del cual solicita se le dé cuenta con las diligencias realizadas en la carpeta de investigación 62653/2017, para efecto del esclarecimiento de hechos, así como coadyuvar ante la agencia del ministerio público.

-La C. Presidenta: Enterados y se turna a la Comisión de Justicia.

-La Secretaría: El ciudadano Ramón Gómez Espinoza Presidente del Comisariado Ejidal «Venado de San Lorenzo» del municipio de Irapuato, Gto., solicita audiencia con la Comisión de Desarrollo Urbano y Obra Pública, para exponer lo relativo al pago de afectaciones de la carretera Irapuato-Romita.

-La C. Presidenta: Enterados y se turna a la Comisión de Desarrollo Urbano y Obra Pública.

-La Secretaría: Es cuánto presidenta.

-La C. Presidenta: Esta presidencia a nombre del Congreso del Estado, da la más cordial bienvenida a los alumnos de la Telesecundaria trece «Lomas de Trinidad», invitados por el diputado Alejandro Trejo Ávila. ¡Sean ustedes bienvenidos!

Se pide a la secretaría dar lectura al oficio suscrito por el Secretaría General, a través del cual remite la iniciativa de Ley de Seguridad Social del Estado de Guanajuato, formulada por el Gobernador del Estado.

-La Secretaría: Con gusto presidenta.

PRESENTACIÓN DE LA INICIATIVA DE LEY DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO, FORMULADA POR EL GOBERNADOR DEL ESTADO.

«DIP. ANGÉLICA CASILLAS MARTÍNEZ. PRESIDENTA DEL H. CONGRESO DEL ESTDO. SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA. PRESENTE.

En ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 23, fracción I, inciso g) de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato, y 6, fracción VI del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno, por su conducto, me permito someter a la consideración del H. Congreso del Estado, la iniciativa Ley de Seguridad Social del Estado de Guanajuato.

Iniciativa formulada por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, con fundamento en lo previsto por el artículo 56, fracción I de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato.

En mérito de lo expuesto, solicito a usted dar cuenta de la mencionada iniciativa,

misma que se anexa al presente en los términos señaladas por la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato.

Atentamente. Guanajuato, Gto., 19 de octubre de 2017. **El Secretario de Gobierno. Lic. Gustavo Rodríguez Junquera. «**

»DIPUTADA ANGÉLICA CASILLAS MARTÍNEZ. PRESIDENTA DEL CONGRESO DEL ESTADO. SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA. PRESENTE.

Miguel Márquez Márquez, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, en el ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 56, fracción I de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, y acorde a lo establecido en el artículo 168 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, me permito someter a la consideración de esa Asamblea Legislativa, la presente **Iniciativa de Ley de Seguridad Social del Estado de Guanajuato**, en atención a la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La norma jurídica no es un instrumento estático. Por el contrario, debe permanecer en un proceso constante de cambio, de perfeccionamiento, para resolver, las probables imprecisiones o lagunas que contenga y, por otra parte, que su contenido se mantenga acorde a la realidad que pretende regular. Así, con este antecedente, se formula la presente iniciativa que busca actualizar el marco normativo del Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato, a través de un nuevo ordenamiento.

I. Introducción

La seguridad social, por su propia naturaleza y fines, contribuye al bienestar de los derechohabientes y sus familiares, al ser un instrumento de mejoramiento en la calidad de vida de la población trabajadora en nuestro Estado, mediante la búsqueda continua por mitigar los efectos de las contingencias y eventualidades que inciden en el desarrollo del ser humano y que impactan en su entorno familiar, social y laboral.

En este contexto, se reconoce la función del Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato, como un medio para atenuar los efectos negativos de los fenómenos sociales y económicos en los derechohabientes y sus familias, mediante un esfuerzo solidario, continuo y responsable.

II. Antecedentes

El Instituto de Seguridad Social del Estado tiene como antecedente la Ley de Pensiones para el Estado de Guanajuato, expedida por la Cuadragésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 51, el 28 de junio de 1962, ordenamiento que contenía la Dirección de Pensiones del Estado. En el Informe de Gobierno rendido por el entonces Titular del Poder Ejecutivo, se consignó, sobre el particular:

> «PENSIONES.- Los trabajadores al servicio del Estado han merecido especial interés de la administración, por ello, hemos procurado que disfruten de las mayores prestaciones sociales posibles. La creación de la Dirección de Pensiones, organismo instituido con tal finalidad, hace patente la preocupación del gobierno por el mejoramiento de este importante sector de la población de Guanajuato.
>
> La Dirección de referencia inició sus operaciones en el mes de junio del año próximo pasado y tiene en la actualidad 4,894 cuenta-habientes, los que, en conjunto, han aportado $2,395,000.00 al fondo, cantidad que sumada a las aportaciones del Gobierno del Estado, ha permitido a esta Institución, no obstante el plazo tan breve que viene funcionando, prestar a los derecho-habientes la mayor parte de los servicios a que se refiere la ley de la materia.»[3]

[3] **TORRES Landa**, Juan José (1991): Informes de Gobierno. Guanajuato en la Voz de sus Gobernadores. Compilación de Informes de Gobierno 1917-1991. Tomo III. Gobierno del Estado de Guanajuato. México, p.1205.

Posteriormente, la Quincuagésima Legislatura, expidió el Decreto número 88, por el cual se creó la Ley de Seguridad Social, la cual se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 83, el domingo 16 de octubre de 1977, contemplando el artículo 4, la creación del Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato, con el carácter de organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, absorbiendo el patrimonio, obligaciones, derechos y contratos que hasta entonces eran responsabilidad de la Dirección de Pensiones.

El propósito del Instituto conforme la Ley de Seguridad Social fue el de otorgar las prestaciones autorizadas a los servidores públicos sujetos a las condiciones de la misma, que consistían —entonces— básicamente, en el seguro de cesantía o separación, de fallecimiento, préstamos a corto plazo e hipotecarios, jubilaciones y pensiones.

Con posterioridad, la Quincuagésima Segunda Legislatura, expidió el Decreto número 165, por el cual se crea la Ley de Seguridad Social del Estado de Guanajuato, la cual se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 9, segunda parte, de 29 de enero de 1988, ordenamiento que actualizó el régimen de seguridad social de aquella época, destacándose la constitución del régimen obligatorio y el voluntario.

Luego, a través del Acuerdo Gubernativo número 51, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado del 11 de abril de 2003, se sectorizó al Instituto —acorde a la vigente Ley Orgánica del Poder Ejecutivo—, a la Secretaría de Finanzas y Administración.

Finalmente, la Quincuagésima Octava Legislatura, expidió el Decreto número 128, que contiene la vigente Ley de Seguridad Social del Estado de Guanajuato, a partir de la Iniciativa suscrita por el Gobernador del Estado, la cual se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 98, Segunda Parte, el 16 de agosto de 2002, consignando las consideraciones del dictamen legislativo:

> «Los sistemas de pensiones generalmente aplicados en nuestro país hasta los últimos años, se rigieron bajo el esquema de beneficio definido, caracterizado por garantizar a los pensionados y sus beneficiarios un conjunto de derechos establecidos en las Leyes y en algunos casos en reglamentos u otras disposiciones. Estas prestaciones dependían del tiempo de cotización década trabajador, así como del ingreso al momento del retiro y eran independientes de las aportaciones realizadas durante su vida activa.
>
> Cuando los institutos de seguridad social comenzaron sus actividades bajo este esquema, sus finanzas se mantuvieron superavitarias pues no estaban obligados durante ese tiempo a pagar las pensiones y, simultáneamente, todos sus afiliados efectuaban sus aportaciones. Sin embargo, a medida en que transcurrieron los años y los asegurados estuvieron en condiciones de cumplir con los requisitos para su jubilación, los gastos por este concepto se incrementaron considerablemente cada año y los ingresos de los institutos de seguridad social dependieron cada vez más de los nuevos trabajadores que se iban incorporando.
>
> El Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato no es ajeno a esta problemática. Si no fortalece sus ingresos y si las obligaciones que contrajo con sus asegurados y pensionistas siguen en los términos que previene la actual Ley, en el corto plazo no tendrá capital suficiente para pagar las pensiones a que está obligado. Si no se emprende una revisión integral al esquema bajo el cual se financian las pensiones y prestaciones, es fácil augurar que el déficit sobrevendrá en poco tiempo.
>
> …
>
> Para prevenir y corregir los problemas narrados, resulta indispensable y absolutamente necesario reformar la vigente Ley de Seguridad Social e introducir en ella condiciones que permitan la capitalización del Instituto y su fortalecimiento económico sustentable, no como fin en sí mismo,

sino con el propósito de garantizar el cumplimiento de sus obligaciones de seguridad social, siempre en favor de sus beneficiarios directos e indirectos que son aproximadamente treinta y nueve mil ochocientas setenta y nueve.»[4]

Por lo que hace a la sectorización, esta ha continuado a la —ahora—, Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, acorde a lo establecido en el párrafo segundo del artículo 1 del Reglamento Interior del Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato, contenido en el Decreto Gubernativo número 102, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 18 Tercera Parte, del 30 de enero de 2015; asimismo, se ubica en el Eje[5] «Guanajuato Seguro», en atención a su sectorización, acorde a lo establecido en el artículo 3, fracción IV, inciso f) del Decreto Gubernativo número 5, que establece la agrupación por Ejes de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 194 Segunda Parte del 4 de diciembre de 2012.

En atención a la evolución de las leyes de Seguridad Social en la entidad, es dable ubicar el tiempo que ha pasado entre cada nuevo ordenamiento:

- Ley de Pensiones para el Estado de Guanajuato, publicada el 28 de junio de 1962;
- Ley de Seguridad Social, de fecha 16 de octubre de 1977;
- Ley de Seguridad Social, de fecha 20 de enero de 1988; y
- Ley de Seguridad Social del Estado de Guanajuato, publicada el 16 de agosto de 2002.

Así, derivado del ámbito temporal de la norma, se tiene que entre los primeros dos ordenamientos existen quince años, entre el segundo y el tercero median once años; en tanto que, de el tercero y el actual han transcurrido catorce años, y con relación a la presente Iniciativa y la vigente Ley, mediarán quince años, de ahí que se advierte que es el tiempo promedio en que se han elevado al Congreso del Estado las revisiones integrales de la Ley, para su cambio y perfeccionamiento.

III. Inserción en el Sistema de Planeación

El Programa de Gobierno 2012-2018, consignó a este respecto:

> «Guanajuato, con sus más de 5.4 millones de habitantes, tiene una población preponderantemente joven, pero en transición hacia el envejecimiento. Esta situación nos brinda hoy un potencial único de desarrollo y de creación de riqueza, pero también nos plantea enormes retos en términos de creación de nuevos puestos de trabajo y una mejor educación para los jóvenes, así como profundas reformas en las estrategias y organización del sector salud, del sector económico y del sistema de seguridad social que nos permitan prepararnos para el envejecimiento poblacional.»[6]
>
> *El subrayado es propio.

Es así que, reconocida la necesidad de preservar la función primigenia del Instituto de garantizar el otorgamiento de seguros y prestaciones y administrar eficientemente los recursos ante los cambios demográficos actuales y futuros, resulta necesaria una adecuación integral de la Ley de Seguridad Social del Estado de Guanajuato, con objeto de: **i)** lograr la buena custodia de los intereses de sus derechohabientes, a partir de dar certeza en el pago de sus prestaciones a largo plazo; **ii)** mejorar la eficiencia administrativa para mantener moderno al Instituto, y como

[4] **Dictamen de la Iniciativa de Ley de Seguridad Social del Estado de Guanajuato, suscrita por el Gobernador del Estado.** Diario de los Debates de la Cámara de Diputados del Congreso del Estado de Guanajuato. Año II. Segundo Periodo Ordinario. LVIII Congreso Constitucional del Estado. Tomo II. Número 49. Sesión del 8 de agosto de 2002, pp. 23y 24.

[5] «Eje: La agrupación de las dependencias y entidades que estén sectorizadas bajo la coordinación de una Secretaría, atendiendo a su objeto y atribuciones;» (artículo 4, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato).

[6] Programa de Gobierno 2012.2018, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 41 Tercera Parte del 12 de marzo de 2013, p. 28.

un referente nacional; **iii)** permitir un mejor y mayor movimiento de los recursos en custodia del Instituto a través del uso de las diversas alternativas rentables que el mercado financiero ofrece a clientes institucionales como los institutos de pensiones y las afores; y **iv)**fortalecer el control interno del Instituto.

El proyecto que sirvió de base a esta iniciativa fue ampliamente discutido en el seno del Consejo Directivo del ISSEG.[7] Esta participación privilegió el diálogo como método de trabajo y entendimiento, evidenciando el consenso sobre la clara conveniencia de adecuar el ordenamiento que regula la seguridad social.

En tal virtud, de conformidad con sus facultades legales, el Consejo Directivo del ISSEG, en sesión extraordinaria de 18 de octubre de 2017, mediante Acuerdo XE-4-2017, aprobó la propuesta de iniciativa de Ley de Seguridad Social del Estado de Guanajuato, a efecto de que se remitiera a Titular del Ejecutivo para que en el ámbito de sus atribuciones determinara lo conducente.

IV. Ley de Seguridad Social del Estado de Guanajuato

Con tal finalidad, se busca un marco jurídico adecuado que permita regular eficazmente las prestaciones en materia de seguridad social, así como la propia organización interna del Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato, observando siempre la premisa fundamental de otorgar beneficios a los derechohabientes del Instituto, al contar con un ordenamiento que regule en forma más precisa los derechos y obligaciones en la materia.

En el Título Primero de la Ley, se establece la integración del fondo solidario de pensiones y se define la naturaleza y objeto del Instituto de Seguridad Social, se incorpora un glosario de términos a efecto de precisar los conceptos previstos en la norma.

En el Título Segundo, se establecen los sujetos de aseguramiento, sujetos obligados, sus derechos y obligaciones; se fijan las bases de cotización, cuotas, aportaciones y descuentos; además, la iniciativa contempla en relación con el ordenamiento vigente, la precisión de las bases para el otorgamiento de los seguros y prestaciones consignados en la Ley, lo que implica la unificación de las diversas modalidades de préstamos a corto plazo, préstamos de viaje y sobre aportaciones, y la adopción del término préstamos personales en sustitución de los mencionados. Con respecto a los préstamos hipotecarios, se precisa la figura del préstamo con garantía hipotecaria.

También la iniciativa en relación con el texto vigente, incorpora, en beneficio de los pensionados y beneficiarios, opciones para el cumplimiento de su obligación de acreditarla supervivencia, evitando así posibles contingencias en el pago de sus pensiones.

En materia de riesgos de trabajo e invalidez, se regula la autoridad competente para la calificación y dictaminación, y se establece el procedimiento que brinda certeza jurídica en el otorgamiento, modificación e inconformidades de estos seguros.

De igual manera, considerando el régimen transitorio previsto en la Reforma a la Ley de Seguridad Social del Estado de Guanajuato de 1o de octubre de 2002, se precisa la edad para acceder a los seguros de vejez y jubilación, quedando como mínima en 65 años, lo cual no representa un incremento, ya que corresponde al requisito previsto en el artículo tercero transitorio de dicho decreto de reforma.

Asimismo, la iniciativa contempla la mejora de las prestaciones establecidas en el régimen de seguridad social. Ahora, en los préstamos con garantía hipotecaria, se otorga la posibilidad de acceder a préstamos subsecuentes, sin la obligación de haber cubierto el préstamo anterior, conforme a su capacidad de pago en términos de la Ley.

Además, se unifican las diversas modalidades de préstamos a corto plazo en el concepto préstamos personales, que tendrán la posibilidad de ejercerse en cuatro oportunidades conforme a su capacidad de pago en términos de la Ley.

[7] **Véase el Artículo 113 de la Ley de Seguridad Social del Estado de Guanajuato que dispone:** El Consejo Directivo evaluará por lo menos cada cuatro años, la viabilidad financiera del Instituto y, en su caso, propondrá al titular del Poder Ejecutivo, las reformas y adiciones que estime pertinentes a esta Ley.

En beneficio de la economía de los pensionados y sus familias, se incrementa el monto máximo al que pueden acceder a través de los préstamos personales, para quedar en hasta dieciséis meses de su pensión.

Se establece la regulación de un fondo especial solidario, que servirá para liberar de la obligación de pago del adeudo de los préstamos, al asegurado, pensionado o sus beneficiarios en caso de muerte, invalidez total y permanente e incapacidad total y permanente.

En el Título Tercero se regula lo referente al régimen financiero y de inversiones del Instituto, la iniciativa precisa la integración de la reserva del Instituto, que comprende la reserva líquida, bienes muebles, inmuebles y derechos por cobrar, en aras de la transparencia y seguridad en la administración de los recursos.

Asimismo, como distingo con la norma vigente, la iniciativa plantea, que toda inversión que realice el Instituto, financiera o comercial, debe contemplar los resultados del estudio actuarial vigente a fin de que se pueda realizar un plan estratégico de inversión que cubra las necesidades de flujo financiero para cumplir oportunamente con el pago de seguros y prestaciones.

En las inversiones financieras, se propone como rango de inversión en el mercado de capitales, hasta un 30%. Para la determinación del nuevo límite para el mercado de capitales, se consideró como referencia los parámetros establecidos en las Sociedades de Inversión de Fondos para el Retiro (SIEFORE), y en los regímenes de inversión de Institutos estatales de pensiones. En ambos casos, permiten inversión en estos mercados, ajustándose a la restricción en la exposición al riesgo.

En los últimos años, nuestro país se ha vuelto más especializado en la emisión, administración y colocación de sus activos financieros, y la administración de los fondos de pensiones a nivel nacional ha tenido modificaciones importantes en su diversificación de activos financieros.

Actualmente, el portafolio de inversiones del ISSEG está compuesto por títulos de deuda gubernamentales, bancarios y corporativos, y contempla hasta un 10% en títulos de renta variable o capitales.

Los instrumentos de inversión en el mercado de capitales también cuentan con estándares de riesgos avalados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), aplicables para fondos de pensiones y SIEFORES.

La SIEFORE más conservadora SB1, tiene un límite de inversión en renta variable (capitales) del 10%, la SB2 permite tener en renta variable hasta un 30%, la SB3 tiene un límite de hasta un 35% en mercado de capitales y la Siefore menos conservadora SB4, en el mismo tipo de instrumentos y de renta variable, permite hasta un 45%.

Como se mencionó, se propone que el límite de inversión en el mercado de capitales se incremente del 10% al 30%, esto para que el rendimiento del portafolio de inversiones del ISSEG, pueda cumplir con los requerimientos que señala el estudio actuarial y, así, cumplir con el pago oportuno de seguros y prestaciones.

Además, debe considerarse que el portafolio del ISSEG es una cartera madura, ya que el crecimiento por el pago de pensiones está siendo elevado y, por ende, los rendimientos deben estar acordes con este crecimiento.

El objetivo primordial del ISSEG es contar con la viabilidad financiera en el largo plazo y todas las reformas deberán ser enfocadas al cumplimiento del mismo. Las hipótesis especificadas en el estudio actuarial establecen que se obtengan rendimientos en la cartera de inversiones de al menos 3% real, lo cual es una tasa de rendimiento que presenta retos importantes para poder obtenerla.

En este sentido, la iniciativa también considera integrar mayor seguridad para los instrumentos del mercado de divisas, el porcentaje se mantiene hasta un 30%, y contempla ahora coberturas cambiarias; es decir, protección contra las fluctuaciones del

tipo de cambio que puedan afectar al recurso del Instituto.

Asimismo, la operación directa en establecimientos de índole comercial permite la diversificación de las inversiones del organismo, por lo que es necesario permitir que el ISSEG continúe realizando actividades que contemplen, entre otras, las de establecimientos comerciales, estacionamientos, obras inmobiliarias, arrendamiento de inmuebles y servicios funerarios.

En el Título Cuarto, se regulan las disposiciones especiales, relativas al reconocimiento de derechos, continuación voluntaria en el régimen de seguridad social y ahorro voluntario. La iniciativa en el caso de la continuación voluntaria en el régimen de seguridad social, establece el derecho a ser readmitido a dicho régimen, cuando se haya actualizado alguno de los supuestos de baja, una vez que se hayan cubierto las cuotas y aportaciones omitidas, lo que se constituye como un derecho para los inscritos en dicho régimen que posibilita continuar con el goce de seguros y prestaciones.

En el Título Quinto, regula la estructura y atribuciones del Instituto y sus órganos, la integración de su patrimonio y, específicamente, la regulación del órgano interno de control.

Así, dentro de la iniciativa se fortalecen las atribuciones del Instituto, entre las cuales podrá realizar inspecciones, visitas de revisión y verificación a los sujetos obligados para el cumplimiento de sus fines.

Con el objetivo de fortalecer el Gobierno Corporativo del Instituto y, por tanto, la toma de decisiones, se definen las atribuciones del Consejo Directivo del Instituto y la incorporación de órganos técnicos auxiliares; en estos últimos, recaerá la atribución de realizar los análisis sobre los aspectos fundamentales para las inversiones de largo plazo, la diversificación de las inversiones por clase de activos, la inclusión de nuevas alternativas de inversión, la definición de políticas y parámetros de inversión, así como el seguimiento de los proyectos de inversión autorizados y su riesgo implícito.

Estos Comités se conformarán con personal técnico del Instituto, así como integrantes de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas y del Órgano Interno de Control, y contarán con el apoyo de asesores externos especialistas en la materia que se trate.

Por otra parte, la iniciativa da cumplimiento a las obligaciones constitucionales y legales, que permitan contar con una estructura orgánica acorde con los mandatos del nuevo régimen Nacional y Estatal Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato.

Además, la iniciativa contempla la figura de la Comisión Técnica de Vigilancia como órgano auxiliar del Consejo Directivo en la toma de decisiones.

Finalmente, el Titulo Sexto regula lo concerniente al recurso de revisión como medio de impugnación en sede administrativa en contra de las determinaciones que emitan las diversas áreas del Instituto; la caducidad y prescripción y, el régimen de responsabilidades y sanciones a que se sujetan los servidores públicos del Instituto, con independencia de lo previsto en la normativa aplicable.

Se ha considerado la expedición de un nuevo ordenamiento y no solo una iniciativa de reformas, adiciones y derogaciones, atentos a que la vigente Ley de Seguridad Social del Estado de Guanajuato, en más de quince años de vigencia, ha sido objeto de cinco reformas: **i)** Decreto 227[8] de la

[8] Mediante el cual, se reforman los artículos 5, fracciones VIII, IX y X; 6, fracciones I y II; 12, párrafo primero; 13, párrafo segundo; 14, párrafo segundo; 15; 18; 19; 23, fracción I; 26; 32, fracción I, párrafos primero y tercero; 35, fracciones I y II; 36; 38, párrafo segundo; 39; 40; 48, fracción I; 52, párrafo segundo; 55; 57; 58; 61; 71, párrafo primero; 72, párrafo segundo y la Tabla del Tiempo de Cotización; 74, fracción III; 75, fracciones I, II, VI y VII; 78; 79; 82, fracción I, la Tabla de Años de Cotización y la fracción II; 86; 88; 89, fracciones I, II y IV; 90; 92; 95; la denominación de la Sección Quinta; 97; 98; 100; 103; 105, fracción V; 112, fracciones III y XVI; y 117, párrafo primero. Se adicionan los artículos 5 con las fracciones XI y XII; 17 con un párrafo segundo; 22 con un párrafo segundo; 23 con un párrafo tercero; 50, con un segundo párrafo; un Capítulo Noveno al Título Segundo que se integra con los artículos 53 A y 53 B; recorriéndose en su orden los actuales Capítulos Noveno y Décimo, para quedar como Capítulos Décimo y Décimo Primero; 69 con un párrafo tercero; 71 con un segundo párrafo; un

Sexagésima Legislatura —publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 205 Primera Parte, del 23 de diciembre de 2008—; **ii)** Decreto número 74[9] de la Sexagésima Segunda Legislatura —publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 91Tercera Parte, del 7 de junio de 2013—; **iii)** Decreto número 152[10] de la Sexagésima Segunda Legislatura —publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 207 Décima Novena Parte, del 27 de diciembre de 2013—; **iv)** Decreto número 281[11] de la Sexagésima Segunda Legislatura —publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 64 Cuarta Parte, del 21 de abril de 2015—; y **v)** Decreto número 104[12] expedido por la Sexagésima Tercera Legislatura —publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 105 Segunda Parte, del 1 de julio de 2016—.

Esto es, a la fecha se han reformado, adicionado y derogado, 107 artículos —varios dispositivos en más de una ocasión— de la Ley de Seguridad Social, de modo que considerando que la Ley consta de 128 artículos —sin considerar los transitorios—, ha sido reformada en un 84% de su texto primigenio.

El texto jurídico comunica derechos, obligaciones, procedimientos, instituciones o situaciones, ya sea para reconocerlos, crearlos, modificarlos, extinguirlos, etc., y está contenido en documentos escritos cuyas estructura y sustancia varían según su alcance y propósito particulares; así, el principio de eficacia parlamentaria expresa que es deseable que todas las proposiciones de carácter jurídico que contengan las iniciativas se presenten de forma clara y sencilla, bien estructuradas y redactadas en la forma que exige el artículo 168 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo para el Estado de Guanajuato.

Bajo esta premisa, y atentos a que el texto integrado de la Ley de Seguridad Social para el Estado de Guanajuato original, más sus cinco decretos de reforma, si bien han permitido la actualización del ordenamiento jurídico, se ha perdido orden en la secuencia del texto normativo, por ello, se propone una estructura integrada por seis títulos, dieciséis capítulos, diecisiete secciones y 146 artículos.

Finalmente, atentos a la previsión del artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, relativo a la evaluación *ex ante*[13] de la norma, a partir de la evaluación del impacto jurídico, administrativo, presupuestario y social. Por ello, se manifiesta que —como se ha consignado hasta aquí en las consideraciones de la exposición de motivos—, por lo que hace a: **i)** impacto jurídico, este se traducirá en la actualización del ordenamiento que regula las prestaciones en materia de seguridad social, así como la organización del Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato, norma que a más de quince años de su inicio de vigencia y cinco decretos de reforma legislativos parciales, demanda una actualización de carácter

Capítulo Décimo Segundo que se integra con los artículos 72 A y 72 B; recorriéndose en su orden los actuales Capítulos Décimo Primero, Décimo Segundo, Décimo Tercero y Décimo Cuarto, para ubicarse como Capítulos Décimo Tercero, Décimo Cuarto, Décimo Quinto y Décimo Sexto; 75 con una fracción VIII; 81 con un párrafo segundo; 105 con la fracción VI, recorriéndose en su orden de la actual fracción VI a la XIV para pasar a ser de la VII a la XV, así como las fracciones XVI, XVII, XVIII y XIX; 112 con las fracciones XVII, XVIII y XIX; 117 con un párrafo tercero; y 120 con la fracción XXII. Se deroga la fracción VI del artículo 5; todos ellos de la Ley de Seguridad Social del Estado de Guanajuato.

[9]A través del cual (dentro de un decreto de modificación múltiple con motivo de la adecuaciones de congruencia normativa, en el artículo Cuadragésimo Sexto del Decreto) se reforma el artículo 119, fracción VI, de la Ley de Seguridad Social del Estado de Guanajuato.

[10]Por el cual se reforman los artículos 1, 8, fracciones II, IV y VI; 13, párrafo segundo; 15; 18; 19; 22, fracción II y segundo párrafo; 23, párrafo primero y fracción I; 26, párrafo primero; 33, párrafo primero; 34; 38; 45; 46; 50, párrafo primero; 55; 67, párrafo primero; 69, párrafos primero y tercero; 70; 71, párrafo primero y fracción I; 73; 74; 75, párrafo primero y fracción II; 77; 78; 82, fracción I; 83, párrafo primero; 84; 89; 94; 100; 103; 104, fracción II; 106, fracción II; 109, fracción II; 112, fracciones V y XII; la denominación del CAPÍTULO TERCERO del TÍTULO TERCERO; 117; 118; 119, párrafo primero y fracción V; 120, fracción II; y 124; se adicionan los artículos 8, con una fracción VIII, reubicándose el contenido de la actual fracción VIII, como IX; 22, con un párrafo tercero; 23, con una fracción V; 23 A; 69, con un párrafo cuarto; 75, con un párrafo segundo; 76, con un párrafo segundo; 83, con un párrafo segundo; 86 A; 91, con un párrafo segundo; 91 A; 104, con una fracción IV y un párrafo segundo; 112, con las fracciones XIX, XX y XXI, reubicándose el contenido de la actual fracción XIX, para quedar como XXII; 119, con la fracción IX, reubicándose el contenido de la actual fracción IX, como fracción X, y un párrafo segundo; y 120 A; y se derogan los artículos 72-A; 72-B; y Sexto Transitorio del Decreto número 128 emitido por la Quincuagésima Octava Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, todos ellos de la Ley de Seguridad Social del Estado de Guanajuato.

[11]Mediante el cual se reforma el artículo 119, fracción VI; y se adiciona un artículo 70 A, a la Ley de Seguridad Social del Estado de Guanajuato.

[12]Por el cual (dentro de un decreto de modificación múltiple con motivo de la adecuaciones que con motivo de la Unidad de Medida y actualización UMA, en el artículo Trigésimo Segundo del Decreto) se reformaron los artículos 51 y 70, de la Ley de Seguridad Social del Estado de Guanajuato;

[13]La evaluación, en un sentido amplio, puede darse en tres momentos diferentes en relación al proceso legislativo: 1) evaluación *ex ante*; 2) evaluación *durante*, y 3) evaluación *ex post*.

integral; **ii)** impacto administrativo, no existe, pues el Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato, continuará desempeñando sus funciones con el personal y recursos que cuenta a la fecha; **iii)** impacto presupuestario, no existe; y **iv)** social, habrá un beneficio a los derechohabientes del Instituto, al contar con un ordenamiento que regula en forma más precisa los derechos y obligaciones en la materia.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente Iniciativa de:

D E C R E T O

Artículo Único. Se **expide** la **Ley de Seguridad Social del Estado de Guanajuato**, para quedar en los siguientes términos:

LEY DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO

TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

Capítulo Único

Integración del régimen de seguridad social

Artículo 1. El régimen de seguridad social solidario comprende los seguros y prestaciones establecidos en la presente Ley y tiene por finalidad garantizar su correcta administración.

Naturaleza del Instituto

Artículo 2. El Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato, es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene a su cargo la administración de los seguros y prestaciones que esta Ley expresa, así como en los reglamentos respectivos.

Glosario

Artículo 3. Para efectos de la presente Ley se entenderá por:

I. Aportaciones: los enteros de recursos que cubran los sujetos obligados en cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad social que respecto de sus asegurados les impone esta Ley;

II. Asegurado: trabajador inscrito ante el Instituto en los términos de la Ley;

III. Cuotas: los enteros a la seguridad social que los asegurados deben cubrir conforme a lo dispuesto en la Ley;

IV. Derechohabientes: el asegurado, el pensionado y los beneficiarios, que en los términos de la Ley tengan vigente su derecho a recibir las prestaciones del Instituto, con excepción de los beneficiarios del seguro de vida y del ahorro voluntario;

V. Descuentos: las deducciones ordenadas por el Instituto a las percepciones de los asegurados o pensionados con motivo de la aplicación de la ley o las obligaciones contraídas por éstos, que deberán aplicar los sujetos obligados a través de sus nóminas de pago;

VI. Fondo Especial y Solidario: fondo que se constituye para garantizar el pago del saldo de los préstamos conferidos en caso de muerte, invalidez total y permanente e incapacidad total y permanente del asegurado o pensionado;

VII. INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía;

VIII. Instituto: Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato;

IX. Ley: Ley de Seguridad Social del Estado de Guanajuato;

X. Pensionado: el asegurado que por resolución del Instituto o autoridad competente tiene otorgada pensión por los seguros de: vejez, jubilación, riesgos de trabajo o invalidez;

XI. Beneficiario: aquella persona que por resolución del Instituto o autoridad competente tiene otorgada una pensión por el seguro de muerte, el seguro de vida o seguro de riesgos de trabajo derivado en muerte del asegurado o pensionado;

XII. Prestaciones: cantidad en dinero o en especie previstas en la Ley;

XIII. Seguros: pago de la prestación económica correspondiente a los derechohabientes en los términos de la Ley;

XIV. Sujetos obligados: los Poderes, organismos autónomos y, en su caso, los municipios y sus entidades paramunicipales del estado de Guanajuato; y

XV. UMA: la Unidad de Medida y Actualización.

Cumplimiento de requisitos

Artículo 4. Los derechohabientes para recibir los seguros y prestaciones que esta Ley otorga, deberán cumplir con los requisitos establecidos en la misma y en sus reglamentos.

Inembargabilidad de los seguros

Artículo 5. Los seguros que corresponden a los asegurados y a sus beneficiarios son inembargables.

TÍTULO SEGUNDO
RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL

Capítulo I
Sujetos de Aseguramiento y Sujetos obligados

Tipos de seguros y prestaciones

Artículo 6. El régimen de seguridad social comprende los seguros y prestaciones siguientes:

I. Seguro de riesgos de trabajo;

II. Seguro de invalidez;

III. Seguro de vejez;

IV. Seguro de jubilación;

V. Seguro de muerte;

VI. Seguro de vida;

VII. Seguro de retiro;

VIII. Préstamos personales; y

IX. Préstamos con garantía hipotecaria.

Sujetos de aseguramiento

Artículo 7. Son sujetos de aseguramiento del régimen de seguridad social:

I. Los trabajadores del Poder Ejecutivo del estado de Guanajuato;

II. Los trabajadores de los Poderes Legislativo y Judicial del estado de Guanajuato; y

III. Los trabajadores de los organismos autónomos por Ley.

Convenios entre el Instituto y los municipios

Artículo 8. Los municipios del estado de Guanajuato y sus entidades paramunicipales, podrán celebrar convenios con el Instituto para la incorporación de sus trabajadores al régimen de seguridad social.

Deberes de los sujetos obligados

Artículo 9. Los sujetos obligados deberán:

I. Registrarse e inscribir a sus trabajadores en el Instituto, comunicar sus altas, bajas, licencias y las modificaciones de su sueldo, dentro de los tres días hábiles siguientes a que se den, conforme a las disposiciones de la Ley y sus reglamentos;

II. Llevar nóminas en las que se asiente invariablemente el número de días trabajados y los sueldos percibidos por sus trabajadores. Es obligatorio conservar permanentemente estas nóminas en electrónico;

III. Calcular y determinar las aportaciones a su cargo y las cuotas de sus trabajadores y enterarlas al Instituto;

IV. Efectuar los descuentos a los trabajadores para el pago de sus cuotas, prestaciones, ahorro voluntario y otras obligaciones, y

enterarlos al Instituto en el plazo señalado en el artículo 18;

V. Entregar la información sobre los descuentos conforme a las especificaciones requeridas por el Instituto en el plazo señalado en el artículo 18;

VI. Proporcionar al Instituto la información y los elementos necesarios para precisar la existencia, naturaleza y cuantía de las obligaciones a su cargo;

VII. Prever en su presupuesto el pago de las aportaciones y demás obligaciones al Instituto;

VIII. Dar aviso al Instituto de la notificación que haga la institución que preste los servicios médicos, respecto a la existencia de riesgos de trabajo de sus trabajadores que puedan derivar en el otorgamiento de una pensión o indemnización, dentro de los diez días hábiles siguientes a la recepción de tal notificación;

IX. Actualizar de forma anual en el mes de febrero o a requerimiento del Instituto, el padrón de trabajadores con la información solicitada;

X. Permitir al Instituto inspecciones, visitas de revisión y verificación respecto del cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley; y

XI. Las demás que se deriven de la Ley y sus reglamentos.

Obligaciones de los asegurados

Artículo 10. Son obligaciones de los asegurados:

I. Proporcionar al Instituto y a los sujetos obligados en que presten sus servicios, la información general de las personas que podrán considerarse como beneficiarios;

II. Proporcionar los informes y documentos que se les pidan, relacionados con la aplicación de esta Ley; y

III. Proporcionar la información que permita mantener actualizado su expediente.

Manifestación de dudas para el aseguramiento

Artículo 11. Al llevar a cabo el registro, inscripción y avisos a que se refiere la fracción I del artículo 9, los sujetos obligados pueden expresar por escrito las dudas acerca de sus obligaciones. El Instituto dará respuesta en un término de diez días hábiles.

Derechos del sujeto de aseguramiento

Artículo 12. Los sujetos de aseguramiento señalados en el artículo 7 de la Ley, tienen el derecho de solicitar al Instituto su inscripción, comunicar las modificaciones de su sueldo y demás condiciones de trabajo, cuando el sujeto obligado no lo haga. Lo anterior, no libera al omiso de las responsabilidades en que hubiere incurrido.

Salvaguarda de información

Artículo 13. Los documentos, datos e informes que los sujetos obligados, asegurados y demás personas proporcionen al Instituto, en cumplimiento de las obligaciones que les impone la Ley, serán salvaguardados por éste en los términos de las leyes de la materia.

Capítulo II
Bases de Cotización, Cuotas, Aportaciones y Descuentos.

Concepto de sueldo base de cotización

Artículo 14. Para los efectos de la Ley se considera sueldo base de cotización, la remuneración que corresponda a la plaza, puesto o categoría, de conformidad con el tabulador de sueldos y salarios respectivo de los sujetos obligados.

No se consideran como parte del sueldo base de cotización, las demás prestaciones en dinero o en especie que reciba el trabajador.

Sueldo base de cotización a inscribirse

Artículo 15. Los asegurados se inscribirán con el sueldo base de cotización que perciban en el momento de su afiliación; estableciéndose como límite inferior el salario mínimo general vigente en el Estado y como límite superior el equivalente a diez veces este salario mínimo.

Cuando el sueldo sea menor al límite inferior señalado en el párrafo anterior, el patrón cubrirá las cuotas y aportaciones correspondientes con base al salario mínimo general vigente en el Estado, calculado en forma mensual.

Sueldo base de cotización cuando se tienen varios empleos

Artículo 16. Cuando un asegurado preste sus servicios a varios sujetos obligados de aseguramiento, se tomará en cuenta la suma de los sueldos percibidos en los distintos empleos.

Cuando la suma de los sueldos sea igual o sobrepase el límite superior establecido en el artículo 15 de esta Ley, los sujetos obligados cubrirán la cuota según la proporción que exista entre el sueldo que cubren individualmente y la suma total de los sueldos que perciba el asegurado, hasta adecuarla al citado límite, de conformidad con la distribución proporcional que determine el Instituto.

Obligación de retención de las cuotas y descuentos

Artículo 17. Los sujetos obligados deben retener de los sueldos del asegurado las cuotas que éste debe cubrir al Instituto y los descuentos que, por concepto de préstamos y obligaciones, sean comunicados por el mismo. Si las cuotas no son retenidas oportunamente, al efectuarse el pago del sueldo, sólo podrán descontar el monto equivalente a dos cotizaciones. El resto de las no retenidas será a cargo del sujeto obligado. El Instituto tendrá preferencia sobre cualquier otra deducción a favor de terceros.

Plazo para enterar las cuotas, aportaciones y descuentos al Instituto

Artículo 18. El pago de las aportaciones y el entero de las cuotas y descuentos a cargo de los sujetos obligados, será por quincenas vencidas y deberán realizarse al Instituto, a más tardar el día hábil siguiente de la quincena vencida.

Cuotas, aportaciones y descuentos no enterados por los sujetos obligados

Artículo 19. Cuando el sujeto obligado no entere las cuotas o pague las aportaciones dentro del plazo establecido, cubrirá a partir de la fecha en que éstas se hicieren exigibles, la actualización del valor del dinero conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor y los recargos correspondientes en los términos de la legislación fiscal del Estado.

Tratándose de descuentos, cuando el sujeto obligado no realice los solicitados por el Instituto en los términos del artículo 17, el pago correrá a cargo del organismo público omiso en hacer el descuento, en el que se incluirá, en su caso, el interés moratorio que se cause a una tasa del tres por ciento mensual sobre el monto del descuento quincenal, a partir del día siguiente de la fecha en que se haga exigible hasta la fecha efectiva de pago.

Cuotas de los asegurados

Artículo 20. Los asegurados cubrirán al Instituto una cuota del 16.50 por ciento del sueldo base de cotización que perciban.

De la cuota se destinarán 11.97 puntos para el pago de pensiones, 3.37 puntos para el financiamiento de los préstamos, 0.41 puntos para financiar el seguro de vida y 0.75 puntos para financiar gastos de administración.

Aportaciones de los sujetos obligados

Artículo 21. Los sujetos obligados aportarán al Instituto el 23.75 por ciento del sueldo base de cotización de los trabajadores a su servicio.

De la aportación se destinarán 19.22 puntos para el pago de pensiones, 3.37 puntos para el financiamiento de los préstamos, 0.41 puntos para financiar el seguro de vida y 0.75 puntos para financiar gastos de administración.

Derechos del asegurado que ha causado baja

Artículo 22. El asegurado que deje de prestar sus servicios para los sujetos obligados y hubiese causado baja en el Instituto, tendrá derecho a:

I. Continuar voluntariamente en el régimen de seguridad social, en los términos del artículo 107 de esta Ley; y,

II. Retirar la totalidad de las cuotas enteradas al Instituto, salvo aquellas

correspondientes a gastos de administración y seguro de vida, lo que implicaría la pérdida de su tiempo cotizado.

El asegurado que tenga derecho al otorgamiento de pensión no podrá retirar las cantidades consignadas en la fracción II del presente Artículo.
Tratándose de fallecimiento del asegurado, el importe de las cuotas se distribuirá de conformidad con la legislación correspondiente.

Condiciones para el registro de los tiempos de servicios

Artículo 23. La separación por licencia sin goce de sueldo o por suspensión de los efectos del nombramiento, se registrará como tiempo de servicios, siempre que el asegurado efectúe el pago de las cuotas y aportaciones referidas en los artículos 20 y 21, contemplando la actualización del valor del dinero conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor, en los siguientes casos:

I. Cuando la licencia sea concedida por el periodo en el que subsista la separación;

II. Cuando la licencia se conceda para el desempeño de cargos públicos de elección popular o comisiones sindicales, mientras duren dichos cargos o comisiones;

III. Cuando el asegurado sufra prisión preventiva seguida de sentencia absolutoria, mientras dure la privación de la libertad;

IV. Cuando el asegurado sea suspendido por responsabilidad administrativa; y

V. En los casos de licencias médicas, cuando éstas no sean cubiertas parcial o totalmente.

Si el asegurado falleciere, encontrándose en alguno de los supuestos de las fracciones anteriores y sus dependientes económicos tuviesen derecho a una pensión, se deberá cubrir el importe de las cuotas y aportaciones correspondientes.

El pago de las cuotas y aportaciones a que se refiere este artículo, deberá realizarse dentro de los seis meses siguientes, contados a partir de que haya cesado para el asegurado respectivo, cualquiera de los supuestos contemplados en las fracciones anteriores.

Autorización para deducir las cuotas

Artículo 24. Cuando exista la separación por licencia sin goce de sueldo o por suspensión de los efectos del nombramiento, el asegurado deberá continuar con el pago de sus préstamos.

En el supuesto de incumplimiento, podrá autorizar al Instituto el descuento de los mismos sobre sus cuotas.

Capítulo III
Seguros

Sección Primera
Reglas y Bases de las Pensiones

Plazo para contestar la solicitud de pensión

Artículo 25. El Instituto estará obligado a contestar cualquier solicitud de pensión, dentro de los treinta días siguientes a su recepción y a resolver sobre su otorgamiento, en su caso, dentro de los noventa días siguientes, siempre que se cumplan los requisitos que exige esta Ley.

Acreditación de la supervivencia

Artículo 26. Los pensionados y sus beneficiarios acreditarán su supervivencia en los meses de enero y julio de cada año; para ello, podrán optar por los medios siguientes:

I. De forma presencial en cualquiera de las oficinas del Instituto, o en los lugares que éste señale para tal fin;

II. Por cualquiera de los medios tecnológicos que, en su caso, implemente el Instituto o convenios que al efecto se celebren; y

III. Ante cualquier consulado mexicano o notaría pública, remitiendo la constancia original al domicilio del Instituto, tomándose como fecha de acreditación la de recepción del documento.

De no actualizarse la supervivencia mediante alguno de estos supuestos, se suspenderá el pago de las pensiones y el goce de las prestaciones a las que tienen derecho. En el caso del servicio médico, éste sólo se suspenderá hasta que se tenga la certeza del fallecimiento del pensionado.

Cuando la supervivencia se acredite fuera de los plazos referidos, se deberá reincorporar al pensionado o beneficiario en el goce de sus derechos a más tardar en la segunda quincena más próxima a la fecha de acreditación.

En caso de imposibilidad para cumplir con esta obligación y a juicio del Instituto, se podrá verificar la supervivencia en el domicilio del pensionado o beneficiario, sólo si éste se localiza dentro del Estado de Guanajuato.

El Instituto en cualquier momento y por cualquier medio podrá investigar la supervivencia.

Reincorporación de un pensionado al servicio activo

Artículo 27. Cuando a un asegurado se le haya dictaminado una pensión podrá optar por no recibirla y continuar en el régimen de seguridad social en los términos de Ley.

Cuando un pensionado se reincorpore al servicio activo, deberá informarlo de manera inmediata y por escrito al Instituto, a efecto de que éste suspenda el pago de la pensión. Al darse de baja nuevamente en el servicio activo, recibirá la misma pensión que disfrutaba con los incrementos salariales que correspondan, salvo en el caso de invalidez, cuando se recupere la capacidad para el trabajo. En el primer caso, se tendrá derecho a la devolución de las cuotas enteradas durante el último período laborado.

Compatibilidad de las pensiones

Artículo 28. Las pensiones a que se refiere la Ley son compatibles con el disfrute de otras pensiones o con el desempeño de trabajos remunerados, de acuerdo a lo siguiente:

I. La percepción de una pensión por invalidez, vejez o jubilación con:

a) El disfrute de una pensión por viudez o concubinato derivada de los derechos del cónyuge asegurado o pensionado; y

b) El disfrute de una pensión por riesgo del trabajo.

II. La percepción de una pensión por viudez o concubinato con:

a) El disfrute de una pensión por invalidez, vejez o jubilación derivada por derechos propios como asegurado;

b) El disfrute de una pensión por riesgo de trabajo, ya sea por derechos propios o derivados de los derechos como cónyuge o de concubinato del asegurado o pensionado; y

c) El desempeño de un trabajo remunerado.

En los casos en que las pensiones acumuladas sean pensiones directas, la suma de éstas no podrá exceder del cien por ciento del sueldo base de cotización.

Beneficiarios de varias pensiones por orfandad

Artículo 29. Tratándose de beneficiarios de la pensión por orfandad, podrán recibir tanto la que deriva del fallecimiento del padre como de la madre, si ambos tenían la calidad de asegurados.

Incompatibilidad de las pensiones

Artículo 30. Cuando el Instituto advierta la incompatibilidad de la pensión o pensiones, lo notificará al pensionado para que dentro de los diez días hábiles siguientes exprese lo que a su interés convenga; transcurrido el plazo anterior, el Instituto resolverá lo conducente dentro de los cinco días hábiles siguientes.

Pago de las pensiones

Artículo 31. Las pensiones se pagarán los días 10 y 25 del mes calendario correspondiente. En caso de ser día inhábil, se pagará el día hábil inmediato anterior.

En caso de pensiones que tengan que ser distribuidas, se entregará la parte correspondiente a cada beneficiario o a su representante legal.

Presentación de nuevos beneficiarios

Artículo 32. Si una vez otorgada una pensión se presentaren otros beneficiarios legales, el Instituto hará una nueva distribución y se les pagará a más tardar el día 25 del mes calendario siguiente a la fecha en que sea recibida la solicitud con la documentación que acredite de manera fehaciente el derecho a la pensión. El Instituto no tendrá la obligación de pagar las cantidades que ya hayan sido cubiertas a los primeros beneficiarios que se presentaron.

Reclamo de pensión de viudez por varios interesados

Artículo 33. En caso de que dos o más interesados reclamen la pensión por viudez, ésta no se otorgará hasta que se dicte por la autoridad judicial competente sentencia que cause ejecutoria, sin perjuicio de seguir otorgando las pensiones de orfandad que procedan.

Revocación de la pensión de viudez

Artículo 34. Cuando un presunto beneficiario de la pensión por viudez reclame la otorgada a otra persona por el mismo concepto, sólo se revocará ésta cuando exista sentencia ejecutoriada en la que se reconozca su derecho a la pensión; en este caso se otorgará la pensión por viudez a quien legalmente proceda, a más tardar el día 25 del mes calendario siguiente o en la fecha en que dicha sentencia determine. El Instituto no tendrá la obligación de pagar las cantidades que ya hayan sido cubiertas a los primeros beneficiarios que se presentaron.

Extinción de las pensiones

Artículo 35. El derecho a recibir las pensiones se extingue por el fallecimiento de los sujetos de aseguramiento y sus beneficiarios, que conforme a esta Ley tengan derecho a una pensión.

Incremento de las pensiones

Artículo 36. El monto de las pensiones se incrementará en la misma proporción en que aumenten los sueldos base de cotización de los trabajadores en activo. Esta disposición se aplicará a partir del día en que entren en vigor los nuevos sueldos. Tratándose de las pensiones por viudez, orfandad y de ascendencia, el incremento será del setenta por ciento del referido aumento.

Acreditación de la edad, parentesco y estado civil

Artículo 37. La edad, el parentesco y el estado civil de los asegurados y sus familiares derechohabientes, así como la dependencia económica y el concubinato, se acreditarán en los términos que señale la legislación correspondiente.

Excepciones a la inembargabilidad

Artículo 38. Las pensiones que otorga esta Ley no podrán ser objeto de descuento, compensación o embargo, salvo las decretadas por autoridad judicial y las autorizadas por el pensionado o beneficiario.

Es nula la cesión de las pensiones a favor de terceras personas. Si ésta se da, el Instituto suspenderá su pago.

Comprobación de la veracidad de la documentación presentada

Artículo 39. El Instituto podrá en cualquier tiempo comprobar la veracidad de los documentos, hechos y datos que hayan servido de base para conceder una pensión.

Cuando exista presunción de que la documentación e información sea falsa, se dará vista a la autoridad competente para que inicie la investigación correspondiente y emita la resolución que en derecho proceda.

El Instituto cancelará la pensión, una vez que la autoridad competente le notifique la existencia de un delito.

Derechos de los pensionados

Artículo 40. Los pensionados o beneficiarios tendrán derecho al pago de un aguinaldo equivalente a cincuenta y cinco días de la pensión que disfruten o la parte proporcional que le corresponda; éste se hará en dos pagos del cincuenta por ciento cada uno, en diciembre.

Los pensionados o beneficiarios disfrutarán de servicio médico y ayuda de despensa, a cargo de los sujetos obligados para los que laboraron los asegurados, que será cubierto junto con las aportaciones quincenales. Sólo los pensionados gozarán de seguro de vida a cargo de los sujetos obligados.

El importe de la ayuda de despensa será de siete veces la UMA diaria vigente. Para aquéllos que obtuvieron la pensión cotizando en el régimen de seguridad social, a través de la continuación voluntaria, los importes por estos conceptos serán con cargo al último sujeto obligado, en caso de que éste hubiere desaparecido será a cargo de la dependencia o entidad que asumió las funciones.

Los sujetos obligados que dejen de estar afiliados al Instituto, cubrirán el servicio médico y la ayuda de despensa de sus pensionados o beneficiarios. En caso de su desaparición, quedarán a cargo de la entidad pública que haya asumido la mayor parte de las funciones.

Ayuda para gastos de funeral de los pensionados

Artículo 41. Cuando un pensionado fallezca, el Instituto otorgará una ayuda para gastos de funeral, equivalente a trescientas noventa veces la Unidad de Medida y Actualización diaria. Dicho pago se hará a los deudos o a las personas que se hubieren hecho cargo de los gastos mencionados, quienes deberán exhibir copia certificada del acta de defunción y constancias de las erogaciones que hicieron.

Derecho de los pensionados a una prestación adicional

Artículo 42. Los pensionados o beneficiarios tendrán derecho a una prestación adicional equivalente a cinco días de la pensión que disfruten, o a la parte proporcional que corresponda, la cual será pagada en el mes de mayo del ejercicio fiscal inmediato posterior a su determinación.

La parte proporcional se calculará dividiendo el monto correspondiente a los días de la prestación adicional entre los trescientos sesenta y cinco días del año, multiplicando el resultado por el número de días que hayan disfrutado de la pensión durante el año.

Cálculo del importe de las pensiones

Artículo 43. El cálculo del importe de las pensiones, excepto las provenientes del seguro de riesgos de trabajo, se sujetará a lo siguiente:

I. Se tomará en cuenta el promedio del sueldo base de cotización percibido en los cinco años inmediatos anteriores a la fecha de la baja del asegurado o de su fallecimiento, actualizados a valor presente conforme al incremento anual del sueldo base de cotización en los cinco años inmediatos anteriores; y,

II. El monto de la pensión no podrá exceder el límite superior del sueldo base de cotización.

Cuando se trate de una pensión originada por el fallecimiento de un pensionado, se otorgará el importe que éste percibía al momento de la muerte.

Cálculo de los importes de las pensiones por invalidez, vejez y muerte

Artículo 44. Los importes de las pensiones por invalidez, vejez y muerte, se calcularán, en lo aplicable a cada uno de estos seguros, sobre el sueldo base promedio a que se refiere el artículo anterior.

En lo relativo a los porcentajes del sueldo base que correspondan a las pensiones, éstos se calcularán de acuerdo a la siguiente tabla, considerando que, de conformidad con los artículos 59, 64 y 68 de este ordenamiento, se tendrá derecho al seguro de invalidez a partir de los cinco años de cotización y a los seguros de vejez y de muerte a partir de los quince años de cotización respectivamente.

Tiempo de cotización	Varones	Mujeres
De 5 años a 15 años	50%	50%
De 15 años 1 día a 16 años	55%	55%
De 16 años 1 día a 17 años	58%	58%
De 17 años 1 día a 18 años	61%	61%
De 18 años 1 día a 19 años	64%	64%

De 19 años 1 día a 20 años	67%	67%
De 20 años 1 día a 21 años	70%	70%
De 21 años 1 día a 22 años	73%	73%
De 22 años 1 día a 23 años	76%	76%
De 23 años 1 día a 24 años	79%	80%
De 24 años 1 día a 25 años	82%	84%
De 25 años 1 día a 26 años	85%	88%
De 26 años 1 día a 27 años	88%	92%
De 27 años 1 día a 28 años	91%	96%
De 28 años 1 día a 29 años	94%	100%
De 29 años 1 día a 30 años	97%	
De 30 años en adelante	100%	

En el cómputo final del tiempo de cotización, toda fracción superior a seis meses se acreditará como un año completo.

Prestaciones en especie

Artículo 45. El otorgamiento de las prestaciones en especie correrá a cargo de los sujetos obligados, con base en los convenios que se firmen para tal efecto con las instituciones que presten servicios médicos, y que se subroguen en esa obligación, en los términos de la Ley de la materia.

Pago de las pensiones

Artículo 46. Las pensiones previstas en este Capítulo, se pagarán directamente al asegurado o a su representante legalmente acreditado, salvo el caso de incapacidad mental, en el que se podrá pagar a la persona o personas a cuyo cuidado esté el incapacitado, siempre y cuando prueben médicamente la incapacidad y prueben también la asistencia que prestan al incapacitado.

Muerte del asegurado por riesgo de trabajo

Artículo 47. Si el riesgo de trabajo trae como consecuencia la muerte del asegurado, sus beneficiarios recibirán una pensión equivalente al cien por ciento del sueldo base del asegurado a la fecha de su fallecimiento.

El importe de la pensión se distribuirá por partes iguales entre los siguientes beneficiarios:

I. El cónyuge supérstite, solo o en concurrencia con los hijos del asegurado que cumplan lo consignado en la fracción III del presente artículo;

II. La concubina o concubinario, solo o en concurrencia con los hijos del asegurado que cumplan lo consignado en la fracción III del presente artículo;

III. Los hijos si no han contraído matrimonio hasta los dieciocho años o hasta los veinticinco años si estudian en instituciones de nivel medio superior o superior reconocidas oficialmente; a los hijos que se encuentren totalmente incapacitados, se les otorgará la pensión en tanto subsista la incapacidad, de conformidad con el dictamen médico correspondiente; y

IV. Cuando fueren varios los beneficiarios de una pensión o alguno de ellos perdiese el derecho, la parte que le corresponda será repartida por el Instituto, proporcionalmente entre los restantes.

Derecho de pensión para ascendientes directos del asegurado

Artículo 48. A falta de cónyuge, concubina o concubinario, e hijos con derecho a pensión, ésta se otorgará por partes iguales a cada uno de los ascendientes directos del asegurado fallecido, siempre que hubiesen dependido económicamente de él.

Pensión por orfandad y viudez

Artículo 49. La pensión por orfandad se suspenderá definitivamente cuando sus beneficiarios cumplan las edades señaladas en el artículo 47 fracción III de esta Ley, o cuando desaparezca la incapacidad, dejen de estudiar, contraigan matrimonio o se encuentren en concubinato.

La pensión por viudez se otorgará mientras no se contraigan nuevas nupcias o se viva en concubinato o en aquella relación que el Derecho reconozca análoga al matrimonio.

Los beneficiarios deberán presentar en los meses de enero y julio la constancia de estudios, la constancia de inexistencia de matrimonio expedida por autoridad del registro civil y manifestación escrita bajo

protesta de decir verdad de no encontrarse en concubinato, según sea el caso.

Sección Segunda
Seguro de Riesgos de Trabajo

Riesgos de trabajo

Artículo 50. Riesgos de trabajo son los accidentes o enfermedades a que están expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo de su trabajo.

El Instituto, se subrogará en la medida y términos de este ordenamiento, en las obligaciones de los sujetos obligados, por lo que corresponde a las prestaciones en dinero en el supuesto de incapacidad permanente parcial o total o muerte del asegurado.

Concepto de accidente y enfermedad de trabajo

Artículo 51. Se considera accidente de trabajo toda lesión orgánica o perturbación funcional, inmediata o posterior o la muerte producida repentinamente en ejercicio o con motivo del trabajo, cualquiera que sea el lugar y el tiempo en que dicho trabajo se preste.

Asimismo, se considera accidente de trabajo el que se produzca al trasladarse el trabajador directamente de su domicilio al lugar de trabajo, o de éste a aquél.

Se consideran enfermedades de trabajo aquéllas previstas en la Ley Federal del Trabajo.

Calificación y dictaminación de los riesgos de trabajo

Artículo 52. Los riesgos de trabajo serán calificados por el Instituto y dictaminados técnicamente por la institución que acuerde el Consejo Directivo, o por la institución con la que el sujeto obligado tenga subrogado el servicio.

El asegurado podrá inconformarse con la calificación o dictamen técnico, el Instituto solo con el dictamen técnico.

En caso de desacuerdo con la calificación o dictamen, el asegurado inconforme tendrá treinta días naturales para presentar por escrito ante el Instituto su inconformidad, avalada con un dictamen de un especialista en medicina del trabajo. El Instituto propondrá al asegurado una terna de médicos especialistas en medicina del trabajo, para que de entre ellos, elija uno. El dictamen del especialista tercero resolverá en definitiva sobre la procedencia o no de la calificación y dictamen técnico, mismo que tendrá plena eficacia.

En caso de desacuerdo por parte del Instituto con el dictamen técnico, éste propondrá al asegurado una terna de médicos especialistas en medicina del trabajo, para que de entre ellos, elija uno. El dictamen de dicho especialista resolverá en definitiva sobre la procedencia o no del dictamen técnico, mismo que tendrá plena eficacia.

Incapacidad producida por riesgos de trabajo

Artículo 53. Para los efectos de la determinación de la incapacidad producida por riesgos de trabajo, se estará a lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo.

No se consideran riesgos de trabajo

Artículo 54. No se consideran riesgos de trabajo para los efectos de esta Ley, los que sobrevengan por alguna de las causas siguientes:

I. Si el accidente ocurre encontrándose el asegurado en estado de embriaguez;

II. Si el accidente ocurre encontrándose el asegurado bajo la acción de algún psicotrópico, narcótico o droga enervante, salvo que exista prescripción suscrita por médico titulado y que el trabajador hubiera exhibido y hecho del conocimiento del jefe inmediato lo anterior;

III. Si el asegurado se ocasiona intencionalmente una incapacidad o lesión por sí o de acuerdo con otra persona;

IV. Si la incapacidad o siniestro es resultado de alguna riña o intento de suicidio; y

V. Si el siniestro es resultado de un delito intencional del cual fuere responsable el asegurado.

Riesgos de trabajo por falta atribuible al sujeto obligado

Artículo 55. En los términos establecidos por la Ley Federal del Trabajo, cuando el asegurado sufra un riesgo de trabajo por falta inexcusable del sujeto obligado a juicio del tribunal competente, las prestaciones en dinero que este Capítulo establece a favor del asegurado, se aumentarán en el porcentaje que el propio Tribunal determine en laudo que quede firme. El sujeto obligado tendrá la obligación de pagar al Instituto el incremento correspondiente.

Realización de exámenes médicos para acceder a prestaciones

Artículo 56. El asegurado que sufra algún accidente o enfermedad de trabajo, para gozar de las prestaciones a que se refiere este Capítulo, deberá someterse a los exámenes médicos y tratamientos que determine la institución que presta los servicios médicos.

Prestaciones en dinero

Artículo 57. El asegurado que sufra un riesgo de trabajo tiene derecho a las siguientes prestaciones en dinero:

I. Si lo incapacita para trabajar recibirá mientras dure la inhabilitación, el cien por ciento del sueldo base que estuviere recibiendo en el momento de ocurrir el riesgo.

Esta prestación será cubierta por el sujeto obligado para el que presta los servicios, hasta que termine la incapacidad temporal o hasta que se declare una incapacidad permanente u ocurra la muerte.

Dentro del término de cincuenta y dos semanas, en su caso, a solicitud del asegurado o del sujeto obligado, deberá revisarse la incapacidad temporal para determinar si ha lugar a declarar la incapacidad permanente parcial o total.

II. Al declararse la incapacidad permanente total del asegurado, éste recibirá del Instituto, una pensión mensual equivalente al cien por ciento del sueldo base del asegurado a la fecha en que se declare la incapacidad; y

III. Si la incapacidad declarada es permanente parcial, superior al cincuenta por ciento, se concederá al incapacitado una pensión calculada conforme a la tabla de valuación de incapacidades contenida en la Ley Federal del Trabajo.

Si la valuación definitiva de la incapacidad es menor a veinticinco por ciento, el asegurado recibirá una indemnización equivalente a cinco anualidades de la pensión que le hubiese correspondido. Si la valuación es entre el veinticinco y el cincuenta por ciento, será optativo para el asegurado el obtener una pensión o pedir una indemnización global equivalente a cinco anualidades de la pensión que le hubiese correspondido.

Pensión provisional por dos años

Artículo 58. Al declararse la incapacidad permanente, sea parcial o total, se concederá al asegurado la pensión que corresponda con carácter provisional, hasta por un período de adaptación de dos años.

Durante ese período el asegurado o el Instituto podrán solicitar la revisión de la incapacidad, con el fin de modificar, en su caso, la cuantía de la pensión. Cuando la pensión sea definitiva, su revisión sólo podrá hacerse una vez al año, salvo cuando se pruebe un cambio sustancial en las cualidades de la incapacidad.

Cuando se reúnan dos o más incapacidades permanentes parciales, el asegurado o sus beneficiarios, no tendrán derecho a recibir una pensión mayor de la que hubiese correspondido por incapacidad permanente total.

Sección Tercera
Seguro de Invalidez

Existencia de invalidez

Artículo 59. Para los efectos de esta Ley, existe invalidez cuando el asegurado se inhabilite de manera total y permanente para el trabajo desempeñado, como consecuencia

de una enfermedad o accidente no profesional.

El dictamen de invalidez deberá ser realizado por la institución que acuerde el Consejo Directivo o por la institución con la que el sujeto obligado tenga subrogado el servicio.

Procedencia para la invalidez

Artículo 60. Para tener derecho a la pensión por invalidez se requiere que al declararse ésta, el asegurado tenga acreditados por lo menos cinco años de cotizar al Instituto.

Otorgamiento de la pensión por invalidez

Artículo 61. La pensión por invalidez se otorgará a partir de la fecha en que se notifique al Instituto el dictamen correspondiente.

Si el asegurado se inconforma con la calificación y dictamen, el Instituto le propondrá una terna de especialistas de notorio prestigio profesional, para que elija uno de ellos y su dictamen tendrá plena eficacia.

Improcedencia de la pensión por invalidez

Artículo 62. No se tiene derecho a la pensión por invalidez cuando el asegurado:

I. Por sí o en concierto con otra persona, se haya provocado intencionalmente la invalidez;

II. Resulte responsable del delito intencional que originó la invalidez; y

III. Padezca un estado de invalidez anterior a su afiliación al Instituto.

Revisión de la invalidez para determinar subsistencia y continuidad

Artículo 63. Durante la invalidez el Instituto podrá solicitar en cualquier momento la revisión de la misma, para determinar si subsiste o no tal estado y, como consecuencia si deja de otorgarse la pensión correspondiente.

Si la invalidez desaparece, cesa la obligación de cubrir la pensión.

Sección Cuarta
Seguro de Vejez

Procedencia de la pensión por vejez

Artículo 64. Tienen derecho a la pensión por vejez, los asegurados que hayan cumplido sesenta y cinco años de edad y acrediten por lo menos quince años de cotizaciones al Instituto.

Plazo para el pago de la pensión

Artículo 65. El Instituto estará obligado a pagar la pensión en un plazo máximo de noventa días, contados a partir de la fecha en que reciba la solicitud con la documentación respectiva, o en su caso el aviso oficial de baja, sin perjuicio de que el asegurado pueda solicitar el cálculo de la pensión que le pudiera corresponder.

Sección Quinta
Seguro de Jubilación

Procedencia de la pensión por jubilación

Artículo 66. Los asegurados que tengan por lo menos sesenta y cinco años de edad y hayan cotizado un mínimo de treinta años si son varones o veintiocho si son mujeres, tendrán derecho a la pensión por jubilación, equivalente al cien por ciento del promedio del sueldo base de cotización percibido en los cinco años inmediatos anteriores a la fecha de la baja, actualizados a valor presente conforme al incremento anual del sueldo base de cotización en los cinco años inmediatos anteriores.

Requisitos para ejercer la pensión

Artículo 67. Para ejercer la pensión por jubilación, los asegurados deberán solicitarlo por escrito al Instituto, acompañando la baja definitiva.

Sección Sexta
Seguro de Muerte

Condiciones para recibir la pensión

Artículo 68. Cuando ocurra la muerte del asegurado o del pensionado, como consecuencia de una enfermedad o accidente no profesional, sus beneficiarios tendrán derecho a recibir una pensión.

Requisitos para el otorgamiento

Artículo 69. Son requisitos para el otorgamiento de la pensión los siguientes:

I. Que el asegurado al fallecer hubiese cotizado al Instituto un mínimo de quince años, con excepción de los pensionados; y

II. Que la muerte no se deba a un riesgo de trabajo.

Reparto de la pensión

Artículo 70. La pensión por muerte del asegurado se distribuirá entre sus beneficiarios, conforme a lo dispuesto en los artículos 47 y 48 de esta Ley.

Fallecimiento del asegurado sin derecho a pensión

Artículo 71. Cuando ocurra la muerte del asegurado sin derecho a alguna pensión contemplada en este Capítulo, aquellos que acrediten su derecho en términos de la legislación correspondiente, tendrán derecho a retirar las cantidades consignadas en la fracción II del artículo 22.

Sección Séptima
Seguro De Vida

Beneficiarios del seguro de vida

Artículo 72. Tendrán derecho a la indemnización del seguro de vida, los beneficiarios designados por los asegurados, en la última cédula que obre en el expediente del asegurado en poder del Instituto.

Será nula toda cesión del seguro de vida a favor de terceras personas.

Importe del seguro de vida

Artículo 73. El importe del seguro de vida será el equivalente a dos mil veces la Unidad de Medida y Actualización diaria vigente a la fecha del fallecimiento. En caso de muerte accidental, la cual será determinada por la autoridad competente, el importe del seguro se duplicará.

Plazos para el pago del seguro de vida

Artículo 74. El pago del seguro de vida a favor de los beneficiarios se hará dentro de los veinte días siguientes a la fecha en que se entregue la solicitud correspondiente, a la que deberá acompañarse la copia certificada del acta de defunción del asegurado o pensionado.

A falta de cédula de designación de beneficiarios o los que fueren designados hayan fallecido, el monto del seguro de vida se distribuirá conforme la legislación correspondiente.

Sección Octava
Seguro de Retiro

Importe del seguro de retiro

Artículo 75. El asegurado que se pensione recibirá, por una sola vez, como seguro de retiro el equivalente a 7.5 veces la Unidad de Medida y Actualización mensual, de conformidad con el porcentaje señalado en el artículo 44.

Requisitos para el seguro de retiro

Artículo 76. Para obtener el seguro de retiro, los asegurados deberán solicitarlo por escrito al Instituto, acompañando la baja definitiva.

Capítulo III
Prestaciones

Sección Primera
Disposiciones Comunes de los Préstamos

Financiamiento de los préstamos

Artículo 77. Los préstamos que se otorguen se financiarán conforme a lo establecido por esta Ley, y las transferencias de la reserva líquida que acuerde el Consejo Directivo, siempre y cuando no se comprometa el pago de los seguros del Instituto, de conformidad con el estudio actuarial vigente.

En el otorgamiento de los préstamos previstos en esta Ley, se deberá garantizar la seguridad jurídica y económica para el Instituto; los montos que correspondan a dichas prestaciones deberán considerar las retenciones al sueldo decretadas por autoridad competente de conformidad con su comprobante de pago, a efecto de determinar la capacidad de pago del asegurado o pensionado.

La falta de pago oportuno del asegurado o pensionado sobre los préstamos otorgados, imposibilitará al Instituto para

otorgarle nuevos préstamos, hasta en tanto sean cubiertos los adeudos vencidos.

Límites a los descuentos por concepto de préstamos

Artículo 78. La suma de los descuentos por concepto de los préstamos que otorga el Instituto, no podrá exceder del ochenta por ciento del sueldo base de cotización, ni ser superior al cincuenta por ciento del total de las percepciones ordinarias correspondientes a las plazas, puestos o categorías del asegurado o de la pensión del pensionado, de conformidad con su comprobante de pago.

Interés anual de los préstamos

Artículo 79. Los préstamos generarán un interés anual que será fijado en el mes de enero de cada año por el Consejo Directivo, dicha tasa de interés no será inferior a:

$$TasaMínima = \left(\frac{INPC\,del\,mes\,de\,diciembre\,del\,año\,anterior}{INPC\,del\,mes\,de\,diciembre\,de\,dos\,años\,anteriores} - 1\right) \text{x } 100\%$$

Donde INPC, es el Índice Nacional de Precios al Consumidor publicado en el Diario Oficial de la Federación,

Ni superior a:

$$TasaMáxima = \left\{\left[\left(1 + \frac{Tasa\,Mínima}{100}\right)(1 + TIIE)^3\right] - 1\right\} \text{x } 100\%$$

Donde TIIE es, Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio en moneda nacional a plazo de 28 días del último día hábil del mes de diciembre del año anterior publicada en el Diario Oficial de la Federación.

Ajustes a las tasas de interés

Artículo 80. Cuando las condiciones económicas y de mercado cambien de tal manera que perjudiquen la viabilidad financiera del fondo de pensiones, el Consejo Directivo, a propuesta del Director General, revisará periódicamente esas circunstancias y propondrá los ajustes necesarios a las tasas de interés de los nuevos préstamos a que se refiere el artículo anterior.

Deducción de las cuotas del asegurado por adeudos con el Instituto

Artículo 81. En caso de baja del asegurado, éste deberá cubrir los adeudos a favor del Instituto por concepto de préstamos, en los términos del contrato inicial o de aquel instrumento que consigne la obligación. En el supuesto de incumplimiento, podrá autorizar al Instituto el descuento de los mismos sobre sus cuotas.

La aplicación de las cuotas sobre los adeudos disminuirá su tiempo de cotización registrado ante el Instituto, lo cual se realizará disminuyendo las quincenas cotizadas desde la última registrada y las anteriores a ésta, hasta que se cubra el monto del adeudo. Si hubiera un excedente, el asegurado podrá solicitar su devolución, lo que implicaría la pérdida de su tiempo cotizado restante.

Pago de intereses moratorios

Artículo 82. El retraso en el cumplimiento de obligaciones contraídas con el Instituto dará lugar al pago de intereses moratorios a una tasa del tres por ciento mensual sobre el monto del descuento quincenal, a partir del día siguiente de la fecha en que se haga exigible hasta la fecha efectiva de pago.

El Consejo Directivo, podrá disminuir el cincuenta por ciento de los intereses moratorios generados, cuando el deudor cubra en una exhibición, como mínimo el treinta por ciento del adeudo vencido de capital e interés ordinario.

Integración del Fondo Especial y Solidario

Artículo 83. Los asegurados o pensionados que obtengan un préstamo personal o un préstamo con garantía hipotecaria, tienen la obligación de contribuir de forma anual y por el plazo de amortización, a un Fondo Especial y Solidario, que tiene por objeto garantizar la liquidación del adeudo a favor del Instituto, en caso de su muerte, invalidez total y permanente e incapacidad total y permanente.

Para el caso de invalidez, de muerte y de incapacidad total y permanente, para gozar de este beneficio, se deberá estar al corriente en el pago del préstamo personal o de garantía hipotecaria hasta la fecha de la muerte o de la notificación al Instituto del dictamen correspondiente y haber cubierto la

contribución al fondo hasta el año en que ocurra la contingencia.

La contribución al Fondo Especial y Solidario seguirá aplicando a los asegurados con préstamo personal y con garantía hipotecaria, que hayan causado baja del servicio activo, se encuentren en licencia o dentro de la continuación voluntaria del régimen de seguridad social en los términos de esta Ley. En ningún caso habrá lugar a la devolución de la misma.

Porcentaje del préstamo para destinarse al Fondo Especial y Solidario

Artículo 84. El Consejo Directivo del Instituto establecerá de forma anual, el porcentaje sobre saldo insoluto del préstamo que se deba cubrir para dicho fondo.

Impedimento para conceder prestaciones adicionales

Artículo 85. Ningún órgano o autoridad del Instituto estará facultado para conceder prestaciones adicionales a las establecidas por esta Ley, o tomar decisiones que, de acuerdo a los estudios financieros y actuariales correspondientes, perjudiquen la viabilidad financiera del Instituto.

Sección Segunda
Préstamos Personales

Montos máximos de los préstamos personales

Artículo 86. Los asegurados, con un mínimo de un año de cotización, y los pensionados, en los términos de esta Ley, tendrán derecho a obtener préstamos personales, conforme a las bases siguientes:

I. El monto máximo de los préstamos será el equivalente al importe de dieciséis meses del sueldo base de cotización del asegurado, en atención al tiempo de cotización, conforme a lo siguiente:

Años de Cotización		Meses de sueldo base
Más de	Hasta	
1	3	7
3	4	8
4	5	9
5	6	10
6	7	11
7	8	12
8	9	13
9	11	14
11	15	15
15	En adelante	16

II. Los pensionados tendrán derecho a obtener préstamos personales, cuyo importe máximo será el equivalente a dieciséis meses del monto de la pensión que disfrutan.

Este derecho se podrá ejercer hasta en cuatro solicitudes, prevaleciendo siempre lo señalado por los artículos 77 y 78 de la Ley.

Plazo de amortización

Artículo 87. El término máximo de amortización para los asegurados que tengan menos de diez años de cotización será de treinta y seis quincenas. Este término será de hasta setenta y dos quincenas para los asegurados que tengan más de diez años de cotización y los pensionados.

Reestructura de los préstamos personales

Artículo 88. Si por haber sido dado de baja el asegurado o por otras causas graves el pensionado, indistintamente, no pudieren cubrir los pagos del préstamo personal, el Consejo Directivo podrá concederle por una sola ocasión un convenio modificatorio del préstamo otorgado, de conformidad con el reglamento de la materia, siempre que se solicite dentro de los 90 días naturales siguientes al incumplimiento.

En estas reestructuras la tasa de interés será la establecida en el artículo 79 más un punto porcentual adicional.

Renovación del préstamo personal

Artículo 89. Al tener vigente un préstamo, éste se podrá renovar cuando el asegurado o pensionado hubiere cubierto el cincuenta por ciento de su monto total. Del importe del nuevo préstamo, se retendrá el saldo insoluto del préstamo que se renueva. En las renovaciones, la tasa de interés será la establecida en el artículo 79 más un punto porcentual adicional.

Préstamo personal con obligado solidario

Artículo 90. Los préstamos cuyo importe exceda de tres veces el salario mínimo general vigente en el Estado elevado a un mes, requieren de un obligado solidario.

Este requisito no se exigirá cuando las cuotas acumuladas por el solicitante sean

superiores al importe del préstamo y el asegurado autorice al Instituto el descuento de los mismos sobre sus cuotas, en caso de incumplimiento.

A los pensionados no se les exigirá el requisito del obligado solidario. Los asegurados que tengan más de diez años cotizados no requerirán obligado solidario siempre que las cuotas acumuladas sean iguales o superiores al importe del préstamo y autorice al Instituto el descuento de los adeudos sobre sus cuotas, en caso de incumplimiento. En el caso, de que el importe del préstamo sea superior al monto de cuotas acumuladas, deberá contar con un obligado solidario.

La aplicación de las cuotas sobre los adeudos disminuirá su tiempo de cotización registrado ante el Instituto, lo cual se realizará disminuyendo las quincenas cotizadas desde la última registrada y las anteriores a ésta, hasta que se cubra el monto del adeudo.

Requisitos para ser obligado solidario

Artículo 91. Podrán ser obligados solidarios los asegurados que tengan como mínimo un año cotizado y que su sueldo base de cotización sea igual o superior al del solicitante. Los obligados solidarios sólo pueden fungir como tales en un sólo préstamo y para volver a serlo, será necesario que se haya cubierto la totalidad del préstamo garantizado.

El obligado solidario se subroga en los mismos términos que el obligado principal.

Sección Tercera
Préstamos con Garantía Hipotecaria

Procedencia del préstamo con garantía hipotecaria

Artículo 92. Los asegurados que hayan cotizado más de un año y los pensionados, tienen derecho a obtener préstamos con garantía hipotecaria sobre bienes inmuebles.

Podrán los asegurados y los pensionados, contratar cofinanciamientos con instituciones con las cuales el Instituto tenga convenio y en los términos que el Consejo Directivo autorice.

Destino de los préstamos con garantía hipotecaria

Artículo 93. Los préstamos con garantía hipotecaria podrán otorgarse para:

I. Adquirir o construir casa habitación;

II. Adquirir terreno para construir casa habitación;

III. Construir casa habitación en terreno que ya se tiene;

IV. Ampliar, remodelar o reparar la casa habitación;

V. Liberar de gravámenes la casa habitación del asegurado y pensionado;

VI. Comprar terreno con construcción existente; y

VII. Obtener liquidez, otorgando en garantía un bien inmueble.

Los préstamos que comprende este artículo quedarán sujetos a la reglamentación correspondiente.

Autorización del monto máximo de los préstamos con garantía hipotecaria

Artículo 94. El monto máximo de los préstamos con garantía hipotecaria será autorizado de manera anual por el Consejo Directivo y su importe se calculará con base en la capacidad de pago del solicitante.

Plazos para la amortización de los préstamos con garantía hipotecaria

Artículo 95. El plazo de amortización del préstamo con garantía hipotecaria se sujetará a la capacidad de pago del solicitante. El plazo máximo para la amortización del préstamo será de hasta veinte años.

Se tendrá derecho al préstamo con garantía hipotecaria, siempre y cuando la sumatoria de la edad del asegurado o pensionado más el plazo de amortización del préstamo no exceda de 75 años.

Otorgamiento de préstamos con garantía hipotecaria subsecuentes

Artículo 96. Los asegurados y pensionados podrán ejercer préstamo con garantía hipotecaria de conformidad a lo señalado por los artículos 92 y 93 de esta Ley y no será necesario cubrirlo en su totalidad para obtener otro subsecuente si su capacidad de pago lo permite, en términos del artículo 78. En caso de ejercer ese derecho de forma simultánea, el de mayor monto se considerará el inicial, con excepción de lo señalado en el reglamento de la materia.

Este préstamo quedará sujeto a la disponibilidad de recursos destinados a esta prestación de conformidad con los artículos 20 y 21 de esta Ley, a las transferencias para el efecto autorizadas por el Consejo Directivo y a la reglamentación correspondiente. Tendrán prioridad quienes soliciten por primera ocasión el préstamo con garantía hipotecaria.

No tendrán derecho a préstamos con garantía hipotecaria subsecuentes quienes hayan ejercido el Fondo Especial y Solidario a causa de invalidez o incapacidad total y permanente.

Préstamos para construcción, ampliación, remodelación o reparación de casa habitación

Artículo 97. Cuando el préstamo se destine a construir, ampliar, remodelar o reparar casa habitación, éste se entregará en un anticipo del veinticinco por ciento y tres ministraciones de veinticinco por ciento cada una, sujetas a comprobación de avance de obra.

Costo y designación de los supervisores de obra

Artículo 98. Los costos de supervisión de la obra se cubrirán por el asegurado o pensionado a prorrata de las ministraciones. El Instituto designará al supervisor de obra, previa comprobación de su preparación profesional.

Condiciones para celebrar convenio modificatorio

Artículo 99. Si por haber sido dado de baja el asegurado o por otras causas graves el pensionado, indistintamente, no pudieren cubrir los pagos del préstamo con garantía hipotecaria, el Consejo Directivo podrá concederle por una sola ocasión un convenio modificatorio del préstamo otorgado, de conformidad con el reglamento de la materia, siempre que se solicite dentro de los 90 días naturales siguientes al incumplimiento.

En estas reestructuras la tasa de interés será la establecida en el artículo 79 más un punto porcentual adicional.

Seguridad jurídica y económica en el otorgamiento de prestaciones

Artículo 100. Los préstamos con garantía hipotecaria se otorgarán invariablemente procurando las mejores condiciones de seguridad jurídica y económica para el Instituto.

TÍTULO TERCERO
RÉGIMEN FINANCIERO Y DE LAS INVERSIONES DEL INSTITUTO

Capítulo Único
Generalidades

Integración de las reservas del Instituto

Artículo 101. Las reservas del Instituto para financiar el régimen de seguridad social, se constituirán por los bienes muebles, bienes inmuebles, derechos por cobrar y la reserva líquida.

La reserva líquida del Instituto se constituirá con las cantidades que resulten de las diferencias entre los ingresos y los egresos.

La reserva líquida podrá ser utilizada cuando los ingresos sean inferiores a los egresos del mismo mes. Se tendrá que informar mensualmente al Consejo Directivo, los movimientos de la reserva líquida, a fin de que acuerde las decisiones necesarias.

Principios de inversión

Artículo 102. El Instituto podrá realizar inversiones financieras y actividades comerciales con la finalidad de fortalecer sus reservas; estas inversiones deberán sujetarse a las disposiciones siguientes:

I. La inversión debe hacerse en las mejores condiciones de seguridad, rendimiento, liquidez y diversificación de acuerdo a la situación de mercado prevaleciente;

II. Su disponibilidad debe ser acorde con la liquidez requerida para hacer frente

al pago de prestaciones económicas, de conformidad con el Estudio Actuarial vigente;

III. Al concurrir similitud de circunstancias sobre seguridad, rendimiento, liquidez y diversificación en diferentes tipos de inversión, se preferirá la que garantice el rendimiento económico en un menor plazo;

IV. Los rendimientos generados serán ingresados a la reserva líquida;

V. El Consejo Directivo autorizará las estrategias y los proyectos de inversión en los que se requieran recursos de la reserva líquida, conforme lo dispuesto por la Ley, previo análisis de los Comités técnicos respectivos; y

VI. La inversión de las reservas del Instituto se realizará conforme a lo dispuesto por la normatividad aplicable.

Disposiciones para las inversiones financieras del Instituto

Artículo 103. Las inversiones financieras, referidas a títulos, valores y demás activos que coticen en los mercados financieros, deberán sujetarse a las disposiciones siguientes:

I. Se podrán invertir en valores del mercado de deuda hasta un 100 por ciento, del mercado de capitales hasta un 30 por ciento y del mercado de divisas hasta un 30 por ciento. Adicionalmente, se podrán tener instrumentos derivados únicamente para cobertura hasta el mismo porcentaje de inversión en el mercado de divisas. Los instrumentos de inversión deberán estar listados en el Sistema Internacional de Cotizaciones o inscritos en el Registro Nacional de Valores o en el Mercado Mexicano de Derivados;

II. El Instituto realizará las inversiones financieras más favorables en términos de calificación y rendimiento, considerando las calificaciones que determinan el grado de riesgo del emisor y de la emisión, publicadas por las Instituciones Calificadoras de Crédito Internacionales; y

III. Las inversiones financieras deberán sujetarse al Reglamento de la Ley en Materia Financiera y demás disposiciones administrativas; así como al análisis del Comité de Inversiones Financieras y del Comité de Riesgos Financieros.

Disposiciones para las inversiones comerciales del Instituto

Artículo 104. Las inversiones comerciales, que se podrán desarrollar en territorio nacional, comprenderán:

I. Operación de establecimientos comerciales para la venta de bienes muebles y prestación de servicios;

II. Comercialización de bienes muebles e inmuebles, mediante su adquisición, arrendamiento, administración y enajenación;

III. Administración de bienes y servicios concesionados;

IV. Servicios funerarios;

V. Obras de inversión inmobiliaria y servicios relacionados con la misma, para realizar la actividad comercial del Instituto; y

VI. Otras que acuerde el Consejo Directivo.

Las inversiones comerciales deberán sujetarse al análisis del Comité de Evaluación de Proyectos de Inversión, así como a los lineamientos de operación de sus unidades de negocio a fin de garantizar la correcta administración de los mismos.

TÍTULO CUARTO
DISPOSICIONES ESPECIALES

Capítulo I
Reconocimiento de Derechos

Procedimiento para el reconocimiento de los derechos sin retiro de cuotas

Artículo 105. Al asegurado que haya causado baja definitiva sin que hubiese retirado sus cuotas y reingrese al régimen de seguridad social, se le reconocerá el tiempo cubierto por sus cotizaciones anteriores en la forma siguiente:

I. Si la interrupción en el pago de cotizaciones no fuere mayor a tres años, se le reconocerán al momento de su reingreso todas sus cotizaciones;

II. Si la interrupción excediera de tres años, pero no de cinco, se le reconocerán todas las cotizaciones anteriores cuando a partir de su reingreso, haya cubierto un mínimo de trece quincenas de nuevas cotizaciones; y

III. Si el reingreso ocurre después de cinco años de interrupción, las cotizaciones anteriormente cubiertas se le acreditarán al reunir veinticuatro quincenas a partir de su nuevo aseguramiento.

Reconocimiento de los derechos con retiro de cuotas

Artículo 106. En el caso de que el asegurado haya retirado las cuotas al separarse del servicio y reingrese al régimen de seguridad social, podrá solicitar por escrito que le sea reconocida la antigüedad que tenía al separarse. El Instituto reconocerá dicha antigüedad a la fecha en que el interesado reintegre el valor de las cuotas retiradas.

Las cuotas deberán reintegrarse actualizadas conforme al incremento anual del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) publicado por el INEGI, más la tasa de rendimiento real anual (Ta) proyectada en el escenario más alto del estudio actuarial del Instituto vigente al momento del reintegro, para cada año, desde la fecha en que retiró las cuotas hasta el momento en que éstas sean ingresadas al Instituto, lo anterior con la siguiente fórmula:

$$FactordeActualización = \left(1 + \left\{\left[\left(1 + \left\{\left[1 + \left(\frac{INPCdelmesanteriorenquesereingresacuotas}{INPCdelmesyañoenqueseretiracuotas} - 1\right)\right]^{\frac{1}{n}} - 1\right\}\right) x\ (1 + Ta)\right] - 1\right\}\right)^{n}$$

$$CuotasActualizadas = (CuotasretiradasxFactordeActualización)$$

Donde n, es el periodo expresado en años que transcurrió desde el día siguiente al que retiro sus cuotas hasta el día de reingreso.

Capítulo II
Continuación Voluntaria en el Régimen de Seguridad Social

Continuación Voluntaria en el Régimen de Seguridad Social

Artículo 107. El asegurado con un mínimo de quince años cotizados, al ser dado de baja del servicio, tiene derecho a continuar voluntariamente en el régimen de seguridad social, en los seguros de invalidez, vejez, jubilación y muerte, y a obtener préstamos, debiendo quedar inscrito con el último sueldo base de cotización que tenía en el momento de la baja, que se incrementará anualmente en el mismo porcentaje del salario mínimo general vigente en el Estado.

Pago de cuotas y aportaciones para la continuación voluntaria en el régimen

Artículo 108. El asegurado cubrirá el importe de las cuotas y aportaciones referidas en los artículos 20 y 21 de esta Ley, en los porcentajes para el financiamiento de los seguros y prestaciones correspondientes y el gasto de administración respectivo.

El pago de las cuotas y aportaciones se hará por mensualidades anticipadas dentro de los primeros diez días hábiles.

En caso de que el pago de las cuotas y aportaciones no se realice en el plazo previsto, deberá cubrir la actualización y recargos previstos en el artículo 19 de esta Ley.

Pérdida del derecho a continuar voluntariamente en el régimen

Artículo 109. El derecho a continuar voluntariamente en el régimen de seguridad social, se pierde si no se ejerce mediante

solicitud por escrito, dentro del plazo de un año contado a partir de la fecha de la baja, y se realiza el pago correspondiente.

Término de la continuación voluntaria en el régimen de seguridad social

Artículo 110. La continuación voluntaria en el régimen de seguridad social termina por:

I. Declaración expresa firmada por el asegurado;

II. Dejar de pagar las cuotas y aportaciones por tres mensualidades; y,

III. Ser dado de alta nuevamente en el régimen de seguridad social;

Se podrá solicitar la readmisión a la continuación voluntaria del régimen de seguridad social, en un plazo máximo de cinco años contados a partir de la fecha que dio origen a la terminación de la misma, siempre que se cubra las cuotas y aportaciones omitidas, actualizadas de acuerdo a lo previsto en el artículo 106.

Descuentos en continuación voluntaria

Artículo 111. El asegurado inscrito en la continuación voluntaria del régimen de seguridad social podrá autorizar al Instituto el descuento de los adeudos de préstamos sobre las cuotas registradas.

La aplicación de las cuotas sobre los adeudos disminuirá su tiempo de cotización registrado ante el Instituto, lo cual se realizará disminuyendo las quincenas cotizadas desde la última registrada y las anteriores a ésta, hasta que se cubra el monto del adeudo.

Capítulo III
Ahorro Voluntario

Particularidades del ahorro voluntario

Artículo 112. Los asegurados podrán realizar ahorro voluntario, de conformidad con la normatividad correspondiente.

Los recursos administrados por concepto de ahorro voluntario se individualizarán y son propiedad de cada asegurado. Dichos recursos no serán considerados para el cálculo de los seguros y prestaciones a que tenga derecho.

Retiro del ahorro voluntario

Artículo 113. El asegurado que deje de prestar sus servicios en el sujeto obligado de su adscripción y haya causado baja en el Instituto, podrá solicitar el retiro del importe acumulado en su cuenta de ahorro voluntario.

TÍTULO QUINTO
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO

Capítulo I
Atribuciones del Instituto

Atribuciones del Instituto

Artículo 114. El Instituto tiene las atribuciones siguientes:

I. Proporcionar y administrar los seguros y prestaciones a su cargo;

II. Recaudar las cuotas, aportaciones y demás recursos que le correspondan;

III. Invertir sus recursos e ingresos en los términos de la Ley;

IV. Celebrar contratos, convenios y demás actos jurídicos que se requieran para el cumplimiento de sus fines;

V. Adquirir, arrendar y administrar los bienes muebles e inmuebles necesarios para el cumplimiento de sus funciones;

VI. Arrendar, administrar y enajenar bienes muebles e inmuebles propiedad del Instituto destinados para el cumplimiento de sus fines, en términos de las disposiciones legales aplicables;

VII. Participar, por acuerdo del Consejo Directivo, en la constitución de fideicomisos, empresas o sociedades públicas o privadas, cuyo objeto permita el cumplimiento de los fines y atribuciones del Instituto;

VIII. Inscribir a los asegurados y registrar a los sujetos obligados en el régimen de seguridad social;

IX. Verificada la desaparición del supuesto que dio origen al aseguramiento o al otorgamiento de la pensión, dar de baja del régimen a los asegurados, pensionados o beneficiarios cuando se haya omitido presentar el aviso correspondiente;

X. Establecer los procedimientos de inscripción, cobro de cuotas y aportaciones, así como el otorgamiento de prestaciones;

XI. Determinar los adeudos a favor del Instituto y las bases para su liquidación en los términos de esta Ley;

XII. Deducir del total de las cuotas que un asegurado tenga derecho a retirar, el monto de los adeudos que éste tenga con el Instituto;

XIII. Practicar las diligencias pertinentes para asegurar el correcto otorgamiento de los seguros y las prestaciones que establece esta Ley;

XIV. Establecer la coordinación necesaria con las dependencias y entidades públicas, para el cumplimiento de los fines del Instituto;

XV. Realizar las obras de inversión inmobiliaria y servicios relacionados con la misma, en términos de las disposiciones legales aplicables;

XVI. Enajenar aquellos inmuebles que le sean adjudicados con motivo de la recuperación de adeudos;

XVII. Realizar inspecciones, visitas de revisión y verificación a los sujetos obligados, que se sujetarán a lo establecido en la normativa aplicable;

XVIII. Solicitar a la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración la devolución de los recursos derivados de las enajenaciones de bienes muebles;

XIX. Solicitar a la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración las cantidades que deriven de la aplicación de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato a favor del Instituto; y

XX. Las demás que le otorguen esta Ley y la normatividad aplicable.

Capítulo II
Patrimonio del Instituto

Constitución del patrimonio del Instituto

Artículo 115. Constituyen el patrimonio del Instituto:

I. Los bienes y derechos con que cuente y los que se establezcan a su favor;

II. Las cuotas y las aportaciones;

III. Los intereses, recargos, enajenación de activos, alquileres, rentas, rendimientos, utilidades, dividendos y frutos de cualquier clase que produzcan sus bienes y recursos, y otros;

IV. Donaciones, aportaciones distintas de la seguridad social, participaciones, usufructos, herencias, legados, subsidios y adjudicaciones que se hagan a su favor; y,

V. Cualquier otro ingreso que establezcan las leyes.

Prerrogativas del Instituto con relación a sus bienes

Artículo 116. El Instituto gozará de las prerrogativas y exenciones que establezcan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política para el Estado de Guanajuato y otras leyes, respecto de los bienes que estén destinados al cumplimiento de sus fines.

Inexistencia de derecho sobre los bienes y recursos del Instituto

Artículo 117. Los asegurados, pensionados y beneficiarios no adquieren derecho alguno sobre los bienes y recursos del Instituto y sólo tendrán los beneficios que a su favor establece la Ley.

Capítulo III
Órganos del Instituto

Órganos del Instituto

Artículo 118. Los órganos del Instituto son:

I. El Consejo Directivo;

II. El Director General; y,

III. El Órgano Interno de Control.

Sección Primera
Consejo Directivo

Integración del Consejo Directivo

Artículo 119. El Consejo Directivo es el órgano de gobierno del Instituto y estará integrado por:

I. Tres representantes del Poder Ejecutivo del Estado designados por su titular, cuyo presidente será el titular de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración;

II. Un representante de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado de Guanajuato;

III. Un representante de la Sección 45 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación;

IV. Un representante de los Sindicatos de Trabajadores de la Universidad de Guanajuato; y

V. El Director General.

Los miembros designados por el Titular del Poder Ejecutivo deberán tener preparación y conocimientos en materia financiera y de seguridad social.

Por cada representante propietario se nombrará un suplente que sustituirá al titular en sus faltas temporales.

Los representantes ante el Consejo Directivo no percibirán sueldo o remuneración alguna por la realización de las actividades propias de sus nombramientos.

Atribuciones del Consejo Directivo

Artículo 120. El Consejo Directivo tiene las atribuciones siguientes:

I. Aprobar los planes y programas del Instituto;

II. Dictar los acuerdos necesarios para el debido otorgamiento de los seguros y prestaciones establecidas en la presente Ley;

III. Proponer al Ejecutivo los reglamentos del Instituto;

IV. Dictar cualquier acuerdo en los términos de esta Ley para conceder, negar, suspender, modificar y revocar las pensiones que la misma establece;

V. Aprobar el programa de inversiones de las reservas del Instituto, a propuesta del Director General, en atención a lo dispuesto por esta Ley y sus reglamentos;

VI. Examinar para su aprobación o modificación, en su caso, los estados financieros y presupuestos de ingresos y egresos del Instituto;

VII. Acordar la práctica de auditorías externas al Instituto;

VIII. En caso de ser necesario, destinar la totalidad de las cuotas y aportaciones al pago de pensiones, conforme al estudio actuarial;

IX. Establecer los intereses ordinarios, en su caso, aplicables a los préstamos que otorga el Instituto, dentro de los márgenes que establecen los artículos 79 y 80 de esta Ley;

X. Autorizar las transferencias de remanentes anuales, para incrementar la reserva;

XI. Promover la profesionalización y desarrollo de los servidores públicos del Instituto a través de convenios con las universidades o centros de enseñanza superior, en los que se

establezca el contenido curricular y los plazos para la actualización;

XII. Vigilar y verificar el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley;

XIII. Revisar, y en su caso aprobar, el contenido de los dictámenes financiero y actuarial del Instituto y acordar medidas para su mejor funcionamiento;

XIV. Aprobar la contratación de los servicios de consultoría y asesoría externos, con el objeto de procurar el mejor cumplimiento de las atribuciones del Instituto y valorar el desempeño integral del mismo;

XV. Autorizar las adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles e inmuebles, en términos de las disposiciones legales aplicables;

XVI. Autorizar las enajenaciones de los bienes inmuebles propiedad del Instituto;

XVII. Autorizar las obras de inversión inmobiliaria y servicios relacionados con la misma, en términos de las disposiciones legales aplicables;

XVIII. Autorizar el incremento en el monto de las pensiones cuando no se aumenten los sueldos base de cotización de los trabajadores en activo, el cual no podrá ser superior a la meta de inflación del Banco de México;

XIX. Aprobar la remisión parcial de los adeudos de los créditos a favor del Instituto derivados de sus actividades comerciales, autorizar su pago a plazo, diferido o en parcialidades, y las bases para su liquidación en los términos de esta Ley;

XX. Autorizar, la remisión parcial de los intereses moratorios derivados de las prestaciones del régimen de seguridad social; y la cancelación de adeudos incosteables o dictaminados como incobrables;

XXI. Determinar el plazo máximo de generación de intereses moratorios derivados de las prestaciones del régimen de seguridad social;

XXII. Publicar anualmente en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, en un periódico de amplia circulación y en el portal de internet del propio Instituto, sus estados financieros, que serán dictaminados por contador público externo;

XXIII. Aprobar las bases para la celebración, modificación o terminación de convenios de aseguramiento con los municipios del Estado de Guanajuato, y sus entidades paramunicipales;

XXIV. Autorizar el otorgamiento de gratificaciones a funcionarios y empleados del Instituto, en los términos del presupuesto de egresos; y

XXV. Las demás que se señalan en esta Ley.

Evaluación de la viabilidad financiera del Instituto

Artículo 121. El Consejo Directivo evaluará por lo menos cada cuatro años, la viabilidad financiera del Instituto y, en su caso, propondrá al titular del Poder Ejecutivo, las reformas y adiciones que estime pertinentes a esta Ley.

Sesiones del Consejo Directivo

Artículo 122. El Consejo Directivo sesionará de manera ordinaria una vez al mes. Podrá citar a sesiones extraordinarias cuando lo juzgue necesario. Toda sesión será convocada por el Director General.

Validez de las sesiones del Consejo Directivo

Artículo 123. Las sesiones serán válidas con la asistencia de la mayoría de sus integrantes, salvo que la Ley exija mayoría calificada.

Decisiones del Consejo Directivo

Artículo 124. Los miembros del Consejo Directivo tendrán derecho a voz y voto en las reuniones del mismo.

Las decisiones del Consejo Directivo serán por mayoría simple de los presentes. El Presidente tendrá voto de calidad en caso de empate.

En los asuntos a que se refieren las fracciones III, V, VIII, IX y X del artículo 120, las decisiones del Consejo se tomarán por mayoría calificada de las tres cuartas partes de los asistentes. De no llegar a un acuerdo, la decisión se fundará en el dictamen que emita un experto de la materia que se trate.

Comisión Técnica de Vigilancia

Artículo 125. El Consejo Directivo podrá auxiliarse de una Comisión Técnica de Vigilancia que revise la información que se le presenta mensualmente y con base en la cual realiza la toma de decisiones.

La Comisión Técnica de Vigilancia estará compuesta por cinco miembros, tres que serán designados por el Consejo Directivo, a propuesta de los representantes de los asegurados; uno en representación del Poder Legislativo, que será un trabajador del propio Poder, designado por la Junta de Gobierno y Coordinación Política; y uno en representación del Poder Judicial, que recaerá en un trabajador de este Poder, designado por el Consejo del Poder Judicial.

En el caso de la representación de los sindicatos de trabajadores de la Universidad de Guanajuato, ésta corresponderá al sindicato que no esté representado en el Consejo Directivo.

Los miembros deberán contar con prestigio profesional y experiencia en actividades vinculadas con las atribuciones del Instituto. Quienes tienen derecho a proponer a los miembros, deben tener especial cuidado en que los propuestos cumplan el perfil señalado.

Los miembros serán nombrados para un periodo de cuatro años, podrán ser reelectos por una sola ocasión y sus cargos serán de carácter honorífico, por lo que no recibirán retribución, emolumento ni compensación alguna por su desempeño.

La Comisión Técnica de Vigilancia, de conformidad con el presupuesto de egresos del Instituto, contará con los recursos técnicos, financieros y humanos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.

Sección Segunda
Director General

Nombramiento y atribuciones del Director General

Artículo 126. El Director General del Instituto será nombrado por el Ejecutivo del Estado y tendrá las atribuciones siguientes:

I. Representar al Instituto en cualquier acto y ante cualquier autoridad;

II. Presentar al Consejo Directivo los estados financieros y los proyectos de presupuestos de ingresos y egresos, así como los proyectos de los planes y programas del Instituto correspondientes a cada ejercicio fiscal;

III. Representar al Instituto y, en su caso, al Consejo Directivo como mandatario general para pleitos, cobranzas y actos de administración, incluyendo aquéllos que requieran cláusula especial; estos poderes podrá delegarlos en todo o en parte, a favor de las personas que estime pertinente;

IV. Presentar denuncias y querellas y designar apoderados para que concurran a los tribunales laborales;

V. Establecer y organizar las áreas funcionales del Instituto, dando cuenta anualmente al Consejo Directivo;

VI. Llevar a cabo todos los actos que estime necesarios para invertir los recursos del Instituto en los términos que establecen los artículos 101, 102,103 y 104 de la Ley;

VII. Autorizar, de manera excepcional y en casos graves, la renovación anticipada de préstamos personales;

VIII. Someter a decisión del Consejo Directivo los asuntos de su competencia;

IX. Ejecutar los acuerdos del Consejo Directivo;

X. Resolver bajo su responsabilidad los asuntos de carácter urgente, dando cuenta de ello al Consejo Directivo en la siguiente sesión ordinaria;

XI. Estudiar y proponer al Consejo Directivo, el otorgamiento de seguros y prestaciones que correspondan en los términos de la Ley;

XII. Proponer al Consejo Directivo el otorgamiento de gratificaciones a funcionarios y empleados del Instituto, en los términos del presupuesto de egresos;

XIII. Informar al Gobernador del Estado de los acuerdos tomados por el Consejo Directivo del Instituto;

XIV. Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo Directivo;

XV. Nombrar y remover al personal del Instituto;

XVI. Expedir los lineamientos, políticas, manuales de organización y manuales de procedimientos, circulares y cualquier disposición de observancia general;

XVII. Proponer al Consejo Directivo las bases para la celebración de convenios de aseguramiento con los municipios del Estado de Guanajuato, y sus entidades paramunicipales;

XVIII. Someter anualmente a consideración del Consejo Directivo el dictamen financiero y actuarial del Instituto;

XIX. Conceder licencias, con goce o sin goce de sueldo, al personal del Instituto, con apego a la normatividad aplicable;

XX. Rendir anualmente al Consejo Directivo un informe que contenga la situación que guarda la administración del Instituto; y

XXI. Las demás establecidas en la Ley y demás normatividad aplicable.

Requisitos para ser Director General

Artículo 127. Para ser Director General del Instituto se deberán satisfacer los siguientes requisitos:

I. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos;

II. Contar tanto con estudios profesionales como de posgrado en materia económica, actuarial, financiera o de seguridad social;

III. Contar con prestigio profesional y experiencia mínima de cinco años en cargo de nivel directivo;

IV. Carecer de antecedentes penales por delitos patrimoniales;

V. Ser de reconocida honorabilidad; y

VI. No haber sido candidato o ejercido cargos de elección popular, o de representación o dirección de partidos políticos, durante los cinco años anteriores a su designación.

Sección Tercera
Órgano Interno de Control

Integración del Órgano Interno de Control

Artículo 128. El Órgano Interno de Control tiene a su cargo revisar, evaluar o auditar el desarrollo, seguimiento y cumplimiento de la normatividad, el control interno, los procesos de las unidades administrativas del ISSEG; además de la atribución de investigar y calificar las faltas administrativas, así como iniciar, substanciar y, en su caso, resolver los procedimientos que se deriven de la aplicación de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, así como presentar denuncias por hechos que las leyes señalen como delitos ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción o autoridad competente.

El titular del Órgano Interno de Control será designado por el titular de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas.

Recursos del Órgano Interno de Control

Artículo 129. El Instituto dotará al Órgano Interno de Control de suficiencia presupuestal, así como de los recursos técnicos y humanos necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones.

Atribuciones del Órgano Interno de Control

Artículo 130. El Órgano Interno de Control tiene las siguientes atribuciones:

I. Vigilar que los recursos del Instituto se apliquen e inviertan de acuerdo con las disposiciones de esta Ley y demás normatividad aplicable;

II. Realizar las auditorías e investigaciones sobre el cumplimiento de los proyectos, aplicación de recursos, metas, objetivos, planes, programas, presupuestos y funciones; normas, manuales, procesos, controles, lineamientos y políticas aplicables al Instituto;

III. Implementar los mecanismos que contribuyan al fortalecimiento del control interno;

IV. Investigar, calificar, substanciar y resolver las faltas administrativas en términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato;

V. Implementar los mecanismos internos que prevengan actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas;

VI. Presentar denuncias por hechos que las leyes señalen como delitos ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción o autoridad competente; y

VII. Las que deriven de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, y demás normativa aplicable.

Capítulo IV
Órganos Técnicos Auxiliares

Órganos Técnicos del Consejo Directivo

Artículo 131. Para fortalecer la toma de decisiones del Consejo Directivo, el Instituto contará con los siguientes órganos técnicos:

I. Comité de Inversiones Financieras.

II. Comité de Riesgos Financieros; y

III. Comité de Evaluación de Proyectos de Inversión.

La integración y funcionamiento de los Comités se realizará de conformidad con las disposiciones que para los efectos se emitan.

Los Comités Técnicos auxiliares contarán con asesores externos especialistas en la materia que se trate, al menos un representante de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, un representante de la Transparencia y Rendición de Cuentas y un representante del Órgano Interno de Control.

Sección Primera
Comité de Inversiones Financieras

Comité de Inversiones Financieras

Artículo 132. El Instituto contará con un Comité de Inversiones Financieras, como órgano de orientación, asesoría y recomendación, sobre las diferentes opciones de inversión en mercados y servicios financieros.

Atribuciones del Comité de Inversiones Financieros

Artículo 133. El Comité de Inversiones Financieras tiene las siguientes atribuciones:

I. Analizar y proponer al Consejo para su aprobación, en enero de cada año y cuando se considere necesario, el régimen de inversiones financieras, que incluye un análisis de las Políticas y Lineamientos de Inversión, en apego a las alternativas para el portafolio de inversión, el cual debe ser acorde con los objetivos del ISSEG y las condiciones que prevalezcan en los mercados y la economía;

II. Evaluar, orientar, recomendar, asesorar y proponer para autorización del Consejo, el programa de inversiones que establece el artículo 120 , fracción V, de la Ley; y

III. Las demás que le encomiende el Consejo.

Sección Segunda
Comité de Riesgos Financieros

Comité de Riesgos Financieros

Artículo 134. El Instituto contará con un Comité de Riesgos Financieros, como órgano de asesoría para la determinación de metodologías y procedimientos de identificación, cuantificación, seguimiento y mitigación de los riesgos financieros a los que está expuesto el Instituto, que a su vez permitan mantener el perfil de riesgos dentro de los límites que se determinen.

Atribuciones del Comité de Riesgos Financieros

Artículo 135. El Comité de Riesgos Financieros tiene las siguientes atribuciones:

I. Aprobar la metodología, modelos, parámetros y escenarios que habrán de utilizarse para llevar a cabo la medición y el control de los riesgos financieros;

II. Aprobar los límites de exposición al riesgo financiero;

III. Dar seguimiento a los resultados de riesgos financieros; y

IV. Las demás que le encomiende el Consejo.

Sección Tercera
Comité de Evaluación de Proyectos de Inversión

Comité de Evaluación de Proyectos de Inversión

Artículo 136. El Instituto contará con un Comité de Evaluación de Proyectos de Inversión, encargado de asesorar al Consejo, sobre la evaluación financiera de los proyectos de inversión del Instituto que requieran recursos de la reserva líquida y sus resultados.

Atribuciones del Comité de Evaluación de Proyectos de Inversión

Artículo 137. El Comité de Evaluación de Proyectos de Inversión tiene las siguientes atribuciones:

I. Presentar al Consejo el análisis de la viabilidad de los proyectos de inversión de las áreas responsables;

II. Dar seguimiento a los proyectos de inversión autorizados por el Consejo e informar a éste el estatus que guardan, así como los resultados de los mismos; y

III. Las demás que le encomiende el Consejo.

TÍTULO SEXTO
PROCEDIMIENTOS

Capítulo I
Recurso de Revisión

Recurso de revisión

Artículo 138. Las resoluciones definitivas del Instituto podrán impugnarse a través del recurso de revisión ante el Consejo Directivo.

El recurso deberá interponerse ante la Dirección General dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación del acto que se impugna, mediante escrito en el que se expresen los agravios que le causa la resolución impugnada.

El recurso será resuelto por el Consejo Directivo dentro de los sesenta días hábiles siguientes a la interposición del mismo.

Capítulo II
Caducidad y Prescripción

Extinción del derecho del Instituto para iniciar acciones por créditos a favor

Artículo 139. El derecho del Instituto para ejercitar facultades de comprobación, para determinar créditos a su favor, provenientes de la omisión del pago de cuotas o aportaciones e iniciar el procedimiento de cobro, se extingue en el término de cinco años

contados a partir de la fecha en que la obligación sea exigible.

Imprescriptibilidad del derecho a obtener pensión

Artículo 140. El derecho a obtener una pensión es imprescriptible.

Prescripción del derecho para reclamar el pago de prestaciones

Artículo 141. El derecho de los asegurados, pensionados o beneficiarios para reclamar el pago de pensiones vencidas, prestaciones en dinero o indemnizaciones que deban otorgarse en los términos de esta Ley, prescribe en tres años a partir de la fecha en que sea exigible.

Principios rectores en el Instituto

Artículo 142. Los servidores públicos y demás personal del Instituto, se regirán por los principios de legalidad, honradez, veracidad, lealtad, profesionalismo, transparencia, buena fe, eficiencia y probidad.

Capítulo III
Responsabilidades y Sanciones

Responsabilidades de los servidores públicos del Instituto

Artículo 143. Los servidores públicos del Instituto estarán sujetos a las responsabilidades civiles, penales y administrativas en que puedan incurrir, de acuerdo a las disposiciones legales aplicables.

Responsabilidades de los servidores públicos de los sujetos obligados

Artículo 144. Los servidores públicos de los sujetos obligados que incumplan con la inscripción, avisos de baja, reingreso, licencias, modificaciones, descuentos o deducciones al sueldo de sus trabajadores, incurrirán en la responsabilidad y sanción, en términos de Ley.

Incumplimiento en el entero de las cuotas y aportaciones

Artículo 145. Cuando los servidores públicos de los sujetos obligados no enteren al Instituto, las cuotas, aportaciones y descuentos en el plazo señalado en el artículo 18 de esta Ley; se notificará tal incumplimiento a la autoridad competente en términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el estado de Guanajuato.

El Instituto podrá celebrar con la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, los convenios de colaboración correspondientes, para que le restituya las cantidades derivadas de las fracciones XVIII y XIX del artículo 114; lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas en que hubiese incurrido el servidor público omiso.

Pago al Instituto de los montos obtenidos indebidamente

Artículo 146. El derechohabiente que, mediante engaño, simulación, sustitución de persona o por cualquier otro medio, obtenga indebidamente las prestaciones que señala esta Ley, pagará al Instituto el importe de los montos obtenidos, a valor presente, independientemente de la responsabilidad penal, civil o administrativa en que incurra.

TRANSITORIOS

Inicio de vigencia

Artículo Primero. La presente Ley entrará en vigor ciento veinte días siguientes al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Abrogación

Artículo Segundo. Se abroga la Ley de Seguridad Social contenida en el Decreto número 128 de la Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso del Estado, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 98, Segunda Parte, de fecha 16 de agosto de 2002.

Trámites y procedimientos pendientes de resolución

Artículo Tercero. Los trámites y procedimientos pendientes de resolución con anterioridad a la vigencia de esta Ley, se resolverán conforme a las disposiciones de la Ley que se abroga.

Obligación de expedir reglamentos

Artículo Cuarto. En tanto se expiden los reglamentos correspondientes, continuarán aplicándose las disposiciones vigentes, en lo que no se opongan al presente ordenamiento.

Designación de los integrantes de la Comisión Técnica de Vigilancia

Artículo Quinto. Para los efectos del artículo 125, a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, los integrantes de la Comisión Técnica de Vigilancia deberán ser nombrados en un plazo máximo de 30 días naturales siguientes.

Los bienes, recursos humanos, financieros y presupuestales asignados al Órgano de Control y Vigilancia se destinarán a la Comisión Técnica de Vigilancia para el cumplimiento de sus fines.

Designación del titular del Órgano Interno de Control

Artículo Sexto. A partir de la entrada en vigor de la presente Ley, en un plazo que no exceda de 30 días naturales siguientes, la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas en términos del artículo 32, fracción I, inciso g) de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato, designará al titular del Órgano Interno de Control.

En la misma fecha señalada en el párrafo anterior, la Coordinación de Auditoría Interna hará entrega recepción al Órgano Interno de Control, de la documentación, auditorías, informes, y procedimientos administrativos que se encuentren en trámite al momento que entre en vigor la presente Ley, los que se sujetarán a las disposiciones contenidas en la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios y demás normativa aplicable.

La entrega recepción incluirá los bienes, recursos humanos, financieros y presupuestales asignados a la Coordinación de Auditoría Interna.

Entrega recepción del Órgano de Control y Vigilancia

Artículo Séptimo. En cumplimiento al artículo 128, realizada la designación del titular del Órgano Interno de Control, el Órgano de Control y Vigilancia hará entrega recepción a éste de la documentación, auditorías, informes, y procesos que se encuentren en trámite, los cuales se llevarán hasta su conclusión con arreglo en las disposiciones que se abrogan.

En razón de lo anteriormente expuesto y fundado, solicito a Usted dar a esta Iniciativa el trámite señalado en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato.

GUANAJUATO, GTO., A 19 DE OCTUBRE DE 2017. EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO. MIGUEL MÁRQUEZ MÁRQUEZ.»

-La C. Presidenta: Se turna a la Comisión de Justicia; con fundamento en el artículo 113, fracción I de nuestra Ley Orgánica; para su estudio y dictamen.

Procede dar cuenta con la iniciativa formulada por la diputada Luz Elena Govea López; integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a efecto de reformar diversas disposiciones del Código Civil para el Estado de Guanajuato.

PRESENTACIÓN DE LA INICIATIVA FORMULADA POR LA DIPUTADA LUZ ELENA GOVEA LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, A EFECTO DE REFORMAR DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO.

»DIPUTADA ANGELICA CASILLAS MARTÍNEZ. PRESIDENTA DE LA SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO. PRESENTE.

La que suscribe diputada LUZ ELENA GOVEA LÓPEZ, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, ante la Sexagésima Tercera Legislatura del H. Congreso del Estado de Guanajuato, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 56, fracción II y 63, fracción I de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; y 146 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, nos permitimos someter a la consideración de esta Asamblea, la presente **Iniciativa de Decreto por el que se adiciona y reforman diversas disposiciones al Código Civil para el Estado de Guanajuato, en atención a la siguiente:**

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En nuestro idioma gran parte de las palabras que lo conforman son polisémicas; es decir, son palabras que poseen distintos significados.

Tales significados son las acepciones que sobre la misma palabra asumen las distintas disciplinas, ya sean de carácter técnico o científico, las de los formadores de opinión y las de la propia población.

Estos significados, como el mismo idioma, evolucionan con el avance del tiempo.

De esta forma, el significado de algunas palabras pierden intensidad, otros la amplían y otras más pasan a adquirir un significado totalmente opuesto al de su origen, la palabra "discriminación", es un claro ejemplo de lo anterior. En su primera aparición en el Diccionario de la Real Academia Española, hacia 1925, cuya significación fue *"Separar, distinguir, diferenciar una cosa"*, hace alusión a los verbos "separar" y "dividir".

Hacia 1970, el mismo diccionario de la Real Academia Española, expone una nueva acepción que es la de »Dar trato de inferioridad a una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, políticos», etc.

Con este segundo alcance de la palabra »discriminación», se aborda un problema de gran relevancia en el ámbito jurídico, al enlistar los motivos, limitándose solamente a los raciales, religiosos y políticos, pero agrega un *etc.*, lo que la hace imprecisa en cuanto a que no deja claro a quiénes abarca la discriminación.

En este mismo ámbito, por años generó para las autoridades jurisdiccionales y administrativas el dilema de aplicar en sus actos la letra de la ley o el espíritu de la misma; problema que mediante la reforma constitucional del 10 de junio de 2011, quedó sustancialmente resuelto al precisar la obligación de aplicar la ley en su forma extensiva si se tratara de reconocimiento o protección de derechos, o restrictiva si se tratara de suspensión o pérdida de derechos, principio constitucional que conocemos como principio pro-persona.

Así la Ley Suprema en el párrafo primero de su artículo 1°, del Capítulo I, denominado de los Derechos Humanos y sus Garantías, establece que:

"En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece".

El mismo precepto en su párrafo quinto mandata que:

»Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas»

Ahora bien, la discriminación no sólo implica la exclusión, distinción o restricción de derechos de los grupos o de personas, también envuelve la utilización de palabras para descalificar o para referirse a cierto grupo social de forma peyorativa, práctica que atenta contra la dignidad humana.

Y es que el lenguaje juega un papel tan importante en el tema de la discriminación, pues su fuerte influencia puede provocar la predisposición de las personas para la marginación de individuos o de grupos, ya que mediante la utilización de determinadas palabras se puede incitar, promover y justificar la intolerancia y el rechazo de los grupos por su vulnerabilidad, el problema radica en la utilización de expresiones de menosprecio o insulto que generan sentimiento de hostilidad contra personas o grupos.

Al respecto el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación refiere que la

discriminación es una práctica cotidiana que consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio inmerecido a determinada persona o grupo. También señala que los efectos de la discriminación en la vida de las personas son tan negativos que pueden orillar al aislamiento, a vivir violencia e incluso en casos extremos, a perder la vida.

El reto legislativo que con la reforma constitucional en materia de derechos humanos tenemos en las entidades federativas, es el de trabajar en la adecuación continua de los ordenamientos locales, para hacerlos acordes al espíritu de la Constitución Federal.

Actualmente existen hipótesis normativas en el Código Civil para el Estado de Guanajuato, en cuyo contenido se encuentran expresiones discriminatorias como son las palabras imbécil, idiota, demencia, palabras que lesionan la dignidad humana que en éste, el tiempo del reconocimiento de los derechos humanos y de la eliminación de todas las formas de discriminación, hace necesaria la actualización de ese ordenamiento.

Para las diputadas y los diputados que integramos el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, cualquier situación que niegue o impida el acceso en igualdad de posibilidades a cualquier derecho, o lo permita, pero bajo trato diferenciado motivado por alguna característica propia de la persona, con el afán de distinguir, excluir o restringir el goce de algún derecho, así como el uso de palabras peyorativas es considerado discriminación.

Así conforme al artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, la presente iniciativa considera:

I. El impacto jurídico: Con la presente reforma, el Código Civil Para el Estado de Guanajuato tendrá las modificaciones necesarias para eliminar de su contenido las palabras discriminatorias de imbécil, idiota y demencia, armonizado tal ordenamiento con los de jerarquía superior que protegen los derechos humanos y prohíben la discriminación en cualquiera de sus formas.

II. El impacto administrativo: la propuesta conlleva la ampliación de facultades para el Consejo del Poder Judicial, encargado de la carrera judicial, la capacitación, disciplina y evaluación de sus servidores públicos, que se traducen en la obligación de aplicar los medios de control y confianza a consejeros, jueces y magistrados.

III. El impacto presupuestario: en este aspecto, la propuesta no causará ningún impacto al no requerir de trámites de ninguna índole, ni de la intervención de burocracia alguna, pues bastará que cumpla con el proceso legislativo hasta su aprobación por la distinguida Asamblea que integra al Honorable Congreso del Estado.

IV. El impacto social: de ser aprobada la iniciativa que se presenta, se contribuirá al fortalecimiento del respeto a la dignidad humana, al mismo tiempo contribuye a la eliminación de todas las formas de discriminación y coadyuva al respeto de los derechos humanos de todas y de todos.

Por lo anterior, en consideración a que el Congreso del Estado es el órgano responsable desde un ámbito formal, de la creación y actualización de las leyes en el Estado de Guanajuato y ante el firme propósito de que el goce de los derechos fundamentales sea pleno, efectivo e igualitario para todas las personas, las diputadas y los diputados que integramos el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional sometemos a la consideración y aprobación de la Asamblea el siguiente:

D E C R E T O

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman las fracciones II y III y se adiciona una fracción V del artículo 503, se reforma la denominación del Capítulo Cuarto del Título Noveno y se reforman los artículos 518, 520 y 560, todos del Código Civil Para el Estado de Guanajuato, para quedar en los siguientes términos:

ARTÍCULO 503. Tienen incapacidad

I…

II. Los mayores de edad disminuidos o perturbados en su inteligencia por trastornos mentales, aunque tengan intervalos lúcidos;

III…

IV. Los ebrios consuetudinarios, y los que habitualmente hacen uso inadecuado de estupefacientes, psicotrópicos, o cualquier otra sustancia que altere la conducta y produzca dependencia;

V.- Las personas que por cualquier causa física o mental no puedan manifestar su voluntad por algún medio.

ARTÍCULO 518. El menor de edad disminuido o perturbado en su inteligencia por trastornos mentales, aunque tengan intervalos lúcidos, los sordomudos que no sepan leer ni escribir, los ebrios consuetudinarios y los que habitualmente hacen uso inadecuado de estupefacientes, psicotrópicos, o cualquier otra sustancia que altere la conducta y produzca dependencia; estarán sujeto a la tutela de menores, mientras no lleguen a la mayor edad.

…

ARTÍCULO 520. El cargo de tutor del disminuido o perturbado en su inteligencia por trastornos mentales, aunque tengan intervalos lúcidos, del sordomudo que no sepan leer ni escribir, del ebrio consuetudinario y del que habitualmente hace uso inadecuado de estupefacientes, psicotrópicos, o cualquier otra sustancia que altere la conducta y produzca dependencia, durará el tiempo que subsista la interdicción, cuando sea ejercitado por los descendientes o por los ascendientes. El cónyuge tendrá obligación de desempeñar ese cargo mientras conserve su carácter de tal. Los extraños que desempeñen la tutela de que se trata tienen derecho de que se les releve de ella a los diez años de ejercerla.

Capítulo Cuarto
De la Tutela Legítima de los disminuidos o perturbados en su inteligencia de los sordomudos, de los ebrios y de los que habitualmente hace uso inadecuado de sustancias que alteran la conducta y producen dependencia.

ARTÍCULO 560. Lo dispuesto en el artículo anterior se aplicará en cuanto fuere posible a la tutela de los disminuidos o perturbados en su inteligencia por trastornos mentales, aunque tengan intervalos lúcidos, sordomudos que no sepan leer ni escribir, los ebrios consuetudinarios y de los que habitualmente hacen uso inadecuado de estupefacientes, psicotrópicos, o cualquier otra sustancia que altere la conducta y produzca dependencia.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigencia al día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente decreto.

Guanajuato, Gto., 19 de octubre de 2017. Atentamente. Dip. Luz Elena Govea López.»

-La C. Presidenta: Se turna a la Comisión de Justicia; con fundamento en el artículo113, fracción I de nuestra Ley Orgánica; para su estudio y dictamen.

Se pide al diputado Alejandro Trejo Ávila, de la Representación Parlamentaria del Partido Nueva Alianza, dar lectura a la exposición de motivos de su iniciativa, por la que se adicionan los artículos 18-Bis y 19 bis a la Ley de Seguridad Social del Estado de Guanajuato.

PRESENTACIÓN DE LA INICIATIVA POR LA QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 18 BIS Y 19 BIS A LA LEY DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO, FORMULADA POR EL DIPUTADO ALEJANDRO TREJO ÁVILA DE LA REPRESENTACIÓN PARLAMENTARIA DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.



C. Dip. Alejandro Trejo Ávila: Muy buenos días. Con el permiso de la diputada presidenta de la mesa directiva y de la mesa directiva propia. Invitados que nos acompañan el día de hoy. Respetables

diputadas y diputados. Guanajuatenses que nos ven y nos escuchan por las diversas plataformas electrónicas. A los medios de comunicación. Amigos todos.

»DIPUTADA ANGÉLICA CASILLAS MARTÍNEZ. PRESIDENTA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO SEXAGÉSIM A TERCERA LEGISLATURA. PRESENTE.

Alejandro Trejo Ávila, con la Representación Parlamentaria del Partido Nueva Alianza, ante la Sexagésima Tercer a Legislatura del H. Congreso del Estado de Guanajuato, en ejercicio de la Facultad que me confieren los artículo s 56, fracción 11 y 63, fracción 11 de la Constitución Política del Estado de Guanajuato, y 167, fracción 11 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, y preocupado constantemente por acercar la manifestación del legislador para dar respuesta a las sentidas necesidades de uno de los sectores má s vulnerables de nuestra población, en cuanto a la posibilidad de poder mejorar las condiciones en la vejez para los futuros pensionados y jubilados, tengo a bien someter a la consideración de esta H. Asamblea Legislativa, la presente iniciativa de adición de diversos artículos a la Ley de Seguridad Social del Estado de Guanajuato", en atención a la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Foro Económico mundial [14] (WEF, por sus siglas en inglés) realizó un estudio en el que advierte los riesgos de una crisis en los sistemas de pensión es del mundo ante la creciente longevidad de los seres humanos. En México, la edad mínima para pensionarse por vejez es de 65 años, pero la esperanza de vida es de 77 años, según datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro [CONSAR].

Desde 1960 a 2015, la expectativa de vida ha aumentado de 5 a 8 años en promedio. La edad de retiro en países con los sistemas de pensiones más grandes como Estados Unidos, Australia, Reino Unido o Canadá; es de 65 años. Esto significa que los sistemas de pensión ahora tienen que pagar beneficios dos o tres veces más de lo que estaban diseñados", explica el WEF.

Con lo anterior, el presidente de la CONSAR, Carlos Ramírez, mencionó durante el Foro Panorama de Pensiones en México, que »hay que evaluar la posibilidad de incrementar la edad de retiro en la que los trabajador es pueden obtener su pensión»

Definir un ingreso adecuado para el retiro no es una tarea fácil: una suposición común es que necesitaremos menos dinero en el retiro del que usábamos cuando trabajamos. Actualmente vivimos más, por lo tanto la brecha entre lo que necesitamos y lo que hay disponible, es una verdadera crisis. Según el documento antes mencionado por el WEF, 75% de los compromisos gubernamentales para pensiones carece de fondeo, 24% del ahorro individual presenta un déficit, mientras que los compromisos pensionarios sin fondeo de las empresas es del 1%.

Podemos ignorar fácilmente el futuro, pero como puntualiza el WEF, esto hará que las personas paguen un precio masivo. De esta manera, el organismo presenta algunas soluciones al respecto para enfrentar esta crisis y comenzar a resolverla. (En el caso de Guanajuato no tenemos ninguna crisis, pero no debemos esperar a que llegue una crisis en el Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato). Uno de ellos es una exacta y puntual revisión a nivel nacional sobre la edad de retiro, y otra más, informar de manera clara a cada pilar al respecto del sistema pensiona rio, y los beneficios que esto traerá.

Considerando las soluciones de un organismo de talla mundial, esta Representación Parlamentaria del Partido

[14] Forbes Staff. Todos viviremos cada vez más… y no podremos pagarlo. Economía y Finanzas 29 de mayo 2017. Forbes México. Revisado el 17 de octubre de 2017. en: https://www.forbes.com./esto-es-lo-que-debes-saber-sobre-la-crisis-munidal-de-pensiones

Nueva Alianza, propone el siguiente proyecto de ley en el que se busca por medio de incentivos económicos extraordinarios, que los pensionados consideren el hecho de trabajar por más años. De esta manera, se podrá retrasar la edad de jubilación en el Estado y así realizar una medida preventiva para poder evitar una crisis futura en los pagos de pensiones.

Datos proporcionados a nuestra Representación Parlamentaria del Partido Nueva Alianza, desde el Instituto de Seguridad Social del Es ad o de Guanajuato (ISSEG) presentan lo siguiente:

El número de pensionados por jubilación a la fecha del 30 de Septiembre de 2017 son 9 mil 992 personas. Lo anterior genera:

Costo de nómina	$116,286,618.02
Costo de la prestación de aguinaldo, de acuerdo con el artículo 69, pagado en diciembre de 2016.	$190,361,359.10
Costo de prestación de acuerdo al artículo70, pagada en mayo de 2017.	$13,747,769.70

El número de pensionados por otros seguros a la fecha del 30 de septiembre de 2017 son 3 mil 051, que se traducen en:

Costo de nómina	$18,056,960.38
Costo de la prestación de aguinaldo, de acuerdo con el artículo 69, pagado en diciembre de 2016.	$27,339,508.20
Costo de prestación de acuerdo al artículo70, pagada en mayo de 2017.	$1'956,387.35

Por último, el número de pensionados indirectos a la fecha del 30 de septiembre de 2017 son 1 mil 964, así:

Costo de nómina	$11,975,702.44
Costo de la prestación de aguinaldo, de acuerdo con el artículo 69, pagado en diciembre de 2016.	$20,431,194.70
Costo de prestación de acuerdo al artículo70, pagada en mayo de 2017.	$1,462,668.37

Sumando todos los datos anteriores, tenemos un total de erogaciones de $298,495,550.2, sólo para el año 2017, correspondiente a un total de 15 mil 007 pensionados; es decir, que cada jubilado recibe un promedio de4 $19,890.42 anuales, lo cual no contribuye a una certeza en la calidad de vida en la vejez, debido a que esto está generando una imposible sustentación de nuestro sistema de pensiones, el cual, así como los correspondientes alrededor del mundo, es muy posible que colapse. Si seguimos por ese camino, en un futuro no tan lejano será imposible sostenerlo.

Así, esta Representación Parlamentaria del Partido Nueva Alianza, propone un modelo que a la vez permite el ahorro de la erogación contemplada en el sistema de pensiones y también que incremente el monto de la jubilación mensual de los pensionados y jubilados que hayan ingresado antes del 1° de octubre del año 2002, sin que este incremento signifique una carga financiera para los actuales trabajadores del Estado de Guanajuato, buscando su sostenibilidad y sustentabilidad futuras.

Por lo anterior, se presente el siguiente proyecto de:

DECRETO

ÚNICO. Se adicionan los artículos 18 bis y 19 bis de la Ley de Seguridad Social del Estado de Guanajuato para quedar como sigue:

Artículo 18 bis. Los asegurados que deseen gozar de la aportación voluntaria para obtener un monto adicional de jubilación y que ingresaron antes del 1° de octubre de 2002, mientras que hayan cotizado a este Instituto durante el caso de las mujeres, de 27 años 6 meses, y hombres de 29 años 6 meses, podrán solicitar la cotización adicional, sin menoscabo de lo estipulado en el artículo

anterior, lo equivalente a dos salarios mínimos mensuales con una aportación del trabajador del 20 por ciento de dicho salario, acorde a la siguiente tabla:

Periodo de cotización adicional	Salario mínimo general vigente mensual
5 años a 7 años 5 meses y 29 días	0.5
De 7 años 6 meses a menos de 10 años	1
De 10 año o más	2

Si el trabajador no cotiza adicionalmente los primeros cinco años, el Instituto le devolverá en un período no mayor de 180 días, lo correspondiente a las cotizaciones realizadas por el mismo.

Artículo 19 bis. Los poderes, organismos y ayuntamientos en su caso, aportarán al Instituto por concepto de aportación voluntaria para obtener un monto adicional de jubilación, un 30 por ciento de dichos salarios, independientemente del salario base de cotización. El 100 por ciento de las cotizaciones por este concepto, se destinará para el pago de pensión adicional para quien lo solicite, acorde a lo estipulado en el artículo 18 bis.

TRANSITORIOS

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Artículo Segundo. El consecutivo del articulado se ajustará acorde al numeral correspondiente, tomando en cuenta lo establecido en los Artículos 18 y 19 existentes a la fecha de esta iniciativa.

Artículo Tercero. Se contará con un plazo de 180 días naturales para realizar las adecuaciones reglamentarias que deriven de la presente reforma.

Lo anterior, para que se sirva dar a la misma el trámite correspondiente. Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Guanajuato, Gto., 25 de octubre de 2017. Dip. Alejandro Trejo Ávila. Representación Parlamentaria del Partido Nueva Alianza. Sexagésima Tercera Legislatura. H. Congreso del Estado de Guanajuato. »

Es cuánto diputada presidenta.

-La C. Presidenta: Muchas gracias diputado Trejo Ávila.

Se turna a la Comisión de Justicia, con fundamento en el artículo 113, fracción I de nuestra Ley Orgánica, para su estudio y dictamen.

Esta presidencia a nombre del Congreso del Estado, da la más cordial bienvenida a los alumnos del Instituto José Vasconcelos del municipio de León, Gto., invitados por la diputada Leticia Villegas Nava.

De igual manera, a los ciudadanos del municipio de Comonfort, Gto., invitados por la diputada Araceli Medina Sánchez. ¡Sean todos ustedes bienvenidos!

Se procede a dar cuenta con la iniciativa formulada por las diputadas y los diputados integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, y la diputada Presidenta del Congreso del Estado, a efecto de reformar la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, y la creación de la Ley de Seguridad Privada para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

PRESENTACIÓN DE LA INICIATIVA FORMULADA POR LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y COORDINACIÓN POLÍTICA, Y LA DIPUTADA PRESIDENTA DEL CONGRESO DEL ESTADO, A EFECTO DE REFORMAR LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO, Y LA CREACIÓN DE LA LEY DE SEGURIDAD PRIVADA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

»DIP. ANGÉLICA CASILLAS MARTÍNEZ. PRESIDENTA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE

GUANAJUATO. SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA. PRESENTE

Quienes suscribimos diputadas Beatriz Manrique Guevara, María Alejandra Torres Novoa y diputados Éctor Jaime Ramírez Barba, Rigoberto Paredes Villagómez, Alejandro Trejo Ávila, Eduardo Ramírez Granja, integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política y la diputada Angélica Casillas Martínez, Presidenta del H. Congreso del Estado, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 56, fracción II de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; y en el artículo 167, fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, nos permitimos someter a la consideración de esta Asamblea, la presente **iniciativa de reformas a la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, y la creación de la Ley de Seguridad Privada para el Estado y los Municipios de Guanajuato,** de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La policía es el componente más visible del sistema de seguridad pública y la prestación de su servicio es indispensable para garantizar la libertad de las personas, así como la paz y tranquilidad en sus comunidades.

De acuerdo con el estudio de ***"seguridad pública y prestación de servicios policiales"*** de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, "la policía con base en la comunidad, ha demostrado ser una estrategia eficaz y productiva de la actividad policial a nivel local. Emplea las estructuras comunitarias y, en colaboración con ellas, detecta los problemas delictivos y de perturbación del orden que afectan al vecindario local y responde para resolverlos. Esta estrategia exige adaptar las estructuras policiales haciéndolas más receptivas a las consultas e inclusivas de lo que serían en otras circunstancias."

Es indispensable la presencia policial en los diferentes lugares de las zonas urbanas y suburbanas de cada municipio de nuestro Estado. Actualmente, la cobertura policial es un problema que padecen los municipios, supliendo dicha carencia, los elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, a través de los esquemas de coordinación y colaboración.

Para lograr dichos objetivos es indispensable que las policías preventivas se organicen y operen en óptimas condiciones para generar y desarrollar una articulación y cumplir con un verdadero sistema de coordinación en materia de seguridad pública, y no quedar en inferioridad de condiciones, garantizando la seguridad y tranquilidad de la población, como lo señala expresamente el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sin embargo, las actuales condiciones en las que se encuentran las diferentes corporaciones policiales en el Estado, nos obliga a reflexionar sobre el desarrollo de las actividades y funciones que desempeñan cotidianamente, pero sobre todo si están cumpliendo de manera eficiente cada una de ellas, tales como mantener la tranquilidad y el orden públicos en la sociedad; proteger y respetar los derechos y libertades fundamentales de la persona; prevenir y combatir la delincuencia; detectar los delitos; proporcionar asistencia y prestar servicios al público, entre otras.

Los cuarenta y seis municipios del Estado, tienen condiciones muy diferentes de su situación en materia de seguridad, así como de la composición y organización de sus corporaciones de seguridad pública. Por ello, algunos municipios del Estado asumen diferentes estrategias para disminuir los índices delictivos o inhibiendo la comisión de los diferentes delitos, tales como, esquemas de prevención y mayor presencia policial en el territorio, hasta operativos conjuntos con autoridades estatales y federales.

En consecuencia, uno de los problemas que afrontan los municipios actualmente es el déficit de los elementos de seguridad pública para cubrir cada uno de los espacios físicos del territorio. Un número elevado de los policías preventivos se encuentran comisionados a la prestación de servicios ordinarios y extraordinarios para particulares.

Lo anterior, propicia que no se esté inhibiendo la comisión de delitos o

previniendo su comisión. Provocando con ello, un aumento considerable en los índices delictivos.

De acuerdo a los datos estadísticos de diciembre de 2016, prácticamente 6 de cada 10 mexicanos consideraron que la policía no ha mejorado en su eficiencia, en su entrenamiento, ni en contar con los recursos necesarios para trabajar, indicador por arriba de la evaluación regional en la materia (49.1%). La tendencia es similar en cuanto a la adopción de valores democráticos como el respeto a los derechos humanos.[15]

Por lo que se refiere a la percepción de inseguridad por entidad federativa, municipio y colonia, del año 2011 al 2016 la percepción de inseguridad en el municipio pasó de 60.3% a 65.1% (incremento de 4.8 puntos porcentuales), mientras que para la colonia las cifras pasaron de 39.5% a 45.4% en el mismo periodo (aumento de 5.9 puntos porcentuales). A nivel estatal la percepción de inseguridad ha tenido los valores más altos en todos los años de la encuesta y también se aprecia un incremento para el periodo señalado (de 69.5% a 72.4%).[16]

En los últimos seis años se ha incrementado el gasto que los hogares destinan a medidas de seguridad para prevenir el delito. Mientras que en 2011 el indicador mostró un gasto de 60.3 mil millones de pesos, para el año 2016 esta cifra se elevó a 77.9 mil millones de pesos, un incremento de 17.6 mil millones de pesos. La ciudadanía declaró que el gasto consistió en cambiar o colocar cerraduras y candados, cambiar puertas y ventanas, colocar rejas o bardas o comprar un perro guardián, entre las más frecuentes.[17]

De acuerdo con la información del decimoquinto levantamiento de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) realizada por el INEGI, se encontró que, en marzo de 2017, el 80.2% de la población de 18 años y más manifestó sentirse insegura en los cajeros automáticos localizados en la vía pública, 73.4% en el transporte público, 66% en el banco y 65.1% en las calles que habitualmente utiliza.

I. LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO

Por lo anterior, resulta necesario e impostergable cambiar los mecanismos de la prestación del servicio de seguridad pública, en las modalidades del servicio ordinario y extraordinario a favor de los particulares, con la finalidad de enfocar la actividad de seguridad de todos los policías preventivos a la operatividad de su función pública en cada uno de los municipios del Estado de Guanajuato.

Ahora bien, es pertinente clarificar que el servicio ordinario de los policías preventivos a favor de particulares, es aquella labor que desempeña un efectivo policial, de manera permanente, continua y en horario de servicio, en una entidad privada que lo haya contratado previamente y para el cual haya sido designado, dentro de las normas que se reglamenten al respecto, con fines lícitos y dirigido a brindar el servicio de seguridad específicamente en todas las gamas de la función como tal.

En esta prestación del servicio ordinario de los policías preventivos a favor de los particulares encontramos infinidad de ejemplos, tales como la vigilancia en tiendas departamentales, casa de empeño, oficinas, entre otras.

Por lo que se refiere al servicio extraordinario de los policías preventivos, es aquella labor que desempeña un efectivo policial, fuera de su horario de servicio, en una entidad pública o privada que lo haya contratado previamente y para el cual haya sido designado, dentro de las normas que se reglamenten al respecto, con fines lícitos y dirigido a brindar el servicio de seguridad específicamente en todas las gamas de la función como tal.

En este supuesto es común encontrar que los policías preventivos son contratados para vigilar fiestas particulares, eventos privados, actividades sociales, en todas sus modalidades, así como cuidar de algún funcionario municipal o hacer alguna tarea de carácter doméstica.

[15] Fuente: Elaboración con base en Latinobarómetro, Corporación Latinobarómetro, 2015.
[16] Fuente: Elaboración con base en la ENVIPE, INEGI, Serie temporal 2011-2016.
[17] Fuente: Elaboración con base en la ENVIPE, INEGI, Serie temporal 2011-2016.

Por lo anterior, se propone en la presente iniciativa la adición del artículo 200-1 para regular la prestación del servicio de los policías preventivos con motivo de actividades privadas o de índole particular, pero sin descuidar el objetivo de mantener y guardar el orden, así como la tranquilidad y paz en la sociedad. Por ello, se establece, que, tratándose los servicios ordinarios y extraordinarios que se presten con motivo de actividades privadas o de índole particular, en materia de seguridad pública, serán proporcionados por los prestadores de servicios de seguridad privada y de similar naturaleza que operen o se instalen legalmente en el Estado, con la excepción señalada en el artículo 200-2 de esta Ley.

Es importante resaltar que la seguridad privada es uno de los mecanismos que contempla la Ley del Sistema de Seguridad Pública, la cual, prestan los particulares de conformidad con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública en las que sean complementarias y subordinadas a la Seguridad Pública, en los términos establecidos en esta Ley y el reglamento respectivo.

Ahora bien, los requerimientos masivos de la población en materia de seguridad pública no pueden quedar descuidados o puestos a un lado, por ello también, se prevé con la adición del artículo 200-2, que tratándose del servicio extraordinario que se presta por elementos de policía preventiva, sólo podrá prestarse con motivo de la realización de eventos públicos masivos.

En consecuencia, con la presente iniciativa se busca mayor presencia policial en los diferentes espacios físicos de cada uno de los municipios del Estado, con la finalidad de prevenir e inhibir la comisión de ilícitos.

II. LEY DE SEGURIDAD PRIVADA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO

En nuestro país, en el año 2015 se contaban con 3,990 empresas de seguridad privada, de las cuales 47 fueron sancionadas[18] por incumplir con lo dispuesto en la ley. Aunado a lo anterior, en nuestro Estado, en el presente año existe un registro de 145 empresas, en sus diferentes modalidades.

De conformidad con la encuesta en materia de seguridad pública realizada en julio del 2016, resulta impactante señalar que la percepción de la ciudadanía es negativa, al mencionar que la seguridad sigue igual o ha empeorado, que se sienten igual o más inseguros estando un elemento de la policía presente, y manifestando el público encuestado que se sentían más seguros al contar con la presencia de elementos de seguridad privada.

Por tal motivo, resulta importante señalar, que las empresas de seguridad privada, por ser parte fundamental para la seguridad en nuestro Estado, aún siguen teniendo áreas de oportunidad para mejorar la prestación del servicio en el Estado y los municipios.

La presente iniciativa de creación de la Ley de Seguridad Privada para el Estado y los Municipios de Guanajuato, tiene su fundamento en las facultades reservadas por las entidades federativas, conforme a lo dispuesto en el artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La presente iniciativa se estructura en 9 capítulos, destacando los siguientes aspectos:

Capítulo I. Disposiciones Generales. Se establece el objeto de la Ley, así como las bases de la regulación en la prestación del servicio de seguridad privada en el Estado de Guanajuato.

Así mismo se mencionan las finalidades que persigue con la creación de esta Ley las cuales comprende:

- Bases y criterios de la prestación de los servicios de seguridad privada;
- El fortalecimiento de la seguridad pública mediante la

[18] http://siesp.ssp.gob.mx/sancionadas/sancionadas.html

coordinación de la Secretaría de Seguridad Publica con las empresas de seguridad privada;

- Acciones para verificar vigilar y supervisar evitando en todo momento la prestación irregular de los servicios de seguridad privada;
- Suscripción de convenios con autoridades federales y municipales para la mejor organización y el adecuado funcionamiento de los servicios de seguridad privada, y
- La profesionalización de las empresas de seguridad privada.

También es importante señalar, que se establecen los conceptos, principios y la supletoriedad con las autoridades correspondientes.

Capítulo II. Autoridades competentes y sus atribuciones. Se contemplan las atribuciones del titular del Ejecutivo del Estado, de la Secretaría de Seguridad Pública y de los Ayuntamiento.

El titular Ejecutivo de Estado, dirigirá y elaborará la política en materia de seguridad privada, la expedición de las disposiciones reglamentarias, el autorizar el establecimiento y funcionamiento de las empresas y personas físico-jurídicas que presten sus servicios en el Estado y la suscripción de convenios de convenios con el Estado y la federación.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública, autorizará la prestación de los servicios de seguridad privada; emitirá las constancias de revalidación; determinará las sanciones a los prestadores de servicios de seguridad privada; verificará que las empresas brinden las capacitaciones al personal operativo; atender las quejas y denuncias que se den en contra de las empresas de seguridad privada.

Los ayuntamientos otorgarán las conformidades con la modalidad requerida; ordenar la práctica de visitas de inspección y verificación de las empresas de seguridad privada; establecimiento de convenios con las empresas para crear vínculos de comunicación, y el colaborar con las academias formadoras de elementos de seguridad pública para la capacitación del personal operativo de las empresas de seguridad privada.

Capítulo III. Modalidades de los servicios de Seguridad Privada. Se desarrollan las diferentes modalidades, donde los prestadores de servicios podrán ofertar; se establece los requisitos mínimos que los ayuntamientos deberán solicitar a los requirentes para obtener su conformidad, estableciendo la presentación de capacitación anual, mismo que es un requisito indispensable para el óptimo funcionamiento de estas empresas.

Se mencionan las obligaciones que tendrán las empresas o personas jurídicas colectivas que pretendan prestar sus servicios en el Estado, mencionado en el articulado, las capacitaciones que tendrán que llevar a cabo antes de prestar el servicio, así como aquellas capacitaciones que deberán ofertar en la operación y funcionamiento de sus servicios.

Capítulo IV. Registro Estatal de empresas, personal y equipo. Se establece la operación y funcionamiento del registro estatal, el cual será operado, implementado y actualizado, contando con la información del personal, armamento y equipo para la supervisión, control, vigilancia y evaluación de los prestadores de servicios.

Capítulo V. Autorización, Revalidación y Modificación. Se establece la vigencia que tendrán las autorizaciones, así como las conformidades y los requisitos que deberán presentar los prestadores de servicios.

Capítulo VI. Requisitos para Prestar Servicios de Seguridad Privada. Se establecen de manera expresa los requisitos que tiene que entregar el prestador de servicios de seguridad privada, con la finalidad de obtener la autorización correspondiente.

Capítulo VII. Visitas de verificación. Se establece el objeto que tiene la práctica de inspecciones en los establecimientos donde se

encuentren instaladas las empresas de seguridad privada, con la finalidad de comprobar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, así como las medidas de seguridad y sanciones que realizaran la Secretaria de Seguridad Pública y los municipios.

Capítulo VIII. Medidas de Seguridad y Sanciones. Con la finalidad de salvaguardar a las personas, sus bienes, entorno, así como para proteger la salud y seguridad pública, se contemplan las medidas de seguridad que podrán adoptar la Secretaría de Seguridad Pública y los municipios, como la suspensión temporal, parcial o total de las actividades de prestación de servicios de seguridad privada, así como las sanciones correspondientes.

Capítulo IX. Recurso de Inconformidad. Se establece el recurso de inconformidad, como medio de defensa por parte de las empresas o personas jurídicas colectivas que se sientan violentadas en su esfera jurídica.

Finalmente, a efecto de satisfacer lo establecido por el artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, relativo a la evaluación del impacto jurídico, administrativo, presupuestario y social, se manifiesta que —como se ha expuesto hasta aquí en las consideraciones de la exposición de motivos—, por lo que hace a: ***a) impacto jurídico***, este se traducirá en la adición de los artículos 200-1 y 200-2, y la derogación de los artículos 1, fracción IV; 13, fracción VI; 16, fracción VI; y, los comprendidos del 177 al 188 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, además de atender lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; ***b) impacto administrativo***, se traduce en una reorganización operativa de las policías preventivas, con la finalidad de tener mayor presencia policial en los municipios del Estado, y por ende, de una mayor participación de los elementos de las empresas de seguridad privada en el quehacer de la seguridad pública; ***c) impacto presupuestario***, no existe, pues no se requiere de la creación de plazas o áreas administrativas; y ***d) social***, habrá un beneficio a toda la población al contar con mayor presencia policial en las áreas urbanas y suburbanas de cada municipio del Estado, además de que se podrá garantizar y mantener la paz y tranquilidad de la sociedad. Asimismo, se dotará a las empresas de seguridad privada de la profesionalización de sus servicios, prevaleciendo en todo momento mayor seguridad para los guanajuatenses.

Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a consideración de esta Soberanía el siguiente:

DECRETO

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforma el Título Undécimo denominado "Seguridad Privada y Bomberos"; **se adicionan** los artículos 200-1 y 200-2; y, **se derogan** los artículos 1, fracción IV; 13, fracción VI; 16, fracción VI; y, el capítulo I denominado "Prestación del Servicio de Seguridad Privada" comprendiendo los artículos del 177 al 188; todos de la **Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato**, para quedar en los siguientes términos:

"Objeto

Artículo 1. La presente Ley...

I. a III. .....

IV. **Se deroga.**

Lo anterior de conformidad con...

Atribuciones del Gobernador del Estado

Artículo 13. Son atribuciones del Gobernador...

I a V....

VI. Se deroga;

VII. al XI...

Atribuciones del Ayuntamiento

Artículo 16. Son atribuciones...

I. a V...

VI. Se deroga.

VII...

Título Undécimo
Bomberos

Capítulo I
Prestación del Servicio de Seguridad Privada
Se deroga

Artículo 177. Se deroga.

Artículo 178. Se deroga.

Artículo 179. Se deroga.

Artículo 180. Se deroga.

Artículo 181. Se deroga.

Artículo 182. Se deroga.

Artículo 183. Se deroga.

Artículo 184. Se deroga.

Artículo 185. Se deroga.

Artículo 186. Se deroga.

Artículo 187. Se deroga.

Artículo 188. Se deroga.

Servicios ordinarios y extraordinarios

Artículo 200-1. Los servicios ordinarios y extraordinarios que se presten con motivo de actividades privadas o de índole particular, serán proporcionados por los prestadores de servicios de seguridad privada y de similar naturaleza que operen o se instalen legalmente en el Estado, con la excepción señalada en el artículo 200-2 de esta Ley.

Eventos públicos masivos

Artículo 200-2. Tratándose del servicio extraordinario que se presta por elementos de policía preventiva, sólo podrá prestarse con motivo de la realización de eventos públicos masivos."

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Inicio de la vigencia

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el primero de enero de 2018, previa publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato.

Ajustes de reglamentos

SEGUNDO. El titular del Poder Ejecutivo y los ayuntamientos realizarán los ajustes necesarios a los reglamentos respectivos para dar cumplimiento al presente Decreto, en un plazo no mayor de seis meses, contado a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

Asuntos en trámite

TERCERO. Los asuntos que se encuentran en trámite o en proceso a la entrada en vigor del presente decreto, continuarán tramitándose, en los términos previos a la reforma de la ley.

ARTÍCULO SEGUNDO. Se expide la Ley de Seguridad Privada para el Estado y los Municipios de Guanajuato, para quedar en los siguientes términos:

"LEY DE SEGURIDAD PRIVADA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Objeto de la Ley

Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés general y tiene por objeto establecer las bases de la regulación en la prestación del servicio de seguridad privada en todas sus modalidades en el estado de Guanajuato y sus municipios.

Finalidades de la Ley

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley, tiene las finalidades siguientes:

I. Establecer las bases y criterios para la prestación de los servicios seguridad privada en el estado y sus municipios;

II. El fortalecimiento de la seguridad pública del estado, bajo un esquema de coordinación de la Secretaría con las empresas de seguridad privada, para lograr mejores

condiciones de seguridad para los particulares que así lo convengan;

III. Contar con un registro estatal de los prestadores de servicios de seguridad privada;

IV. Establecer acciones para verificar, vigilar y supervisar evitando con ello la prestación irregular de los servicios de seguridad privada;

V. Establecer las políticas, lineamientos y acciones, mediante la suscripción de convenios con las autoridades competentes de la Federación y los Municipios, para la mejor organización, el adecuado funcionamiento, la regulación y el control de los servicios de seguridad privada, y

VI. Profesionalización de las empresas de seguridad privada.

Principios Rectores

Artículo 3. La prestación de los servicios de seguridad privada en los municipios y el Estado, se rige de acuerdo a los principios de certeza, eficacia, profesionalismo, transparencia y respeto a los derechos humanos.

Glosario

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley, se entiende por:

I. Autorización: el acto administrativo por el que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a través de la Unidad de Asuntos Internos y procedimientos de la Secretaría permite a una persona física o moral prestar servicios de seguridad privada en el territorio del Estado;

II. Conformidad Municipal: el acto administrativo por medio del cual el Ayuntamiento otorga a la persona física o jurídico colectiva, la aprobación para la prestación del servicio de Seguridad Privada en el Municipio;

III. Ley: la Ley de Seguridad Privada para el Estado y los Municipios de Guanajuato;

IV. Modificación: el acto administrativo por el que se amplían o restringen las modalidades otorgadas en la autorización o su revalidación;

V. Secretaría: la Secretaría de Seguridad Pública del Estado;

VI. Seguridad Privada: la actividad a cargo de los particulares, cuyo objeto es regular la prestación de los servicios de seguridad privada en materia de protección, vigilancia, custodia de personas, información, bienes inmuebles, muebles o valores, incluidos su traslado, instalación, operación de sistemas y equipos de seguridad; aportar datos para la investigación de delitos y apoyar en caso de siniestros o desastres, en su carácter de auxiliares a la función de Seguridad Pública;

VII. Reglamento: el Reglamento de la presente Ley, y

VIII. Revalidación: el acto administrativo por el que se ratifica la validez de la autorización.

Prestación del Servicio

Artículo 5. En el Estado y los Municipios de Guanajuato solo se pueden prestar los servicios de seguridad privada cuando se cuente con la autorización vigente en los términos de la presente Ley.

Supletoriedad

Artículo 6. Además de las disposiciones previstas en la presente Ley y su reglamento, los prestadores de servicios deben apegarse a las disposiciones previstas en la legislación federal cuando por su modalidad así lo determine.

Capítulo II
Autoridades competentes y sus atribuciones

Autoridades competentes

Artículo 7. El titular del poder ejecutivo, la Secretaria de Seguridad Pública, y los Ayuntamientos ejercerán sus atribuciones en materia de seguridad privada de conformidad con la distribución de competencias previstas en esta Ley y en otros ordenamientos legales aplicables.

Concurrencia

Artículo 8. Las atribuciones que establece esta Ley deben ser ejercidas de manera coordinada por las autoridades del Estado de Guanajuato y los municipios en el ámbito de sus competencias.

Atribuciones del ejecutivo del Estado

Artículo 9. El titular del Poder Ejecutivo tendrá las siguientes atribuciones:

I. Dirigir y elaborar la política estatal en materia de seguridad privada;

II. Expedir en el ámbito de sus competencias las disposiciones reglamentarias de la presente Ley, así como aquellas especificaciones que establezca la Ley federal en la materia;

III. Autorizar el establecimiento y funcionamiento de las empresas de seguridad privada en el estado de Guanajuato;

IV. Suscribir convenios de coordinación con la federación y con los municipios, tendientes a fortalecer la regulación y control, y

V. Las demás que se establezcan en el reglamento de esta ley y en otros ordenamientos jurídicos que resulten aplicables.

Atribuciones de la Secretaría

Artículo 10. La Secretaría tiene las atribuciones siguientes:

I. Autorizar la prestación del servicio de seguridad privada a las empresas que cumplan con requisitos establecidos en esta Ley y su reglamento;

II. Emitir las constancias de revalidación o en su caso de modificación, así como suspender o revocar la autorización para prestar el servicio de seguridad privada;

III. Determinar e imponer las sanciones a los prestadores de servicios de seguridad privada que incumplan con lo dispuesto en esta Ley y en su reglamento;

IV. Consolidar la operación y funcionamiento del registro Estatal de prestadores de servicios de Seguridad Privada;

V. Verificar que en las empresas de seguridad privada se brinden las capacitaciones debidas al personal operativo;

VI. Suscribir convenios con los ayuntamientos a través de la transmisión de atribuciones para el establecimiento de sanciones por el incumplimiento de lo establecido en esta Ley y su reglamento;

VII. Vigilar y verificar las acciones de los prestadores de servicios en materia de seguridad privada; sus sistemas operativos, programas de selección, formación, capacitación y adiestramiento del personal conforme a la modalidad solicitada;

VIII. Atender las quejas y denuncias por presuntas infracciones a esta Ley, en contra de los prestadores de servicios;

IX. Evaluar el nivel de capacitación y profesionalización de las empresas que presten sus servicios en el Estado y sus municipios, emitiendo las observaciones correspondientes para ser atendidas y solventadas, y

X. Las demás que señale la presente Ley y demás disposiciones reglamentarias aplicables.

Atribuciones de los Ayuntamientos

Artículo 11. Los Ayuntamientos tendrán las atribuciones siguientes:

I. Otorgar la conformidad conforme a la modalidad solicitada para el establecimiento y funcionamiento de las empresas de seguridad privada;

II. Suscribir convenios de coordinación con el Estado para la imposición de sanciones a empresas que no cumplan con los dispuesto en esta Ley y demás disposiciones legales aplicables;

III. Ordenar la práctica de visitas de inspección y verificación de las empresas de seguridad privada con el objeto de dar cumplimiento a esta Ley y demás disposiciones legales;

IV. Incorporar un registro de empresas de seguridad privada que presten sus servicios dentro de sus municipios;

V. Establecer convenios con las empresas de seguridad privada para la creación de vínculos de comunicación;

VI. Colaborar con las academias formadoras y capacitadoras de elementos de seguridad pública, para la formación, desarrollo y cursos de capacitación para el personal operativo de los prestadores de servicios de seguridad privada, y

VII. Las demás que señale la presente Ley y demás disposiciones legales aplicables.

Capítulo III
Modalidades de los servicios de Seguridad Privada

Modalidades

Artículo 12. Los servicios de seguridad privada podrán prestarse de acuerdo a las siguientes modalidades:

I. Protección y vigilancia de bienes:

a. Cuidado y protección de bienes muebles e inmuebles, exceptuando los descritos en otras modalidades, y

b. Vigilancia de fraccionamientos, conjuntos habitacionales o en construcción;

II. Protección y vigilancia de personas:

a. Cuidado y protección, custodia, salvaguarda, defensa de la vida y de la integridad corporal del prestatario, y

b. Investigación cuyo propósito sea proporcionar informes sobre los antecedentes, solvencia, localización o actividades de personas, la cual se podrá hacer a través de la aplicación de pruebas de transparencia y confiabilidad, así como de aquellas que utilizan el polígrafo;

III. Transporte, custodia y protección de fondos y valores:

a. De bienes muebles y valores, incluyendo su traslado, para lo cual deberán utilizarse vehículos blindados, armas de fuego y cartuchos que en su caso haya autorizado la Secretaría de la Defensa Nacional, y

b. Demás objetos que por su valor económico generen expectativas, o por su peligrosidad puedan requerir de mayor protección;

IV. Servicio de blindaje de bienes muebles e inmuebles: Fabricación, instalación, venta y arrendamiento de blindaje;

V. Servicios de sistemas de alarmas a establecimientos públicos, industriales, comerciales y casas habitación, y

VI. Actividades similares o conexas a las especificadas en las fracciones anteriores, previo estudio y aprobación de la Unidad de Asuntos Internos y procedimientos de la Secretaría.

Requisitos

Artículo 13. Los ayuntamientos para la emisión de la conformidad para la operación y establecimiento de las empresas de seguridad privada en sus diferentes modalidades deberán solicitar a las empresas que presten los servicios de seguridad privada por lo menos los siguientes requisitos:

I. Constancias de situación fiscal de los empresas o personas físico jurídicas;

II. Contar con el programa de capacitación anual;

III. Carta de no antecedentes penales del personal en general que prestara sus servicios;

IV. Inventario detallado de uniformes, mobiliario, equipo de comunicaciones;

V. Manual operativo de conformidad con la modalidad solicitada, y

VI. Las demás que se establezcan en sus disposiciones legales aplicables.

Dichos requisitos deberán ser atendidos de forma completa e integra por parte de los prestadores de servicios.

Obligaciones

Artículo 14. Los prestadores de servicios de seguridad privada una vez que

obtengan la autorización correspondiente, deberán cumplir con las siguientes obligaciones:

I. Ser auxiliar en materia de seguridad pública;

II. Dar aviso por escrito de las modificaciones que se realicen en su acta constitutiva en un plazo no mayor a treinta días naturales;

III. Avisar por escrito de cualquier cambio de accionistas o socios en un plazo no mayor a treinta días naturales;

IV. Presentar en los primeros cinco días hábiles del mes, las altas y bajas mensuales del personal a su cargo, y la relación actualizada del mismo;

V. Las bajas que se dieran por motivo por la comisión de probables delitos, el aviso será de inmediato sin perjuicio de las acciones legales que el prestador deba realizar;

VI. Comunicar semestralmente, las altas y bajas del equipo y material que se utilice en la prestación del servicio, proporcionando las principales características del mismo;

VII. Comunicar por escrito cualquier modificación a los permisos, autorizaciones o licencias, que en su caso hayan expedido las autoridades competentes, respecto del registro de portación de armas, traslado de fondos y valores, uso de frecuencia en equipos de radiocomunicación y adiestramiento, así como cambios de domicilio;

VIII. Comunicar cualquier suspensión de labores, así como la disolución o liquidación de la empresa, en su caso, anexando los avisos dados a las autoridades fiscales y laborales, según el caso lo amerite;

IX. Colaborar con su personal de mando y operativo, así como con el equipo que presta, en la ejecución de acciones encaminadas a auxiliar a la población en caso de desastres, emergencias y riesgos o siniestros que le encomienden las autoridades competentes;

X. Colocar en un lugar visible de las oficinas e instalaciones principales del prestador de servicios, la constancia de la autorización que le haya sido otorgada, debiendo además señalar el número de autorización en toda documentación dirigida a los usuarios del servicio;

XI. Conducirse en todo momento, con profesionalismo, honestidad y respeto hacia los derechos de las personas, evitando abusos, arbitrariedades y violencia, además de regirse por los principios de actuación y deberes previstos para los integrantes de las instituciones de seguridad pública en la Ley;

XII. Proporcionar a la secretaría toda información de que dispongan sobre delincuencia;

XIII. Abstenerse de contratar a personal que haya formado parte de alguna institución de seguridad pública, que hubiese sido dado de baja por alguno de los siguientes motivos:

a) Por poner en peligro a las personas a causa de negligencia, imprudencia o abandono del servicio;

b) Por no aprobar en los exámenes de control y confianza;

c) Por presentar documentación apócrifa, y

d) Por haber sido sentenciado por cualquier delito doloso;

XIV. Solicitar la consulta previa de los antecedentes policiales y la inscripción del personal operativo en el registro Estatal de personal de Seguridad Pública, así como la inscripción del equipo y armamento correspondiente;

XV. Llevar a cabo evaluaciones de control y confianza a al personal operativo, administrativo y directivo;

XVI. Capacitar debidamente a toda persona que sea incorporada como personal operativo, previamente a la realización de funciones de la modalidad;

XVII. Capacitar de forma permanente al personal operativo en base su programa de capacitación;

XVIII. Permitir y facilitar las visitas de inspección que realice el personal de la secretaría o los municipios o en su caso, de la Procuraduría General de Justicia del Estado, para verificar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley, así como entregar la información que le sea solicitada:

XIX. Los vehículos que sean utilizados deberán ser identificados con la denominación, logotipo y número de registro además de las especificaciones que determine el reglamento;

XX. El personal operativo de las empresas de seguridad privada deberá únicamente utilizar el uniforme, armamento y equipo en los lugares y horarios de prestación de servicio;

XXI. Aplicar los manuales de operación y realizar evaluaciones a su personal operativo conforme a la modalidad correspondiente;

XXII. Asignar a los servicios conforme a la modalidad correspondiente al personal operativo que se encuentre debidamente capacitado y apruebe las evoluciones practicadas;

XXIII. Entregar a la secretaría un reporte bimestral detallado de actividades, y

XXIV. Las demás que mencione la presente Ley demás disposiciones reglamentarias.

Capacitación

Artículo 15. Los prestadores de servicios estarán obligados a capacitar a su personal operativo. Dicha capacitación podrá llevarse a cabo en las Academias de formación policial del estado o municipios o en centros de capacitación privados, los cuales deberán ser autorizados y revalidados anualmente por la Secretaría. El Reglamento establecerá los tiempos, formas y plazos para ello.

La capacitación que se imparta será acorde a las modalidades en que se autorice el servicio, y tendrá como fin que los elementos se conduzcan bajo los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez.

Celebración de acuerdos

Artículo 16. La Secretaría podrá celebrar acuerdos con los prestadores de servicios para la instrumentación y modificación a sus planes y programas de capacitación y adiestramiento.

Registro de planes y programas

Artículo 17. El prestador de servicios deberá registrar ante la Secretaría los planes y programas de los cursos de capacitación, actualización o adiestramiento para el personal operativo.

Celebración de convenios

Artículo 18. La Secretaría celebrara convenios con las empresas de seguridad privada para incentivar a los elementos operativos que desempeñen sus actividades de forma eficaz y cumplan con lo establecido con la presente Ley y su Reglamento, para que formen parte de la Secretaría siempre y cuando apruebe con los requisitos solicitados.

Funcionamiento del servicio de seguridad privada

Artículo 19. Los prestadores de servicios de seguridad privada son auxiliares a la función de seguridad pública; su personal deberá coadyuvar con las autoridades y las instituciones de seguridad pública cuando así se les requiera.

La autorización obtenida para funcionar como prestador de servicios de seguridad privada, no faculta para realizar investigaciones, intervenir o interferir en asuntos que sean competencia del Ministerio Público o instituciones de seguridad pública, aún en los lugares o áreas de trabajo del personal operativo, en caso de que sucedan hechos que ameriten la intervención de la autoridad, la función de dicho personal operativo cesará en cuanto hagan acto de presencia los Agentes del Ministerio Público o instituciones policiales.

Restricciones para la prestación del servicio de seguridad privada

Artículo 20. No se podrá prestar el servicio de seguridad privada sin el registro y la autorización correspondiente; las personas físicas o morales que sin haberlos obtenido

proporcionen el servicio en cualquiera de sus modalidades serán sancionadas en los términos previstos en esta Ley y su Reglamento, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal que pudiere resultar.

Los prestadores de servicios con autorización federal antes de ejercer sus actividades en el Estado deberán dar aviso a la Secretaría para efectuar el registro correspondiente.

Capítulo IV
Registro Estatal de empresas, personal y equipo

Implementación y actualización del Registro Estatal

Artículo 21. La Secretaría, implementará y mantendrá actualizado un Registro Estatal con la información necesaria para la supervisión, control, vigilancia y evaluación de los prestadores de servicios, su personal, armamento y equipo, mismo que constituirá un sistema de consulta y acopio de información integrado por una base de datos suministrado por el prestador de servicios y las autoridades competentes.

Responsabilidad de la información

Artículo 22. La Secretaría será responsable de la guarda, custodia y reserva de la información inscrita en el Registro Estatal de Empresas, Personal y Equipo de Seguridad Privada, de acuerdo con las disposiciones legales establecidas en la presente Ley.

La información contenida en dicho Registro se considerará como confidencial para los fines de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato.

Expedición de constancia

Artículo 23. De toda información, registro, folio o certificación que proporcione el Registro, deberá expedirse constancia por escrito debidamente firmada por el servidor público competente.

Apartados del Registro

Artículo 24. El Registro deberá contemplar los apartados siguientes:

I. La identificación de la autorización, revalidación o modificación de la autorización para prestar los servicios, o del trámite administrativo que se haya negado, suspendido o cancelado por parte de la Unidad de Asuntos Internos y procedimientos de la Secretaría;

II. Los resultados obtenidos de las evaluaciones de control y confianza practicadas;

III. Los datos generales del prestador de servicio;

IV. Domicilio del prestador del servicio;

V. Las modalidades del servicio;

VI. Representantes legales;

VII. Las modificaciones de las actas constitutivas o cambios de representante legal;

VIII. Los datos del personal directivo y administrativo;

IX. La identificación del personal operativo, debiendo incluir sus huellas digitales, fotografía, escolaridad y antecedentes laborales, así como su trayectoria en los servicios de seguridad privada y pública según el caso; altas, bajas, cambios de actividad o rango, incluidas las razones que los motivaron; equipo y armamento asignado; sanciones administrativas o penales aplicadas; referencias personales; capacitación; resultados de evaluaciones y demás información para el adecuado control, vigilancia, supervisión y evaluación de dicho personal;

X. Los vehículos que tuvieren asignados, anotándose el número de matrícula, las placas de circulación, la marca, modelo, tipo, número de serie y de motor;

XI. Las armas y municiones que les hayan sido autorizadas, aportando el número de registro, marca, modelo, calibre, matrícula y demás elementos de identificación, y

XII. Los demás actos y constancias que prevean esta Ley y su Reglamento.

Cuando al personal directivo, administrativo u operativo se le dicte cualquier auto de procesamiento, sentencia

condenatoria o absolutoria, la autoridad que conozca del caso respectivo lo notificará de inmediato al Registro.

Proporcionar información

Artículo 25. Para efectos del Registro, el prestador de servicios, estará obligado a informar, dentro de los primeros 10 días naturales de cada mes, sobre la situación y actualizaciones relativas a cada uno de los rubros contemplados en el artículo que antecede.

Información pública

Artículo 26. El Registro proporcionará información de acuerdo con lo establecido en la legislación aplicable en materia de acceso a la información pública o a petición de autoridad competente.

Capítulo V
Autorización, Revalidación y Modificación

Contenido de la autorización

Artículo 27. La autorización que se otorgue será personal e intransferible, contendrá el número de la misma, modalidad o modalidades que se autorizan y condiciones a que se sujeta la prestación de los servicios.

La vigencia será de un año y podrá ser revalidada por el mismo tiempo en los términos establecidos en esta Ley y sus disposiciones reglamentarias.

Subsane omisiones o deficiencias

Artículo 28. Si el peticionario de la autorización no exhibe con su solicitud la totalidad de los requisitos señalados en esta Ley y en sus disposiciones reglamentarias, la Secretaría dentro de los diez días hábiles siguientes a la presentación de la misma, lo prevendrá para que en un plazo improrrogable de veinte días hábiles, subsane las omisiones o deficiencias que en su caso presente la solicitud; transcurrido dicho plazo sin que el interesado haya subsanado las omisiones o deficiencias de la solicitud, ésta será desechada.

Revalidación de la autorización

Artículo 29. Para revalidar la autorización otorgada, el prestador de servicios, cuando menos con veinte días hábiles de anticipación a la extinción de la vigencia de la autorización, deberá presentar la solicitud correspondiente, presentar la conformidad por parte del municipio o municipios donde preste sus servicios, mencionar bajo protesta de decir verdad, no haber variado las condiciones existentes al momento de haber sido otorgada, o en su caso, actualice aquellas documentales que así lo ameriten, tales como inventarios, movimientos de personal, pago de derechos, póliza de fianza, modificaciones a la constitución de la empresa y representación de la misma, Planes y Programas de Capacitación y Adiestramiento, y demás requisitos que establezca las disposiciones reglamentarias.

Desechamiento de solicitudes

Artículo 30. En caso de que no se exhiban los protestos o actualizaciones a que se refiere el artículo anterior, la Secretaría prevendrá al interesado para que en un plazo improrrogable de diez días hábiles subsane las omisiones; transcurrido dicho plazo sin que el interesado haya subsanado las omisiones de su solicitud, ésta será desechada.

La revalidación podrá negarse cuando existan quejas previamente comprobadas por la autoridad competente; por el incumplimiento a las obligaciones y restricciones previstas en esta Ley o en la autorización respectiva; y, por existir deficiencias en la prestación del servicio.

Modificación de las modalidades

Artículo 31. Los prestadores de servicios que hayan obtenido la autorización o revalidación, podrán solicitar la modificación de las modalidades en que se presta el servicio, siempre que cumplan con los requisitos que resulten aplicables de acuerdo a la petición planteada. En este caso, la Unidad de Asuntos Internos y procedimientos de la Secretaría sin que medie requerimiento previo, resolverá lo procedente dentro de los diez días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud.

Abstención de seguir prestando el servicio

Artículo 32. Transcurrida la vigencia de la autorización o su revalidación, el interesado deberá abstenerse de prestar el servicio de seguridad privada, hasta en tanto

sea expedida nueva autorización para tal efecto.

Capítulo VI
Requisitos para Prestar Servicios de Seguridad Privada

Requisitos

Artículo 33. Para obtener autorización para prestar servicios de seguridad privada, los prestadores de servicios deberán presentar su solicitud ante la Secretaría, señalando la modalidad en que pretendan prestar el servicio, además de reunir los siguientes requisitos:

I. Ser persona física o moral de nacionalidad mexicana;

II. Exhibir original del comprobante de pago de derechos por el estudio y trámite de la solicitud de autorización;

III. Presentar copia simple, acompañada del original o copia certificada, de los siguientes documentos:

a) Acta de nacimiento, para el caso de personas físicas;

b) Escritura en la que se contenga el Acta Constitutiva y modificaciones, si las tuviere, para el caso de las personas morales, y

c) En su caso, poder notarial en el que se acredite la personalidad del solicitante;

IV. Señalar el domicilio, así como el de sus sucursales precisando el nombre y puesto del responsable en cada una de ellas, además de adjuntar los comprobantes de domicilio correspondientes;

V. Acreditar en los términos que señale el Reglamento, que se cuenta con los medios humanos, de formación, técnicos, financieros y materiales que le permitan llevar a cabo la prestación de servicios de seguridad privada en forma adecuada, en las modalidades y ámbito territorial solicitados;

VI. Presentar un ejemplar del Reglamento Interior de Trabajo, y Manual o Instructivo operativo, aplicable a cada una de las modalidades del servicio a desarrollar, que contenga la estructura jerárquica de la empresa y el nombre del responsable operativo;

VII. Exhibir los Planes y programas de capacitación y adiestramiento vigentes, acordes a las modalidades en que se prestará el servicio;

VIII. Constancia expedida por Institución competente o capacitadores internos o externos de la empresa, que acredite la capacitación y adiestramiento del personal operativo;

IX. Relación del personal directivo y administrativo, conteniendo nombre completo y domicilio;

X. Relación de quienes se integrarán como personal operativo, para la consulta de antecedentes policiales en el Registro Nacional del Personal de Seguridad Pública y en el Registro Estatal de Personal de Seguridad Pública, además de señalar el nombre, Registro Federal de Contribuyente y en su caso Clave Única de Registro de Población de cada uno de ellos;

XI. Adjuntar el formato de credencial que se expedirá al personal;

XII. Fotografías del uniforme a utilizar, en las que se aprecien sus cuatro vistas, conteniendo colores, logotipos o emblemas, mismos que deberán ser diferentes sin que puedan llegan a confundirse con los utilizados por las instituciones policiales, de tránsito o por las fuerzas armadas;

XIII. Relación de bienes muebles e inmuebles que se utilicen para el servicio, incluido equipo de radiocomunicación, armamento, vehículos, equipo en general, así como los aditamentos complementarios al uniforme, en los formatos que para tal efecto establezca la Secretaría;

XIV. Relación, en su caso, de animales, adjuntando copia certificada de los documentos que acrediten que el instructor se encuentra capacitado para desempeñar ese trabajo; asimismo se anexará listado que contenga los datos de identificación de cada animal, como son: raza, edad, color, peso, tamaño, nombre y documentos que acrediten

el adiestramiento y su estado de salud, expedido por la autoridad correspondiente;

XV. Copias certificadas del permiso para operar frecuencia de radiocomunicación o contrato celebrado con concesionaria autorizada;

XVI. Fotografías de los costados, frente, parte posterior y toldo del tipo de vehículos que se utilicen en la prestación de los servicios, las cuales deberán mostrar claramente los colores, logotipos o emblemas, y que no podrán ser iguales o similares a los oficiales utilizados por las instituciones policiales, de tránsito o por las Fuerzas Armadas; además deberán presentar rotulada la denominación o razón social del Prestador del Servicio, y la leyenda "Seguridad Privada"; asimismo, deberán apreciarse las defensas reforzadas, torretas y otros aditamentos que tengan dichas unidades;

XVII. Muestra física de las insignias, divisas, logotipos, emblemas o cualquier medio de identificación que porte el elemento;

XVIII. En caso de que se utilicen vehículos blindados en la prestación del servicio, independientemente de la modalidad de que se trate, se deberá exhibir constancia expedida por el proveedor del servicio de blindaje, con la que acredite el nivel del mismo;

XIX. Tratándose de prestadores de servicios que operen en la modalidad prevista para el traslado de valores, será indispensable contar con vehículos blindados, y exhibir constancia expedida por el proveedor del servicio de blindaje, con la que se acredite el nivel del mismo, y

XX. Los demás que establezcan las disposiciones reglamentarias.

Capítulo VII
Visitas de Verificación

Visitas de verificación

Artículo 34. La Secretaría y los municipios podrán ordenar en cualquier momento la práctica de visitas de verificación, y los prestadores de servicios estarán obligados a permitir el acceso y dar las facilidades e informes que los verificadores requieran para el desarrollo de su labor.

Objeto de la verificación

Artículo 35. El objeto de la verificación será comprobar el cumplimiento a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, así como de las obligaciones y restricciones a que se sujeta la autorización o revalidación.

La verificación será física cuando se practique sobre los bienes muebles o inmuebles; al desempeño, cuando se refiera a la actividad; al desarrollo laboral o profesional de los elementos, o bien de legalidad, cuando se analice y cerciore el cumplimiento de las disposiciones legales que se tiene la obligación de acatar.

Capítulo VIII
Medidas de Seguridad y Sanciones

Medidas de Seguridad

Artículo 36. La Secretaría y los municipios de conformidad con las disposiciones de la presente Ley y su Reglamento, con el fin de salvaguardar a las personas, sus bienes, entorno, así como para proteger la salud y seguridad pública, podrán adoptar como medida de seguridad, la suspensión temporal, parcial o total de las actividades de prestación de servicios de seguridad privada.

En cualquiera de los supuestos mencionados, que pongan en peligro la salud o la seguridad de las personas o sus bienes, la Secretaría podrá ordenar la medida y su ejecución de inmediato:

a) A través del auxilio de la fuerza pública, o

b) Señalando un plazo razonable para subsanar la irregularidad, sin perjuicio de informar a las autoridades o instancias competentes para que procedan conforme a derecho.

Asimismo, la Secretaría, por conducto de la Unidad de Asuntos Internos y procedimientos de la Secretaría, podrá promover ante la autoridad competente, que se ordene la inmovilización y aseguramiento

precautorio de los bienes y objetos utilizados para la prestación de servicios de seguridad privada, cuando éstos sean utilizados en sitios públicos, sin acreditar su legal posesión y registro, así como cuando no se cuente con la vigencia de la autorización o su revalidación para la prestación de servicios de seguridad privada.

Sanciones

Artículo 37. Las resoluciones de la Secretaría y los municipios, que apliquen sanciones administrativas, deberán estar debidamente fundadas y motivadas, tomando en consideración:

I. La gravedad de la infracción en que se incurre y la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan en cualquier forma, las disposiciones de esta Ley o las que se dicten con base en ésta;

II. Los antecedentes y condiciones personales del infractor;

III. La antigüedad en el servicio;

IV. La reincidencia en la comisión de infracciones;

V. El monto del beneficio que se obtenga, y

VI. El daño o perjuicio económico, ya sea que de forma conjunta o separada se hayan causado a terceros.

Imposición de sanciones

Artículo 38. La imposición de las sanciones por incumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente Ley, será independiente de las penas que correspondan cuando la conducta u omisión constituya uno o varios delitos.

Tipos de sanciones

Artículo 39. Atendiendo al interés público o por el incumplimiento de los prestadores de servicios a las obligaciones establecidas en esta Ley y su Reglamento, se dará origen a la imposición de una o más de las siguientes sanciones:

I. Amonestación;

II. Multa;

III. Suspensión de los efectos de la autorización de uno a seis meses;

IV. Clausura del establecimiento donde el prestador del servicio tenga su oficina matriz o el domicilio legal que hubiere registrado, así como de las sucursales que tuviera en el Estado, y

V. Revocación de la autorización.

Aplicación de las sanciones

Artículo 40. Las sanciones a que se refiere este capítulo, serán aplicadas por la Secretaría y los municipios con base en las visitas de verificación practicadas, así como por las infracciones comprobadas.

Capítulo IX
Recurso de Inconformidad

Impugnación de los actos y resoluciones

Artículo 41. Los actos y resoluciones dictados por las autoridades estatales y municipales con motivo de la aplicación de esta Ley y su reglamento, podrán impugnarse mediante lo previsto en el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Responsabilidad de los servidores públicos

Artículo 42. Los servidores públicos que incumplan con las obligaciones señaladas en esta Ley y en los reglamentos que de ella emanen o incurran en las conductas prohibidas serán sancionados en los términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus municipios.

Las autoridades en materia de transporte establecerán medidas que faciliten la presentación de quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones o por incurrir en conductas prohibidas de los servidores públicos dando trámite de acuerdo con la normatividad aplicable.

Notificaciones

Artículo 43. Las notificaciones, citatorios, requerimientos, solicitudes de información o documentos, así como los acuerdos y resoluciones dictados en aplicación

de esta Ley y sus reglamentos se harán y darán a conocer a través de lo previsto en el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato."

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Inicio de la vigencia

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor el primero de enero de 2018, previa publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato.

Ajustes de reglamentos

SEGUNDO. El titular del Poder Ejecutivo y los ayuntamientos realizarán los ajustes necesarios a los reglamentos respectivos para dar cumplimiento a la presente Ley, en un plazo no mayor de seis meses, contado a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

Asuntos en trámite

TERCERO. Los asuntos que se encuentran en trámite o en proceso a la entrada en vigor de la presente Ley, continuarán tramitándose, en los términos de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato.

Regularización

CUARTO. Las empresas que cuenten con su autorización tendrán un plazo de seis meses, contado a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, para regularizar las consideraciones de la presente Ley.

Leyes de ingresos municipales

QUINTO. Los municipios deberán contemplar en sus leyes de ingresos correspondientes, el cobro de la conformidad para el establecimiento y funcionamiento de las empresas de seguridad privada acorde a las modalidades previstas en la presente Ley.

GUANAJUATO, GTO., 24 DE OCTUBRE DE 2017. "2017 Centenario de la Constitución de Guanajuato" DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y COORDINACIÓN POLÍTICA ANTE LA SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO. DIP. BEATRIZ MANRIQUE GUEVARA. DIP. MARÍA ALEJANDRA TORRES NOVOA. DIP. ÉCTOR JAIME RAMÍREZ BARBA. DIP. RIGOBERTO PAREDES VILLAGÓMEZ. DIP. ALEJANDRO TREJO ÁVILA. DIP. EDUARDO RAMÍREZ GRANJA. PRESIDENTA DEL CONGRESO DEL ESTADO. DIP. ANGÉLICA CASILLAS MARTÍNEZ. »

-La C. Presidenta: Se turna a la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones, con fundamento en el artículo 119, fracción I de nuestra Ley Orgánica; para su estudio y dictamen.

Se solicita a la diputada María Guadalupe Velázquez Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, dar lectura a la exposición de motivos de su iniciativa, a efecto de reformar el artículo 15 de la Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

PRESENTACIÓN DE LA INICIATIVA FORMULADA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE VELÁZQUEZ DÍAZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, A EFECTO DE REFORMAR EL ARTÍCULO 15 A LA LEY DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.



C. Dip. María Guadalupe Velázquez Díaz: Con su permiso presidenta. Muy buenas tardes a todos compañeros diputados, invitados Medios de comunicación.

La de la voz a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, ante la Sexagésima Tercera Legislatura del H. Congreso del Estado de Guanajuato, someto a la consideración del Pleno, la presente iniciativa por la que se reforma el artículo 15, adicionando fracciones XII, XIII, XIV y XV de la Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) para el año 2017, identificó 10 programas

fuertemente prioritarios que contribuyen a incrementar el bienestar económico de la población, según lo planteado en el Proyecto de Presupuesto de Egresos, para el actual ejercicio.

A través del documento »Consideraciones Presupuestales 2017», el CONEVAL precisa que dentro de los programas sociales prioritarios se deben contemplar: **Prospera, Empleo Temporal, Pensión para Adultos Mayores, Atención a Jornaleros Agrícolas, apoyo a la Educación, Estancias Infantiles y Educación para Adultos.**

Por lo anterior es que debenos considerar, como Poder Legislativo de este estado, que Los programas que benefician a los adultos mayores, jefas de familia, jóvenes, sector rural y aquellos que ofrecen alimentación y sano desarrollo de los niños, deben ser prioritarios en nuestro estado.

Referente a los jóvenes, hoy no existe una política pública clara federal ni estatal, que dé atención específica a este sector social.

Este sector participa dentro de las bolsas económicas de los programas en general, llámese salud, educación, emprendimiento, por mencionar algunos.

Los recursos públicos que manejan dichos programas son repartidos entre adultos y jóvenes. Aunado a ello, los pocos programas que hay dentro de las instancias juveniles son apoyados con bajo presupuesto, lo que limita el alcance de los mismos.

Para lograr que los adultos mayores, las jefas de familia, los jóvenes y los jornaleros, puedan enfrentar los factores que tienen en contra es que el Poder Ejecutivo en conjunto con el Poder Legislativo, debemos promover políticas públicas que fortalezcan a estos sectores, garantizando que ejerzan sus derechos sociales básicos y accedan a todas las acciones que refuercen su bienestar y desarrollo en materia de alimentación, educación, bienestar y salud.

Por lo anterior, es que como Poder Legislativo, debemos establecer estas áreas de desarrollo como preminentes al momento de la designación de presupuestos.

Estos programas buscan eliminar los factores causantes de pobreza extrema y las situaciones de riesgo o discriminación que impiden alcanzar mejores niveles de vida y de bienestar a grupos de población marginada o a personas en condiciones de vulnerabilidad.

No podemos dejar de lado que el CONEVAL, coloca a nuestro estado en el lugar 19 en pobreza y en el 26 como uno de los estados con menor desarrollo humano.

Con esta reforma buscamos que estos sectores de la sociedad sean considerados como prioritarios en la Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado y los Municipios de Guanajuato, y por ende sean consideradas en primer lugar al momento de la asignación de presupuesto del estado, por encima del gasto corriente o gastos superfluos como los asignados a comunicación o a la pinta de bardas.

IMPACTO JURIDICO. El artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que: es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; a su vez la Constitución Política para el Estado en sus artículos 37 y 56, establecen la facultad del Congreso del Estado el derecho de proponer iniciativas de leyes y decretos que permitan crear o reformar el marco jurídico nuestro estado.

IMPACTO ADMINISTRATIVO. La presente reforma, permite regular la competencia y atribuciones del Titular del Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría y del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado así como las dependencias, entidades estatales y ayuntamientos en el ámbito de sus respectivas competencias, a fin de fortalecer, mediante acciones coordinadas, el desarrollo social y humano en la áreas que se propone sean consideradas como prioritarias.

IMPACTO PRESUPUESTARIO. Considerando que la iniciativa hoy presentada no se traduce en la creación de nueva infraestructura dentro de la administración pública y no requiere necesariamente de la creación de nuevas plazas, simplemente la reasignación de presupuesto del estado, no

implica un gasto nuevo para contemplarse en el presupuesto estatal.

IMPACTO SOCIAL. Esta reforma Permitirá fomentar, mediante acciones coordinadas, el desarrollo social y humano en sectores vulnerables como los jóvenes, las jefas de familia, los adultos mayores y el sector rural, con el fin de combatir la desigualdad en el estado de Guanajuato.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, solicitamos a esta Honorable Asamblea, se apruebe el siguiente proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 15, adicionando fracciones XII, XIII, XIV y XV de la Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado y los Municipios de Guanajuato. Muchísimas gracias.

»DIP. ANGÉLICA CASILLAS MARTÍNEZ. PRESIDENTA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO. SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA. PRESENTE.

La que suscribe, Diputada **MARÍA GUADALUPE VELÁZQUEZ DÍAZ a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, ante la Sexagésima Tercera Legislatura del H. Congreso del Estado de Guanajuato,** con fundamento en los artículos 56 fracción segunda de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato y 167 Frac. 11, de la ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, me permito someter a la consideración del Pleno, la presente iniciativa por la que se **reforma el artículo 15,** adicionando fracciones **XII, XIII, XIV y XV de la Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado y los Municipios de Guanajuato.**

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) para el año 2017, identificó 10 programas fuertemente prioritarios que contribuyen a incrementar el bienestar económico de la población, según lo planteado en el Proyecto de Presupuesto de Egresos, para el actual ejercicio.

A través del documento consideraciones presupuestales 2017, el CONEVAL precisa que dentro de los programas sociales prioritarios se deben contemplar, **Prospera, Empleo Temporal, Pensión para Adultos Mayores, Atención a Jornaleros Agrícolas, apoyo a la Educación, Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras y Educación para Adultos.**

Los programas que benefician a adultos mayores, jefas de familia, jóvenes, sector rural y que ofrecen alimentación y sano desarrollo de los niños deber ser prioritarios en nuestro estado.

En la Ciudad de México, los programas de Apoyo Integral a Jefas de Familia, brindan un sostén alternativo a madres jefas de familia que perciben menos de dos salarios mínimos y que tienen hijos menores de 15 años.

Con él, las beneficiarias reciben atención integral en aspectos psicológicos, jurídicos recreativos, culturales y de salud.

A nivel federal se ha impulsado el Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia, lo anterior, a través del otorgamiento a las familias con jefatura femenina, en condición de vulnerabilidad por carencia social o pobreza, contribuyendo con esto a ampliar la seguridad social de su familia protegiendo el bienestar socioeconómico.

El programa Pensión para Adultos Mayores atiende a la población adulta mayor de 65 años en adelante y tiene cobertura a nivel nacional. Los beneficiarios reciben apoyos económicos; también participan en grupos de crecimiento y jornadas informativas sobre temas de salud y obtienen facilidades para acceder a servicios y apoyos de instituciones como el INAPAM, además de aquellas que ofrecen actividades productivas y ocupacionales.

No menos importante es apoyar a las y los jóvenes impulsando programas y acciones para que tengan una mejor calidad de vida, para que los jóvenes mexicanos puedan enfrentar los factores que tienen en contra, y así este Poder

Legislativo en conjunto con las dependencias sectorizadas, promueva servicios y programas de apoyo que los impulsan hacia un futuro de preparación y progreso.

Los jóvenes mexicanos son el futuro de nuestra sociedad y por ello debemos contribuir con su trabajo para que tengan acceso a derechos sociales básicos y acciones que refuerzan su bienestar y desarrollo en materia de **alimentación, educación, salud y bienestar**; programas donde podrán tener acceso a servicios de becas escolares, bolsa de trabajo, apoyo a emprendedores juveniles, programas de servicio social, atención psicológica.

Todo ellos con el apoyo por parte de este Poder Legislativo al establecer estas áreas de desarrollo como prioritarias al momento de la designación de presupuestos.

Estos programas buscan eliminar los factores causantes de pobreza extrema y las situaciones de riesgo o discriminación, que impiden alcanzar mejores niveles de vida y de bienestar a grupos de población marginada o a personas en condiciones de vulnerabilidad.

También es fundamental impulsar acciones para fortalecer políticas públicas enfocadas a la productividad en el sector agroalimentario. Ya que es necesario entregar apoyos para el desarrollo de capacidades, dirigidos a mejorar las condiciones de alimentación, salud y educación de la población jornalera agrícola; apoyos para infraestructura; servicios de acompañamiento así como apoyos para el desarrollo de habilidades personales y sociales.

Con esta reforma se busca que estas áreas sean consideradas corno prioritarias en la Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado y los Municipios de Guanajuato, y con ello sean en primer lugar consideradas al momento de la asignación de presupuesto del estado, quedando por arriba de ternas corno el gasto corriente, los gastos en comunicación, o cualquier otra asignación que no contemple grupos en estado de vulnerabilidad y se encuentren contemplados dentro de la ley.

Considerar corno prioritarios al fijar los montos en los presupuestos de egresos del Estado y de los municipios estos rubros dentro de los programas, fondos y recursos destinados a los jóvenes, jefas de familia, adultos mayores y el sector agroalimentario en el desarrollo social y humano, es más que un gasto una inversión para estos grupos fundamentales en el futuro de nuestro estado de Guanajuato.

Debernos impulsar políticas y estrategias para eliminar los factores de vulnerabilidad de los grupos prioritarios, apoyar programas y acciones que conduzcan al desarrollo humano y social integral.

IMPACTO JURIDICO: El artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior a su vez la constitución política para el Estado de Guanajuato artículo 37 56 establece la facultad del congreso del estado Cómo poder legislativo con el derecho de proponer iniciativas de leyes y decretos que permitan crear o reformar el marco jurídico nuestro estado en este caso se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

IMPACTO ADMINISTRATIVO: Permitiría regular la competencia y atribuciones del Titular del Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría y del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guanajuato, así como las dependencias, entidades estatales y ayuntamientos en el ámbito de sus respectivas competencias del, a fin de impulsar mediante acciones coordinadas el desarrollo social y humano en la áreas que se propone sean consideradas como prioritarias.

IMPACTO PRESUPUESTARIO: Considerando que la iniciativa que aquí presentamos no se traduce en la creación

de nueva infraestructura dentro de la administración pública, y no requiere necesariamente de la creación de nuevas plazas, no implica un gasto nuevo para contemplarse en el presupuesto estatal.

IMPACTO SOCIAL. Permitirá impulsar mediante acciones coordinadas el desarrollo social y humano en las áreas de juventud, jefas de familia, adultos mayores, y el sector rural, con el fin de impulsar a los sectores vulnerables y combatir la desigualdad en el estado de Guanajuato.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, solicitamos a esta Honorable Asamblea se apruebe el siguiente:

Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 15, adicionando fracciones XII, XIII, XIV y XV de la Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 15, adicionando fracciones XII, XIII, XIV y XV de la Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Artículo 15. Los programas, fondos...

1...

XII. Los programas dirigidos a jefas de familia.

XIII. Los programas dirigidos al sector agroalimentario.

XIV. Los programas dirigidos a niños y jóvenes.

XV. Los programas dirigidos a adultos mayores.

Las limitantes señaladas...

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato.

SEGUNDO.- Se derogan las disposiciones legales y reglamentarias que se opongan a lo establecido en el presente Decreto.

Guanajuato, Gto., a 26 de octubre de 2017. Atentamente. Dip. María Guadalupe Velázquez Díaz. Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. »

-La C. Presidenta: Muchas gracias diputada. Se turna a la Comisión de Desarrollo Económico y Social, con fundamento en el artículo 107, fracción I de nuestra Ley Orgánica, para su estudio y dictamen.

Se solicita a la diputada Leticia Villegas Nava, dar lectura a la exposición de motivos de la iniciativa de la Ley de Fomento, Difusión y Derechos Culturales para el Estado de Guanajuato, formulada por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

PRESENTACIÓN DE LA INICIATIVA DE LEY DE FOMENTO, DIFUSIÓN Y DERECHOS CULTURALES PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, FORMULADA POR DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.



C. Dip. Leticia Villegas Nava: Con el permiso de la diputada presidenta y de los honorables miembros de la mesa directiva. Estimadas compañeras y compañeros. Respetables representantes de los medios de comunicación. Ciudadanos que nos acompañen en la Casa Legislatura de los guanajuatenses.

(Leyendo) **»DIPUTADA ANGÉLICA CASILLA MARTINEZ. PRESIDENTE DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y**

SOBERANO DE GUANAJUATO. SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA. PRESENTE.

Quienes integramos el **Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional** ante la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 56 fracción II, de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; y 167 fracción II, 168, y 209, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, nos permitimos someter a la consideración de la Asamblea, la presente Iniciativa con proyecto de Decreto que crea la **Ley de Fomento, Difusión y Derechos Culturales para el Estado de Guanajuato,** en atención a la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La cultura es el lienzo de tradiciones, de historias, de vocaciones y de perspectivas, que iluminan la identidad de los seres humanos y le dan a cada uno de ellos un color propio, que enriquece con su luz el crisol de nuestra sociedad guanajuatense, en la que se refleja la unión y la interacción de todas esas identidades, definidas tanto por los valores que compartimos como por los que nos distinguen.

Por ello, las diputadas y diputados del Grupo Parlamentario Del Partido Acción Nacional consideramos que es necesario modernizar y fortalecer el marco jurídico de nuestro estado en materia de cultura, armonizándolo con la legislación federal y con las características particulares del entorno actual. Con este objetivo hemos desarrollado la presente iniciativa, que crea la nueva Ley de Fomento, Difusión y Derechos Culturales para el Estado de Guanajuato.

A través de esta ley proponemos, entre otras actividades, regular los órganos y acciones de fomento e investigación de la cultura local e indígena en el Estado. Además, constituirá un avance fundamental para garantizar el acceso de los guanajuatenses a la vida cultural y reconocer los derechos de todas las personas en este ámbito.

Dichos derechos están respaldados tanto en la propia naturaleza humana como en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en 13 tratados internacionales que ha ratificado nuestro país en los últimos 40 años, reconociendo la importancia de promover y salvaguardar los derechos culturales, los cuales incluyen, entre muchos otros: la libre elección de una o más identidades culturales y el participar de manera activa en la cultura, contando para ello con la protección por parte del Estado de sus intereses morales y patrimoniales, de forma que todas las personas que hacen de Guanajuato su hogar puedan expresar y enriquecer libremente su propia identidad y el patrimonio intangible que compartimos.

Para fortalecer el ejercicio de estos derechos, la nueva ley contemplará el establecimiento de mecanismos de participación conjunta con los sectores social y privado, e impulsando el principio de solidaridad y de responsabilidad compartida para preservar, enriquecer y restaurar los bienes y servicios que forman parte de la cultura de nuestro estado.

Planteamos regular específicamente las políticas culturales, partiendo de principios como el respeto a la libertad creativa y el reconocimiento, tanto de la diversidad cultural del país, como de la identidad y dignidad de las personas, además de la Igualdad de género y la autonomía de los pueblos indígenas.

Proponemos esta nueva ley con la certeza de que la diversidad y el dinamismo cultural son una de las mayores fortalezas de nuestro estado y uno de los más apreciados patrimonios de todo ser humano, porque ante los desafíos cotidianos encontramos en unas tradiciones y nuestra identidad, la fuerza para

superar los desafíos y los valores a los que aspiramos, tanto en el plano individual como en el de la convivencia.

Por último, de acuerdo con el artículo 209 de la Ley Orgánica Del Poder Legislativo Del Estado De Guanajuato, manifestamos que la iniciativa que aquí presentamos tendrá, de ser aprobada el siguiente:

I. Impacto jurídico: El artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior. A su vez, la Constitución Política Para El Estado De Guanajuato, en sus artículos 37 y 56 establece la facultad del Congreso del Estado como poder legislativo con el derecho de proponer iniciativas de leyes y decretos que permitan crear o reformar en marco jurídico de nuestro estado. En este caso, se crea la nueva Ley de Fomento, Difusión y Derechos Culturales para el Estado de Guanajuato.

II. Impacto administrativo: Permitirá reafirmar y modernizar las regulaciones y procesos en materia cultural a nivel estado, armonizando nuestro marco jurídico con el de la legislación federal.

III. Impacto presupuestario: Considerando que la iniciativa que aquí presentamos no se traduce en la creación de nueva infraestructura dentro de la administración pública y no requiere necesariamente de la creación de nuevas plazas, no implica un gasto nuevo para contemplarse en el presupuesto estatal.

IV. Impacto social: La aprobación de esta iniciativa permitirá reconocer y promover el ejercicio de los derechos culturales, además de refrendar el compromiso de las instituciones y la sociedad guanajuatense con la preservación y desarrollo de las diversas expresiones de la identidad cultural.

Por lo anteriormente expuesto nos permitimos someter a la consideración de esta Asamblea Legislativa, el siguiente proyecto de:

Por lo anteriormente expuesto nos permitimos someter a la consideración de esta Asamblea Legislativa, el siguiente proyecto de:

D E C R E T O

PRIMERO. Se crea la **Ley de Fomento, Difusión y Derechos Culturales para el Estado de Guanajuato**, para quedar como sigue:

LEY DE FOMENTO, DIFUSIÓN Y DERECHOS CULTURALES PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO.

Título Primero
Disposiciones Generales

Capítulo I
Disposiciones preliminares

Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés social y tienen por objeto fomentar, difundir, promover y proteger el ejercicio de los derechos culturales de los guanajuatenses.

Artículo 2. Son finalidades de la presente Ley:

I. Regular las acciones de fomento, investigación y desarrollo de la cultura local e indígena en el Estado;

II. Garantizar el acceso y participación de las personas en la vida cultural;

III. Regular los órganos encargados de la preservación, difusión,

promoción, fomento e investigación de la actividad cultural;

IV. Reconocer los derechos culturales de las personas;

V. Promover y respetar la continuidad y el conocimiento de la cultura del estado en todas sus manifestaciones y expresiones;

VI. Garantizar el disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en materia cultural;

VII. Promover, respetar, proteger y asegurar el ejercicio de los derechos culturales;

VIII. Establecer mecanismos de participación de los sectores social y privado; y

IX. Promover entre la población el principio de solidaridad y responsabilidad en la preservación, conservación, mejoramiento y restauración de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia.

Artículo 3. Para la aplicación de esta Ley, se entiende por:

I. Consejo: Al Consejo Directivo del Instituto Estatal de la Cultura;

II. Cultura: Al conjunto de rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que distinguen e identifican a un grupo social;

III. Fondo Estatal: Al Fondo Estatal para la Cultura y las Artes;

IV. Instituto: Al Instituto Estatal de la Cultura;

V. Programa Estatal: Al Programa Estatal de Fomento y Difusión de la Cultura; y

VI. Políticas culturales: Al conjunto de prácticas sociales, consientes y deliberadas, de intervención y no intervención, que tienen por objeto satisfacer ciertas necesidades de la población y de la comunidad, mediante el empleo óptimo de todos los recursos materiales y humanos, de que dispone una sociedad en un momento determinado, que busca reconocer la identidad como Estado y como Nación.

Capítulo II
Políticas culturales

Artículo 4. Son principios rectores de las políticas culturales:

I. El respeto a la libertad creativa y a las manifestaciones culturales;

II. La igualdad de las culturas;

III. El reconocimiento de la diversidad cultural del país;

IV. El reconocimiento de la identidad y dignidad de las personas;

V. La libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas y sus comunidades; y

VI. La igualdad de género

Artículo 5. Son finalidades de las políticas culturales:

I. El reconocimiento de la cultura como eje fundamental en la planeación, el desarrollo social y humano con equilibrio entre la tradición y la modernidad;

II. Crear espacios de libertad, crítica y autocrítica en la diversidad cultural;

III. Implementar estrategias y acciones que contemplen a las diferentes corrientes culturales;

IV. Elevar los índices de lectura en la población, a través de la consolidación de estrategias innovadoras y la generación de espacios para el encuentro con los libros;

V. Fomentar el respeto a los derechos de autor y a la propiedad intelectual;

VI. Preservar, promocionar, difundir e investigar la diversidad cultural local, regional y nacional, para mantener nuestra identidad y fortaleza como Estado y como Nación;

VII. Impulsar la formación de artistas, artesanos, docentes, investigadores, promotores y administradores culturales;

VIII. Definir y actualizar los contenidos de los programas de los centros dedicados al fomento de la cultura, a través del Instituto y de la Secretaría de Educación de Guanajuato, para consolidar la identidad propia, en el marco de la cultura nacional;

IX. Destacar el valor que la cultura posee para el desarrollo, la cohesión social y la paz;

X. Crear los mecanismos que garanticen la conservación, investigación y difusión de la cultura local y de las manifestaciones culturales de los grupos indígenas asentados en el estado;

XI. Propiciar el fomento y desarrollo cultural de forma directa y coordinada, para garantizar la vinculación de los diversos actores culturales en beneficio del conjunto social; y

XII. El respeto a la libertad de expresión, asociación artística y cultural, basado en el conocimiento, comprensión y defensa de la diversidad cultural y sus valores.

Capítulo III

Derechos Culturales

Artículo 6. Los habitantes del estado tienen los siguientes derechos culturales:

I. Acceder a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia;

II. Procurar el acceso al conocimiento y a la información del patrimonio material e inmaterial de las culturas que se han desarrollado y desarrollan en el territorio nacional, del estado y de la cultura de otras comunidades, pueblos y naciones;

III. Elegir libremente una o más identidades culturales;

IV. Pertenecer a una o más comunidades culturales;

V. Participar de manera activa y creativa en la cultura;

VI. Disfrutar de las manifestaciones culturales de su preferencia;

VII. Comunicarse y expresar sus ideas en la lengua o idioma de su elección;

VIII. Disfrutar de la protección por parte del Estado de los intereses morales y patrimoniales que les correspondan por razón de sus derechos de propiedad intelectual, así como de las producciones artísticas, literarias o culturales de las que sean autores, de conformidad con la legislación aplicable en la materia; la obra plástica y escultórica de los creadores, estará protegida y reconocida exclusivamente en los términos de la Ley Federal del Derecho de Autor;

IX. Utilizar las tecnologías de la información y las comunicaciones para el ejercicio de los derechos culturales, y

X. Los demás que en la materia se establezcan en la Constitución federal, en la Constitución local, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y en otras leyes.

Artículo 7. Para garantizar el ejercicio de los derechos culturales, el Instituto y los municipios, en el ámbito de su competencia, deberán establecer acciones que fomenten y promuevan los siguientes aspectos:

I. La cohesión social, la paz y la convivencia armónica de sus habitantes;

II. El acceso libre a las bibliotecas públicas;

III. La lectura y la divulgación relacionados con la cultura del Estado y otras entidades federativas;

IV. La celebración de los convenios que sean necesarios con instituciones privadas para la obtención de descuentos en el acceso y disfrute de los bienes y servicios culturales; así como permitir la entrada a museos y zonas arqueológicas abiertas al público, principalmente a personas de escasos recursos, estudiantes, docentes, adultos mayores y personas con discapacidad;

V. La realización de eventos artísticos y culturales gratuitos en escenarios y plazas públicas;

VI. El fomento de las expresiones y creaciones artísticas y culturales;

VII. La promoción de la cultura estatal en el extranjero;

VIII. La educación, la formación de audiencias y la investigación artística y cultural;

IX. El aprovechamiento de la infraestructura cultural, con espacios y servicios adecuados para hacer un uso intensivo de la misma;

X. El acceso universal a la cultura para aprovechar los recursos de las tecnologías de la información y las comunicaciones, conforme a la Ley aplicable en la materia, y

XI. La inclusión de personas y grupos en situación de discapacidad, en condiciones de vulnerabilidad o violencia en cualquiera de sus manifestaciones.

Artículo 8. Las acciones señaladas en el artículo anterior tendrán el propósito de conferirle a la política pública, sustentabilidad, inclusión y cohesión social con base en criterios de pertinencia, oportunidad, calidad y disponibilidad.

Artículo 9. El Instituto y los municipios, en el ámbito de su competencia, promoverán el ejercicio de los derechos culturales de las personas con discapacidad con base en los principios de igualdad y no discriminación.

Artículo 10. El Instituto y los municipios, en el ámbito de su competencia, desarrollarán acciones para investigar, conservar, proteger, fomentar, formar, enriquecer y difundir el patrimonio cultural inmaterial, favoreciendo la dignificación y respeto de las manifestaciones de las culturas originarias, mediante su investigación, difusión, estudio y conocimiento.

Artículo 11. El Instituto regulará el resguardo del patrimonio cultural inmaterial e incentivará la participación de las organizaciones de la sociedad civil y pueblos originarios.

Los municipios promoverán, en el ámbito de sus atribuciones, acciones para salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial.

Artículo 12.- Toda persona ejercerá sus derechos culturales a título individual o colectivo sin menoscabo de su origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro y, por lo tanto, tendrán las mismas oportunidades de acceso.

El Estado y los municipios deberán establecer los mecanismos equitativos y plurales que faciliten el acceso de la sociedad a las actividades culturales.

Artículo 13.- El establecimiento del programa estatal se hará en los términos de esta Ley y de la Ley de Planeación para el Estado de Guanajuato. Se escuchará la opinión de los individuos, grupos y organizaciones sociales, dedicados a la preservación, promoción, fomento, difusión e investigación de la cultura del estado.

Los servidores públicos responsables de las acciones y programas gubernamentales en materia cultural del Estado y de los municipios, en el ámbito de su competencia, observarán en el ejercicio de la política pública el respeto, promoción, protección y garantía de los derechos culturales.

Artículo 14. Las manifestaciones culturales a que se refiere esta Ley son los elementos materiales e inmateriales pretéritos y actuales, inherentes a la historia, arte, tradiciones, prácticas y conocimientos que identifican a grupos, pueblos y comunidades que integran el Estado, elementos que las personas, de manera individual o colectiva, reconocen como propios por el valor y significado que les aporta en términos de su identidad, formación, integridad y dignidad cultural, y a las que tienen el pleno derecho de acceder, participar, practicar y disfrutar de manera activa y creativa;

Capítulo IV
Fomento a la lectura

Artículo 15. Para fomentar la lectura, las autoridades encargadas de la aplicación de esta Ley, en el ámbito de su competencia llevarán a cabo las siguientes acciones:

I. Fomentar el hábito de la lectura mediante campañas permanentes;

II. Facilitar a la población la adquisición de libros;

III. Promover la participación social y de los sectores público y privado en las actividades de fomento a la lectura y el libro;

IV. Promover el trabajo intelectual de los autores, particularmente aquellos residentes en el estado de Guanajuato y coadyuvar en la edición de sus obras, en los términos de la reglamentación que al efecto se expida;

V. Modernizar y actualizar permanentemente el acervo de las bibliotecas públicas del estado de Guanajuato;

VI. Realizar campañas de difusión y acceso a las bibliotecas existentes; y

VII. Llevar a cabo en las instituciones de educación, estrategias de fomento a la lectura, ya sea para el conjunto de la población o dirigidos a sectores específicos de la misma.

Titulo Segundo
Competencias y Atribuciones de las Autoridades

Capítulo I
Autoridades

Artículo 16. Son autoridades encargadas de la aplicación de esta Ley:

I. El titular del Poder Ejecutivo del Estado;

II. Los Ayuntamientos;

III. El Instituto Estatal de la Cultura; y

IV. Los organismos, instituciones o instancias municipales encargados de la ejecución de los programas y acciones culturales a desarrollar en el municipio.

Capítulo II
Atribuciones del titular del Poder Ejecutivo del Estado

Artículo 17. Corresponde al titular del Poder Ejecutivo del Estado:

I. Definir las políticas culturales del Estado;

II. Coordinar con las autoridades municipales para la elaboración de los programas y acciones encaminadas al fomento y desarrollo cultural del estado, así como para su aplicación en el ámbito respectivo, a fin de que las políticas culturales sean eficientes;

III. Designar al Director General del Instituto;

IV. Aprobar el Programa Estatal;

V. Promover la conservación y preservación de los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos que se encuentren o no en el patrimonio del Estado, de conformidad con las leyes;

VI. Preservar y promover las manifestaciones de la cultura local, y la de los grupos indígenas asentados en el territorio del estado;

VII. Otorgar, a través del Instituto, estímulos al trabajo creativo en los términos establecidos en la presente Ley;

VIII. Fortalecer la integración cultural de las comunidades extranjeras residentes en el Estado;

IX. Establecer, consolidar y fomentar las relaciones y la cooperación internacional cultural;

X. Fomentar la presencia de muestras culturales y artísticas diversas del estado en eventos artísticos nacionales e internacionales;

XI. Promover la celebración de festivales nacionales e internacionales para difundir la cultura del Estado;

XII. Incluir en el presupuesto general de egresos respectivo, los presupuestos correspondientes al Instituto y al Fondo Estatal; y

XIII. Las demás que en la materia se le otorguen por esta Ley y por otros ordenamientos.

Capítulo III
Atribuciones de los Ayuntamientos

Artículo 18. Corresponde a los Ayuntamientos:

I. Establecer el programa municipal con los objetivos y estrategias para la difusión, promoción, fomento e investigación de la cultura;

II. Coordinarse con las autoridades estatales para la elaboración de los programas y acciones encaminadas al fomento y desarrollo cultural del municipio, así como para su aplicación en el ámbito respectivo;

III. Preservar y fomentar las manifestaciones culturales propias del municipio;

IV. Emitir los reglamentos, lineamientos y acuerdos de observancia general, para normar la actividad cultural en el municipio, observando los principios que se refieren en esta Ley;

V. Fomentar la integración de órganos coadyuvantes de promoción y divulgación de la cultura;

VI. Fomentar la investigación de las manifestaciones culturales propias del municipio, así como sus ferias, tradiciones y costumbres;

VII. Coadyuvar en la ejecución de los programas, proyectos y acciones dirigidas al fomento y promoción de la lectura;

VIII. Establecer las medidas conducentes para la preservación, promoción, difusión e investigación de la cultura indígena y local;

IX. Otorgar a través del organismo, institución o instancia municipal, reconocimientos y estímulos a personas, organizaciones e instituciones públicas o privadas que se hayan destacado en la cultura;

X. Prever los recursos presupuestales para el funcionamiento de las casas de cultura, bibliotecas y los espacios culturales a su cargo;

XI. Conservar y preservar los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos en su municipio, que se encuentren o no en su patrimonio, en los términos de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos y demás normativa aplicable;

XII. Establecer el Padrón Municipal de Artistas, de conformidad con los lineamientos que se expidan;

XIII. Establecer el Padrón Municipal de Artesanos, de conformidad con los lineamientos que se expidan;

XIV. Establecer el Registro Municipal de Espacios y Servicios Culturales de conformidad con la Ley de Patrimonio Cultural y a los lineamientos que para tal efecto se expidan; y

XV. Promover la concertación de acuerdos con los sectores privado y social para impulsar el desarrollo cultural del municipio y su zona de influencia.

Artículo 19. Los municipios del Estado, en el ámbito de su competencia, contarán con un organismo, institución o instancia responsable de la coordinación de programas y acciones en materia de cultura.

El organismo, institución o instancia tendrá la naturaleza jurídica y estructura que acuerde el Ayuntamiento.

Artículo 20. Corresponde a los organismos, instituciones o instancias municipales, en materia de cultura:

I. Difundir, promover, e investigar las manifestaciones culturales del municipio y en especial la cultura indígena;

II. Promover la creación de talleres o grupos en atención a las distintas manifestaciones culturales;

III. Promover el acceso de la población a las diferentes manifestaciones culturales;

IV. Promover ferias, concursos y eventos, en donde se presenten las distintas manifestaciones culturales;

V. Promover el otorgamiento de reconocimientos y estímulos en favor de las

personas que se hayan distinguido en el campo de la cultura;

VI. Celebrar convenios de coordinación con el Estado y los municipios en materia de cultura, de conformidad a las disposiciones administrativas de su creación y funcionamiento;

VII. Fortalecer los valores cívicos, principalmente entre la población escolar con el propósito de consolidar la identidad y riqueza cultural;

VIII. Editar libros, revistas, folletos y cualquier otro documento que promueva y fomente la cultura;

IX. Promover la conservación y restauración de sitios y monumentos arqueológicos, históricos y artísticos en los términos de la ley de la materia;

X. Promover la conservación, y en su caso la construcción de teatros, auditorios y demás sitios y espacios para el fomento y difusión de la cultura; y

XI. Informar a la sociedad del programa municipal, destacando sus objetivos y estrategias para la difusión, promoción, fomento e investigación de la cultura, así como las evaluaciones, a través de los medios de comunicación disponibles que garanticen su difusión.

Capítulo IV
Instituto Estatal de la Cultura

Sección Primera
Estructura y organización

Artículo 21. El Instituto es un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, encargado de formular, coordinar, ejecutar y supervisar las políticas culturales.

Artículo 22. El Instituto tiene por objeto:

I. Garantizar el derecho de acceso a la cultura;

II. Promover y difundir el conocimiento de las diversas manifestaciones culturales del estado y sus municipios;

III. Integrar el Programa Estatal y coordinar su ejecución y seguimiento, con aprobación del Consejo.

IV. Promover la formación de artesanos a través de la capacitación, mejora de técnicas, concursos y demás acciones encaminadas a este fin, así como su registro en el Padrón Estatal de Artesanos;

V. Colaborar con las autoridades educativas para la capacitación de bibliotecarios y promotores de la lectura;

VI. Fomentar la profesionalización de los gestores culturales dedicadas a promover, incentivar, diseñar y realizar proyectos culturales;

VII. Suscribir convenios para cumplir con las atribuciones que esta Ley y demás ordenamientos le establezcan;

VIII. Implementar acciones dirigidas al fomento y promoción de la lectura, así como para la edición, distribución y comercialización del libro, folletos, revistas y publicaciones periódicas de contenido cultural de autores guanajuatenses, a través de las unidades administrativas que se establezca en la reglamentación;

IX. Preservar, promocionar, difundir e investigar la cultura indígena y local;

X. Otorgar reconocimientos y estímulos a personas, organizaciones e

instituciones públicas o privadas que se hayan destacado en la cultura;

XI. Coordinar, junto con otras instituciones y organismos públicos y privados, la celebración de los festivales culturales;

XII. Promover la conservación y construcción de teatros, auditorios y demás espacios, en donde se puedan realizar actividades culturales;

XIII. Procurar la creación de hemerotecas, museos, auditorios, teatros y centros culturales, así como su ampliación, mantenimiento, mejoras físicas y tecnológicas;

XIV. Establecer mecanismos de coordinación con los ayuntamientos, para el funcionamiento de las casas de cultura, museos, bibliotecas, hemerotecas públicas y cualquier otro lugar en donde se puedan realizar actividades culturales;

XV. Promover la realización de eventos, ferias, concursos y cualquier otra actividad de difusión y conocimiento de la cultura;

XVI. Promover y proporcionar apoyo técnico y asesoría a las industrias culturales o creativas que tengan como objeto principal la producción o la reproducción, la promoción, la difusión o la comercialización de bienes, servicios y actividades de contenido cultural, así como a grupos organizados y a toda persona para la elaboración de proyectos y actividades culturales;

XVII. Coordinar y operar el Padrón Estatal de Artistas, de conformidad con la normativa que se expida;

XVIII. Establecer Registro Estatal de Espacios y Servicios Culturales, de conformidad con la Ley de Patrimonio Cultural del Estado de Guanajuato y a los lineamientos que para tal efecto se expidan;

XIX. Promover y establecer de manera equitativa, acciones que generen la producción de bienes culturales objeto de la presente Ley;

XX. Proponer a la Secretaría de Educación de Guanajuato y a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación Superior, la inclusión en los planes académicos y sus programas de extensión, acciones de formación, protección y difusión de los bienes culturales;

XXI. Impulsar y apoyar la educación que se imparta en instituciones oficiales para la enseñanza, difusión, conservación y restauración de las artes y culturas populares, de conformidad con la normativa en la materia;

XXII. Fomentar el respeto de las expresiones culturales y artísticas, en el marco de la pluralidad, usos y costumbres tradiciones regionales;

XXIII. Promover en el ámbito de su competencia las actividades de información y comunicación que permitan promover y difundir la cultura;

XXIV. Diseñar, organizar y operar programas de apoyo, becas, estímulos e incentivos para la formación y consolidación de creadores, ejecutantes, investigadores y grupos, de cualquiera de las ramas y especialidades de la cultura;

XXV. Fomentar el respeto a los derechos de autor y a la propiedad intelectual;

XXVI. Diseñar y promover la política editorial de los órganos y entidades que integren el sector cultural; y

XXVII. Todas aquellas que sean necesarias para el cumplimiento de los fines antes citados.

Artículo 23. El domicilio del Instituto se ubica en la ciudad de Guanajuato y éste podrá contar con oficinas en los lugares que acuerde el Consejo.

Artículo 24. El patrimonio del Instituto se integrará con:

I. Los recursos que en su favor se establezcan en el Presupuesto General de Egresos;

II. Las aportaciones, subsidios y apoyos que a su favor hagan la Federación, el Estado y los municipios, así como otras organizaciones públicas o particulares;

III. Los recursos obtenidos de programas específicos de promoción, preservación, difusión o investigación de la cultura;

IV. Los rendimientos, recuperaciones, bienes, derechos y demás ingresos que le generen sus inversiones, bienes y operaciones;

V. Los ingresos que se generen con el otorgamiento de permisos, licencias y autorizaciones para el desarrollo y fomento de la actividad cultural; y

VI. Los demás bienes o ingresos que adquiera a título legal.

Artículo 25. Corresponde al Director General del Instituto:

I. Proponer y someter a la aprobación del Consejo, el Programa Estatal y el programa operativo anual del Instituto;

II. Evaluar y controlar el desarrollo de los programas operativos de trabajo, y en su caso, proponer las medidas correctivas que correspondan;

III. Representar legalmente al Instituto;

IV. Otorgar poderes generales o especiales con la autorización del Consejo cuando se trate de personas ajenas al Instituto y revocarlos;

V. Ejecutar los acuerdos y decisiones del Consejo;

VI. Presentar anualmente al Consejo, los proyectos de presupuesto de ingresos y egresos;

VII. Presentar anualmente al Consejo, el informe de actividades del ejercicio anterior;

VIII. Rendir informe de actividades del Instituto en cada sesión ordinaria del Consejo;

IX. Presentar trimestralmente al Consejo, los estados financieros del Instituto;

X. Someter a consideración del Consejo, los proyectos de financiamiento para cumplir los objetivos del Instituto;

XI. Designar y remover, dando cuenta al Consejo, al personal directivo del Instituto, así como conducir las relaciones laborales de acuerdo a la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios;

XII. Delegar sus funciones en la persona que designe;

XIII. Dirigir y supervisar las actividades de las áreas que integran al Instituto;

XIV. Certificar las copias de los documentos que obren en los archivos del Instituto; y

XV. Las demás para el ejercicio de las facultades anteriores y las que le encomiende el Consejo.

Sección Segunda
Consejo

Artículo 26. El Consejo es la máxima autoridad del Instituto y estará integrado de manera honorífica por:

I. Un ciudadano, quien fungirá como Presidente, designado por el titular del Poder Ejecutivo del Estado, quien durará en su encargo un periodo de 3 años;

II. El Secretario de Educación de Guanajuato, o el representante que este designe;

III. El Secretario de Finanzas, Inversión y Administración, o el representante que éste designe;

IV. El Rector General de la Universidad de Guanajuato, o el representante que éste designe;

V. Dos representantes de los municipios del estado, quienes serán los encargados de los organismos, instituciones o instancias municipales responsables de la coordinación de programas y acciones en materia cultural;

VI. Un representante de los organismos públicos culturales en el estado;

VII. Un representante de los organismos privados culturales en el estado; y

VIII. Un representante de los grupos indígenas del estado.

Las bases para integrar el Consejo se establecerán en el reglamento interior del Instituto.

Artículo 27. En atención al tema a tratar y con el propósito de orientar la toma de decisiones, podrán participar en determinadas sesiones con voz pero sin voto, y por acuerdo de los integrantes del Consejo, los titulares de las dependencias y entidades de la administración pública estatal y municipal, personas destacadas en determinada materia del área cultural, delegados de las dependencias y organismos descentralizados federales vinculadas en la materia o representantes de las instituciones nacionales y extranjeras afines al tema.

Artículo 28. Corresponde al Consejo:

I. Analizar y autorizar el Programa Estatal, y remitirlo al Ejecutivo del Estado para los efectos de su competencia;

II. Promover la participación de la sociedad en materia cultural;

III. Aprobar el programa operativo anual del Instituto;

IV. Evaluar el informe de actividades rendido por el Director General del Instituto;

V. Formular sugerencias para la ejecución y cumplimiento del Programa Estatal;

VI. Aprobar los presupuestos anuales de ingresos y egresos; y trimestralmente los estados financieros del Instituto, así como su cuenta pública;

VII. Evaluar periódicamente la gestión y administración del Instituto;

VIII. Aprobar, revisar y modificar, en su caso, el reglamento interior y demás disposiciones administrativas del Instituto;

IX. Analizar y desarrollar propuestas para el diseño de las políticas culturales.

Dichas políticas deberán contener acciones para promover la cooperación solidaria de todos aquellos que participen en las actividades culturales incluidos, el conocimiento, desarrollo y difusión de las culturas de los pueblos indígenas mediante el establecimiento de acciones que permitan vincular al sector cultural con el sector educativo, turístico, de desarrollo social, del medio ambiente, económico y demás sectores de la sociedad;

X. Promover las medidas para la preservación del patrimonio cultural, así como el impulso de la cultura y las artes, la formación y la creación artística;

XI. Formular propuestas y opiniones a las autoridades, para el mejoramiento del desarrollo de las políticas y programas en materia cultural;

XII. Opinar sobre las condiciones que estimulen la creación cultural, así como la producción y distribución mayoritaria de los bienes culturales;

XIII. Estudiar y aprobar los proyectos de inversión del Instituto;

XIV. Aprobar la aceptación de herencias, legados, donaciones y demás liberalidades;

XV. Conocer los convenios que hayan de celebrarse para cumplir con los objetivos del Instituto;

XVI. Proponer alternativas de solución a los problemas o contingencias en materia cultural;

XVII. Aprobar la operación y funcionamiento del Fondo Estatal, de conformidad a la presente Ley;

XVIII. Conceder a las personas físicas y morales los reconocimientos y estímulos a la Creación y al Desarrollo Artístico;

XIX. Aprobar la creación de las unidades administrativas para cumplir con los objetivos del Instituto, en los términos de su reglamento; y

XX. Las demás que sean necesarias para el ejercicio de las facultades anteriores y los objetivos del Instituto.

Artículo 29. La organización y funcionamiento del Consejo tendrá como bases las siguientes:

I. Celebrará sesiones ordinarias trimestrales y las extraordinarias que se requieran a citación expresa del Presidente, o a petición de la mayoría de los consejeros, debiendo acompañar el orden el día y los documentos necesarios;

II. Los representantes a que se refieren las fracciones VII y VIII del artículo 17 de la presente Ley, serán integrados al Consejo mediante convocatoria pública que formule el Presidente del Consejo y durarán en su encargo tres años, pudiendo ser ratificados por un periodo más;

III. Los representantes del sector público permanecerán el tiempo que dure su cargo;

IV. El quórum legal se reunirá con la asistencia de la mitad más uno de sus integrantes, en el supuesto de no lograrse éste, se convocará a una segunda sesión a celebrarse dentro de los cinco días hábiles siguientes y será válida con independencia del número de integrantes que asistan; y

V. Las decisiones se tomarán por mayoría de votos. En caso de empate, el Presidente del Consejo tendrá voto dirimente, razonando la decisión que en su caso emita.

Artículo 30. El cargo de los integrantes del Consejo será de naturaleza honorífica, por lo que no recibirán retribución, emolumento o compensación alguna por el desempeño de sus funciones.

Artículo 31. Para ser Presidente del Consejo se requiere:

I. Ser ciudadano mexicano en ejercicio de sus derechos y no formar parte de la administración pública; y

II. Tener experiencia socialmente reconocida en la promoción, difusión o fomento de actividades artísticas o culturales.

Artículo 32. El Presidente del Consejo tendrá las siguientes atribuciones:

I. Presidir y conducir las sesiones conforme al orden del día aprobado;

II. Convocar, por conducto del Secretario Técnico, a las sesiones del Consejo;

III. Dar a conocer al Consejo el programa operativo anual del Instituto;

IV. Dar seguimiento al desarrollo de los programas de trabajo, y en su caso, proponer las medidas correctivas que correspondan;

V. Proponer al Consejo las personas físicas y morales, merecedoras de reconocimientos y estímulos; y

VI. Establecer las medidas para guardar el orden en las sesiones.

Artículo 33. La Secretaría Técnica del Consejo, corresponde al Director General del Instituto, quien tendrá y ejercerá las atribuciones siguientes:

I. Citar a los consejeros, previo acuerdo del Presidente, o a petición de la mayoría de los integrantes del Consejo, a las sesiones ordinarias y extraordinarias;

II. Por acuerdo del Presidente, formular el orden del día de las sesiones;

III. Asistir a las sesiones del Consejo en las que tendrá derecho a voz;

IV. Levantar el acta de las sesiones, tanto ordinarias como extraordinarias;

V. Ejecutar los acuerdos y decisiones del Consejo;

VI. Certificar los acuerdos, resoluciones y demás documentación que emita el Consejo; y

VII. Las demás que le confiera el reglamento interior del Instituto.

Artículo 34. El control y vigilancia del Instituto, estará a cargo de un órgano de vigilancia, el cual tendrá el carácter de Contraloría Interna, encargada de controlar, vigilar, fiscalizar y evaluar el uso correcto de los recursos materiales y financieros del organismo, con el fin de determinar su correcto desempeño general.

Título Tercero
Investigación y preservación de la cultura local e indígena

Capítulo I
Investigación

Artículo 35. A través de la investigación, se buscará el conocimiento de

las diversas manifestaciones culturales del pasado y del presente y se difundirán sus expresiones.

Artículo 36. Las autoridades competentes promoverán la incorporación de contenidos culturales universales, y en particular los indígenas y locales de la entidad, en los diversos ciclos educativos, especialmente en el nivel básico.

Asimismo, fomentarán la realización de acciones de cultura en toda la entidad, a fin de cumplir la cobertura de la educación cultural a todos sus habitantes y proporcionará el fortalecimiento de la misma, a través de los medios a su alcance.

Artículo 37. El Ejecutivo del Estado y los municipios, fomentarán investigaciones y promoverán programas para el desarrollo de procedimientos que permitan preservar, promover y difundir la cultura en sus distintas manifestaciones. Para ello, se podrán celebrar convenios con instituciones del sector social y privado, investigadores y especialistas de la materia.

Capítulo II
Cultura Indígena y Local

Artículo 38. El Estado y los municipios en el ámbito de sus respectivas competencias, dictarán las medidas conducentes para la preservación, promoción, difusión e investigación de la cultura indígena y local.

Artículo 39. Conforme al artículo anterior, las medidas tendrán en cuenta entre otras acciones, las siguientes:

I. Reconocer a los grupos indígenas, el derecho a la cultura y a sus manifestaciones;

II. Respetar sus costumbres, tradiciones y formas de vida;

III. Promover su desarrollo, con apego a su idiosincrasia;

IV. Procurar asistencia técnica y asesoría para el desarrollo de sus actividades culturales;

V. Estimular su inventiva artesanal y artística;

VI. Fomentar la promoción de artesanías y su industria;

VII. Promover muestras de la cultura indígena y local, a nivel internacional, nacional, estatal y municipal; y

VIII. Establecer reconocimientos y estímulos para personas y grupos que se hayan distinguido en la preservación, promoción, difusión e investigación de la cultura indígena y local.

Artículo 40. Cuando la cultura indígena o local, comprenda, por su ubicación, más de un municipio u otra entidad federativa, se promoverán acciones de concertación para unificar programas.

Artículo 41. El Estado y los municipios, procurarán destinar un lugar adecuado para la exhibición, y en su caso, venta de productos artesanales, que produzcan los grupos indígenas y locales.

Artículo 42. El Instituto promoverá la difusión de esta Ley en las lenguas vivas de los pueblos originarios del Estado.

Título Cuarto
Reconocimientos y estímulos

Capítulo Único
Fondo Estatal para la Cultura y las Artes

Artículo 43. El Fondo Estatal es el mecanismo financiero del Instituto para apoyar a la comunidad de creadores y artistas

para realizar proyectos creativos e innovadores en las distintas disciplinas artísticas; estimular su proceso de formación; destinar recursos para la investigación y difusión de nuestro patrimonio cultural y demás obras y acciones que permitan cumplir ampliamente el objetivo de la Ley.

Artículo 44. Para el funcionamiento del fondo estatal, deberá considerarse lo siguiente:

I. Establecer un fideicomiso o mecanismo financiero que disponga el Instituto para su ejercicio;

II. Establecer los lineamientos de los montos que se otorguen para el cumplimiento del objeto de esta Ley; y

III. Establecer la planeación programática continua de la entrega de los estímulos señalados en el artículo anterior, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal.

Artículo 45. Previa aprobación del Consejo, el Instituto expedirá las bases para el funcionamiento y ejercicio del fondo estatal, en la que se establecerán las condiciones para otorgar en favor de personas físicas o morales, reconocimientos, becas y estímulos en general, por su contribución a la preservación, promoción, desarrollo, difusión e investigación de la cultura.

Título Quinto
Instrumentos de comunicación

Capítulo Único
Políticas de comunicación

Artículo 46. El Gobierno Estatal, a través de los medios de comunicación con que cuente, apoyará la difusión cultural, mediante la producción, distribución, transmisión y emisión de programas de expresión e información cultural.

Artículo 47. El Instituto, promoverá la coordinación con los diversos medios de comunicación electrónica y escrita, con el propósito de fomentar que sus programas y espacios de divulgación, contribuyan a elevar el nivel cultural de la población, bajo los principios y objetivos establecidos en la presente Ley.

Título Sexto
De la participación social y privada

Capítulo I
De la participación social

Artículo 48. El Instituto y los municipios promoverán la participación corresponsable de la sociedad en la planeación y evaluación de la política pública en materia cultural.

Artículo 49. El instituto celebrará los convenios de concertación para la ejecución de la política pública en la materia e impulsará una cultura cívica que fortalezca la participación de la sociedad civil en los mecanismos de participación que se creen para tal efecto.

Capítulo II
De la participación del sector privado

Artículo 50. El Instituto en coordinación con las dependencias y entidades de la administración pública estatal y los municipios promoverán y concertarán con los sectores privado y social los convenios para la investigación, conservación, promoción, protección y desarrollo del Patrimonio Cultural.

Artículo 51. El Instituto celebrará los convenios de concertación entre los municipios y con los sectores privado y social, para promover campañas de sensibilización, difusión y fomento sobre la importancia de la participación de los diferentes sectores de la población en la conservación de los bienes inmateriales y materiales que constituyan el

Patrimonio Cultural, conforme a los mecanismos de participación que se creen para tal efecto.

Título Séptimo
Mecanismos de coordinación
Capítulo Único

Artículo 52. El Estado, los municipios, las personas físicas o jurídicas de los sectores social y privado, que presten servicios culturales; podrán participar de los mecanismos de coordinación de conformidad con la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, con la finalidad de coordinar acciones con la federación, entidades federativas, municipios o alcaldías de la ciudad de México.

Artículo 53. El Estado y los municipios contribuirán a las acciones destinadas a fortalecer la cooperación e intercambio en materia cultural, con apego a los tratados internacionales celebrados entre los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Cultura y Derechos Culturales y demás leyes aplicables en la materia.

Artículo 54. El Estado y los municipios contribuirán en la integración, actualización y funcionamiento del sistema nacional de información cultural en la forma y términos que establezcan los acuerdos de coordinación que para tal efecto se celebren y que se sujetarán a la Ley General de Cultura y Derechos Culturales y su reglamento.

T R A N S I T O R I O S

Artículo Primero. La presente Ley entrará en vigencia al día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato.

Artículo Segundo. Se abroga la Ley de Fomento y Difusión de la Cultura para el Estado de Guanajuato y sus Municipios.

En razón de lo anteriormente expuesto y fundado, solicito a Usted dar a esta Iniciativa el trámite señalado en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato.

Guanajuato, Gto., a 26 de octubre de 2017. Diputadas y Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Diputado Guillermo Aguirre Fonseca. Diputado Juan José Álvarez Brunel. Diputada Angélica Casillas Martínez. Diputada Estela Chávez Cerrillo. Diputado Alejandro Flores Razo. Diputada Libia Dennise García Muñoz Ledo. Diputada María Beatriz Hernández Cruz. (Con observación). Diputada Araceli Medina Sánchez. Diputado Juan Carlos Muñoz Márquez. Diputado Mario Alejandro Navarro Saldaña. Diputada Verónica Orozco Gutiérrez. Diputado J. Jesús Oviedo Herrera. Diputada Elvira Paniagua Rodríguez. (Con observación). Diputado Éctor Jaime Ramírez Barba. Diputado Juan Carlos Alcántara Montoya. Diputado Luis Vargas Gutiérrez. Diputado Juan Gabriel Villafaña Covarrubias. Diputada María del Sagrario Villegas Grimaldo. Diputada Leticia Villegas Nava. »

No dejo de reconocer que tenemos que trabajar para que nuestro presupuesto en cultura sea considerado positivamente. Es cuánto señora presidenta.

-La C. Presidenta: Muchas gracias diputada. Se turna a la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología y Cultura, con fundamento en el artículo 109, fracción I de nuestra Ley Orgánica, para su estudio y dictamen.

Se da cuenta con los informes de resultados formulados por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, relativos a las revisiones practicadas a las cuentas públicas de la Universidad de Guanajuato, correspondientes al tercer y cuarto trimestres del ejercicio fiscal de 2015; y de las administraciones municipales de Dolores

Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, por el periodo comprendido de julio a diciembre de 2015; así como de Atarjea, Ocampo y Silao de la Victoria, por el ejercicio fiscal de 2016; asimismo a las operaciones realizadas con recursos del Ramo 33 y de obra pública de los municipios de Celaya y Guanajuato, por el ejercicio fiscal de 2016.

PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES DE RESULTADOS FORMULADOS POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE GUANAJUATO, RELATIVOS A LAS REVISIONES PRACTICADAS A LAS CUENTAS PÚBLICAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO, CORRESPONDIENTES AL TERCER Y CUARTO TRIMESTRES DEL EJERCICIO FISCAL DE 2015; Y DE LAS ADMINISTRACIONES MUNICIPALES DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DE JULIO A DICIEMBRE DE 2015; ASÍ COMO DE ATARJEA, OCAMPO Y SILAO DE LA VICTORIA, POR EL EJERCICIO FISCAL DE 2016; ASIMISMO A LAS OPERACIONES REALIZADAS CON RECURSOS DEL RAMO 33 Y DE OBRA PÚBLICA DE LOS MUNICIPIOS DE CELAYA Y GUANAJUATO, POR EL EJERCICIO FISCAL DE 2016.

»DIP. ANGÉLICA CASILLAS MARTÍNEZ. PRESIDENTA DEL CONGRESO DEL ESTADO PRESENTE. OFICIO NÚM. ASEG/GUANAJUATO/1850/17.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 63 fracción XXVIII último párrafo y 66 fracción VII, de la Constitución Política del Estado de Guanajuato; 230 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Guanajuato; así como artículos 9 fracción VIII, 23 fracción IX, 41 y 57 fracciones XII y XXII de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato abrogada, de conformidad con los artículos transitorios Tercero y Cuarto de la vigente Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, remito a Usted, en un tanto, el informe de resultados del proceso de fiscalización derivado de la revisión de Cuenta Pública practicada a la Universidad de Guanajuato, por el tercer y cuarto trimestre de 2015.

Al respecto cabe señalar que el informe de resultados fue notificado el 05 y 06 de septiembre de 2017, a lo que posteriormente se promovió recurso de reconsideración. De lo anterior se envían además, las constancias necesarias para su debida acreditación.

Sin otro particular por el momento, me despido reiterando la seguridad de mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente. Guanajuato, Gto., 19 de octubre de 2017. El Auditor Superior. Lic. y M.F. Javier Pérez Salazar. »

»DIP. ANGÉLICA CASILLAS MARTÍNEZ. PRESIDENTA DEL CONGRESO DEL ESTADO. PRESENTE. NÚMERO DE OFICIO ASEG/1826/17

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 63 fracción XXVIII último párrafo y 66 fracción VII, de la Constitución Política del Estado de Guanajuato; 230 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Guanajuato; así como artículos 9 fracción VIII, 23 fracción IX, 41 y 57 fracciones XII y XXII de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato abrogada, de conformidad con los artículos transitorios Tercero y Cuarto de la vigente Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, remito a Usted, en un tanto, el informe de resultados del proceso de fiscalización derivado de la revisión de Cuenta Pública practicada al municipio de Dolores Hidalgo, Gto., por el periodo de julio a diciembre de 2015.

Al respecto cabe señalar que el informe de resultados fue notificado el 07 de septiembre de 2017, a lo que posteriormente se promovió recurso de reconsideración. De lo anterior se envían además, las constancias necesarias para su debida acreditación.

Sin otro particular por el momento, me despido reiterando la seguridad de mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente. Guanajuato, Gto., 17 de octubre de 2017. El Auditor Superior. Lic. y M.F. Javier Pérez Salazar. »

»DIP. ANGÉLICA CASILLAS MARTÍNEZ. PRESIDENTA DEL CONGRESO DEL ESTADO PRESENTE. NÚMERO DE OFICIO ASEG/1836/17

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 63 fracción XXVIII último párrafo y 66 fracción VII, de la Constitución Política del Estado de Guanajuato; 230 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Guanajuato; así como artículos 35, 37 fracciones IV y V, 82 fracción XXIV y 87 fracción XII, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, en relación con el artículo 28 del Reglamento de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, remito a Usted, en un tanto, el informe de resultados del proceso de fiscalización derivado de la revisión de Cuenta Pública practicada al municipio de Atarjea, Gto., por el ejercicio fiscal 2016.

Al respecto cabe señalar que el informe de resultados fue notificado el 04 de octubre de 2017, a lo que posteriormente no se promovió recurso de reconsideración. De lo anterior se envían además, las constancias necesarias para su debida acreditación.

Sin otro particular por el momento, me despido reiterando la seguridad de mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente. Guanajuato, Gto., 17 de octubre de 2017. El Auditor Superior. Lic. y M.F. Javier Pérez Salazar. »

»DIP. ANGÉLICA CASILLAS MARTÍNEZ. PRESIDENTA DEL CONGRESO DEL ESTADO PRESENTE. NÚMERO DE OFICIO ASEG/1838/17

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 63 fracción XXVIII último párrafo y 66 fracción VII, de la Constitución Política del Estado de Guanajuato; 230 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Guanajuato; así como artículos 35, 37 fracciones IV y V, 82 fracción XXIV y 87 fracción XII, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, en relación con el artículo 28 del Reglamento de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, remito a Usted, en un tanto, el informe de resultados del proceso de fiscalización derivado de la revisión de Cuenta Pública practicada al municipio de Ocampo, Gto., por el ejercicio fiscal 2016.

Al respecto cabe señalar que el informe de resultados fue notificado el 05 de octubre de 2017, a lo que posteriormente no se promovió recurso de reconsideración. De lo anterior se envían además, las constancias necesarias para su debida acreditación.

Sin otro particular por el momento, me despido reiterando la seguridad de mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente. Guanajuato, Gto., 17 de octubre de 2017. El Auditor Superior. Lic. y M.F. Javier Pérez Salazar. »

»DIP. ANGÉLICA CASILLAS MARTÍNEZ. PRESIDENTA DEL CONGRESO DEL ESTADO PRESENTE. NÚMERO DE OFICIO ASEG/1839/17

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 63 fracción XXVIII último párrafo y 66 fracción VII, de la Constitución Política del Estado de Guanajuato; 230 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Guanajuato; así como artículos 35, 37 fracciones IV y V, 82 fracción XXIV y 87 fracción XII, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, en relación con el artículo 28 del Reglamento de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, remito a Usted, en un tanto, el informe de resultados del proceso de fiscalización derivado de la revisión de Cuenta Pública practicada al municipio de Silao, Gto., por el ejercicio fiscal 2016.

Al respecto cabe señalar que el informe de resultados fue notificado el 28 de agosto de 2017, a lo que posteriormente se promovió recurso de reconsideración. De

lo anterior se envían además, las constancias necesarias para su debida acreditación.

Sin otro particular por el momento, me despido reiterando la seguridad de mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente. Guanajuato, Gto., 17 de octubre de 2017. El Auditor Superior. Lic. y M.F. Javier Pérez Salazar. »

»DIP. ANGÉLICA CASILLAS MARTÍNEZ. PRESIDENTA DEL CONGRESO DEL ESTADO PRESENTE. NÚMERO DE OFICIO ASEG/1840/17

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 63 fracción XXVIII último párrafo y 66 fracción VII, de la Constitución Política del Estado de Guanajuato; 230 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Guanajuato; así como artículos 35, 37 fracciones IV y V, 82 fracción XXIV y 87 fracción XII, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, en relación con el artículo 28 del Reglamento de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, remito a Usted, en un tanto, el informe de resultados del proceso de fiscalización derivado de la revisión de Ramo 33 y Obra Pública practicada al municipio de Celaya, Gto., por el periodo de enero a diciembre de 2016.

Al respecto cabe señalar que el informe de resultados fue notificado el 07 de septiembre de 2017, a lo que posteriormente se promovió recurso de reconsideración. De lo anterior se envían además, las constancias necesarias para su debida acreditación.

Sin otro particular por el momento, me despido reiterando la seguridad de mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente. Guanajuato, Gto., 17 de octubre de 2017. El Auditor Superior. Lic. y M.F. Javier Pérez Salazar. »

»DIP. ANGÉLICA CASILLAS MARTÍNEZ. PRESIDENTA DEL CONGRESO DEL ESTADO PRESENTE. NÚMERO DE OFICIO ASEG/1851/17

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 63 fracción XXVIII último párrafo y 66 fracción VII, de la Constitución Política del Estado de Guanajuato; 230 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Guanajuato; así como artículos 35, 37 fracciones IV y V, 82 fracción XXIV y 87 fracción XII, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, en relación con el artículo 28 del Reglamento de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, remito a Usted, en un tanto, el informe de resultados del proceso de fiscalización derivado de la revisión de Ramo 33 y Obra Pública practicada al municipio de Guanajuato, Gto., por el periodo de enero a diciembre de 2016.

Al respecto cabe señalar que el informe de resultados fue notificado el 23 de agosto de 2017, a lo que posteriormente se promovió recurso de reconsideración. De lo anterior se envían además, las constancias necesarias para su debida acreditación.

Sin otro particular por el momento, me despido reiterando la seguridad de mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente. Guanajuato, Gto., 19 de octubre de 2017. El Auditor Superior. Lic. y M.F. Javier Pérez Salazar. »

-La C. Presidenta: Con fundamento en el artículo 112, fracción XII de nuestra Ley Orgánica; se turnan a la Comisión de Hacienda y Fiscalización, para su estudio y dictamen.

Corresponde tomar votación en los siguientes puntos del orden del día; por lo que esta mesa directiva procede a cerciorarse de la presencia de las diputadas y de los diputados asistentes a la presente sesión. Asimismo, se pide a las diputadas y a los diputados abstenerse de abandonar este salón durante las votaciones.

Se pide al diputado J. Jesús Oviedo Herrera dar lectura a la propuesta de Punto de Acuerdo suscrita por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, a efecto de formular

un respetuoso exhorto a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que refrende una inversión al menos comparable a la del año 2016, en cuanto a los recursos del Fondo Metropolitano asignado a las Zonas Metropolitanas correspondientes al Estado de Guanajuato para el ejercicio fiscal del año 2018.

PROPUESTA Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL PUNTO DE ACUERDO SUSCRITA POR DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, A EFECTO DE FORMULAR UN RESPETUOSO EXHORTO A LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, PARA QUE REFRENDE UNA INVERSIÓN AL MENOS COMPARABLE A LA DEL AÑO 2016, EN CUANTO A LOS RECURSOS DEL FONDO METROPOLITANO ASIGNADO A LAS ZONAS METROPOLITANAS CORRESPONDIENTES AL ESTADO DE GUANAJUATO PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2018.



C. Dip. J. Jesús Oviedo Herrera: Con el permiso de la diputada presidenta. Compañeras y compañeros diputados. Medios de comunicación. Ciudadanos que nos acompañan en esta Casa Legislativa Guanajuatense.

He solicitado el uso de la voz a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional para dar lectura a la propuesta de Punto de Acuerdo mediante el cual el Congreso de Guanajuato, exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que aporte mayores recursos en el Fondo Metropolitano asignado a las Zonas Metropolitanas de nuestro estado de Guanajuato, de conformidad con las siguientes consideraciones.

»DIPUTADA ANGÉLICA CASILLAS MARTÍNEZ. PRESIDENTA DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUANAJUATO SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA. PRESENTE.

Quienes integramos el **Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional** ante la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57 primer párrafo de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, 177 y 204 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, nos permitimos presentar y someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, la presente propuesta de **Punto de Acuerdo, de urgente y obvia resolución, mediante el cual el Congreso del Estado libre y soberano de Guanajuato exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que refrende una inversión al menos comparable a la del año 2016, en cuanto a los recursos del Fondo Metropolitano asignado a las Zonas Metropolitanas correspondientes al Estado de Guanajuato para el ejercicio fiscal del año 2018**, lo anterior de conformidad a las siguientes:

CONSIDERACIONES

La Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano establece el concepto de Zona Metropolitana como aquellos Centros de Población o conurbaciones que, por su complejidad, interacciones, relevancia social y económica, conforman una unidad territorial de influencia dominante y revisten importancia estratégica para el desarrollo nacional.

Por lo que respecta a nuestro estado, en Guanajuato contamos con las zonas metropolitanas correspondientes a la ciudad de León, Moroleón-Uriangato, Laja-Bajío, La Piedad–Pénjamo la cual es compartida con el estado de Michoacán y la de Irapuato-Salamanca que está en proceso de reconocimiento por parte de la federación.

En Guanajuato hemos experimentado cambios muy importantes respecto al fenómeno demográfico, condición que ha impulsado y desarrollado las economías y la competitividad de las regiones que contemplan dichas zonas metropolitanas.

Como ejemplo de lo anterior, podemos mencionar que en las Zonas Metropolitanas de Guanajuato se concentra el 71% de la población del estado, es decir 3.9 millones de personas.

(Si hacemos esta comparación a nivel nacional, Guanajuato tiene una mayor relevancia en este tema porque a nivel nacional –casi- el 60% de la población está dentro de zonas metropolitanas; por lo tanto, Guanajuato tiene una mayor influencia en te tema. Más aún, Guanajuato es el segundo estado con más zonas metropolitanas en el país y eso también es algo que hay que tomar en cuenta para seguir impulsando este fenómeno que para Guanajuato es fundamental por todos estos datos que hemos mencionado)

Este crecimiento demográfico ha logrado fortalecer los intercambios económicos y sociales, pero también representa un reto muy importante para poder mantener y mejorar el acceso a los servicios de movilidad, recolección de residuos, salud, infraestructura, educación, vivienda y seguridad.

Y aunque en Guanajuato, la planeación metropolitana se ha fortalecido en los últimos diez años, debemos tener en cuenta que los servicios públicos no podrán ser atendidos con una visión sólo municipal, sino por el contario deben ser atendidas con una perspectiva metropolitana y regional.

(Hoy quiero comentar que hay una iniciativa que se ha denominado Corredor Central, que no solamente incide en temas metropolitanos, sino que ahora se está planteando un desarrollo regional entre varios estados del centro y que me parece que tenemos que tener esa consolidación de las zonas metropolitanas del estado, para que podamos también tener esa influencia que debemos tener como estado en esta iniciativa del Corredor Central)

Ahora bien, con la finalidad de impulsar a las zonas metropolitanas en toda la república los Diputados del Congreso de la Unión estipularon la creación de un Fondo Metropolitano, cuyos recursos son destinados prioritariamente a estudios, planes, evaluaciones, programas, proyectos, acciones, obras de infraestructura y su equipamiento, en cualquiera de sus componentes, ya sean nuevos, en proceso, o para completar el financiamiento de aquéllos que no hubiesen contado con los recursos necesarios para su ejecución; los cuales demuestren ser viables y sustentables, orientados a promover la adecuada planeación del desarrollo regional, urbano y del ordenamiento del territorio para impulsar la competitividad económica, la sustentabilidad y las capacidades productivas de las zonas metropolitanas, coadyuvar a su viabilidad y a mitigar su vulnerabilidad o riesgos por fenómenos naturales, ambientales y los propiciados por la dinámica demográfica y económica, así como a la consolidación urbana y al aprovechamiento óptimo de las ventajas competitivas de funcionamiento regional, urbano y económico del espacio territorial de las zonas metropolitanas.

En los últimos años, la Comisión de Desarrollo Metropolitano de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión ha proyectado recursos importantes para el Fondo Metropolitano de la Entidad, donde se ha priorizado la cartera de inversiones para proyectos de alto impacto.

Con el paso del tiempo los recursos presupuestales para este rubro fueron en aumento desde el 2008 posicionando a Guanajuato como la quinta entidad que recibe más recursos en el País por concepto de Zonas Metropolitanas.

Sin embargo, el presupuesto asignado para el ejercicio presupuestal del año 2017 tuvo un decremento muy considerable respecto al presupuesto otorgado en el año 2016 pasando de $ 467 millones 594 mil 071 pesos a solo $145 millones 677 mil 231 pesos.

Reconocemos que los recursos otorgados a Guanajuato han sido fundamentales para el desarrollo de la región, por ello anticipándonos a la proyección presupuestal que realizarán los diputados del Congreso de la Unión, esta Soberanía considera pertinente hacer un respetuoso exhorto para que en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2018, contemplen un incremento en el presupuesto otorgado durante el año 2017 y

éste pueda ser equiparable al considerado para el ejercicio del año 2016.

La dinámica actual implica que Guanajuato cuente con inversiones que potencialicen el impulso económico que la entidad tiene, muestra de ello, es que en la región de la Zona Metropolitana Laja-Bajío se ha generado un crecimiento demográfico y económico muy considerable pues con la instalación de la planta de la empresa Honda y la próxima puesta en marcha de la planta de la empresa Toyota se han potencializado los municipios de la región.

Ahora bien, en Guanajuato existen estudios, planes, proyectos ejecutivos, acciones de infraestructura y obras que requieren ser materializados para continuar con el crecimiento de gran impacto que ha tenido la entidad en la región.

Requerimos consolidar la consolidación urbanos, el aprovechamiento óptimo de las ventajas competitivas, estratégicas y económicas que en Guanajuato tenemos y que nos distinguen dentro de la región centro- occidente del país.

Consolidar los proyectos de gran beneficio urbano, demográfico, social, de movilidad y ambiental será posible si contamos con los recursos necesarios para su ejecución, por tal motivo consideramos que este respetuoso exhorto representa un compromiso con el pueblo de Guanajuato y con el presente y futuro de su desarrollo.

Las zonas metropolitanas de la entidad y los millones de personas que viven en ellas se verán ampliamente beneficiadas con el apoyo y el trabajo conjunto que podamos promover desde el Congreso del Estado y la Cámara de Diputados.

Derivados de los argumentos anteriormente expuestos nos permitimos someter a la consideración de esta honorable Asamblea, el siguiente punto de:

A C U E R D O

ÚNICO. La Sexagésima Tercera Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guanajuato efectúa un respetuoso exhorto a los integrantes de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que refrende una inversión al menos comparable a la del año 2016, en cuanto a los recursos del Fondo Metropolitano asignado a las Zonas Metropolitanas correspondientes al Estado de Guanajuato para el ejercicio fiscal del año 2018

Guanajuato, Gto., a 26 de octubre de 2017. **Diputadas y Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Diputado Guillermo Aguirre Fonseca. Diputado Juan José Álvarez Brunel. Diputada Angélica Casillas Martínez. (Con observación) Diputada Estela Chávez Cerrillo. Diputado Alejandro Flores Razo. Diputada Libia Dennise García Muñoz Ledo. Diputada María Beatriz Hernández Cruz. (Con observación). Diputada Araceli Medina Sánchez. Diputado Juan Carlos Muñoz Márquez. Diputado Mario Alejandro Navarro Saldaña. Diputada Verónica Orozco Gutiérrez. Diputado J. Jesús Oviedo Herrera. Diputada Elvira Paniagua Rodríguez. (Con observación). Diputado Éctor Jaime Ramírez Barba. Diputado Juan Carlos Alcántara Montoya. Diputado Luis Vargas Gutiérrez. Diputado Juan Gabriel Villafaña Covarrubias. Diputada María del Sagrario Villegas Grimaldo. Diputada Leticia Villegas Nava. »**

Es cuánto presidenta.

-La C. Presidenta: Gracias diputado Oviedo.

En los términos solicitados por los proponentes y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 177 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se somete a la Asamblea se declare de obvia resolución la propuesta de Punto de Acuerdo.

Se informa a la Asamblea que a efecto de que la propuesta de Punto de Acuerdo se declare de obvia resolución, debe ser aprobada por las dos terceras partes del Pleno.

Si alguna diputada o algún diputado desean hacer el uso de la palabra con relación a la obvia resolución, sírvanse manifestarlo indicando el sentido de su participación.

En virtud de que ninguna diputada y ningún diputado desean hacer el uso de la palabra, se ruega a la secretaría que en votación económica, a través del sistema electrónico, pregunte a la Asamblea si es de aprobarse la obvia resolución sometida a su consideración. Para tal efecto, se abre el sistema electrónico.

-La Secretaría: Por instrucciones de la presidencia, en votación económica, mediante el sistema electrónico, se consulta a las diputadas y a los diputados si se aprueba la obvia resolución.

(Votación)

¿Falta alguna diputada o algún diputado de emitir su voto?

-La C. Presidenta: Se cierra el sistema electrónico.

-La Secretaría: Presidenta le informo que se registraron 30 votos a favor y ningún voto en contra.

-La C. Presidenta: Gracias diputada secretaria.

En consecuencia se somete a discusión el Punto de Acuerdo.

Si alguna diputada o algún diputado desean hacer uso de la palabra en pro o en contra, manifiéstenlo indicando el sentido de su participación.

Al no registrarse participaciones, se instruye a la secretaría para que en votación nominal, a través del sistema electrónico, pregunte a la Asamblea si es de aprobarse o no el Punto de Acuerdo. Para tal efecto se abre el sistema electrónico.

-La Secretaría: En votación nominal, por el sistema electrónico, se consulta las diputadas y a los diputados si se aprueba el Punto de Acuerdo puesto a su consideración.

(Votación)

¿Falta alguna diputada o algún diputado de emitir su voto?

-La C. Presidenta: Se cierra el sistema electrónico.

-La Secretaría: Diputada presidenta, le informo que se registraron 30 votos favor y ningún voto en contra.

-La C. Presidenta: El Punto de Acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de los presentes.

Remítase el acuerdo aprobado, junto con sus consideraciones, a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para los efectos conducentes.

Se solicita a la diputada Verónica Orozco Gutiérrez, dar lectura a la propuesta de Punto de Acuerdo presentada por diputadas y diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática; y de las Representaciones Parlamentarias de Movimiento Ciudadano y de Nueva Alianza y del diputado David Alejandro Landeros, por el que se formula un respetuoso exhorto al Senado de la Republica con la finalidad que una vez recibida la información sobre los motivos de la remoción del Dr. Santiago Nieto Castillo, del cargo de fiscal especializado en la Atención de Delitos Electorales, le dé el carácter de información pública y se ponga a disposición de la ciudadanía a través del portal de internet del propio Senado, además solicitamos que la Cámara analice y estudie la separación del Fiscal antes mencionado y en caso de ser conducente se ejerza su facultad constitucional para objetar la referida remoción con la finalidad de que se restablezcan las condiciones de legalidad y certeza jurídica en la Fiscalía Especializada, brindando con ello la seguridad a los mexicanos del compromiso del Poder Legislativo Federal en el combate a la corrupción y la preservación de la democracia en nuestro país.

PROPUESTA Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL PUNTO DE ACUERDO PRESENTADO POR DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DE LOS PARTIDOS ACCIÓN NACIONAL Y DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA; Y DE LAS REPRESENTACIONES PARLAMENTARIAS DE

MOVIMIENTO CIUDADANO Y DE NUEVA ALIANZA Y DEL DIPUTADO DAVID ALEJANDRO LANDEROS, POR EL QUE SE FORMULA UN RESPETUOSO EXHORTO AL SENADO DE LA REPUBLICA CON LA FINALIDAD QUE UNA VEZ RECIBIDA LA INFORMACIÓN SOBRE LOS MOTIVOS DE LA REMOCIÓN DEL DR. SANTIAGO NIETO CASTILLO, DEL CARGO DE FISCAL ESPECIALIZADO EN LA ATENCIÓN DE DELITOS ELECTORALES, LE DÉ EL CARÁCTER DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y SE PONGA A DISPOSICIÓN DE LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DEL PORTAL DE INTERNET DEL PROPIO SENADO, ADEMÁS SOLICITAMOS QUE LA CÁMARA ANALICE Y ESTUDIE LA SEPARACIÓN DEL FISCAL ANTES MENCIONADO Y EN CASO DE SER CONDUCENTE SE EJERZA SU FACULTAD CONSTITUCIONAL PARA OBJETAR LA REFERIDA REMOCIÓN CON LA FINALIDAD DE QUE SE RESTABLEZCAN LAS CONDICIONES DE LEGALIDAD Y CERTEZA JURÍDICA EN LA FISCALÍA ESPECIALIZADA, BRINDANDO CON ELLO LA SEGURIDAD A LOS MEXICANOS DEL COMPROMISO DEL PODER LEGISLATIVO FEDERAL EN EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y LA PRESERVACIÓN DE LA DEMOCRACIA EN NUESTRO PAÍS.



C. Dip. Verónica Orozco Gutiérrez: Buenas tardes presidenta y miembros de la mesa directiva. Estimadas compañeras y compañeros. Medios de comunicación. Ciudadanos que hoy nos acompañan en esta Casa Legislativa.

(Leyendo) »Diputada Angélica Casillas Martínez. Presidenta del Congreso del Estado Libre y Soberano de Guanajuato. Sexagésima Tercera Legislatura. Presente.

Quienes integramos los **Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática, además de las Representaciones Parlamentarias de Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza y el Diputado David Alejandro Landeros** ante la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57 primer párrafo de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, 177 y 204 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, nos permitimos presentar y someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, la presente propuesta de Punto de Acuerdo, de urgente y obvia resolución, mediante el cual **el Congreso del Estado Libre y Soberano de Guanajuato efectúa un respetuoso exhorto al Senado de la Republica con la finalidad que una vez recibida la información sobre los motivos de la remoción del Dr. Santiago Nieto Castillo del cargo de fiscal especializado en la Atención de Delitos Electorales, le dé el carácter de información pública y se ponga a disposición de la ciudadanía a través del portal de internet del propio Senado, además solicitamos que la Cámara analice y estudie la separación del Fiscal antes mencionado y en caso de ser conducente se ejerza su facultad constitucional para objetar la referida remoción con la finalidad de que se restablezcan las condiciones de legalidad y certeza jurídica en la Fiscalía Especializada, brindando con ello la seguridad a los mexicanos del compromiso del Poder Legislativo Federal en el combate a la corrupción y la preservación de la democracia en nuestro país**, lo anterior de conformidad a las siguientes:

CONSIDERACIONES

El pasado 20 de octubre, el Dr. Santiago Nieto Castillo, que había sido designado por el Senado de la Republica como titular de la de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales el 19 de febrero de 2015, fue removido de su cargo por órdenes del Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, Alberto Elías Beltrán, actuando en suplencia del Procurador General de la República, justificadas a través de un escueto comunicado en el que la PGR señaló que:

> *»…removió de su cargo al titular de la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales.*
>
> *Lo anterior, toda vez que el referido servidor público transgredió lo dispuesto en el Código de Conducta*

de la Procuraduría General de la República…» [19]

Esta remoción se llevó a cabo apenas unos días después de que el ahora ex titular de la Fiscalía Especializada señaló ante la prensa nacional que el ex director de PEMEX, Emilio Lozoya Austin, buscó presionarlo, con el objetivo de que el titular de la FEPADE afirmara públicamente la inocencia de Lozoya en las investigaciones respecto al presunto desvío de recursos de la empresa Odebrecht en favor del Partido Revolucionario Institucional, que forman parte de una carpeta de investigación iniciada en agosto por la fiscalía.

En vista de estas circunstancias, nos preocupa la destitución de Santiago Nieto, que parecería una represalia directa por las declaraciones del ahora ex funcionario y por su participación destacada en la investigación de otros casos de alto perfil. Más aun, la remoción simboliza una profunda debilidad institucional, que resulta particularmente grave cuando el país se prepara para un intenso proceso electoral, en el que será indispensable que instituciones como la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales tengan la confianza, la certeza y el respaldo para llevar a cabo su labor incluso a pesar de las presiones políticas y de los intereses que puedan verse afectados.

Estamos convencidos de que en un sistema democrático, la institución encargada de investigar los delitos electorales no sólo debe tener capacidades efectivas, sino autonomía e independencia, empezando por la certeza laboral de sus funcionarios, de tal forma que el despido o la amenaza de este no pueda emplearse como instrumento de presión, para afectar el trabajo del fiscal y de todos sus colaboradores.

Por ello y en ausencia de una explicación creíble respecto a su remoción, permanece en la opinión pública nacional la percepción de que la FEPADE y su extitular se han convertido en nuevas víctimas de la falta de respeto a los principios de autonomía e independencia que durante muchos años ha constituido una de las características más contraproducentes de las instancias de procuración y administración de justicia en este país, con la gravedad añadida de que esta remoción contamina el ambiente de cara a la elección del próximo año, alentando las sospechas de que la verdadera razón de fondo tras la salida del fiscal fue el deseo de algún actor o grupo político de colocar un nuevo titular de la FEPADE, que se adapte a su agenda particular, enviando además un mensaje tácito de incertidumbre y una línea específica a todos los funcionarios de la administración federal.

Esta destitución no es un caso aislado, sino que se suma a otras situaciones que ponen en entredicho la convicción democrática de las autoridades a nivel federal, incluyendo los casos de presunto espionaje a periodistas y activistas de la sociedad civil, y la hostilidad en contra de algunos políticos de oposición. Por ello, los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática, además de la Representaciones Parlamentarias de Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza y el diputado independiente, tenemos muy claro que la destitución del titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) representa un atentado contra el Estado de derecho, la justicia y la democracia del país.

Por todo lo anterior, y derivado de los argumentos anteriormente expuestos nos permitimos someter a la consideración de esta honorable Asamblea, el siguiente punto de:

A C U E R D O

ÚNICO. La Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Guanajuato efectúa un respetuoso exhorto al Senado de la Republica con la finalidad que una vez recibida la información sobre los motivos de la remoción del Dr. Santiago Nieto Castillo del cargo de fiscal especializado en la Atención de Delitos Electorales, le dé el carácter de información pública y se ponga a disposición de la ciudadanía a través del Portal de Internet del propio Senado, además solicitamos que la Cámara analice y estudie la separación del Fiscal antes mencionado y en caso de ser

[19] Procuraduría General de la República, *Comunicado 1386/17*, Disponible en: https://www.gob.mx/pgr/prensa/comunicado-1386-17-la-procuraduria-general-de-la-republica-informa

conducente se ejerza su facultad constitucional para objetar la referida remoción con la finalidad de que se restablezcan las condiciones de legalidad y certeza jurídica en la Fiscalía Especializada, brindando con ello la seguridad a los mexicanos del compromiso del Poder Legislativo Federal en el combate a la corrupción y la preservación de la democracia en nuestro país.

Guanajuato, Gto., a 26 de octubre de 2017. Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Diputado Éctor Jaime Ramírez Barba. Diputado Mario Alejandro Navarro Saldaña. Diputado Juan Gabriel Villafaña Covarrubias. Diputado Alejandro Flores Razo. Diputado Guillermo Aguirre Fonseca. Diputado Juan José Álvarez Brunel. Diputada María Beatriz Hernández Cruz. Diputada Araceli Medina Sánchez. Diputado Juan Carlos Muñoz Márquez. Diputada Angélica Casillas Martínez. Diputada Verónica Orozco Gutiérrez. Diputado J. Jesús Oviedo Herrera. Diputada Elvira Paniagua Rodríguez. Diputada Estela Chávez Cerrillo. Diputado Juan Carlos Alcántara Montoya. Diputada Libia Denisse García Muñoz Ledo. Diputado Luis Vargas Gutiérrez. Diputada Leticia Villegas Nava. Diputada María del Sagrario Villegas Grimaldo.

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Diputado Isidoro Bazaldúa Lugo. Diputado Jesús Gerardo Silva Campos. Diputada María Alejandra Torres Novoa.

Representación Parlamentaria de Movimiento Ciudadano. Diputado Eduardo Ramírez Granja.

Representación Parlamentaria Nueva Alianza. Diputado Alejandro Trejo Ávila.

Diputado Independiente. Diputado David Alejandro Landeros. »

Es cuánto señora presidenta.

-La C. Presidenta: Gracias. En los términos solicitados por los proponentes y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 177 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se somete a la Asamblea se declare de obvia resolución la propuesta de Punto de Acuerdo.

Se informa a la Asamblea que a efecto de que la propuesta de Punto de Acuerdo se declare de obvia resolución, debe ser aprobada por las dos terceras partes del Pleno.

Si alguna diputada o algún diputado desean hacer el uso de la palabra con relación a la obvia resolución, sírvanse manifestarlo indicando el sentido de su participación.

En virtud de que ninguna diputada y ningún diputado desean hacer el uso de la palabra, se ruega a la secretaría que en votación económica, a través del sistema electrónico, pregunte a la Asamblea si es de aprobarse la obvia resolución sometida a su consideración. Para tal efecto, se abre el sistema electrónico.

-La Secretaría: Por instrucciones de la presidencia, en votación económica, mediante el sistema electrónico, se consulta a las diputadas y a los diputados si se aprueba la obvia resolución.

(Votación)

¿Falta alguna diputada o algún diputado de emitir su voto?

-La C. Presidenta: Se cierra el sistema electrónico.

-La Secretaría: Señora presidenta le informo que la obvia resolución ha sido aprobada con 24 votos a favor y con 9 votos en contra.

-La C. Presidenta: En consecuencia se somete a discusión el Punto de Acuerdo.

Si alguna diputada o algún diputado desean hacer uso de la palabra en pro o en contra, manifiéstenlo indicando el sentido de su participación.

Al no registrarse participaciones, se instruye a la secretaría para que en votación nominal, a través del sistema electrónico, pregunte a la Asamblea si es de aprobarse o no el Punto de Acuerdo. Para tal efecto se abre el sistema electrónico.

-La Secretaría: En votación nominal, por el sistema electrónico, se consulta las diputadas y a los diputados si se aprueba el Punto de Acuerdo puesto a su consideración.

(Votación)

¿Falta alguna diputada o algún diputado de emitir su voto?

-La C. Presidenta: Se cierra el sistema electrónico.

-La Secretaría: Diputada presidenta, le informo que se registraron 24 votos favor y 9 votos en contra.

-La C. Presidenta: El Punto de Acuerdo ha sido aprobado por mayoría de los presentes.

En consecuencia, remítase el acuerdo aprobado, junto con sus consideraciones al Senado de la República, para los efectos conducentes.

Compañeras y compañeros legisladores, con el objeto de agilizar el trámite parlamentario de los dictámenes presentados por las Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización y de Gobernación y Puntos Constitucionales, de Gobernación y Puntos Constitucionales; y de Hacienda y Fiscalización, contenidos en los puntos del 13 al 17 del orden del día y en virtud de haberse proporcionado con anticipación los asuntos materia de la presente sesión, así como encontrarse en la Gaceta Parlamentaria, esta presidencia propone se dispense la lectura de los mismos y sean sometidos a votación y posterior votación uno a uno.

Asimismo, se dispense la lectura de los dictámenes formulados por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, contenidos en los puntos del 18 al 27 del orden del día, y sean sometidos a discusión y posterior votación en un solo acto.

La propuesta está a consideración de la Asamblea. Si alguna diputada o algún diputado desean hacer uso de la palabra, manifiéstenlo a esta presidencia.

No habiendo intervenciones, se pide a la secretaría que en votación económica, a través del sistema electrónico, pregunte a la Asamblea si se aprueba la propuesta. Para tal efecto, se abre el sistema electrónico.

-La Secretaría: Por instrucciones de la presidencia, se pregunta al Pleno en votación económica, por el sistema electrónico, si se aprueba la propuesta que nos ocupa.

(Votación)

¿Falta alguna diputada o algún diputado de emitir su voto?

-La C. Presidenta: Se cierra el sistema electrónico.

-La Secretaría: Señora presidenta, la propuesta ha sido aprobada con 32 votos a favor y ningún voto en contra.

-La C. Presidenta: Gracias diputa da secretaria. Bajo estos términos continuaremos con el desahogo del orden del día.

Se somete a discusión el dictamen formulado por las Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización y de Gobernación y Puntos Constitucionales, relativo a la iniciativa de Ley de Austeridad para el Estado de Guanajuato y sus Municipios, formulada por el diputado David Alejandro Landeros de la Representación Parlamentaria del Partido MORENA.

DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL DICTAMEN FORMULADO POR LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y FISCALIZACIÓN Y DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, RELATIVO A LA INICIATIVA DE LEY DE AUSTERIDAD PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO Y SUS MUNICIPIOS, FORMULADA POR EL DIPUTADO DAVID ALEJANDRO LANDEROS DE LA REPRESENTACIÓN PARLAMENTARIA DEL PARTIDO MORENA.

»C. Presidenta del Congreso del Estado Presente.

Estas Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización y de Gobernación y Puntos

Constitucionales recibimos para efectos de estudio y dictamen, la iniciativa de Ley de Austeridad para el Estado de Guanajuato y sus Municipios, formulada por el diputado David Alejandro Landeros de la Representación Parlamentaria del Partido MORENA.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 91, III, fracción XIX, 112, fracción XIV y 171 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, analizamos la iniciativa, presentando a la consideración de la Asamblea, el siguiente:

DICTAMEN

I. Del proceso legislativo

1. En ejercicio de la facultad que le confieren los artículos 56, fracción II de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; y 167, fracción II de Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, el diputado David Alejandro Landeros, en su momento de la Representación Parlamentaria del Partido Morena ante esta Sexagésima Tercera Legislatura presentó la iniciativa de Ley de Austeridad para el Estado de Guanajuato y sus Municipios. Dicha iniciativa se turnó a estas Comisiones Unidas el 20 de octubre de 2016, para efectos de su estudio y dictamen, siendo radicada el 16 de noviembre del mismo año.

2. En términos de lo dispuesto por el artículo 63 fracción II del citado ordenamiento constitucional, el Congreso del Estado resulta competente para conocer y dictaminar la citada iniciativa.

3. En la reunión de estas Comisiones Unidas, que tuvo verificativo el 28 de agosto del año en curso, se aprobó la metodología para el análisis y dictaminación de la referida iniciativa, acordando lo siguiente:

a) Remitirla a las diputadas y a los diputados integrantes de la Sexagésima Tercera Legislatura, a la Coordinación General Jurídica de Gobierno del Estado, a la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, al Poder Judicial, a los organismos autónomos, a los 46 ayuntamientos, a la Auditoría Superior del Estado y a la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas del Congreso del Estado, quienes contaron con un término que feneció el 29 de septiembre del año en curso, para remitir los comentarios y observaciones que estimaran pertinentes.

b) Establecer un link en la Página Web del Congreso del Estado, para que la iniciativa fuera consultada y se hicieran llegar observaciones a más tardar el 29 de septiembre del año en curso.

c) Se recibieron opiniones, comentarios, propuestas u observaciones a la iniciativa, por parte del Poder Judicial del Estado, la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas del Congreso del Estado, la Auditoría Superior del Estado, el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, la Universidad de Guanajuato, el Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de Guanajuato, la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración y la Coordinación General Jurídica de Gobierno del Estado; así como de los ayuntamientos de León, San Felipe y Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, en términos generales en contra de la iniciativa. Asimismo, los ayuntamientos de Celaya, Jaral del Progreso, Pénjamo y San José Iturbide, emitieron opinión negativa o se pronunciaron en contra de la iniciativa. Los ayuntamientos de Doctor Mora, Moroleón, Purísima del Rincón, Ramita, San Francisco del Rincón, Uriangato, Valle de Santiago y Yuriria, se dieron por enterados o acordaron no hacer observaciones o comentarios a la iniciativa.

d) La secretaría técnica compiló las observaciones recibidas y elaboró un documento con formato de comparativo, que se circuló a las diputadas y a los diputados que integramos estas Comisiones Unidas el pasado 6 de octubre.

e) El 11 de octubre del año en curso, se llevó a cabo una mesa de trabajo para el análisis de la iniciativa, en la que participamos diputadas y diputados integrantes de las comisiones dictaminadoras, asesores de quienes conforman las mismas, funcionarios de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Estado, de la Coordinación General Jurídica del Gobierno

del Estado y de la Auditoría Superior del Estado; y la secretaría técnica.

5. Las diputadas y los diputados integrantes de estas com1s1ones dictaminadoras nos avocamos al estudio de la iniciativa. La presidencia instruyó a la secretaría técnica para que elaborara el proyecto de dictamen en sentido negativo, proponiendo el archivo de la iniciativa, considerando las observaciones recibidas, así como las vertidas en la mesa de trabajo, conforme lo dispuesto en el artículo 272, fracción VIII, inciso e) de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, mismo que fue materia de revisión por parte de estas Comisiones Unidas,

II. Contenido de la iniciativa

La exposición de motivos de la iniciativa refiere los argumentos que sirvieron de sustento al iniciante para proponer la ley materia del presente dictamen, en los siguientes términos:

«La Ley de Austeridad Estatal que se propone tiene como objetivo central la aplicación de una política de austeridad no de un gobierno, sino de Estado, para reducir de manera sostenida el costo de la administración pública estatal, en beneficio de la sociedad...

En el Partido MORENA partimos de la convicción de que el gobierno y sus funcionarios deben servir a la sociedad y no servirse de ella. Este concepto es el planteamiento central que inspira esta propuesta que racionaliza el gasto con un propósito de beneficio para las mayorías. No queremos que se considere que es sólo una entelequia, como suele entenderse la racionalización del gasto en términos macroeconómicos.

Esta propuesta busca generar un marco legal que promueva la austeridad estatal. Que el presupuesto se distribuya con justicia, donde los ahorros generados por la aplicación de la presente ley se concentrarán en un fondo especial que se destinará a educación, salud e inversión pública productiva estatal, siempre bajo el más estricto.

De acuerdo con los análisis que hemos realizado del presupuesto actual, en una primera etapa, la aplicación de la Ley de Austeridad Estatal permitiría ahorrar cerca de 8 mil millones de pesos, sin afectar en lo más mínimo las funciones sustantivas del gobierno. Esa cantidad se obtendría básicamente con la reducción a la mitad de los salarios de los altos funcionarios públicos y con la eliminación o reducción de los gastos superfluos del gobierno...

...Hay que tener en cuenta que desde el año 2000, prácticamente se triplicó el monto del presupuesto público estatal en Guanajuato; e inclusive llegamos al absurdo de ser un Estado de Contrastes, en donde por una parte somos de las entidades más pobres y por otra los funcionarios son de los mejor pagados del país, e inclusive magistrados y diputados estatales ganan más que los federales, lo cual representa un exceso en el poder. No omito mencionar que en estos años, el gasto gubernamental ha crecido a tasas reales por encima del cuatro por ciento anual, un ritmo mucho más acelerado de lo que creció la propia economía.

Desgraciadamente, ese rápido aumento del presupuesto no se reflejó en un incremento semejante de la inversión pública en infraestructura, propiciando rezagos en la calidad de los servicios públicos De hecho, cada año se registran niveles más bajos de la Inversión pública de la historia, porcentualmente hablando en relación con el presupuesto.

...Por otro lado, en los años recientes, desde la crisis de 2009, la deuda pública de la administración estatal se ha Incrementado, lo que ya representa un riesgo para la estabilidad de nuestra economía...

...Se estima que para este año el déficit del balance público del gobierno estatal será tres veces más grande que el de 2014. Debido a lo anterior, el costo financiero de la deuda creció en más de 31 por ciento en un solo año y los requerimientos financieros del sector público alcanzaron 47 por ciento del PIB. Cabe recordar que apenas en 2007 esos

requerimientos fueron de sólo 29.3 por ciento del PIB.

Ante el escenario nacional y estatal adverso y en ausencia de instituciones económicas sólidas, para 2017 es Inminente un recorte del gasto público con respecto al presupuesto de 2016.

En este momento, la economía estatal padece las consecuencias de las equivocadas políticas económicas de los últimos años. Cuando se tuvieron ingresos extraordinarios, las últimas administraciones gubernamentales los derrocharon. Ahora que no cuentan con los recursos necesarios, sólo piensan en recortar inversión y gasto social. Clásico de un Gobierno ajeno a su pueblo.

Las empresas estatales han cargado con los mayores costos de las malas decisiones financieras del país. Pero también los programas sociales, como los de salud, cuyo presupuesto fue recortado con respecto al aprobado por este Congreso del Estado.

Además, contra lo que sería recomendable, en 2016 el crecimiento del gasto corriente fue de 7. 7 por ciento respecto al del año pasado, el cual no se ha ejercido con transparencia. Destacan casos de opacidad, como el concepto »Otros gastos de operación», que creció más de 18 por ciento.

Para no afectar la calidad de vida de los guanajuatenses, la disminución de los recursos presupuesta/es tiene que enfocarse en el gasto corriente no prioritario para la administración pública.

No se deben afectar los programas sociales y los servicios públicos y tampoco podemos reducir la Inversión en infraestructura, que es la que puede ayudar a impulsar la economía estatal. Asimismo, no es posible incrementar los Impuestos en un contexto de estancamiento económico.

Definitivamente, es necesario enfocar el recorte en el gasto de administración del gobierno estatal, en la necesidad de ahorrar y el/minar gastos que no se justifican o que es posible reducir si se combate la corrupción y se toman medidas de racional/dad y eficiencia...

Como consecuencia de la aplicación de las disposiciones de esta iniciativa, sería posible obtener un ahorro del gasto cerca de 8 mil millones de pesos, todos ellos en renglones del gasto corriente distintos a los programas de apoyo social. Dicho ajuste obligaría a una racionalización de los rubros de gasto no prioritarios y permitiría mantener los niveles de inversión pública proyectados para 2017 e incluso incrementarlos...

...La propuesta toma como base fa Ley del presupuesto general de egresos del Estado de Guanajuato para el ejercicio fiscal de 2016, más el efecto de la inflación...

...con una disminución de sólo el 10% de la burocracia se logran ahorrar casi 6 mil millones de pesos, sin tocar ni un solo peso de los apoyos sociales, cabe resaltar que para lograr esto posible, se tendrá en su momento que adelgazar la burocracia, y disminuir los sueldos de altos funcionarios en fa medida de lo posible y de forma gradual.

Ahora bien también debemos Impulsar fa política de austeridad en los municipios, sin quebrantar la autonomía del municipio, por lo que se propone hacer básicamente realizar una disminución en un veinte por ciento del ramo 28 correspondiente a las participaciones a municipios, con lo que se generaría un ahorro de 1,185'448,779.80; es decir más de mil millones de pesos.»

Asimismo, el iniciante establece en la exposición de motivos los ahorros que podrían generarse por cada partida de los capítulos 1000, 2000, 3000, 4000 y 5000.

III. Consideraciones de las diputadas y los diputados integrantes de las Comisiones Unidas

Las diputadas y los diputados que Integramos las com1s1ones dictaminadoras, aun cuando coincidimos con el iniciante en que debe buscarse la racionalidad, austeridad y disciplina del gasto público, sin embargo, la

iniciativa presenta una serie de discrepancias, contradicciones y deficiencias, que, en su conjunto en los términos planteados, resulta inviable y por lo tanto inatendible, al contravenir disposiciones federales y locales y ser atentatoria de la autonomía municipal.

Al respecto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 115, fracciones II y IV refiere que los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley, principio conocido como «autonomía hacendaria municipal», del que se desprende que el Municipio es libre para organizar su hacienda, recabar ciertos impuestos y derechos y destinar los recursos al gasto público, atendiendo a las necesidades de cada Municipio, siempre y cuando se ejerza de conformidad a las leyes aplicables.

En este sentido, el artículo 106 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato refiere que el Municipio es libre de su organización política y administrativa, con personalidad jurídica y patrimonio propio, autónomo en su Gobierno Interior y libre en la administración de su Hacienda.

Por su parte, la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos tiene dentro de su objeto el ejercicio y control del gasto público.

El artículo 55 de la Ley referida, obliga a los poderes del Estado, a los organismos autónomos del Estado, a los ayuntamientos ya las dependencias y entidades de las administraciones públicas estatal y municipales, para ser responsables de la estricta observancia de los criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuesta!, para optimizar la aplicación de recursos en conceptos de gasto corriente, facultándolos para que por conducto de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, de las tesorerías municipales o de los órganos de Administración según corresponda, emitan los lineamientos generales de racionalidad, austeridad y disciplina presupuesta! a más tardar el 31 de enero de cada año y establecer en las disposiciones administrativas respectivas, medidas permanentes para la reducción y racionalización del gasto corriente, previendo un uso eficaz y transparente de los recursos públicos.

La citada ley establece que los ahorros y economías generados como resultado de la aplicación de los lineamientos y medidas para la reducción y racionalización del gasto corriente, deberán destinarse en primer término a corregir desviaciones del balance presupuestario de recursos disponibles negativo, y en segundo lugar a programas prioritarios o a gastos de inversión de conformidad con las reglas de procedimiento que para el efecto se expidan.

Derivado de lo anterior es que a nivel estatal y municipal se expiden anualmente los lineamientos generales de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal, cuyo fin es incrementar la eficiencia en la administración y gestión de los recursos e ingresos públicos.

En razón de lo anterior, se considera que el objetivo de la iniciativa ya está contemplado en la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato, misma que tiene por objeto establecer las bases generales para el ejercicio y control del gasto público, para regular la formulación de presupuestos, la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de los sujetos de la ley; cuyos contenidos implican parámetros relacionados con lo que la iniciativa pretende regular. Por lo que resulta innecesaria la creación de la Ley que se propone. Aunado a lo anterior, con base en el artículo 134 de nuestra Carta Magna, nuestra legislación estatal guarda congruencia con los principios de administración de recursos como son eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

De igual forma, varias propuestas contempladas en la iniciativa ya se encuentran reguladas en diversos cuerpos normativos vigentes tanto federales, como la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas; de carácter estatal, como son la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos y la Ley de Coordinación Fiscal del

Estado; además de los convenios de adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y de los convenios de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal.

Es así, que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, establece que los sujetos obligados deberán observar que la administración de los recursos públicos federales se realice con base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género. En el mismo sentido, la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato, dispone:

«Artículo 23. - Los presupuestos de egresos atenderán los objetivos y prioridades de los planes y programas, debiendo observar los principios de racionalidad, austeridad y disciplina del gasto público.

Artículo 55. - Los sujetos de la Ley serán responsables de la estricta observancia de los criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal, para optimizar la aplicación de recursos en conceptos de gasto corriente.

Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, los sujetos de la Ley por conducto de la Secretaría, la Tesorería o el Órgano de Administración según corresponda, deberán emitir los lineamientos generales de racionalidad, austeridad y disciplina presupuesta/, a más tardar el treinta y uno de enero de cada año.

Artículo 105 bis.- La Secretaría y la Tesorería, en el ámbito de sus respectivas competencias, vigilarán la exacta observancia de los presupuestos de egresos. Para tales efectos, dictarán las medidas pertinentes de acuerdo con las disposiciones que resulten aplicables, señalando los plazos y términos a que deberán ajustarse las dependencias y las entidades en el cumplimiento de las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal y podrán requerir de las propias dependencias y entidades la información que resulte necesaria, comunicando a sus órganos de control de las irregularidades y desviaciones de las que tengan conocimiento con motivo del ejercicio de sus funciones.»

Podemos apreciar que dentro de nuestro ordenamiento estatal vigente, se regula, bajo principios políticos, económicos y sociales, el control y uso de los recursos públicos; y que cada sujeto obligado deberá emitir sus lineamientos que cumplen con incrementar la eficiencia en la administración y gestión de los recursos e ingresos públicos, con atención a las prioridades y demandas ciudadanas.

Cabe mencionar que la iniciativa contraviene también lo previsto en el artículo 115, fracción VI inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al proponer también que en una les estatal se disminuyan en un veinte por ciento las participaciones federales, considerando además que la Ley de Coordinación Fiscal, establece los porcentajes que les corresponden a los municipios por este concepto de participaciones, atendiendo a los criterios que se establecen en dicha ley.

También, en relación a la propuesta de reducción del 50% en el financiamiento para partidos políticos, que no se regula en el decreto que contiene la iniciativa, aun cuando se refiere en la exposición de motivos, debemos precisar que el financiamiento para los partidos políticos se encuentra previsto en el artículo 41, Base II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, la Constitución Política local también prevé el financiamiento a los partidos políticos en el apartado A del artículo 17 y el artículo 46 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato.

Por los argumentos anteriormente señalados, podemos concluir que la mayoría de los supuestos que se contienen en la iniciativa, ya se regulan tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, así como en otros ordenamientos legales federales y estatales, inclusive de manera más amplia que los términos que se plantean, lo que podría ocasionar que hubiera contradicciones normativas con la legislación estatal y

federal. En razón de lo cual se considera inviable jurídicamente la iniciativa, por lo cual y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 111, fracción XIX, 112, fracción XIV, 171 y 204 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, nos permitimos someter a la aprobación de la Asamblea, el siguiente:

ACUERDO

Artículo Único. Se ordena el archivo definitivo de la iniciativa de Ley de Austeridad para el Estado de Guanajuato y sus Municipios, formulada por el diputado David Alejandro Landeros de la Representación Parlamentaria del Partido Morena, ante la Sexagésima Tercera Legislatura.

Comuníquese el presente acuerdo a la Secretaría General del Congreso del Estado, para los efectos conducentes.

Guanajuato, Gto., 19 de octubre de 2017. **Las Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización y de Gobernación y Puntos Constitucionales. Dip. Elvira Paniagua Rodríguez. Dip. Libia Dennise García Muñoz Ledo. Dip. Angélica Casillas Martínez. Dip. Jorge Eduardo de la Cruz Nieto. Dip. Verónica Orozco Gutiérrez. Dip. Arcelia María González González. Dip. María Beatriz Hernández Cruz. Dip. Beatriz Manrique Guevara. Dip. Juan Carlos Muñoz Márquez. Dip. María Alejandra Torres Novoa.** (Con observación) **Dip. María Guadalupe Velázquez Díaz. Dip. Guillermo Aguirre Fonseca.** (Con observación)»

-La C. Presidenta: Si alguna diputada o algún diputado desean hacer uso de la palabra en pro o en contra, manifiéstenlo indicando el sentido de su participación.

En virtud de que no se han registrado participaciones, se pide a la secretaría que proceda a recabar votación nominal de la Asamblea, a través del sistema electrónico, a efecto de aprobar o no el dictamen puesto a su consideración. Se abre el sistema electrónico.

-La Secretaría: En votación nominal, por el sistema electrónico, se consulta a las diputadas y a los diputados si se aprueba el dictamen puesto a su consideración.

(Votación)

¿Falta alguna diputada o algún diputado por emitir su voto?

-La C. Presidenta: Se cierra el sistema electrónico.

-La Secretaría: Señora presidenta, se registraron 31 votos a favor y ningún voto en contra.

-La C. Presidenta: El dictamen ha sido aprobado por unanimidad de votos.

En consecuencia, se instruye a la Secretaría General para que proceda al archivo definitivo de la iniciativa referida en el dictamen aprobado.

Corresponde someter a discusión, en lo general, el dictamen presentado por las Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización y de Gobernación y Puntos Constitucionales, relativo a dos iniciativas formuladas por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional ante esta Sexagésima Tercera Legislatura y una, formulada por la diputada y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México ante la Sexagésima Segunda Legislatura, a efecto de reformar y adicionar diversos artículos de la Ley de Alcoholes para el Estado de Guanajuato.

DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL DICTAMEN PRESENTADO POR LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y FISCALIZACIÓN Y DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, RELATIVO A DOS INICIATIVAS FORMULADAS POR DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL ANTE ESTA SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA Y UNA, FORMULADA POR LA DIPUTADA Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO

VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO ANTE LA SEXAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA, A EFECTO DE REFORMAR Y ADICIONAR DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE ALCOHOLES PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO.

»C. Presidenta del Congreso del Estado. Presente.

Estas Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización y de Gobernación y Puntos Constitucionales recibimos para efectos de estudio y dictamen, **dos iniciativas formuladas por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional ante esta Sexagésima Tercera Legislatura y una, formulada por la diputada y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México ante la Sexagésima Segunda Legislatura, a efecto de reformar y adicionar diversos artículos de la Ley de Alcoholes para el Estado de Guanajuato.**

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 91, 111, fracción XV y último párrafo, 112, fracción I y último párrafo 171 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, analizamos las iniciativas, presentando a la consideración de la Asamblea, el siguiente:

DICTAMEN

1. Del proceso legislativo

1. En ejercicio de la facultad que les confieren los artículos 56, fracción II de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; y 167, fracción II de Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional ante la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado presentaron la iniciativa a efecto de reformar el artículo 9, inciso b), fracciones VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI y XVII y adicionar una fracción XVIII; así como reformar los artículos 23, fracción III y 26, segundo y tercer párrafos de la Ley de Alcoholes para el Estado de Guanajuato. Dicha iniciativa se turnó a estas Comisiones Unidas el 20 de octubre de 2016, para efectos de su estudio y dictamen, siendo radicada el 16 de noviembre del mismo año.

El 20 de abril de 2017, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional ante la Sexagésima Tercera Legislatura presentaron la iniciativa a efecto de adicionar un artículo 22-A a la Ley de Alcoholes para el Estado de Guanajuato. Dicha iniciativa se turnó a estas Comisiones Unidas, para efectos de su estudio y dictamen, siendo radicada el 28 de agosto de 2017.

Por su parte, la diputada y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México ante la Sexagésima Segunda Legislatura presentaron el 20 de noviembre de 2014, la iniciativa a efecto de adicionar una fracción VII al artículo 10 y una fracción XII al artículo 22 de la Ley de Alcoholes para el Estado de Guanajuato. La citada iniciativa se turnó a la Comisión de Hacienda y Fiscalización de la pasada Legislatura, para efectos de su estudio y dictamen. No obstante, en la sesión ordinaria celebrada el pasado 11 de septiembre, la diputada presidenta de la Mesa Directiva, instruyó el cambio de turno de dicha iniciativa, turnándola a estas Comisiones Unidas para su estudio y dictamen, mismas que la radicaron en la misma fecha.

2. En términos de lo dispuesto por el artículo 63 fracción II del citado ordenamiento constitucional, el Congreso del Estado resulta competente para conocer y dictaminar las citadas iniciativas.

3. En las reuniones de estas Comisiones Unidas, que tuvieron verificativo en fechas 28 de agosto y 11 de septiembre del año en curso, se aprobaron las metodologías para el análisis y dictaminación de las referidas iniciativas, acordando lo siguiente:

a) Remitirlas a las diputadas y a los diputados integrantes de la Sexagésima Tercera· Legislatura, a la Coordinación General Jurídica de Gobierno del Estado, a la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, a los 46 ayuntamientos de

la Entidad, a la Auditoría Superior del Estado y a la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas del Congreso del Estado, quienes contaron con un término que feneció el 29 de septiembre del año en curso, para remitir los comentarios y observaciones que estimaran pertinentes.

b) Establecer un link en la página web del Congreso del Estado, para que las iniciativas fueran consultadas y se hicieran llegar observaciones a más tardar el 29 de septiembre del año en curso.

e) Se recibieron opiniones, comentarios, propuestas u observaciones a las iniciativas, por parte de la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas del Congreso del Estado, de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración y de la Coordinación General Jurídica de Gobierno del Estado; así como de los ayuntamientos de San Felipe, San Francisco del Rincón, Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Jaral del Progreso, León y Celaya, Gto. Asimismo, los ayuntamientos de Cortazar, Doctor Mora, Huanímaro, Manuel Doblado, Moroleón, Pénjamo, Purísima del Rincón, Romita, Salamanca, San José Iturbide, Tierra Blanca, Uriangato, Valle de Santiago y Yuriria, acordaron no hacer observaciones o comentarios, emitieron opinión positiva o se manifestaron conformes con las iniciativas. Asimismo, el Auditor Superior del Estado manifestó no tener observaciones o propuestas a las iniciativas.

d) La secretaría técnica compiló las observaciones recibidas y elaboró un documento con formato de comparativo, que se circuló a las diputadas y a los diputados que integramos estas Comisiones el pasado 6 de octubre.

e) El 11 de octubre del año en curso, se llevó a cabo una mesa de trabajo para el análisis de las iniciativas, en la que participamos diputadas y diputados integrantes de las comisiones dictaminadoras, asesores de quienes conforman las mismas, funcionarios de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Estado, de la Coordinación General Jurídica del Gobierno del Estado y de la Auditoría Superior del Estado; y la secretaría técnica.

5. Las diputadas y los diputados integrantes de estas comisiones dictaminadoras nos avocamos al estudio de las Iniciativas y en términos generales consideramos pertinentes las propuestas contenidas en las mismas. La presidencia instruyó a la secretaría técnica para que elaborara el proyecto de dictamen, conforme lo dispuesto en los artículos 94, fracción VIII y 272, fracción VIII, inciso e) de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, mismo que fue materia de revisión por parte de estas Comisiones Unidas.

II. Contenido de las iniciativas

Las exposiciones de motivos de las iniciativas refieren los argumentos que sirvieron de sustento a las y los iniciantes para proponer las reformas materia del presente dictamen, en los siguientes términos:

1. Iniciativa formulada por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional ante la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado, a fin de reformar el artículo 9, inciso b), fracciones VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI y XVII y adicionar una fracción XVIIIi así como reformar los artículos 23, fracción III y 26, segundo y tercer párrafos de la Ley de Alcoholes para el Estado de Guanajuato.

«... El gusto de los consumidores mexicanos de cerveza **se** ***ha ido*** **modificando a lo largo de la presente década. Si bien es** ***cierto que las*** **marcas dominantes del mercado siguen imponiéndose y han variado sus productos, también lo es** ***que diversas micro-empresas cerveceras*** **se** ***han ido*** **estableciendo con nuevos estilos y sabores.**

... Por otro lado, en julio del año 2013, el Pleno de la Comisión Federal de **Competencia Económica (CFC), organismo autónomo que tiene por objeto garantizar la libre competencia y concurrencia, así**

como combatir las prácticas monopólicas y demás restricciones al financiamiento eficiente de los mercados en los términos que estable la Constitución, resolvió imponer las siguientes condiciones a los contratos de exclusividad en la venta de cerveza de las empresas de mayor venta en el país:

1. *Las cervezas artesanales gozaran de acceso abierto* e *irrestricto a todos los restaurantes, bares y cantinas.*

2. *Todos los contratos de exclusividad deberán ser escritos, transparentes y de duración limitada, con reglas claras para la rescisión del contrato.*

3. *Los contratos de exclusividad no podrán rebasar el 25 por ciento del total de los establecimientos a los que venden las empresas, porcentaje que se reducirá gradualmente a 20 por ciento en cinco años.*

...Como consecuencia de la demanda y calidad que han estado adquiriendo en los últimos años las cervezas artesanales, quienes integramos el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, estimamos necesario impulsarlas a fin de promover la competencia, aprovechar el ánimo que muchos consumidores tienen por probar nuevas propuestas, favorecer las exportaciones y fomentar la actividad económica de nuestra entidad, toda vez que en Guanajuato cada vez más productores apuestan por este ámbito económico, registrándose hasta 2016, 16 micro cervecerías asentadas en los municipios de Acámbaro, Celaya, Guanajuato, Irapuato, León y San Miguel de Allende, con una producción total de 128 mil 600 litros anuales.

...Es claro que el trato que reciben las micro cervecerías fiscalmente es inequitativo, en virtud de que una cerveza artesanal es necesariamente más costosa que una industrial, por su elaboración e insumos, entre los que incluyen productos en ocasiones de origen orgánico, por lo que las cervecerías artesanales mexicanas no pueden recibir el mismo trato que los grandes consorcios, puesto que no funcionan bajo las mismas condiciones.

De esa forma, las cerveceras artesanales no gozan del mismo margen de maniobra financiera que tienen las grandes compañías por lo que el impuesto especial sobre bienes y servicios es asumido íntegramente por el consumidor, de acuerdo con la reforma del 13 de septiembre de 2012 a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios que establece en el artículo 2 fracción I inciso A) numeral 4 «Cerveza producida por empresas que tengan un nivel de producción anual de 200 mil hectolitros, o cerveza que sea considerada como artesanal de conformidad con los lineamientos que al efecto establezca la Secretaria de Economía, sin importar la graduación alcohólica del producto, 1.60 pesos por litro de venta».

...De igual manera, se modifican el orden de algunas fracciones contenidas en el artículo 9 *de la Ley de alcoholes para el Estado de Guanajuato con la* finalidad de ubicar, por su giro, las licencias ahí referidas; enlistando primeramente los centros de consumo de bebidas alcohólicas en sus diversos tipos, continuando con los expendios y almacenes y finalizar con los productores de bebidas...»

2. Iniciativa formulada por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional ante la Sexagésima Tercera Legislatura a efecto de adicionar un artículo 22-A a la Ley de Alcoholes para el Estado de Guanajuato.

«...Conducir bajo los efectos del alcohol es una de las principales causas de accidentes automovilísticos tanto en nuestro estado y nuestro país como en el resto del mundo. Es un acto irresponsable, que provoca muertes, destruye familias y pone en un riesgo innecesario no sólo a los conductores irresponsables, sino a todos los automovilistas y peatones.

...Asimismo, en el estado de Guanajuato, entre 2010 y 2014 se *registraron* más de 10 mil accidentes automovilísticos relacionados con el consumo de alcohol. Ninguno de ellos debió suceder, todos y cada uno pudo prevenirse con un mínimo de

responsabilidad y prudencia por parte de los conductores.

...El problema de fondo que se *oculta en el fenómeno de los accidentes a* causa del consumo de alcohol es *el de una carencia de responsabilidad que* va más allá del propio conductor. Por lo tanto, para ser plenamente efectivos en la atención de este problema, necesitamos complementar nuestro esfuerzo con un enfoque de responsabilidad compartida, del que deben ser protagonistas los establecimientos donde se *consumen bebidas alcohólicas.*

Proponemos hacerlo estableciendo el compromiso de que estos comercios lleven a cabo dos acciones muy concretas:

– Instalar alcoholímetros o medidores para realizar pruebas de detección de intoxicación o nivel de alcohol en la sangre, para uso voluntario de sus clientes.

– Informar acerca de la implementación de programas tendientes a evitar o. disuadir la conducción de vehículos automotores bajo los influjos del alcohol emitidos por el Gobierno del Estado de Guanajuato.

Estamos seguros de que con estas modificaciones complementaremos una estrategia integral que impacta tanto en el fortalecimiento de las sanciones, como en el desarrollo de una cultura de prevención y de consumo responsable, para que quienes hayan ingerido bebidas alcohólicas opten por darle las llaves de su auto a un conductor designado o aprovechen las opciones de transporte público que están a su disposición.

De este modo, el Congreso del Estado dará un paso muy importante para contar con un marco legislativo sólido y realista, que dé como resultado una reducción en el número ele accidentes automovilísticos, que salve la vicia y la calidad de vida de miles de guanajuatenses, empezando por los propios *conductores, en corresponsabilidad con los prestadores de servicios y la* sociedad en general...»

3. Iniciativa formulada por la diputada y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México ante la Sexagésima Segunda Legislatura, a efecto de adicionar una fracción VII al artículo 10 y una fracción XII al artículo 22 de la Ley de Alcoholes para el Estado de Guanajuato.

«...De acuerdo con cifras del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, el estado de Guanajuato ocupa el quinto lugar en registro de accidentes vehiculares a consecuencia del consumo de alcohol.

En Guanajuato se *han tomado acciones preventivas para evitar que las* personas conduzcan bajo la influencia del alcohol por parte de las autoridades administrativas de todos los niveles, operativos, programas de información, y otros son solo ejemplo de ellas.

De acuerdo con cifras del Perfil Estatal de Guanajuato realizado por el Observatorio Nacional de Lesiones los accidentes viales relacionados con el consumo de alcohol ascienden a un 30% del total de accidentes. La Secretaría de Salud de Guanajuato indica que alrededor del 50% de los accidentes viales están relacionados con el consumo del alcohol.

No obstante, cualquier esfuerzo por parte de las autoridades será insuficiente si es que no existe la corresponsabilidad de la sociedad de inhibir el que las y los guanajuatenses, sobre todo los jóvenes conduzcan bajo la influencia del alcohol y en específico, la responsabilidad solidaria de estas acciones por parte de quienes hacen de la venta de bebidas alcohólicas su negocio habitual.

Vemos que el marco regulatorio de las personas físicas y morales dedicadas al consumo de bebidas alcohólicas, que se *estima obtienen alrededor de un* 60% de ganancia sobre las bebidas alcohólicas que comercia/izan, no contiene una obligación o siquiera sugerencia respecto a que promuevan entre sus clientes el no conducir si es que han tomado o que cuenten ·con

alternativas para que las personas visiblemente intoxicadas eviten conducir sus vehículos automotores al abandonar sus establecimientos.

En la medida en que como sociedad asumamos las responsabilidades que a cada quien corresponden y que en nuestra labor legislativa fomentemos que se involucren todos los actores relacionados con la prevención de accidentes viales relacionados con el consumo de alcohol provocaremos la mejoría en las vidas de las y los guanajuatenses, sobre todo si adoptamos medidas encaminadas a la salvaguarda de su vida, integridad física y patrimonio.

Por ello, en la presente iniciativa proponemos que se *incluya como requisito para obtener la licencia de funcionamiento y como obligación de los propietarios de establecimientos donde se expendan bebidas alcohólicas* para su consumo dentro del mismo establecimiento generar e implementar un programa destinado a procurar que las personas que han consumido bebidas alcohólicas dentro de tales establecimientos conduzcan vehículos automotores para trasladarse a otro destino provisional o definitivo.

Debemos hacer conciencia de que todas y todos los guanajuatenses podemos ser víctimas de un accidente vial en que se involucre el consumo de alcohol, *y no necesariamente por manejar tras haber consumido bebidas* alcohólicas.

A la vez, consideramos que la obligación en sí no es gravosa para los propietarios y operadores de dichos establecimientos donde se expenden bebidas alcohólicas para consumo dentro del mismo local, puesto que en sí son pocos los recursos que se verían obligados a destinar a la implementación de programas similares.»

III. Consideraciones de las diputadas y los diputados integrantes de las Comisiones Unidas

Las diputadas y los diputados que integramos las comisiones dictaminadoras, coincidimos en términos generales con las propuestas contenidas en las tres iniciativas materia del presente dictamen.

Respecto a la iniciativa presentada en primer término, la misma tiene por objeto adicionar la figura del productor de cerveza artesanal, a fin de otorgarle beneficios fiscales que por su giro no pueden concedérseles a los productores de bebidas con alto grado de contenido alcohólico o, en su caso, a los grandes consorcios cerveceros, a fin de promover la competencia, favorecer las exportaciones y fomentar la actividad económica del Estado.

El principio general de igualdad consagrado en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su vertiente tributaria prevista en el numeral 31, fracción I, de dicha Ley Fundamental, exigen del legislador ordinario una producción normativa con igualdad de trato ante supuestos equivalentes. Ahora bien, esa igualdad no puede ser enteramente fría y formal, por lo que bajo criterios razonables y objetivos se justifica la emisión de normas que establecen un trato diferenciado. [20]

Es así que la propuesta de incluir en la ley una categoría especial de productor de cerveza artesanal, es justificada en relación a los productores de los grandes consorcios cerveceros, al buscar equilibrar las condiciones competitivas en el mercado para dicho sector, dado que los costos de producción y comercialización de cerveza artesanal son por demás superiores a los de la producción industrial.

No obstante, esa diferencia no se considera razonable respecto de otros productores de bebidas alcohólicas artesanales, distintas a la cerveza, cuyos costos de producción y comercialización se

---

[20] Al respecto, resultan Ilustrativos los siguientes criterios jurisprudenciales: PRINCIPIO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. ALGUNOS ELEMENTOS QUE INTEGRAN El PARÁMETRO GENERAL Décima Época, Pleno, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 34, septiembre de 2016, Tomo 1, Pág. 112, P./J. 9/2016 (lOa,), IGUALDAD. DELIMITACIÓN CONCEPTUAL DE ESTE PRINCIPIO, Décima Época, Primera Sala, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 34, septiembre de 2016, Tomo 1, pág. 357, la./J. 46/2016 (lOa.). PRINCIPIO GENERAL DE IGUALDAD. su CONTENIDO Y ALCANCE. Décima Época, Segunda Sala, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 31, junto de 2016, Tomo 11, pág. 791, 2a./J. 64/2016 10a

presume son igualmente superiores a los de un proceso industrial, colocándolos también en una situación de desventaja competitiva. En razón de lo anterior, la creación de una nueva categoría de productor acotada exclusivamente a la cerveza artesanal, puede ser considerada como discriminatoria por vulnerar el principio de igualdad contenido en nuestra Carta Magna.

En aras de no transgredir el principio constitucional de igualdad, así como de fomentar la competitividad de los pequeños productores de bebidas alcohólicas artesanales respecto de las grandes empresas, determinamos ampliar los sujetos del nuevo giro, para que los beneficiarios con la reforma propuesta no sean únicamente quienes se dediquen a fabricar cerveza, sino que abarque a todos los productores de bebidas alcohólicas de fabricación artesanal, como sería el caso del pulque, mezcal, tequila y otros licores.

En tal sentido, en el artículo 9, en el inciso B), correspondiente a los giros de bajo impacto, modificamos su estructura, a efecto de que en la fracción I de dicho inciso, se hiciera un desglose de los centros de consumo de bebidas alcohólicas; en la fracción 11, se incluyeran únicamente los establecimientos para la venta de bebidas alcohólicas y alcohol potable; y en la fracción **III**, exclusivamente se contemplaran los productores de bebidas alcohólicas, adicionando en el numeral 2 de dicha fracción al productor de bebidas alcohólicas artesanales, definiéndolo como la persona física o moral, no perteneciente a un consorcio, autorizada, que de manera independiente produce, almacena, distribuye y enajena bebidas alcohólicas de producción propia de alto y bajo contenido alcohólico; y cuyo establecimiento cuenta con sala de degustación, área en el interior o exterior para dar servicio de venta al mayoreo o menudeo en envase cerrado, y cuyo volumen de producción no exceda de los cinco millones de hectolitros anuales. Precisando además en dicho numeral qué se entenderá por bebida alcohólica artesanal, situación que consideramos oportuna.

Dicha definición es acorde con lo que se prevé en el artículo 3 de la Ley de Alcoholes del Estado, del que se desprende que las actividades autorizadas por una licencia de funcionamiento son las relativas a la producción, almacenamiento, distribución y enajenación de bebidas alcohólicas.

Respecto a la iniciativa también omitimos lo relativo al contenido de alcohol, considerando que esto se prevé en el artículo 8 de la misma ley, de acuerdo al cual se consideran bebidas alcohólicas a los líquidos potables que a la temperatura de 15 grados centígrados tengan una graduación alcohólica mayor de 2 grados gay lussac.

Asimismo, en la fracción III del artículo 23, precisamos como excepción que, tratándose de la venta de bebidas alcohólicas artesanales por parte de sus productores, también podrá realizarse dicha venta al menudeo.

También en el artículo 26, se estableció la excepción para los productores de bebidas alcohólicas artesanales, quienes podrán expender su mercancía en el local o dependencia de sus fábricas o almacenes, considerando que la propia licencia los autorizará a contar con sala de degustación y servicio de venta al público.

Con relación a los artículos transitorios, en el artículo segundo se previó la obligación al titular del Poder Ejecutivo del Estado de proponer en la iniciativa de Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal de 2018, la tarifa correspondiente a la expedición de la licencia de productor de bebidas alcohólicas artesanales, atendiendo al principio de legalidad de las contribuciones y a fin de que a partir del 1 de enero de 2018, los productores bebidas alcohólicas artesanales, ya se encuentren en posibilidad de efectuar los trámites para la obtención de la licencia correspondiente. En congruencia con lo anterior, en el artículo tercero, se contempló que la licencia de productor de bebidas .alcohólicas artesanales será expedida una vez que entre en vigor la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal de 2018.

En cuanto a las dos iniciativas restantes, la primera, formulada por diputada y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de esta Legislatura; y la segunda, por la diputada y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México ante la Sexagésima Segunda Legislatura, ambas coinciden en términos generales en el objeto establecer a cargo de los establecimientos en donde se consumen bebidas alcohólicas, la obligación de instalar alcoholímetros o medidores para realizar pruebas de detección de intoxicación o nivel de alcohol en la sangre, para uso voluntario de sus clientes. Lo anterior, a fin de prevenir el gran número de accidentes automovilísticos, generados por conducir bajo los efectos de bebidas alcohólicas.

Al respecto, es importante plasmar lo que refiere el artículo de investigación denominado «Si toma, no maneje. La alcoholemia en conductores de vehículos de motor de Guadalajara y León, México»[21], del que se concluye que en los accidentes de tránsito, los programas que aciertan en la prevención de la conducción bajo la influencia del alcohol tienen la potencia de contribuir significativamente a la seguridad en la vía pública en México. Dicho estudio establece lo siguiente:

«Cada año, más de 1.2 millones de personas en el mundo mueren por lesiones causadas por accidentes de tránsito y, entre las personas de 5 a 25 años, el tránsito es la segunda causa principal de muerte1-3. ·uno de los factores que afecta notablemente a la probabilidad de sufrir un accidente de tránsito 'es *la conducción bajo los efectos del alcohol. Numerosos estudios4- 7 han mostrado los efectos perjudiciales del alcohol en tareas que implican* vigilancia, tiempo de reacción y atención dividida, precisamente funciones que intervienen en la conducción de un vehículo. Además, los análisis de series temporales que para determinada región relacionan el número de accidentes de tránsito con la introducción de iniciativas legislativas que bajaron el nivel de BAC permitido sugieren que el riesgo elevado de sufrir un accidente se *manifiesta desde dosis muy pequeñas. En concreto, un estudio* de EE.UU. encontró una reducción mayor de accidentes en los estados que habían implementado una tolerancia cero para los conductores jóvenes en comparación con los que habían introducido un límite de 0.02 g/dl de BAC. El 96% *de los países han ratificado leyes que regularizan la conducción bajo* la influencia del alcohol. En México, las leyes no permiten la conducción si la BAC supera los 0.08 g/dl. (Nótese que las leyes mexicanas que regularizan la tasa de alcohol para conductores se decretan a nivel estatal; en las zonas metropolitanas más grandes del país, se *impuso el límite de 0.08 g/dl para* la BAC. Es importante señalar que, de forma posterior al presente estudio, la legislación cambió; por ejemplo, en Jalisco el límite actual es de 0.05 g/dl.) Sin embargo, ratificar leyes no es suficiente en sí mismo. Igualmente importantes son las medidas que inculcan su cumplimiento. Al respecto, varios estudios, 15 mostraron efectos positivos de campañas de sensibilización y de la instalación de puestos de control cercanos a centros de ocio nocturnos donde la policía aplica pruebas de alcoholemia….

…En el año 2008, la Secretaría de Salud de México, a través del Centro Nacional de Prevención de Accidentes (CENAPRA), con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud, puso en marcha la Iniciativa Mexicana de Seguridad Vial y Prevención de Lesiones en el Tránsito (IMESEVI). Dicha iniciativa se *implementó en cuatro zonas metropolitanas* principales de la República Mexicana: León (en el estado de Guanajuato), Guadalajara (Jalisco), Monterrey (Nuevo León) y la Ciudad de México (Distrito Federal). En el marco de la evaluación del impacto del proyecto, se *realizó una extensa recopilación de datos en cada una de las zonas* metropolitanas participantes, durante dos periodos distintos: unos meses antes del inicio del proyecto (medición pre) y un año y medio después de que el proyecto se iniciara (medición post). En este artículo presentamos un análisis de los datos

[21] Publicado por la Gaceta Médica de México, 2014. Arturo Cervantes Trejo e Iwin leenen. Consultable en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/artlculo?codigo-4892097

recopilados para evaluar el impacto de la IMESEVI en la conducción bajo los efectos del alcohol. Los resultados que se presentan incluyen únicamente las zonas metropolitanas de Guadalajara y León, omitiendo Monterrey y el Distrito Federal, por razones que se describen en la sección «Procedimiento». Esta investigación tiene dos objetivos: en primer lugar, interesa estimar el porcentaje de conductores que circulan por la vía pública bajo los efectos del alcohol durante las noches de ocio en las dos zonas metropolitanas de Guadalajara y León, así como el nivel de alcoholemia al que estos conductores están expuestos, y, en segundo lugar, a través de una comparación entre las mediciones pre y post, se pretende evaluar el impacto de la IMESEVI en la conducta arriesgada de beber y conducir en estas zonas...

El estudio incluyó los municipios de Guadalajara, Zapopan y León. A pesar de que las zonas metropolitanas de Guadalajara y León incluyen partes de otros municipios, los seleccionados cubren la mayor parte de las respectivas zonas metropolitanas. En cada uno de los tres municipios se aplicó un muestreo jerárquico de dos niveles: - *Nivel 1: muestra de sitios de control.* Las autoridades policíacas de cada Municipio sugirieron una lista de sitios donde instalar un operativo de revisión de alcoholemia. Dos criterios importantes para que un sitio resultara elegible fueron la relativa cercanía de centros de diversión nocturnos y la seguridad del personal involucrado en la organización del operativo. Aunque el procedimiento para elegir los sitios de control no cumplía con los requisitos de un muestreo aleatorio, los sitios elegidos cubrieron las zonas más relevantes del municipio (con un enfoque especial en las zonas de más ocio nocturno). La muestra total para la medición pre incluyó 39 sitios de control, distribuidos entre las tres noches y los tres municipios. Es conveniente señalar que esta muestra no incluye los sitios originalmente seleccionados para la noche del sábado en Guadalajara y Zapopan, debido a que se canceló la recolección de datos por una tormenta eléctrica. Para la medición post, se contó con 27 *sitios de control* (Tabla 1). El número de sitios de control en cada municipio dependió del personal disponible para las diferentes noches. Además, en León los equipos que efectuaban los operativos cambiaron de Jugar durante la noche, y cada nuevo lugar se consideró como otro sitio de control. - *Nivel 2: muestra de* conductores. En cada sitio de control, se seleccionó una muestra aleatoria de los conductores que pasaban por el retén para que participaran en la prueba de alcoholemia y realizaran una breve encuesta. La muestra total incluyó a 1,316 conductores en la medición pre y 2,274 en la medición post. En la tabla 1 se presentan las estadísticas descriptivas de la muestra de conductores y en la figura 1, un histograma de los resultados de la prueba de alcoholemia en cada municipio...

...de la investigación, se estima que el porcentaje de conductores que conducen bajo los efectos del alcohol oscila entre el 17 (Zapopan) y el 29% *(León) en la primera medición. La probabilidad de que un conductor pase el* límite legal para la BAC de 0.08 g/dl se encuentra entre 0.01 (Zapopan) y *0.03 (Guadalajara). Entre los factores que están significativamente* relacionados con la conducción bajo los efectos del alcohol (Tabla 3 y Fig. 2), destacan la noche de observación (en la del sábado es más probable encontrarse con conductores que han tomado alcohol), el tipo de vehículo (probabilidades menores para taxistas y conductores de vehículos de carga), el número de ocupantes del coche (en los datos de la primera medición, las probabilidades ajustadas suben casi linealmente en función del número de pasajeros en el coche) y el estado civil y el sexo del conductor (los hombres sin pareja tienen la probabilidad más alta de conducir alcoholizados). Este estudio no aporta evidencia de que los niveles de alcoholemia difieran entre conductores pertenecientes a distintos grupos de edad. Al comparar las probabilidades asociadas con la medición realizada unos meses anteriores a la implementación de la IMESEVI y las probabilidades correspondientes de la medición posterior (Tabla 2 y Fig. 2), se observa una diferencia considerable: en cada uno de los municipios, se disminuye la probabilidad pre a un tercio aproximadamente. Es conveniente

mencionar que en León y Zapopan dicha reducción se sitúa principalmente en los niveles bajos de alcoholemia, es decir, en el post es (mucho) menos frecuente un resultado ligeramente positivo (de menos de 0.02 g/dl), mientras que en los niveles más altos de alcoholemia la diferencia entre ambos momentos no es estadísticamente significativa. En Guadalajara, al contrario, se observa una reducción significativa de la probabilidad de que el resultado en la prueba de alcoholemia lo supere, en cada uno de los cuatro umbrales considerados en este estudio...

...La conducción bajo los efectos del alcohol es un factor que afecta no solo a la probabilidad de estar involucrado en un accidente de tránsito, sino también a la gravedad de las lesiones sufridas como *consecuencia. Por lo* tanto, es importante contar con datos fiables que permitan evaluar el impacto de las iniciativas para reducir esta conducta arriesgada y que contribuyan, con información valiosa, a diseñar campañas a medida de los grupos más expuestos. Los resultados de este estudio muestran que, antes de la implementación de la IMESEVI en las zonas metropolitanas de Guadalajara y León, alrededor de uno de cada cinco conductores que circulaban por la vía pública en las noches del jueves, el viernes y el sábado se encontraba bajo la influencia del alcohol. Si bien en la gran mayoría de casos el conductor no pasó el límite legal de alcoholemia, aun así el alcohol puede ser un factor significativo en los accidentes de tránsito, considerando la evidencia aportada por otros estudios del efecto perjudicial del alcohol desde dosis pequeñas. En varios aspectos, los resultados de este estudio confirman hallazgos anteriores o *los ponen en otra perspectiva. Por ejemplo,* datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía indican que, al comparar los jueves, los viernes y los sábados, este último día se asocia con *el mayor número de accidentes de tránsito, .tendencia que* se *acentúa al* examinar solo los accidentes con alcohol involucrado. Respecto al efecto del número de ocupantes del vehículo, son interesantes los estudios que muestran que los conductores jóvenes que van acompañados por uno o más pasajeros están relativamente más involucrados en accidentes de tránsito. Un análisis adicional de nuestros datos revela que en este grupo de conductores es *significativamente menos común manejar bajo los efectos de* alcohol, lo cual sugiere que el riesgo de sufrir un accidente se *debe a la poca* experiencia de los conductores jóvenes, acentuada por la presencia de pasajeros. Finalmente, se *han documentado ampliamente las diferentes* actitudes de hombres y mujeres hacia el comportamiento riesgoso en general y la conducción bajo la influencia del alcohol en particular; especialmente los hombres solteros o separados buscan más el riesgo. Nuestro estudio confirma la existencia de esta tendencia en los conductores mexicanos. Al interpretar los resultados, hay que tener en cuenta el bajo número de personas con resultados extremos en la prueba de alcohol: en solo 22 (1.7%) de 1,299 pruebas de la medición pre y 28 (1.3%) de 2,226 *pruebas de la medición post* se *observó un resultado que superó los 0.08* g/dl. Por consiguiente, en lo referente a la población de los conductores que sobrepasan el límite legal, el presente estudio lidia con estimaciones relativamente poco precisas y una potencia escasa para detectar un impacto de la IMESEVI...

...El proyecto IMESEVI y los resultados derivados del mismo han funcionado como *un precursor para la Estrategia Nacional de Seguridad Vial 2011-2020,* que es *un acuerdo firmado por la Conferencia Nacional de Gobernadores en* México. En dicho acuerdo, los gobernadores manifiestan su voluntad de tomar iniciativas para reducir en un 50% la tasa de lesiones, discapacidades y muertes por accidentes de tránsito antes del año 2020, uniéndose así al Decenio de Acción para la Seguridad Vial, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2010... »

Por otra parte, de las iniciativas advertimos fines extrafiscales -no recaudatorios-, pues su propósito es generar y favorecer la cultura de la prevención y mejora de la salud, con el fin de evitar accidentes automovilísticos y controlar el consumo desmedido de alcohol. Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117, fracción IX de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, el cual faculta al Congreso de la Unión y a las Legislaturas locales para establecer leyes orientadas a combatir al alcoholismo; así como en los artículos 3, fracción XIX, 185 y 185 Bis de la Ley General de Salud, de los cuales se desprende que es materia de salubridad general la prevención, reducción y tratamiento del uso nocivo del alcohol, así como la protección de salud de terceros y de la sociedad frente al uso nocivo del alcohol, y que la ejecución de acciones relativas a dichos programas tendrán, entre otras finalidades, las de proteger la salud y el bienestar de la población frente al uso nocivo de alcohol y prevenir los riesgos a la salud que éste genera, así como de fomentar la difusión de la información sobre daños, riesgos y costos atribuibles al uso nocivo del alcohol.

Sirve de soporte, el argumento sostenido en la Tesis de Jurisprudencia del Pleno en Materia Administrativa del Segundo Circuito:

SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA CONTRA LA NORMA TÉCNICA NORTEC-SSA-01-2015, QUE OBLIGA A LOS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL ESTADO DE MÉXICO QUE EXPENDAN BEBIDAS ALCOHÓLICAS PARA EL CONSUMO INMEDIATO, AL COPEO O EN BOTELLA ABIERTA, A ADQUIRIR E INSTALAR INSTRUMENTOS QUE PERMITEN CUANTIFICAR LA CONCENTRACIÓN DE ALCOHOL EN LA SANGRE A TRAVÉS DEL AIRE ESPIRADO (ALCOHOLÍMETRO). *Es improcedente conceder la suspensión en el amparo promovido contra la Norma Técnica referida, publicada en el Periódico Oficial del Estado de México el 26 de abril de 2016, que establece las especificaciones, operación y vigilancia de los instrumentos que permiten cuantificar la concentración de alcohol en la sangre a través del aire espirado (alcoholímetro), que deberán colocarse de manera obligatoria en los establecimientos mercantiles de la entidad, en los que se expidan bebidas alcohólicas para el consumo inmediato, al copeo o en botella abierta, porque no se satisface el requisito previsto en el artículo 128, fracción II, **de la Ley de Amparo, pues de otorgarse, se causaría perjuicio al interés** social y se contravendrían disposiciones de orden público, ya que la norma tiene por objeto fortalecer una cultura de la prevención y mejora de la **salud, a través de mecanismos que permitan que el consumidor esté** Jo suficientemente informado y consciente de que con ello se busca **protegerlo, así como autorregular el consumo del alcohol, lo que conlleva** proteger a la sociedad en general, al incidir positivamente en la **prevención de· accidentes automovilísticos y controlar el consumo** desmedido de dicha sustancia, que debe privilegiarse sobre el patrimonio **económico de un sector de la sociedad, como son los comerciantes que** tengan como actividad primordial vender alcohol para el consumo Inmediato en sus diversos establecimientos y que se encuentran obligados **a adquirir e instalar los instrumentos indicados»** [22]

Las diputadas y los diputados que integramos estas comisiones unidas, coincidimos, con el propósito de las iniciativas materia del presente dictamen, que es el de disminuir el número de accidentes que se producen por conducir bajo los influjos de bebidas alcohólicas, lo cual también combate el alcoholismo, en beneficio de la salud y la seguridad de las personas.

En estos términos, determinamos procedente la adición del artículo 22 A, para establecer la obligación de los establecimientos que expenden bebidas alcohólicas, de tener alcoholímetros o medidores para realizar pruebas de detección de intoxicación o nivel de alcohol en la sangre, para uso voluntario de sus clientes. Asimismo, en dicho artículo se previó también la obligación de los establecimientos de informar a los clientes acerca de la implementación de los programas tendientes a evitar o disuadir tanto el consumo excesivo de bebidas alcohólicas, así como la conducción de vehículos automotores bajo el influjo del alcohol, los cuales serán emitidos por la

22 Décima Época, Plenos de Circuito, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo 11, Materia(s): Común, Tesis: PC.11.A. J/10 A (10a.).

Secretaría de Salud del Estado y por el Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato.

En razón de que los alcoholímetros o medidores deberán tener las características y tiempo de uso que determine la Secretaría de Salud del Estado, se determinó establecer en el artículo cuarto transitorio, un término de 90 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del decreto, para que la Secretaría de Salud emita las reglas que contengan las características y el tiempo máximo de uso de los alcoholímetros y medidores. De igual forma, en el artículo quinto se contempla un término de 180 días naturales, contados a partir de que la Secretaría de Salud del Estado emita las referidas reglas, para que opere la obligación de los establecimientos de contar con los alcoholímetros o medidores.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 111, fracción XV y último párrafo, 112, fracción I y último párrafo, 171 y 204 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, nos permitimos someter a la aprobación de la Asamblea, el siguiente:

DECRETO

Artículo Único. Se reforman el artículo 9, inciso B), 23, fracción III y 26, primer párrafo; y se **adiciona** un artículo 22 A a la Ley de alcoholes para el Estado de Guanajuato, para quedar en los siguientes términos:

«ARTÍCULO 9.- EL EJECUTIVO DEL...

A).-...

I y **11**...

B)- DE BAJO IMPACTO...

1.- CENTROS DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS:

1.- BAR.- ESTABLECIMIENTO QUE, DE MANERA INDEPENDIENTE O FORMANDO PARTE DE OTRO GIRO, VENDE PREPONDERANTEMENTE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL COPEO PARA SU CONSUMO EN EL MISMO LOCAL, PUDIENDO DE MANERA COMPLEMENTARIA PRESENTAR MÚSICA VIVA, GRABADA O VIDEOGRABADA;

2.- CANTINA.- ESTABLECIMIENTO DONDE SE EXPENDEN BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL COPEO, PARA SU CONSUMO EN EL MISMO LOCAL;

3.- CENTRO DE APUESTAS,- ESTABLECIMIENTO EN EL QUE SE EXPENDAN BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL COPEO, EN UN ESPACIO DELIMITADO DENTRO DEL MISMO, Y EN EL CUAL SE LLEVAN A CABO JUEGOS CON APUESTAS O SORTEOS, CON PERMISO VIGENTE OTORGADO POR LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN;

4.- EXPENDIO DE BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHÓLICO EN ENVASE ABIERTO.- ESTABLECIMIENTO DONDE SE EXPENDEN BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHÓLICO EN ENVASE ABIERTO EXCLUSIVAMENTE;

5.- EXPENDIO DE BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHÓLICO EN ENVASE ABIERTO CON ALIMENTOS,- ESTABLECIMIENTO DONDE SE EXPENDEN BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHÓLICO, COMO COMPLEMENTO AL CONSUMO DE ALIMENTOS;

6.- EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL COPEO CON ALIMENTOS.- LOCAL DONDE EL CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS SERÁ UN COMPLEMENTO A LA VENTA DE ALIMENTOS EXCLUSIVAMENTE;

7.- PEÑA,- ESTABLECIMIENTO QUE PROPORCIONA SERVICIO DE RESTAURANTE CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y EN EL QUE SE EJECUTA MÚSICA LOCAL REGIONAL O FOLKLÓRICA POR CONJUNTOS O SOLISTAS;

8.- RESTAURANT-BAR,- LOCAL DONDE SE EXPENDEN BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL COPEO CON ALIMENTOS, PODRÁN EXPENDERSE ÚNICAMENTE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, CUANDO EXISTA DENTRO DEL LOCAL, UN

ÁREA DELIMITADA MEDIANTE DESNIVELES, MUROS, CANCELES O MAMPARAS;

9.- SALÓN DE FIESTAS CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS.- ESTABLECIMIENTO DE DIVERSIÓN DESTINADO PARA FIESTAS Y BAILES, EN EL QUE SE VENDEN BEBIDAS ALCOHÓLICAS PARA SU CONSUMO EN EL MISMO LOCAL; Y

10.- SERVI-BAR,- SERVICIO QUE PROPORCIONAN EXCLUSIVAMENTE LOS HOTELES Y MOTELES, DONDE SE EXPENDEN BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LAS HABITACIONES PARA CONSUMO DE SUS HUÉSPEDES,

II.- ESTABLECIMIENTOS PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y ALCOHOL POTABLE:

1.- ALMACÉN O DISTRUBUIDORA,- LOCAL AUTORIZADO PARA GUARDAR BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y REALIZAR LA VENTA DE LAS MISMAS AL MAYOREO, CONSIDERÁNDOSE COMO TAL, CUANDO LA VENTA A UN SOLO COMPRADOR CONSISTA EN UNA CAJA O MÁS;

2.- DEPÓSITO.- ESTABLECIMIENTO DONDE SE EXPENDEN BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHÓLICO EN ENVASE CERRADO, COMO ACTIVIDAD PRINCIPAL Y CUYA VENTA SEA AL MENUDEO;

3.- EXPENDIO DE ALCOHOL POTABLE EN ENVASE CERRADO.- LOCAL AUTORIZADO PARA LA VENTA DE ALCOHOL POTABLE DE HASTA 55 GRADOS GAY LUSSAC, EXCLUSIVAMENTE EN ENVASE CERRADO CON CAPACIDAD MÁXIMA DE VEINTE LITROS. EN NINGÚN CASO SE AUTORIZARÁ LA VENTA A GRANEL;

4.- EXPENDIO DE BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHÓLICO EN ENVASE CERRADO.- ESTABLECIMIENTO DONDE SE EXPENDEN BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHÓLICO EN ENVASE CERRADO CON OTRAS ACTIVIDADES O GIROS Y EN EL CUAL LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS NO ES SU ACTIVIDAD PRINCIPAL;

5.- TIENDAS DE AUTOSERVICIO, ABARROTES, TENDAJONES Y SIMILARES.- ESTABLECIMIENTOS QUE VENDEN AL PÚBLICO BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN ENVASE CERRADO, COMO ACTIVIDAD INTEGRANTE DE OTRO GIRO O SERVICIO; Y

6.- VINÍCOLA.- LOCAL AUTORIZADO PARA EXPENDER BEBIDAS ALCOHÓLICAS EXCLUSIVAMENTE EN ENVASE CERRADO. NO SE PERMITIRÁ LA VENTA DE ALCOHOL.

111.- PRODUCTORES:

1.- PRODUCTOR DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS.- PERSONA FÍSICA O MORAL AUTORIZADA PARA LA ELABORACIÓN Y FABRICACIÓN DE ALCOHOL Y BEBIDAS ALCOHÓLICAS; Y

2.- PRODUCTOR DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS ARTESANALES.- PERSONA FÍSICA O MORAL, NO PERTENECIENTE A UN CONSORCIO, AUTORIZADA, QUE DE MANERA INDEPENDIENTE PRODUCE, ALMACENA, DISTRIBUYE Y ENAJENA BEBIDAS ALCOHÓLICAS DE PRODUCCIÓN PROPIA DE ALTO Y BAJO CONTENIDO ALCOHÓLICO; Y CUYO ESTABLECIMIENTO CUENTA CON SALA DE DEGUSTACIÓN, ÁREA EN EL INTERIOR O EXTERIOR PARA DAR SERVICIO DE VENTA AL MAYOREO O MENUDEO EN ENVASE CERRADO, Y CUYO VOLUMEN DE PRODUCCIÓN NO EXCEDA DE LOS CINCO MILLONES DE HECTOLITROS ANUALES.

PARA ESTE EFECTO, SE ENTENDERÁ POR BEBIDA ALCOHÓLICA ARTESANAL AQUÉLLA EN CUYA ELABORACIÓN NO SE UTILICEN PRODUCTOS TRANSGÉNICOS, NI ADITIVOS QUÍMICOS QUE ALTEREN SU COMPOSICIÓN Y DESARROLLO NATURAL EN SU PROCESO DE FERMENTACIÓN, CONFORME A LOS PROCESOS QUE EN SU CASO

ARTICULO 22 A.- LOS ESTABLECIMIENTOS REFERIDOS EN EL ARTÍCULO 9, INCISO A), FRACCIONES I Y II, E INCISO B), FRACCIÓN I, ADEMÁS DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL

ARTÍCULO ANTERIOR, DEBERÁN TENER ALCOHOLÍMETROS O MEDIDORES PARA REALIZAR PRUEBAS DE DETECCIÓN DE INTOXICACIÓN O NIVEL DE ALCOHOL EN LA SANGRE, PARA USO VOLUNTARIO DE SUS CLIENTES.

LOS MEDIDORES O ALCOHOLÍMETROS TENDRÁN LAS CARACTERÍSTICAS Y TIEMPO MÁXIMO DE USO SEÑALADO POR LA SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE GUANAJUATO.

LOS ESTABLECIMIENTOS DEBERÁN INFORMAR A LOS CLIENTES ACERCA DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO Y POR EL INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE GUANAJUATO, TENDIENTES A EVITAR O DISUADIR TANTO EL CONSUMO EXCESIVO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, COMO LA CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES BAJO EL INFLUJO DEL ALCOHOL.

EN LOS ESTABLECIMIENTOS, SE DEBERÁ SUGERIR AL CONDUCTOR QUE SEA NOTORIO SU ESTADO DE EBRIEDAD QUE NO CONDUZCA, INFORMÁNDOLE LAS ALTERNATIVAS DE SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE.

ARTÍCULO 23.- SON OBLIGACIONES DE...

I y **II**...

III.- LA VENTA DE MERCANCÍA ALCOHÓLICA ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE SE EFECTUARÁ AL MAYOREO, SALVO EN EL CASO DE PRODUCTORES DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS ARTESANALES, QUIENES TAMBIÉN PODRÁN REALIZAR VENTA AL MENUDEO.

ARTÍCULO 26.- LOS PRODUCTORES DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, NO PODRÁN EXPENDER MERCANCÍA ALCOHÓLICA EN EL LOCAL O DEPENDENCIA DE SUS FÁBRICAS O ALMACENES, CON EXCEPCIÓN DE LOS PRODUCTORES DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS ARTESANALES, CUYA LICENCIA LOS AUTORIZARÁ A CONTAR CON SALA DE DEGUSTACIÓN Y SERVICIO DE VENTA AL PÚBLICO. LA SECRETARÍA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN REVOCARÁ LA LICENCIA Y SE PROCEDERÁ A LA CLAUSURA DEFINITIVA DE ELLOS.

LOS LOCALES DE... »

TRANSITORIOS

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, excepto lo previsto

Artículo Segundo. El titular del Poder Ejecutivo del Estado deberá proponer en la iniciativa de Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal de 2018, la tarifa correspondiente a la expedición de la licencia de productor de bebidas alcohólicas artesanales.

Artículo Tercero. La licencia de productor de bebidas alcohólicas artesanales será expedida una vez que entre en vigor la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal de 2018.

Artículo Cuarto. La Secretaría de Salud en un término de 90 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, emitirá las reglas que contengan las características y el tiempo máximo de uso de los alcoholímetros y medidores, a que hace referencia el artículo 22-A del presente decreto.

Artículo Quinto. La obligación de contar con los alcoholímetros o medidores a que hace referencia el artículo 22-A del presente decreto, entrará en vigor en un plazo de 180 días naturales, contados a partir de que la Secretaría de Salud del Estado emita las reglas señaladas en el transitorio anterior.

Guanajuato, Gto., 19 de octubre de 2017. Las Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización y de Gobernación y Puntos Constitucionales. **Dip. Elvira Paniagua Rodríguez. Dip. Libia Dennise García Muñoz Ledo. Dip. Angélica Casillas Martínez. Dip. Jorge Eduardo de la Cruz Nieto: Dip. Verónica Orozco Gutiérrez Dip.**

Arcelia María González González. Dip. María Beatriz Hernández Cruz. Dip. Beatriz Manrique Guevara. Dip. Juan Carlos Muñoz Márquez. Dip. María Alejandra Torres Novoa. Con observación. Dip. María Guadalupe Velázquez Díaz. Dip. Guillermo Aguirre Fonseca. (Con observación)

-La C. Presidenta: Me permito informar que previamente se ha inscrito el diputado Juan José Álvarez Brunel, para hablar a favor del dictamen.

Si algún otro diputado o alguna diputada desean hacer uso de la palabra en pro o en contra, manifiéstenlo indicando el sentido de su participación.

¿Diputado Juan Antonio Méndez Rodríguez?

C. Dip. Juan Antonio Méndez Rodríguez: Sí presidenta, para hablar a favor del dictamen.

-La C. Presidenta: Se concede el uso de la palabra al diputado Juan José Álvarez Brunel.

MANIFESTÁNDOSE A FAVOR DEL DICTAMEN, INTERVIENE EL DIPUTADO JUAN JOSÉ ÁLVAREZ BRUNEL.



C. Dip. Juan José Álvarez Brunel: Muy buenos días. Con su venia señora presidenta. Compañeros diputados integrantes de esta Asamblea. Público presente en este Pleno y a través de los medios electrónicos que nos siguen. Periodistas que cubren la fuente y nos ayudan a difundir las ideas que aquí se proponen.

La función primordial del gobierno es propiciar el desarrollo de sus ciudadanos provocando las mejores condiciones para su desempeño individual y colectivo.

No hay duda que el desarrollo social y el desarrollo económico conviven en toda su extensión y que sus acciones son vinculantes. Es por ello que nuestra labor como legisladores siempre va en el sentido de propiciar los horizontes de oportunidad, considerando la dinámica de nuestros tiempos y siempre cambiantes tendencias del mercado que justamente abren oportunidades de desarrollo y de crecimiento.

La industria vitivinícola en el país ha recibido el reconocimiento de su importancia este pasado 24 de octubre cuando el Senado ha aprobado la Ley de Fomento a la Industria Vitivinícola, que deberá ser ratificada por el Congreso de la Unión, En ese sector Guanajuato cuenta con más de 26 etiquetas y 40 variedades de uva que anualmente producen más de 100 mil botellas de vino y que será, sin duda, en el futuro la región vitivinícola más importante del centro del país. En el estado existe una veintena de viñedos en operación y cada año se incrementa la cobertura de vendimias en Guanajuato, eventos que tienen un efecto positivo adyacente, pues se traduce en mayores visitas a la entidad que, a su vez, general un incremento en ocupación hotelera e impulso al sector gastronómico.

En el período enero-agosto, el estado recibió la llegada de 3.5 millones de turistas que pernoctaron en el estado, lo que ha representado un incremento del 18% en relación a 2016 con una ocupación promedio del 47%.

Además, durante los primeros ocho meses del año, fuimos anfitriones de 19.2 millones de visitantes turistas y excursionistas que han generado una derrama económica por ambos conceptos de más de 50 mil millones de pesos, mostrando variaciones positivas del 18 y 21%.

Con estos datos podemos conocer la importancia del turismo del estado que significa una trascendental fuente de ingresos y actividad económica.

En ese sentido cabe referir la columna del periodista Carlos Borboa del periódico Universal, con fecha 14 de septiembre de 2017, en el cual hace una reseña sobre la realización del *México* Selection by Concours Mondial de *Bruxelles 2017,* en el cual

destacaron los destilados tequila y mezcal del estado de Guanajuato y cuya manufactura se realiza en la zona norte y sur del estado en los municipios de San Felipe, San Luis de la Paz en el tema del mezcal y en Pénjamo del tequila.

A las actividades vitivinícolas y de destilados, se suma la producción de cerveza artesanal. El censo actual es de más de una veintena de productores de esta bebida. En ese sentido el pasado 20 de julio del presente año, se realizó el 4° Festival de Cerveza Artesanal en la ciudad de Celaya, donde se dio la afluencia de 900 personas y una derrama económica de 3 millones de pesos.

Asimismo, con la finalidad de posicionar el evento a nivel internacional, por segundo año consecutivo se crearon alianzas con la Embajada de Alemania y por primera vez con Uruguay.

Por lo antes expuesto queda de manifiesto la importancia del sector gastronómico vitivinícola, destilados y cervecero en el desarrollo de las MIPYME'S de Guanajuato y su interrelación con la promoción económica y turística de nuestro estado.

Es por ello que el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en fecha 20 de octubre de 2016, presentó la iniciativa de reformas a la Ley de Alcoholes del Estado de Guanajuato, con la finalidad de generar la licencia para el productor artesanal de cerveza y beneficiar este sector para la regulación de sus empresas, de manera que tenga un costo diferente a los grandes consorcios, pues es de saber que su capacidad de producción y distribución es, sin duda, menor.

No obstante, de las mesas de trabajo para el análisis de la iniciativa, así como de las observaciones vertidas, se consideró que este beneficio debería ampliarse a los productores artesanales de bebidas alcohólicas y, con ello, también fortalecer el sector de destilados producidos en nuestra entidad.

Seguro estoy compañeros legisladores que con la aprobación del presente dictamen fortaleceremos no solamente al sector turístico de Guanajuato, sino también apoyaremos a las MIPYME'S que generan empleo y enaltecen a Guanajuato mostrando al resto de la república, incluso a otros países, la calidad de lo producido en nuestra entidad.

De relevancia es decir que este dictamen no se limitó únicamente a la regulación de licencia de los productores artesanales, también se atendió de conformidad a la obligación establecida por la fracción IX del artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la generación de normas encaminadas a combatir los efectos del consumo del alcohol.

Así las cosas, se analizaron de manera conjunta tanto la iniciativa presentada por Acción Nacional de esta legislatura, como la presentada por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México ante la Sexagésima Segunda Legislatura, esto con la finalidad de evitar o disuadir la conducción de vehículos automotores bajo el influjo de bebidas alcohólicas, creándose la obligación para que los establecimientos en donde se consuman tales productos, cuenten con alcoholímetros para que los clientes, de manera voluntaria, verifiquen su grado de alcoholemia.

Es entonces este dictamen un trabajo que fortalece el sector económico del estado, atendiendo también la responsabilidad social para la generación de políticas públicas que se traduzcan en el desarrollo integral de los guanajuatenses.

He de reconocer el trabajo de las Comisiones Unidas de Hacienda y Gobernación, en cabezadas por las diputadas Elvira Paniagua Rodríguez y Libia Dennise García Muñoz Ledo y agradeciendo por supuesto a todos los integrantes de estas comisiones su disposición para la consolidación de un estado moderno, dinámico e incluyente.

Por lo antes mencionado compañeras y compañeros diputados, solicito el voto a favor del presente dictamen, de manera que sigamos transitando por las senda de la coincidencias en beneficio de nuestros representados. Muchas gracias.

-La C. Presidenta: Se concede el uso de la palabra al diputado Juan Antonio Méndez Rodríguez.

EL DIPUTADO JUAN ANTONIO MÉNDEZ RODRÍGUEZ INTERVIENE EN PRO DEL DICTAMEN PUESTO A CONSIDERACIÓN.



C. Dip. Juan Antonio Méndez Rodríguez: Con el permiso de la presidenta, de la mesa directiva y de todas las compañeras y compañeros diputados.

Cuando hablamos de nuestro gran estado de Guanajuato tenemos en mente también al campo guanajuatense. Hoy vemos la denominación de origen en el norte del estado para la producción de mezcal como actividad primaria y también vemos lo que es la denominación de origen para el agave en la producción de tequila. Asimismo, hoy vemos también un auge en la plantación de uva, de vid, en la producción de vino para Guanajuato que sin lugar a dudas vendrá a ser una actividad prioritaria en materia económica para los guanajuatenses.

Hoy con esta reforma de la cerveza artesanal que se hace, también fortalece la actividad productora en donde la producción de cebada puede ser también transformada en esa cerveza artesanal.

Es por ello que hoy ante este Congreso pedimos el voto a favor del presente dictamen porque hemos tenido coincidencias en materia económica; hoy también tenemos que buscar esa coincidencia en proteger a los guanajuatenses que consumen el alcohol y que los excesos en el consumo ha provocado grandes fallecimientos, ha provocado también accidentes viales; es por ello que hoy estamos ante este dictamen pidiendo el voto a favor en el resultado de estas iniciativas presentadas sobre la Ley de Alcoholes, en específico porque encontramos coincidencias con la propuesta que han hecho los legisladores de la Sexagésima Segunda Legislatura del Partido Verde Ecologista de México y que contienen propósitos de impulsar la actividad económica de Guanajuato por un lado y, por otro, proteger la salud y la vida de los guanajuatenses al involucrar a la sociedad en la prevención y disminución de accidentes, compartiendo responsabilidades con los órganos de gobierno para lograr soluciones eficaces pero sobre todo reales para los habitantes de nuestro estado.

La propuesta inicial del grupo parlamentario que represento, se vio complementada con una obligación específica para que quienes vendan alcohol para consumo dentro de sus establecimientos, contraigan una corresponsabilidad para evitar e inhibir el uso de vehículos automotores bajo el influjo del alcohol.

En Guanajuato se han tomado diversas acciones preventivas para evitar que las personas conduzcan bajo la influencia del alcohol por parte de las autoridades administrativas de todos los niveles, pero requiere más efectividad; es necesario incluir a uno de los actores claves en la prevención, quienes operan los establecimientos donde se consume el alcohol; es decir, de manera directa involucrar a los vendedores de alcohol. De esta forma, como se reconoce en el dictamen que hoy se pone a su consideración, estamos en aprobar –de manera conjunta-, las propuestas que han generado diversos actores en esta iniciativa; pero sobre todo se busca evitar accidentes automovilísticos y controlar el consumo de este alcohol.

La reforma planteada no sólo es posible, sino es necesaria bajo un principio de responsabilidad compartida que exige una participación activa del estado pero también de los distintos sectores económicos de la sociedad para resolver un mal que aqueja a nuestras comunidades y que incide principalmente en los jóvenes.

Aunado a lo anterior, la reforma planteada también tiene que ver con prevenir conductas generando violencia, que pueden generar accidentes, que pueden afectar la salud y también es parte de combatir las adicciones; por ello se involucra de forma directa y con una corresponsabilidad a aquellas personas que operen los sitios donde se consumen bebidas con contenido alcohólico; por lo tanto, para un mejor

Guanajuato y hoy que hay coincidencias en varios temas en este Congreso, reconocer el trabajo que han hecho sobre todo en esta iniciativa en materia económica el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con el apoyo de todos los otros partidos y las representaciones parlamentarias, estamos comprometidos con Guanajuato.

Por lo anterior, les pido el voto a favor de este dictamen porque de esta manera apuntalamos un sector importante en lo económico y, por otro lado, también establecemos las reglas para prevenir el abuso y posibles decesos de guanajuatenses, tenemos que trabajar en el lado de actividad primaria, producción económica, así como con la prevención, la salud, el abatir adicciones y, sobre todo, que este gran Guanajuato siga creciendo en beneficio y en protección de los guanajuatenses en materia de alcohol. Muchas gracias por su atención.

-La C. Presidenta: Esta presidencia a nombre del Congreso del Estado, da la más cordial bienvenida a los alumnos de la universidad «Yahualica» del municipio de San Francisco del Rincón, Guanajuato, invitados por la diputada Beatriz Manrique Guevara. ¡Sean ustedes bienvenidos!

Agotadas las participaciones, se pide a la secretaría que proceda a recabar votación nominal de la Asamblea, a través del sistema electrónico, a efecto de aprobar o no el dictamen en lo general puesto a su consideración. Se abre el sistema electrónico.

-La Secretaría: En votación nominal, por el sistema electrónico, se consulta a las diputadas y a los diputados si se aprueba en lo general el dictamen puesto a su consideración.

(Votación)

¿Falta alguna diputada o algún diputado por emitir su voto?

-La C. Presidenta: Se cierra el sistema electrónico.

-La Secretaría: Señora presidenta, se registraron 32 votos a favor y ningún voto en contra.

-La C. Presidenta: El dictamen ha sido aprobado en lo general por unanimidad de los presentes.

Corresponde someter a discusión el dictamen, en lo particular. Si desean reservar cualquiera de los artículos que contiene, sírvanse apartarlo, en la inteligencia de que los artículos no reservados se tendrán por aprobados.

Esta presidencia declara tener por aprobados los artículos que contiene el dictamen.

Remítase al Ejecutivo del Estado el decreto aprobado, para los efectos constitucionales de su competencia.

Corresponde someter a discusión, en lo general, el dictamen presentado por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, relativo a la iniciativa a efecto de reformar la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, en materia de designación del titular del organismo estatal de protección de los derechos humanos, suscrita por las diputadas y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, ante esta Sexagésima Tercera Legislatura.

DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL DICTAMEN PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, RELATIVO A LA INICIATIVA A EFECTO DE REFORMAR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, EN MATERIA DE DESIGNACIÓN DEL TITULAR DEL ORGANISMO ESTATAL DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS, SUSCRITA POR LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, ANTE ESTA SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA.

»C. DIPUTADA ANGÉLICA CASILLAS MARTÍNEZ. PRESIDENTA DEL CONGRESO DEL ESTADO. PRESENTE.

A la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de esta Sexagésima

Tercera Legislatura, nos fue turnada para efecto de su estudio y dictamen, la **iniciativa a efecto de reformar la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, en materia de designación del titular del organismo estatal de protección de los derechos humanos, suscrita por las diputadas y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, ante esta Sexagésima Tercera Legislatura.**

Con fundamento en los artículos 111 fracción I, y 171 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, formulamos a la Asamblea el siguiente:

DICTAMEN

I. Del Proceso Legislativo

I.1. En sesión del 27 de octubre de 2016 ingresó la iniciativa a efecto de reformar la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, en materia de designación del titular del organismo estatal de protección de los derechos humanos, suscrita por las diputadas y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, turnándose por la presidencia del Congreso a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 111, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato.

I.2. En reunión de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, de la Sexagésima Tercera Legislatura del 31 de octubre de 2016, se radicó la iniciativa.

II.1 Metodología y proceso de dictaminación

Se acordó como metodología de análisis y estudio lo siguiente:

a) Se remitió la iniciativa a las diputadas y los diputados integrantes de la Sexagésima Tercera Legislatura, a la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, a la Coordinación General Jurídica de Gobierno del Estado, al Poder Judicial del Estado, y a las universidades en la entidad, quienes contaron con un término de 10 días hábiles para remitir los comentarios y observaciones que estimaron pertinentes, a través de la misma vía de comunicación.

b) Se estableció un link en la página web del Congreso del Estado, para que la iniciativa pudiera ser consultada y se pudieran emitir observaciones.

c) Se solicitó al Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso un estudio sobre el mecanismo de designación en todos los estados de la República del Procurador de Derechos Humanos, así como una opinión sobre la iniciativa.

d) Las observaciones remitidas a la secretaría técnica, fueron compiladas y además se elaboró un documento con formato de comparativo para presentarlo a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

e) El comparativo se circuló a las diputadas y a los diputados integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales a efecto que se impusieran de su contenido.

f) Se estableció una mesa de trabajo con el carácter de permanente conformada por las y los integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, asesores de quienes conforman la misma, -un representante en su caso- de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, de la Coordinación General Jurídica de Gobierno del Estado, del Poder Judicial del Estado, y de igual forma a los diputados y diputadas de esta Legislatura que desearon asistir, para discutir y analizar las observaciones remitidas.

II.2. Se generaron dos mesas de trabajo para analizar las observaciones y

comentarios con respecto a la iniciativa, las cuales se realizaron el 13 y 26 de septiembre de 2017. Estando presentes las diputadas Libia Dennise García Muñoz Ledo, María Beatriz Hernández Cruz, Beatriz Manrique Guevara y los diputados Guillermo Aguirre Fonseca y Jorge Eduardo de la Cruz Nieto, integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, funcionarios de la Coordinación General Jurídica de Gobierno del Estado, y de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato. De igual forma asistieron asesores de los grupos parlamentarios de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y de la representación parlamentaria del Partido Movimiento Ciudadano; así como la secretaría técnica de la Comisión.

Remitieron observaciones la Coordinación General Jurídica de Gobierno del Estado, y la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato.

II.3. **Finalmente, la presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, instruyó a la Secretaría Técnica para que elaborara el proyecto de dictamen, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, fracción VII y 272 fracción VIII inciso e) de nuestra Ley Orgánica, mismo que fue materia de revisión por los diputados y las diputadas integrantes de esta Comisión Dictaminadora.**

III. Contenido de la iniciativa de reforma a la Constitución Política para el Estado de Guanajuato

En este apartado, consideraremos —las y los encargados de dictaminar— los puntos sobre los cuales versa el sustento para el análisis y estudio de la iniciativa a efecto de reformar la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, en materia de designación del titular del organismo estatal de protección de los derechos humanos. Coincidimos con las y los iniciantes —de manera general—, sobre las consideraciones planteadas en la exposición de motivos, como se aprecia en los siguientes argumentos que se citan:

«Primero. La Constitución Política para el Estado de Guanajuato, en lo que interesa al propósito de la presente iniciativa, señala:

Artículo 4, párrafo sexto al octavo:

«La elección del titular del organismo estatal de protección de los Derechos Humanos se ajustará a un procedimiento de consulta pública, que deberá ser transparente, en los términos y condiciones que determine la Ley de la materia.

El titular del organismo estatal de protección de los Derechos Humanos, quien lo será también del Consejo Consultivo, durará en su encargo cuatro años, con la posibilidad de ser ratificado por una sola vez, aplicando las reglas establecidas en la ley de la materia y únicamente podrá ser removido de sus funciones en los términos del Título Noveno de esta Constitución.

El titular del organismo estatal de protección de los Derechos Humanos enviará anualmente un informe de actividades al Congreso del Estado, el cual se hará de conocimiento del Gobernador del Estado, así como del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, de los ayuntamientos y de los organismos que esta Constitución otorga autonomía, en términos de lo que al efecto disponga la Ley de la materia.»

Por otra parte, el numeral 63, fracción XXI, sexto párrafo, de la propia Norma Fundamental Local, establece que son facultades del Congreso del Estado, entre otras:

Designar por el voto de más de la mitad de la totalidad de sus integrantes, al titular del organismo estatal de protección de los Derechos Humanos, de acuerdo a la propuesta que formule el Ejecutivo del Estado de conformidad con el procedimiento de consulta pública contemplado en esta Constitución y en los términos de la Ley de la materia. Así como a los integrantes del Consejo Consultivo. La Diputación Permanente tendrá la

facultad de ratificarlos nombramientos de los integrantes del Consejo Consultivo, en los términos de la Ley de la materia.

En la misma línea a proponer, los ordinarios 11, 12 y 14 de la Ley para la Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Guanajuato, precisan:

Artículo 11. Para ocupar el cargo de Procurador se requiere:

I. Tener la ciudadanía mexicana, con residencia en el Estado no menor de cinco años anteriores a la fecha de su nombramiento;

II. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos al día de la designación;

III. Ser preferentemente Licenciado en Derecho;

IV. Gozar de reconocido prestigio profesional y personal, así como en la defensa, promoción y difusión de los derechos humanos;

V. No desempeñar cargo o empleo público al momento de asumir el cargo; ni actividad que se contraponga a las funciones propias de su encomienda, excepción hecha de los de carácter docente; y

VI. *No haber sido* condenado por delito doloso.

Artículo 12. El titular de la Procuraduría, será designado por el voto de la mitad más uno de la totalidad de quienes integren el Congreso del Estado.

Para tales efectos, el Ejecutivo del Estado previa convocatoria, establecerá las bases para proceder a realizar una amplia auscultación entre las organizaciones sociales representativas de los distintos sectores de la sociedad, así como entre los organismos públicos y privados, asociaciones y colegios promotores, defensores o vinculados al tema de los derechos humanos y, en general, a las entidades o personalidades que estime conveniente, a fin de que propongan candidaturas para hacerse cargo de la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado.

Con base en dicho procedimiento y una vez escuchadas a las personas interesadas, el Ejecutivo del Estado propondrá al Congreso del Estado, una terna de candidatos para que de entre ellos, se designe a quien ocupe el cargo.

En el caso de que la terna no fuese aprobada, se regresará al Ejecutivo del Estado, para que en el término de cinco días elabore una nueva terna, considerando a otros de los propuestos a partir de la convocatoria y cuya aprobación se hará conforme a lo previsto por los párrafos anteriores.

Si esta segunda terna es rechazada, el Ejecutivo del Estado designará de entre los propuestos a la persona que desempeñará el cargo de Procurador.

Artículo 14. El Titular de la Procuraduría durará en sus funciones cuatro años, y podrá ser ratificado por el Congreso del Estado exclusivamente para un segundo periodo, a propuesta del Ejecutivo del Estado.

La ratificación deberá ser aprobada por el voto de la mitad más uno de la totalidad de quienes integren el Congreso del Estado.

El acuerdo del Congreso del Estado por el que se ratifique en su caso al titular de la Procuraduría será publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

En el supuesto de que no se ratifique para un segundo periodo al titular de la Procuraduría, se aplicarán las reglas contempladas en esta ley para la designación de un nuevo titular. Mientras tanto, en lo que se desarrolla el mecanismo para la designación, el Secretario General de la Procuraduría ejercerá las funciones que le corresponden al Procurador.

Segundo. Por lo que se refiere al contexto nacional, la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos indica en su Artículo 102, punto 8, párrafos sexto, séptimo y octavo, lo siguiente:

B. El Congreso de...

Los organismos a...

Estos organismos no...

El organismo que...

Las Constituciones de...

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tendrá un Consejo Consultivo integrado por diez consejeros que serán elegidos por el voto delas dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, por la Comisión Permanente del Congreso dela Unión, con la misma votación calificada. La ley determinará los procedimientos a seguir para la presentación de las propuestas por la propia Cámara. Anualmente serán substituidos los dos consejeros de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen propuestos y ratificados para un segundo período.

El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien lo será también del Consejo Consultivo, será elegido en los mismos términos del párrafo anterior. Durará en su encargo cinco años, podrá ser reelecto por una sola vez y sólo podrá ser removido de sus funciones en los términos del Título Cuarto de esta Constitución.

La elección del titular de la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como de los integrantes del Consejo Consultivo, y de titulares de los organismos de protección de los derechos humanos de las entidades federativas, se ajustarán a un procedimiento de consulta pública, que deberá ser transparente, en los términos y condiciones que determine la ley.

El Presidente de...

La Comisión Nacional...

La Comisión Nacional...

A tono del imperativo fundamental, La Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, prescribe:

Artículo 9o. El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos deberá reunir para su elección los siguientes requisitos:

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos;

II. Tener cumplidos treinta y cinco años de edad, el día de su elección;

III. Contar con experiencia en materia de derechos humanos, o actividades afines reconocidas por las leyes mexicanas y los instrumentos jurídicos internacionales;

IV. No desempeñar, ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal, en algún partido político en el año anterior a su designación;

V. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de Secretario o Subsecretario de Estado, Procurador General de la República, Gobernador o procurador general de justicia de alguna entidad federativa o jefe de

gobierno del Distrito Federal, en el año anterior a su elección;

VI. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, lo inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena, y

VII. Tener preferentemente título de licenciado en derecho.

Artículo 10. El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, será elegido por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con la misma votación calificada. Para tales efectos, la comisión correspondiente de la Cámara de Senadores procederá a realizar una amplia auscultación entre las organizaciones sociales representativas de los distintos sectores de la sociedad, así como entre los organismos públicos y privados promotores o defensores de los derechos humanos.

Con base en dicha auscultación, la comisión correspondiente de la Cámara de Senadores propondrá al pleno de la misma, una terna de candidatos de la cual se elegirá a quien ocupe el cargo o, en su caso, la ratificación del titular.

Artículo 11. El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos durará en su encargo cinco años, y podrá ser reelecto por una sola vez.

Artículo 12. Las funciones del Presidente de la Comisión Nacional, de los Visitadores Generales y de la Secretaría Ejecutiva, son incompatibles con el desempeño de cualquier otro cargo, empleo o comisión de la Federación, los Estados, Municipios o en organismos privados, o con el desempeño de su profesión, exceptuando las actividades académicas.

Artículo 13. El Presidente de la Comisión Nacional y los Visitadores Generales no podrán ser detenidos ni sujetos a responsabilidad civil, penal o administrativa, por las opiniones y recomendaciones que formulen, o por los actos que realicen, en ejercicio de las funciones propias de sus cargos que les asigna esta ley.

Artículo 14. El Presidente de la Comisión Nacional podrá ser removido de sus funciones y, en su caso, sujeto a responsabilidad, sólo por las causas y mediante los procedimientos establecidos por el Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En este supuesto, el Presidente será substituido interinamente por el primer Visitador General, en tanto no se designe nuevo Presidente de la Comisión Nacional.

Tercero. Según Graciela Rodríguez y Luis Miguel Cano (Un Ombudsman Modelo, propuesta estándar de elección y perfil de los titulares de organismos públicos de derechos humanos, Serie Ombudsman 1, México 2006, FUDAR), los legisladores estamos obligados a garantizar y fortalecer jurídicamente la imparcialidad de los funcionarios, sobre todo de aquellos que escapan al régimen común de los servidores públicos y que al ser integrantes de organismos cuya autonomía se desprende de la propia Constitución, cuya lógica natural de su imparcialidad difícilmente puede encontrar razones en oposición.

Por ello, en las normas que regulan la designación, perfil y ratificación de tales servidores públicos, como es el

caso de los titulares de organismos públicos de derechos humanos, se estructura un régimen de incompatibilidades, prohibiciones, neutralidad política, carrera profesional y un régimen disciplinario de las que, como mínimo, estriba la existencia de una independencia funcional en el ejercicio de las potestades administrativas, y que pueden ser un medio para el aseguramiento jurídico de una conducta de los funcionarios distanciada del poder público, leal al Derecho, imparcial, profesional y al servicio del bien común.

De acuerdo a la relatoría de Rodríguez Manzo y Cano López, la institución del ombudsman en México ha pasado por varias etapas, y con el «objetivo de fortalecer dicha institución se propuso en 1999 una nueva reforma constitucional, que dotó a la CNDH de plena autonomía. Para ello, se consideró necesario idear un nuevo procedimiento para elegir a su titular que no dependa de la participación del Ejecutivo Federal, ni siquiera en calidad de proponente confiado al Senado de la República y, en sus recesos, a la propia Comisión Permanente», y se ordenó a las legislaturas locales establecer instituciones similares en su ámbito territorial, lo que debe entenderse en su sentido sustantivo y adjetivo.

En 2001, la autonomía del ombudsman se fortalece con el mecanismo de participación ciudadana relativo a la obligación de la comisión interna del Senado para realizar «una amplia auscultación entre organizaciones sociales representativas de los distintos sectores de la sociedad, con base en la cual debe proponer al Pleno de dicha Cámara una terna de candidatos, o en su caso, la ratificación del titular.»

De esta forma, el vínculo entre el organismo protector de los derechos humanos y sociedad civil, los procedimientos por los que se elige a su titular y los requisitos mínimos que se exijan para ocupar ese cargo, son elementos determinantes para evaluar la verdadera autonomía en el desempeño de dichos organismos, y por encima de ello, la legitimidad en el ejercicio del mandato de estos organismos.

Por tanto, resulta impostergable superar el actual diseño constitucional y legal que para tal propósito tiene el estado de Guanajuato, y evolucionar institucionalmente en los requisitos de elegibilidad del titular de la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos, a fin de fortalecer su independencia y garantizar su legitimidad; además de acercar la designación de dicho titulara las exigencias democráticas actuales de la entidad.

Cuarto. Los requisitos de elegibilidad del titular del organismo garante de los derechos humanos varían de entidad a entidad, pero a la fecha llama la atención que además de Guanajuato, solo tres de los treinta y tres titulares de los organismos protectores de los derechos humanos del país, son designados a propuesta o con intervención del poder ejecutivo, como son los correspondientes a las entidades de Campeche, Nuevo León y Tamaulipas, mecánica que democráticamente se torna difícil de justificar y abre la puerta para que en nuestra realidad política la influencia del gobernador sea suficiente para lograr el nombramiento de funcionarios sin que el legislativo pueda hacer contrapeso a dicha pretensión.

Por lo que se refiere a la separación efectiva de cargos públicos como requisito de elegibilidad, es un descuido legislativo no asegurar la mayor distancia entre el Procurador de los Derechos Humanaos y las autoridades gubernamentales a las que se debe de supervisar. De esta manera, el principio de independencia sirve tanto de fundamento para el régimen de incompatibilidades, como para introducir en carácter de

requisito de elegibilidad la disociación entre la aspiración a la procuraduría y el desempeño con cierta antelación de responsabilidades de gobierno, religiosas y partidistas, incluso en forma posterior como se prescribe, por ejemplo, para los integrantes de los organismos electorales del país.

Para lo anterior, es necesaria una oportuna separación que permita considerar que la persona encargada de defender los derechos humanos no está ligada a las autoridades ni a los partidos políticos. La legislación de Guanajuato demanda dicho elemento solo al momento de asumir ese cargo, demeritándolo a una simple incompatibilidad, lo cual mantiene un área descubierta que puede despertar sospechas, además de que no hace referencia específica a un distanciamiento con posiciones político-partidistas.

«Las legislaciones sobre los OPDH deben establecer como requisito de elegibilidad la separación efectiva de las personas que aspiren a dirigir dichos organismos de los centros de poder, ordenando la mayor antelación posible de ese alejamiento, e incluso, una prevención para que con posterioridad.» (Rodríguez G. y Cano Luis Miguel, Un Ombudsman Modelo, propuesta estándar de elección y perfil de los titulares de organismos públicos de derechos humanos, Serie Ombudsman 1, México 2006, FUDAR).

En los procedimientos de designación en los que participa una instancia legislativa, por el origen electivo y la función representativa de esta, fortalece su cercanía con la sociedad civil que defiende los derechos humanos, o todavía más, garantiza que sus titulares representen a la ciudadanía.

«Una más de las medidas benéficas para el procedimiento de designación del ombudsman, que en todo caso no sólo debiera ser aconsejable sino obligatoria, en razón del cumplimiento del principio de igualdad que escolta al derecho a poder ser nombrado a cargos públicos diversos de los de elección popular, se establece abiertamente en Michoacán. En esta entidad se ordena, expresamente, la comparecencia de los aspirantes a la presidencia de su OPDH para exponer sus propuestas ante el órgano legislativo, con lo cual se dota de mayores elementos de convicción a los legisladores y se fomenta la difusión de debates públicos que transparenten las posturas de los candidatos.» Esta exigencia no debería obviarse para reflexionar en lo tocante a la ratificación, pues para que esta se efectúe únicamente se requiere la propuesta y decisión respectivas de los órganos legislativos, no así la participación ciudadana.

A decir de los mismos autores, de esta forma, puede concluirse que el perfil idóneo de ombudsman puede alcanzarse si este reúne ciertos requisitos de tipo sustantivo y otros de carácter institucional. Los primeros se conforman con la exigencia de contar con conocimientos y experiencia en la defensa y promoción de los derechos humanos, la de encontrase inmiscuido en el contexto o realidad de la sociedad en la que se desempeñará, así como la de no haber sido objeto de recomendaciones provenientes de OPDH.

Los requisitos institucionales consisten en gozar de absoluta independencia, esto es, una separación real y efectiva de los centros de poder público y privado, políticos y económicos y, por la otra, su efectiva ciudadanización, es decir, su legitimidad o bien que en su persona se encuentre una verdadera representación de los intereses de la sociedad civil.

Quinto. Marginalmente, pero no por ello intrascendente, vale señalar que

el último párrafo dela fracción XXI del artículo 63 de la Constitución Política de la Entidad, señala que corresponde al Congreso del Estado: «Designar, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros, a los titulares de los órganos internos de control de los organismos con autonomía reconocida en esta Constitución que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos del Estado.»

Lo anterior cobra importancia ante el dispar tratamiento que se da para la designación del Procurador de los Derechos Humanos por simple mayoría de los integrantes del Congreso, mientras que para designar al titular del órgano interno de control de la misma Procuraduría, se exige el voto de las dos terceras del Pleno.»

Las diputadas y los diputados que conformamos la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, estamos convencidos que, es posible delinear un modelo de procedimiento de designación del ombudsman, que verdaderamente califique de elección. Este tipo ideal se conforma de tres elementos, a saber, la exclusión de los poderes ejecutivos, la encomienda de la conducción del procedimiento a instancias legislativas, y la participación vinculante u obligatoria de la sociedad civil, a través de ciertos actores representativos.

Este ejercicio legislativo, es una responsabilidad política e institucional con los ciudadanos guanajuatenses, pues para nosotros es indispensable fortalecer las instituciones autónomas que buscan proteger los derechos humanos de las personas, y en este caso de los guanajuatenses, situación con la cual coincidimos.

El nombramiento del Ombudsman estatal es una decisión muy importante, sobre todo, porque debe descansar en la personalidad que debe tener quien lo preside, es decir, se debe observar su prestigio personal, que sea una persona con conocimientos, pero sobre todo, con un real compromiso con la causa de los derechos humanos en el estado de Guanajuato. Que no sea una persona que tenga una afinidad con algún grupo político, sino que tenga plena libertad y autonomía para cumplir la tarea.

Es decir, con esta propuesta de reforma a nuestro Código Político Local y en el marco de los procesos de consolidación democrática experimentados en la región se ha logrado mucho, a pesar de las debilidades e injusticias o, dicho de otra manera, de la contradicción entre la democracia y la liberalización económica, muchas veces sin políticas sociales, que no permiten impulsar un verdadero estado democrático, social, de derecho. Por ejemplo, muchos estados han adoptado nuevas constituciones que incorporan reivindicaciones de grupos que anteriormente habían sido excluidos; las elecciones son cada vez más transparentes y libres; hay más instancias para el debate público; y los mismos Estados han ido adoptando instituciones propias responsables de velar por el respeto de los derechos humanos en sus respectivos países, así como de fiscalizar la función administrativa del Estado. La instauración e implementación institucional del Defensor del Pueblo, Procuraduría o Comisión de Derechos Humanos, en diferentes países y estados de la región, con las características que le son propias y que la singularizan de la figura escandinava original, ha insertado un nuevo y vigoroso actor en el marco de los sistemas de justicia estatales y en la justiciabilidad de los derechos humanos, sobre todo frente al poder que ejercen los órganos estatales. Y con esta reforma en cuanto a la designación de su titular fortalecemos el organismo autónomo en el marco de respeto más estricto.

Estamos conscientes quienes dictaminamos que, sólo un sistema de gobierno donde tanto las instituciones como las personas a quienes se confían funciones estatales estén efectivamente sujetas a diversas formas de control, puede considerarse democrático. Debe haber un control de naturaleza política, que pueda ser ejercido por la ciudadanía de diversas maneras. Y una manera de control es por imperio de la legalidad y ejercida por diversas instituciones del Estado en forma independiente, como es el trabajo encomendado a los Ombudsman.

Resulta sumamente interesante el hecho de que el Estado Moderno, cuya legitimidad se encuentra fundamentada en el

bien común, por diversos factores históricos, sociales y culturales, haya llevado a cabo la creación una institución dedicada precisamente a tutelar y defender a los habitantes contra el Estado mismo, mediante su vigilancia, control, supervisión y fiscalización.

La labor que vienen realizando estas instituciones, garantiza una tutela real de los derechos e intereses de los habitantes, velado porque el funcionamiento del sector público se encuentre ajustado a la Constitución, a las leyes, convenios internacionales suscritos por el Estado y los principios generales del derecho. Asimismo, no se puede negar que por su naturaleza ha devenido como un vital bastión en la promoción y divulgación de los derechos humanos. Lo anterior se traduce en el trabajo conjunto que llevan a cabo las diferentes figuras en sus respectivos países.

En muchas ocasiones se tiende a desvirtuar la labor del Ombudsman acotando su imposibilidad de funcionamiento, fundamentándose esta tesis en que la figura es ajena a las instituciones jurídicas latinoamericanas, y que la influencia de instituciones exitosas en otras partes del mundo no garantiza un favorable resultado en nuestras jóvenes democracias. La figura del Ombudsman en nuestros países colabora al establecimiento y consolidación de una democracia sólida y estable, y es un instrumento complementario de otros establecidos en sociedades democráticas como los tribunales de justicia, los congresos, las contralorías y los tribunales electorales. Dada su función protectora de derechos humanos, esta institución ha contribuido a fortalecer los mecanismos de representación y comunicación entre la sociedad civil y los gobernantes, incidiendo directamente en el incremento de la gobernabilidad. Esto ha permitido que la imagen que la ciudadanía tiene de la institución sea muy positiva, contando con una alta cuota de legitimidad. Creemos y estamos convencidos que con esta reforma, cerramos ese círculo que fortalecerá a la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato.

IV. Modificaciones a la iniciativa

Dados los trabajos al interior de la Comisión dictaminadora, fue que se acordó modificar la propuesta para hacerla acorde a la estructura de la propia Constitución y de la institución que regula. Esto al final describe el trabajo institucional y político de las fuerzas políticas representadas en el Congreso del Estado de Guanajuato.

A pesar de que la iniciativa que nos ocupa, tiene entre sus principales pretensiones que el titular del Poder Ejecutivo no tenga participación en el proceso de consulta pública —hasta ahora establecido en la Constitución de nuestro estado—, y que de esta consulta formule terna para que sea el Congreso del Estado quien designe al titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato. Ello no se logra, debido a la omisión en la armonización que una iniciativa de este tipo —reforma constitucional— debe prevenir; es decir, deja de lado dispositivos constitucionales locales que abordan el proceso de designación del titular del organismo estatal de protección de los Derechos Humanos. En este caso específico el párrafo tercero de la fracción XII del artículo 77 —el cual señala las facultades y obligaciones del Gobernador del Estado—, que señala la facultad del titular del Poder Ejecutivo de proponer al Congreso del Estado la terna para que el legislativo elija al Procurador de los Derechos Humanos:

> «**Artículo 77.-** Las facultades y obligaciones del Gobernador del Estado, son:
>
> **I.-** a **XI...**
>
> **XII...**
>
> …
>
> Proponer en terna al Congreso del Estado, a los candidatos para elegir al titular del organismo estatal de protección de los Derechos Humanos, una vez que haya efectuado el procedimiento de consulta pública a que se refiere el artículo 4 de esta Constitución y de conformidad con la Ley de la materia. En caso de que la terna que proponga sea rechazada, formulará una nueva. Si esta segunda

terna es rechazada por el Congreso del Estado, el Gobernador del Estado designará de entre los propuestos, a la persona que será el titular del organismo estatal de protección de los Derechos Humanos.»

En este contexto, el proponer —en los términos de la iniciativa—, solo la reforma al artículo 63 fracción XXI, párrafo séptimo, de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, implica solo el cambio en la votación que el Congreso del Estado debe realizar para la multicitada designación, de una mayoría simple a una calificada; misma votación que se requerirá para la designación de los integrantes del Consejo Consultivo de la Procuraduría de referencia; así como establecer la prohibición de que quien haya fungido como Procurador no pueda desempeñar cargos de dirección en el Poder Ejecutivo, ni ser postulado a cargos de elección popular durante el año siguiente a la fecha de conclusión de su encargo. Y la reforma quedaría incompleta, por ello fue necesario determinar ajustar por congruencia normativa los contenidos del artículo 77, para hacerla acorde y armonizarla con los alcances de la misma. En ese sentido se deroga el siguiente texto del artículo 77, fracción XII, párrafo tercero:

«Proponer en terna al Congreso del Estado, a los candidatos para elegir al titular del organismo estatal de protección de los Derechos Humanos, una vez que haya efectuado el procedimiento de consulta pública a que se refiere el artículo 4 de esta Constitución y de conformidad con la Ley de la materia*. En caso de que la terna que proponga sea rechazada, formulará una nueva. Si esta segunda terna es rechazada por el Congreso del Estado, el Gobernador del Estado designará de entre los propuestos, a la persona que será el titular del organismo estatal de protección de los Derechos Humanos.»*

En cuanto a la propuesta relativa a que quien haya fungido como Procurador no pueda desempeñar cargos de dirección en el Poder Ejecutivo, ni ser postulado a cargos de elección popular durante el año siguiente a la fecha de conclusión de su encargo; se analizó la necesidad y la pertinencia de esta disposición, ello ante la posibilidad de violar la libertad de trabajo establecida en el artículo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

«**Artículo 5o.** A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial.

…»

Quienes dictaminamos, sabemos que, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido jurisprudencia que establece que el Poder Legislativo no puede establecer restricciones a la libertad de trabajo en relación con gobernados en particular:

LIBERTAD DE TRABAJO. EL PODER LEGISLATIVO NO PUEDE RESTRINGIR ESA GARANTÍA A GOBERNADOS EN PARTICULAR. Del análisis cuidadoso del artículo 5o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende que **el Poder Legislativo puede, al emitir una ley, restringir la libertad de trabajo de una manera general, impersonal y abstracta, determinando** que **una actividad es ilícita, pero de ninguna manera puede establecer restricciones a esa garantía en relación con gobernados en particular, aunque éstos se mencionen de modo implícito, de modo tal que una vez aplicada a ellos la disposición, ésta pierda su eficacia.** La razón radica en que la ley debe tener los atributos señalados y, además, en que el propio precepto constitucional reserva a la función judicial y a la administrativa ese tipo de restricciones personales al determinar que la libertad ocupacional puede vedarse por resolución judicial, cuando se afecten derechos de terceros, y por resolución gubernativa, en los

términos que señale la ley, cuando se afecten derechos de la sociedad.[23]

En este contexto, la prohibición que se propone va dirigida en específico a aquellas personas que hayan fungido como Procurador durante el año siguiente a la fecha de conclusión de su encargo, por lo que su aplicación material en primera instancia solo pude hacerse a la persona que dejó el cargo de Procurador; en este sentido, este supuesto parece encajar con la prohibición establecida por nuestro Máximo Tribunal en cuanto a imponer la restricción a la libertad de trabajo a gobernados en particular. Y es que no se establece ninguna previsión transitoria que especifique el inicio de vigencia diferido de la misma, situación con la cual no coincidimos.

Lo anterior, pues desde un punto de vista jurídico, la autonomía no es más que un grado extremo de descentralización, pues si bien puede haber organismos descentralizados que no sean autónomos, no es posible que haya organismos autónomos que no sean descentralizados. Por otra parte, la constitucionalización de estos órganos obedece a dos razones: a) Es precisamente la Constitución la que establece la división de poderes, y por ende, sólo la Constitución puede prever excepciones a este principio fundamental de la organización del Estado; y b) para garantizar que los organismos autónomos no pierdan su autonomía mediante una simple reforma legal.

No obstante, esta autonomía no impide que la designación del titular del organismo estatal de protección de los Derechos Humanos se dé en un marco de colaboración entre poderes, en el cual el Gobernador del Estado es quien se encarga de llevar a cabo la consulta pública prevista tanto por la Constitución General como por la local, e integrar la terna que habrá de presentar al Congreso del Estado, y el Poder Legislativo es a quien corresponde la designación del Procurador. Al respecto, es valiosa la opinión de Ricardo Méndez Silva, quien considera:

«El principio de la división de poderes establece un equilibrio activo y dinámico para garantizar la independencia de cada uno de ellos, pero no implica, por fórmulas doctrinales y por imposibilidad fáctica, la vigencia de murallas infranqueables o compartimentos incomunicados. El principio de la división de poderes, en su diseño normativo y en el territorio de la historia, está cruzado por canales de comunicación exigidos por la complementación funcional que busca hacer efectivo el poder del Estado, que es uno solo, y que se divide en tres para evitar la concentración dictatorial, para establecer un sistema de pesos y contrapesos que se resumen en su premisa original, la soberanía popular. Así las cosas, la división de poderes entraña la complementación y la colaboración de los poderes.»[24]

Por lo que la división de poderes no consiste en una falta de comunicación entre ellos, sino que implica una complementación y colaboración, sin que se presente una concentración de estos en una sola persona.

Finalmente quienes dictaminamos, creemos que en ese contexto y por la importancia de la reforma, es necesario coordinar esfuerzos, para que sigan siendo las instituciones de tutela transparentes y responsables ante los peticionarios, ante el público y ante la ley, ya que por su misión se trata de instituciones necesarias para la defensa de los derechos humanos, el control del poder político y la consolidación de la democracia.

En razón de lo antes expuesto y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 171 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, nos permitimos someter a la aprobación de la Asamblea, el siguiente:

DECRETO

[23] Tesis: P./J. 29/99, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, abril de 1999, p. 258

[24] **MÉNDEZ Silva,** Ricardo (1995): Reflexiones sobre el Consejo de la Judicatura Federal. Coloquio Internacional sobre el Consejo de la Judicatura. Consejo de la Judicatura Federal. Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM. México, p. 172.

Artículo Único. Se **reforma** el artículo 63, fracción XXI, párrafo sexto, artículo 65, fracción VIII; se **adiciona** una fracción IX al artículo 65, y la actual fracción IX pasa a ser fracción X, y se **deroga** el tercer párrafo, de la fracción XII del artículo 77, de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, para quedar como sigue:

«Artículo 63. Son facultades del Congreso del Estado:

I. a XX...

XXI. Designar a los...

Separar de su...

Separar de su...

Designar a los...

Designar a los...

Designar por el voto de las dos terceras partes de sus integrantes presentes, al titular del organismo estatal de protección de los Derechos Humanos, de conformidad con el procedimiento de consulta pública contemplado en esta Constitución y en los términos de la Ley de la materia. Así como a los integrantes del Consejo Consultivo, con la mayoría calificada antes señalada.

Integrar la lista...

Aprobar por el...

Designar y en...

Designar, por el...

XXII. a XXXIV...

ARTÍCULO 65.- Son facultades y...:

I. a VII...;

VIII.- Conceder licencias para separarse de su cargo, al Gobernador del Estado, y a los Diputados en los términos de la Fracción XXVII del Artículo 63;

IX.- Ratificar los nombramientos de los integrantes del Consejo Consultivo del organismo estatal de protección de los Derechos Humanos, en los términos de la Ley de la materia; y,

X.- Las demás consignadas de modo expreso en esta Constitución.

ARTÍCULO 77.- Las facultades y...:

I. **a** XI...

XII.- Proponer por ternas...

Proponer al Congreso...

XIII. **a** XXVI...

Los actos o...

Dentro de los...

Salvo en el...»

TRANSITORIO

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigencia al día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Guanajuato, Gto., a 24 de octubre de 2017. La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Dip. Libia Dennise García Muñoz Ledo. Dip. Jorge Eduardo de la Cruz Nieto. Dip. María Beatriz Hernández Cruz. Dip. Arcelia María González González. Dip. Verónica Orozco Gutiérrez. Dip. Guillermo Aguirre Fonseca. Dip. Beatriz Manrique Guevara. »

-La C. Presidenta: Me permito informar que previamente se han inscrito el diputado Rigoberto Paredes Villagómez, para fundamentar el dictamen en los términos del artículo 178, fracción I de nuestra Ley Orgánica; así como para hablar a favor del dictamen las diputadas Libia Dennise García Muñoz Ledo y María Soledad Ledezma Constantino.

Si algún otro diputado o algún diputado desean hacer uso de la palabra en pro o en contra, manifiéstenlo indicando el sentido de su participación.

Se concede el uso de la palabra al diputado Rigoberto Paredes Villagómez.

EL DIPUTADO RIGOBERTO PAREDES VILLAGÓMEZ INTERVIENE PARA FUNDAMENTAR EL DICTAMEN EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 178, FRACCIÓN I DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO.



C. Dip. Rigoberto Paredes Villagómez: Con el permiso de la mesa directiva. Compañeras y compañeros diputados. Medios de comunicación y público en general, buenas tardes tengan todos.

Desde que comenzó el trabajo en esta Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional se ha trazado un destino, la evolución de las instituciones políticas y jurídicas de Guanajuato; y un camino, las diversas iniciativas que en lo individual, en grupo o en coincidencia con otras fuerzas parlamentarias o poderes del estado, hemos suscrito las y los diputados de mi fracción. Muestra clara y decidida de lo anterior son por ejemplo, las iniciativas en materia de combate a la corrupción y de eliminación del fuero constitucional, que ahora forman parte del Cuerpo Normativo Fundamental de la entidad; además de otras iniciativas de perfeccionamiento jurídico y que igualmente se han incorporado a nuestro régimen legal, tales como la Constitucional en materia de participación ciudadana, la Ley de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos y la Legítima Defensa, -por citar solo algunas-, pero sin poder dejar de lado iniciativas de mayor importancia y que actualmente siguen su proceso legislativo, tales como las relativas al Gobierno Abierto y a la autonomía de la Auditoria Superior del Estado.

En el trazo de dicho destino, la evolución de las instituciones en octubre del 2016, presenté la iniciativa de reforma a la Constitución Política para el Estado de Guanajuato y de reforma y adiciones a la Ley para la Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Guanajuato, en materia de designación del Titular del Organismo Estatal de Protección de los Derechos Humanos, convencido de que los legisladores estamos obligados a garantizar y fortalecer jurídicamente la imparcialidad de los funcionarios, sobre todo de aquellos que escapan al régimen común de los servidores públicos por ser integrantes de organismos cuya autonomía se desprende de la propia Constitución.

Por ello, propuse a nombre de mi Grupo Legislativo que en las normas constitucionales y ordinarias que regulan la designación, perfil y ratificación del Titular del Organismo Público de Derechos Humanos, se estructure un régimen de incompatibilidades, prohibiciones, neutralidad política y carrera profesional del que, como mínimo, estribe la clara y suficiente independencia funcional del ejercicio de las potestades administrativas que le corresponden al Procurador de los Derechos Humanos de Guanajuato y que pueden ser un medio para el aseguramiento jurídico de una conducta distanciada del poder público, leal al derecho, imparcial, profesional y al servicio del bien común.

Prácticamente a 18 años de que la institución del Ombudsman nacional en México se fortaleciera con plena autonomía bajo un nuevo procedimiento para elegir a su titular, sin que dependiera de la participación del Ejecutivo Federal, resultaba impostergable que Guanajuato superara el actual diseño constitucional y legal para evolucionar institucionalmente, fortalecer su independencia y garantizar su legitimidad; además de acercar la designación de dicho titular a las exigencias democráticas actuales de la entidad.

Con el dictamen que hoy se nos pone a consideración y para el cual pido su voto a favor, el organismo protector de los Derechos Humanos de Guanajuato pasa a formar parte del casi unánime grupo de entidades federativas cuyos titulares de los organismos protectores de los derechos humanos no son designados a propuesta o con intervención del Poder Ejecutivo. Además, el proceso de elección se legitima al abandonarse la votación que por simple mayoría se requería para la designación en comento, al exigirse ahora una mayoría calificada de las dos

terceras partes de los miembros presentes del Pleno para proceder a ello.

No me queda más que valorar y destacar la voluntad política y la coincidencia de visión de las distintas fuerzas parlamentarias de esta legislatura, para con los propósitos de la iniciativa cuyo dictamen hoy nos presenta la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales; por ello compañeras y compañeros, agradecer infinitamente todos y a cada uno de los compañeros que integran esta Comisión y creo que es digno de recordar el lema que nos mandan en los correos, »hoy las diferencias nos unen» y lo estamos demostrando. Por su atención, muchísimas gracias.

-La C. Presidenta: Se concede el uso de la voz a la diputada Libia Dennise García Muñoz Ledo.

A FAVOR DEL DICTAMEN, INTERVIENE LA DIPUTADA LIBIA DENNISE GARCÍA MUÑOZ LEDO.



C. Dip. Libia Dennise García Muñoz Ledo: Muy buenos días. Con el permiso de la diputada presidenta y de los integrantes de la mesa directiva. Estimadas compañeras y compañeros diputados. Representantes de los medios de comunicación que nos acompañan, y muy especialmente, permítanme darle la bienvenida a los jóvenes que se encuentran el día de hoy aquí en esta Casa Legislativa Guanajuatense. ¡Siempre es un honor tener jóvenes, especialmente en este lugar donde se legisla por el bien de Guanajuato!

Los derechos humanos son parte irrenunciable de nuestra dignidad y de nuestra identidad, son una calidad que compartimos sin importar la raza, la edad, el origen o nuestras preferencias; nos pertenecen tanto como nuestro propio ser, nos acompañan tanto como nuestra propia vocación, son -en palabras de Thomas Jefferson- inalienables- y su protección es el motivo mismo por el cual se constituyen los gobiernos. Toda autoridad sólo será legítima en la medida en que los proteja y será tiránica cuando los corrompa o los desprecie; por ello, la consolidación de una estructura jurídica institucional y social efectiva para la promoción, defensa y ejercicio pleno de los derechos humanos, es –sin lugar a dudas-, una de las mayores conquistas del proceso de transición democrática que ha vivido nuestro país en las últimas décadas, porque la democracia no sólo se trata del acto de emitir votos y elegir a nuestros gobernantes, sino del reconocimiento, de la dignidad y de los derechos de todos; que no están sujetos –por supuesto-, a la gracia ni al capricho de las autoridades, son derechos que nos pertenecen simple e indiscutiblemente por la realidad de nuestra naturaleza humana.

Durante estos años, a través de sucesivas reformas y de la creación de nuevas leyes, los mexicanos hemos construido y fortalecido organismos de protección de defensa a estos derechos, con el objetivo de que constituyan una auténtica garantía independiente de cualquier otra autoridad y sujeta sólo, como todos nosotros, al imperio de la ley.

Este ha sido un proceso dinámico, reconociendo en toda su importancia los grandes avances que se han construido bajo el esquema actual, pero también con mucha responsabilidad refrendando el compromiso de mejorarlo, de acuerdo a la realidad imperante.

Con esta convicción las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hemos analizado la iniciativa que se presentó ante este Pleno y que fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que me honro, que tengo el honor de presidir.

El dictamen que aprobamos en Comisión, plantea reformar el sexto párrafo de la fracción XXI del artículo 63 y derogar el tercer párrafo de la fracción XII del artículo 77, ambos de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato. Esto implica una transformación radical del mecanismo para la elección del titular del organismo estatal de protección a los derechos humanos.

Con su voto a favor de este dictamen dejaremos el proceso completamente a cargo de este Poder Legislativo y con una destacada participación de la sociedad civil, lo que

permitirá consolidar la autonomía de dicho funcionario, garantizando su papel como defensor objetivo y plenamente autónomo de los derechos de todos los guanajuatenses.

El dictamen que presentamos implica designar tanto al Procurador de los Derechos Humanos como a los integrantes del Consejo Consultivo, con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de este Poder Legislativo, previo procedimiento de consulta pública, porque queremos que la voz de los ciudadanos sea la que marque el rumbo y la que pueda proponer a los mejores perfiles para ocupar este cargo.

Hoy sumamos un pequeño pero muy importante paso en la consolidación de la defensa de los derechos humanos en nuestro estado. Los guanajuatenses queremos que nuestros gobernantes actúen bajo el marco de la ley y que respeten plenamente los derechos de toda la sociedad. Queremos un estado que siga creciendo para hacer posible una buena vida que incluye, por inicio de cuentas, el ejercicio de los derechos y de los talentos de cada uno de nosotros; hacia esta mesa es que avanzamos con el dictamen de reforma constitucional que está a la consideración de todas y todos ustedes.

Los invito a dar su voto a favor de un cambio que definirá el inicio de una nueva etapa en la historia de la defensa de los derechos humanos en Guanajuato.

Hago, sin lugar a dudas, extensiva esta invitación a los presidentes municipales, síndicos y regidores de nuestro estado, para que si este dictamen es aprobado en este Pleno del Congreso, se unan al respaldo con el apoyo de sus ayuntamientos para que esta reforma pueda ser aprobada.

Del mismo modo aprovecho esta oportunidad también para reconocer y agradecer el esfuerzo de mis compañeros integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que participaron activamente en este proceso y, por supuesto, a todas las personas que sumaron su voz para construir la mejor iniciativa posible.

Ahora sólo falta votar a favor y los diputados de Acción Nacional así lo haremos, con el orgullo y con el compromiso de seguir sirviendo a Guanajuato. Es cuánto.

-La C. Presidenta: Se concede el uso de la palabra a la diputada María Soledad Ledezma Constantino.

MANIFESTÁNDOSE A FAVOR DEL DICTAMEN, INTERVIENE LA DIPUTADA MARÍA SOLEDAD LEDEZMA CONSTANTINO.



C. Dip. María Soledad Ledezma Constantino: Muchas gracias diputada presidenta con su permiso, con el permiso de la mesa directiva. Compañeras y compañeros diputados. Público en general que nos acompaña. Medios de comunicación.

Solicitamos el uso de la tribuna para hablar a favor del dictamen que la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales pone a consideración de este Pleno respecto de las reformas de los artículos 63, 65 y 77 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, hoy más que nunca plenamente convencidos de la necesidad de reformar el mecanismo constitucional previsto para la designación del *Ombudsperson* guanajuatense. En voz de la coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México se mencionó en más de una ocasión desde el mes de noviembre del pasado año e incluso tiempo antes, cuando se analizaba la armonización y modificación del Código Político Estatal en materia de anticorrupción y que era urgente que el Procurador de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato fuera realmente autónomo y estuviere fortalecido a la altura de las demandas de la sociedad civil y que su designación no fuera a través de una propuesta del Titular del Poder Ejecutivo aprobada por una mayoría simple de miembros de esta Asamblea. En ese momento lamentablemente no hubo la conciliación de intereses, el ánimo y la apertura para aprobar una reforma, sin la cual quedábamos rezagados junto con Durango y Nuevo León, como las legislaturas en las que en el proceso

para el nombramiento del titular del organismo encargado de velar por los derechos humanos a nivel estatal, intervenía el gobernador de alguna u otra forma.

Como resultado de ello vimos pasar el nombramiento del actual Procurador, Lic. Raúl Montero de Alba, con la aprobación de unos cuantos votos, arriba de la mayoría simple, quien ante la opinión pública se ha colocado como el que antes de resolver sobre cualquier tema, va y le consulta al Gobernador del Estado y es calificado como gris, lento y falto de carácter.

Pero esa opinión no es gratuita y en materia de protección y garantía de los derechos humanos en Guanajuato, no hay nada que celebrar; y muy por el contrario, retrocedimos en lo que toca a la efectiva protección de los mismos, para muestra un botón –por mencionar algunos-, tenemos tres casos emblemáticos durante el tiempo en el que el actual Procurador de los Derechos Humanos ha estado en funciones, casos en los que se ha cuestionado el manejo de los casos, que brilla por su ausencia, en donde no hay intervención alguna y si existe es tarde, débil o a modo. El primero de ellos que fue la prueba de fuego –casi al inicio de su encargo-, que el Ombudsman guanajuatense no pasó, fue el asesinato de los hijos de Antonio Luna Hernández en San Miguel de Allende a principios de enero de este año, en que fuimos testigos de las reiteradas violaciones a los derechos humanos de las víctimas y del inculpado, y no hubo sólo un señalamiento por parte del organismo encargado de su protección y procuración. En otro caso muy sonado, el del albergue Ciudad del Niño en Salamanca, el Procurador Estatal de los Derechos Humanos mantuvo silencio y no intervino, sino hasta cuando salió a la luz pública lo sucedido, siendo que desde 2008 se tenían expedientes en dicha Procuraduría por denuncias de abusos.

También nos enfrentamos al caso de la doctora del Centro de Inserción Social del municipio de León, en donde tras un hostigamiento sexual hacia su persona, la Procuraduría de los Derechos Humanos sí emitió recomendaciones, pero que se limitan a sugerir...

-La C. Presidenta: Diputada, ¿me permite un segundo?

C. Dip. María Soledad Ledezma Constantino: Dígame.

-La C. Presidenta: Diputada María Beatriz Hernández Cruz, ¿para qué efecto?

C. Dip. María Beatriz Hernández Cruz: Gracias. Para preguntarle a la oradora, a través de usted, si me permite una pregunta.

-La C. Presidenta: Diputada, ¿le permite a la diputada Hernández Cruz hacerle una pregunta?

C. Dip. María Soledad Ledezma Constantino: Quiero concluir con mi intervención.

-La C. Presidenta: No se la acepta, la diputada quiere concluir con su presentación.

Diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, ¿para qué efecto?

C. Dip. Éctor Jaime Ramírez Barba: Presidenta, para preguntarle a la oradora si está hablando a favor del dictamen o está hablando del Procurador de los Derechos Humanos.

-La C. Presidenta: Diputada, ¿le acepta la pregunta al diputado Ramírez Barba?

C. Dip. María Soledad Ledezma Constantino: Quiero concluir con mi intervención.

-La C. Presidenta: Quiere concluir con su presentación, no le acepta la pregunta diputado Ramírez Barba.

C. Dip. María Soledad Ledezma Constantino: Quiero concluir con mi intervención.

También nos enfrentamos al caso de la doctora del Centro de Inserción Social del municipio de León, en donde tras un hostigamiento sexual hacia su persona, la Procuraduría de los Derechos Humanos sí emitió recomendaciones, pero que se limitan a sugerir procedimientos de responsabilidad administrativa en contra de los responsables;

no penal, sólo administrativa, con lo que claramente se deja en tela de juicio la imparcialidad y autonomía del mencionado organismo público.

Por ello y para garantizar que en un futuro no se repitan estos nombramientos…

-La C. Presidenta: Permítame diputada, por favor.

Diputada Libia Dennise García Muñoz Ledo, ¿para qué efectos?

C. Dip. Libia Dennise García Muñoz Ledo: Muchas gracias diputada presidenta, para solicitarle a usted, en su calidad de presidenta, que haga un llamado al orden a la oradora, dado que se inscribió para hablar a favor del dictamen y por respeto al dictamen emitido por esta Comisión, si se pudiera limitar a hablar del contenido de este dictamen, evitando posicionamientos políticos. Muchas gracias.

-La C. Presidenta: Diputada Beatriz Manrique Guevara, ¿para qué efecto?

C. Dip. Beatriz Manrique Guevara: Gracias presidenta. Me parece que no procede la solicitud de la licenciada Libia Dennise García Muñoz Ledo, en virtud de que el posicionamiento es para hablar a favor y se están argumentando las razones de por qué es tan importante este cambio en la ley.

-La C. Presidenta: Diputada, nada más le solicitamos se ajuste su intervención para hablar a favor del dictamen. Gracias.

C. Dip. María Soledad Ledezma Constantino: Concluyo. Gracias diputada presidenta.

Por ello y para garantizar que en un futuro no se repitan estos nombramientos a modo en un tema tan delicado y fundamental para el Estado de Derecho en Guanajuato, como lo es el de procuración, protección y garantía de los derechos humanos, es que nos sumamos a los esfuerzos de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, para aprobar la reforma puesta a consideración de esta Colegialidad, para dotar de autonomía e independencia al proceso de nombramiento del Procurador Estatal de Derechos Humanos y, de ese modo, siendo congruentes con la férrea oposición que mostramos ante los procesos en los que legalmente sí cumplían con los requisitos, pero se mandaban por parte del Titular del Poder Ejecutivo del Estado, ternas en condiciones en las que no era posible escoger un perfil que cumpliera medianamente con las exigencias de la protección a los derechos humanos en Guanajuato.

Acompañamos los trabajos de esta comisión para llevar a buen puerto la reforma-estudio. Así es de celebrarse que esta vez sí se encontrarán los consensos para logar como Constituyente Permanente proponer una reforma a la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, mediante la cual se adopta un mecanismo de designación del titular de la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos, que permite generar mayor independencia de éste ante cualquiera de los tres poderes en los que se divide le ejercicio estatal, las autoridades municipales y cualquier otra persona con carácter de autoridad dentro la entidad y procede entonces unirnos a las voces que piden el voto favorable para el dictamen que contiene la propuesta en mención, haciendo votos para aún mejor, más expedita y oportuna procuración de los derechos humanos en Guanajuato. Es cuánto diputada presidenta.

-La C. Presidenta: En virtud de haberse agotado las participaciones, se pide a la secretaría que proceda recabar votación nominal de la Asamblea, a través del sistema electrónico, a efecto de aprobar o no el dictamen puesto a su consideración.

Se informa a la Asamblea que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 145 de nuestra Constitución Política Local, se requiere la aprobación de cuando menos el 70% de los miembros del Congreso para reformar la Constitución. Se abre el sistema electrónico.

-La Secretaría: En votación nominal, por el sistema electrónico, se consulta a las diputadas y a los diputados si se aprueba el dictamen, en lo general, puesto a su consideración.

(Votación)

¿Falta alguna diputada o algún diputado por emitir su voto?

-La C. Presidenta: Se cierra el sistema electrónico.

-La Secretaría: Señora presidenta, le informo que se registraron 33 votos a favor y ningún voto en contra.

-La C. Presidenta: Gracias. El dictamen ha sido aprobado, en lo general, por unanimidad de los presentes.

Corresponde someter a discusión el dictamen en lo particular. Si desean reservar cualquiera de los artículos que contiene, sírvanse apartarlo, en la inteligencia de que los artículos no reservados se tendrán por aprobados.

Esta presidencia declara tener por aprobados los artículos que contiene el dictamen.

A nombre del Congreso del Estado de Guanajuato, esta presidencia da la más cordial bienvenida a los jóvenes de los municipios de Santa Cruz de Juventino Rosas, Acámbaro, Celaya y Apaseo el Alto, Gto., que forman parte de los proyectos de actividades específicas promovidas por el Partido de la Revolución Democrática encaminados a la participación política de la ciudadanía, acompañados por el Arq. Arturo Bravo Guadarrama, Secretario de Organización del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática. ¡Sean todos ustedes bienvenidos!

En virtud de haberse aprobado por este Pleno el decreto de reforma constitucional, con fundamento en lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 145 de la Constitución Política Local, remítase la minuta aprobada junto con el dictamen correspondiente, a los ayuntamientos del estado como parte del Constituyente Permanente, en la inteligencia de que se requiere la aprobación de la mayoría de los ayuntamientos para reformar la Constitución.

Se somete a discusión el dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas públicas municipales de Acámbaro, Gto., por el periodo comprendido de julio a diciembre del ejercicio fiscal del año 2014.

DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL DICTAMEN PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA Y FISCALIZACIÓN, RELATIVO AL INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN PRACTICADA A LAS CUENTAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE ACÁMBARO, GTO., POR EL PERIODO COMPRENDIDO DE JULIO A DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014.

»C. Presidenta del Congreso del Estado. Presente.

A esta Comisión de Hacienda y Fiscalización, le fue turnado para su estudio y dictamen, el informe de resultados de la revisión practicada por el entonces Órgano de Fiscalización Superior, ahora Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, a las cuentas públicas municipales de **Acámbaro, Gto., correspondientes al periodo comprendido por los meses de julio a diciembre del ejercicio fiscal del año 2014.**

Una vez analizado el referido informe de resultados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 112, fracción XII y 171 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, nos permitimos rendir el siguiente:

D i c t a m e n

I. Competencia:

Las facultades de la legislatura local en materia de revisión de las cuentas públicas municipales tienen su fundamento en lo dispuesto por el artículo 63 fracciones XIX y XXVIII de la Constitución Política para el Estado, las que establecen que el Congreso del Estado tiene la facultad de fiscalizar las cuentas públicas municipales, incluyendo las de las entidades y organismos de la administración pública paramunicipal; y verificar el desempeño en el cumplimiento de los objetivos de los programas; así como declarar la revisión de cuentas públicas en los términos del informe de resultados, dentro de los seis meses siguientes a la presentación de dicho

informe y ordenar su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, auxiliándose para el cumplimiento de dicha facultad por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato.

El artículo 66 fracción I de la Constitución Política Local establece como atribución de la Auditoría Superior del Estado, antes denominada Órgano de Fiscalización Superior analizar, evaluar y comprobar las cuentas públicas, de conformidad con los programas que para el efecto se aprueben por dicha Auditoría, señalando que si del examen que se realice aparecieran discrepancias entre los ingresos o los egresos, con relación a los conceptos y las partidas respectivas o no existiera exactitud o justificación en los ingresos obtenidos o en los gastos realizados, se determinarán las responsabilidades de acuerdo con la Ley.

Asimismo, el artículo 66 fracción VIII de dicho Ordenamiento Constitucional establece que la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato deberá informar al Congreso del Estado del resultado de la revisión de la cuenta pública y demás asuntos derivados de la fiscalización, incluyendo los dictámenes, informes de resultados, comentarios y observaciones de las auditorías, constituyendo una de las fases del proceso de fiscalización.

De igual forma, el artículo 8 fracción XX de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato vigente anteriormente y que es aplicable al presente caso, establece como atribución del Órgano de Fiscalización Superior rendir al Congreso del Estado, los informes derivados del ejercicio de la función de fiscalización.

Al respecto, cabe señalar que mediante el decreto número 320 de la Sexagésima Segunda Legislatura, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 154, décima tercera parte, de fecha 25 de septiembre de 2015 se emitió la nueva Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, misma que entró en vigor el 24 de diciembre de 2015. No obstante lo anterior, en su artículo Tercero Transitorio se establece que los asuntos que se encuentran en trámite o en proceso a cargo del Órgano de Fiscalización Superior a la entrada en vigor de la ley, continuarán tramitándose, por la Auditoría Superior, en los términos de la ley abrogada; refiriéndose además en el artículo Sexto Transitorio que la revisión de las cuentas públicas anuales conforme a las disposiciones de la nueva ley, se efectuará a partir de las correspondientes al ejercicio fiscal 2016. Es así que en el caso que nos ocupa se aplicará lo previsto por la abrogada Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato.

En razón de lo cual, la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato abrogada establecía que el Órgano de Fiscalización Superior remitiría los informes de resultados al Congreso del Estado, a efecto de que éste realizara la declaratoria correspondiente, señalándose en el artículo 45 que el informe de resultados únicamente podrá ser observado por las dos terceras partes de los integrantes del Congreso cuando: a) En perjuicio del sujeto de fiscalización no se haya otorgado el derecho de audiencia o defensa; b) No se observen las formalidades esenciales del proceso de fiscalización; y c) Cuando se viole de manera flagrante la Ley; señalando que en tales casos el informe de resultados será devuelto al Órgano de Fiscalización Superior, para que atienda las observaciones.

Con la finalidad de que el Congreso dé cumplimiento a lo señalado en el párrafo anterior, la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato establece en su artículo 112, fracción XII que a esta Comisión de Hacienda y Fiscalización, le compete el conocimiento y dictamen de los asuntos relativos a los informes de resultados que emita la Auditoría Superior del Estado.

A efecto de cumplir con las atribuciones conferidas a esta Comisión, y en observancia a lo que establece la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato vigente en su momento, el presente dictamen se ocupará exclusivamente de los aspectos que la propia Ley señala y por los cuales podría ser observado o no, el informe de resultados.

II. Antecedentes:

En su momento, el artículo 117, fracción VII de la Constitución Política Local establecía como obligación de los ayuntamientos presentar al Congreso del Estado la cuenta pública del municipio, en el plazo, forma y términos que estableciera la Ley. Al respecto, el artículo 22 de la abrogada Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, señalaba que las cuentas públicas de los municipios debían ser presentadas por periodos mensuales y a más tardar dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha en que concluyera el periodo de referencia.

La fracción VII del artículo 117 de la Constitución Política Local vigente señala que los ayuntamientos deberán presentar al Congreso del Estado la información financiera y la cuenta pública del Municipio, con la periodicidad, forma y términos que establezcan las disposiciones aplicables y la Ley.

En cuanto a la presentación, el artículo 20 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato abrogada establecía cómo debían integrarse las cuentas públicas que los sujetos de fiscalización remitieran al Congreso del Estado. Asimismo, el artículo 20 A establecía la integración de las cuentas públicas de los municipios que en términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de los documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable llevaran una contabilidad simplificada.

Por otra parte, el artículo 130 fracciones XIII y XIV de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato establece como atribución del tesorero municipal, remitir al Congreso del Estado, la cuenta pública municipal, misma que deberá ser firmada preferentemente por un integrante de la primera minoría de la Comisión de Hacienda en el Ayuntamiento; así como rendir los informes contables y financieros mensuales dentro del mes siguiente, y atender las observaciones que se formulen sobre los mismos; debiendo firmar además dichos informes el presidente municipal.

En su oportunidad se remitieron a este Congreso las cuentas públicas municipales de Acámbaro, Gto., correspondientes al periodo comprendido por los meses de julio a diciembre del ejercicio fiscal del año 2014, turnándose al entonces Órgano de Fiscalización Superior, ahora Auditoría Superior del Estado para su revisión.

La revisión concluyó con la elaboración del informe de resultados materia del presente dictamen, remitiéndose al Congreso, el cual se turnó a esta Comisión el 1 de junio de 2017 para su estudio y dictamen, siendo radicado el 5 de junio del año en curso.

Con fundamento en el artículo 41 de la abrogada Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, el entonces Auditor General acordó acumular en el informe de resultados, las cuentas públicas mensuales correspondientes al periodo de referencia.

III. Procedimiento de Revisión:

El Órgano Técnico inició la revisión de las cuentas públicas correspondientes al periodo comprendido de julio a diciembre del ejercicio fiscal del año 2014, el 19 de junio de 2015 y tuvo por objetivo examinar las cifras que muestran las cuentas públicas de los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2014 y comprobar que la administración, control, utilización y destino de los recursos financieros, humanos y patrimoniales a cargo del municipio de Acámbaro, Gto., fueron aplicados con transparencia y atendiendo a criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal, propiciando su óptimo aprovechamiento; asimismo, verificar que la actividad financiera se haya realizado con estricto apego a la Ley de Ingresos para dicho Municipio y al presupuesto de egresos autorizado, ambos para el ejercicio 2014, así como a los reglamentos y demás ordenamientos legales y normativos aplicables.

Con la finalidad de cumplir con lo establecido por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato aplicable al caso que nos ocupa, el informe de resultados establece las herramientas técnicas y métodos que se estimaron adecuados en la práctica de la revisión, señalando que ésta se efectuó de acuerdo con las normas emitidas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos,

que son aplicables al sector público, las que requieren que la auditoría sea planeada, realizada y supervisada, para obtener una seguridad razonable de que la información presentada en las cuentas públicas, no contiene errores importantes y que está integrada de acuerdo a las bases contables emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Asimismo, el informe establece que se verificó con base en pruebas selectivas, la evidencia que respalda las transacciones realizadas, las que están soportadas en las cifras y revelaciones de las cuentas públicas, atendiendo a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental; en las bases y criterios establecidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable; en la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato; en la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato; en la Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal de 2014; en la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato; y en la Ley de Ingresos para el Municipio de Acámbaro, Gto., para el Ejercicio Fiscal del año 2014. Lo anterior, de conformidad con lo establecido por los ordenamientos aplicables en la materia, incluyendo sus bases contables, utilizadas de acuerdo a los postulados básicos de contabilidad gubernamental; la presentación de la información financiera; las variaciones presupuestales; las estimaciones significativas hechas por la administración; los resultados de la gestión financiera; y la incidencia de sus operaciones en la hacienda pública del ente fiscalizado.

Como parte del proceso de revisión, en fechas 4 y 5 de octubre de 2016, se dio vista de las observaciones y recomendaciones a los titulares y ex-titulares del ente fiscalizado que fungieron como responsables del manejo del erario público durante el periodo sujeto a revisión, concediéndoles un plazo de treinta días hábiles para aclarar, atender o solventar documentalmente las observaciones determinadas por el Órgano Técnico. Lo anterior, para dar cumplimiento a lo preceptuado por los artículos 9 fracción V, 23, fracción IV y 24 de la abrogada Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato.

Los días 15 y 16 de noviembre de 2016, se presentaron oficios de respuesta a las observaciones y recomendaciones derivadas de la revisión practicada, anexándose la información y documentación que se consideró suficiente para aclarar y en su caso, solventar las observaciones determinadas y atender las recomendaciones efectuadas. Una vez valorada la documentación aportada, se procedió a la elaboración del informe de resultados materia del presente dictamen.

El 16 de mayo de 2017, el informe de resultados se notificó al presidente, al tesorero, al ex-presidente y al ex-tesorero municipales de Acámbaro, Gto., para que en su caso, hicieran valer el recurso de reconsideración previsto por el artículo 39 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato aplicable al caso que nos ocupa, haciéndoles saber que contaban con un término de cinco días hábiles para tal efecto. Con lo anterior, se dio cumplimiento a la fracción VIII del artículo 23 de la citada Ley.

En fechas 22 y 24 de mayo de 2017 respectivamente, el ex-presidente y el ex-tesorero municipales de Acámbaro, Gto., interpusieron recursos de reconsideración en contra del informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas públicas de dicho Municipio, correspondientes al periodo comprendido por los meses de julio a diciembre del ejercicio fiscal del año 2014, siendo admitidos dichos recursos, al colmarse los requisitos de procedibilidad previstos por el artículo 39 de la abrogada Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato aplicable al presente asunto.

Una vez tramitados los recursos, el Auditor Superior del Estado, el 29 de mayo de 2017 emitió la resolución correspondiente, a la cual haremos referencia en un apartado posterior, mismo que se notificó al ex-presidente y al ex-tesorero municipales de Acámbaro, Gto., el 30 de mayo de 2017.

IV. Contenido del Informe de Resultados:

En cumplimiento a lo establecido por el artículo 43 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato aplicable al caso que nos ocupa, el informe de resultados contiene los siguientes apartados:

a) Conclusiones del proceso de fiscalización.

Por lo que se refiere a esta parte, se establecen los resultados de la gestión financiera que se reflejan en los rubros de ingresos, egresos, resultado del ejercicio, deuda pública y créditos por pagar; la evaluación y comprobación de los ingresos y gastos; la información técnica, financiera y contable que sirvió de apoyo a la evaluación; un análisis sintético del proceso de evaluación; y la propuesta de aprobación de los conceptos fiscalizados.

b) Análisis sobre el cumplimiento de los postulados básicos de contabilidad gubernamental y de los ordenamientos legales correspondientes.

En este punto se concluye que la administración municipal de Acámbaro, Gto., cumplió con las bases contables aplicables a la institución y parcialmente con los postulados básicos de contabilidad gubernamental, estableciendo que se incumplieron los postulados básicos de Registro e Integración Presupuestaria y Devengo Contable.

De igual forma, se señala que se observó el incumplimiento de diversas disposiciones legales, consignándose el análisis correspondiente en el dictamen técnico jurídico al que más adelante haremos referencia.

c) Pliego de observaciones y recomendaciones derivadas de la revisión.

En este punto se desglosan las observaciones detectadas en la revisión practicada a las cuentas públicas municipales de Acámbaro, Gto., por el periodo comprendido de julio a diciembre de 2014; asimismo, se establecen las Recomendaciones Generales formuladas por el Órgano Técnico. En cada una de las observaciones realizadas al sujeto fiscalizado, se plasman las acciones preventivas y correctivas que se deben llevar a cabo para subsanar las situaciones detectadas durante el proceso de revisión.

d) Diligencias y acciones practicadas para aclarar o solventar las observaciones y recomendaciones.

La inclusión de este punto se justifica para determinar que no se haya violentado el derecho de audiencia o defensa en perjuicio del sujeto fiscalizado. El informe concluye afirmando que se dio cabal cumplimiento a lo preceptuado por los artículos 9 fracción V y 23 fracciones IV y V de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato abrogada, al haberse notificado a los responsables del manejo del erario público durante el periodo sujeto a revisión, las observaciones y recomendaciones determinadas, otorgándoles el plazo que señala la Ley para aclarar, atender o solventar documentalmente dichas observaciones.

De lo anterior, derivan las observaciones correspondientes a los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2014, que fueron solventadas y aclaradas, al haberse proporcionado la información y documentación que se consideró suficiente para tal efecto, las que se encuentran consignadas en el informe de resultados, por lo tanto en el presente dictamen omitiremos reiterarlas.

e) Informe sobre la situación que guardan las recomendaciones u observaciones que no fueron atendidas o solventadas.

En esta parte, se consignan las observaciones en las que no se presentó respuesta alguna para su atención o aquéllas en que aun cuando se hubiera presentado información o documentación, al realizarse el análisis y valoración de la misma, los datos proporcionados no se consideraron suficientes para solventarlas o atenderlas en su totalidad, estableciéndose en cada caso las razones por las que se consideran no justificadas.

En tal sentido, se solventaron parcialmente las observaciones establecidas en los numerales 6, referente a cuentas por pagar; 8, relativo a gastos a reserva de

comprobar; 9, referido a servicios de telefonía celular Pegaso PCS, S.A. de C.V; y 10, referente a servicios de telefonía celular Radio Móvil Dipsa, S.A. de C.V.

No se solventaron las observaciones plasmadas en los numerales 7, correspondiente a compensación; y 11, relativo a solicitudes de información.

En el apartado de Recomendaciones Generales, no se atendieron los numerales 2, relativo a anexos de modificaciones al presupuesto; y 3, correspondiente a gastos a reserva de comprobar; y se atendió parcialmente el numeral 4, referido a gratificación de fin de año.

f) Señalamiento de las irregularidades detectadas.

En este punto se establecen las observaciones que no se solventaron en su totalidad, de las que puede presumirse la existencia de responsabilidades y que se analizan en los dictámenes de daños y perjuicios y técnico jurídico.

g) Observaciones y comentarios del Auditor Superior, derivados del proceso de fiscalización.

El Auditor Superior del Estado, concluyó que la información contenida en las cuentas públicas y los reportes documentales de las muestras examinadas, son parcialmente razonables en sus aspectos importantes, así como el ejercicio y aplicación de los recursos que fueron objeto de la fiscalización, todo ello producto del incumplimiento de algunos postulados básicos de contabilidad gubernamental y de diversas disposiciones legales.

Señalando además que los responsables del manejo de los recursos públicos del ente fiscalizado incurrieron en actos u omisiones que hacen presumir la existencia de daños y perjuicios causados a la hacienda y patrimonio públicos del sujeto fiscalizado, como se establece en los dictámenes de daños y perjuicios y técnico jurídico, en los que se precisan las acciones que en su caso deberán promoverse.

Asimismo, se establece que en ningún momento, las notificaciones que expide el Órgano Técnico, referentes a la solventación de observaciones como resultado de la fiscalización superior, liberan a las autoridades que manejan dichos recursos, de responsabilidades futuras que pudieran surgir con motivo del ejercicio de las facultades de revisión, referente a lo que no fue materia de la revisión, que con base a lo que establece la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato antes vigente, lleven a cabo las autoridades facultadas.

También se refiere que, de conformidad con lo dispuesto por la ley de la materia, es deber de todo servidor público custodiar la documentación e información que conserve o a la que tenga acceso por razón de su empleo, cargo o comisión, evitar o impedir el uso, sustracción, destrucción u ocultamiento indebidos de aquélla; así como guardar reserva de la información a que tenga acceso por su función, la que exclusivamente deberá ser usada para los fines a que esté afecta.

Finalmente, se informa que durante el proceso de revisión se efectuaron reintegros y recuperaciones al patrimonio del ente fiscalizado.

h) Dictamen que establece la cuantía de los daños y perjuicios causados a la hacienda y patrimonio públicos del municipio de Acámbaro, Gto.

En este dictamen, se establece que como resultado de la revisión y evaluación de la recaudación, manejo, custodia, control y aplicación de los recursos públicos que la administración municipal de Acámbaro, Gto., utilizó en el cumplimiento de los objetivos contenidos en sus presupuestos, planes y programas, se observaron irregularidades y deficiencias, de las que se desprende la existencia de daños y perjuicios causados a la hacienda y patrimonio públicos del sujeto fiscalizado.

En tal sentido se funda y motiva dicho dictamen, estableciendo los hechos de los que se deriva; la cuantía; los bienes, derechos, programas, objetivos, actos jurídicos o

partidas afectadas; y los presuntos responsables.

Las observaciones de las que se desprende la existencia de daños y perjuicios son las consignadas en los numerales 7, correspondiente a compensación; 9, referido a servicios de telefonía celular Pegaso PCS, S.A. de C.V; y 10, referente a servicios de telefonía celular Radio Móvil Dipsa, S.A. de C.V., determinándose en cada caso la cuantía correspondiente.

Cabe destacar la importancia de este dictamen, debido a que permitirá resarcir al sujeto fiscalizado los daños y perjuicios ocasionados, ya que con base en los artículos 44 y 52 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato antes vigente, una vez que el informe de resultados sea sancionado por el Pleno del Congreso, tendrá carácter de documento público, para que los sujetos de fiscalización por conducto de su titular o por la persona a quien éstos deleguen dicha atribución, procedan a ejercer las acciones en la vía y forma que corresponda, ante la autoridad competente, dentro del término de tres meses contado a partir del día siguiente al de la notificación del acuerdo del Pleno del Congreso, mismo que podrá duplicarse a petición del sujeto de fiscalización presentada al Congreso del Estado.

En caso de que los servidores públicos responsables de ejercer dichas acciones tuvieren intereses en conflicto, en los términos que prescribe la Ley de la materia, el ejercicio de las acciones correspondientes quedará reservado a la Auditoría Superior del Estado. Para que opere dicho supuesto, deberá informarse lo conducente a la Auditoría Superior del Estado, dentro del término de quince días hábiles, contado a partir de la fecha de notificación del acuerdo del Pleno del Congreso, justificando las causales de conflicto de intereses en las que se ubican y se abstendrán de ejercer cualquier acción.

i) Dictamen técnico jurídico.

En este dictamen se establecen las consideraciones técnico-jurídicas derivadas de las irregularidades o deficiencias detectadas en la auditoría practicada, concluyendo que se desprende la existencia de responsabilidades administrativas, así como las que se derivan del dictamen de daños y perjuicios.

Las responsabilidades administrativas se derivan de las observaciones establecidas en los numerales 1, relativo a información presupuestal; 2, correspondiente al ejercicio del presupuesto; 3, referente a equipo de defensa y seguridad; 4, referido a clausulado del contrato 1128/014; 5, relativo a registro de anticipos; 6, correspondiente a cuentas por pagar; 7, referente a compensación; 8, referido a gastos a reserva de comprobar; 9, relativo a servicios de telefonía celular Pegaso PCS, S.A. de C.V; 10, correspondiente a servicios de telefonía celular Radio Móvil Dipsa, S.A. de C.V; y 11, referente a solicitudes de información.

Aun cuando las observaciones plasmadas en los numerales 1, 2, 3, 4 y 5, se solventaron en la etapa correspondiente, persiste la responsabilidad administrativa que se generó por la falta de cumplimiento oportuno de las obligaciones a cargo de servidores públicos.

Respecto a los numerales 2, relativo a anexos de modificaciones al presupuesto; 3, correspondiente a gastos a reserva de comprobar; y 4, referido a gratificación de fin de año, éstos se emitieron con el carácter de recomendaciones, por lo tanto, aun cuando no se atendieron en su totalidad, no conllevan responsabilidad alguna.

De las observaciones contenidas en los numerales 7, correspondiente a compensación; 9, referido a servicios de telefonía celular Pegaso PCS, S.A. de C.V; y 10, referente a servicios de telefonía celular Radio Móvil Dipsa, S.A. de C.V., se refiere que se presume la existencia de las responsabilidades derivadas del dictamen de daños y perjuicios.

En esta parte cabe precisar que aun cuando en el dictamen técnico jurídico, se hace referencia a responsabilidades civiles, el 19 de julio de 2017, entró en vigor la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, la cual refiere que la autoridad competente para conocer del ejercicio de las acciones anteriormente referidas es el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato.

En cuanto a responsabilidades penales, el dictamen técnico jurídico establece que de la revisión practicada no se desprenden situaciones que hagan presumir la existencia de dichas responsabilidades.

Es así, que en este dictamen se establecen los hechos en que se fundan las responsabilidades correspondientes, los presuntos responsables, las acciones que deberán promoverse y las autoridades que resultan competentes para conocer de dichas acciones.

En tal sentido, consideramos que dicho dictamen se encuentra suficientemente fundado y motivado, a efecto de ejercer las acciones legales que procedan ante las autoridades competentes.

j) Recurso de Reconsideración.

En fechas 22 y 24 de mayo de 2017 respectivamente, dentro del plazo que prevé el artículo 39 de la abrogada Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, el ex-presidente y el ex-tesorero municipales de Acámbaro, Gto., interpusieron recursos de reconsideración en contra del informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas públicas de dicho Municipio, correspondientes al periodo comprendido por los meses de julio a diciembre del ejercicio fiscal del año 2014, concretamente en contra de los puntos 1, relativo a información presupuestal; 2, correspondiente al ejercicio del presupuesto; 3, referente a equipo de defensa y seguridad; 5, relativo a registro de anticipos; 6, correspondiente a cuentas por pagar; 7, referente a compensación; 8, referido a gastos a reserva de comprobar; 9, relativo a servicios de telefonía celular Pegaso PCS, S.A. de C.V; 10, correspondiente a servicios de telefonía celular Radio Móvil Dipsa, S.A. de C.V; y 11, referente a solicitudes de información, mismos que se encuentran relacionados con los Capítulos III, denominado Pliego de Observaciones y Recomendaciones; VIII, denominado Dictamen de Daños y Perjuicios; y IX, denominado Dictamen Técnico Jurídico, contenidos en el Informe de Resultados.

En tal sentido, mediante acuerdos de fecha 24 de mayo de 2017, emitidos por el Auditor Superior, se dio entrada a los recursos de reconsideración, al colmarse los requisitos de procedibilidad previstos por el artículo 39 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato abrogada, ordenando la integración del expediente respectivo y el registro correspondiente, siendo radicados el 25 de mayo de 2017.

A través del acuerdo de fecha 26 de mayo de 2017, emitido por el Director General de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior del Estado, se ordenó la acumulación de los expedientes integrados con motivo de la interposición de los recursos, al vincularse de manera directa.

Una vez tramitados los recursos, el Auditor Superior del Estado el 29 de mayo de 2017, emitió la resolución correspondiente, determinándose respecto a las observaciones plasmadas en los numerales 1, 2, 3 y 5, que los agravios hechos valer por los recurrentes, resultaron infundados o inoperantes e infundados para modificar las presuntas responsabilidades determinadas, de acuerdo a lo expresado en el considerando sexto de la resolución. En razón de lo anterior, se confirmaron las presuntas responsabilidades administrativas determinadas en los puntos 1.1, 2.1, 3.1 y 5.1 del Capítulo IX, denominado Dictamen Técnico Jurídico.

En el caso de las observaciones establecidas en los numerales 6, 7, 8, 9 y 10, se concluyó que los argumentos hechos valer por los recurrentes resultaron infundados o infundados e irrelevantes, para modificar el sentido de su valoración, como se precisa en el considerando sexto de la resolución. En razón de lo anterior, se confirmó su valoración, confirmando los daños y perjuicios y las presuntas responsabilidades determinadas en los puntos 1.1, 1.2 y 1.3 del Capítulo VIII, denominado Dictamen de Daños y Perjuicios; 6.1, 7.1, 7.2, 8.1, 9.1, 9.2, 10.1 y 10.2 del Capítulo IX, denominado Dictamen Técnico Jurídico.

En cuanto a la observación consignada en el numeral 11, se resolvió que los argumentos hechos valer por el recurrente no constituyen agravio alguno, de acuerdo a

lo señalado en el considerando sexto de la resolución. En consecuencia, se confirmó su valoración como no solventada, confirmando las presuntas responsabilidades administrativas determinadas en el punto 11.1 del Capítulo IX, denominado Dictamen Técnico Jurídico

La referida resolución se notificó al ex-presidente y al ex-tesorero municipales de Acámbaro, Gto., el 30 de mayo de 2017.

V. Conclusiones:

Como ya lo habíamos señalado en párrafos anteriores, el artículo 45 de la abrogada Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, establece que los informes de resultados solamente podrán ser observados por las dos terceras partes del Congreso del Estado cuando: a) En perjuicio del sujeto de fiscalización no se haya otorgado el derecho de audiencia o defensa; b) No se observen las formalidades esenciales del proceso de fiscalización; y c) Cuando se viole de manera flagrante la Ley. Señalando que en tales casos el informe de resultados será devuelto al Órgano de Fiscalización Superior, a efecto de que atienda las observaciones.

En este sentido, quienes integramos esta Comisión analizamos el informe de resultados materia del presente dictamen, considerando las hipótesis referidas en el precepto anteriormente señalado.

Como se desprende del informe de resultados, en su oportunidad el Órgano Técnico dio cumplimiento a los artículos 9 fracción V, 23 fracción IV y 24 de la abrogada Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, al haberse notificado las observaciones y recomendaciones derivadas de la revisión a los funcionarios y ex-funcionarios de la administración municipal de Acámbaro, Gto, que fungieron como responsables del manejo del erario público durante el periodo sujeto a revisión, concediéndoles el plazo que establece la Ley para aclarar, atender o solventar documentalmente las observaciones determinadas por el Órgano Técnico. Al respecto, se presentó la documentación que se consideró suficiente para aclarar y en su caso, solventar las observaciones determinadas y atender las recomendaciones efectuadas.

De igual manera, existe en el informe de resultados la constancia de que éste se notificó al presidente, al tesorero, al ex-presidente y al ex-tesorero municipales de Acámbaro, Gto., concediéndoles el término señalado en el artículo 23 fracción VIII de la Ley de Fiscalización Superior del Estado abrogada, a efecto de que en su caso, hicieran valer el recurso de reconsideración que prevé el artículo 39 de dicho ordenamiento legal; presentándose el referido medio de impugnación, el cual fue tramitado por el Órgano Técnico, emitiéndose por parte del Auditor Superior del Estado la resolución correspondiente, misma que consideramos se encuentra suficientemente fundada y motivada y que en su oportunidad se notificó al ex-presidente y al ex-tesorero municipales de Acámbaro, Gto. En tal virtud, se considera que fue respetado el derecho de audiencia o defensa por parte del Órgano Técnico.

Por otra parte, del informe de resultados podemos inferir que el Órgano Técnico en el desarrollo del procedimiento de revisión dio cumplimiento a las formalidades esenciales que la misma Ley establece para el proceso de fiscalización, al haberse practicado conforme a las normas de auditoría aplicables al sector público, atendiendo a lo establecido en la normatividad aplicable en la materia, incluyendo las bases contables aplicables a la institución, utilizadas de acuerdo a los postulados básicos de contabilidad gubernamental.

También se dio cumplimiento de manera puntual a las fases que se establecen para los procesos de fiscalización, concluyendo con la elaboración del informe de resultados, cuyo contenido es acorde con lo que establece el artículo 43 de la abrogada Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, destacando de manera relevante los dictámenes de daños y perjuicios y técnico jurídico, que serán el soporte para que se promuevan por parte del ayuntamiento de Acámbaro, Gto., las acciones correspondientes, debiendo dar seguimiento la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato al ejercicio de dichas acciones.

Finalmente, no se desprende la existencia de alguna violación flagrante a la Ley, ya que el Órgano Técnico en la práctica de la revisión atendió lo preceptuado por la

Ley de Fiscalización Superior del Estado antes vigente y en general la normatividad aplicable y los postulados básicos de contabilidad gubernamental.

En razón de lo anteriormente señalado, concluimos que el informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas públicas municipales de Acámbaro, Gto., correspondientes al período comprendido de julio a diciembre del ejercicio fiscal del año 2014, debe sancionarse por el Congreso en los términos presentados por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato y proceder a su aprobación, considerando que no se presenta alguno de los supuestos contenidos en el artículo 45 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado aplicable al caso que nos ocupa, razón por la cual no podría ser observado por el Pleno del Congreso.

Por lo expuesto, con fundamento en el artículo 204 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, nos permitimos someter a la consideración de la Asamblea, la aprobación del siguiente:

A c u e r d o

Único. Con fundamento en el artículo 63 fracciones XIX y XXVIII de la Constitución Política para el Estado, en relación con el artículo 23 fracción IX de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, abrogada mediante el decreto número 320 de la Sexagésima Segunda Legislatura, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 154, décima tercera parte, de fecha 25 de septiembre de 2015 y el artículo Tercero Transitorio de dicho decreto, se declaran revisadas las cuentas públicas municipales de Acámbaro, Gto., correspondientes a los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del ejercicio fiscal del año 2014, con base en el informe de resultados formulado por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato.

Con fundamento en el artículo 48 de la abrogada Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, el Auditor Superior del Estado de Guanajuato promoverá las acciones necesarias para el fincamiento de las responsabilidades administrativas determinadas en el dictamen técnico jurídico contenido en el informe de resultados.

Se ordena dar vista del informe de resultados al ayuntamiento del municipio de Acámbaro, Gto., a efecto de que se atiendan las observaciones que no se solventaron en su totalidad, así como las recomendaciones contenidas en dicho informe, en el plazo que establece el artículo 23 fracción XI de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato aplicable al presente caso. Asimismo, para que con base en los dictámenes de daños y perjuicios y técnico jurídico contenidos en el informe de resultados, se ejerzan las acciones que procedan ante la autoridad competente, en el término señalado en el artículo 52 de la citada Ley; y se proceda al fincamiento de las responsabilidades administrativas a que haya lugar, informando a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato de las acciones realizadas para ello, con objeto de que esta última realice el seguimiento correspondiente.

Remítase el presente acuerdo al titular del Poder Ejecutivo del Estado para su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

De igual forma, se ordena la remisión del presente acuerdo junto con su dictamen y el informe de resultados al ayuntamiento del municipio de Acámbaro, Gto., y a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, para los efectos de su competencia.

Guanajuato, Gto., 2 de octubre de 2017. La Comisión de Hacienda y Fiscalización. Dip. Elvira Paniagua Rodríguez. Dip. Angélica Casillas Martínez. Dip. María Alejandra Torres Novoa. (Con observación) Dip. Juan Carlos Muñoz Márquez. Dip. María Guadalupe Velázquez Díaz.»

-La C. Presidenta: Si alguna diputada o algún diputado desean hacer uso de la palabra en pro o en contra, manifiéstenlo indicando el sentido de su participación.

En virtud de que no se han registrado participaciones, se pide a la secretaría que proceda a recabar votación nominal de la Asamblea, a través del sistema electrónico, a efecto de aprobar o no el dictamen puesto a

su consideración. Se abre el sistema electrónico.

-La Secretaría: En votación nominal, por el sistema electrónico, se consulta a las diputadas y a los diputados si se están por aprobar el presente dictamen.

(Votación)

¿Falta alguna diputada o algún diputado por emitir su voto?

-La C. Presidenta: Se cierra el sistema electrónico.

-La Secretaría: Señora presidenta, le informo que se han registrado 32 votos a favor y ningún voto en contra.

-La C. Presidenta: El dictamen ha sido aprobado por unanimidad de los presentes.

Remítase el acuerdo aprobado al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

De igual forma, remítase el acuerdo aprobado, junto con su dictamen y el informe de resultados, al ayuntamiento de Acámbaro, Gto., así como a la Auditoría Superior del Estado para los efectos de su competencia.

Corresponde someter a discusión el dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas públicas municipales de Jerécuaro, Gto., por el periodo comprendido de enero a junio del ejercicio fiscal del año 2015

[25] DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL DICTAMEN EMITIDO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA Y FISCALIZACIÓN, RELATIVO AL INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN PRACTICADA A LAS CUENTAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE JERÉCUARO, GTO., POR EL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO A JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2015.

[25] A partir del punto 16 del orden del día, asume la presidencia de la mesa directiva el diputado Mario Alejandro Navarro Saldaña, con fundamento en el artículo 57, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato.

»C. Presidenta del Congreso del Estado. Presente.

A esta Comisión de Hacienda y Fiscalización, le fue turnado para su estudio y dictamen, el informe de resultados de la revisión practicada por el entonces Órgano de Fiscalización Superior, ahora Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, a las cuentas públicas municipales de **Jerécuaro, Gto., correspondientes al periodo comprendido por los meses de enero a junio del ejercicio fiscal del año 2015.**

Una vez analizado el referido informe de resultados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 112, fracción XII y 171 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, nos permitimos rendir el siguiente:

D i c t a m e n

I. Competencia:

Las facultades de la legislatura local en materia de revisión de las cuentas públicas municipales tienen su fundamento en lo dispuesto por el artículo 63 fracciones XIX y XXVIII de la Constitución Política para el Estado, las que establecen que el Congreso del Estado tiene la facultad de fiscalizar las cuentas públicas municipales, incluyendo las de las entidades y organismos de la administración pública paramunicipal; y verificar el desempeño en el cumplimiento de los objetivos de los programas; así como declarar la revisión de cuentas públicas en los términos del informe de resultados, dentro de los seis meses siguientes a la presentación de dicho informe y ordenar su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, auxiliándose para el cumplimiento de dicha facultad por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato.

El artículo 66 fracción I de la Constitución Política Local establece como atribución de la Auditoría Superior del Estado, antes denominada Órgano de Fiscalización Superior analizar, evaluar y comprobar las cuentas públicas, de conformidad con los programas que para el efecto se aprueben por dicha Auditoría, señalando que si del examen que se realice aparecieran discrepancias entre los ingresos o los egresos, con relación a los conceptos y las partidas respectivas o no

existiera exactitud o justificación en los ingresos obtenidos o en los gastos realizados, se determinarán las responsabilidades de acuerdo con la Ley.

Asimismo, el artículo 66 fracción VIII de dicho Ordenamiento Constitucional establece que la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato deberá informar al Congreso del Estado del resultado de la revisión de la cuenta pública y demás asuntos derivados de la fiscalización, incluyendo los dictámenes, informes de resultados, comentarios y observaciones de las auditorías, constituyendo una de las fases del proceso de fiscalización.

De igual forma, el artículo 8 fracción XX de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato vigente anteriormente y que es aplicable al presente caso, establece como atribución del Órgano de Fiscalización Superior rendir al Congreso del Estado, los informes derivados del ejercicio de la función de fiscalización.

Al respecto, cabe señalar que mediante el decreto número 320 de la Sexagésima Segunda Legislatura, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 154, décima tercera parte, de fecha 25 de septiembre de 2015 se emitió la nueva Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, misma que entró en vigor el 24 de diciembre de 2015. No obstante lo anterior, en su artículo Tercero Transitorio se establece que los asuntos que se encuentran en trámite o en proceso a cargo del Órgano de Fiscalización Superior a la entrada en vigor de la ley, continuarán tramitándose, por la Auditoría Superior, en los términos de la ley abrogada; refiriéndose además en el artículo Sexto Transitorio que la revisión de las cuentas públicas anuales conforme a las disposiciones de la nueva ley, se efectuará a partir de las correspondientes al ejercicio fiscal 2016. Es así que en el caso que nos ocupa se aplicará lo previsto por la abrogada Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato.

En razón de lo cual, la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato abrogada establecía que el Órgano de Fiscalización Superior remitiría los informes de resultados al Congreso del Estado, a efecto de que éste realizara la declaratoria correspondiente, señalándose en el artículo 45 que el informe de resultados únicamente podrá ser observado por las dos terceras partes de los integrantes del Congreso cuando: a) En perjuicio del sujeto de fiscalización no se haya otorgado el derecho de audiencia o defensa; b) No se observen las formalidades esenciales del proceso de fiscalización; y c) Cuando se viole de manera flagrante la Ley; señalando que en tales casos el informe de resultados será devuelto al Órgano de Fiscalización Superior, para que atienda las observaciones.

Con la finalidad de que el Congreso dé cumplimiento a lo señalado en el párrafo anterior, la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato establece en su artículo 112, fracción XII que a esta Comisión de Hacienda y Fiscalización, le compete el conocimiento y dictamen de los asuntos relativos a los informes de resultados que emita la Auditoría Superior del Estado.

A efecto de cumplir con las atribuciones conferidas a esta Comisión, y en observancia a lo que establece la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato vigente en su momento, el presente dictamen se ocupará exclusivamente de los aspectos que la propia Ley señala y por los cuales podría ser observado o no, el informe de resultados.

II. Antecedentes:

En su momento, el artículo 117, fracción VII de la Constitución Política Local establecía como obligación de los ayuntamientos presentar al Congreso del Estado la cuenta pública del municipio, en el plazo, forma y términos que estableciera la Ley. Al respecto, el artículo 22 de la abrogada Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, señalaba que las cuentas públicas de los municipios debían ser presentadas por periodos mensuales y a más tardar dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha en que concluyera el periodo de referencia.

La fracción VII del artículo 117 de la Constitución Política Local vigente señala que los ayuntamientos deberán presentar al Congreso del Estado la información financiera

y la cuenta pública del Municipio, con la periodicidad, forma y términos que establezcan las disposiciones aplicables y la Ley.

En cuanto a la presentación, el artículo 20 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato abrogada establecía cómo debían integrarse las cuentas públicas que los sujetos de fiscalización remitieran al Congreso del Estado. Asimismo, el artículo 20 A establecía la integración de las cuentas públicas de los municipios que en términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de los documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable llevaran una contabilidad simplificada.

Por otra parte, el artículo 130 fracciones XIII y XIV de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato establece como atribución del tesorero municipal, remitir al Congreso del Estado, la cuenta pública municipal, misma que deberá ser firmada preferentemente por un integrante de la primera minoría de la Comisión de Hacienda en el Ayuntamiento; así como rendir los informes contables y financieros mensuales dentro del mes siguiente, y atender las observaciones que se formulen sobre los mismos; debiendo firmar además dichos informes el presidente municipal.

En su oportunidad se remitieron a este Congreso las cuentas públicas municipales de Jerécuaro, Gto., correspondientes al periodo comprendido por los meses de enero a junio del ejercicio fiscal del año 2015, turnándose al entonces Órgano de Fiscalización Superior, ahora Auditoría Superior del Estado para su revisión.

La revisión concluyó con la elaboración del informe de resultados materia del presente dictamen, remitiéndose al Congreso, el cual se turnó a esta Comisión el 15 de junio de 2017 para su estudio y dictamen, siendo radicado el 19 de junio del año en curso.

Con fundamento en el artículo 41 de la abrogada Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, el entonces Auditor General acordó acumular en el informe de resultados, las cuentas públicas mensuales correspondientes al periodo de referencia.

III. Procedimiento de Revisión:

El Órgano Técnico inició la revisión de las cuentas públicas correspondientes al periodo comprendido de enero a junio del ejercicio fiscal del año 2015, el 9 de diciembre de 2015 y tuvo por objetivo examinar las cifras que muestran las cuentas públicas de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2015 y comprobar que la administración, control, utilización y destino de los recursos financieros, humanos y patrimoniales a cargo del municipio de Jerécuaro, Gto., fueron aplicados con transparencia y atendiendo a criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal, propiciando su óptimo aprovechamiento; asimismo, verificar que la actividad financiera se haya realizado con estricto apego a la Ley de Ingresos para dicho Municipio y al presupuesto de egresos autorizado, ambos para el ejercicio 2015, así como a los reglamentos y demás ordenamientos legales y normativos aplicables.

Con la finalidad de cumplir con lo establecido por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato aplicable al caso que nos ocupa, el informe de resultados establece las herramientas técnicas y métodos que se estimaron adecuados en la práctica de la revisión, señalando que ésta se efectuó de acuerdo con las normas emitidas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, que son aplicables al sector público, las que requieren que la auditoría sea planeada, realizada y supervisada, para obtener una seguridad razonable de que la información presentada en las cuentas públicas, no contiene errores importantes y que está integrada de acuerdo a las bases contables emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Asimismo, el informe establece que se verificó con base en pruebas selectivas, la evidencia que respalda las transacciones realizadas, las que están soportadas en las cifras y revelaciones de las cuentas públicas, atendiendo a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental; en las bases

y criterios establecidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable; en la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato; en la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato; en la Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal de 2015; en la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato; y en la Ley de Ingresos para el Municipio de Jerécuaro, Gto., para el Ejercicio Fiscal del año 2015. Lo anterior, de conformidad con lo establecido por los ordenamientos aplicables en la materia, incluyendo sus bases contables, utilizadas de acuerdo a los postulados básicos de contabilidad gubernamental; la presentación de la información financiera; las variaciones presupuestales; las estimaciones significativas hechas por la administración; los resultados de la gestión financiera; y la incidencia de sus operaciones en la hacienda pública del ente fiscalizado.

Como parte del proceso de revisión, el 24 de febrero de 2017, se dio vista de las observaciones y recomendaciones a los titulares y ex-titulares del ente fiscalizado que fungieron como responsables del manejo del erario público durante el periodo sujeto a revisión, concediéndoles un plazo de treinta días hábiles para aclarar, atender o solventar documentalmente las observaciones determinadas por el Órgano Técnico. Lo anterior, para dar cumplimiento a lo preceptuado por los artículos 9 fracción V, 23, fracción IV y 24 de la abrogada Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, plazo que transcurrió sin que se diera respuesta al pliego de observaciones y recomendaciones.

Agotado el plazo para dar respuesta al pliego de observaciones y recomendaciones, se procedió a la elaboración del informe de resultados materia del presente dictamen.

El 24 de mayo de 2017, el informe de resultados se notificó al presidente, al tesorero, al ex-presidente y al ex-tesorero municipales de Jerécuaro, Gto., para que en su caso, hicieran valer el recurso de reconsideración previsto por el artículo 39 de la abrogada Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, haciéndoles saber que contaban con un término de cinco días hábiles para tal efecto. Con lo anterior, se dio cumplimiento a la fracción VIII del artículo 23 de la citada Ley.

Este término transcurrió sin que, dentro del mismo, se hubiere promovido el recurso de reconsideración, como consta en la razón levantada por el Auditor Superior del Estado el 6 de junio de 2017, en la que se realiza el cómputo del término para la interposición del recurso, contado a partir de la fecha de la notificación del informe de resultados.

IV. Contenido del Informe de Resultados:

En cumplimiento a lo establecido por el artículo 43 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato aplicable al caso que nos ocupa, el informe de resultados contiene los siguientes apartados:

a) Conclusiones del proceso de fiscalización.

Por lo que se refiere a esta parte, se establecen los resultados de la gestión financiera que se reflejan en los rubros de ingresos, egresos, resultado del ejercicio, deuda pública y créditos por pagar; la evaluación y comprobación de los ingresos y gastos; la información técnica, financiera y contable que sirvió de apoyo a la evaluación; un análisis sintético del proceso de evaluación; y la propuesta de aprobación o desaprobación de los conceptos fiscalizados.

b) Análisis sobre el cumplimiento de los postulados básicos de contabilidad gubernamental y de los ordenamientos legales correspondientes.

En este punto se concluye que la administración municipal de Jerécuaro, Gto., cumplió con las bases contables aplicables a la institución y parcialmente con los postulados básicos de contabilidad gubernamental, estableciendo que se incumplieron los postulados básicos de Sustancia Económica, Devengo Contable y Registro e Integración Presupuestaria.

También se señala que se observó el incumplimiento de diversas disposiciones legales, consignándose el análisis correspondiente en el dictamen técnico jurídico al que más adelante haremos referencia.

c) Pliego de observaciones y recomendaciones derivadas de la revisión.

En este punto se desglosan las observaciones detectadas en la revisión practicada a las cuentas públicas municipales de Jerécuaro, Gto., por el periodo comprendido de enero a junio de 2015. En cada una de las observaciones realizadas al sujeto fiscalizado, se plasman las acciones preventivas y correctivas que se deben llevar a cabo para subsanar las situaciones detectadas durante el proceso de revisión.

d) Diligencias y acciones practicadas para aclarar o solventar las observaciones y recomendaciones.

La inclusión de este punto se justifica para determinar que no se haya violentado el derecho de audiencia o defensa en perjuicio del sujeto fiscalizado. El informe concluye afirmando que se dio cabal cumplimiento a lo preceptuado por los artículos 9 fracción V, 23 fracciones IV y V y 24 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato abrogada, al haberse notificado a los responsables del manejo del erario público durante el periodo sujeto a revisión, las observaciones y recomendaciones determinadas, otorgándoles el plazo que señala la Ley para aclarar, atender o solventar documentalmente dichas observaciones.

Sin embargo, como ya se había señalado, no se dio respuesta al pliego de observaciones y recomendaciones.

En el caso de las observaciones que se consideraron solventadas, esto fue debido a que ya no existen acciones que se puedan realizar, al tratarse de hechos consumados.

e) Informe sobre la situación que guardan las recomendaciones u observaciones que no fueron atendidas o solventadas.

En esta parte, se consignan las observaciones y recomendaciones en las que no se presentó respuesta alguna para su atención, estableciéndose las razones por las que se consideran no solventadas o atendidas.

En tal sentido, no se solventaron las observaciones establecidas en los numerales 2, referido a construcciones en proceso; 3, correspondiente a registro contable de servicios de mantenimiento; y 5, referente a solicitudes de información.

f) Señalamiento de las irregularidades detectadas.

En este punto se establecen las observaciones que no se solventaron, de las que puede presumirse la existencia de responsabilidades y que se analizan en el dictamen técnico jurídico.

g) Observaciones y comentarios del Auditor Superior, derivados del proceso de fiscalización.

El Auditor Superior del Estado, concluyó que la información contenida en las cuentas públicas y los reportes documentales de las muestras examinadas, son parcialmente razonables en sus aspectos importantes, así como el ejercicio y aplicación de los recursos que fueron objeto de la fiscalización, todo ello producto del incumplimiento de algunos postulados básicos de contabilidad gubernamental y de diversas disposiciones legales.

Señalando además que los responsables del manejo de los recursos públicos del ente fiscalizado no incurrieron en actos u omisiones que hagan presumir la existencia de daños y perjuicios causados a la hacienda y patrimonio públicos del sujeto fiscalizado, como se establece en el dictamen de daños y perjuicios, pero que con independencia de ello en el dictamen técnico jurídico se precisan las acciones que en su caso deberán promoverse.

Asimismo, se establece que en ningún momento, las notificaciones que expide el Órgano Técnico, referentes a la solventación

de observaciones como resultado de la fiscalización superior, liberan a las autoridades que manejan dichos recursos, de responsabilidades futuras que pudieran surgir con motivo del ejercicio de las facultades de revisión, referente a lo que no fue materia de la revisión, que con base a lo que establece la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato antes vigente, lleven a cabo las autoridades facultadas.

También se refiere que, de conformidad con lo dispuesto por la ley de la materia, es deber de todo servidor público custodiar la documentación e información que conserve o a la que tenga acceso por razón de su empleo, cargo o comisión, evitar o impedir el uso, sustracción, destrucción u ocultamiento indebidos de aquélla; así como guardar reserva de la información a que tenga acceso por su función, la que exclusivamente deberá ser usada para los fines a que esté afecta.

Finalmente, se informa que durante el proceso de revisión no se efectuaron reintegros o recuperaciones al patrimonio del sujeto fiscalizado.

h) Dictamen que establece la cuantía de los daños y perjuicios causados a la hacienda y patrimonio públicos del municipio de Jerécuaro, Gto.

En este punto se señala que toda vez que de la revisión de las cuentas públicas municipales de Jerécuaro, Gto., correspondientes al periodo comprendido por los meses de enero a junio del ejercicio fiscal del año 2015, no se desprendieron daños o perjuicios a la hacienda y patrimonio públicos del sujeto fiscalizado.

i) Dictamen técnico jurídico.

En este dictamen se establecen las consideraciones técnico-jurídicas derivadas de las irregularidades y deficiencias detectadas en la revisión practicada, concluyendo que se desprende la existencia de responsabilidades administrativas.

Las responsabilidades administrativas se derivan de las observaciones plasmadas en los numerales 1, relativo a estados analíticos de ingresos y egresos; 2, referido a construcciones en proceso; 3, correspondiente a registro contable de servicios de mantenimiento; 4, referente a Derecho de Alumbrado Público; y 5, relativo a solicitudes de información.

Aun cuando las observaciones establecidas en los numerales 1 y 4, se consideraron solventadas, persiste la responsabilidad administrativa que se generó por la falta de cumplimiento oportuno de las obligaciones a cargo de servidores públicos.

En cuanto a responsabilidades penales o derivadas del dictamen de daños y perjuicios, el dictamen técnico jurídico establece que de la revisión practicada no se desprenden situaciones que hagan presumir la existencia de dichas responsabilidades.

Es así, que se establecen los hechos en que se fundan las responsabilidades determinadas, los presuntos responsables, las acciones que deberán promoverse y las autoridades que resultan competentes para conocer de dichas acciones.

En tal sentido, consideramos que dicho dictamen se encuentra suficientemente fundado y motivado, a efecto de ejercer las acciones legales que procedan ante las autoridades competentes.

V. Conclusiones:

Como ya lo habíamos señalado en párrafos anteriores, el artículo 45 de la abrogada Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, establece que los informes de resultados solamente podrán ser observados por las dos terceras partes del Congreso del Estado cuando: a) En perjuicio del sujeto de fiscalización no se haya otorgado el derecho de audiencia o defensa; b) No se observen las formalidades esenciales del proceso de fiscalización; y c) Cuando se viole de manera flagrante la Ley. Señalando que en tales casos el informe de resultados será devuelto al Órgano de Fiscalización Superior, a efecto de que atienda las observaciones.

En este sentido, quienes integramos esta Comisión analizamos el informe de resultados materia del presente dictamen,

considerando las hipótesis referidas en el precepto anteriormente señalado.

Como se desprende del informe de resultados, en su oportunidad el Órgano Técnico dio cumplimiento a los artículos 9 fracción V, 23 fracción IV y 24 de la abrogada Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, al haberse notificado las observaciones y recomendaciones derivadas de la revisión a los funcionarios y ex-funcionarios de la administración municipal de Jerécuaro, Gto, que fungieron como responsables del manejo del erario público durante el periodo sujeto a revisión, concediéndoles el plazo que establece la Ley para aclarar, atender o solventar documentalmente las observaciones determinadas por el Órgano Técnico. Al respecto, cabe mencionar que aun cuando se notificó el pliego de observaciones y recomendaciones a los funcionarios obligados a dar respuesta, éstos no dieron respuesta al mismo en el plazo que establece la Ley.

De igual manera, existe en el informe de resultados la constancia de que éste se notificó al presidente, al tesorero, al ex-presidente y al ex-tesorero municipales de Jerécuaro, Gto., concediéndoles el término señalado en el artículo 23 fracción VIII de la Ley de Fiscalización Superior del Estado abrogada, a efecto de que en su caso, hicieran valer el recurso de reconsideración que prevé el artículo 39 de dicho ordenamiento legal; no habiéndose presentado en este plazo el referido medio de impugnación, tal y como se desprende de la constancia expedida por el Auditor Superior del Estado y que obra en el informe de resultados. En tal virtud, se considera que fue respetado el derecho de audiencia o defensa por parte del Órgano Técnico.

Por otra parte, del informe de resultados podemos inferir que el Órgano Técnico en el desarrollo del procedimiento de revisión dio cumplimiento a las formalidades esenciales que la misma Ley establece para el proceso de fiscalización, al haberse practicado conforme a las normas de auditoría aplicables al sector público, atendiendo a lo establecido en la normatividad aplicable en la materia, incluyendo las bases contables aplicables a la institución, utilizadas de acuerdo a los postulados básicos de contabilidad gubernamental.

También se dio cumplimiento de manera puntual a las fases que se establecen para los procesos de fiscalización, concluyendo con la elaboración del informe de resultados, cuyo contenido es acorde con lo que establece el artículo 43 de la abrogada Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, destacando de manera relevante el dictamen técnico jurídico, que será el soporte para que se promuevan por parte del ayuntamiento de Jerécuaro, Gto., las acciones correspondientes, debiendo dar seguimiento la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato al ejercicio de dichas acciones.

Finalmente, no se desprende la existencia de alguna violación flagrante a la Ley, ya que el Órgano Técnico en la práctica de la revisión atendió lo preceptuado por la Ley de Fiscalización Superior del Estado antes vigente y en general la normatividad aplicable y los postulados básicos de contabilidad gubernamental.

En razón de lo anteriormente señalado, concluimos que el informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas públicas municipales de Jerécuaro, Gto., correspondientes al período comprendido de enero a junio del ejercicio fiscal del año 2015, debe sancionarse por el Congreso en los términos presentados por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato y proceder a su aprobación, considerando que no se presenta alguno de los supuestos contenidos en el artículo 45 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado aplicable al caso que nos ocupa, razón por la cual no podría ser observado por el Pleno del Congreso.

Por lo expuesto, con fundamento en el artículo 204 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, nos permitimos someter a la consideración de la Asamblea, la aprobación del siguiente:

A c u e r d o

Único. Con fundamento en el artículo 63 fracciones XIX y XXVIII de la Constitución Política para el Estado, en relación con el artículo 23 fracción IX de la Ley de

Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, abrogada mediante el decreto número 320 de la Sexagésima Segunda Legislatura, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 154, décima tercera parte, de fecha 25 de septiembre de 2015 y el artículo Tercero Transitorio de dicho decreto, se declaran revisadas las cuentas públicas municipales de Jerécuaro, Gto., correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del ejercicio fiscal del año 2015, con base en el informe de resultados formulado por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato.

Con fundamento en el artículo 48 de la abrogada Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, el Auditor Superior del Estado de Guanajuato promoverá las acciones necesarias para el fincamiento de las responsabilidades administrativas determinadas en el dictamen técnico jurídico contenido en el informe de resultados.

Se ordena dar vista del informe de resultados al ayuntamiento del municipio de Jerécuaro, Gto., a efecto de que se atiendan las observaciones que no se solventaron, así como las recomendaciones contenidas en dicho informe, en el plazo que establece el artículo 23 fracción XI de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato aplicable al presente caso. Asimismo, para que con base en el dictamen técnico jurídico contenido en el informe de resultados, se proceda al fincamiento de las responsabilidades administrativas a que haya lugar, informando a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato de las acciones realizadas para ello, con objeto de que esta última realice el seguimiento correspondiente.

Remítase el presente acuerdo al titular del Poder Ejecutivo del Estado para su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

De igual forma, se ordena la remisión del presente acuerdo junto con su dictamen y el informe de resultados al ayuntamiento del municipio de Jerécuaro, Gto., y a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, para los efectos de su competencia.

Guanajuato, Gto., 2 de octubre de 2017. La Comisión de Hacienda y Fiscalización. Dip. Elvira Paniagua Rodríguez. Dip. Angélica Casillas Martínez. Dip. María Alejandra Torres Novoa. (Con observación) **Dip. Juan Carlos Muñoz Márquez. Dip. María Guadalupe Velázquez Díaz.»**

-El C. Presidente: Si alguna diputada o algún diputado desean hacer uso de la palabra en pro o en contra, manifiéstenlo indicando el sentido de su participación.

En virtud de que no se han registrado participaciones, se pide a la secretaría que proceda a recabar votación nominal de la Asamblea, a través del sistema electrónico, a efecto de aprobar o no el dictamen puesto a su consideración. Se abre el sistema electrónico.

-La Secretaría: En votación nominal, por el sistema electrónico, se consulta a las diputadas y a los diputados si se aprueba el dictamen puesto a su consideración.

(Votación)

Compañera diputada Estela Chávez Cerrillo, ¿cuál es el motivo de su abstención?

C. Dip. Estela Chávez Cerrillo: Con fundamento en el artículo 203 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, me abstengo ya que fungí como secretaria del ayuntamiento en el periodo octubre de 2012 a marzo de 2014.

-La Secretaría: ¿Falta alguna diputada o algún diputado por emitir su voto?

-El C. Presidente: Se cierra el sistema electrónico.

-La Secretaría: Diputado presidente, le informo que se han registrado 31 votos a favor, 1 abstención y 0 votos en contra.

-El C. Presidente: El dictamen ha sido aprobado por unanimidad de votos de los presentes.

Remítase el acuerdo aprobado al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para su

publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

De igual forma, remítase el acuerdo aprobado, junto con su dictamen y el informe de resultados, al ayuntamiento de Jerécuaro, Gto., así como a la Auditoría Superior del Estado para los efectos de su competencia.

Procede someter a discusión los dictámenes formulados por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativos a:

DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL DICTAMEN EMITIDO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA Y FISCALIZACIÓN, RELATIVO AL INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN PRACTICADA A LAS OPERACIONES REALIZADAS CON RECURSOS DEL RAMO 33 Y DE OBRA PÚBLICA POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE HUANÍMARO, GTO., CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2016.

»C. Presidenta del Congreso del Estado. Presente.

A esta Comisión de Hacienda y Fiscalización le fue turnado para su estudio y dictamen, el informe de resultados de la revisión practicada por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, a las operaciones realizadas con recursos del Ramo 33 y de obra pública por la administración municipal de **Huanímaro, Gto., correspondientes al período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 2016.**

Una vez analizado el referido informe de resultados, con fundamento en los artículos 112, fracción XII y 171 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, nos permitimos rendir el siguiente:

D i c t a m e n

I. Competencia:

Las facultades de la legislatura local en materia de fiscalización de las cuentas públicas tienen su fundamento en lo dispuesto por el artículo 63 fracciones XVIII, XIX y XXVIII de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato. Estos dispositivos establecen que el Congreso del Estado tiene la facultad de fiscalizar la cuenta pública del Poder Ejecutivo, incluyendo las de las entidades y organismos de la administración pública paraestatal, las del Poder Judicial y de los organismos autónomos; así como las cuentas públicas municipales, incluyendo las de las entidades y organismos de la administración pública paramunicipal; y verificar el desempeño en el cumplimiento de los objetivos de los programas. De igual manera, puede acordar la práctica de auditorías a los sujetos de fiscalización, cuando exista causa justificada para ello, auxiliándose para el cumplimiento de dichas facultades por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato.

En el artículo 49 fracción III de la Ley de Coordinación Fiscal, se establece la facultad de los Congresos Locales a través de sus órganos de fiscalización, de verificar en la fiscalización de las cuentas públicas de los municipios, que los recursos de los fondos de aportaciones federales se hayan previsto a los fines establecidos en dicha Ley.

Asimismo, el artículo 66 fracción VIII de dicho Ordenamiento Constitucional establece que la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato deberá informar al Congreso del Estado del resultado de la revisión de la cuenta pública y demás asuntos derivados de la fiscalización, incluyendo los dictámenes, informes de resultados, comentarios y observaciones de las auditorías, constituyendo una de las fases del proceso de fiscalización.

El artículo 82, fracción XXIV de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato establece como atribución del Auditor Superior, rendir al Congreso, los informes derivados del ejercicio de la función de fiscalización.

En razón de lo cual, la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato establece que la Auditoría Superior debe remitir los informes de resultados al Congreso del Estado, a efecto de que éste realice la declaratoria correspondiente, señalándose en el artículo 38 que el informe de resultados únicamente podrá ser observado por las dos terceras partes de los integrantes del Congreso

cuando: a) En perjuicio del sujeto de fiscalización no se haya otorgado el derecho de audiencia o defensa; b) Cuando no se hayan valorado las documentales aportadas por el sujeto de fiscalización durante el procedimiento de fiscalización hasta la notificación del informe de resultados; y c) No se observen las formalidades esenciales del proceso de fiscalización.

Con la finalidad de que el Congreso dé cumplimiento a lo señalado en el párrafo anterior, la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato establece en su artículo 112, fracción XII que a esta Comisión de Hacienda y Fiscalización, le compete el conocimiento y dictamen de los asuntos relativos a los informes de resultados que emita la Auditoría Superior del Estado.

A efecto de cumplir con las atribuciones conferidas a esta Comisión, y en observancia a lo que establece la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, el presente dictamen se ocupará exclusivamente de los aspectos que la propia Ley señala y por los cuales podría ser observado o no, el informe de resultados.

II. Antecedentes:

De conformidad con los artículos 66, fracción IV de la Constitución Política Local y 82, fracción III de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, corresponde a la Auditoría Superior del Estado, acordar y practicar auditorías conforme a su programa anual y ejecutar las que acuerde el Congreso del Estado en los términos de la fracción XXVIII del Artículo 63 de dicha Constitución.

Asimismo, el artículo 16 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, establece que la Auditoría Superior establecerá un Programa General de Fiscalización, señalando los actos y sujetos de fiscalización, los que serán objeto de auditoría o revisión conforme a los criterios y normas que se establezcan en el Reglamento.

En ejercicio de esta función, el Auditor Superior del Estado aprobó el Programa General de Fiscalización 2017 de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato. En dicho Programa se contempló la práctica de una revisión a las operaciones realizadas con recursos del Ramo 33 y de obra pública por la administración municipal de Huanímaro, Gto., correspondientes al período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 2016.

La revisión practicada conforme a lo expresado en los párrafos anteriores concluyó con la elaboración del informe de resultados que se remitió al Congreso, el cual se turnó a esta Comisión de Hacienda y Fiscalización el 10 de agosto de 2017 para su estudio y dictamen, siendo radicado el 21 de agosto del año en curso.

III. Procedimiento de Revisión:

La revisión dio inicio el 24 de marzo de 2017 y tuvo por objetivo verificar que los recursos del Ramo 33 se registraron, administraron, ejercieron y destinaron, de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y demás normativa aplicable. Asimismo, verificar que las inversiones en obra pública se realizaron de acuerdo a las leyes, normas, reglamentos y demás disposiciones legales que la regulan.

Con la finalidad de cumplir con lo establecido por los artículos 6 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, 3 y 4 del Reglamento de dicha Ley, el informe de resultados establece los procedimientos y métodos de auditoría que se estimaron adecuados en la práctica de la revisión, señalando que ésta se efectuó de acuerdo con las normas internacionales de auditoría, adoptadas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, que son aplicables al sector público, las que requieren que la auditoría sea planeada, realizada y supervisada, para obtener una seguridad razonable de que las cifras presentadas en la información contable y presupuestal revisada, no contiene errores importantes y que están integradas de acuerdo a las bases contables emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Asimismo, el informe establece que se verificó, con base en pruebas selectivas, la evidencia que respalda las transacciones realizadas con recursos del Ramo General 33

y obra pública, las que están soportadas en las cifras y revelaciones de la información financiera, atendiendo a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental; en las bases y criterios establecidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable; en la Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal de 2016; en la Ley de Ingresos para el Municipio de Huanímaro, Gto., para el Ejercicio Fiscal del año 2016; en la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato; en la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato; y en la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato. Lo anterior, conforme lo disponen los ordenamientos aplicables en la materia, incluyendo las bases contables aplicables al sujeto fiscalizado, utilizadas de acuerdo a los postulados básicos de contabilidad gubernamental; la presentación de la información contable; las variaciones presupuestales; las estimaciones significativas hechas por la administración; los resultados de la gestión financiera; y la incidencia de sus operaciones en la hacienda pública del sujeto fiscalizado. Es así, que se seleccionaron para su revisión diversas obras y acciones efectuadas con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y sus remanentes; así como obras y acciones ejecutadas con recursos municipales, estatales, federales y provenientes de aportaciones de beneficiarios y sus remanentes y derivados de otras fuentes de financiamiento. También se verificaron recursos en bancos por ejercer.

Como parte del proceso de fiscalización, el 26 de mayo de 2017, se notificó el pliego de observaciones y recomendaciones a los titulares del sujeto fiscalizado, concediéndoles un plazo de quince días hábiles para aclarar, atender o solventar documentalmente las observaciones determinadas por el Órgano Técnico. Lo anterior, para dar cumplimiento a lo preceptuado por el artículo 37, fracción II de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato.

El 16 de junio de 2017, se presentó oficio de respuesta al pliego de observaciones y recomendaciones derivadas de la revisión practicada, anexándose la información y documentación que se consideró suficiente para aclarar y en su caso, solventar las observaciones determinadas y atender las recomendaciones efectuadas. Una vez valorada la documentación aportada, se procedió a la elaboración del informe de resultados materia del presente dictamen.

El 11 de julio de 2017, el informe de resultados se notificó al presidente y al tesorero municipales de Huanímaro, Gto., para que en su caso hicieran valer el recurso de reconsideración previsto por los artículos del 48 al 55 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, haciéndoles saber que contaban con un término de cinco días hábiles para tal efecto. Con lo anterior, se dio cumplimiento a la fracción IV del artículo 37 de la citada Ley.

Este término transcurrió sin que, dentro del mismo, se hubiere promovido el recurso de reconsideración, como consta en la razón levantada por el Auditor Superior del Estado el 3 de agosto de 2017, en la que se realiza el cómputo del término para la interposición del recurso, contado a partir de la fecha de la notificación del informe de resultados.

IV. Contenido del Informe de Resultados:

En cumplimiento a lo establecido por los artículos 37, fracción III de la Ley de Fiscalización Superior del Estado y 25 del Reglamento de dicha Ley, el informe de resultados contiene los siguientes apartados:

a) Introducción.

Por lo que se refiere a este punto, se establece el objetivo y alcance de la auditoría; y las conclusiones del proceso de fiscalización, que contienen los resultados de la gestión financiera que se reflejan en los rubros de ingresos, egresos y resultado del ejercicio; la evaluación y comprobación de los ingresos y egresos; la información técnica, financiera y contable que sirvió de apoyo a la evaluación; un análisis sintético del proceso de evaluación; y la propuesta de aprobación o desaprobación de los conceptos fiscalizados.

b) Observaciones y recomendaciones que en su caso hayan resultado en el proceso de fiscalización, la respuesta emitida por el sujeto de fiscalización o una síntesis de sus aspectos importantes y la valoración correspondiente.

En esta parte se desglosa la valoración de las observaciones y recomendaciones formuladas por el Órgano Técnico, considerando como solventadas las observaciones plasmadas en los numerales 1, correspondiente a cuenta bancaria productiva. (FAISMDF 2016); 2, relativo a registro contable y presupuestal por fuente de financiamiento; 3, referente a gastos indirectos. (FAISMDF 2016); y 5, referido a autorización de cantidades de obra. Contrato MHU/DUYOP/FORTALECE/006-16. (Recurso Federal 2016).

No se solventaron las observaciones establecidas en los numerales 4, referente a obras en proceso (Activo no Circulante); y 6, relativo a autorización de cantidades de obra. Contrato MHU/DUYOP/FORTALECE/004-16. (Recurso Federal 2016).

En cuanto al apartado de Recomendaciones Generales, no se atendieron los puntos R1., correspondiente a subejercicio de los recursos FAISMDF 2016; y R2., referido a saldo en cuenta de anticipos a corto plazo.

c) Dictamen técnico jurídico.

En este dictamen se precisan las presuntas responsabilidades derivadas de las deficiencias e irregularidades en las cuales y conforme a las leyes y demás disposiciones jurídicas aplicables, deben ser ejercidas las acciones legales correspondientes, de acuerdo a la naturaleza de cada una de ellas, concluyendo que se desprende la existencia de responsabilidades administrativas, así como las que se derivan del dictamen de daños y perjuicios.

Las presuntas responsabilidades administrativas se derivan de las observaciones establecidas en los numerales 1, correspondiente a cuenta bancaria productiva. (FAISMDF 2016); 2, relativo a registro contable y presupuestal por fuente de financiamiento; 3, referente a gastos indirectos. (FAISMDF 2016); 4, referido a obras en proceso (Activo no Circulante); 5, correspondiente a autorización de cantidades de obra. Contrato MHU/DUYOP/FORTALECE/006-16. (Recurso Federal 2016); y 6, relativo a autorización de cantidades de obra. Contrato MHU/DUYOP/FORTALECE/004-16. (Recurso Federal 2016).

Aun cuando las observaciones contenidas en los numerales 1, 2, 3 y 5, se solventaron durante la etapa correspondiente, persisten las responsabilidades administrativas que se generaron por la falta de cumplimiento oportuno de las obligaciones a cargo de servidores públicos.

Respecto a los puntos R1., correspondiente a subejercicio de los recursos FAISMDF 2016; y R2., referido a saldo en cuenta de anticipos a corto plazo, éstos se emitieron con el carácter de recomendaciones, por lo tanto aun cuando no se atendieron, no generan responsabilidad alguna.

De la observación consignada en el numeral 6, relativo a autorización de cantidades de obra. Contrato MHU/DUYOP/FORTALECE/004-16. (Recurso Federal 2016), se refiere que se presume la existencia de las responsabilidades derivadas del dictamen de daños y perjuicios.

En esta parte cabe precisar que aun cuando en el dictamen técnico jurídico, se hace referencia a responsabilidades civiles, el 19 de julio de 2017, entró en vigor la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, la cual refiere que la autoridad competente para conocer del ejercicio de las acciones anteriormente referidas es el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato.

En cuanto a responsabilidades penales, en el propio informe de resultados se establece que de la auditoría practicada no se desprenden situaciones que hagan presumir la existencia de dichas responsabilidades.

Es así, que en este dictamen se establecen los hechos en que se fundan las responsabilidades correspondientes, los

presuntos responsables, las acciones que deberán promoverse y las autoridades que resultan competentes para conocer de dichas acciones.

En tal sentido, consideramos que dicho dictamen se encuentra suficientemente fundado y motivado, a efecto de ejercer las acciones legales que procedan ante las autoridades competentes.

d) Dictamen de daños y perjuicios.

En este dictamen, se establece que se observaron irregularidades o deficiencias que no fueron subsanadas durante el proceso de auditoría, razón por la cual se tienen elementos de los que se desprende la existencia de daños y perjuicios causados a la hacienda y patrimonio públicos del sujeto fiscalizado.

En tal sentido se funda y motiva dicho dictamen, estableciendo los hechos de los que se deriva; la cuantía; y los bienes, derechos, programas, objetivos, actos jurídicos o partidas afectadas.

La observación de las que se desprende la existencia de daños y perjuicios es la consignada en el numeral 6, relativo a autorización de cantidades de obra. Contrato MHU/DUYOP/FORTALECE/004-16. (Recurso Federal 2016), determinándose la cuantía correspondiente.

Cabe destacar la importancia de este dictamen, debido a que permitirá resarcir al sujeto fiscalizado los daños y perjuicios ocasionados, ya que con base en los artículos 37, fracción VI y 68 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, una vez que el informe de resultados sea sancionado por el Pleno del Congreso, tendrá carácter de documento público, para que los sujetos de fiscalización por conducto de su titular o por la persona a quien éstos deleguen dicha facultad, procedan a ejercer las acciones en la vía y forma que corresponda, ante la autoridad competente, dentro del término de tres meses contado a partir del día siguiente al de la notificación del acuerdo del Pleno del Congreso, mismo que podrá duplicarse a petición del sujeto de fiscalización presentada al Congreso del Estado.

En caso de que los servidores públicos responsables de ejercer dichas acciones tuvieren intereses en conflicto, en los términos que prescribe la Ley de la materia, el ejercicio de las referidas acciones quedará reservado a la Auditoría Superior del Estado. Para que opere dicho supuesto, deberá informarse lo conducente a la Auditoría Superior del Estado, dentro del término de quince días hábiles, contado a partir de la fecha de notificación del acuerdo del Pleno del Congreso, justificando las causales de conflicto de intereses en las que se ubican y se abstendrán de ejercer cualquier acción.

Asimismo, tratándose de las acciones derivadas del dictamen de daños y perjuicios, cuyo ejercicio se convenga por los sujetos fiscalizados con la Auditoría Superior del Estado, previa justificación de su imposibilidad material y humana para ejercerlas, también serán ejercidas por esta última.

Finalmente, con fundamento en el artículo 70 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, los sujetos fiscalizados podrán abstenerse de ejercer las acciones derivadas del dictamen de daños y perjuicios o la prosecución de las mismas, cuando previo al ejercicio de dichas acciones, el deudor reintegre o repare la totalidad de los daños y perjuicios causados al patrimonio o a la hacienda pública del sujeto de fiscalización o por incosteabilidad en la recuperación de los daños y perjuicios al haber fallecido el deudor o exista sentencia que lo determine en estado de quiebra, así como por la declaratoria de insolvencia por procedimiento de concurso. También procederá la incosteabilidad durante el procedimiento y previo a la práctica del emplazamiento al deudor, por su fallecimiento o por existir sentencia que lo determine en estado de quiebra, así como cuando no haya podido ser localizado dentro del procedimiento. También podrán abstenerse por incobrabilidad, una vez que ya exista sentencia favorable, cuando en la ejecución de dicha sentencia se actualicen los supuestos previstos en la fracción II del referido artículo.

Para los efectos del párrafo anterior, el titular del sujeto de fiscalización deberá efectuar el dictamen correspondiente, justificando con el soporte documental

pertinente, las acciones o circunstancias que respalden los supuestos sobre los cuales se determinará el no ejercicio o la no ejecución de las acciones derivadas del dictamen de daños y perjuicios sobre los probables responsables.

En los casos previstos en las fracciones II y III del artículo 70 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, el daño causado al patrimonio o a la hacienda pública, no deberá exceder de 200 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria, vigente al momento que se haya emitido el acuerdo.

e) Resumen de las observaciones y recomendaciones con su estatus y las presuntas responsabilidades resultantes.

En este apartado se establece el estatus que guardan las observaciones y recomendaciones, así como las presuntas responsabilidades resultantes del proceso de fiscalización; estableciendo que una vez concluida la revisión, así como la dictaminación correspondiente, se determinaron 6 observaciones, de las cuales se solventaron 4 y 2 no se solventaron por parte del sujeto fiscalizado. Asimismo, se generaron 2 recomendaciones que no fueron atendidas.

f) Promoción del ejercicio de facultades de comprobación fiscal.

En esta parte se establece que de conformidad con lo establecido en los artículos 82, fracción XXXIV de la Ley de Fiscalización Superior del Estado y 23 del Reglamento de dicha Ley, y toda vez que del proceso de fiscalización pudieran actualizarse presuntos incumplimientos a las disposiciones fiscales o bien respecto a ingresos, adquisiciones o facturaciones que por su monto, origen o instrumentación pudieran derivar de aquéllos, la Auditoría Superior del Estado realizó el análisis correspondiente, del cual se concluyó que no es procedente la promoción del inicio de facultades de comprobación fiscal.

g) Comunicado ante órganos de control y autoridades que administran padrones de proveedores y contratistas.

En este punto se señala que de conformidad con lo establecido en los artículos 3, fracción XI de la Ley de Fiscalización Superior del Estado y 23, primer párrafo del Reglamento de dicha Ley, una vez que el informe de resultados sea sancionado por el Pleno del Congreso, la Auditoría Superior del Estado pondrá en conocimiento de los órganos de control y de las autoridades estatales o municipales competentes que administren padrones de proveedores o contratistas, las presuntas irregularidades o incumplimientos de éstos en contrataciones públicas, concluyendo que es procedente hacer del conocimiento el informe de resultados que nos ocupa, de la Contraloría Municipal de Huanímaro, Gto., y de la Secretaría de Obra Pública del Estado, por las presuntas irregularidades o incumplimientos de estos últimos en contrataciones públicas detectadas durante la auditoría, precisando los contratistas y las observaciones en las que intervinieron.

h) Anexos.

En esta parte, se adjuntan los anexos técnicos que soportan la revisión.

V. Conclusiones:

Como ya lo habíamos señalado en párrafos anteriores, el artículo 38 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, establece que los informes de resultados solamente podrán ser observados por las dos terceras partes del Congreso del Estado cuando: I. En perjuicio del sujeto de fiscalización no se haya otorgado el derecho de audiencia o defensa; II. Cuando no se hayan valorado las documentales aportadas por el sujeto de fiscalización durante el procedimiento de fiscalización hasta la notificación del informe de resultados; y III. No se observen las formalidades esenciales del proceso de fiscalización. Señalando que en tales casos el informe de resultados será devuelto la Auditoría Superior del Estado.

En este sentido, quienes integramos esta Comisión analizamos el informe de resultados materia del presente dictamen,

considerando las hipótesis referidas en el precepto anteriormente señalado.

Como se desprende del informe de resultados, el Órgano Técnico dio cumplimiento al artículo 37, fracción II de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, al haberse notificado las observaciones y recomendaciones derivadas de la auditoría, a los funcionarios de la administración municipal de Huanímaro, Gto., que fungieron como responsables del manejo del erario público durante el periodo sujeto a revisión, concediéndoles el plazo que establece la Ley para aclarar, atender o solventar documentalmente las observaciones determinadas por el Órgano Técnico. Al respecto, el tesorero municipal de Huanímaro, Gto., presentó la información y documentación que consideró suficiente para aclarar y en su caso, solventar las observaciones determinadas y atender las recomendaciones efectuadas.

De igual manera, existe en el informe de resultados la constancia de que éste se notificó al presidente y al tesorero municipales de Huanímaro, Gto., concediéndoles el término señalado en el artículo 37, fracción IV de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, a efecto de que en su caso, hicieran valer el recurso de reconsideración que prevén los artículos del 48 al 55 de dicho ordenamiento legal; no habiéndose presentado en este plazo el referido medio de impugnación, tal y como se desprende de la constancia expedida por el Auditor Superior y que obra en el informe de resultados. En tal virtud, se considera que fue respetado el derecho de audiencia o defensa por parte del Órgano Técnico.

Por otra parte, del informe de resultados podemos inferir que el Órgano Técnico en el desarrollo del procedimiento de auditoría dio cumplimiento a las formalidades esenciales que la misma Ley establece para el proceso de fiscalización, al haberse practicado una revisión que estaba contemplada en el Programa General de Fiscalización 2017 de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, aprobado en su momento por el Auditor Superior. Asimismo, la revisión se efectuó conforme a las normas y procedimientos de auditoría aplicables al sector público, atendiendo a lo establecido en la normatividad aplicable en la materia, incluyendo las bases contables aplicables a la institución, utilizadas de acuerdo a los postulados básicos de contabilidad gubernamental.

También, se dio cumplimiento de manera puntual a las fases que se establecen para los procesos de fiscalización, concluyendo con la elaboración del informe de resultados, cuyo contenido es acorde con lo que establece el artículo 25 del Reglamento de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, destacando de manera relevante los dictámenes de daños y perjuicios y técnico jurídico, que será el soporte para que se promuevan por parte del ayuntamiento de Huanímaro, Gto., las acciones necesarias para el fincamiento de las responsabilidades que se consignan en dichos dictámenes, debiendo dar seguimiento la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato al ejercicio de dichas acciones.

Finalmente, del contenido del informe de resultados podemos desprender que todas las documentales aportadas por el sujeto fiscalizado durante el procedimiento de fiscalización, hasta la notificación del informe de resultados, fueron valoradas por el Órgano Técnico.

En razón de lo anteriormente señalado, concluimos que el informe de resultados de la revisión practicada a las operaciones realizadas con recursos del Ramo 33 y de obra pública por la administración municipal de Huanímaro, Gto., correspondientes al ejercicio fiscal del año 2016, debe sancionarse por el Congreso en los términos presentados por la Auditoría Superior del Estado y proceder a su aprobación, considerando que no se presenta alguno de los supuestos contenidos en el artículo 38 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, razón por la cual no podría ser observado por el Pleno del Congreso.

Por lo expuesto, con fundamento en el artículo 204 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, nos permitimos someter a la consideración de la Asamblea, la aprobación del siguiente:

A C U E R D O

Único. Con fundamento en el artículo 63 fracción XIX de la Constitución Política para el Estado, en relación con el artículo 37, fracciones V y VI de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, se aprueba el informe de resultados formulado por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, relativo a la revisión practicada a las operaciones realizadas con recursos de los Fondos del Ramo 33, denominados Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y de obra pública, por la administración municipal de Huanímaro, Gto., correspondientes al período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 2016.

Con fundamento en los artículos 37, fracción VII y 71 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, el Auditor Superior del Estado de Guanajuato promoverá las denuncias correspondientes ante los órganos de control, para el fincamiento de las responsabilidades administrativas determinadas en el dictamen técnico jurídico contenido en el informe de resultados.

Se ordena dar vista del informe de resultados al ayuntamiento del municipio de Huanímaro, Gto., a efecto de que se atiendan las observaciones que no se solventaron, así como las recomendaciones contenidas en dicho informe, en el plazo que establece el artículo 66 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato. Asimismo, para que con base en los dictámenes de daños y perjuicios y técnico jurídico contenidos en el informe de resultados, se ejerzan las acciones que procedan ante la autoridad competente, en el término señalado en el artículo 68 de la citada Ley; y se proceda al fincamiento de las responsabilidades administrativas a que haya lugar, informando a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato de las acciones realizadas para ello, con objeto de que esta última realice el seguimiento correspondiente

De conformidad con el artículo 37, fracción VI, último párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, el presente acuerdo tiene carácter de documento público, para fundar las acciones legales correspondientes en contra de los probables responsables.

Remítase el presente acuerdo junto con su dictamen y el informe de resultados al ayuntamiento del municipio de Huanímaro, Gto., así como a la Auditoría Superior del Estado, para los efectos de su competencia.

Guanajuato, Gto., 2 de octubre de 2017. La Comisión de Hacienda y Fiscalización. Dip. Elvira Paniagua Rodríguez. Dip. Angélica Casillas Martínez. Dip. María Alejandra Torres Novoa. (Con observación) Dip. Juan Carlos Muñoz Márquez. Dip. María Guadalupe Velázquez Díaz.»

DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL DICTAMEN PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA Y FISCALIZACIÓN, RELATIVO AL INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN PRACTICADA A LAS OPERACIONES REALIZADAS CON RECURSOS DEL RAMO 33 Y DE OBRA PÚBLICA POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2015.

»C. Presidenta del Congreso del Estado. Presente.

A esta Comisión de Hacienda y Fiscalización le fue turnado para su estudio y dictamen, el informe de resultados de la revisión practicada por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, a las operaciones realizadas con recursos del Ramo 33 y de obra pública por la administración municipal de **Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Gto., correspondientes al período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 2015.**

Una vez analizado el referido informe de resultados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 112, fracción XII y 171 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, nos permitimos rendir el siguiente:

D i c t a m e n

I. Competencia:

Las facultades de la legislatura local en materia de fiscalización de las cuentas públicas tienen su fundamento en lo dispuesto por el artículo 63 fracciones XVIII, XIX y XXVIII de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato. Estos dispositivos establecen que el Congreso del Estado tiene la facultad de fiscalizar la cuenta pública del Poder Ejecutivo, incluyendo las de las entidades y organismos de la administración pública paraestatal, las del Poder Judicial y de los organismos autónomos; así como las cuentas públicas municipales, incluyendo las de las entidades y organismos de la administración pública paramunicipal; y verificar el desempeño en el cumplimiento de los objetivos de los programas. De igual manera, puede acordar la práctica de auditorías a los sujetos de fiscalización, cuando exista causa justificada para ello, auxiliándose para el cumplimiento de dichas facultades por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato.

En el artículo 49 fracción III de la Ley de Coordinación Fiscal, se establece la facultad de los Congresos Locales a través de sus órganos de fiscalización, de verificar en la fiscalización de las cuentas públicas de los municipios, que los recursos de los fondos de aportaciones federales se hayan previsto a los fines establecidos en dicha Ley.

Asimismo, el artículo 66 fracción VIII de dicho Ordenamiento Constitucional establece que la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato deberá informar al Congreso del Estado del resultado de la revisión de la cuenta pública y demás asuntos derivados de la fiscalización, incluyendo los dictámenes, informes de resultados, comentarios y observaciones de las auditorías, constituyendo una de las fases del proceso de fiscalización

De igual forma, el artículo 8 fracción XX de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato vigente anteriormente y que es aplicable al presente caso, establece como atribución del Órgano de Fiscalización Superior rendir al Congreso del Estado, los informes derivados del ejercicio de la función de fiscalización.

Al respecto, cabe señalar que mediante el decreto número 320 de la Sexagésima Segunda Legislatura, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 154, décima tercera parte, de fecha 25 de septiembre de 2015 se emitió la nueva Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, misma que entró en vigor el 24 de diciembre de 2015. No obstante lo anterior, en su artículo Tercero Transitorio se establece que los asuntos que se encuentran en trámite o en proceso a cargo del Órgano de Fiscalización Superior a la entrada en vigor de la ley, continuarán tramitándose, por la Auditoría Superior, en los términos de la ley abrogada. Es así que en el caso que nos ocupa se aplicará lo previsto por la abrogada Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato.

En razón de lo cual, la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato abrogada establecía que el Órgano de Fiscalización Superior remitiría los informes de resultados al Congreso del Estado, a efecto de que éste realizara la declaratoria correspondiente, señalándose en el artículo 45 que el informe de resultados únicamente podrá ser observado por las dos terceras partes de los integrantes del Congreso cuando: a) En perjuicio del sujeto de fiscalización no se haya otorgado el derecho de audiencia o defensa; b) No se observen las formalidades esenciales del proceso de fiscalización; y c) Cuando se viole de manera flagrante la Ley; señalando que en tales casos el informe de resultados será devuelto al Órgano de Fiscalización Superior, a efecto de que atienda las observaciones.

Con la finalidad de que el Congreso dé cumplimiento a lo señalado en el párrafo anterior, la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato establece en su artículo 112, fracción XII que a esta Comisión de Hacienda y Fiscalización, le compete el conocimiento y dictamen de los asuntos relativos a los informes de resultados que emita la Auditoría Superior del Estado.

A efecto de cumplir con las atribuciones conferidas a esta Comisión, y en observancia a lo que establece la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato antes vigente, el presente

dictamen se ocupará exclusivamente de los aspectos que la propia Ley señala y por los cuales podría ser observado o no, el informe de resultados.

II. Antecedentes:

De conformidad con los artículos 66, fracción IV de la Constitución Política Local y 82, fracción III de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato corresponde a la Auditoría Superior del Estado, acordar y practicar auditorías conforme a su programa anual y ejecutar las que acuerde el Congreso del Estado en los términos de la fracción XXVIII del Artículo 63 de dicha Constitución.

Asimismo, el artículo 16 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, establece que la Auditoría Superior establecerá un Programa General de Fiscalización, señalando los actos y sujetos de fiscalización, los que serán objeto de auditoría o revisión conforme a los criterios y normas que se establezcan en el Reglamento.

En ejercicio de esta función, el Auditor Superior del Estado aprobó el Programa General de Fiscalización 2016 de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, anteriormente denominado Programa Anual de Auditorías del entonces Órgano de Fiscalización Superior. En dicho Programa se contempló la práctica de una revisión a las operaciones realizadas con recursos del Ramo 33 y de obra pública por la administración municipal de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Gto., correspondientes al período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 2015.

La revisión practicada conforme a lo expresado en los párrafos anteriores concluyó con la elaboración del informe de resultados que se remitió al Congreso, el cual se turnó a esta Comisión de Hacienda y Fiscalización el 11 de septiembre de 2017 para su estudio y dictamen, siendo radicado en la misma fecha.

III. Procedimiento de Revisión:

La revisión dio inicio el 12 de septiembre de 2016 y tuvo por objetivo examinar las cifras que muestra la información financiera del periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 y comprobar que la administración, control, utilización y destino de los recursos financieros, humanos y patrimoniales a cargo de la administración municipal de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Gto., fueron aplicados con transparencia y atendiendo a criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal, propiciando su óptimo aprovechamiento. Asimismo, verificar que la actividad financiera se haya realizado con estricto apego a la Ley de Ingresos para dicho Municipio y al presupuesto de egresos autorizado, ambos para el ejercicio 2015, así como a los reglamentos y demás ordenamientos legales y normativos aplicables. De igual manera, consistió en verificar que los recursos del Ramo 33 y obra pública, se aplicaron de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y demás normativa aplicable.

Con la finalidad de cumplir con lo establecido por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato aplicable al presente caso, el informe de resultados establece las herramientas técnicas y métodos que se estimaron adecuados en la práctica de la revisión, señalando que ésta se efectuó de acuerdo con las normas internacionales de auditoría, emitidas por la Federación Internacional de Contadores Públicos y adoptadas en México por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, que son aplicables al sector público, utilizando procedimientos y métodos de investigación que se consideraron convenientes a la documentación comprobatoria proporcionada por el sujeto fiscalizado y que dicha documentación está integrada de acuerdo a las bases contables emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Asimismo, el informe establece que se verificó, con base en pruebas selectivas, la evidencia que respalda las transacciones realizadas con recursos del Ramo 33 y obra pública, las que están soportadas en las cifras y revelaciones de la información financiera, atendiendo a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental; en las bases

y criterios establecidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable; en la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato; en la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato; en la Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal de 2015; en la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato; y en la Ley de Ingresos para el Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Gto., para el Ejercicio Fiscal del año 2015. Lo anterior, conforme lo disponen los ordenamientos legales aplicables en la materia, incluyendo sus bases contables, utilizadas de acuerdo a los postulados básicos de contabilidad gubernamental; la presentación de la información contable; las variaciones presupuestales; las estimaciones significativas hechas por la administración; los resultados de la gestión financiera; y la incidencia de sus operaciones en la hacienda pública del sujeto fiscalizado. Es así, que se seleccionaron para su revisión diversas obras y acciones efectuadas con recursos de los Fondos de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y los remanentes del primero de ellos; así como obras y acciones ejecutadas con recursos municipales, recursos convenidos y sus remanentes, recursos provenientes de ingresos fiscales y otros recursos. También se verificaron recursos en bancos por ejercer.

Como parte del proceso de fiscalización, en fechas 18 de abril y 2 de mayo de 2017, se dio vista de las observaciones y recomendaciones a los titulares y ex-titulares del sujeto fiscalizado que fungieron como responsables del manejo del erario público durante el periodo sujeto a revisión, concediéndoles un plazo de treinta días hábiles para aclarar, atender o solventar documentalmente las observaciones determinadas por el Órgano Técnico. Lo anterior, para dar cumplimiento a lo preceptuado por los artículos 9, fracción V, 23, fracción IV y 24 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato vigente en su momento.

Los días 25 de mayo, 1 de junio y 7 de agosto de 2017, se presentaron oficios de respuesta a las observaciones y recomendaciones derivadas de la revisión practicada, anexándose la información y documentación que se consideró suficiente para aclarar y en su caso, solventar las observaciones determinadas y atender las recomendaciones efectuadas. Una vez valorada la documentación aportada, se procedió a la elaboración del informe de resultados materia del presente dictamen.

El 16 de agosto de 2017, el informe de resultados se notificó al presidente, a la tesorera, al ex-presidente y a la ex-tesorera municipales de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Gto., para que, en su caso, hicieran valer el recurso de reconsideración previsto por el artículo 39 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato aplicable al caso que nos ocupa, haciéndoles saber que contaban con un término de cinco días hábiles para tal efecto. Con lo anterior, se dio cumplimiento a la fracción VIII del artículo 23 de la citada Ley.

Este término transcurrió sin que, dentro del mismo, se hubiere promovido el recurso de reconsideración, como consta en la razón levantada por el Auditor Superior del Estado el 28 de agosto de 2017, en la que se realiza el cómputo del término para la interposición del recurso, contado a partir de la fecha de la notificación del informe de resultados.

IV. Contenido del Informe de Resultados:

En cumplimiento a lo establecido por el artículo 43 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato aplicable al caso que nos ocupa, el informe de resultados contiene los siguientes apartados:

a) Conclusiones del proceso de fiscalización.

Por lo que se refiere a este punto, se establecen los resultados de la gestión financiera que se reflejan en los rubros de ingresos, egresos y resultado del ejercicio; la evaluación y comprobación de los ingresos y egresos; la información técnica, financiera y contable que sirvió de apoyo a la evaluación;

un análisis sintético del proceso de evaluación; y la propuesta de aprobación o desaprobación de los conceptos fiscalizados.

b) Análisis sobre el cumplimiento de los postulados básicos de contabilidad gubernamental y de los ordenamientos legales correspondientes.

En esta parte se concluye que la administración municipal de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Gto., cumplió con las bases contables aplicables a la institución y parcialmente con los postulados básicos de contabilidad gubernamental, estableciendo que se incumplieron los postulados básicos de Sustancia Económica, Revelación Suficiente, Importancia Relativa y Devengo Contable.

También se establece que se observó el incumplimiento de diversas disposiciones legales, consignándose el análisis correspondiente en el dictamen técnico jurídico al que más adelante haremos referencia.

c) Pliego de observaciones y recomendaciones derivadas de la revisión.

En esta parte se desglosan las observaciones detectadas en la revisión practicada; asimismo, se establecen las Recomendaciones Generales formuladas por el Órgano Técnico. En cada una de las observaciones realizadas, se plasman las acciones preventivas y correctivas que se deben llevar a cabo para subsanar las situaciones detectadas durante el proceso de revisión.

d) Diligencias y acciones practicadas para aclarar o solventar las observaciones y recomendaciones.

La inclusión de este punto se justifica para determinar que no se haya violentado el derecho de audiencia o defensa en perjuicio del sujeto fiscalizado; el informe concluye afirmando que se dio cabal cumplimiento a lo preceptuado por los artículos 9, fracción V, 23 fracciones IV y V y 24 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato vigente en su momento, al haberse notificado a los responsables del manejo del erario público durante el periodo sujeto a revisión, las observaciones y recomendaciones determinadas, otorgándoles el plazo que señala la Ley para aclarar, atender o solventar documentalmente dichas observaciones.

De lo anterior, derivan las observaciones que fueron solventadas, al haberse proporcionado la información y documentación que se consideró suficiente para tal efecto. Es así que, durante la etapa procesal correspondiente, se solventaron las observaciones contenidas en los siguientes numerales: 2, referente a gasto devengado; 3, relativo a registro contable del pasivo; 5, referido a difusión de obras y acciones; 8, correspondiente a calidad de obra. Contrato MDH/DDUOP/R33/FI/2014/SH-09; 9, referente a autorización de cantidades de obra. Contrato MDH/DDUOP/R33/FI/2015/SE-12; 10, relativo a autorización de cantidades de obra. Contrato MDH/DDUOP/R33/FI/2015/SE-06; 12, referido a autorización de cantidades de obra. Contrato MDH/DDUOP/R33/FI/2014/SD-04; 18, correspondiente a calidad de obra. Contrato MDH/DDUOP/R33/FI/2015/SH-C07; y 25, referente a autorización de cantidades de obra. Contrato MDH/DDUOP/PROII-CDI/R33/FI/2015/SD-01.

e) Informe sobre la situación que guardan las recomendaciones u observaciones que no fueron atendidas o solventadas.

En esta parte, se consignan las observaciones y recomendaciones en las que no se presentó respuesta alguna para su atención o aquéllas en que aun cuando se hubiera presentado información o documentación, al realizarse el análisis y valoración de la misma, los datos proporcionados no se consideraron suficientes para solventarlas o atenderlas en su totalidad, estableciéndose en cada caso las razones por las que se consideran no justificadas.

En tal sentido, se solventaron parcialmente las observaciones plasmadas en

los numerales 15, correspondiente a autorización de cantidades de obra. Contrato MDH/DDUOP/R33/FI/2014/SD-07; y 16, relativo a autorización de cantidades de obra. Contrato MDH/DDUOP/R33/FI/2015/SD-02.

No se solventaron las observaciones establecidas en los siguientes numerales: 1, relativo a obras en proceso (Activo no circulante); 4, referente a anticipo a contratistas; 6, referido a cierre administrativo. Varios contratos; 7, correspondiente a autorización de cantidades de obra. Contrato MDH/DDUOP/R33/FI/2014/SH-09; 11, relativo a autorización de cantidades de obra. Contrato MDH/DDUOP/R33/FI/2015/SE-01; 13, referente a autorización de cantidades de obra. Contrato MDH/DDUOP/R33/FI/2014/SE-39; 14, referido a autorización de cantidades de obra. Contrato MDH/DDUOP/R33/FI/2014/SD-06; 17, referente a autorización de cantidades de obra. Contrato MDH/DDUOP/R33/FI/2015/SH-C07; 19, referido a autorización de cantidades de obra. Contrato MDH/DDUOP/R33/FI/2014/SD-05; 20, correspondiente a excavación de material. Contrato MDH/DDUOP/R33/FI/2014/SD-05; 21, relativo a autorización de cantidades de obra. Contrato MDH/DDUOP/R33/FI/2015/SE-05; 22, referente a precio unitario. Contrato MDH/DDUOP/R33/FI/2015/SE-05; 23, referido a autorización de cantidades de obra. Contrato MDH/DDUOP/CUENTA PÚBLICA/2014/SD-01; y 24, correspondiente a soporte documental contrato MDH/DDUOP/CUENTA PÚBLICA/2014/SD-01.

En el apartado de Recomendaciones Generales, no se atendieron los numerales 1, referente a subejercicio de recursos FAISMDF 2015; 2, relativo a autorización de cantidades de obra. Contrato MDH/DDUOP/HABITAT/R33/FI/2014/IS-01; 3, referido a autorización de cantidades de obra. MDH/DDUOP/R33/FI/2014/SE-16; y 4, correspondiente a calidad de obra. Contrato MDH/DDUOP/R33/FI/2014/SE-16.

f) Señalamiento de las irregularidades detectadas.

En este punto se establecen las observaciones que no se solventaron en su totalidad, de las que puede presumirse la existencia de responsabilidades y que se analizan en los dictámenes de daños y perjuicios y técnico jurídico.

g) Observaciones y comentarios del Auditor Superior, derivados del proceso de fiscalización.

El Auditor Superior del Estado concluyó que la información contenida en los estados financieros y de situación presupuestal y los reportes documentales de las muestras examinadas son parcialmente razonables en sus aspectos importantes, así como el ejercicio y aplicación de los recursos que fueron objeto de la fiscalización, todo ello producto del incumplimiento de algunos postulados básicos de contabilidad gubernamental y de diversas disposiciones legales.

Señalando además que los responsables del manejo de los recursos públicos del ente fiscalizado incurrieron en actos u omisiones que hacen presumir la existencia de daños y perjuicios causados a la hacienda y patrimonio públicos del sujeto fiscalizado, como se establece en los dictámenes de daños y perjuicios y técnico jurídico, en los que se precisan las acciones que en su caso deberán promoverse.

Asimismo, se establece que en ningún momento, las notificaciones que expide el Órgano Técnico, referentes a la solventación de observaciones como resultado de la fiscalización superior, liberan a las autoridades que manejan dichos recursos, de responsabilidades futuras que pudieran surgir con motivo del ejercicio de las facultades de revisión, referente a lo que no fue materia de la revisión, que con base a lo que establece la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato antes vigente, lleven a cabo las autoridades facultadas.

También se establece que de conformidad con lo dispuesto por la ley de la materia, es deber de todo servidor público custodiar la documentación e información que conserve o a la que tenga acceso por razón de su empleo, cargo o comisión, evitar o impedir el uso, sustracción, destrucción u ocultamiento indebidos de aquélla; así como guardar

reserva de la información a que tenga acceso por su función, la que exclusivamente deberá ser usada para los fines a que esté afecta.

Finalmente, se informa que durante el proceso de auditoría y valoración de respuestas, se efectuaron recuperaciones y reintegros al patrimonio del sujeto fiscalizado.

h) Dictamen que establece la cuantía de los daños y perjuicios causados a la hacienda y patrimonio públicos del municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Gto.

En este dictamen, se establece que como resultado de la revisión y evaluación de la recaudación, manejo, custodia, control y aplicación de los recursos públicos que la administración municipal de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Gto., utilizó en el cumplimiento de los objetivos contenidos en sus presupuestos, planes y programas, se observaron irregularidades y deficiencias, de las que se desprende la existencia de daños y perjuicios causados a la hacienda y patrimonio públicos del sujeto fiscalizado.

En tal sentido se funda y motiva dicho dictamen, estableciendo los hechos de los que se deriva; la cuantía; los bienes, derechos, programas, objetivos, actos jurídicos o partidas afectadas; y los presuntos responsables.

Las observaciones de las que se desprende la existencia de daños y perjuicios son las consignadas en los numerales 7, correspondiente a autorización de cantidades de obra. Contrato MDH/DDUOP/R33/FI/2014/SH-09; 11, relativo a autorización de cantidades de obra. Contrato MDH/DDUOP/R33/FI/2015/SE-01; 13, referente a autorización de cantidades de obra. Contrato MDH/DDUOP/R33/FI/2014/SE-39; 14, referido a autorización de cantidades de obra. Contrato MDH/DDUOP/R33/FI/2014/SD-06; 15, correspondiente a autorización de cantidades de obra. Contrato MDH/DDUOP/R33/FI/2014/SD-07; 16, relativo a autorización de cantidades de obra. Contrato MDH/DDUOP/R33/FI/2015/SD-02; 17, referente a autorización de cantidades de obra. Contrato MDH/DDUOP/R33/FI/2015/SH-C07; 19, referido a autorización de cantidades de obra. Contrato MDH/DDUOP/R33/FI/2014/SD-05; 20, correspondiente a excavación de material. Contrato MDH/DDUOP/R33/FI/2014/SD-05; 21, relativo a autorización de cantidades de obra. Contrato MDH/DDUOP/R33/FI/2015/SE-05; 22, referente a precio unitario. Contrato MDH/DDUOP/R33/FI/2015/SE-05; y 23, referido a autorización de cantidades de obra. Contrato MDH/DDUOP/CUENTA PÚBLICA/2014/SD-01, determinándose en cada caso la cuantía correspondiente.

Cabe destacar la importancia de este dictamen, debido a que permitirá resarcir al sujeto fiscalizado los daños y perjuicios ocasionados, ya que con base en los artículos 44 y 52 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato antes vigente, una vez que el informe de resultados sea sancionado por el Pleno del Congreso, tendrá carácter de documento público, para que los sujetos de fiscalización por conducto de su titular o por la persona a quien éstos deleguen dicha atribución, procedan a ejercer las acciones en la vía y forma que corresponda, ante la autoridad competente, dentro del término de tres meses contado a partir del día siguiente al de la notificación del acuerdo del Pleno del Congreso, mismo que podrá duplicarse a petición del sujeto de fiscalización presentada al Congreso del Estado.

En caso de que los servidores públicos responsables de ejercer dichas acciones tuvieren intereses en conflicto, en los términos que prescribe la Ley de la materia, el ejercicio de las acciones correspondientes quedará reservado a la Auditoría Superior del Estado. Para que opere dicho supuesto, deberá informarse lo conducente a la Auditoría Superior del Estado, dentro del término de quince días hábiles, contado a partir de la fecha de notificación del acuerdo del Pleno del Congreso, justificando las causales de conflicto de intereses en las que se ubican y se abstendrán de ejercer cualquier acción.

i) Dictamen técnico jurídico.

En este dictamen se establecen las consideraciones técnico-jurídicas derivadas de las irregularidades y deficiencias detectadas en la revisión practicada, concluyendo que se desprende la existencia de responsabilidades administrativas, así como las que se derivan del dictamen de daños y perjuicios.

Las responsabilidades administrativas se desprenden de las observaciones plasmadas en los numerales: 1, relativo a obras en proceso (Activo no circulante); 2, referido a gasto devengado; 3, correspondiente a registro contable del pasivo; 4, referente a anticipo a contratistas; 5, relativo a difusión de obras y acciones; 6, referido a cierre administrativo. Varios contratos; 7, correspondiente a autorización de cantidades de obra. Contrato MDH/DDUOP/R33/FI/2014/SH-09; 8, referente a calidad de obra. Contrato MDH/DDUOP/R33/FI/2014/SH-09; 9, relativo a autorización de cantidades de obra. Contrato MDH/DDUOP/R33/FI/2015/SE-12; 10, referido a autorización de cantidades de obra. Contrato MDH/DDUOP/R33/FI/2015/SE-06; 11, correspondiente a autorización de cantidades de obra. Contrato MDH/DDUOP/R33/FI/2015/SE-01; 12, referente a autorización de cantidades de obra. Contrato MDH/DDUOP/R33/FI/2014/SD-04; 13, relativo a autorización de cantidades de obra. Contrato MDH/DDUOP/R33/FI/2014/SE-39; 14, referido a autorización de cantidades de obra. Contrato MDH/DDUOP/R33/FI/2014/SD-06; 15, correspondiente a autorización de cantidades de obra. Contrato MDH/DDUOP/R33/FI/2014/SD-07; 16, referente a autorización de cantidades de obra. Contrato MDH/DDUOP/R33/FI/2015/SD-02; 17, relativo a autorización de cantidades de obra. Contrato MDH/DDUOP/R33/FI/2015/SH-C07; 18, referido a calidad de obra. Contrato MDH/DDUOP/R33/FI/2015/SH-C07; 19, correspondiente a autorización de cantidades de obra. Contrato MDH/DDUOP/R33/FI/2014/SD-05; 20, referente a excavación de material. Contrato MDH/DDUOP/R33/FI/2014/SD-05; 21, relativo a autorización de cantidades de obra. Contrato MDH/DDUOP/R33/FI/2015/SE-05; 22, referido a precio unitario. Contrato MDH/DDUOP/R33/FI/2015/SE-05; 23, correspondiente a autorización de cantidades de obra. Contrato MDH/DDUOP/CUENTA PÚBLICA/2014/SD-01; 24, referente a soporte documental contrato MDH/DDUOP/CUENTA PÚBLICA/2014/SD-01; y 25, relativo a autorización de cantidades de obra. Contrato MDH/DDUOP/PROII-CDI/R33/FI/2015/SD-01.

Aun cuando las observaciones establecidas en los numerales 2, 3, 5, 8, 9, 10, 12, 18 y 25, se solventaron durante la etapa correspondiente, persistieron las responsabilidades administrativas que se generaron por la falta de cumplimiento oportuno de las obligaciones a cargo de servidores públicos.

Respecto a los numerales 1, referente a subejercicio de recursos FAISMDF 2015; 2, relativo a autorización de cantidades de obra. Contrato MDH/DDUOP/HABITAT/R33/FI/2014/IS-01; 3, referido a autorización de cantidades de obra. MDH/DDUOP/R33/FI/2014/SE-16; y 4, correspondiente a calidad de obra. Contrato MDH/DDUOP/R33/FI/2014/SE-16, éstos se emitieron con el carácter de recomendaciones, por lo tanto, aun cuando no se atendieron, no conllevan responsabilidad alguna.

De las observaciones consignadas en los numerales 7, correspondiente a autorización de cantidades de obra. Contrato MDH/DDUOP/R33/FI/2014/SH-09; 11, relativo a autorización de cantidades de obra. Contrato MDH/DDUOP/R33/FI/2015/SE-01; 13, referente a autorización de cantidades de obra. Contrato MDH/DDUOP/R33/FI/2014/SE-39; 14, referido a autorización de cantidades de obra. Contrato MDH/DDUOP/R33/FI/2014/SD-06; 15, correspondiente a autorización de cantidades de obra. Contrato MDH/DDUOP/R33/FI/2014/SD-07; 16, relativo a autorización de cantidades de obra. Contrato MDH/DDUOP/R33/FI/2015/SD-02; 17, referente a autorización de cantidades de obra. Contrato MDH/DDUOP/R33/FI/2015/SH-C07; 19, referido a autorización de cantidades de obra. Contrato MDH/DDUOP/R33/FI/2014/SD-05; 20, correspondiente a excavación de material. Contrato MDH/DDUOP/R33/FI/2014/SD-05; 21, relativo a autorización de cantidades de

obra. Contrato MDH/DDUOP/R33/FI/2015/SE-05; 22, referente a precio unitario. Contrato MDH/DDUOP/R33/FI/2015/SE-05; y 23, referido a autorización de cantidades de obra. Contrato MDH/DDUOP/CUENTA PÚBLICA/2014/SD-01, se refiere que se presume la existencia de las responsabilidades derivadas del dictamen de daños y perjuicios.

En esta parte cabe precisar que aun cuando en el dictamen técnico jurídico, se hace referencia a responsabilidades civiles, el 19 de julio de 2017, entró en vigor la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, la cual refiere que la autoridad competente para conocer del ejercicio de las acciones anteriormente referidas es el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato.

En cuanto a responsabilidades penales, el dictamen técnico jurídico establece que de la revisión practicada no se desprenden situaciones que hagan presumir la existencia de dichas responsabilidades.

Es así, que en este dictamen se establecen los hechos en que se fundan las responsabilidades correspondientes, los presuntos responsables, las acciones que deberán promoverse y las autoridades que resultan competentes para conocer de dichas acciones.

En tal sentido, consideramos que dicho dictamen se encuentra suficientemente fundado y motivado, a efecto de ejercer las acciones legales que procedan ante las autoridades competentes.

V. Conclusiones:

Como ya lo habíamos señalado en párrafos anteriores, el artículo 45 de la abrogada Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, establece que los informes de resultados solamente podrán ser observados por las dos terceras partes del Congreso del Estado cuando: a) En perjuicio del sujeto de fiscalización no se haya otorgado el derecho de audiencia o defensa; b) No se observen las formalidades esenciales del proceso de fiscalización; y c) Cuando se viole de manera flagrante la Ley. Señalando que en tales casos el informe de resultados será devuelto al Órgano de Fiscalización Superior, a efecto de que atienda las observaciones.

En este sentido, quienes integramos esta Comisión analizamos el informe de resultados materia del presente dictamen, considerando las hipótesis referidas en el precepto anteriormente señalado.

Como se desprende del informe de resultados, en su oportunidad el Órgano Técnico dio cumplimiento a los artículos 9, fracción V, 23 fracción IV y 24 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato aplicable al caso que nos ocupa, al haberse notificado las observaciones y recomendaciones derivadas de la revisión a los funcionarios y ex-funcionarios de la administración municipal de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Gto, que fungieron como responsables del manejo del erario público durante el periodo sujeto a revisión, concediéndoles el plazo que establece la Ley para aclarar, atender o solventar documentalmente las observaciones determinadas por el Órgano Técnico. Al respecto, se presentó la documentación que se consideró suficiente para aclarar y en su caso, solventar las observaciones determinadas y atender las recomendaciones efectuadas.

De igual manera, existe en el informe de resultados la constancia de que éste se notificó al presidente, a la tesorera, al ex-presidente y a la ex-tesorera municipales de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Gto., concediéndoles el término señalado en el artículo 23 fracción VIII de la Ley de Fiscalización Superior del Estado abrogada, a efecto de que en su caso, hicieran valer el recurso de reconsideración que prevé el artículo 39 de dicho ordenamiento legal; no habiéndose presentado en este plazo el referido medio de impugnación, tal y como se desprende de la constancia expedida por el Auditor Superior del Estado y que obra en el informe de resultados. En tal virtud, se considera que fue respetado el derecho de audiencia o defensa por parte del Órgano Técnico.

Por otra parte, del informe de resultados podemos inferir que el Órgano Técnico en el desarrollo del procedimiento de

revisión dio cumplimiento a las formalidades esenciales que la misma Ley establece para el proceso de fiscalización, al haberse practicado una revisión que estaba contemplada en el Programa General de Fiscalización 2016 de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, aprobado en su momento por el Auditor Superior. Asimismo, la revisión se efectuó conforme a las normas de auditoría aplicables al sector público, atendiendo a lo establecido en la normatividad aplicable en la materia, incluyendo las bases contables aplicables a la institución, utilizadas de acuerdo a los postulados básicos de contabilidad gubernamental.

También se dio cumplimiento de manera puntual a las fases que se establecen para los procesos de fiscalización, concluyendo con la elaboración del informe de resultados, cuyo contenido es acorde con lo que establece el artículo 43 de la abrogada Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, destacando de manera relevante los dictámenes de daños y perjuicios y técnico jurídico, que serán el soporte para que se promuevan por parte del ayuntamiento de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Gto., las acciones correspondientes, debiendo dar seguimiento la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato al ejercicio de dichas acciones.

Finalmente, no se desprende la existencia de alguna violación flagrante a la Ley, ya que el Órgano Técnico en la práctica de la revisión atendió lo preceptuado por la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato antes vigente y en general la normatividad aplicable y los postulados básicos de contabilidad gubernamental.

En razón de lo anteriormente señalado, concluimos que el informe de resultados de la revisión practicada a las operaciones realizadas con recursos del Ramo 33 y de obra pública por la administración municipal de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Gto., correspondientes al ejercicio fiscal del año 2015, debe sancionarse por el Congreso en los términos presentados por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato y proceder a su aprobación, considerando que no se presenta alguno de los supuestos contenidos en el artículo 45 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato aplicable al caso que nos ocupa, razón por la cual no podría ser observado por el Pleno del Congreso.

Por lo expuesto, con fundamento en el artículo 204 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, nos permitimos someter a la consideración de la Asamblea, la aprobación del siguiente:

A C U E R D O

Único. Con fundamento en el artículo 63 fracción XIX de la Constitución Política para el Estado, en relación con el artículo 23 fracción IX de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, abrogada mediante el decreto número 320 de la Sexagésima Segunda Legislatura, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 154, décima tercera parte, de fecha 25 de septiembre de 2015 y el artículo Tercero Transitorio de dicho decreto, se aprueba el informe de resultados formulado por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, relativo a la revisión practicada a las operaciones realizadas con recursos de los Fondos del Ramo 33, denominados Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y de obra pública, por la administración municipal de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Gto., correspondientes al período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 2015.

Con fundamento en el artículo 48 de la abrogada Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, el Auditor Superior del Estado de Guanajuato promoverá las acciones necesarias para el fincamiento de las responsabilidades administrativas determinadas en el dictamen técnico jurídico contenido en el informe de resultados.

Se ordena dar vista del informe de resultados al ayuntamiento del municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Gto., a efecto de que se atiendan las observaciones que no se solventaron en su totalidad, así como las recomendaciones contenidas en dicho informe, en el plazo que

establece el artículo 23 fracción XI de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato aplicable al presente caso. Asimismo, para que con base en los dictámenes de daños y perjuicios y técnico jurídico contenidos en el informe de resultados, se ejerzan las acciones que procedan ante la autoridad competente, en el término señalado en el artículo 52 de la citada Ley; y se proceda al fincamiento de las responsabilidades administrativas a que haya lugar, informando a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato de las acciones realizadas para ello, con objeto de que esta última realice el seguimiento correspondiente.

Remítase el presente acuerdo junto con su dictamen y el informe de resultados al ayuntamiento del municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Gto., así como a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, para los efectos de su competencia.

Guanajuato, Gto., 2 de octubre de 2017. La Comisión de Hacienda y Fiscalización. Dip. Elvira Paniagua Rodríguez. Dip. Angélica Casillas Martínez. Dip. María Alejandra Torres Novoa. Dip. Juan Carlos Muñoz Márquez. Dip. María Guadalupe Velázquez Díaz.»,

DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL DICTAMEN FORMULADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA Y FISCALIZACIÓN, RELATIVO AL INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN PRACTICADA A LAS OPERACIONES REALIZADAS CON RECURSOS DEL RAMO 33 Y DE OBRA PÚBLICA POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE MANUEL DOBLADO, GTO., CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2015.

»C. Presidenta del Congreso del Estado. Presente.

A esta Comisión de Hacienda y Fiscalización le fue turnado para su estudio y dictamen, el informe de resultados de la revisión practicada por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, a las operaciones realizadas con recursos del Ramo 33 y de obra pública por la administración municipal de **Manuel Doblado, Gto., correspondientes al período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 2015.**

Una vez analizado el referido informe de resultados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 112, fracción XII y 171 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, nos permitimos rendir el siguiente:

D i c t a m e n

I. Competencia:

Las facultades de la legislatura local en materia de fiscalización de las cuentas públicas tienen su fundamento en lo dispuesto por el artículo 63 fracciones XVIII, XIX y XXVIII de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato. Estos dispositivos establecen que el Congreso del Estado tiene la facultad de fiscalizar la cuenta pública del Poder Ejecutivo, incluyendo las de las entidades y organismos de la administración pública paraestatal, las del Poder Judicial y de los organismos autónomos; así como las cuentas públicas municipales, incluyendo las de las entidades y organismos de la administración pública paramunicipal; y verificar el desempeño en el cumplimiento de los objetivos de los programas. De igual manera, puede acordar la práctica de auditorías a los sujetos de fiscalización, cuando exista causa justificada para ello, auxiliándose para el cumplimiento de dichas facultades por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato.

En el artículo 49 fracción III de la Ley de Coordinación Fiscal, se establece la facultad de los Congresos Locales a través de sus órganos de fiscalización, de verificar en la fiscalización de las cuentas públicas de los municipios, que los recursos de los fondos de aportaciones federales se hayan previsto a los fines establecidos en dicha Ley.

Asimismo, el artículo 66 fracción VIII de dicho Ordenamiento Constitucional establece que la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato deberá informar al Congreso del Estado del resultado de la revisión de la cuenta pública y demás asuntos derivados de

la fiscalización, incluyendo los dictámenes, informes de resultados, comentarios y observaciones de las auditorías, constituyendo una de las fases del proceso de fiscalización

De igual forma, el artículo 8 fracción XX de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato vigente anteriormente y que es aplicable al presente caso, establece como atribución del Órgano de Fiscalización Superior rendir al Congreso del Estado, los informes derivados del ejercicio de la función de fiscalización.

Al respecto, cabe señalar que mediante el decreto número 320 de la Sexagésima Segunda Legislatura, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 154, décima tercera parte, de fecha 25 de septiembre de 2015 se emitió la nueva Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, misma que entró en vigor el 24 de diciembre de 2015. No obstante lo anterior, en su artículo Tercero Transitorio se establece que los asuntos que se encuentran en trámite o en proceso a cargo del Órgano de Fiscalización Superior a la entrada en vigor de la ley, continuarán tramitándose, por la Auditoría Superior, en los términos de la ley abrogada. Es así que en el caso que nos ocupa se aplicará lo previsto por la abrogada Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato.

En razón de lo cual, la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato abrogada establecía que el Órgano de Fiscalización Superior remitiría los informes de resultados al Congreso del Estado, a efecto de que éste realizara la declaratoria correspondiente, señalándose en el artículo 45 que el informe de resultados únicamente podrá ser observado por las dos terceras partes de los integrantes del Congreso cuando: a) En perjuicio del sujeto de fiscalización no se haya otorgado el derecho de audiencia o defensa; b) No se observen las formalidades esenciales del proceso de fiscalización; y c) Cuando se viole de manera flagrante la Ley; señalando que en tales casos el informe de resultados será devuelto al Órgano de Fiscalización Superior, a efecto de que atienda las observaciones.

Con la finalidad de que el Congreso dé cumplimiento a lo señalado en el párrafo anterior, la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato establece en su artículo 112, fracción XII que a esta Comisión de Hacienda y Fiscalización, le compete el conocimiento y dictamen de los asuntos relativos a los informes de resultados que emita la Auditoría Superior del Estado.

A efecto de cumplir con las atribuciones conferidas a esta Comisión, y en observancia a lo que establece la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato antes vigente, el presente dictamen se ocupará exclusivamente de los aspectos que la propia Ley señala y por los cuales podría ser observado o no, el informe de resultados.

II. Antecedentes:

De conformidad con los artículos 66, fracción IV de la Constitución Política Local y 82, fracción III de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato corresponde a la Auditoría Superior del Estado, acordar y practicar auditorías conforme a su programa anual y ejecutar las que acuerde el Congreso del Estado en los términos de la fracción XXVIII del Artículo 63 de dicha Constitución.

Asimismo, el artículo 16 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, establece que la Auditoría Superior establecerá un Programa General de Fiscalización, señalando los actos y sujetos de fiscalización, los que serán objeto de auditoría o revisión conforme a los criterios y normas que se establezcan en el Reglamento.

En ejercicio de esta función, el Auditor Superior del Estado aprobó el Programa General de Fiscalización 2016 de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, anteriormente denominado Programa Anual de Auditorías del entonces Órgano de Fiscalización Superior. En dicho Programa se contempló la práctica de una revisión a las operaciones realizadas con recursos del Ramo 33 y de obra pública por la administración municipal de Manuel Doblado, Gto., correspondientes al período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 2015.

La revisión practicada conforme a lo expresado en los párrafos anteriores concluyó con la elaboración del informe de resultados que se remitió al Congreso, el cual se turnó a esta Comisión de Hacienda y Fiscalización el 11 de septiembre de 2017 para su estudio y dictamen, siendo radicado en la misma fecha.

III. Procedimiento de Revisión:

La revisión dio inicio el 13 de octubre de 2016 y tuvo por objetivo examinar las cifras que muestra la información financiera del periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 y comprobar que la administración, control, utilización y destino de los recursos financieros, humanos y patrimoniales a cargo de la administración municipal de Manuel Doblado, Gto., fueron aplicados con transparencia y atendiendo a criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal, propiciando su óptimo aprovechamiento. Asimismo, verificar que la actividad financiera se haya realizado con estricto apego a la Ley de Ingresos para dicho Municipio y al presupuesto de egresos autorizado, ambos para el ejercicio 2015, así como a los reglamentos y demás ordenamientos legales y normativos aplicables. De igual manera, consistió en verificar que los recursos del Ramo 33 y obra pública, se aplicaron de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y demás normativa aplicable.

Con la finalidad de cumplir con lo establecido por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato aplicable al presente caso, el informe de resultados establece las herramientas técnicas y métodos que se estimaron adecuados en la práctica de la revisión, señalando que ésta se efectuó de acuerdo con las normas internacionales de auditoría, emitidas por la Federación Internacional de Contadores Públicos y adoptadas en México por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, que son aplicables al sector público, utilizando procedimientos y métodos de investigación que se consideraron convenientes a la documentación comprobatoria proporcionada por el sujeto fiscalizado y que dicha documentación está integrada de acuerdo a las bases contables emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Asimismo, el informe establece que se verificó, con base en pruebas selectivas, la evidencia que respalda las transacciones realizadas con recursos del Ramo 33 y obra pública, las que están soportadas en las cifras y revelaciones de la información financiera, atendiendo a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental; en las bases y criterios establecidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable; en la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato; en la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato; en la Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal de 2015; en la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato; y en la Ley de Ingresos para el Municipio de Manuel Doblado, Gto., para el Ejercicio Fiscal del año 2015. Lo anterior, conforme lo disponen los ordenamientos legales aplicables en la materia, incluyendo sus bases contables, utilizadas de acuerdo a los postulados básicos de contabilidad gubernamental; la presentación de la información contable; las variaciones presupuestales; las estimaciones significativas hechas por la administración; los resultados de la gestión financiera; y la incidencia de sus operaciones en la hacienda pública del sujeto fiscalizado. Es así, que se seleccionaron para su revisión diversas obras y acciones efectuadas con recursos de los Fondos de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y sus remanentes; así como obras y acciones ejecutadas con recursos convenidos con la Federación y el Estado y sus remanentes. También se verificaron recursos en bancos por ejercer.

Como parte del proceso de fiscalización, en fechas 31 de marzo y 3 de abril de 2017, se dio vista de las observaciones y recomendaciones a los titulares y ex-titulares del sujeto fiscalizado que fungieron como responsables del manejo del erario público durante el periodo sujeto a revisión,

concediéndoles un plazo de treinta días hábiles para aclarar, atender o solventar documentalmente las observaciones determinadas por el Órgano Técnico. Lo anterior, para dar cumplimiento a lo preceptuado por los artículos 9, fracción V, 23, fracción IV y 24 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato vigente en su momento.

Los días 18, 24 y 26 de mayo, 7 y 9 de junio de 2017, se presentaron oficios de respuesta a las observaciones y recomendaciones derivadas de la revisión practicada, anexándose la información y documentación que se consideró suficiente para aclarar y en su caso, solventar las observaciones determinadas y atender las recomendaciones efectuadas. Una vez valorada la documentación aportada, se procedió a la elaboración del informe de resultados materia del presente dictamen.

El 2 de agosto de 2017, el informe de resultados se notificó al presidente, al tesorero, al ex-presidente y al ex-tesorero municipales de Manuel Doblado, Gto., para que, en su caso, hicieran valer el recurso de reconsideración previsto por el artículo 39 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato aplicable al caso que nos ocupa, haciéndoles saber que contaban con un término de cinco días hábiles para tal efecto. Con lo anterior, se dio cumplimiento a la fracción VIII del artículo 23 de la citada Ley.

El 9 de agosto de 2017, dentro del plazo que prevé el referido artículo 39, el ex-presidente municipal de Manuel Doblado, Gto., interpuso recurso de reconsideración en contra del informe de resultados de la revisión practicada a las operaciones realizadas con recursos del Ramo 33 y de obra pública por la administración municipal de Manuel Doblado, Gto., correspondientes al ejercicio fiscal del año 2015, siendo admitido dicho recurso, al colmarse los requisitos de procedibilidad previstos por el artículo 39 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato vigente en su momento.

Una vez tramitado el recurso, el Auditor Superior el 23 de agosto de 2017 emitió la resolución correspondiente, a la cual haremos referencia en un apartado posterior, mismo que se notificó al ex-presidente municipal de Manuel Doblado, Gto., el 29 de agosto de 2017.

IV. Contenido del Informe de Resultados:

En cumplimiento a lo establecido por el artículo 43 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato aplicable al caso que nos ocupa, el informe de resultados contiene los siguientes apartados:

a) Conclusiones del proceso de fiscalización.

Por lo que se refiere a este punto, se establecen los resultados de la gestión financiera que se reflejan en los rubros de ingresos, egresos y resultado del ejercicio; la evaluación y comprobación de los ingresos y egresos; la información técnica, financiera y contable que sirvió de apoyo a la evaluación; un análisis sintético del proceso de evaluación; y la propuesta de aprobación o desaprobación de los conceptos fiscalizados.

b) Análisis sobre el cumplimiento de los postulados básicos de contabilidad gubernamental y de los ordenamientos legales correspondientes.

En esta parte se concluye que la administración municipal de Manuel Doblado, Gto., cumplió con las bases contables aplicables a la institución y con los postulados básicos de contabilidad gubernamental.

También se establece que se observó el incumplimiento de diversas disposiciones legales, consignándose el análisis correspondiente en el dictamen técnico jurídico al que más adelante haremos referencia.

c) Pliego de observaciones y recomendaciones derivadas de la revisión.

En esta parte se desglosan las observaciones detectadas en la revisión practicada; asimismo, se establecen las Recomendaciones formuladas por el Órgano Técnico. En cada una de las observaciones realizadas, se plasman las acciones preventivas y correctivas que se deben llevar a cabo para

subsanar las situaciones detectadas durante el proceso de revisión.

d) Diligencias y acciones practicadas para aclarar o solventar las observaciones y recomendaciones.

La inclusión de este punto se justifica para determinar que no se haya violentado el derecho de audiencia o defensa en perjuicio del sujeto fiscalizado; el informe concluye afirmando que se dio cabal cumplimiento a lo preceptuado por los artículos 9, fracción V, 23 fracciones IV y V y 24 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato vigente en su momento, al haberse notificado a los responsables del manejo del erario público durante el periodo sujeto a revisión, las observaciones y recomendaciones determinadas, otorgándoles el plazo que señala la Ley para aclarar, atender o solventar documentalmente dichas observaciones.

De lo anterior, derivan las observaciones que fueron solventadas, al haberse proporcionado la información y documentación que se consideró suficiente para tal efecto. Es así que, durante la etapa procesal correspondiente, se solventaron las observaciones contenidas en los numerales 5, referente a integración tarjeta de precio unitario. Contrato DOP/R33F2 2015/2015-07; 8, relativo a autorización de ejecución de obra. Contrato DOP/R33 F1-2015/2015-49; 9, correspondiente a autorización de cantidades de obra. Contrato DOP-FOPEDEP-2014/057; y 10, referido a insumos innecesarios. Contrato DOP-FOPEDEP-2014/057.

En el apartado de Recomendaciones, se atendió el numeral 02, relativo a autorización de cantidades de obra. DOP/R33 F1 2014/2014-018.

e) Informe sobre la situación que guardan las recomendaciones u observaciones que no fueron atendidas o solventadas.

En esta parte, se consignan las observaciones y recomendaciones en las que no se presentó respuesta alguna para su atención o aquéllas en que aun cuando se hubiera presentado información o documentación, al realizarse el análisis y valoración de la misma, los datos proporcionados no se consideraron suficientes para solventarlas o atenderlas en su totalidad, estableciéndose en cada caso las razones por las que se consideran no justificadas.

En tal sentido, se solventaron parcialmente las observaciones plasmadas en los numerales 2, correspondiente a falta de soporte documental; 4, relativo a soporte documental. Contrato DOP/PISBCC 2015/2015-56; y 11, referente a autorización de cantidades de obra. Contrato DOP/R33 F1 2014/2015-054.

No se solventaron las observaciones establecidas en los numerales 1, referido a autorización de cantidades de obra. Contrato DOP/CODE 2015/2015-042; 3, referente a cierre administrativo de obra. Varios Contratos; 6, referido a autorización de cantidades de obra. Contrato DOP/R33 F1-2015/2015-17; y 7, correspondiente a autorización de ejecución de obra. Contrato DOP/R33F1-2015/2015-18.

En el apartado de Recomendaciones, no se atendieron los numerales 01, referido a autorización de cantidades de obra. DOP/R33F1 2014/2015-15; 03, correspondiente a calidad de obra. DOP/EST ALBERCA 2015/2015-045; 04, relativo a autorización de cantidades de obra. DOP/EST ALBERCA 2015/2015-045; y 05, referente a soporte documental DOP/PISBCC 2015/2015-58.

f) Señalamiento de las irregularidades detectadas.

En este punto se establecen las observaciones que no se solventaron en su totalidad, de las que puede presumirse la existencia de responsabilidades y que se analizan en los dictámenes de daños y perjuicios y técnico jurídico.

g) Observaciones y comentarios del Auditor Superior, derivados del proceso de fiscalización.

El Auditor Superior del Estado concluyó que la información contenida en los

estados financieros y de situación presupuestal y los reportes documentales de las muestras examinadas son parcialmente razonables en sus aspectos importantes, así como el ejercicio y aplicación de los recursos que fueron objeto de la fiscalización, todo ello producto del cumplimiento de los postulados básicos de contabilidad gubernamental y del incumplimiento de diversas disposiciones legales.

Señalando además que los responsables del manejo de los recursos públicos del ente fiscalizado incurrieron en actos u omisiones que hacen presumir la existencia de daños y perjuicios causados a la hacienda y patrimonio públicos del sujeto fiscalizado, como se establece en los dictámenes de daños y perjuicios y técnico jurídico, en los que se precisan las acciones que en su caso deberán promoverse.

Asimismo, se establece que en ningún momento, las notificaciones que expide el Órgano Técnico, referentes a la solventación de observaciones como resultado de la fiscalización superior, liberan a las autoridades que manejan dichos recursos, de responsabilidades futuras que pudieran surgir con motivo del ejercicio de las facultades de revisión, referente a lo que no fue materia de la revisión, que con base a lo que establece la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato antes vigente, lleven a cabo las autoridades facultadas.

También se refiere que, de conformidad con lo dispuesto por la ley de la materia, es deber de todo servidor público custodiar la documentación e información que conserve o a la que tenga acceso por razón de su empleo, cargo o comisión, evitar o impedir el uso, sustracción, destrucción u ocultamiento indebidos de aquélla; así como guardar reserva de la información a que tenga acceso por su función, la que exclusivamente deberá ser usada para los fines a que esté afecta.

Finalmente, se informa que durante el proceso de auditoría y valoración de respuestas, se efectuaron recuperaciones al patrimonio del sujeto fiscalizado.

h) Dictamen que establece la cuantía de los daños y perjuicios causados a la hacienda y patrimonio públicos del municipio de Manuel Doblado, Gto.

En este dictamen, se establece que como resultado de la revisión y evaluación de la recaudación, manejo, custodia, control y aplicación de los recursos públicos que la administración municipal de Manuel Doblado, Gto., utilizó en el cumplimiento de los objetivos contenidos en sus presupuestos, planes y programas, se observaron irregularidades y deficiencias, de las que se desprende la existencia de daños y perjuicios causados a la hacienda y patrimonio públicos del sujeto fiscalizado.

En tal sentido se funda y motiva dicho dictamen, estableciendo los hechos de los que se deriva; la cuantía; los bienes, derechos, programas, objetivos, actos jurídicos o partidas afectadas; y los presuntos responsables.

Las observaciones de las que se desprende la existencia de daños y perjuicios son las consignadas en los numerales 1, referido a autorización de cantidades de obra. Contrato DOP/CODE 2015/2015-042; 4, relativo a soporte documental. Contrato DOP/PISBCC 2015/2015-56; 6, referente a autorización de cantidades de obra. Contrato DOP/R33 F1-2015/2015-17; 7, correspondiente a autorización de ejecución de obra. Contrato DOP/R33F1-2015/2015-18; y 11, referido a autorización de cantidades de obra. Contrato DOP/R33 F1 2014/2015-054, determinándose en cada caso la cuantía correspondiente.

Cabe destacar la importancia de este dictamen, debido a que permitirá resarcir al sujeto fiscalizado los daños y perjuicios ocasionados, ya que con base en los artículos 44 y 52 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato antes vigente, una vez que el informe de resultados sea sancionado por el Pleno del Congreso, tendrá carácter de documento público, para que los sujetos de fiscalización por conducto de su titular o por la persona a quien éstos deleguen dicha atribución, procedan a ejercer las acciones en la vía y forma que corresponda, ante la autoridad competente, dentro del término de tres meses contado a partir del día siguiente al de la notificación del acuerdo del Pleno del Congreso, mismo que podrá duplicarse a

petición del sujeto de fiscalización presentada al Congreso del Estado.

En caso de que los servidores públicos responsables de ejercer dichas acciones tuvieren intereses en conflicto, en los términos que prescribe la Ley de la materia, el ejercicio de las acciones correspondientes quedará reservado a la Auditoría Superior del Estado. Para que opere dicho supuesto, deberá informarse lo conducente a la Auditoría Superior del Estado, dentro del término de quince días hábiles, contado a partir de la fecha de notificación del acuerdo del Pleno del Congreso, justificando las causales de conflicto de intereses en las que se ubican y se abstendrán de ejercer cualquier acción.

i) Dictamen técnico jurídico.

En este dictamen se establecen las consideraciones técnico-jurídicas derivadas de las irregularidades y deficiencias detectadas en la revisión practicada, concluyendo que se desprende la existencia de responsabilidades administrativas, así como las que se derivan del dictamen de daños y perjuicios.

Las responsabilidades administrativas se derivan de las observaciones plasmadas en los numerales: 1, referido a autorización de cantidades de obra. Contrato DOP/CODE 2015/2015-042; 2, correspondiente a falta de soporte documental; 3, referente a cierre administrativo de obra. Varios Contratos; 4, relativo a soporte documental. Contrato DOP/PISBCC 2015/2015-56; 5, referido a integración tarjeta de precio unitario. Contrato DOP/R33F2 2015/2015-07; 6, correspondiente a autorización de cantidades de obra. Contrato DOP/R33 F1-2015/2015-17; 7, referente a autorización de ejecución de obra. Contrato DOP/R33F1-2015/2015-18; 9, relativo a autorización de cantidades de obra. Contrato DOP-FOPEDEP-2014/057; 10, referido a insumos innecesarios. Contrato DOP-FOPEDEP-2014/057; y 11, correspondiente a autorización de cantidades de obra. Contrato DOP/R33 F1 2014/2015-054.

Aun cuando las observaciones establecidas en los numerales 5, 9 y 10, se solventaron durante la etapa correspondiente, persistieron las responsabilidades administrativas que se generaron por la falta de cumplimiento oportuno de las obligaciones a cargo de servidores públicos.

Respecto a los numerales 01, referido a autorización de cantidades de obra. DOP/R33F1 2014/2015-15; 03, correspondiente a calidad de obra. DOP/EST ALBERCA 2015/2015-045; 04, relativo a autorización de cantidades de obra. DOP/EST ALBERCA 2015/2015-045; y 05, referente a soporte documental DOP/PISBCC 2015/2015-58, éstos se emitieron con el carácter de recomendaciones, por lo tanto, aun cuando no se atendieron, no conllevan responsabilidad alguna.

De las observaciones consignadas en los numerales 1, referido a autorización de cantidades de obra. Contrato DOP/CODE 2015/2015-042; 4, relativo a soporte documental. Contrato DOP/PISBCC 2015/2015-56; 6, referente a autorización de cantidades de obra. Contrato DOP/R33 F1-2015/2015-17; 7, correspondiente a autorización de ejecución de obra. Contrato DOP/R33F1-2015/2015-18; y 11, referido a autorización de cantidades de obra. Contrato DOP/R33 F1 2014/2015-054, se refiere que se presume la existencia de las responsabilidades derivadas del dictamen de daños y perjuicios.

En esta parte cabe precisar que aun cuando en el dictamen técnico jurídico, se hace referencia a responsabilidades civiles, el 19 de julio de 2017, entró en vigor la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, la cual refiere que la autoridad competente para conocer del ejercicio de las acciones anteriormente referidas es el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato.

En cuanto a responsabilidades penales, el dictamen técnico jurídico establece que de la revisión practicada no se desprenden situaciones que hagan presumir la existencia de dichas responsabilidades.

Es así, que en este dictamen se establecen los hechos en que se fundan las responsabilidades correspondientes, los presuntos responsables, las acciones que deberán promoverse y las autoridades que

resultan competentes para conocer de dichas acciones.

En tal sentido, consideramos que dicho dictamen se encuentra suficientemente fundado y motivado, a efecto de ejercer las acciones legales que procedan ante las autoridades competentes.

j) Recurso de Reconsideración.

El 9 de agosto de 2017, dentro del plazo que prevé el artículo 39 de la abrogada Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, el ex-presidente municipal de Manuel Doblado, Gto., interpuso recurso de reconsideración en contra del informe de resultados de la revisión practicada a las operaciones realizadas con recursos del Ramo 33 y de obra pública por la administración municipal de Manuel Doblado, Gto., correspondientes al ejercicio fiscal del año 2015, concretamente en contra de las observaciones contenidas en los puntos 1, referido a autorización de cantidades de obra. Contrato DOP/CODE 2015/2015-042; 2, correspondiente a falta de soporte documental; 3, referente a cierre administrativo de obra. Varios Contratos; 6, relativo a autorización de cantidades de obra. Contrato DOP/R33 F1-2015/2015-17; 7, referido a autorización de ejecución de obra. Contrato DOP/R33F1-2015/2015-18; y 10, correspondiente a insumos innecesarios. Contrato DOP-FOPEDEP-2014/057, así como de la recomendación plasmada en el numeral 03, referente a calidad de obra. DOP/EST ALBERCA 2015/2015-045, mismos que se encuentran relacionados con los Capítulos III, denominado Pliego de Observaciones y Recomendaciones; VIII, denominado Dictamen de Daños y Perjuicios y IX, denominado Dictamen Técnico Jurídico, contenidos en el Informe de Resultados.

En tal sentido, mediante acuerdo de fecha 10 de agosto de 2017, emitido por el Auditor Superior del Estado, se dio entrada al recurso de reconsideración, al colmarse los requisitos de procedibilidad previstos por el artículo 39 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato abrogada, ordenando la integración del expediente respectivo y el registro correspondiente, siendo radicado el 11 de agosto de 2017.

Una vez tramitado el recurso, el Auditor Superior del Estado, el 23 de agosto de 2017 emitió la resolución correspondiente, determinándose respecto a las observaciones plasmadas en los numerales 1 y 2, que las pruebas aportadas por el recurrente resultaron insuficientes para modificar el sentido de su valoración, como se argumenta en el considerando sexto de la resolución. En razón de lo anterior, se confirmó el sentido de la valoración de las observaciones, confirmando los daños y perjuicios y las presuntas responsabilidades determinadas en los puntos 1.1 del Capítulo VIII, denominado Dictamen de Daños y Perjuicios; 1.1, 1.2 y 2.1 del Capítulo IX, denominado Dictamen Técnico Jurídico.

En cuanto a las observaciones establecidas en los numerales 3, 6, 7 y 10, se resolvió que los agravios hechos valer por el recurrente resultaron infundados para modificar su valoración, de conformidad con lo referido en el considerando sexto de la resolución. En razón de lo anterior, se confirmó el sentido de la valoración de las observaciones, confirmando los daños y perjuicios y las presuntas responsabilidades determinadas en los puntos 1.3 y 1.4 del Capítulo VIII, denominado Dictamen de Daños y Perjuicios; 3.1, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2 y 9.1 del Capítulo IX, denominado Dictamen Técnico Jurídico.

Por lo que hace a la solicitud formulada por el recurrente, respecto a las observaciones establecidas en los numerales 6 y 7, a efecto de que se requiera a la Comisión Nacional del Agua, para que manifieste el estatus de los expedientes relativos a las citadas observaciones, la misma se consideró improcedente. Aunado a lo anterior, la Auditoría Superior del Estado debe resolver el recurso de reconsideración con los medios de prueba efectivamente aportados y con los argumentos expuestos por el recurrente, para cumplir en tiempo y forma con el plazo previsto para los procesos de fiscalización, por lo que no sería posible esperar, en su caso, a que la Comisión Nacional del Agua de respuesta a la solicitud planteada por el recurrente.

Finalmente, en el caso de la recomendación prevista en el punto 03, se concluyó que el reporte fotográfico aportado

por el recurrente resultó insuficiente para dar por atendida la recomendación, por los argumentos que se refieren en el considerando sexto de la resolución. En razón de lo anterior, se confirmó el sentido de la valoración de la recomendación como no atendida.

La referida resolución se notificó al ex-presidente municipal de Manuel Doblado, Gto., el 29 de agosto de 2017.

V. Conclusiones:

Como ya lo habíamos señalado en párrafos anteriores, el artículo 45 de la abrogada Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, establece que los informes de resultados solamente podrán ser observados por las dos terceras partes del Congreso del Estado cuando: a) En perjuicio del sujeto de fiscalización no se haya otorgado el derecho de audiencia o defensa; b) No se observen las formalidades esenciales del proceso de fiscalización; y c) Cuando se viole de manera flagrante la Ley. Señalando que en tales casos el informe de resultados será devuelto al Órgano de Fiscalización Superior, a efecto de que atienda las observaciones.

En este sentido, quienes integramos esta Comisión analizamos el informe de resultados materia del presente dictamen, considerando las hipótesis referidas en el precepto anteriormente señalado.

Como se desprende del informe de resultados, en su oportunidad el Órgano Técnico dio cumplimiento a los artículos 9, fracción V, 23 fracción IV y 24 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato aplicable al caso que nos ocupa, al haberse notificado las observaciones y recomendaciones derivadas de la revisión a los funcionarios y ex-funcionarios de la administración municipal de Manuel Doblado, Gto, que fungieron como responsables del manejo del erario público durante el periodo sujeto a revisión, concediéndoles el plazo que establece la Ley para aclarar, atender o solventar documentalmente las observaciones determinadas por el Órgano Técnico. Al respecto, se presentó la documentación que se consideró suficiente para aclarar y en su caso, solventar las observaciones determinadas y atender las recomendaciones efectuadas.

De igual manera, existe en el informe de resultados la constancia de que éste se notificó al presidente, al tesorero, al ex-presidente y al ex-tesorero municipales de Manuel Doblado, Gto., concediéndoles el término señalado en el artículo 23 fracción VIII de la Ley de Fiscalización Superior del Estado abrogada, a efecto de que en su caso, hicieran valer el recurso de reconsideración que prevé el artículo 39 de dicho ordenamiento legal; presentándose el referido medio de impugnación, el cual fue tramitado por el Órgano Técnico, emitiéndose por parte del Auditor Superior del Estado la resolución correspondiente, misma que consideramos se encuentra suficientemente fundada y motivada y que en su oportunidad se notificó al ex-presidente municipal de Manuel Doblado, Gto. En tal virtud, se considera que fue respetado el derecho de audiencia o defensa por parte del Órgano Técnico.

Por otra parte, del informe de resultados podemos inferir que el Órgano Técnico en el desarrollo del procedimiento de revisión dio cumplimiento a las formalidades esenciales que la misma Ley establece para el proceso de fiscalización, al haberse practicado una revisión que estaba contemplada en el Programa General de Fiscalización 2016 de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, aprobado en su momento por el Auditor Superior. Asimismo, la revisión se efectuó conforme a las normas de auditoría aplicables al sector público, atendiendo a lo establecido en la normatividad aplicable en la materia, incluyendo las bases contables aplicables a la institución, utilizadas de acuerdo a los postulados básicos de contabilidad gubernamental.

También se dio cumplimiento de manera puntual a las fases que se establecen para los procesos de fiscalización, concluyendo con la elaboración del informe de resultados, cuyo contenido es acorde con lo que establece el artículo 43 de la abrogada Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, destacando de manera relevante los dictámenes de daños y perjuicios y técnico jurídico, que serán el soporte para que se promuevan por parte del ayuntamiento de

Manuel Doblado, Gto., las acciones correspondientes, debiendo dar seguimiento la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato al ejercicio de dichas acciones.

Finalmente, no se desprende la existencia de alguna violación flagrante a la Ley, ya que el Órgano Técnico en la práctica de la revisión atendió lo preceptuado por la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato antes vigente y en general la normatividad aplicable y los postulados básicos de contabilidad gubernamental.

En razón de lo anteriormente señalado, concluimos que el informe de resultados de la revisión practicada a las operaciones realizadas con recursos del Ramo 33 y de obra pública por la administración municipal de Manuel Doblado, Gto., correspondientes al ejercicio fiscal del año 2015, debe sancionarse por el Congreso en los términos presentados por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato y proceder a su aprobación, considerando que no se presenta alguno de los supuestos contenidos en el artículo 45 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato aplicable al caso que nos ocupa, razón por la cual no podría ser observado por el Pleno del Congreso.

Por lo expuesto, con fundamento en el artículo 204 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, nos permitimos someter a la consideración de la Asamblea, la aprobación del siguiente:

A C U E R D O

Único. Con fundamento en el artículo 63 fracción XIX de la Constitución Política para el Estado, en relación con el artículo 23 fracción IX de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, abrogada mediante el decreto número 320 de la Sexagésima Segunda Legislatura, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 154, décima tercera parte, de fecha 25 de septiembre de 2015 y el artículo Tercero Transitorio de dicho decreto, se aprueba el informe de resultados formulado por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, relativo a la revisión practicada a las operaciones realizadas con recursos de los Fondos del Ramo 33, denominados Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y de obra pública, por la administración municipal de Manuel Doblado, Gto., correspondientes al período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 2015.

Con fundamento en el artículo 48 de la abrogada Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, el Auditor Superior del Estado de Guanajuato promoverá las acciones necesarias para el fincamiento de las responsabilidades administrativas determinadas en el dictamen técnico jurídico contenido en el informe de resultados.

Se ordena dar vista del informe de resultados al ayuntamiento del municipio de Manuel Doblado, Gto., a efecto de que se atiendan las observaciones que no se solventaron en su totalidad, así como las recomendaciones contenidas en dicho informe, en el plazo que establece el artículo 23 fracción XI de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato aplicable al presente caso. Asimismo, para que con base en los dictámenes de daños y perjuicios y técnico jurídico contenidos en el informe de resultados, se ejerzan las acciones que procedan ante la autoridad competente, en el término señalado en el artículo 52 de la citada Ley; y se proceda al fincamiento de las responsabilidades administrativas a que haya lugar, informando a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato de las acciones realizadas para ello, con objeto de que esta última realice el seguimiento correspondiente.

Remítase el presente acuerdo junto con su dictamen y el informe de resultados al ayuntamiento del municipio de Manuel Doblado, Gto., así como a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, para los efectos de su competencia.

Guanajuato, Gto., 2 de octubre de 2017. La Comisión de Hacienda y Fiscalización. Dip. Elvira Paniagua Rodríguez. Dip. Angélica Casillas Martínez. Dip. María Alejandra Torres Novoa. (Con observación) Dip. Juan Carlos Muñoz Márquez. Dip. María Guadalupe Velázquez Díaz.»

DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL DICTAMEN PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA Y FISCALIZACIÓN, RELATIVO AL INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN PRACTICADA A LAS OPERACIONES REALIZADAS CON RECURSOS DEL RAMO 33 Y DE OBRA PÚBLICA POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE IRAPUATO, GTO., CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2016.

»C. Presidenta del Congreso del Estado. Presente.

A esta Comisión de Hacienda y Fiscalización le fue turnado para su estudio y dictamen, el **informe de resultados de la revisión practicada por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, a las operaciones realizadas con recursos del Ramo 33 y de obra pública por la administración municipal de Irapuato, Gto., correspondientes al período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 2016.**

Una vez analizado el referido informe de resultados, con fundamento en los artículos 112, fracción XII y 171 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, nos permitimos rendir el siguiente:

D i c t a m e n

I. Competencia:

Las facultades de la legislatura local en materia de fiscalización de las cuentas públicas tienen su fundamento en lo dispuesto por el artículo 63 fracciones XVIII, XIX y XXVIII de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato. Estos dispositivos establecen que el Congreso del Estado tiene la facultad de fiscalizar la cuenta pública del Poder Ejecutivo, incluyendo las de las entidades y organismos de la administración pública paraestatal, las del Poder Judicial y de los organismos autónomos; así como las cuentas públicas municipales, incluyendo las de las entidades y organismos de la administración pública paramunicipal; y verificar el desempeño en el cumplimiento de los objetivos de los programas. De igual manera, puede acordar la práctica de auditorías a los sujetos de fiscalización, cuando exista causa justificada para ello, auxiliándose para el cumplimiento de dichas facultades por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato.

En el artículo 49 fracción III de la Ley de Coordinación Fiscal, se establece la facultad de los Congresos Locales a través de sus órganos de fiscalización, de verificar en la fiscalización de las cuentas públicas de los municipios, que los recursos de los fondos de aportaciones federales se hayan previsto a los fines establecidos en dicha Ley.

Asimismo, el artículo 66 fracción VIII de dicho Ordenamiento Constitucional establece que la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato deberá informar al Congreso del Estado del resultado de la revisión de la cuenta pública y demás asuntos derivados de la fiscalización, incluyendo los dictámenes, informes de resultados, comentarios y observaciones de las auditorías, constituyendo una de las fases del proceso de fiscalización.

El artículo 82, fracción XXIV de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato establece como atribución del Auditor Superior, rendir al Congreso, los informes derivados del ejercicio de la función de fiscalización.

En razón de lo cual, la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato establece que la Auditoría Superior debe remitir los informes de resultados al Congreso del Estado, a efecto de que éste realice la declaratoria correspondiente, señalándose en el artículo 38 que el informe de resultados únicamente podrá ser observado por las dos terceras partes de los integrantes del Congreso cuando: a) En perjuicio del sujeto de fiscalización no se haya otorgado el derecho de audiencia o defensa; b) Cuando no se hayan valorado las documentales aportadas por el sujeto de fiscalización durante el procedimiento de fiscalización hasta la notificación del informe de resultados; y c) No se observen las formalidades esenciales del proceso de fiscalización.

Con la finalidad de que el Congreso dé cumplimiento a lo señalado en el párrafo

anterior, la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato establece en su artículo 112, fracción XII que, a esta Comisión de Hacienda y Fiscalización, le compete el conocimiento y dictamen de los asuntos relativos a los informes de resultados que emita la Auditoría Superior del Estado.

A efecto de cumplir con las atribuciones conferidas a esta Comisión, y en observancia a lo que establece la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, el presente dictamen se ocupará exclusivamente de los aspectos que la propia Ley señala y por los cuales podría ser observado o no, el informe de resultados.

II. Antecedentes:

De conformidad con los artículos 66, fracción IV de la Constitución Política Local y 82, fracción III de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, corresponde a la Auditoría Superior del Estado, acordar y practicar auditorías conforme a su programa anual y ejecutar las que acuerde el Congreso del Estado en los términos de la fracción XXVIII del Artículo 63 de dicha Constitución.

Asimismo, el artículo 16 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, establece que la Auditoría Superior establecerá un Programa General de Fiscalización, señalando los actos y sujetos de fiscalización, los que serán objeto de auditoría o revisión conforme a los criterios y normas que se establezcan en el Reglamento.

En ejercicio de esta función, el Auditor Superior del Estado aprobó el Programa General de Fiscalización 2017 de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato. En dicho Programa se contempló la práctica de una revisión a las operaciones realizadas con recursos del Ramo 33 y de obra pública por la administración municipal de Irapuato, Gto., correspondientes al período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 2016.

La revisión practicada conforme a lo expresado en los párrafos anteriores concluyó con la elaboración del informe de resultados que se remitió al Congreso, el cual se turnó a esta Comisión de Hacienda y Fiscalización el 11 de septiembre de 2017 para su estudio y dictamen, siendo radicado en la misma fecha.

III. Procedimiento de Revisión:

La revisión dio inicio el 7 de marzo de 2017 y tuvo por objetivo verificar que los recursos del Ramo 33 se registraron, administraron, ejercieron y destinaron, de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y demás normativa aplicable. Asimismo, verificar que las inversiones en obra pública se realizaron de acuerdo a las leyes, normas, reglamentos y demás disposiciones legales que la regulan.

Con la finalidad de cumplir con lo establecido por los artículos 6 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, 3 y 4 del Reglamento de dicha Ley, el informe de resultados establece los procedimientos y métodos de auditoría que se estimaron adecuados en la práctica de la revisión, señalando que ésta se efectuó de acuerdo con las normas internacionales de auditoría, adoptadas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, que son aplicables al sector público, las que requieren que la auditoría sea planeada, realizada y supervisada, para obtener una seguridad razonable de que las cifras presentadas en la información contable y presupuestal revisada, no contienen errores importantes y que están integradas de acuerdo a las bases contables emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Asimismo, el informe establece que se verificó, con base en pruebas selectivas, la evidencia que respalda las transacciones realizadas con recursos del Ramo General 33 y obra pública, las que están soportadas en las cifras y revelaciones de la información financiera, atendiendo a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental; en las bases y criterios establecidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable; en la Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal de 2016; en la Ley de Ingresos para el Municipio de Irapuato, Gto., para el Ejercicio Fiscal del año 2016; en la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato; en la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato; y en la Ley Orgánica

Municipal para el Estado de Guanajuato. Lo anterior, conforme lo disponen los ordenamientos aplicables en la materia, incluyendo las bases contables aplicables al sujeto fiscalizado, utilizadas de acuerdo a los postulados básicos de contabilidad gubernamental; la presentación de la información contable; las variaciones presupuestales; las estimaciones significativas hechas por la administración; los resultados de la gestión financiera; y la incidencia de sus operaciones en la hacienda pública del sujeto fiscalizado. Es así, que se seleccionaron para su revisión diversas obras y acciones efectuadas con recursos de los Fondos de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y sus remanentes; y obras y acciones ejecutadas con recursos derivados de convenios federales y estatales y sus remanentes y de remanentes de convenios con beneficiarios; así como derivados de deuda pública, de ingresos fiscales y sus remanentes y de participaciones federales.

Como parte del proceso de fiscalización, el 19 de mayo de 2017, se notificó el pliego de observaciones y recomendaciones a los titulares del sujeto fiscalizado, concediéndoles un plazo de quince días hábiles para aclarar, atender o solventar documentalmente las observaciones determinadas por el Órgano Técnico. Lo anterior, para dar cumplimiento a lo preceptuado por el artículo 37, fracción II de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato.

En fechas 22 de mayo, 8 y 9 de junio, 7 y 10 de julio y 1 de agosto de 2017, se presentaron oficios de respuesta al pliego de observaciones y recomendaciones derivadas de la revisión practicada, anexándose la información y documentación que se consideró suficiente para aclarar y en su caso, solventar las observaciones determinadas y atender las recomendaciones efectuadas. Una vez valorada la documentación aportada, se procedió a la elaboración del informe de resultados materia del presente dictamen.

El 14 de agosto de 2017, el informe de resultados se notificó al presidente y a la tesorera municipales de Irapuato, Gto., para que en su caso hicieran valer el recurso de reconsideración previsto por los artículos del 48 al 55 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, haciéndoles saber que contaban con un término de cinco días hábiles para tal efecto. Con lo anterior, se dio cumplimiento a la fracción IV del artículo 37 de la citada Ley.

El 21 de agosto de 2017, dentro del plazo que prevé la fracción IV del artículo 37 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, la tesorera municipal de Irapuato, Gto., interpuso recurso de reconsideración en contra del informe de resultados de la revisión practicada a las operaciones realizadas con recursos del Ramo 33 y de obra pública por la administración municipal de Irapuato, Gto., correspondientes al ejercicio fiscal del año 2016, siendo admitido dicho recurso, al colmarse los requisitos de procedibilidad previstos por el artículo 51 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato.

Una vez tramitado el recurso, el Auditor Superior el 31 de agosto de 2017 emitió la resolución correspondiente, a la cual haremos referencia en un apartado posterior, mismo que se notificó a la tesorera municipal de Irapuato, Gto., el 6 de septiembre de 2017.

IV. Contenido del Informe de Resultados:

En cumplimiento a lo establecido por los artículos 37, fracción III de la Ley de Fiscalización Superior del Estado y 25 del Reglamento de dicha Ley, el informe de resultados contiene los siguientes apartados:

a) Introducción.

Por lo que se refiere a este punto, se establece el objetivo y alcance de la auditoría; y las conclusiones del proceso de fiscalización, que contienen la información técnica, financiera y contable que sirvió de apoyo a la evaluación; un análisis sintético del proceso de evaluación; y la propuesta de aprobación o desaprobación de los conceptos fiscalizados.

b) Observaciones y recomendaciones que en su caso hayan resultado en el proceso de fiscalización, la respuesta emitida por el sujeto de fiscalización o una síntesis de sus aspectos importantes y la valoración correspondiente.

En esta parte se desglosa la valoración de las observaciones y recomendaciones formuladas por el Órgano Técnico, considerando como solventadas las observaciones plasmadas en los numerales 01, referente a obras o acciones registradas directamente al gasto; 09, correspondiente a diferente especificación. CRM-SE-1466-14-041; 12, relativo a servicios de supervisión externa. Contrato CRM-SUPCAL-0979-14-009; y 15, referido a garantía de vicios ocultos.

Se solventaron parcialmente las observaciones establecidas en los numerales 02, relativo a saldo pendiente de anticipos por amortizar; y 04, referido a diferente especificación. HABITAT-IU-0801-15-002.

No se solventaron las observaciones consignadas en los numerales 03, correspondiente a autorización de cantidades de obra. HABITAT-IU-0801-15-002; 05, referente a precio unitario fuera de mercado. HABITAT-IU-0801-15-002; 06, relativo a autorización de cantidades de obra. IEC-UE-2624-14-003; 07, referido a autorización de cantidades de obra. CRM-SE-0685-14-084; 08, correspondiente a diferente especificación. CRM-SE-0685-14-084; 10, referente a calidad de obra. Contrato ISAPEG-SO-0374-2014-001; 11, relativo a calidad de obra. Contrato FFM-SI-0514-14-029; 13, referido a supervisión de obra. Contrato CRM-SUPCAL-0471-14-012; y 14, correspondiente a finiquito.

Mediante la resolución recaída al recurso de reconsideración promovido en contra del informe de resultados, se determinó parcialmente solventada la observación contenida en el numeral 14, correspondiente a finiquito.

En cuanto al apartado de Recomendaciones Generales, no se atendieron los numerales 01, referente a cantidades de obra. FFM-EG-1323-14-044; 02, relativo a precio unitario fuera de mercado. Contrato ITS-SI-0239-16-010; 03, referido a calidad de obra. Contrato SOP-SI-0177-14-001; 04, correspondiente a autorización de cantidades de obra. Contrato SOP-SI-0177-14-001; y 05, referente a diferente especificación. SOP-SI-0177-14-001.

c) Dictamen técnico jurídico.

En este dictamen se precisan las presuntas responsabilidades derivadas de las deficiencias e irregularidades en las cuales y conforme a las leyes y demás disposiciones jurídicas aplicables, deben ser ejercidas las acciones legales correspondientes, de acuerdo a la naturaleza de cada una de ellas, concluyendo que se desprende la existencia de responsabilidades administrativas, así como las que se derivan del dictamen de daños y perjuicios.

Las presuntas responsabilidades administrativas se derivan de las observaciones establecidas en los numerales 02, relativo a saldo pendiente de anticipos por amortizar; 03, correspondiente a autorización de cantidades de obra. HABITAT-IU-0801-15-002; 04, referido a diferente especificación. HABITAT-IU-0801-15-002; 05, referente a precio unitario fuera de mercado. HABITAT-IU-0801-15-002; 06, relativo a autorización de cantidades de obra. IEC-UE-2624-14-003; 07, referido a autorización de cantidades de obra. CRM-SE-0685-14-084; 08, correspondiente a diferente especificación. CRM-SE-0685-14-084; 10, referente a calidad de obra. Contrato ISAPEG-SO-0374-2014-001; 14, relativo a finiquito; y 15, referido a garantía de vicios ocultos.

En virtud de la resolución recaída al recurso de reconsideración promovido en contra del informe de resultados, se dejaron sin efectos las presuntas responsabilidades administrativas determinadas en el punto 1.1 del Dictamen Técnico Jurídico, derivadas de la observación plasmada en el numeral 02, relativo a saldo pendiente de anticipos por amortizar, única y exclusivamente por lo que hace a la tesorera municipal y a la Directora de Contabilidad y Presupuesto.

Aun cuando la observación plasmada en el numeral 15, se solventó durante la etapa correspondiente, persistieron las responsabilidades administrativas que se generaron por la falta de cumplimiento

oportuno de las obligaciones a cargo de servidores públicos.

Respecto a las observaciones contenidas en los numerales 11, relativo a calidad de obra. Contrato FFM-SI-0514-14-029; y 13, referido a supervisión de obra. Contrato CRM-SUPCAL-0471-14-012, se señala que toda vez que de la revisión se desprendió que el sujeto fiscalizado con motivo de la ejecución de la obra pública celebró contratos de prestación de servicios, cuyo objeto fue la supervisión externa y verificación de control de calidad de las obras, se determinó la inexistencia de responsabilidades administrativas, por no contar los presuntos responsables con la calidad de servidores públicos, en términos de lo dispuesto por el artículo 122 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato. Pues de los contratos de prestación de servicios se desprende que los contratistas se obligaron a llevar a cabo la supervisión externa de las obras para el Municipio, en términos de lo dispuesto el artículo 96 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

En cuanto a los numerales 01, referente a cantidades de obra. FFM-EG-1323-14-044; 02, relativo a precio unitario fuera de mercado. Contrato ITS-SI-0239-16-010; 03, referido a calidad de obra. Contrato SOP-SI-0177-14-001; 04, correspondiente a autorización de cantidades de obra. Contrato SOP-SI-0177-14-001; y 05, referente a diferente especificación. SOP-SI-0177-14-001, éstos se emitieron con el carácter de recomendaciones, por lo tanto, aun cuando no se atendieron, no generan responsabilidad alguna.

De las observaciones consignadas en los numerales 03, correspondiente a autorización de cantidades de obra. HABITAT-IU-0801-15-002; 04, referido a diferente especificación. HABITAT-IU-0801-15-002; 05, referente a precio unitario fuera de mercado. HABITAT-IU-0801-15-002; 06, relativo a autorización de cantidades de obra. IEC-UE-2624-14-003; 07, referido a autorización de cantidades de obra. CRM-SE-0685-14-084; 08, correspondiente a diferente especificación. CRM-SE-0685-14-084; 10, referente a calidad de obra. Contrato ISAPEG-SO-0374-2014-001; 11, relativo a calidad de obra. Contrato FFM-SI-0514-14-029; y 13, referido a supervisión de obra. Contrato CRM-SUPCAL-0471-14-012, se refiere que se presume la existencia de las responsabilidades derivadas del dictamen de daños y perjuicios.

En esta parte cabe precisar que aun cuando en el dictamen técnico jurídico, se hace referencia a responsabilidades civiles, el 19 de julio de 2017, entró en vigor la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, la cual refiere que la autoridad competente para conocer del ejercicio de las acciones anteriormente referidas es el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato.

En cuanto a responsabilidades penales, en el propio informe de resultados se establece que de la auditoría practicada no se desprenden situaciones que hagan presumir la existencia de dichas responsabilidades.

Es así, que en este dictamen se establecen los hechos en que se fundan las responsabilidades correspondientes, los presuntos responsables, las acciones que deberán promoverse y las autoridades que resultan competentes para conocer de dichas acciones.

En tal sentido, consideramos que dicho dictamen se encuentra suficientemente fundado y motivado, a efecto de ejercer las acciones legales que procedan ante las autoridades competentes.

d) Dictamen de daños y perjuicios.

En este dictamen, se establece que se observaron irregularidades o deficiencias que no fueron subsanadas durante el proceso de auditoría, razón por la cual se tienen elementos de los que se desprende la existencia de daños y perjuicios causados a la hacienda y patrimonio públicos del sujeto fiscalizado.

En tal sentido se funda y motiva dicho dictamen, estableciendo los hechos de los que se deriva; la cuantía; y los bienes, derechos, programas, objetivos, actos jurídicos o partidas afectadas.

Las observaciones de las que se desprende la existencia de daños y perjuicios son las consignadas en los numerales 03, correspondiente a autorización de cantidades de obra. HABITAT-IU-0801-15-002; 04, referido a diferente especificación. HABITAT-IU-0801-15-002; 05, referente a precio unitario fuera de mercado. HABITAT-IU-0801-15-002; 06, relativo a autorización de cantidades de obra. IEC-UE-2624-14-003; 07, referido a autorización de cantidades de obra. CRM-SE-0685-14-084; 08, correspondiente a diferente especificación. CRM-SE-0685-14-084; 10, referente a calidad de obra. Contrato ISAPEG-SO-0374-2014-001; 11, relativo a calidad de obra. Contrato FFM-SI-0514-14-029; y 13, referido a supervisión de obra. Contrato CRM-SUPCAL-0471-14-012, determinándose en cada caso la cuantía correspondiente.

Cabe destacar la importancia de este dictamen, debido a que permitirá resarcir al sujeto fiscalizado los daños y perjuicios ocasionados, ya que con base en los artículos 37, fracción VI y 68 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, una vez que el informe de resultados sea sancionado por el Pleno del Congreso, tendrá carácter de documento público, para que los sujetos de fiscalización por conducto de su titular o por la persona a quien éstos deleguen dicha facultad, procedan a ejercer las acciones en la vía y forma que corresponda, ante la autoridad competente, dentro del término de tres meses contado a partir del día siguiente al de la notificación del acuerdo del Pleno del Congreso, mismo que podrá duplicarse a petición del sujeto de fiscalización presentada al Congreso del Estado.

En caso de que los servidores públicos responsables de ejercer dichas acciones tuvieren intereses en conflicto, en los términos que prescribe la Ley de la materia, el ejercicio de las referidas acciones quedará reservado a la Auditoría Superior del Estado. Para que opere dicho supuesto, deberá informarse lo conducente a la Auditoría Superior del Estado, dentro del término de quince días hábiles, contado a partir de la fecha de notificación del acuerdo del Pleno del Congreso, justificando las causales de conflicto de intereses en las que se ubican y se abstendrán de ejercer cualquier acción.

Asimismo, tratándose de las acciones derivadas del dictamen de daños y perjuicios, cuyo ejercicio se convenga por los sujetos fiscalizados con la Auditoría Superior del Estado, previa justificación de su imposibilidad material y humana para ejercerlas, también serán ejercidas por esta última.

Finalmente, con fundamento en el artículo 70 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, los sujetos fiscalizados podrán abstenerse de ejercer las acciones derivadas del dictamen de daños y perjuicios o la prosecución de las mismas, cuando previo al ejercicio de dichas acciones, el deudor reintegre o repare la totalidad de los daños y perjuicios causados al patrimonio o a la hacienda pública del sujeto de fiscalización o por incosteabilidad en la recuperación de los daños y perjuicios al haber fallecido el deudor o exista sentencia que lo determine en estado de quiebra, así como por la declaratoria de insolvencia por procedimiento de concurso. También procederá la incosteabilidad durante el procedimiento y previo a la práctica del emplazamiento al deudor, por su fallecimiento o por existir sentencia que lo determine en estado de quiebra, así como cuando no haya podido ser localizado dentro del procedimiento. También podrán abstenerse por incobrabilidad, una vez que ya exista sentencia favorable, cuando en la ejecución de dicha sentencia se actualicen los supuestos previstos en la fracción II del referido artículo.

Para los efectos del párrafo anterior, el titular del sujeto de fiscalización deberá efectuar el dictamen correspondiente, justificando con el soporte documental pertinente, las acciones o circunstancias que respalden los supuestos sobre los cuales se determinará el no ejercicio o la no ejecución de las acciones derivadas del dictamen de daños y perjuicios sobre los probables responsables.

En los casos previstos en las fracciones II y III del artículo 70 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, el daño causado al patrimonio o a la hacienda pública, no deberá exceder de 200 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria, vigente al momento que se haya emitido el acuerdo.

e) Resumen de las observaciones y recomendaciones con su estatus y las presuntas responsabilidades resultantes.

En este apartado se establece el estatus que guardan las observaciones y recomendaciones, así como las presuntas responsabilidades resultantes del proceso de fiscalización; estableciendo que una vez concluida la revisión, así como la dictaminación correspondiente, se determinaron 15 observaciones, de las cuales se solventaron 4, 2 se solventaron parcialmente y 9 no se solventaron por parte del sujeto fiscalizado. Asimismo, se generaron 5 recomendaciones que no fueron atendidas.

f) Promoción del ejercicio de facultades de comprobación fiscal.

En esta parte se establece que de conformidad con lo establecido en los artículos 82, fracción XXXIV de la Ley de Fiscalización Superior del Estado y 23 del Reglamento de dicha Ley, y toda vez que del proceso de fiscalización pudieran actualizarse presuntos incumplimientos a las disposiciones fiscales o bien respecto a ingresos, adquisiciones o facturaciones que por su monto, origen o instrumentación pudieran derivar de aquéllos, la Auditoría Superior del Estado realizó el análisis correspondiente, del cual se concluyó que no es procedente la promoción del inicio de facultades de comprobación fiscal.

g) Comunicado ante órganos de control y autoridades que administran padrones de proveedores y contratistas.

En este punto se señala que de conformidad con lo establecido en los artículos 3, fracción XI de la Ley de Fiscalización Superior del Estado y 23, primer párrafo del Reglamento de dicha Ley, una vez que el informe de resultados sea sancionado por el Pleno del Congreso, la Auditoría Superior del Estado pondrá en conocimiento de los órganos de control y de las autoridades estatales o municipales competentes que administren padrones de proveedores o contratistas, las presuntas irregularidades o incumplimientos de éstos en contrataciones públicas, concluyendo que es procedente hacer del conocimiento el informe de resultados que nos ocupa, de la Contraloría Municipal de Irapuato, Gto., y de la Secretaría de Obra Pública del Estado, por las presuntas irregularidades o incumplimientos de estos últimos en contrataciones públicas detectadas durante la auditoría, precisando los contratistas y las observaciones en las que intervinieron.

h) Recurso de Reconsideración.

El 21 de agosto de 2017, dentro del plazo que prevé la fracción IV del artículo 37 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, la tesorera municipal de Irapuato, Gto., interpuso recurso de reconsideración en contra del informe de resultados de la revisión practicada a las operaciones realizadas con recursos del Ramo 33 y de obra pública por la administración municipal de Irapuato, Gto., correspondientes al ejercicio fiscal del año 2016, concretamente en contra de las observaciones contenidas en los puntos 02, relativo a saldo pendiente de anticipos por amortizar; 03, correspondiente a autorización de cantidades de obra. HABITAT-IU-0801-15-002; 04, referido a diferente especificación. HABITAT-IU-0801-15-002; 06, referente a autorización de cantidades de obra. IEC-UE-2624-14-003; 10, relativo a calidad de obra. Contrato ISAPEG-SO-0374-2014-001; 11, correspondiente a calidad de obra. Contrato FFM-SI-0514-14-029; y 14, referido a finiquito; así como de la recomendación plasmada en el numeral 01, referente a cantidades de obra. FFM-EG-1323-14-044, mismos que se encuentran relacionados con los Capítulos II, denominado Observaciones y Recomendaciones; Respuesta Emitida por el Sujeto Fiscalizado y Valoración Correspondiente; III, denominado Dictamen Técnico Jurídico; IV, denominado Dictamen de Daños y Perjuicios; y V, correspondiente al Resumen de las Observaciones y Recomendaciones, con su Estatus y las Presuntas Responsabilidades Resultantes, contenidos en el Informe de Resultados.

En tal sentido, mediante acuerdo de fecha 22 de agosto de 2017, emitido por el Director General de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior del Estado, se admitió el

recurso de reconsideración, al colmarse los requisitos de procedibilidad previstos por el artículo 51 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, instruyendo la integración del expediente respectivo y el registro correspondiente.

Una vez tramitado el recurso, el Auditor Superior del Estado, el 31 de agosto de 2017 emitió la resolución correspondiente, determinándose respecto a la observación plasmada en el numeral 02, que los agravios hechos valer por la recurrente dando voz al Director de Inversiones Públicas y a la Directora de Contabilidad y Presupuesto resultaron infundados, por los argumentos que se refieren en el considerando séptimo de la resolución. No obstante, del análisis del argumento formulado por la recurrente dando voz al Director General de Obras Públicas y de los medios de convicción aportados, se determinó necesario delimitar la presunta responsabilidad de los servidores públicos. En razón de lo anterior, aun cuando se confirmó el sentido de la valoración de la observación como parcialmente solventada, se dejaron sin efectos las presuntas responsabilidades administrativas determinadas en el punto 1.1 del Dictamen Técnico Jurídico, única y exclusivamente por lo que hace a la tesorera municipal y a la Directora de Contabilidad y Presupuesto.

Por lo que hace a las observaciones consignadas en los numerales 03, 04 y 06, se resolvió que la recurrente omitió formular agravios y los medios de convicción aportados resultaron insuficientes para fallar acorde a su pretensión, como se refiere en el considerando séptimo de la resolución. En consecuencia, se confirmó el sentido de la valoración de las observaciones, confirmando las presuntas responsabilidades y los daños y perjuicios determinados en los puntos 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 5.1 y 5.2 del Dictamen Técnico Jurídico; 1.1, 1.2 y 1.4 del Dictamen de Daños y Perjuicios.

En cuanto a las observaciones establecidas en los numerales 10 y 11, se determinó que los agravios hechos valer por la recurrente resultaron infundados para modificar el sentido de su valoración, de acuerdo a lo expresado en el considerando séptimo de la resolución. En razón de lo anterior, se confirmó el sentido de la valoración de las observaciones, confirmando las presuntas responsabilidades y los daños y perjuicios determinados en los puntos 8.1, 8.2 y 9.2 del Dictamen Técnico Jurídico; 1.7 y 1.8 del Dictamen de Daños y Perjuicios.

Respecto, a la observación consignada en el numeral 14, se concluyó que la recurrente omitió formular agravios. No obstante, con los medios de prueba adjuntos se demostró que el proceso de finiquito se encuentra en marcha, aunque aún no se ha realizado, como se establece en el considerando séptimo. Lo anterior, resultó suficiente para modificar el sentido de la valoración de la observación, por lo que ésta de determinó parcialmente solventada; sin embargo, se confirmaron las presuntas responsabilidades administrativas determinadas en el punto 11.1 del Dictamen Técnico Jurídico.

Finalmente, en cuanto a la recomendación contenida en el punto 01, se resolvió que la recurrente omitió formular agravios, como se precisa en el considerando séptimo de la resolución, razón por la cual se confirmó el sentido de la valoración de la recomendación como no atendida.

La referida resolución se notificó a la tesorera municipal de Irapuato, Gto., el 6 de septiembre de 2017.

i) Anexos.

En esta parte, se adjuntan los anexos técnicos que soportan la revisión.

V. Conclusiones:

Como ya lo habíamos señalado en párrafos anteriores, el artículo 38 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, establece que los informes de resultados solamente podrán ser observados por las dos terceras partes del Congreso del Estado cuando: I. En perjuicio del sujeto de fiscalización no se haya otorgado el derecho de audiencia o defensa; II. Cuando no se hayan valorado las documentales aportadas por el sujeto de fiscalización durante el procedimiento de fiscalización hasta la notificación del informe de resultados; y III. No se observen las formalidades esenciales del proceso de fiscalización. Señalando que en

tales casos el informe de resultados será devuelto la Auditoría Superior del Estado.

En este sentido, quienes integramos esta Comisión analizamos el informe de resultados materia del presente dictamen, considerando las hipótesis referidas en el precepto anteriormente señalado.

Como se desprende del informe de resultados, el Órgano Técnico dio cumplimiento al artículo 37, fracción II de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, al haberse notificado las observaciones y recomendaciones derivadas de la auditoría, a los funcionarios de la administración municipal de Irapuato, Gto., que fungieron como responsables del manejo del erario público durante el periodo sujeto a revisión, concediéndoles el plazo que establece la Ley para aclarar, atender o solventar documentalmente las observaciones determinadas por el Órgano Técnico. Al respecto, se presentó la información y documentación que se consideró suficiente para aclarar y en su caso, solventar las observaciones determinadas y atender las recomendaciones efectuadas.

De igual manera, existe en el informe de resultados la constancia de que éste se notificó al presidente y a la tesorera municipales de Irapuato, Gto., concediéndoles el término señalado en el artículo 37, fracción IV de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, a efecto de que en su caso, hicieran valer el recurso de reconsideración que prevén los artículos del 48 al 55 de dicho ordenamiento legal; presentándose el referido medio de impugnación, el cual fue tramitado por el Órgano Técnico, emitiéndose por parte del Auditor Superior del Estado la resolución correspondiente, misma que consideramos se encuentra suficientemente fundada y motivada y que en su oportunidad se notificó a la tesorera municipal de Irapuato, Gto. En tal virtud, se considera que fue respetado el derecho de audiencia o defensa por parte del Órgano Técnico.

Por otra parte, del informe de resultados podemos inferir que el Órgano Técnico en el desarrollo del procedimiento de auditoría dio cumplimiento a las formalidades esenciales que la misma Ley establece para el proceso de fiscalización, al haberse practicado una revisión que estaba contemplada en el Programa General de Fiscalización 2017 de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, aprobado en su momento por el Auditor Superior. Asimismo, la revisión se efectuó conforme a las normas y procedimientos de auditoría aplicables al sector público, atendiendo a lo establecido en la normatividad aplicable en la materia, incluyendo las bases contables aplicables a la institución, utilizadas de acuerdo a los postulados básicos de contabilidad gubernamental.

También, se dio cumplimiento de manera puntual a las fases que se establecen para los procesos de fiscalización, concluyendo con la elaboración del informe de resultados, cuyo contenido es acorde con lo que establece el artículo 25 del Reglamento de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, destacando de manera relevante los dictámenes de daños y perjuicios y técnico jurídico, que será el soporte para que se promuevan por parte del ayuntamiento de Irapuato, Gto., las acciones necesarias para el fincamiento de las responsabilidades que se consignan en dichos dictámenes, debiendo dar seguimiento la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato al ejercicio de dichas acciones.

Finalmente, del contenido del informe de resultados podemos desprender que todas las documentales aportadas por el sujeto fiscalizado durante el procedimiento de fiscalización, hasta la notificación del informe de resultados, fueron valoradas por el Órgano Técnico.

En razón de lo anteriormente señalado, concluimos que el informe de resultados de la revisión practicada a las operaciones realizadas con recursos del Ramo 33 y de obra pública por la administración municipal de Irapuato, Gto., correspondientes al ejercicio fiscal del año 2016, debe sancionarse por el Congreso en los términos presentados por la Auditoría Superior del Estado y proceder a su aprobación, considerando que no se presenta alguno de los supuestos contenidos en el artículo 38 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de

Guanajuato, razón por la cual no podría ser observado por el Pleno del Congreso.

Por lo expuesto, con fundamento en el artículo 204 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, nos permitimos someter a la consideración de la Asamblea, la aprobación del siguiente:

A C U E R D O

Único. Con fundamento en el artículo 63 fracción XIX de la Constitución Política para el Estado, en relación con el artículo 37, fracciones V y VI de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, se aprueba el informe de resultados formulado por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, relativo a la revisión practicada a las operaciones realizadas con recursos de los Fondos del Ramo 33, denominados Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y de obra pública, por la administración municipal de Irapuato, Gto., correspondientes al período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 2016.

Con fundamento en los artículos 37, fracción VII y 71 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, el Auditor Superior del Estado de Guanajuato promoverá las denuncias correspondientes ante los órganos de control, para el fincamiento de las responsabilidades administrativas determinadas en el dictamen técnico jurídico contenido en el informe de resultados.

Se ordena dar vista del informe de resultados al ayuntamiento del municipio de Irapuato, Gto., a efecto de que se atiendan las observaciones que no se solventaron en su totalidad, así como las recomendaciones contenidas en dicho informe, en el plazo que establece el artículo 66 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato. Asimismo, para que con base en los dictámenes de daños y perjuicios y técnico jurídico contenidos en el informe de resultados, se ejerzan las acciones que procedan ante la autoridad competente, en el término señalado en el artículo 68 de la citada Ley; y se proceda al fincamiento de las responsabilidades administrativas a que haya lugar, informando a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato de las acciones realizadas para ello, con objeto de que esta última realice el seguimiento correspondiente.

De conformidad con el artículo 37, fracción VI, último párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, el presente acuerdo tiene carácter de documento público, para fundar las acciones legales correspondientes en contra de los probables responsables.

Remítase el presente acuerdo junto con su dictamen y el informe de resultados al ayuntamiento del municipio de Irapuato, Gto., así como a la Auditoría Superior del Estado, para los efectos de su competencia.

Guanajuato, Gto., 2 de octubre de 2017. La Comisión de Hacienda y Fiscalización. Dip. Elvira Paniagua Rodríguez. Dip. Angélica Casillas Martínez. Dip. María Alejandra Torres Novoa. (Con observación) Dip. Juan Carlos Muñoz Márquez. Dip. María Guadalupe Velázquez Díaz.»

DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL DICTAMEN FORMULADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA Y FISCALIZACIÓN, RELATIVO AL INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN PRACTICADA A LAS CUENTAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE JARAL DEL PROGRESO, GTO., POR EL PERIODO COMPRENDIDO DE JULIO A DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2015.

»C. PRESIDENTA DEL CONGRESO DEL ESTADO. PRESENTE.

A esta Comisión de Hacienda y Fiscalización, le fue turnado para su estudio y dictamen, el **informe de resultados de la revisión practicada por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, a las cuentas públicas municipales de Jaral del Progreso, Gto., correspondientes al periodo comprendido por los meses de julio a diciembre del ejercicio fiscal del año 2015.**

Una vez analizado el referido informe de resultados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 112, fracción XII y 171 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, nos permitimos rendir el siguiente:

D i c t a m e n

I. Competencia:

Las facultades de la legislatura local en materia de revisión de las cuentas públicas municipales tienen su fundamento en lo dispuesto por el artículo 63 fracciones XIX y XXVIII de la Constitución Política para el Estado, las que establecen que el Congreso del Estado tiene la facultad de fiscalizar las cuentas públicas municipales, incluyendo las de las entidades y organismos de la administración pública paramunicipal; y verificar el desempeño en el cumplimiento de los objetivos de los programas; así como declarar la revisión de cuentas públicas en los términos del informe de resultados, dentro de los seis meses siguientes a la presentación de dicho informe y ordenar su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, auxiliándose para el cumplimiento de dicha facultad por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato.

El artículo 66 fracción I de la Constitución Política Local establece como atribución de la Auditoría Superior del Estado, antes denominada Órgano de Fiscalización Superior analizar, evaluar y comprobar las cuentas públicas, de conformidad con los programas que para el efecto se aprueben por dicha Auditoría, señalando que si del examen que se realice aparecieran discrepancias entre los ingresos o los egresos, con relación a los conceptos y las partidas respectivas o no existiera exactitud o justificación en los ingresos obtenidos o en los gastos realizados, se determinarán las responsabilidades de acuerdo con la Ley.

Asimismo, el artículo 66 fracción VIII de dicho Ordenamiento Constitucional establece que la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato deberá informar al Congreso del Estado del resultado de la revisión de la cuenta pública y demás asuntos derivados de la fiscalización, incluyendo los dictámenes, informes de resultados, comentarios y observaciones de las auditorías, constituyendo una de las fases del proceso de fiscalización.

De igual forma, el artículo 8 fracción XX de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato vigente anteriormente y que es aplicable al presente caso, establece como atribución del Órgano de Fiscalización Superior rendir al Congreso del Estado, los informes derivados del ejercicio de la función de fiscalización.

Al respecto, cabe señalar que mediante el decreto número 320 de la Sexagésima Segunda Legislatura, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 154, décima tercera parte, de fecha 25 de septiembre de 2015 se emitió la nueva Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, misma que entró en vigor el 24 de diciembre de 2015. No obstante lo anterior, en su artículo Tercero Transitorio se establece que los asuntos que se encuentran en trámite o en proceso a cargo del Órgano de Fiscalización Superior a la entrada en vigor de la ley, continuarán tramitándose, por la Auditoría Superior, en los términos de la ley abrogada; refiriéndose además en el artículo Sexto Transitorio que la revisión de las cuentas públicas anuales conforme a las disposiciones de la nueva ley, se efectuará a partir de las correspondientes al ejercicio fiscal 2016. Es así que en el caso que nos ocupa se aplicará lo previsto por la abrogada Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato.

En razón de lo cual, la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato abrogada establecía que el Órgano de Fiscalización Superior remitiría los informes de resultados al Congreso del Estado, a efecto de que éste realizara la declaratoria correspondiente, señalándose en el artículo 45 que el informe de resultados únicamente podrá ser observado por las dos terceras partes de los integrantes del Congreso cuando: a) En perjuicio del sujeto de fiscalización no se haya otorgado el derecho de audiencia o defensa; b) No se observen las formalidades esenciales del proceso de fiscalización; y c) Cuando se viole de manera flagrante la Ley; señalando que en tales casos el informe de resultados será devuelto al

Órgano de Fiscalización Superior, para que atienda las observaciones.

Con la finalidad de que el Congreso dé cumplimiento a lo señalado en el párrafo anterior, la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato establece en su artículo 112, fracción XII que a esta Comisión de Hacienda y Fiscalización, le compete el conocimiento y dictamen de los asuntos relativos a los informes de resultados que emita la Auditoría Superior del Estado.

A efecto de cumplir con las atribuciones conferidas a esta Comisión, y en observancia a lo que establece la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato vigente en su momento, el presente dictamen se ocupará exclusivamente de los aspectos que la propia Ley señala y por los cuales podría ser observado o no, el informe de resultados.

II. Antecedentes:

En su momento, el artículo 117, fracción VII de la Constitución Política Local establecía como obligación de los ayuntamientos presentar al Congreso del Estado la cuenta pública del municipio, en el plazo, forma y términos que estableciera la Ley. Al respecto, el artículo 22 de la abrogada Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, señalaba que las cuentas públicas de los municipios debían ser presentadas por periodos mensuales y a más tardar dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha en que concluyera el periodo de referencia.

La fracción VII del artículo 117 de la Constitución Política Local vigente señala que los ayuntamientos deberán presentar al Congreso del Estado la información financiera y la cuenta pública del Municipio, con la periodicidad, forma y términos que establezcan las disposiciones aplicables y la Ley.

En cuanto a la presentación, el artículo 20 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato abrogada establecía cómo debían integrarse las cuentas públicas que los sujetos de fiscalización remitieran al Congreso del Estado. Asimismo, el artículo 20 A establecía la integración de las cuentas públicas de los municipios que en términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de los documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable llevaran una contabilidad simplificada.

Por otra parte, el artículo 130 fracciones XIII y XIV de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato establece como atribución del tesorero municipal, remitir al Congreso del Estado, la cuenta pública municipal, misma que deberá ser firmada preferentemente por un integrante de la primera minoría de la Comisión de Hacienda en el Ayuntamiento; así como rendir los informes contables y financieros mensuales dentro del mes siguiente, y atender las observaciones que se formulen sobre los mismos; debiendo firmar además dichos informes el presidente municipal.

En su oportunidad se remitieron a este Congreso las cuentas públicas municipales de Jaral del Progreso, Gto., correspondientes al periodo comprendido por los meses de julio a diciembre del ejercicio fiscal del año 2015, turnándose al entonces Órgano de Fiscalización Superior, ahora Auditoría Superior del Estado para su revisión.

La revisión concluyó con la elaboración del informe de resultados materia del presente dictamen, remitiéndose al Congreso, el cual se turnó a esta Comisión el 25 de mayo de 2017 para su estudio y dictamen, siendo radicado el 5 de junio del año en curso.

Con fundamento en el artículo 41 de la abrogada Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, el entonces Auditor General acordó acumular en el informe de resultados, las cuentas públicas mensuales correspondientes al periodo de referencia.

III. Procedimiento de Revisión:

El Órgano Técnico inició la revisión de las cuentas públicas correspondientes al periodo comprendido de julio a diciembre del ejercicio fiscal del año 2015, el 29 de junio de 2016 y tuvo por objetivo examinar las cifras que muestran las cuentas públicas de los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2015 y comprobar que la administración, control, utilización y

destino de los recursos financieros, humanos y patrimoniales a cargo del municipio de Jaral del Progreso, Gto., fueron aplicados con transparencia y atendiendo a criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal, propiciando su óptimo aprovechamiento; asimismo, verificar que la actividad financiera se haya realizado con estricto apego a la Ley de Ingresos para dicho Municipio y al presupuesto de egresos autorizado, ambos para el ejercicio 2015, así como a los reglamentos y demás ordenamientos legales y normativos aplicables.

Con la finalidad de cumplir con lo establecido por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato aplicable al caso que nos ocupa, el informe de resultados establece las herramientas técnicas y métodos que se estimaron adecuados en la práctica de la revisión, señalando que ésta se efectuó de acuerdo con las normas emitidas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, que son aplicables al sector público, las que requieren que la auditoría sea planeada, realizada y supervisada, para obtener una seguridad razonable de que la información presentada en las cuentas públicas, no contiene errores importantes y que está integrada de acuerdo a las bases contables emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Asimismo, el informe establece que se verificó con base en pruebas selectivas, la evidencia que respalda las transacciones realizadas, las que están soportadas en las cifras y revelaciones de las cuentas públicas, atendiendo a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental; en las bases y criterios establecidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable; en la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato; en la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato; en la Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal de 2015; en la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato; y en la Ley de Ingresos para el Municipio de Jaral del Progreso, Gto., para el Ejercicio Fiscal del año 2015. Lo anterior, de conformidad con lo establecido por los ordenamientos aplicables en la materia, incluyendo sus bases contables, utilizadas de acuerdo a los postulados básicos de contabilidad gubernamental; la presentación de la información financiera; las variaciones presupuestales; las estimaciones significativas hechas por la administración; los resultados de la gestión financiera; y la incidencia de sus operaciones en la hacienda pública del ente fiscalizado.

Como parte del proceso de revisión, el 16 de febrero de 2017, se dio vista de las observaciones y recomendaciones a los titulares y ex-titulares del ente fiscalizado que fungieron como responsables del manejo del erario público durante el periodo sujeto a revisión, concediéndoles un plazo de treinta días hábiles para aclarar, atender o solventar documentalmente las observaciones determinadas por el Órgano Técnico. Lo anterior, para dar cumplimiento a lo preceptuado por los artículos 9 fracción V, 23, fracción IV y 24 de la abrogada Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato.

El 30 de marzo de 2017 y de manera extemporánea el 6 de abril de 2017, se presentaron oficios de respuesta a las observaciones y recomendaciones derivadas de la revisión practicada, anexándose la información y documentación que se consideró suficiente para aclarar y en su caso, solventar las observaciones determinadas y atender las recomendaciones efectuadas. Una vez valorada la documentación aportada, se procedió a la elaboración del informe de resultados materia del presente dictamen.

En fechas 3 y 8 de mayo de 2017, el informe de resultados se notificó al presidente, al tesorero, al ex-presidente y a la ex-tesorera municipales de Jaral del Progreso, Gto., para que en su caso, hicieran valer el recurso de reconsideración previsto por el artículo 39 de la abrogada Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, haciéndoles saber que contaban con un término de cinco días hábiles para tal efecto. Con lo anterior, se dio cumplimiento a la fracción VIII del artículo 23 de la citada Ley.

Este término transcurrió sin que, dentro del mismo, se hubiere promovido el

recurso de reconsideración, como consta en la razón levantada por el Auditor Superior del Estado el 23 de mayo de 2017, en la que se realiza el cómputo del término para la interposición del recurso, contado a partir de la fecha de la notificación del informe de resultados.

IV. Contenido del Informe de Resultados:

En cumplimiento a lo establecido por el artículo 43 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato aplicable al caso que nos ocupa, el informe de resultados contiene los siguientes apartados:

a) Conclusiones del proceso de fiscalización.

Por lo que se refiere a esta parte, se establecen los resultados de la gestión financiera que se reflejan en los rubros de ingresos, egresos, resultado del ejercicio, deuda pública y créditos por pagar; la evaluación y comprobación de los ingresos y egresos; la información técnica, financiera y contable que sirvió de apoyo a la evaluación; un análisis sintético del proceso de evaluación; y la propuesta de aprobación de los conceptos fiscalizados.

b) Análisis sobre el cumplimiento de los postulados básicos de contabilidad gubernamental y de los ordenamientos legales correspondientes.

En este punto se concluye que la administración municipal de Jaral del Progreso, Gto., cumplió con las bases contables aplicables a la institución y con los postulados básicos de contabilidad gubernamental.

c) Pliego de observaciones y recomendaciones derivadas de la revisión.

En este punto se desglosan las observaciones detectadas en la revisión practicada a las cuentas públicas municipales de Jaral del Progreso, Gto., por el periodo comprendido de julio a diciembre de 2015, en el apartado de Gastos y Otras Pérdidas. En cada una de las observaciones realizadas al sujeto fiscalizado, se plasman las acciones preventivas y correctivas que se deben llevar a cabo para subsanar las situaciones detectadas durante el proceso de revisión.

d) Diligencias y acciones practicadas para aclarar o solventar las observaciones y recomendaciones.

La inclusión de este punto se justifica para determinar que no se haya violentado el derecho de audiencia o defensa en perjuicio del sujeto fiscalizado. El informe concluye afirmando que se dio cabal cumplimiento a lo preceptuado por los artículos 9 fracción V, 23 fracciones IV y V y 24 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato abrogada, al haberse notificado a los responsables del manejo del erario público durante el periodo sujeto a revisión, las observaciones y recomendaciones determinadas, otorgándoles el plazo que señala la Ley para aclarar, atender o solventar documentalmente dichas observaciones.

De lo anterior, derivan las observaciones correspondientes a los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2015, que se solventaron, al haberse proporcionado la información y documentación que se consideró suficiente para tal efecto, las que se encuentran consignadas en el informe de resultados, por lo tanto en el presente dictamen omitiremos reiterarlas.

e) Informe sobre la situación que guardan las recomendaciones u observaciones que no fueron atendidas o solventadas.

En esta parte, se consignan las observaciones y recomendaciones en las que no se presentó respuesta alguna para su atención o aquéllas en que aun cuando se hubiera presentado información o documentación, al realizarse el análisis y valoración de la misma, los datos proporcionados no se consideraron suficientes para solventarlas o atenderlas en su totalidad, estableciéndose en cada caso las razones por las que se consideran no justificadas.

En tal sentido, no se solventó la observación plasmada en el numeral 2, correspondiente a Techo Firme 2015.

f) Señalamiento de las irregularidades detectadas.

En este punto se establece la observación que no se solventó, de la que puede presumirse la existencia de responsabilidades y que se analizan en los dictámenes de daños y perjuicios y técnico jurídico.

g) Observaciones y comentarios del Auditor Superior, derivados del proceso de fiscalización.

El Auditor Superior del Estado, concluyó que la información contenida en las cuentas públicas y los reportes documentales de las muestras examinadas, son parcialmente razonables en sus aspectos importantes, así como el ejercicio y aplicación de los recursos que fueron objeto de la fiscalización, todo ello producto del incumplimiento de diversas disposiciones legales.

Señalando además que los responsables del manejo de los recursos públicos del ente fiscalizado incurrieron en actos u omisiones que hacen presumir la existencia de daños y perjuicios causados a la hacienda y patrimonio públicos del sujeto fiscalizado, como se establece en los dictámenes de daños y perjuicios y técnico jurídico, en los que se precisan las acciones que en su caso deberán promoverse.

Asimismo, se establece que en ningún momento, las notificaciones que expide el Órgano Técnico, referentes a la solventación de observaciones como resultado de la fiscalización superior, liberan a las autoridades que manejan dichos recursos, de responsabilidades futuras que pudieran surgir con motivo del ejercicio de las facultades de revisión, referente a lo que no fue materia de la revisión, que con base a lo que establece la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato antes vigente, lleven a cabo las autoridades facultadas.

También se refiere que, de conformidad con lo dispuesto por la ley de la materia, es deber de todo servidor público custodiar la documentación e información que conserve o a la que tenga acceso por razón de su empleo, cargo o comisión, evitar o impedir el uso, sustracción, destrucción u ocultamiento indebidos de aquélla; así como guardar reserva de la información a que tenga acceso por su función, la que exclusivamente deberá ser usada para los fines a que esté afecta.

Finalmente, se informa que, durante el proceso de auditoría y valoración de respuestas, no se efectuaron reintegros o recuperaciones al patrimonio del ente fiscalizado.

h) Dictamen que establece la cuantía de los daños y perjuicios causados a la hacienda y patrimonio públicos del municipio de Jaral del Progreso, Gto.

En este dictamen, se establece que como resultado de la revisión y evaluación de la recaudación, manejo, custodia, control y aplicación de los recursos públicos que la administración municipal de Jaral del Progreso, Gto., utilizó en el cumplimiento de los objetivos contenidos en sus presupuestos, planes y programas, se observaron irregularidades y deficiencias, de las que se desprende la existencia de daños y perjuicios causados a la hacienda y patrimonio públicos del sujeto fiscalizado.

En tal sentido se funda y motiva dicho dictamen, estableciendo los hechos de los que se deriva; la cuantía; los bienes, derechos, programas, objetivos, actos jurídicos o partidas afectadas; y los presuntos responsables.

La observación de la que se desprende la existencia de daños y perjuicios es la consignada en el numeral 2, correspondiente a Techo Firme 2015, determinándose la cuantía correspondiente.

Cabe destacar la importancia de este dictamen, debido a que permitirá resarcir al sujeto fiscalizado los daños y perjuicios ocasionados, ya que con base en los artículos 44 y 52 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato antes vigente, una vez que el informe de resultados sea sancionado

por el Pleno del Congreso, tendrá carácter de documento público, para que los sujetos de fiscalización por conducto de su titular o por la persona a quien éstos deleguen dicha atribución, procedan a ejercer las acciones en la vía y forma que corresponda, ante la autoridad competente, dentro del término de tres meses contado a partir del día siguiente al de la notificación del acuerdo del Pleno del Congreso, mismo que podrá duplicarse a petición del sujeto de fiscalización presentada al Congreso del Estado.

En caso de que los servidores públicos responsables de ejercer dichas acciones tuvieren intereses en conflicto, en los términos que prescribe la Ley de la materia, el ejercicio de las acciones correspondientes quedará reservado a la Auditoría Superior del Estado. Para que opere dicho supuesto, deberá informarse lo conducente a la Auditoría Superior del Estado, dentro del término de quince días hábiles, contado a partir de la fecha de notificación del acuerdo del Pleno del Congreso, justificando las causales de conflicto de intereses en las que se ubican y se abstendrán de ejercer cualquier acción.

i) Dictamen técnico jurídico.

En este dictamen se establecen las consideraciones técnico-jurídicas derivadas de las irregularidades o deficiencias detectadas en la auditoría practicada, concluyendo que se desprende la existencia de responsabilidades administrativas, así como las que se derivan del dictamen de daños y perjuicios.

Las responsabilidades administrativas y derivadas del dictamen de daños y perjuicios, se desprenden de la observación plasmada en el numeral 2, correspondiente a Techo Firme 2015.

En esta parte cabe precisar que aun cuando en el dictamen técnico jurídico, se hace referencia a responsabilidades civiles, el 19 de julio de 2017, entró en vigor la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, la cual refiere que la autoridad competente para conocer del ejercicio de las acciones anteriormente referidas es el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato.

Por lo que hace a responsabilidades penales, el dictamen técnico jurídico establece que de la revisión practicada no se desprenden situaciones que hagan presumir la existencia de dichas responsabilidades.

Es así, que se establecen los hechos en que se fundan las responsabilidades determinadas, los presuntos responsables, las acciones que deberán promoverse y las autoridades que resultan competentes para conocer de dichas acciones.

En tal sentido, consideramos que dicho dictamen se encuentra suficientemente fundado y motivado, a efecto de ejercer las acciones legales que procedan ante las autoridades competentes.

V. Conclusiones:

Como ya lo habíamos señalado en párrafos anteriores, el artículo 45 de la abrogada Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, establece que los informes de resultados solamente podrán ser observados por las dos terceras partes del Congreso del Estado cuando: a) En perjuicio del sujeto de fiscalización no se haya otorgado el derecho de audiencia o defensa; b) No se observen las formalidades esenciales del proceso de fiscalización; y c) Cuando se viole de manera flagrante la Ley. Señalando que en tales casos el informe de resultados será devuelto al Órgano de Fiscalización Superior, a efecto de que atienda las observaciones.

En este sentido, quienes integramos esta Comisión analizamos el informe de resultados materia del presente dictamen, considerando las hipótesis referidas en el precepto anteriormente señalado.

Como se desprende del informe de resultados, en su oportunidad el Órgano Técnico dio cumplimiento a los artículos 9 fracción V, 23 fracción IV y 24 de la abrogada Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, al haberse notificado las observaciones y recomendaciones derivadas de la revisión a los funcionarios y ex-funcionarios de la administración municipal de Jaral del Progreso, Gto, que fungieron como responsables del manejo del erario público durante el periodo sujeto a revisión, concediéndoles el plazo que establece la Ley

para aclarar, atender o solventar documentalmente las observaciones determinadas por el Órgano Técnico. Al respecto, se presentó la documentación que se consideró suficiente para aclarar y en su caso, solventar las observaciones determinadas y atender las recomendaciones efectuadas.

De igual manera, existe en el informe de resultados la constancia de que éste se notificó al presidente, al tesorero, al ex-presidente y a la ex-tesorera municipales de Jaral del Progreso, Gto., concediéndoles el término señalado en el artículo 23 fracción VIII de la Ley de Fiscalización Superior del Estado abrogada, a efecto de que en su caso, hicieran valer el recurso de reconsideración que prevé el artículo 39 de dicho ordenamiento legal; no habiéndose presentado en este plazo el referido medio de impugnación, tal y como se desprende de la constancia expedida por el Auditor Superior del Estado y que obra en el informe de resultados. En tal virtud, se considera que fue respetado el derecho de audiencia o defensa por parte del Órgano Técnico.

Por otra parte, del informe de resultados podemos inferir que el Órgano Técnico en el desarrollo del procedimiento de revisión dio cumplimiento a las formalidades esenciales que la misma Ley establece para el proceso de fiscalización, al haberse practicado conforme a las normas de auditoría aplicables al sector público, atendiendo a lo establecido en la normatividad aplicable en la materia, incluyendo las bases contables aplicables a la institución, utilizadas de acuerdo a los postulados básicos de contabilidad gubernamental.

También se dio cumplimiento de manera puntual a las fases que se establecen para los procesos de fiscalización, concluyendo con la elaboración del informe de resultados, cuyo contenido es acorde con lo que establece el artículo 43 de la abrogada Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, destacando de manera relevante los dictámenes de daños y perjuicios y técnico jurídico, que serán el soporte para que se promuevan por parte del ayuntamiento de Jaral del Progreso, Gto., las acciones correspondientes, debiendo dar seguimiento la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato al ejercicio de dichas acciones.

Finalmente, no se desprende la existencia de alguna violación flagrante a la Ley, ya que el Órgano Técnico en la práctica de la revisión atendió lo preceptuado por la Ley de Fiscalización Superior del Estado antes vigente y en general la normatividad aplicable y los postulados básicos de contabilidad gubernamental.

En razón de lo anteriormente señalado, concluimos que el informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas públicas municipales de Jaral del Progreso, Gto., correspondientes al período comprendido de julio a diciembre del ejercicio fiscal del año 2015, debe sancionarse por el Congreso en los términos presentados por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato y proceder a su aprobación, considerando que no se presenta alguno de los supuestos contenidos en el artículo 45 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado aplicable al caso que nos ocupa, razón por la cual no podría ser observado por el Pleno del Congreso.

Por lo expuesto, con fundamento en el artículo 204 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, nos permitimos someter a la consideración de la Asamblea, la aprobación del siguiente:

A c u e r d o

Único. Con fundamento en el artículo 63 fracciones XIX y XXVIII de la Constitución Política para el Estado, en relación con el artículo 23 fracción IX de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, abrogada mediante el decreto número 320 de la Sexagésima Segunda Legislatura, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 154, décima tercera parte, de fecha 25 de septiembre de 2015 y el artículo Tercero Transitorio de dicho decreto, se declaran revisadas las cuentas públicas municipales de Jaral del Progreso, Gto., correspondientes a los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del ejercicio fiscal del año 2015, con base en el informe de resultados formulado

por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato.

Con fundamento en el artículo 48 de la abrogada Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, el Auditor Superior del Estado de Guanajuato promoverá las acciones necesarias para el fincamiento de las responsabilidades administrativas determinadas en el dictamen técnico jurídico contenido en el informe de resultados.

Se ordena dar vista del informe de resultados al ayuntamiento del municipio de Jaral del Progreso, Gto., a efecto de que se atienda la observación que no se solventó, así como las recomendaciones contenidas en dicho informe, en el plazo que establece el artículo 23 fracción XI de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato aplicable al presente caso. Asimismo, para que con base en los dictámenes de daños y perjuicios y técnico jurídico contenidos en el informe de resultados, se ejerzan las acciones que procedan ante la autoridad competente, en el término señalado en el artículo 52 de la citada Ley; y se proceda al fincamiento de las responsabilidades administrativas a que haya lugar, informando a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato de las acciones realizadas para ello, con objeto de que esta última realice el seguimiento correspondiente.

Remítase el presente acuerdo al titular del Poder Ejecutivo del Estado para su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

De igual forma, se ordena la remisión del presente acuerdo junto con su dictamen y el informe de resultados al ayuntamiento del municipio de Jaral del Progreso, Gto., y a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, para los efectos de su competencia.

Guanajuato, Gto., 2 de octubre de 2017. La Comisión de Hacienda y Fiscalización. Dip. Elvira Paniagua Rodríguez. Dip. Angélica Casillas Martínez. Dip. María Alejandra Torres Novoa. (Con observación) Dip. Juan Carlos Muñoz Márquez. Dip. María Guadalupe Velázquez Díaz.»

DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL DICTAMEN FORMULADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA Y FISCALIZACIÓN, RELATIVO AL INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN PRACTICADA A LAS CUENTAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE DOCTOR MORA, GTO., POR EL PERIODO COMPRENDIDO DE JULIO A DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2015.

»C. Presidenta del Congreso del Estado. Presente.

A esta Comisión de Hacienda y Fiscalización, le fue turnado para su estudio y dictamen, el **informe de resultados de la revisión practicada por el entonces Órgano de Fiscalización Superior, ahora Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, a las cuentas públicas municipales de Doctor Mora, Gto., correspondientes al periodo comprendido por los meses de julio a diciembre del ejercicio fiscal del año 2015.**

Una vez analizado el referido informe de resultados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 112, fracción XII y 171 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, nos permitimos rendir el siguiente:

D i c t a m e n

I. Competencia:

Las facultades de la legislatura local en materia de revisión de las cuentas públicas municipales tienen su fundamento en lo dispuesto por el artículo 63 fracciones XIX y XXVIII de la Constitución Política para el Estado, las que establecen que el Congreso del Estado tiene la facultad de fiscalizar las cuentas públicas municipales, incluyendo las de las entidades y organismos de la administración pública paramunicipal; y verificar el desempeño en el cumplimiento de los objetivos de los programas; así como declarar la revisión de cuentas públicas en los términos del informe de resultados, dentro de los seis meses siguientes a la presentación de dicho informe y ordenar su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, auxiliándose para el cumplimiento de dicha facultad por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato.

El artículo 66 fracción I de la Constitución Política Local establece como

atribución de la Auditoría Superior del Estado, antes denominada Órgano de Fiscalización Superior analizar, evaluar y comprobar las cuentas públicas, de conformidad con los programas que para el efecto se aprueben por dicha Auditoría, señalando que si del examen que se realice aparecieran discrepancias entre los ingresos o los egresos, con relación a los conceptos y las partidas respectivas o no existiera exactitud o justificación en los ingresos obtenidos o en los gastos realizados, se determinarán las responsabilidades de acuerdo con la Ley.

Asimismo, el artículo 66 fracción VIII de dicho Ordenamiento Constitucional establece que la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato deberá informar al Congreso del Estado del resultado de la revisión de la cuenta pública y demás asuntos derivados de la fiscalización, incluyendo los dictámenes, informes de resultados, comentarios y observaciones de las auditorías, constituyendo una de las fases del proceso de fiscalización.

De igual forma, el artículo 8 fracción XX de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato vigente anteriormente y que es aplicable al presente caso, establece como atribución del Órgano de Fiscalización Superior rendir al Congreso del Estado, los informes derivados del ejercicio de la función de fiscalización.

Al respecto, cabe señalar que mediante el decreto número 320 de la Sexagésima Segunda Legislatura, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 154, décima tercera parte, de fecha 25 de septiembre de 2015 se emitió la nueva Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, misma que entró en vigor el 24 de diciembre de 2015. No obstante lo anterior, en su artículo Tercero Transitorio se establece que los asuntos que se encuentran en trámite o en proceso a cargo del Órgano de Fiscalización Superior a la entrada en vigor de la ley, continuarán tramitándose, por la Auditoría Superior, en los términos de la ley abrogada; refiriéndose además en el artículo Sexto Transitorio que la revisión de las cuentas públicas anuales conforme a las disposiciones de la nueva ley, se efectuará a partir de las correspondientes al ejercicio fiscal 2016. Es así que en el caso que nos ocupa se aplicará lo previsto por la abrogada Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato.

En razón de lo cual, la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato abrogada establecía que el Órgano de Fiscalización Superior remitiría los informes de resultados al Congreso del Estado, a efecto de que éste realizara la declaratoria correspondiente, señalándose en el artículo 45 que el informe de resultados únicamente podrá ser observado por las dos terceras partes de los integrantes del Congreso cuando: a) En perjuicio del sujeto de fiscalización no se haya otorgado el derecho de audiencia o defensa; b) No se observen las formalidades esenciales del proceso de fiscalización; y c) Cuando se viole de manera flagrante la Ley; señalando que en tales casos el informe de resultados será devuelto al Órgano de Fiscalización Superior, para que atienda las observaciones.

Con la finalidad de que el Congreso dé cumplimiento a lo señalado en el párrafo anterior, la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato establece en su artículo 112, fracción XII que a esta Comisión de Hacienda y Fiscalización, le compete el conocimiento y dictamen de los asuntos relativos a los informes de resultados que emita la Auditoría Superior del Estado.

A efecto de cumplir con las atribuciones conferidas a esta Comisión, y en observancia a lo que establece la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato vigente en su momento, el presente dictamen se ocupará exclusivamente de los aspectos que la propia Ley señala y por los cuales podría ser observado o no, el informe de resultados.

II. Antecedentes:

En su momento, el artículo 117, fracción VII de la Constitución Política Local establecía como obligación de los ayuntamientos presentar al Congreso del Estado la cuenta pública del municipio, en el plazo, forma y términos que estableciera la Ley. Al respecto, el artículo 22 de la abrogada Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, señalaba que las cuentas públicas

de los municipios debían ser presentadas por periodos mensuales y a más tardar dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha en que concluyera el periodo de referencia.

La fracción VII del artículo 117 de la Constitución Política Local vigente señala que los ayuntamientos deberán presentar al Congreso del Estado la información financiera y la cuenta pública del Municipio, con la periodicidad, forma y términos que establezcan las disposiciones aplicables y la Ley.

En cuanto a la presentación, el artículo 20 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato abrogada establecía cómo debían integrarse las cuentas públicas que los sujetos de fiscalización remitieran al Congreso del Estado. Asimismo, el artículo 20 A establecía la integración de las cuentas públicas de los municipios que en términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de los documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable llevaran una contabilidad simplificada.

Por otra parte, el artículo 130 fracciones XIII y XIV de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato establece como atribución del tesorero municipal, remitir al Congreso del Estado, la cuenta pública municipal, misma que deberá ser firmada preferentemente por un integrante de la primera minoría de la Comisión de Hacienda en el Ayuntamiento; así como rendir los informes contables y financieros mensuales dentro del mes siguiente, y atender las observaciones que se formulen sobre los mismos; debiendo firmar además dichos informes el presidente municipal.

En su oportunidad se remitieron a este Congreso las cuentas públicas municipales de Doctor Mora, Gto., correspondientes al periodo comprendido por los meses de julio a diciembre del ejercicio fiscal del año 2015, turnándose al entonces Órgano de Fiscalización Superior, ahora Auditoría Superior del Estado para su revisión.

La revisión concluyó con la elaboración del informe de resultados materia del presente dictamen, remitiéndose al Congreso, el cual se turnó a esta Comisión el 15 de junio de 2017 para su estudio y dictamen, siendo radicado el 19 de junio del año en curso.

Con fundamento en el artículo 41 de la abrogada Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, el entonces Auditor General acordó acumular en el informe de resultados, las cuentas públicas mensuales correspondientes al periodo de referencia.

III. Procedimiento de Revisión:

El Órgano Técnico inició la revisión de las cuentas públicas correspondientes al periodo comprendido de julio a diciembre del ejercicio fiscal del año 2015, el 29 de junio de 2016 y tuvo por objetivo examinar las cifras que muestra la información financiera y presupuestal de las cuentas públicas de los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2015 y comprobar que la administración, control, utilización y destino de los recursos financieros, humanos y patrimoniales a cargo del municipio de Doctor Mora, Gto., fueron aplicados con transparencia y atendiendo a criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal, propiciando su óptimo aprovechamiento; asimismo, verificar que la actividad financiera se haya realizado con estricto apego a la Ley de Ingresos para dicho Municipio y al presupuesto de egresos autorizado, ambos para el ejercicio 2015, así como a los reglamentos y demás ordenamientos legales y normativos aplicables.

Con la finalidad de cumplir con lo establecido por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato aplicable al caso que nos ocupa, el informe de resultados establece las herramientas técnicas y métodos que se estimaron adecuados en la práctica de la revisión, señalando que ésta se efectuó de acuerdo con las normas emitidas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, que son aplicables al sector público, las que requieren que la auditoría sea planeada, realizada y supervisada, para obtener una seguridad razonable de que la información presentada en las cuentas públicas, no contiene errores importantes y que está integrada de acuerdo a las bases contables

emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Asimismo, el informe establece que se verificó con base en pruebas selectivas, la evidencia que respalda las transacciones realizadas, las que están soportadas en las cifras y revelaciones de las cuentas públicas, atendiendo a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental; en las bases y criterios establecidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable; en la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato; en la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato; en la Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal de 2015; en la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato; y en la Ley de Ingresos para el Municipio de Doctor Mora, Gto., para el Ejercicio Fiscal del año 2015. Lo anterior, de conformidad con lo establecido por los ordenamientos aplicables en la materia, incluyendo sus bases contables, utilizadas de acuerdo a los postulados básicos de contabilidad gubernamental; la presentación de la información financiera; las variaciones presupuestales; las estimaciones significativas hechas por la administración; los resultados de la gestión financiera; y la incidencia de sus operaciones en la hacienda pública del ente fiscalizado.

Como parte del proceso de revisión, en fechas 24 y 27 de febrero de 2017, se dio vista de las observaciones y recomendaciones a los titulares y ex-titulares del ente fiscalizado que fungieron como responsables del manejo del erario público durante el periodo sujeto a revisión, concediéndoles un plazo de treinta días hábiles para aclarar, atender o solventar documentalmente las observaciones determinadas por el Órgano Técnico. Lo anterior, para dar cumplimiento a lo preceptuado por los artículos 9 fracción V, 23, fracción IV y 24 de la abrogada Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato.

El 3 de abril de 2017, se presentó oficio de respuesta a las observaciones y recomendaciones derivadas de la revisión practicada, anexándose la información y documentación que se consideró suficiente para aclarar y en su caso, solventar las observaciones determinadas y atender las recomendaciones efectuadas. Una vez valorada la documentación aportada, se procedió a la elaboración del informe de resultados materia del presente dictamen.

El 31 de mayo de 2017, el informe de resultados se notificó al presidente, al tesorero y ex-tesorero y al ex-presidente municipales, así como al ex-presidente municipal interino de Doctor Mora, Gto., para que, en su caso, hicieran valer el recurso de reconsideración previsto por el artículo 39 de la abrogada Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, haciéndoles saber que contaban con un término de cinco días hábiles para tal efecto. Con lo anterior, se dio cumplimiento a la fracción VIII del artículo 23 de la citada Ley.

Este término transcurrió sin que, dentro del mismo, se hubiere promovido el recurso de reconsideración, como consta en la razón levantada por el Auditor Superior del Estado el 13 de junio de 2017, en la que se realiza el cómputo del término para la interposición del recurso, contado a partir de la fecha de la notificación del informe de resultados.

IV. Contenido del Informe de Resultados:

En cumplimiento a lo establecido por el artículo 43 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato aplicable al caso que nos ocupa, el informe de resultados contiene los siguientes apartados:

a) Conclusiones del proceso de fiscalización.

Por lo que se refiere a esta parte, se establecen los resultados de la gestión financiera que se reflejan en los rubros de ingresos, egresos, resultado del ejercicio, deuda pública y créditos por pagar; la evaluación y comprobación de los ingresos y gastos; la información técnica, financiera y contable que sirvió de apoyo a la evaluación; un análisis sintético del proceso de evaluación; y la propuesta de aprobación o desaprobación de los conceptos fiscalizados.

b) Análisis sobre el cumplimiento de los postulados básicos de contabilidad gubernamental y de los ordenamientos legales correspondientes.

En este punto se concluye que la administración municipal de Doctor Mora, Gto., cumplió con las bases contables aplicables a la institución y con los postulados básicos de contabilidad gubernamental.

c) Pliego de observaciones y recomendaciones derivadas de la revisión.

En este punto se desglosan las observaciones detectadas en la revisión practicada a las cuentas públicas municipales de Doctor Mora, Gto., por el periodo comprendido de julio a diciembre de 2015, en los apartados de Activo Circulante, Bienes Muebles, Ingresos y Otros Beneficios y Gastos y Otras Pérdidas. En cada una de las observaciones realizadas al sujeto fiscalizado, se plasman las acciones preventivas y correctivas que se deben llevar a cabo para subsanar las situaciones detectadas durante el proceso de revisión.

d) Diligencias y acciones practicadas para aclarar o solventar las observaciones y recomendaciones.

La inclusión de este punto se justifica para determinar que no se haya violentado el derecho de audiencia o defensa en perjuicio del sujeto fiscalizado. El informe concluye afirmando que se dio cabal cumplimiento a lo preceptuado por los artículos 9 fracción V, 23 fracciones IV y V y 24 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato abrogada, al haberse notificado a los responsables del manejo del erario público durante el periodo sujeto a revisión, las observaciones y recomendaciones determinadas, otorgándoles el plazo que señala la Ley para aclarar, atender o solventar documentalmente dichas observaciones.

De lo anterior, derivan las observaciones correspondientes a los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2015, que fueron solventadas y aclaradas, al haberse proporcionado la información y documentación que se consideró suficiente para tal efecto, las que se encuentran consignadas en el informe de resultados, por lo tanto en el presente dictamen omitiremos reiterarlas.

e) Informe sobre la situación que guardan las recomendaciones u observaciones que no fueron atendidas o solventadas.

En esta parte, se establece que se solventaron todas las observaciones.

f) Señalamiento de las irregularidades detectadas.

En este punto se hace constar que todas las observaciones se solventaron.

g) Observaciones y comentarios del Auditor Superior, derivados del proceso de fiscalización.

El Auditor Superior del Estado, concluyó que la información contenida en las cuentas públicas y los reportes documentales de las muestras examinadas, son parcialmente razonables en sus aspectos importantes, así como el ejercicio y aplicación de los recursos que fueron objeto de la fiscalización, todo ello producto del incumplimiento de diversas disposiciones legales.

Señalando además que los responsables del manejo de los recursos públicos del ente fiscalizado no incurrieron en actos u omisiones que hagan presumir la existencia de daños y perjuicios causados a la hacienda y patrimonio públicos del sujeto fiscalizado, como se establece en el dictamen de daños y perjuicios, pero que con independencia de ello en el dictamen técnico jurídico se precisan las acciones que en su caso deberán promoverse.

Asimismo, se establece que en ningún momento, las notificaciones que expide el Órgano Técnico, referentes a la solventación de observaciones como resultado de la fiscalización superior, liberan a las autoridades que manejan dichos recursos, de responsabilidades futuras que pudieran surgir con motivo del ejercicio de las facultades de revisión, referente a lo que no fue materia de la revisión, que con base a lo que establece la

Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato antes vigente, lleven a cabo las autoridades facultadas.

También se refiere que, de conformidad con lo dispuesto por la ley de la materia, es deber de todo servidor público custodiar la documentación e información que conserve o a la que tenga acceso por razón de su empleo, cargo o comisión, evitar o impedir el uso, sustracción, destrucción u ocultamiento indebidos de aquélla; así como guardar reserva de la información a que tenga acceso por su función, la que exclusivamente deberá ser usada para los fines a que esté afecta.

Finalmente, se informa que durante el proceso de valoración de respuestas, se efectuaron reintegros al patrimonio del ente fiscalizado.

h) Dictamen que establece la cuantía de los daños y perjuicios causados a la hacienda y patrimonio públicos del municipio de Doctor Mora, Gto.

En este punto se señala que toda vez que de la revisión de las cuentas públicas municipales de Doctor Mora, Gto., correspondientes al periodo comprendido por los meses de julio a diciembre del ejercicio fiscal del año 2015, no se desprendieron daños o perjuicios a la hacienda y patrimonio públicos del sujeto fiscalizado.

i) Dictamen técnico jurídico.

En este dictamen se establecen las consideraciones técnico-jurídicas derivadas de las irregularidades y deficiencias detectadas en la revisión practicada, concluyendo que se desprende la existencia de responsabilidades administrativas y penales.

Las responsabilidades administrativas se derivan de las observaciones plasmadas en los numerales 1, referente a gastos a reserva de comprobar; 2, relativo a depósitos de aportaciones de beneficiarios; 3, correspondiente a equipo de comunicación; 4, referido a ingreso por ocupación en la vía pública; y 6, referente a registros de gastos. Aun cuando dichas observaciones se solventaron durante la etapa correspondiente, persisten las responsabilidades administrativas que se generaron por la falta de cumplimiento oportuno de las obligaciones a cargo de servidores públicos.

De las observaciones establecidas en los numerales 2, relativo a depósitos de aportaciones de beneficiarios; 3, correspondiente a equipo de comunicación; y 4, referido a ingreso por ocupación en la vía pública, se presume la existencia de responsabilidades penales.

Por lo que hace a responsabilidades derivadas del dictamen de daños y perjuicios, el dictamen técnico jurídico establece que de la revisión practicada no se desprenden situaciones que hagan presumir la existencia de dichas responsabilidades.

Es así, que se establecen los hechos en que se fundan las responsabilidades determinadas, los presuntos responsables, las acciones que deberán promoverse y las autoridades que resultan competentes para conocer de dichas acciones.

En tal sentido, consideramos que dicho dictamen se encuentra suficientemente fundado y motivado, a efecto de ejercer las acciones legales que procedan ante las autoridades competentes.

V. Conclusiones:

Como ya lo habíamos señalado en párrafos anteriores, el artículo 45 de la abrogada Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, establece que los informes de resultados solamente podrán ser observados por las dos terceras partes del Congreso del Estado cuando: a) En perjuicio del sujeto de fiscalización no se haya otorgado el derecho de audiencia o defensa; b) No se observen las formalidades esenciales del proceso de fiscalización; y c) Cuando se viole de manera flagrante la Ley. Señalando que en tales casos el informe de resultados será devuelto al Órgano de Fiscalización Superior, a efecto de que atienda las observaciones.

En este sentido, quienes integramos esta Comisión analizamos el informe de resultados materia del presente dictamen, considerando las hipótesis referidas en el precepto anteriormente señalado.

Como se desprende del informe de resultados, en su oportunidad el Órgano Técnico dio cumplimiento a los artículos 9 fracción V, 23 fracción IV y 24 de la abrogada Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, al haberse notificado las observaciones y recomendaciones derivadas de la revisión a los funcionarios y ex-funcionarios de la administración municipal de Doctor Mora, Gto, que fungieron como responsables del manejo del erario público durante el periodo sujeto a revisión, concediéndoles el plazo que establece la Ley para aclarar, atender o solventar documentalmente las observaciones determinadas por el Órgano Técnico. Al respecto, se presentó la documentación que se consideró suficiente para aclarar y en su caso, solventar las observaciones determinadas y atender las recomendaciones efectuadas.

De igual manera, existe en el informe de resultados la constancia de que éste se notificó al presidente, al tesorero y ex-tesorero y al ex-presidente municipales, así como al ex-presidente municipal interino de Doctor Mora, Gto., concediéndoles el término señalado en el artículo 23 fracción VIII de la Ley de Fiscalización Superior del Estado abrogada, a efecto de que en su caso, hicieran valer el recurso de reconsideración que prevé el artículo 39 de dicho ordenamiento legal; no habiéndose presentado en este plazo el referido medio de impugnación, tal y como se desprende de la constancia expedida por el Auditor Superior del Estado y que obra en el informe de resultados. En tal virtud, se considera que fue respetado el derecho de audiencia o defensa por parte del Órgano Técnico.

Por otra parte, del informe de resultados podemos inferir que el Órgano Técnico en el desarrollo del procedimiento de revisión dio cumplimiento a las formalidades esenciales que la misma Ley establece para el proceso de fiscalización, al haberse practicado conforme a las normas de auditoría aplicables al sector público, atendiendo a lo establecido en la normatividad aplicable en la materia, incluyendo las bases contables aplicables a la institución, utilizadas de acuerdo a los postulados básicos de contabilidad gubernamental.

También se dio cumplimiento de manera puntual a las fases que se establecen para los procesos de fiscalización, concluyendo con la elaboración del informe de resultados, cuyo contenido es acorde con lo que establece el artículo 43 de la abrogada Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, destacando de manera relevante el dictamen técnico jurídico, que será el soporte para que se promuevan por parte del ayuntamiento de Doctor Mora, Gto., las acciones correspondientes, debiendo dar seguimiento la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato al ejercicio de dichas acciones. Asimismo, esta última deberá ejercer las acciones necesarias para poner en conocimiento del Ministerio Público los hechos probablemente constitutivos de responsabilidades penales.

Finalmente, no se desprende la existencia de alguna violación flagrante a la Ley, ya que el Órgano Técnico en la práctica de la revisión atendió lo preceptuado por la Ley de Fiscalización Superior del Estado antes vigente y en general la normatividad aplicable y los postulados básicos de contabilidad gubernamental.

En razón de lo anteriormente señalado, concluimos que el informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas públicas municipales de Doctor Mora, Gto., correspondientes al período comprendido de julio a diciembre del ejercicio fiscal del año 2015, debe sancionarse por el Congreso en los términos presentados por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato y proceder a su aprobación, considerando que no se presenta alguno de los supuestos contenidos en el artículo 45 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado aplicable al caso que nos ocupa, razón por la cual no podría ser observado por el Pleno del Congreso.

Por lo expuesto, con fundamento en el artículo 204 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, nos permitimos someter a la consideración de la Asamblea, la aprobación del siguiente:

A c u e r d o

Único. Con fundamento en el artículo 63 fracciones XIX y XXVIII de la Constitución

Política para el Estado, en relación con el artículo 23 fracción IX de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, abrogada mediante el decreto número 320 de la Sexagésima Segunda Legislatura, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 154, décima tercera parte, de fecha 25 de septiembre de 2015 y el artículo Tercero Transitorio de dicho decreto, se declaran revisadas las cuentas públicas municipales de Doctor Mora, Gto., correspondientes a los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del ejercicio fiscal del año 2015, con base en el informe de resultados formulado por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato.

Se tienen por solventadas todas las observaciones contenidas en el informe de resultados.

Con fundamento en los artículos 48 y 49 de la abrogada Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, el Auditor Superior del Estado de Guanajuato promoverá las acciones necesarias para el fincamiento de las responsabilidades administrativas determinadas en el dictamen técnico jurídico contenido en el informe de resultados; y pondrá en conocimiento del Ministerio Público los hechos probablemente constitutivos de delitos cometidos en perjuicio de la administración y hacienda públicas del municipio de Doctor Mora, Gto., por quien o quienes resulten responsables, coadyuvando con dicha autoridad en la investigación.

Se ordena dar vista del informe de resultados al ayuntamiento del municipio de Doctor Mora, Gto., a efecto de que con base en el dictamen técnico jurídico contenido en el informe de resultados, se proceda al fincamiento de las responsabilidades administrativas a que haya lugar, informando a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato de las acciones realizadas para ello, con objeto de que esta última realice el seguimiento correspondiente.

Remítase el presente acuerdo al titular del Poder Ejecutivo del Estado para su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

De igual forma, se ordena la remisión del presente acuerdo junto con su dictamen y el informe de resultados al ayuntamiento del municipio de Doctor Mora, Gto., y a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, para los efectos de su competencia.

Guanajuato, Gto., 2 de octubre de 2017. La Comisión de Hacienda y Fiscalización. Dip. Elvira Paniagua Rodríguez. Dip. Angélica Casillas Martínez. Dip. María Alejandra Torres Novoa. (Con observación) **Dip. Juan Carlos Muñoz Márquez. Dip. María Guadalupe Velázquez Díaz.»**

DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL DICTAMEN EMITIDO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA Y FISCALIZACIÓN, RELATIVO AL INFORME DE RESULTADOS DE LA AUDITORÍA DE DESEMPEÑO PRACTICADA A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2016.

»C. Presidenta del Congreso del Estado. Presente.

A esta Comisión de Hacienda y Fiscalización le fue turnado para su estudio y dictamen, el **informe de resultados de la auditoría de desempeño practicada por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato a la administración municipal de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Gto., correspondiente al periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 2016.**

Una vez analizado el referido informe de resultados, con fundamento en los artículos 112, fracción XII y 171 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, nos permitimos rendir el siguiente:

D i c t a m e n

I. Competencia:

Las facultades de la legislatura local en materia de fiscalización de las cuentas públicas

tienen su fundamento en lo dispuesto por el artículo 63 fracciones XVIII, XIX y XXVIII de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato. Estos dispositivos establecen que el Congreso del Estado tiene la facultad de fiscalizar la cuenta pública del Poder Ejecutivo, incluyendo las de las entidades y organismos de la administración pública paraestatal, las del Poder Judicial y de los organismos autónomos; así como las cuentas públicas municipales, incluyendo las de las entidades y organismos de la administración pública paramunicipal; y verificar el desempeño en el cumplimiento de los objetivos de los programas. De igual manera, puede acordar la práctica de auditorías a los sujetos de fiscalización, cuando exista causa justificada para ello, auxiliándose para el cumplimiento de dichas facultades por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato.

Asimismo, el artículo 66 fracción VIII de dicho Ordenamiento Constitucional establece que la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato deberá informar al Congreso del Estado del resultado de la revisión de la cuenta pública y demás asuntos derivados de la fiscalización, incluyendo los dictámenes, informes de resultados, comentarios y observaciones de las auditorías, constituyendo una de las fases del proceso de fiscalización.

De igual forma, el artículo 82, fracción XXIV de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato establece como atribución de la Auditoría Superior del Estado, rendir al Congreso, los informes derivados del ejercicio de la función de fiscalización.

En razón de lo cual, la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato establece que la Auditoría Superior debe remitir los informes de resultados al Congreso del Estado, a efecto de que éste realice la declaratoria correspondiente, señalándose en el artículo 38 que el informe de resultados únicamente podrá ser observado por las dos terceras partes de los integrantes del Congreso cuando: a) En perjuicio del sujeto de fiscalización no se haya otorgado el derecho de audiencia o defensa; b) Cuando no se hayan valorado las documentales aportadas por el sujeto de fiscalización durante el procedimiento de fiscalización hasta la notificación del informe de resultados; y c) No se observen las formalidades esenciales del proceso de fiscalización.

Con la finalidad de que el Congreso dé cumplimiento a lo señalado en el párrafo anterior, la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato establece en su artículo 112, fracción XII que a esta Comisión de Hacienda y Fiscalización, le compete el conocimiento y dictamen de los asuntos relativos a los informes de resultados que emita la Auditoría Superior del Estado.

A efecto de cumplir con las atribuciones conferidas a esta Comisión, y en observancia a lo que establece la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, el presente dictamen se ocupará exclusivamente de los aspectos que la propia Ley señala y por los cuales podría ser observado o no, el informe de resultados.

II. Antecedentes:

De conformidad con el artículo 66, fracción I de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, es atribución de la Auditoría Superior del Estado realizar auditorías de desempeño en el cumplimiento de objetivos y metas contenidos en los programas, de las cuales sólo podrá emitir las recomendaciones para la mejora en el desempeño, en los términos de la Ley.

Por su parte, el artículo 3, fracción V de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato señala que la Auditoría Superior del Estado es competente para practicar auditorías de desempeño para verificar el cumplimiento de los objetivos y las metas de los programas estatales y municipales.

De igual forma, el artículo 56 de la Ley de Fiscalización Superior señala que las auditorías de desempeño comprenden la revisión del cumplimiento de las metas y objetivos de los planes y programas, conforme a los principios de eficiencia, eficacia y economía; así como la evaluación de las políticas públicas; estableciendo además que la Auditoría Superior del Estado realizará las auditorías de desempeño de manera anual y únicamente formulará recomendaciones que incidan en mejorar sistemáticamente el diseño,

operación e impacto de los presupuestos programáticos y las políticas públicas en su caso.

Por su parte, los artículos 59 y 60 de la citada Ley refieren que los informes de resultados de auditorías de desempeño contendrán los requisitos señalados en el Reglamento de la Ley y que la Auditoría Superior del Estado, remitirá dichos informes al Congreso a más tardar el 30 de septiembre del ejercicio fiscal de que se trate.

De lo anterior podemos desprender que el Órgano Técnico realizará la evaluación sobre desempeño de manera anual y únicamente formulará recomendaciones que incidan en la mejora del diseño, operación e impacto de los presupuestos programáticos y las políticas públicas en su caso.

Finalmente, el artículo 16 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, consigna que la Auditoría Superior establecerá un Programa General de Fiscalización, señalando los actos y sujetos de fiscalización, los que serán objeto de auditoría o revisión conforme a los criterios y normas que se establezcan en el Reglamento de la Ley.

En ejercicio de esta función, el Auditor Superior del Estado aprobó el Programa General de Fiscalización 2017. En dicho Programa se contempló la práctica de una auditoría de desempeño a la administración municipal de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Gto., correspondiente al periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 2016.

El 28 de abril de 2017 dio inicio la auditoría materia del presente dictamen. En la misma fecha, la Auditoría Superior del Estado requirió al sujeto de fiscalización diversa información que se consideró necesaria para llevar a cabo la auditoría, misma que fue entregada por el sujeto fiscalizado el 5 de mayo de 2017.

Como parte del proceso de auditoría, el 14 de junio de 2017 se notificó al sujeto fiscalizado el pliego de recomendaciones derivadas de la auditoría practicada. Lo anterior, para dar cumplimiento a lo preceptuado por el artículo 58 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato.

Mediante oficio de fecha 19 de junio de 2017, el sujeto fiscalizado dio respuesta a las recomendaciones derivadas de la auditoría practicada, anexándose la información y documentación que se consideró suficiente para precisar las mejoras efectuadas, las acciones a realizar o en su caso, justificar la improcedencia por la cual no resulte factible su implementación. Una vez valorada la documentación aportada se procedió a la elaboración del informe de resultados materia del presente dictamen.

El informe de resultados se notificó al sujeto fiscalizado el 10 de julio de 2017.

Es importante señalar que de acuerdo a lo previsto en los artículos 60 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato; y 60 del Reglamento de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, tratándose de las auditorías de desempeño es improcedente el recurso de reconsideración en contra del informe de resultados, por lo que una vez notificado el mismo al sujeto de fiscalización, se remite al Congreso para los efectos procedentes.

En razón de lo anterior, el Auditor Superior del Estado remitió a este Congreso del Estado, el informe de resultados, el cual se turnó a esta Comisión de Hacienda y Fiscalización el 10 de agosto de 2017 para su estudio y dictamen, siendo radicado el 21 de agosto de 2017.

IV. Contenido del Informe de Resultados:

Con fundamento en los artículos 59 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato y 26 del Reglamento de dicha Ley, el informe de resultados contiene los siguientes apartados: Introducción; Resultado del Proceso de Fiscalización; Resumen de las Recomendaciones; y Conclusión General.

a) Introducción.

Por lo que se refiere a esta parte, se señala que las auditorías de desempeño deben proporcionar recomendaciones constructivas que contribuyan significativamente a abordar las debilidades o problemas identificados, añadiendo valor en la planeación, programación, ejercicio, control, evaluación, resultados e impactos del sector público.

Es así, que la naturaleza técnico-jurídica de las auditorías de desempeño difiere de otras auditorías, pues el resultado se expresa con la emisión, en su caso, de exclusivamente recomendaciones, distinguiéndose de otros actos de fiscalización o control que pueden arrojar observaciones y determinar presuntos responsables. Se trata de una tarea reglada y sistémica de evaluación para la mejora continua, detectando debilidades, áreas de oportunidad, amenazas e incluso fortalezas en el ámbito público, pero promoviendo además acciones concretas que permitan superar o potenciar las mismas, dando adicionalmente seguimiento a su eventual implementación por los sujetos públicos responsables.

Respecto al marco normativo aplicable, se precisa la normatividad aplicable a la función de fiscalización a cargo del Poder Legislativo del Estado, siendo ésta: Artículos 116, fracción II y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, párrafo primero, 63, fracciones XVIII y XIX y 66, fracciones I y II de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; 3, fracción V, 56, 57, 58, 59 y 60 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato; 18 del Reglamento de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato; y 42 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.

Con base en lo anterior, la auditoría de desempeño materia del presente dictamen, se ejecutó bajo los principios, conceptos y directrices de las actuales Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización, compiladas y editadas por la Auditoría Superior de la Federación, de manera particular por lo que hace a sus numerales 100 y 300.

En esta parte también se puntualiza que las auditorías de desempeño que se practican por la Auditoría Superior del Estado son congruentes con las metodologías señaladas por las Normas Internacionales para Entidades Fiscalizadoras Superiores 100, 300, 3000 y 3100, emitidas por la Organización Internacional de Instituciones de Fiscalización Superior, sin omitir como criterio referencial al Manual de Formulación de Programas con la Metodología de Marco Lógico, así como al de Metodología de Marco Lógico para la Planificación, el Seguimiento y la Evaluación de Proyectos y Programas, ambos editados por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe; la Guía para la Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados, emitida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y el Manual para el Diseño y Construcción de Indicadores, editado también por el citado organismo en 2014, entre otros.

De igual forma, se menciona que el 24 de marzo de 2017 se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el Manual para las Auditorías al Desempeño de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato.

En esta parte también se establece que la auditoría tuvo como directriz los principios institucionales de objetividad, definitividad, confiabilidad, imparcialidad, independencia, transparencia, legalidad y profesionalismo.

En cuanto al punto correspondiente a la estructura del informe y valoración, se señala que el artículo 26 del Reglamento de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato refiere los requisitos mínimos que deben contener los informes de resultados de las auditorías de desempeño, los cuales se cumplieron en la formulación del informe de resultados.

Por otra parte, el artículo 27 del Reglamento de referencia, establece que el informe de resultados deberá estar debidamente fundado y motivado, así como presentar los hechos y su evaluación de manera objetiva, clara y acotada a los elementos esenciales. De lo anterior, se concluye en esta parte que la redacción del informe de resultados materia del presente dictamen es precisa y comprensible.

Por lo que hace a la valoración de la respuesta del sujeto fiscalizado, el Órgano

Técnico determinó lo conducente respecto a las recomendaciones emitidas, para lo cual realizó un análisis de la documentación y evidencia proporcionada por el sujeto fiscalizado, a fin de valorar si éste efectuó mejoras, si realizará alguna acción o emitió la justificación correspondiente sobre la improcedencia por la cual no resulte factible su implementación o bien, la consideración de medidas alternas que fortalezcan el desempeño de la gestión pública. Asimismo, se señala que las recomendaciones efectuadas al sujeto fiscalizado podrían considerarse como persistentes, cuando no sea posible valorarlas en alguno de los supuestos antes referidos.

Es así, que la valoración realizada por la Auditoría Superior del Estado redunda en las manifestaciones, argumentos, acciones y evidencia presentada en la respuesta al pliego de recomendaciones, para lo cual la evidencia aportada por el sujeto fiscalizado debe ser competente, pertinente, suficiente y relevante.

Respecto al objetivo, periodo y alcance de la auditoría se señala que en las auditorías de desempeño se plantea como objetivo general promover constructivamente la gestión económica, eficaz y eficiente de los recursos públicos, así como contribuir a la transparencia y rendición de cuentas de la Administración Pública.

La auditoría de desempeño busca brindar información, análisis o perspectivas, y cuando corresponda, recomendaciones de mejora. Dicha auditoría también persigue añadir valor público, abordando las causas de los problemas y debilidades de forma práctica, lógica y racional, con la intención de mejorar significativamente el desempeño de los programas públicos.

Asimismo, por medio de las auditorías de desempeño, la Auditoría Superior del Estado analiza el cumplimiento de metas y objetivos de las políticas, planes, programas, proyectos y, en general, de las acciones gubernamentales de los sujetos fiscalizados, identificando la fortaleza y retos en su diseño, operación, seguimiento, monitoreo, impacto y evaluación, proponiendo alternativas para su mejora.

Por lo que respecta a la auditoría que nos ocupa se tuvo por objetivo particular fiscalizar el correcto diseño de un Programa Presupuestario del municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Gto., conforme a la Metodología del Marco Lógico, incluyendo su Matriz de Indicadores para Resultados, así como el cumplimiento oportuno de sus metas planeadas.

Del objetivo antes descrito se desprenden los siguientes objetivos específicos: Formulación y justificación del Programa Presupuestario; contribución del Programa Presupuestario a las metas y estrategias de planeación para el desarrollo municipal; consistencia de la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa auditado; y presupuestación y cumplimiento de las metas proyectadas en su caso para el Programa Presupuestario, calificando porcentualmente su culminación o ejercicio al cierre del ciclo presupuestal anual.

También se señala que en la auditoría materia del presente dictamen se aplicó un enfoque de consistencia y resultados, dado que se revisó la formulación de un Programa Presupuestario Municipal, así como el cumplimiento de metas del mismo, proveyendo información que retroalimenta su diseño, gestión y resultados.

Es así que los objetivos específicos se desarrollaron en la auditoría en los siguientes resultados:

Formulación y justificación del Programa:

- Diagnóstico de la situación problema.
- Población potencial y objetivo.
- Árbol de problemas.
- Árbol de objetivos.
- Correspondencia entre los árboles.

Contribución a las metas y estrategias de la planeación para el Desarrollo Municipal:

- Correspondencia entre el fin y el Plan Municipal de Desarrollo.

Consistencia de la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa:

- Fin.
- Propósito.
- Componentes.
- Actividades.
- Supuestos a nivel Propósito y a nivel Fin.
- Supuestos a nivel Componente y a nivel Actividades.
- Indicadores a nivel Propósito.
- Indicadores a nivel Componente.
- Fichas técnicas para cada uno de los indicadores.
- Medios de verificación.

Presupuestación y cumplimiento de metas:

- Inclusión del Programa en Presupuesto.
- Avance en el cumplimiento de metas programadas para componentes en el ejercicio fiscal.

También se señala que en las auditorías de desempeño son coincidentes su alcance temporal con el ciclo presupuestal anual al cual puede retroalimentar, sin que ello sea obstáculo para que se utilice por el Órgano Técnico tanto información histórica de anualidades pasadas como elementos actuales o simultáneos a la auditoría, considerando en este último caso que la misma busca mejorar la gestión y no exclusivamente regularizar hechos pasados o retrotraer acciones de mejora, que en la mayoría de los casos es materialmente inviable.

Respecto a los antecedentes del proceso de fiscalización, éstos ya se detallaron en el apartado correspondiente.

En lo correspondiente al contexto general de la materia a auditar se describe brevemente el origen y la evolución de la política pública, así como la unidad responsable del Programa materia de la auditoría.

Al respecto, se establece que el Programa de Gobierno 2015-2018 del municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Gto., considera en el Eje 2 «Dolores Hidalgo con Bienestar y Seguridad Social», la línea estratégica «Mayor Calidad de Vida» y el objetivo específico «Atención de necesidades básicas para elevar la calidad de vida en las personas».

Asimismo, el Programa Presupuestario «E2005 Instituto Municipal de la Vivienda», tiene por objetivo la atención de necesidades básicas para elevar la calidad de vida en las personas y para lograrlo se le asignó un presupuesto de $6'636,100.00, para contribuir a incrementar las capacidades y satisfactores básicos de los guanajuatenses para superar el rezago, permitiendo la escala y cohesión social a través de políticas focalizadas.

En esta parte también se señala que el Programa objeto de la revisión se seleccionó a partir de la información proporcionada por el sujeto fiscalizado en los informes financieros trimestrales, en la cuenta pública y en su respuesta al requerimiento de información formulado en su momento por la Auditoría Superior del Estado, considerando la asignación presupuestal, el cúmulo y la calidad de la información que sirvió de sustento para su construcción metodológica.

En la parte correspondiente a la unidad responsable, se establece que de acuerdo a la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, para el estudio y despacho de los diversos ramos de la administración pública municipal, el ayuntamiento de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Gto., estableció al Instituto Municipal de la Vivienda, el cual es responsable del Programa «E2005 Instituto Municipal de la Vivienda».

En la parte conducente a criterio general, se señala que la Ley General de Contabilidad Gubernamental tiene por objeto establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada

armonización, y en general, contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingresos públicos.

En este orden de ideas, el artículo 54 del referido ordenamiento establece que la información presupuestaria y programática que forme parte de la cuenta pública debe relacionarse con los objetivos y prioridades de la planeación del desarrollo; debiendo incluir también los resultados de la evaluación del desempeño de los programas municipales, así como los vinculados al ejercicio de los recursos federales que les hayan sido transferidos, para lo cual se deben utilizar indicadores que permitan determinar el cumplimiento de las metas y objetivos de cada uno de los programas, así como vincular los mismos con la planeación del desarrollo.

Por su parte, el artículo 61 de la citada Ley establece que los municipios incluirán en sus presupuestos de egresos, apartados específicos con la aplicación de los recursos conforme a las clasificaciones administrativa, funcional, programática, económica y, en su caso, geográfica y sus interrelaciones que faciliten el análisis para valorar la eficiencia y eficacia en el uso y destino de los recursos y sus resultados; señalando que en el proceso de integración de la información financiera para la elaboración de los presupuestos, se deberán incorporar los resultados que deriven de los procesos de implantación y operación del presupuesto basado en resultados y del sistema de evaluación del desempeño, establecidos en términos del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Asimismo, el artículo 6 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental consigna que el Consejo Nacional de Armonización Contable es el órgano de coordinación y tiene por objeto la emisión de las normas contables y lineamientos para la generación de información financiera que aplicarán los entes públicos, los cuales adoptarán e implementarán las decisiones del Consejo con carácter obligatorio, de acuerdo a lo señalado en el artículo 7 de la citada Ley.

En razón de lo anterior, el Consejo Nacional de Armonización Contable emitió los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología del Marco Lógico, mismos que son obligatorios para todos los entes públicos. Conforme a los citados lineamientos, para la generación, homologación, actualización y publicación de los indicadores de desempeño de los programas operados por los entes públicos deben considerar la Matriz de Indicadores para Resultados, definida por dichos lineamientos.

Los artículos 3, fracción XXV y 102 sexies de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato establecen que el Sistema de Evaluación al Desempeño es el conjunto de elementos metodológicos que permiten realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores que permitan conocer el impacto social de los programas y de los proyectos. En el caso de los municipios la Tesorería Municipal emitirá y aplicará dicho Sistema.

Finalmente, se establece que el artículo 70 de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato refiere que los ejecutores del gasto serán los responsables de la gestión por resultados, por lo que deberán cumplir los objetivos y metas contenidos en sus programas presupuestarios, conforme a lo dispuesto en los presupuestos de egresos, programas de Gobierno y demás normativa aplicable.

b) Resultado del proceso de fiscalización.

Por lo que se refiere a este punto, se presentan los resultados de la auditoría realizada, estableciendo las recomendaciones formuladas al sujeto fiscalizado, plasmando en cada una las acciones preventivas y correctivas que se deben llevar a cabo para subsanar las situaciones detectadas durante el proceso de auditoría.

Derivado de lo anterior, se formulan los resultados y recomendaciones contenidos en los rubros de Formulación y Justificación del Programa Presupuestario; Contribución a

las Metas y Estrategias de la Planeación para el Desarrollo Municipal; Consistencia de la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario; y Presupuestación y Cumplimiento de Metas.

En tal sentido, en el rubro de Formulación y Justificación del Programa Presupuestario, se formularon las recomendaciones plasmadas en los puntos 1, del resultado número 1, referente a diagnóstico de la situación-problema; 2, contenido en el resultado número 2, relativo a población potencial y objetivo; 3 del resultado número 3, referido a árbol de problemas; 4 del resultado número 4, correspondiente a árbol de objetivos; y 5 del resultado número 5, referente a correspondencia entre los árboles. Respecto al rubro de Consistencia de la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario, se refieren las recomendaciones contenidas en los puntos 6 del resultado número 8, correspondiente a propósito; 7 del resultado número 9, referente a componentes; 8 del resultado número 10, relativo a actividades; 9 del resultado número 11, referido a supuestos a nivel propósito y a nivel fin; 10 del resultado número 12, correspondiente a supuestos a nivel componente y a nivel actividades; 11 del resultado número 13, referente a indicadores a nivel propósito; 12 del resultado número 14, relativo a indicadores a nivel componente; 13 del resultado número 15, referido a fichas técnicas para cada uno de los indicadores; y 14 del resultado número 16, correspondiente a medios de verificación. Por lo que hace al apartado de Presupuestación y Cumplimiento de Metas, se formula la recomendación plasmada en el punto 15 del resultado número 18, referido a avance en el cumplimiento de metas programadas para componentes en el ejercicio fiscal.

En el caso del resultado número 6, plasmado en el rubro de Contribución a las Metas y Estrategias de la Planeación para el Desarrollo Municipal, correspondiente a alineación con los instrumentos de planeación; del resultado contenido en el apartado de Consistencia de la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario, número 7, referente a fin; y del resultado número 17 del apartado de Presupuestación y Cumplimiento de Metas, referido a inclusión de programa presupuestario, éstos no generaron recomendaciones por parte de la Auditoría Superior del Estado.

c) Resumen de las recomendaciones

En este punto se establece un resumen de los resultados que generaron recomendación, producto de un área de oportunidad o mejora sugerida por la Auditoría Superior del Estado, los cuales se clasifican agrupados bajo su respectiva vertiente, con la síntesis de la valoración efectuada, precisando que el sujeto fiscalizado en su oficio de respuesta al pliego de recomendaciones no acreditó con evidencia la acción de mejora realizada o por realizar, por lo que el Órgano Técnico dará el seguimiento en la etapa correspondiente a las 15 recomendaciones.

d) Conclusión General.

La Auditoría Superior del Estado concluyó en cuanto a la formulación y justificación del Programa Presupuestario objeto de la auditoría, que el municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Gto., siguió parcialmente la Metodología del Marco Lógico, conforme a la normativa y mejores prácticas en la materia; dado que cuenta con áreas de oportunidad para mejorar la justificación del Programa revisado, como se desprende de las recomendaciones formuladas en el informe de resultados.

Con respecto a la contribución a las metas y estrategias de la Planeación para el Desarrollo Municipal se señala que se cuenta con una vinculación específica entre los instrumentos de planeación actualizados y el programa presupuestario auditado.

Por lo que hace a la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario, se informa que el sujeto fiscalizado no cumplió con varios de los postulados que establece la normativa y la metodología aplicables para dicha matriz de control, monitoreo, seguimiento y evaluación, por lo que se plantean en áreas de oportunidad o mejoras descritas en el informe de resultados.

En cuanto al cumplimiento de metas, el municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Gto., presenta una oportunidad de mejora al incluir metas cuantificadas para mejorar el monitoreo y seguimiento.

Lo anterior, con el objetivo de que el Programa auditado logre los resultados esperados, partiendo de que su apropiado o correcto diseño le permita cumplir en su operación con las dimensiones de eficacia, eficiencia, economía y calidad, premisas que mandata la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Finalmente, se informa que el seguimiento a las recomendaciones respecto de las cuales el sujeto fiscalizado realizará acciones o mejoras en un plazo determinado, se efectuará por la Auditoría Superior del Estado, hasta la total implementación de las mismas, de conformidad con lo establecido en la normativa aplicable.

V. Conclusiones:

Como ya lo habíamos señalado en párrafos anteriores, el artículo 38 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato establece que los informes de resultados solamente podrán ser observados por las dos terceras partes de los diputados integrantes del Congreso del Estado, cuando: I. En perjuicio del sujeto de fiscalización no se haya otorgado el derecho de audiencia o defensa; II. No se hayan valorado las documentales aportadas por el sujeto de fiscalización durante el procedimiento de fiscalización hasta la notificación del informe de resultados; y III. No se observen las formalidades esenciales del proceso de fiscalización. Señalando que en tales casos la Auditoría Superior del Estado, deberá atender las observaciones correspondientes.

En este sentido, quienes integramos esta Comisión analizamos el informe de resultados materia del presente dictamen, considerando las hipótesis referidas en el precepto anteriormente señalado.

Como se desprende del informe de resultados, el Órgano Técnico dio cumplimiento al artículo 58 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, al haberse notificado las recomendaciones derivadas de la auditoría al sujeto fiscalizado, concediéndole el plazo que establece la Ley para atender las recomendaciones formuladas por el Órgano Técnico. Al respecto, se presentó la información y documentación que se consideró suficiente para atender las recomendaciones efectuadas.

De igual manera, existe en el informe de resultados la constancia de que éste se notificó al sujeto fiscalizado. En tal virtud, se considera que fue respetado el derecho de audiencia o defensa por parte del Órgano Técnico.

Por otra parte, del informe de resultados podemos desprender que el Órgano Técnico procedió a la valoración de las documentales aportadas por el sujeto de fiscalización durante el procedimiento de fiscalización, lo cual se refleja en dicho informe de resultados.

Finalmente, del informe de resultados podemos inferir que el Órgano Técnico en el desarrollo del procedimiento de auditoría, dio cumplimiento a las formalidades esenciales que la misma Ley establece para el proceso de fiscalización, al haberse practicado la auditoría que estaba contemplada en el Programa General de Fiscalización 2017, aprobado por el Auditor Superior del Estado. Asimismo, la auditoría se efectuó atendiendo a lo establecido en la normatividad aplicable en la materia, cumpliendo lo estipulado por el artículo 3 y el Capítulo VI del Título Segundo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, así como el artículo 28 del Reglamento de dicha Ley.

En razón de lo anteriormente señalado, concluimos que el informe de resultados de la auditoría de desempeño practicada a la administración municipal de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2016, debe sancionarse por el Congreso en los términos presentados por la Auditoría Superior del Estado y proceder a su aprobación, considerando que no se presenta alguno de los supuestos contenidos en el artículo 38 de la Ley de Fiscalización Superior

del Estado de Guanajuato, razón por la cual no podría ser observado por el Pleno del Congreso.

Por lo expuesto, con fundamento en el artículo 204 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, nos permitimos someter a la consideración de la Asamblea, la aprobación del siguiente:

A C U E R D O

Único. Con fundamento en el artículo 63 fracción XIX de la Constitución Política para el Estado, en relación con los artículos 3, fracción V, 5, fracción IV, 56, 59 y 60 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato y 28 del Reglamento de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, se aprueba el informe de resultados formulado por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, de la auditoría de desempeño practicada a la administración municipal de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Gto., correspondiente al periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 2016.

Se ordena dar vista del informe de resultados al ayuntamiento del municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Gto., a efecto de que se atiendan las recomendaciones contenidas en el informe de resultados, informando a la Auditoría Superior del Estado de las acciones realizadas para ello, con objeto de que esta última realice el seguimiento correspondiente, previsto en los artículos 37, fracción VII, 65 y 66 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato y 77 del Reglamento de dicha Ley.

Remítase el presente acuerdo junto con su dictamen y el informe de resultados al ayuntamiento del municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Gto., así como a la Auditoría Superior del Estado, para los efectos de su competencia.

Guanajuato, Gto., 2 de octubre de 2017. La Comisión de Hacienda y Fiscalización. Dip. Elvira Paniagua Rodríguez. Dip. Angélica Casillas Martínez. Dip. María Alejandra Torres Novoa. Dip. Juan Carlos Muñoz Márquez. Dip. María Guadalupe Velázquez Díaz.»

DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL DICTAMEN PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA Y FISCALIZACIÓN, RELATIVO AL INFORME DE RESULTADOS DE LA AUDITORÍA DE DESEMPEÑO PRACTICADA A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SALAMANCA, GTO., CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2016.

»C. Presidenta del Congreso del Estado. Presente.

A esta Comisión de Hacienda y Fiscalización le fue turnado para su estudio y dictamen, el **informe de resultados de la auditoría de desempeño practicada por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato a la administración municipal de Salamanca, Gto., correspondiente al periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 2016.**

Una vez analizado el referido informe de resultados, con fundamento en los artículos 112, fracción XII y 171 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, nos permitimos rendir el siguiente:

D i c t a m e n

I. Competencia:

Las facultades de la legislatura local en materia de fiscalización de las cuentas públicas tienen su fundamento en lo dispuesto por el artículo 63 fracciones XVIII, XIX y XXVIII de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato. Estos dispositivos establecen que el Congreso del Estado tiene la facultad de fiscalizar la cuenta pública del Poder Ejecutivo, incluyendo las de las entidades y organismos de la administración pública paraestatal, las del Poder Judicial y de los organismos autónomos; así como las cuentas públicas municipales, incluyendo las de las entidades y organismos de la administración pública paramunicipal; y verificar el desempeño en el cumplimiento de los objetivos de los programas. De igual manera, puede acordar la práctica de auditorías a los sujetos de

fiscalización, cuando exista causa justificada para ello, auxiliándose para el cumplimiento de dichas facultades por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato.

Asimismo, el artículo 66 fracción VIII de dicho Ordenamiento Constitucional establece que la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato deberá informar al Congreso del Estado del resultado de la revisión de la cuenta pública y demás asuntos derivados de la fiscalización, incluyendo los dictámenes, informes de resultados, comentarios y observaciones de las auditorías, constituyendo una de las fases del proceso de fiscalización.

De igual forma, el artículo 82, fracción XXIV de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato establece como atribución de la Auditoría Superior del Estado, rendir al Congreso, los informes derivados del ejercicio de la función de fiscalización.

En razón de lo cual, la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato establece que la Auditoría Superior debe remitir los informes de resultados al Congreso del Estado, a efecto de que éste realice la declaratoria correspondiente, señalándose en el artículo 38 que el informe de resultados únicamente podrá ser observado por las dos terceras partes de los integrantes del Congreso cuando: a) En perjuicio del sujeto de fiscalización no se haya otorgado el derecho de audiencia o defensa; b) Cuando no se hayan valorado las documentales aportadas por el sujeto de fiscalización durante el procedimiento de fiscalización hasta la notificación del informe de resultados; y c) No se observen las formalidades esenciales del proceso de fiscalización.

Con la finalidad de que el Congreso dé cumplimiento a lo señalado en el párrafo anterior, la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato establece en su artículo 112, fracción XII que a esta Comisión de Hacienda y Fiscalización, le compete el conocimiento y dictamen de los asuntos relativos a los informes de resultados que emita la Auditoría Superior del Estado.

A efecto de cumplir con las atribuciones conferidas a esta Comisión, y en observancia a lo que establece la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, el presente dictamen se ocupará exclusivamente de los aspectos que la propia Ley señala y por los cuales podría ser observado o no, el informe de resultados.

II. Antecedentes:

De conformidad con el artículo 66, fracción I de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, es atribución de la Auditoría Superior del Estado realizar auditorías de desempeño en el cumplimiento de objetivos y metas contenidos en los programas, de las cuales sólo podrá emitir las recomendaciones para la mejora en el desempeño, en los términos de la Ley.

Por su parte, el artículo 3, fracción V de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato señala que la Auditoría Superior del Estado es competente para practicar auditorías de desempeño para verificar el cumplimiento de los objetivos y las metas de los programas estatales y municipales.

De igual forma, el artículo 56 de la Ley de Fiscalización Superior señala que las auditorías de desempeño comprenden la revisión del cumplimiento de las metas y objetivos de los planes y programas, conforme a los principios de eficiencia, eficacia y economía; así como la evaluación de las políticas públicas; estableciendo además que la Auditoría Superior del Estado realizará las auditorías de desempeño de manera anual y únicamente formulará recomendaciones que incidan en mejorar sistemáticamente el diseño, operación e impacto de los presupuestos programáticos y las políticas públicas en su caso.

Por su parte, los artículos 59 y 60 de la citada Ley refieren que los informes de resultados de auditorías de desempeño contendrán los requisitos señalados en el Reglamento de la Ley y que la Auditoría Superior del Estado, remitirá dichos informes al Congreso a más tardar el 30 de septiembre del ejercicio fiscal de que se trate.

De lo anterior podemos desprender que el Órgano Técnico realizará la evaluación sobre desempeño de manera anual y únicamente formulará recomendaciones que incidan en la mejora del diseño, operación e impacto de los presupuestos programáticos y las políticas públicas en su caso.

Finalmente, el artículo 16 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, consigna que la Auditoría Superior establecerá un Programa General de Fiscalización, señalando los actos y sujetos de fiscalización, los que serán objeto de auditoría o revisión conforme a los criterios y normas que se establezcan en el Reglamento de la Ley.

En ejercicio de esta función, el Auditor Superior del Estado aprobó el Programa General de Fiscalización 2017. En dicho Programa se contempló la práctica de una auditoría de desempeño a la administración municipal de Salamanca, Gto., correspondiente al periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 2016.

El 21 de abril de 2017 dio inicio la auditoría materia del presente dictamen. En la misma fecha, la Auditoría Superior del Estado requirió al sujeto de fiscalización diversa información que se consideró necesaria para llevar a cabo la auditoría, misma que se entregó por parte del sujeto fiscalizado el 3 de mayo de 2017.

Como parte del proceso de auditoría, el 21 de junio de 2017 se notificó al sujeto fiscalizado el pliego de recomendaciones derivadas de la auditoría practicada. Lo anterior, para dar cumplimiento a lo preceptuado por el artículo 58 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato.

El sujeto fiscalizado no dio respuesta a las recomendaciones derivadas de la auditoría practicada. Una vez agotado el plazo para dar respuesta al pliego de recomendaciones, se procedió a la elaboración del informe de resultados materia del presente dictamen.

El informe de resultados se notificó al sujeto fiscalizado el 13 de julio de 2017.

Es importante señalar que de acuerdo a lo previsto en los artículos 60 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato; y 60 del Reglamento de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, tratándose de las auditorías de desempeño es improcedente el recurso de reconsideración en contra del informe de resultados, por lo que una vez notificado el mismo al sujeto de fiscalización, se remite al Congreso para los efectos procedentes.

En razón de lo anterior, el Auditor Superior del Estado remitió a este Congreso del Estado, el informe de resultados, el cual se turnó a esta Comisión de Hacienda y Fiscalización el 10 de agosto de 2017 para su estudio y dictamen, siendo radicado el 21 de agosto de 2017.

IV. Contenido del Informe de Resultados:

Con fundamento en los artículos 59 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato y 26 del Reglamento de dicha Ley, el informe de resultados contiene los siguientes apartados: Introducción; Resultado del Proceso de Fiscalización; Resumen de las Recomendaciones; y Conclusión General.

a) Introducción.

Por lo que se refiere a esta parte, se señala que las auditorías de desempeño deben proporcionar recomendaciones constructivas que contribuyan significativamente a abordar las debilidades o problemas identificados, añadiendo valor en la planeación, programación, ejercicio, control, evaluación, resultados e impactos del sector público.

Es así, que la naturaleza técnico-jurídica de las auditorías de desempeño difiere de otras auditorías, pues el resultado se expresa con la emisión, en su caso, de exclusivamente recomendaciones, distinguiéndose de otros actos de fiscalización o control que pueden arrojar observaciones y determinar presuntos responsables. Se trata de una tarea reglada y sistémica de evaluación para la mejora continua, detectando debilidades, áreas de oportunidad, amenazas e incluso fortalezas en el ámbito público, pero promoviendo además acciones concretas que permitan superar o potenciar las mismas,

dando adicionalmente seguimiento a su eventual implementación por los sujetos públicos responsables.

Respecto al marco normativo aplicable, se precisa la normatividad aplicable a la función de fiscalización a cargo del Poder Legislativo del Estado, siendo ésta: Artículos 116, fracción II y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, párrafo primero, 63, fracciones XVIII y XIX y 66, fracciones I y II de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; 3, fracción V, 56, 57, 58, 59 y 60 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato; 18 del Reglamento de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato; y 42 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.

Con base en lo anterior, la auditoría de desempeño materia del presente dictamen, se ejecutó bajo los principios, conceptos y directrices de las actuales Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización, compiladas y editadas por la Auditoría Superior de la Federación, de manera particular por lo que hace a sus numerales 100 y 300.

En esta parte también se puntualiza que las auditorías de desempeño que se practican por la Auditoría Superior del Estado son congruentes con las metodologías señaladas por las Normas Internacionales para Entidades Fiscalizadoras Superiores 100, 300, 3000 y 3100, emitidas por la Organización Internacional de Instituciones de Fiscalización Superior, sin omitir como criterio referencial al Manual de Formulación de Programas con la Metodología de Marco Lógico, así como al de Metodología de Marco Lógico para la Planificación, el Seguimiento y la Evaluación de Proyectos y Programas, ambos editados por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe; la Guía para la Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados, emitida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y el Manual para el Diseño y Construcción de Indicadores, editado también por el citado organismo en 2014, entre otros.

De igual forma, se menciona que el 24 de marzo de 2017 se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el Manual para las Auditorías al Desempeño de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato.

En esta parte también se establece que la auditoría tuvo como directriz los principios institucionales de objetividad, definitividad, confiabilidad, imparcialidad, independencia, transparencia, legalidad y profesionalismo.

En cuanto al punto correspondiente a la estructura del informe y valoración, se señala que el artículo 26 del Reglamento de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato refiere los requisitos mínimos que deben contener los informes de resultados de las auditorías de desempeño, los cuales se cumplieron en la formulación del informe de resultados.

Por otra parte, el artículo 27 del Reglamento de referencia, establece que el informe de resultados deberá estar debidamente fundado y motivado, así como presentar los hechos y su evaluación de manera objetiva, clara y acotada a los elementos esenciales. De lo anterior, se concluye en esta parte que la redacción del informe de resultados materia del presente dictamen es precisa y comprensible.

Por lo que hace a la valoración de la respuesta del sujeto fiscalizado, el Órgano Técnico determinó lo conducente respecto a las recomendaciones emitidas, para lo cual realizó un análisis de la documentación y evidencia proporcionada por el sujeto fiscalizado, a fin de valorar si éste efectuó mejoras, si realizará alguna acción o emitió la justificación correspondiente sobre la improcedencia por la cual no resulte factible su implementación o bien, la consideración de medidas alternas que fortalezcan el desempeño de la gestión pública. Asimismo, se señala que las recomendaciones efectuadas al sujeto fiscalizado podrían considerarse como persistentes, cuando no sea posible valorarlas en alguno de los supuestos antes referidos.

Es así, que la valoración realizada por la Auditoría Superior del Estado redunda en las manifestaciones, argumentos, acciones y evidencia presentada en la respuesta al pliego

de recomendaciones, para lo cual la evidencia aportada por el sujeto fiscalizado debe ser competente, pertinente, suficiente y relevante.

Respecto al objetivo, periodo y alcance de la auditoría se señala que en las auditorías de desempeño se plantea como objetivo general promover constructivamente la gestión económica, eficaz y eficiente de los recursos públicos, así como contribuir a la transparencia y rendición de cuentas de la Administración Pública.

La auditoría de desempeño busca brindar información, análisis o perspectivas, y cuando corresponda, recomendaciones de mejora. Dicha auditoría también persigue añadir valor público, abordando las causas de los problemas y debilidades de forma práctica, lógica y racional, con la intención de mejorar significativamente el desempeño de los programas públicos.

Asimismo, por medio de las auditorías de desempeño, la Auditoría Superior del Estado analiza el cumplimiento de metas y objetivos de las políticas, planes, programas, proyectos y, en general, de las acciones gubernamentales de los sujetos fiscalizados, identificando la fortaleza y retos en su diseño, operación, seguimiento, monitoreo, impacto y evaluación, proponiendo alternativas para su mejora.

Por lo que respecta a la auditoría que nos ocupa se tuvo por objetivo particular fiscalizar el correcto diseño de un Programa Presupuestario del municipio de Salamanca, Gto., conforme a la Metodología del Marco Lógico, incluyendo su Matriz de Indicadores para Resultados, así como el cumplimiento oportuno de sus metas planeadas.

Del objetivo antes descrito se desprenden los siguientes objetivos específicos: Formulación y justificación del Programa Presupuestario; contribución del Programa Presupuestario a las metas y estrategias de planeación para el desarrollo municipal; consistencia de la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa auditado; y presupuestación y cumplimiento de las metas proyectadas en su caso para el Programa Presupuestario, calificando porcentualmente su culminación o ejercicio al cierre del ciclo presupuestal anual.

También se señala que en la auditoría materia del presente dictamen se aplicó un enfoque de consistencia y resultados, dado que se revisó la formulación de un Programa Presupuestario Municipal, así como el cumplimiento de metas del mismo, proveyendo información que retroalimenta su diseño, gestión y resultados.

Es así que los objetivos específicos se desarrollaron en la auditoría en los siguientes resultados:

Formulación y justificación del Programa:

- Diagnóstico de la situación problema.
- Población potencial y objetivo.
- Árbol de problemas.
- Árbol de objetivos.
- Correspondencia entre los árboles.

Contribución a las metas y estrategias de la planeación para el Desarrollo Municipal:

- Correspondencia entre el fin y el Plan Municipal de Desarrollo.

Consistencia de la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa:

- Fin.
- Propósito.
- Componentes.
- Actividades.
- Supuestos a nivel Propósito y a nivel Fin.
- Supuestos a nivel Componente y a nivel Actividades.
- Indicadores a nivel Propósito.
- Indicadores a nivel Componente.
- Fichas técnicas para cada uno de los indicadores.
- Medios de verificación.

Presupuestación y cumplimiento de metas:

- Inclusión del Programa en Presupuesto.
- Avance en el cumplimiento de metas programadas para componentes en el ejercicio fiscal.

También se señala que en las auditorías de desempeño son coincidentes su alcance temporal con el ciclo presupuestal anual al cual puede retroalimentar, sin que ello sea obstáculo para que se utilice por el Órgano Técnico tanto información histórica de anualidades pasadas como elementos actuales o simultáneos a la auditoría, considerando en este último caso que la misma busca mejorar la gestión y no exclusivamente regularizar hechos pasados o retrotraer acciones de mejora, que en la mayoría de los casos es materialmente inviable.

Respecto a los antecedentes del proceso de fiscalización, éstos ya se detallaron en el apartado correspondiente.

En lo correspondiente al contexto general de la materia a auditar se describe brevemente el origen y la evolución de la política pública, así como la unidad responsable del Programa materia de la auditoría.

Al respecto, se establece que el Programa de Gobierno Municipal 2015-2018 del municipio de Salamanca, Gto., considera en la Línea Estratégica «Calidad de Vida», el brindar a la ciudadanía más y mejores servicios públicos; y en su estrategia particular refiere ampliar y eficientar la recolección de basura y la limpieza de las calles, a fin de mejorar la imagen urbana del Municipio.

En esta parte también se señala que el Programa objeto de la revisión se seleccionó a partir de la información proporcionada por el sujeto fiscalizado en los informes financieros trimestrales, en la cuenta pública y en su respuesta al requerimiento de información formulado en su momento por la Auditoría Superior del Estado, considerando la asignación presupuestal, el cúmulo y la calidad de la información que sirvió de sustento para su construcción metodológica.

Asimismo, se refiere que el Programa Presupuestario «E0040 Limpia y Recolección de Basura» contó con un presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2016 por un importe de $17'140,188.40 y en su Matriz de Indicadores para Resultados a nivel Propósito se plantea una adecuada recolección de residuos sólidos en la zona urbana y rural del municipio de Salamanca, Gto.

De igual forma, se establece que el Programa de Limpia y Recolección de Basura a cargo de la Jefatura de Limpia y Recolección del municipio de Salamanca, Gto., contó con los elementos necesarios para realizar el análisis de su diseño, al tener información programática presupuestaria, así como una Matriz de Indicadores para Resultados justificada en un análisis de problema-objetivos (diagnóstico), misma que incorporó información de los elementos correspondientes al resumen narrativo, indicadores (y sus fichas técnicas), medios de verificación y supuestos.

En la parte correspondiente a la unidad responsable, se establece que de acuerdo a la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, para el estudio y despacho de los diversos ramos de la administración pública municipal, el ayuntamiento de Salamanca, Gto., estableció la Jefatura de Limpia y Recolección, la cual es responsable del Programa «Limpia y Recolección de Basura».

En la parte conducente a criterio general, se señala que la Ley General de Contabilidad Gubernamental tiene por objeto establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización, y en general, contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingresos públicos.

En este orden de ideas, el artículo 54 del referido ordenamiento establece que la información presupuestaria y programática que forme parte de la cuenta pública debe relacionarse con los objetivos y prioridades de

la planeación del desarrollo; debiendo incluir también los resultados de la evaluación del desempeño de los programas municipales, así como los vinculados al ejercicio de los recursos federales que les hayan sido transferidos, para lo cual se deben utilizar indicadores que permitan determinar el cumplimiento de las metas y objetivos de cada uno de los programas, así como vincular los mismos con la planeación del desarrollo.

Por su parte, el artículo 61 de la citada Ley establece que los municipios incluirán en sus presupuestos de egresos, apartados específicos con la aplicación de los recursos conforme a las clasificaciones administrativa, funcional, programática, económica y, en su caso, geográfica y sus interrelaciones que faciliten el análisis para valorar la eficiencia y eficacia en el uso y destino de los recursos y sus resultados; señalando que en el proceso de integración de la información financiera para la elaboración de los presupuestos, se deberán incorporar los resultados que deriven de los procesos de implantación y operación del presupuesto basado en resultados y del sistema de evaluación del desempeño, establecidos en términos del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Asimismo, el artículo 6 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental consigna que el Consejo Nacional de Armonización Contable es el órgano de coordinación y tiene por objeto la emisión de las normas contables y lineamientos para la generación de información financiera que aplicarán los entes públicos, los cuales adoptarán e implementarán las decisiones del Consejo con carácter obligatorio, de acuerdo a lo señalado en el artículo 7 de la citada Ley.

En razón de lo anterior, el Consejo Nacional de Armonización Contable emitió los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología del Marco Lógico, mismos que son obligatorios para todos los entes públicos. Conforme a los citados lineamientos, para la generación, homologación, actualización y publicación de los indicadores de desempeño de los programas operados por los entes públicos deben considerar la Matriz de Indicadores para Resultados, definida por dichos lineamientos.

Los artículos 3, fracción XXV y 102 sexies de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato establecen que el Sistema de Evaluación al Desempeño es el conjunto de elementos metodológicos que permiten realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores que permitan conocer el impacto social de los programas y de los proyectos. En el caso de los municipios la Tesorería Municipal emitirá y aplicará dicho Sistema.

Finalmente, se establece que el artículo 70 de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato refiere que los ejecutores del gasto serán los responsables de la gestión por resultados, por lo que deberán cumplir los objetivos y metas contenidos en sus programas presupuestarios, conforme a lo dispuesto en los presupuestos de egresos, programas de Gobierno y demás normativa aplicable.

b) Resultado del proceso de fiscalización.

Por lo que se refiere a este punto, se presentan los resultados de la auditoría realizada, estableciendo las recomendaciones formuladas al sujeto fiscalizado, plasmando en cada una las acciones preventivas y correctivas que se deben llevar a cabo para subsanar las situaciones detectadas durante el proceso de auditoría.

Derivado de lo anterior, se formulan los resultados y recomendaciones contenidos en los rubros de Formulación y Justificación del Programa Presupuestario; Contribución a las Metas y Estrategias de la Planeación para el Desarrollo Municipal; Consistencia de la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario; y Presupuestación y Cumplimiento de Metas.

En tal sentido, en el rubro de Formulación y Justificación del Programa Presupuestario, se formularon las recomendaciones plasmadas en los puntos 1, del resultado número 1, referente a

diagnóstico de la situación-problema; 2, contenido en el resultado número 2, relativo a población potencial y objetivo; 3 del resultado número 3, referido a árbol de problemas; y 4 del resultado número 4, correspondiente a árbol de objetivos. Respecto al rubro de Consistencia de la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario, se refieren las recomendaciones contenidas en los puntos 5 del resultado número 7, correspondiente a fin; 6 del resultado número 8, referente a propósito; 7 y 8 del resultado número 9, relativo a componentes; 9 del resultado número 10, referido a actividades; 10 del resultado número 11, correspondiente a supuestos a nivel propósito y a nivel fin; 11 del resultado número 12, referente a supuestos a nivel componente y a nivel actividades; 12 del resultado número 13, relativo a indicadores a nivel propósito; 13 del resultado número 14, relativo a indicadores a nivel componente; 14 del resultado número 15, referido a fichas técnicas para cada uno de los indicadores; y 15 del resultado número 16, correspondiente a medios de verificación. Por lo que hace al apartado de Presupuestación y Cumplimiento de Metas, se formularon las recomendaciones plasmadas en los puntos 16 del resultado número 17, relativo a inclusión del programa en presupuesto; y 17 del resultado número 18, referentes a avance en el cumplimiento de metas programadas para componentes en el ejercicio fiscal.

En el caso del resultado número 5 del apartado de Formulación y Justificación del Programa Presupuestario, relativo a correspondencia entre los árboles; y del resultado número 6, plasmado en el rubro de Contribución a las Metas y Estrategias de la Planeación para el Desarrollo Municipal, correspondiente a alineación con los instrumentos de planeación, éstos no generaron recomendaciones por parte de la Auditoría Superior del Estado.

c) Resumen de las recomendaciones

En este punto se establece un resumen de los resultados que generaron recomendación, producto de un área de oportunidad o mejora sugerida por la Auditoría Superior del Estado, los cuales se clasifican agrupados bajo su respectiva vertiente, con la síntesis de la valoración efectuada, precisando que el sujeto fiscalizado no presentó respuesta al pliego de recomendaciones, por lo que las 17 recomendaciones persistieron, en razón de lo cual el Órgano Técnico dará el seguimiento a dichas recomendaciones en la etapa correspondiente.

d) Conclusión General.

La Auditoría Superior del Estado concluyó en cuanto a la formulación y justificación del Programa Presupuestario objeto de la auditoría, que el municipio de Salamanca, Gto., siguió de manera parcial la Metodología del Marco Lógico, conforme a la normativa y mejores prácticas en la materia, desprendiéndose que cuenta con áreas de oportunidad para mejorar la justificación del Programa auditado, así como para fortalecer la identificación de su población objetivo o área de enfoque, como se desprende de las recomendaciones formuladas en el informe de resultados.

Con respecto a la contribución a las metas y estrategias de la Planeación para el Desarrollo Municipal se señala que se verificó la vinculación específica entre los instrumentos de planeación actualizados y el programa presupuestario auditado.

Por lo que hace a la construcción o diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario, se informa que el sujeto fiscalizado presenta áreas de oportunidad en cuanto al cumplimiento de los postulados que establece la normativa y metodología aplicables para dicha matriz de control, monitoreo, seguimiento y evaluación, como herramienta fundamental de la gestión para resultados, por lo que se plantean diversos hallazgos descritos en el informe de resultados.

En cuanto al cumplimiento de metas, el municipio de Salamanca, Gto., cuenta con la oportunidad de asignar metas al Programa y realizar acciones para su monitoreo y cumplimiento.

También se destaca que el sujeto fiscalizado no dio respuesta al pliego de

recomendaciones en el plazo establecido en la norma.

Las recomendaciones emitidas en el informe de resultados son con el objetivo de que el municipio de Salamanca, Gto., logre los resultados esperados, partiendo de que el apropiado o correcto diseño del Programa le permita cumplir en su operación con las dimensiones de eficacia, eficiencia, economía y calidad, premisas que mandata la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Finalmente, se informa que el seguimiento a las recomendaciones respecto de las cuales el sujeto fiscalizado realizará acciones o mejoras en un plazo determinado, se efectuará por la Auditoría Superior del Estado, hasta la total implementación de las mismas, de conformidad con lo establecido en la normativa aplicable.

V. Conclusiones:

Como ya lo habíamos señalado en párrafos anteriores, el artículo 38 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato establece que los informes de resultados solamente podrán ser observados por las dos terceras partes de los diputados integrantes del Congreso del Estado, cuando: I. En perjuicio del sujeto de fiscalización no se haya otorgado el derecho de audiencia o defensa; II. No se hayan valorado las documentales aportadas por el sujeto de fiscalización durante el procedimiento de fiscalización hasta la notificación del informe de resultados; y III. No se observen las formalidades esenciales del proceso de fiscalización. Señalando que en tales casos la Auditoría Superior del Estado, deberá atender las observaciones correspondientes.

En este sentido, quienes integramos esta Comisión analizamos el informe de resultados materia del presente dictamen, considerando las hipótesis referidas en el precepto anteriormente señalado.

Como se desprende del informe de resultados, el Órgano Técnico dio cumplimiento al artículo 58 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, al haberse notificado las recomendaciones derivadas de la auditoría al sujeto fiscalizado, concediéndole el plazo que establece la Ley para atender las recomendaciones formuladas por el Órgano Técnico. Al respecto, cabe señalar que el sujeto fiscalizado no dio respuesta al pliego de recomendaciones.

De igual manera, existe en el informe de resultados la constancia de que éste se notificó al sujeto fiscalizado. En tal virtud, se considera que fue respetado el derecho de audiencia o defensa por parte del Órgano Técnico.

Por otra parte, del informe de resultados podemos desprender que el Órgano Técnico procedió a la valoración de las documentales aportadas por el sujeto de fiscalización durante el procedimiento de fiscalización, lo cual se refleja en dicho informe de resultados.

Finalmente, del informe de resultados podemos inferir que el Órgano Técnico en el desarrollo del procedimiento de auditoría, dio cumplimiento a las formalidades esenciales que la misma Ley establece para el proceso de fiscalización, al haberse practicado la auditoría que estaba contemplada en el Programa General de Fiscalización 2017, aprobado por el Auditor Superior del Estado. Asimismo, la auditoría se efectuó atendiendo a lo establecido en la normatividad aplicable en la materia, cumpliendo lo estipulado por el artículo 3 y el Capítulo VI del Título Segundo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, así como el artículo 28 del Reglamento de dicha Ley.

En razón de lo anteriormente señalado, concluimos que el informe de resultados de la auditoría de desempeño practicada a la administración municipal de Salamanca, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2016, debe sancionarse por el Congreso en los términos presentados por la Auditoría Superior del Estado y proceder a su aprobación, considerando que no se presenta alguno de los supuestos contenidos en el artículo 38 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, razón por la cual no podría ser observado por el Pleno del Congreso.

Por lo expuesto, con fundamento en el artículo 204 de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo, nos permitimos someter a la consideración de la Asamblea, la aprobación del siguiente:

A C U E R D O

Único. Con fundamento en el artículo 63 fracción XIX de la Constitución Política para el Estado, en relación con los artículos 3, fracción V, 5, fracción IV, 56, 59 y 60 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato y 28 del Reglamento de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, se aprueba el informe de resultados formulado por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, de la auditoría de desempeño practicada a la administración municipal de Salamanca, Gto., correspondiente al periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 2016.

Se ordena dar vista del informe de resultados al ayuntamiento del municipio de Salamanca, Gto., a efecto de que se atiendan las recomendaciones contenidas en el informe de resultados, informando a la Auditoría Superior del Estado de las acciones realizadas para ello, con objeto de que esta última realice el seguimiento correspondiente, previsto en los artículos 37, fracción VII, 65 y 66 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato y 77 del Reglamento de dicha Ley.

Remítase el presente acuerdo junto con su dictamen y el informe de resultados al ayuntamiento del municipio de Salamanca, Gto., así como a la Auditoría Superior del Estado, para los efectos de su competencia.

Guanajuato, Gto., 2 de octubre de 2017. La Comisión de Hacienda y Fiscalización. Dip. Elvira Paniagua Rodríguez. Dip. Angélica Casillas Martínez. Dip. María Alejandra Torres Novoa. Dip. Juan Carlos Muñoz Márquez. Dip. María Guadalupe Velázquez Díaz.»

DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL DICTAMEN FORMULADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA Y FISCALIZACIÓN, RELATIVO AL INFORME DE RESULTADOS DE LA AUDITORÍA DE DESEMPEÑO PRACTICADA A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA, GTO., CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2016.

»C. Presidenta del Congreso del Estado. Presente.

A esta Comisión de Hacienda y Fiscalización le fue turnado para su estudio y dictamen, el **informe de resultados de la auditoría de desempeño practicada por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato a la administración municipal de Tierra Blanca, Gto., correspondiente al periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 2016.**

Una vez analizado el referido informe de resultados, con fundamento en los artículos 112, fracción XII y 171 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, nos permitimos rendir el siguiente:

D i c t a m e n

I. Competencia:

Las facultades de la legislatura local en materia de fiscalización de las cuentas públicas tienen su fundamento en lo dispuesto por el artículo 63 fracciones XVIII, XIX y XXVIII de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato. Estos dispositivos establecen que el Congreso del Estado tiene la facultad de fiscalizar la cuenta pública del Poder Ejecutivo, incluyendo las de las entidades y organismos de la administración pública paraestatal, las del Poder Judicial y de los organismos autónomos; así como las cuentas públicas municipales, incluyendo las de las entidades y organismos de la administración pública paramunicipal; y verificar el desempeño en el cumplimiento de los objetivos de los programas. De igual manera, puede acordar la práctica de auditorías a los sujetos de fiscalización, cuando exista causa justificada para ello, auxiliándose para el cumplimiento de dichas facultades por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato.

Asimismo, el artículo 66 fracción VIII de dicho Ordenamiento Constitucional

establece que la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato deberá informar al Congreso del Estado del resultado de la revisión de la cuenta pública y demás asuntos derivados de la fiscalización, incluyendo los dictámenes, informes de resultados, comentarios y observaciones de las auditorías, constituyendo una de las fases del proceso de fiscalización.

De igual forma, el artículo 82, fracción XXIV de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato establece como atribución de la Auditoría Superior del Estado, rendir al Congreso, los informes derivados del ejercicio de la función de fiscalización.

En razón de lo cual, la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato establece que la Auditoría Superior debe remitir los informes de resultados al Congreso del Estado, a efecto de que éste realice la declaratoria correspondiente, señalándose en el artículo 38 que el informe de resultados únicamente podrá ser observado por las dos terceras partes de los integrantes del Congreso cuando: a) En perjuicio del sujeto de fiscalización no se haya otorgado el derecho de audiencia o defensa; b) Cuando no se hayan valorado las documentales aportadas por el sujeto de fiscalización durante el procedimiento de fiscalización hasta la notificación del informe de resultados; y c) No se observen las formalidades esenciales del proceso de fiscalización.

Con la finalidad de que el Congreso dé cumplimiento a lo señalado en el párrafo anterior, la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato establece en su artículo 112, fracción XII que a esta Comisión de Hacienda y Fiscalización, le compete el conocimiento y dictamen de los asuntos relativos a los informes de resultados que emita la Auditoría Superior del Estado.

A efecto de cumplir con las atribuciones conferidas a esta Comisión, y en observancia a lo que establece la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, el presente dictamen se ocupará exclusivamente de los aspectos que la propia Ley señala y por los cuales podría ser observado o no, el informe de resultados.

II. Antecedentes:

De conformidad con el artículo 66, fracción I de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, es atribución de la Auditoría Superior del Estado realizar auditorías de desempeño en el cumplimiento de objetivos y metas contenidos en los programas, de las cuales sólo podrá emitir las recomendaciones para la mejora en el desempeño, en los términos de la Ley.

Por su parte, el artículo 3, fracción V de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato señala que la Auditoría Superior del Estado es competente para practicar auditorías de desempeño para verificar el cumplimiento de los objetivos y las metas de los programas estatales y municipales.

De igual forma, el artículo 56 de la Ley de Fiscalización Superior señala que las auditorías de desempeño comprenden la revisión del cumplimiento de las metas y objetivos de los planes y programas, conforme a los principios de eficiencia, eficacia y economía; así como la evaluación de las políticas públicas; estableciendo además que la Auditoría Superior del Estado realizará las auditorías de desempeño de manera anual y únicamente formulará recomendaciones que incidan en mejorar sistemáticamente el diseño, operación e impacto de los presupuestos programáticos y las políticas públicas en su caso.

Por su parte, los artículos 59 y 60 de la citada Ley refieren que los informes de resultados de auditorías de desempeño contendrán los requisitos señalados en el Reglamento de la Ley y que la Auditoría Superior del Estado, remitirá dichos informes al Congreso a más tardar el 30 de septiembre del ejercicio fiscal de que se trate.

De lo anterior podemos desprender que el Órgano Técnico realizará la evaluación sobre desempeño de manera anual y únicamente formulará recomendaciones que incidan en la mejora del diseño, operación e impacto de los presupuestos programáticos y las políticas públicas en su caso.

Finalmente, el artículo 16 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de

Guanajuato, consigna que la Auditoría Superior establecerá un Programa General de Fiscalización, señalando los actos y sujetos de fiscalización, los que serán objeto de auditoría o revisión conforme a los criterios y normas que se establezcan en el Reglamento de la Ley.

En ejercicio de esta función, el Auditor Superior del Estado aprobó el Programa General de Fiscalización 2017. En dicho Programa se contempló la práctica de una auditoría de desempeño a la administración municipal de Tierra Blanca, Gto., correspondiente al periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 2016.

El 2 de mayo de 2017 dio inicio la auditoría materia del presente dictamen. En la misma fecha, la Auditoría Superior del Estado requirió al sujeto de fiscalización diversa información que se consideró necesaria para llevar a cabo la auditoría, misma que se entregó por parte del sujeto fiscalizado el 9 de mayo de 2017.

Como parte del proceso de auditoría, el 24 de mayo de 2017 se notificó al sujeto fiscalizado el pliego de recomendaciones derivadas de la auditoría practicada. Lo anterior, para dar cumplimiento a lo preceptuado por el artículo 58 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato.

El 9 de junio de 2017, el sujeto fiscalizado presentó oficio de respuesta a las recomendaciones derivadas de la auditoría practicada, anexándose la información y documentación que se consideró suficiente para precisar las mejoras efectuadas, las acciones a realizar o en su caso, justificar la improcedencia por la cual no resulte factible su implementación. Una vez valorada la documentación aportada se procedió a la elaboración del informe de resultados materia del presente dictamen.

El informe de resultados se notificó al sujeto fiscalizado el 10 de julio de 2017.

Es importante señalar que de acuerdo a lo previsto en los artículos 60 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato; y 60 del Reglamento de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, tratándose de las auditorías de desempeño es improcedente el recurso de reconsideración en contra del informe de resultados, por lo que una vez notificado el mismo al sujeto de fiscalización, se remite al Congreso para los efectos procedentes.

En razón de lo anterior, el Auditor Superior del Estado remitió a este Congreso del Estado, el informe de resultados, el cual se turnó a esta Comisión de Hacienda y Fiscalización el 10 de agosto de 2017 para su estudio y dictamen, siendo radicado el 21 de agosto de 2017.

IV. Contenido del Informe de Resultados:

Con fundamento en los artículos 59 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato y 26 del Reglamento de dicha Ley, el informe de resultados contiene los siguientes apartados: Introducción; Resultado del Proceso de Fiscalización; Resumen de las Recomendaciones; y Conclusión General.

a) Introducción.

Por lo que se refiere a esta parte, se señala que las auditorías de desempeño deben proporcionar recomendaciones constructivas que contribuyan significativamente a abordar las debilidades o problemas identificados, añadiendo valor en la planeación, programación, ejercicio, control, evaluación, resultados e impactos del sector público.

Es así, que la naturaleza técnico-jurídica de las auditorías de desempeño difiere de otras auditorías, pues el resultado se expresa con la emisión, en su caso, de exclusivamente recomendaciones, distinguiéndose de otros actos de fiscalización o control que pueden arrojar observaciones y determinar presuntos responsables. Se trata de una tarea reglada y sistémica de evaluación para la mejora continua, detectando debilidades, áreas de oportunidad, amenazas e incluso fortalezas en el ámbito público, pero promoviendo además acciones concretas que permitan superar o potenciar las mismas, dando adicionalmente seguimiento a su

eventual implementación por los sujetos públicos responsables.

Respecto al marco normativo aplicable, se precisa la normatividad aplicable a la función de fiscalización a cargo del Poder Legislativo del Estado, siendo ésta: Artículos 116, fracción II y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, párrafo primero, 63, fracciones XVIII y XIX y 66, fracciones I y II de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; 3, fracción V, 56, 57, 58, 59 y 60 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato; 18 del Reglamento de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato; y 42 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.

Con base en lo anterior, la auditoría de desempeño materia del presente dictamen, se ejecutó bajo los principios, conceptos y directrices de las actuales Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización, compiladas y editadas por la Auditoría Superior de la Federación, de manera particular por lo que hace a sus numerales 100 y 300.

En esta parte también se puntualiza que las auditorías de desempeño que se practican por la Auditoría Superior del Estado son congruentes con las metodologías señaladas por las Normas Internacionales para Entidades Fiscalizadoras Superiores 100, 300, 3000 y 3100, emitidas por la Organización Internacional de Instituciones de Fiscalización Superior, sin omitir como criterio referencial al Manual de Formulación de Programas con la Metodología de Marco Lógico, así como al de Metodología de Marco Lógico para la Planificación, el Seguimiento y la Evaluación de Proyectos y Programas, ambos editados por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe; la Guía para la Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados, emitida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y el Manual para el Diseño y Construcción de Indicadores, editado también por el citado organismo en 2014, entre otros.

De igual forma, se menciona que el 24 de marzo de 2017 se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el Manual para las Auditorías al Desempeño de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato.

En esta parte también se establece que la auditoría tuvo como directriz los principios institucionales de objetividad, definitividad, confiabilidad, imparcialidad, independencia, transparencia, legalidad y profesionalismo.

En cuanto al punto correspondiente a la estructura del informe y valoración, se señala que el artículo 26 del Reglamento de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato refiere los requisitos mínimos que deben contener los informes de resultados de las auditorías de desempeño, los cuales se cumplieron en la formulación del informe de resultados.

Por otra parte, el artículo 27 del Reglamento de referencia, establece que el informe de resultados deberá estar debidamente fundado y motivado, así como presentar los hechos y su evaluación de manera objetiva, clara y acotada a los elementos esenciales. De lo anterior, se concluye en esta parte que la redacción del informe de resultados materia del presente dictamen es precisa y comprensible.

Por lo que hace a la valoración de la respuesta del sujeto fiscalizado, el Órgano Técnico determinó lo conducente respecto a las recomendaciones emitidas, para lo cual realizó un análisis de la documentación y evidencia proporcionada por el sujeto fiscalizado, a fin de valorar si éste efectuó mejoras, si realizará alguna acción o emitió la justificación correspondiente sobre la improcedencia por la cual no resulte factible su implementación o bien, la consideración de medidas alternas que fortalezcan el desempeño de la gestión pública. Asimismo, se señala que las recomendaciones efectuadas al sujeto fiscalizado podrían considerarse como persistentes, cuando no sea posible valorarlas en alguno de los supuestos antes referidos.

Es así, que la valoración realizada por la Auditoría Superior del Estado redunda en las manifestaciones, argumentos, acciones y evidencia presentada en la respuesta al pliego de recomendaciones, para lo cual la evidencia aportada por el sujeto fiscalizado debe ser competente, pertinente, suficiente y relevante.

Respecto al objetivo, periodo y alcance de la auditoría se señala que en las auditorías de desempeño se plantea como objetivo general promover constructivamente la gestión económica, eficaz y eficiente de los recursos públicos, así como contribuir a la transparencia y rendición de cuentas de la Administración Pública.

La auditoría de desempeño busca brindar información, análisis o perspectivas, y cuando corresponda, recomendaciones de mejora. Dicha auditoría también persigue añadir valor público, abordando las causas de los problemas y debilidades de forma práctica, lógica y racional, con la intención de mejorar significativamente el desempeño de los programas públicos.

Asimismo, por medio de las auditorías de desempeño, la Auditoría Superior del Estado analiza el cumplimiento de metas y objetivos de las políticas, planes, programas, proyectos y, en general, de las acciones gubernamentales de los sujetos fiscalizados, identificando la fortaleza y retos en su diseño, operación, seguimiento, monitoreo, impacto y evaluación, proponiendo alternativas para su mejora.

Por lo que respecta a la auditoría que nos ocupa se tuvo por objetivo particular fiscalizar el correcto diseño de un Programa Presupuestario del municipio de Tierra Blanca, Gto., conforme a la Metodología del Marco Lógico, incluyendo su Matriz de Indicadores para Resultados, así como el cumplimiento oportuno de sus metas planeadas.

Del objetivo antes descrito se desprenden los siguientes objetivos específicos: Formulación y justificación del Programa Presupuestario; contribución del Programa Presupuestario a las metas y estrategias de planeación para el desarrollo municipal; consistencia de la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa auditado; y presupuestación y cumplimiento de las metas proyectadas en su caso para el Programa Presupuestario, calificando porcentualmente su culminación o ejercicio al cierre del ciclo presupuestal anual.

También se señala que en la auditoría materia del presente dictamen se aplicó un enfoque de consistencia y resultados, dado que se revisó la formulación de un Programa Presupuestario Municipal, así como el cumplimiento de metas del mismo, proveyendo información que retroalimenta su diseño, gestión y resultados.

Es así que los objetivos específicos se desarrollaron en la auditoría en los siguientes resultados:

Formulación y justificación del Programa:

- Diagnóstico de la situación problema.
- Población potencial y objetivo.
- Árbol de problemas.
- Árbol de objetivos.
- Correspondencia entre los árboles.

Contribución a las metas y estrategias de la planeación para el Desarrollo Municipal:

- Correspondencia entre el fin y el Plan Municipal de Desarrollo.

Consistencia de la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa:

- Fin.
- Propósito.
- Componentes.
- Actividades.
- Supuestos a nivel Propósito y a nivel Fin.
- Supuestos a nivel Componente y a nivel Actividades.
- Indicadores a nivel Propósito.
- Indicadores a nivel Componente.
- Fichas técnicas para cada uno de los indicadores.
- Medios de verificación.

Presupuestación y cumplimiento de metas:

- Inclusión del Programa en Presupuesto.
- Avance en el cumplimiento de metas programadas para componentes en el ejercicio fiscal.

También se señala que en las auditorías de desempeño son coincidentes su alcance temporal con el ciclo presupuestal anual al cual puede retroalimentar, sin que ello sea obstáculo para que se utilice por el Órgano Técnico tanto información histórica de anualidades pasadas como elementos actuales o simultáneos a la auditoría, considerando en este último caso que la misma busca mejorar la gestión y no exclusivamente regularizar hechos pasados o retrotraer acciones de mejora, que en la mayoría de los casos es materialmente inviable.

Respecto a los antecedentes del proceso de fiscalización, éstos ya se detallaron en el apartado correspondiente.

En lo correspondiente al contexto general de la materia a auditar se describe brevemente el origen y la evolución de la política pública, así como la unidad responsable del Programa materia de la auditoría.

Al respecto, se establece que mediante información contenida en el oficio de respuesta al requerimiento de información, el tesorero municipal de Tierra Blanca, Gto., manifestó que no se contaba con la información solicitada; refiriendo que se están llevando a cabo talleres de Presupuesto Basado en Resultados para sus direcciones, razón por la cual el Órgano Técnico no recibió información.

Asimismo, en el oficio de respuesta al pliego de recomendaciones también se señaló que el Municipio está llevando talleres de Presupuesto Basado en Resultados, manifestando que no se contaba con la información solicitada por la Auditoría Superior del Estado.

En la parte correspondiente a la unidad responsable, se establece que dado que en la respuesta al pliego de recomendaciones el sujeto fiscalizado manifestó no contar con información materia de la auditoría, no fue factible elaborar dicho apartado.

En la parte conducente a criterio general, se señala que la Ley General de Contabilidad Gubernamental tiene por objeto establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización, y en general, contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingresos públicos.

En este orden de ideas, el artículo 54 del referido ordenamiento establece que la información presupuestaria y programática que forme parte de la cuenta pública debe relacionarse con los objetivos y prioridades de la planeación del desarrollo; debiendo incluir también los resultados de la evaluación del desempeño de los programas municipales, así como los vinculados al ejercicio de los recursos federales que les hayan sido transferidos, para lo cual se deben utilizar indicadores que permitan determinar el cumplimiento de las metas y objetivos de cada uno de los programas, así como vincular los mismos con la planeación del desarrollo.

Por su parte, el artículo 61 de la citada Ley establece que los municipios incluirán en sus presupuestos de egresos, apartados específicos con la aplicación de los recursos conforme a las clasificaciones administrativa, funcional, programática, económica y, en su caso, geográfica y sus interrelaciones que faciliten el análisis para valorar la eficiencia y eficacia en el uso y destino de los recursos y sus resultados; señalando que en el proceso de integración de la información financiera para la elaboración de los presupuestos, se deberán incorporar los resultados que deriven de los procesos de implantación y operación del presupuesto basado en resultados y del sistema de evaluación del desempeño, establecidos en términos del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Asimismo, el artículo 6 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental consigna que el Consejo Nacional de Armonización Contable es el órgano de coordinación y tiene por objeto la emisión de las normas contables y lineamientos para la generación de información financiera que aplicarán los entes públicos, los cuales adoptarán e implementarán las decisiones del Consejo con carácter obligatorio, de acuerdo a lo señalado en el artículo 7 de la citada Ley.

En razón de lo anterior, el Consejo Nacional de Armonización Contable emitió los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología del Marco Lógico, mismos que son obligatorios para todos los entes públicos. Conforme a los citados lineamientos, para la generación, homologación, actualización y publicación de los indicadores de desempeño de los programas operados por los entes públicos deben considerar la Matriz de Indicadores para Resultados, definida por dichos lineamientos.

Los artículos 3, fracción XXV y 102 sexies de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato establecen que el Sistema de Evaluación al Desempeño es el conjunto de elementos metodológicos que permiten realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores que permitan conocer el impacto social de los programas y de los proyectos. En el caso de los municipios la Tesorería Municipal emitirá y aplicará dicho Sistema.

Finalmente, se establece que el artículo 70 de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato refiere que los ejecutores del gasto serán los responsables de la gestión por resultados, por lo que deberán cumplir los objetivos y metas contenidos en sus programas presupuestarios, conforme a lo dispuesto en los presupuestos de egresos, programas de Gobierno y demás normativa aplicable.

b) Resultado del proceso de fiscalización.

Por lo que se refiere a este punto, se presentan los resultados de la auditoría realizada, estableciendo las recomendaciones formuladas al sujeto fiscalizado, plasmando en cada una las acciones preventivas y correctivas que se deben llevar a cabo para subsanar las situaciones detectadas durante el proceso de auditoría.

Derivado de lo anterior, se formulan los resultados y recomendaciones contenidos en los rubros de Formulación y Justificación del Programa Presupuestario; Contribución a las Metas y Estrategias de la Planeación para el Desarrollo Municipal; Consistencia de la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario; y Presupuestación y Cumplimiento de Metas.

En tal sentido, en el rubro de Formulación y Justificación del Programa Presupuestario, se formularon las recomendaciones plasmadas en los puntos 1, del resultado número 1, referente a diagnóstico de la situación-problema; 2, contenido en el resultado número 2, relativo a población potencial y objetivo; 3 del resultado número 3, referido a árbol de problemas; 4 del resultado número 4, correspondiente a árbol de objetivos; y 5 del resultado número 5, referente a correspondencia entre los árboles. Respecto al rubro de Contribución a las Metas y Estrategias de la Planeación para el Desarrollo Municipal, se formuló la recomendación plasmada en el punto 6 del resultado número 6, relativo a alineación con los instrumentos de planeación. En cuanto al apartado de Consistencia de la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario, se refieren las recomendaciones contenidas en los puntos 7 del resultado número 7, referido a fin; 8 del resultado número 8, referente a propósito; 9 del resultado número 9, relativo a componentes; 10 del resultado número 10, referido a actividades; 11 del resultado número 11, correspondiente a supuestos a nivel propósito y a nivel fin; 12 del resultado número 12, referente a supuestos a nivel componente y a nivel actividades; 13 del resultado número 13, relativo a indicadores a nivel propósito; 14 del resultado número 14,

relativo a indicadores a nivel componente; 15 del resultado número 15, referido a fichas técnicas para cada uno de los indicadores; y 16 del resultado número 16, correspondiente a medios de verificación. Por lo que hace al apartado de Presupuestación y Cumplimiento de Metas, se formularon las recomendaciones plasmadas en los puntos 17 del resultado número 17, relativo a inclusión del programa en presupuesto; y 18 del resultado número 18, referente a avance en el cumplimiento de metas programadas para componentes en el ejercicio fiscal.

c) Resumen de las recomendaciones

En este punto se establece un resumen de los resultados que generaron recomendación, producto de un área de oportunidad o mejora sugerida por la Auditoría Superior del Estado, los cuales se clasifican agrupados bajo su respectiva vertiente, con la síntesis de la valoración efectuada, precisando que el sujeto fiscalizado en su oficio de respuesta al pliego de recomendaciones, si bien manifestó estar llevando a cabo talleres de Presupuesto Basado en Resultados y estar trabajando con cada una de sus direcciones, no establece el entregable derivado de las acciones implementadas, un plazo futuro cierto razonable para su implementación, ni el responsable de hacerlo, en razón de lo cual el Órgano Técnico dará el seguimiento a las 18 recomendaciones en la etapa correspondiente.

d) Conclusión General.

La Auditoría Superior del Estado concluyó en cuanto a la formulación y justificación del Programa Presupuestario, a la contribución a las metas y estrategias de la Planeación para el Desarrollo Municipal y a la construcción o diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados, objeto de la auditoría, que se advierte que el municipio de Tierra Blanca, Gto., no acreditó seguir la Metodología del Marco Lógico, conforme a la normativa y mejores prácticas en la materia. Asimismo, debido a que no se tienen programas presupuestarios, no fue posible realizar un análisis para verificar el avance de metas.

De igual forma, debido a que no se tienen programas presupuestarios, no fue posible verificar el avance en el cumplimiento de metas.

También se refiere que las recomendaciones emitidas en el informe de resultados son con el objetivo de que el municipio de Tierra Blanca, Gto., logre los resultados esperados, partiendo de que el apropiado o correcto diseño le permita cumplir en su operación con las dimensiones de eficacia, eficiencia, economía y calidad, premisas que mandata la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Finalmente, se informa que el seguimiento a las recomendaciones respecto de las cuales persiste lo recomendado, se efectuará por la Auditoría Superior del Estado, hasta la total implementación de las mismas, de conformidad con lo establecido en la normativa aplicable.

V. Conclusiones:

Como ya lo habíamos señalado en párrafos anteriores, el artículo 38 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato establece que los informes de resultados solamente podrán ser observados por las dos terceras partes de los diputados integrantes del Congreso del Estado, cuando: I. En perjuicio del sujeto de fiscalización no se haya otorgado el derecho de audiencia o defensa; II. No se hayan valorado las documentales aportadas por el sujeto de fiscalización durante el procedimiento de fiscalización hasta la notificación del informe de resultados; y III. No se observen las formalidades esenciales del proceso de fiscalización. Señalando que en tales casos la Auditoría Superior del Estado, deberá atender las observaciones correspondientes.

En este sentido, quienes integramos esta Comisión analizamos el informe de resultados materia del presente dictamen, considerando las hipótesis referidas en el precepto anteriormente señalado.

Como se desprende del informe de resultados, el Órgano Técnico dio cumplimiento al artículo 58 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, al haberse notificado las recomendaciones derivadas de la auditoría al sujeto fiscalizado, concediéndole el plazo que

establece la Ley para atender las recomendaciones formuladas por el Órgano Técnico. Al respecto, se presentó la información y documentación que se consideró suficiente para atender las recomendaciones efectuadas.

De igual manera, existe en el informe de resultados la constancia de que éste se notificó al sujeto fiscalizado. En tal virtud, se considera que fue respetado el derecho de audiencia o defensa por parte del Órgano Técnico.

Por otra parte, del informe de resultados podemos desprender que el Órgano Técnico procedió a la valoración de las documentales aportadas por el sujeto de fiscalización durante el procedimiento de fiscalización, lo cual se refleja en dicho informe de resultados.

Finalmente, del informe de resultados podemos inferir que el Órgano Técnico en el desarrollo del procedimiento de auditoría, dio cumplimiento a las formalidades esenciales que la misma Ley establece para el proceso de fiscalización, al haberse practicado la auditoría que estaba contemplada en el Programa General de Fiscalización 2017, aprobado por el Auditor Superior del Estado. Asimismo, la auditoría se efectuó atendiendo a lo establecido en la normatividad aplicable en la materia, cumpliendo lo estipulado por el artículo 3 y el Capítulo VI del Título Segundo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, así como el artículo 28 del Reglamento de dicha Ley.

En razón de lo anteriormente señalado, concluimos que el informe de resultados de la auditoría de desempeño practicada a la administración municipal de Tierra Blanca, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2016, debe sancionarse por el Congreso en los términos presentados por la Auditoría Superior del Estado y proceder a su aprobación, considerando que no se presenta alguno de los supuestos contenidos en el artículo 38 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, razón por la cual no podría ser observado por el Pleno del Congreso.

Por lo expuesto, con fundamento en el artículo 204 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, nos permitimos someter a la consideración de la Asamblea, la aprobación del siguiente:

A C U E R D O

Único. Con fundamento en el artículo 63 fracción XIX de la Constitución Política para el Estado, en relación con los artículos 3, fracción V, 5, fracción IV, 56, 59 y 60 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato y 28 del Reglamento de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, se aprueba el informe de resultados formulado por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, de la auditoría de desempeño practicada a la administración municipal de Tierra Blanca, Gto., correspondiente al periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 2016.

Se ordena dar vista del informe de resultados al ayuntamiento del municipio de Tierra Blanca, Gto., a efecto de que se atiendan las recomendaciones contenidas en el informe de resultados, informando a la Auditoría Superior del Estado de las acciones realizadas para ello, con objeto de que esta última realice el seguimiento correspondiente, previsto en los artículos 37, fracción VII, 65 y 66 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato y 77 del Reglamento de dicha Ley.

Remítase el presente acuerdo junto con su dictamen y el informe de resultados al ayuntamiento del municipio de Tierra Blanca, Gto., así como a la Auditoría Superior del Estado, para los efectos de su competencia.

Guanajuato, Gto., 2 de octubre de 2017. La Comisión de Hacienda y Fiscalización. Dip. Elvira Paniagua Rodríguez. Dip. Angélica Casillas Martínez. Dip. María Alejandra Torres Novoa. (Con observación) Dip. Juan Carlos Muñoz Márquez. Dip. María Guadalupe Velázquez Díaz.»

DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL DICTAMEN PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA Y FISCALIZACIÓN, RELATIVO AL INFORME DE RESULTADOS DE LA AUDITORÍA DE DESEMPEÑO PRACTICADA A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE DOCTOR MORA, GTO., CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2016.

»C. Presidenta del Congreso del Estado. Presente.

A esta Comisión de Hacienda y Fiscalización le fue turnado para su estudio y dictamen, el **informe de resultados de la auditoría de desempeño practicada por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato a la administración municipal de Doctor Mora, Gto., correspondiente al periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 2016.**

Una vez analizado el referido informe de resultados, con fundamento en los artículos 112, fracción XII y 171 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, nos permitimos rendir el siguiente:

D i c t a m e n

I. Competencia:

Las facultades de la legislatura local en materia de fiscalización de las cuentas públicas tienen su fundamento en lo dispuesto por el artículo 63 fracciones XVIII, XIX y XXVIII de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato. Estos dispositivos establecen que el Congreso del Estado tiene la facultad de fiscalizar la cuenta pública del Poder Ejecutivo, incluyendo las de las entidades y organismos de la administración pública paraestatal, las del Poder Judicial y de los organismos autónomos; así como las cuentas públicas municipales, incluyendo las de las entidades y organismos de la administración pública paramunicipal; y verificar el desempeño en el cumplimiento de los objetivos de los programas. De igual manera, puede acordar la práctica de auditorías a los sujetos de fiscalización, cuando exista causa justificada para ello, auxiliándose para el cumplimiento de dichas facultades por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato.

Asimismo, el artículo 66 fracción VIII de dicho Ordenamiento Constitucional establece que la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato deberá informar al Congreso del Estado del resultado de la revisión de la cuenta pública y demás asuntos derivados de la fiscalización, incluyendo los dictámenes, informes de resultados, comentarios y observaciones de las auditorías, constituyendo una de las fases del proceso de fiscalización.

De igual forma, el artículo 82, fracción XXIV de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato establece como atribución de la Auditoría Superior del Estado, rendir al Congreso, los informes derivados del ejercicio de la función de fiscalización.

En razón de lo cual, la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato establece que la Auditoría Superior debe remitir los informes de resultados al Congreso del Estado, a efecto de que éste realice la declaratoria correspondiente, señalándose en el artículo 38 que el informe de resultados únicamente podrá ser observado por las dos terceras partes de los integrantes del Congreso cuando: a) En perjuicio del sujeto de fiscalización no se haya otorgado el derecho de audiencia o defensa; b) Cuando no se hayan valorado las documentales aportadas por el sujeto de fiscalización durante el procedimiento de fiscalización hasta la notificación del informe de resultados; y c) No se observen las formalidades esenciales del proceso de fiscalización.

Con la finalidad de que el Congreso dé cumplimiento a lo señalado en el párrafo anterior, la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato establece en su artículo 112, fracción XII que a esta Comisión de Hacienda y Fiscalización, le compete el conocimiento y dictamen de los asuntos relativos a los informes de resultados que emita la Auditoría Superior del Estado.

A efecto de cumplir con las atribuciones conferidas a esta Comisión, y en observancia a lo que establece la Ley de Fiscalización Superior del Estado de

Guanajuato, el presente dictamen se ocupará exclusivamente de los aspectos que la propia Ley señala y por los cuales podría ser observado o no, el informe de resultados.

II. Antecedentes:

De conformidad con el artículo 66, fracción I de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, es atribución de la Auditoría Superior del Estado realizar auditorías de desempeño en el cumplimiento de objetivos y metas contenidos en los programas, de las cuales sólo podrá emitir las recomendaciones para la mejora en el desempeño, en los términos de la Ley.

Por su parte, el artículo 3, fracción V de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato señala que la Auditoría Superior del Estado es competente para practicar auditorías de desempeño para verificar el cumplimiento de los objetivos y las metas de los programas estatales y municipales.

De igual forma, el artículo 56 de la Ley de Fiscalización Superior señala que las auditorías de desempeño comprenden la revisión del cumplimiento de las metas y objetivos de los planes y programas, conforme a los principios de eficiencia, eficacia y economía; así como la evaluación de las políticas públicas; estableciendo además que la Auditoría Superior del Estado realizará las auditorías de desempeño de manera anual y únicamente formulará recomendaciones que incidan en mejorar sistemáticamente el diseño, operación e impacto de los presupuestos programáticos y las políticas públicas en su caso.

Por su parte, los artículos 59 y 60 de la citada Ley refieren que los informes de resultados de auditorías de desempeño contendrán los requisitos señalados en el Reglamento de la Ley y que la Auditoría Superior del Estado, remitirá dichos informes al Congreso a más tardar el 30 de septiembre del ejercicio fiscal de que se trate.

De lo anterior podemos desprender que el Órgano Técnico realizará la evaluación sobre desempeño de manera anual y únicamente formulará recomendaciones que incidan en la mejora del diseño, operación e impacto de los presupuestos programáticos y las políticas públicas en su caso.

Finalmente, el artículo 16 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, consigna que la Auditoría Superior establecerá un Programa General de Fiscalización, señalando los actos y sujetos de fiscalización, los que serán objeto de auditoría o revisión conforme a los criterios y normas que se establezcan en el Reglamento de la Ley.

En ejercicio de esta función, el Auditor Superior del Estado aprobó el Programa General de Fiscalización 2017. En dicho Programa se contempló la práctica de una auditoría de desempeño a la administración municipal de Doctor Mora, Gto., correspondiente al periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 2016.

El 5 de mayo de 2017 dio inicio la auditoría materia del presente dictamen. En la misma fecha, la Auditoría Superior del Estado requirió al sujeto de fiscalización diversa información que se consideró necesaria para llevar a cabo la auditoría, razón por la cual el 12 de mayo de 2017, el sujeto de fiscalización presentó contestación a dicho requerimiento, información que fue analizada por el Órgano Técnico.

Como parte del proceso de auditoría, el 21 de junio de 2017 se notificó al sujeto fiscalizado de manera electrónica, el pliego de recomendaciones derivadas de la auditoría practicada. Lo anterior, para dar cumplimiento a lo preceptuado por el artículo 58 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato.

No obstante lo anterior, el sujeto de fiscalización no dio respuesta al pliego de recomendaciones en el plazo correspondiente. Una vez transcurrido dicho plazo, se procedió a la elaboración del informe de resultados materia del presente dictamen.

El informe de resultados se notificó al sujeto fiscalizado de manera electrónica, el 1 de agosto de 2017.

Es importante señalar que de acuerdo a lo previsto en los artículos 60 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato; y 60 del Reglamento de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, tratándose de las auditorías de desempeño es improcedente el recurso de reconsideración en contra del informe de resultados, por lo que una vez notificado el mismo al sujeto de fiscalización, se remite al Congreso para los efectos procedentes.

En razón de lo anterior, el Auditor Superior del Estado remitió a este Congreso del Estado, el informe de resultados, el cual se turnó a esta Comisión de Hacienda y Fiscalización el 24 de agosto de 2017 para su estudio y dictamen, siendo radicado el 28 de agosto del año en curso.

IV. Contenido del Informe de Resultados:

Con fundamento en los artículos 59 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato y 26 del Reglamento de dicha Ley, el informe de resultados contiene los siguientes apartados: Introducción; Resultado del Proceso de Fiscalización; Resumen de las Recomendaciones; y Conclusión General.

a) Introducción.

Por lo que se refiere a esta parte, se señala que las auditorías de desempeño deben proporcionar recomendaciones constructivas que contribuyan significativamente a abordar las debilidades o problemas identificados, añadiendo valor en la planeación, programación, ejercicio, control, evaluación, resultados e impactos del sector público.

Es así, que la naturaleza técnico-jurídica de las auditorías de desempeño difiere de otras auditorías, pues el resultado se expresa con la emisión, en su caso, de exclusivamente recomendaciones, distinguiéndose de otros actos de fiscalización o control que pueden arrojar observaciones y determinar presuntos responsables. Se trata de una tarea reglada y sistémica de evaluación para la mejora continua, detectando debilidades, áreas de oportunidad, amenazas e incluso fortalezas en el ámbito público, pero promoviendo además acciones concretas que permitan superar o potenciar las mismas, dando adicionalmente seguimiento a su eventual implementación por los sujetos públicos responsables.

Respecto al marco normativo aplicable, se precisa la normatividad aplicable a la función de fiscalización a cargo del Poder Legislativo del Estado, siendo ésta: Artículos 116, fracción II y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, párrafo primero, 63, fracciones XVIII y XIX y 66, fracciones I y II de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; 3, fracción V, 56, 57, 58, 59 y 60 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato; 18 del Reglamento de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato; y 42 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.

Con base en lo anterior, la auditoría de desempeño materia del presente dictamen, se ejecutó bajo los principios, conceptos y directrices de las actuales Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización, compiladas y editadas por la Auditoría Superior de la Federación, de manera particular por lo que hace a sus numerales 100 y 300.

En esta parte también se puntualiza que las auditorías de desempeño que se practican por la Auditoría Superior del Estado son congruentes con las metodologías señaladas por las Normas Internacionales para Entidades Fiscalizadoras Superiores 100, 300, 3000 y 3100, emitidas por la Organización Internacional de Instituciones de Fiscalización Superior, sin omitir como criterio referencial al Manual de Formulación de Programas con la Metodología de Marco Lógico, así como al de Metodología de Marco Lógico para la Planificación, el Seguimiento y la Evaluación de Proyectos y Programas, ambos editados por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe; la Guía para la Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados, emitida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y el Manual para el Diseño y Construcción de Indicadores, editado también por el citado organismo en 2014, entre otros.

De igual forma, se menciona que el 24 de marzo de 2017 se publicó en el

Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el Manual para las Auditorías al Desempeño de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato.

En esta parte también se establece que la auditoría tuvo como directriz los principios institucionales de objetividad, definitividad, confiabilidad, imparcialidad, independencia, transparencia, legalidad y profesionalismo.

En cuanto al punto correspondiente a estructura del informe y valoración, se señala que el artículo 26 del Reglamento de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato refiere los requisitos mínimos que deben contener los informes de resultados de las auditorías de desempeño, los cuales se cumplieron en la formulación del informe de resultados.

Por otra parte, el artículo 27 del Reglamento de referencia, establece que el informe de resultados deberá estar debidamente fundado y motivado, así como presentar los hechos y su evaluación de manera objetiva, clara y acotada a los elementos esenciales. De lo anterior, se concluye en esta parte que la redacción del informe de resultados materia del presente dictamen es precisa y comprensible.

Por lo que hace a la valoración de la respuesta del sujeto fiscalizado, el Órgano Técnico determinó lo conducente respecto a las recomendaciones emitidas, para lo cual realizó un análisis de la documentación y evidencia proporcionada por el sujeto fiscalizado, a fin de valorar si éste efectuó mejoras, si realizará alguna acción o emitió la justificación correspondiente sobre la improcedencia por la cual no resulte factible su implementación o bien, la consideración de medidas alternas que fortalezcan el desempeño de la gestión pública. Asimismo, se señala que las recomendaciones efectuadas al sujeto fiscalizado podrían considerarse como persistentes, cuando no sea posible valorarlas en alguno de los supuestos antes referidos.

Es así, que la valoración realizada por la Auditoría Superior del Estado redunda en las manifestaciones, argumentos, acciones y evidencia presentada en la respuesta al pliego de recomendaciones, para lo cual la evidencia aportada por el sujeto fiscalizado debe ser competente, pertinente, suficiente y relevante.

Respecto al objetivo, periodo y alcance de la auditoría se señala que en las auditorías de desempeño se plantea como objetivo general promover constructivamente la gestión económica, eficaz y eficiente de los recursos públicos, así como contribuir a la transparencia y rendición de cuentas de la Administración Pública.

La auditoría de desempeño busca brindar información, análisis o perspectivas, y cuando corresponda, recomendaciones de mejora. Dicha auditoría también persigue añadir valor público, abordando las causas de los problemas y debilidades de forma práctica, lógica y racional, con la intención de mejorar significativamente el desempeño de los programas públicos.

Asimismo, por medio de las auditorías de desempeño, la Auditoría Superior del Estado analiza el cumplimiento de metas y objetivos de las políticas, planes, programas, proyectos y, en general, de las acciones gubernamentales de los sujetos fiscalizados, identificando la fortaleza y retos en su diseño, operación, seguimiento, monitoreo, impacto y evaluación, proponiendo alternativas para su mejora.

Por lo que respecta a la auditoría que nos ocupa se tuvo por objetivo particular fiscalizar el correcto diseño de un Programa Presupuestario del municipio de Doctor Mora, Gto., conforme a la Metodología del Marco Lógico, incluyendo su Matriz de Indicadores para Resultados, así como el cumplimiento oportuno de sus metas planeadas.

Del objetivo antes descrito se desprenden los siguientes objetivos específicos: Formulación y justificación del Programa Presupuestario; contribución del Programa Presupuestario a las metas y estrategias de planeación para el desarrollo municipal; consistencia de la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa auditado; y presupuestación y cumplimiento de las metas proyectadas en su caso para el Programa Presupuestario, calificando

porcentualmente su culminación o ejercicio al cierre del ciclo presupuestal anual.

También se señala que en la auditoría materia del presente dictamen se aplicó un enfoque de consistencia y resultados, dado que se revisó la formulación de un Programa Presupuestario Municipal, así como el cumplimiento de metas del mismo, proveyendo información que retroalimenta su diseño, gestión y resultados.

Es así que los objetivos específicos se desarrollaron en la auditoría en los siguientes resultados:

Formulación y justificación del Programa:

- Diagnóstico de la situación problema.
- Población potencial y objetivo.
- Árbol de problemas.
- Árbol de objetivos.
- Correspondencia entre los árboles.

Contribución a las metas y estrategias de la planeación para el Desarrollo Municipal:

- Correspondencia entre el fin y el Plan Municipal de Desarrollo.

Consistencia de la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa:

- Fin.
- Propósito.
- Componentes.
- Actividades.
- Supuestos a nivel Propósito y a nivel Fin.
- Supuestos a nivel Componente y a nivel Actividades.
- Alineación con los instrumentos de planeación.
- Indicadores a nivel Propósito.
- Indicadores a nivel Componente.
- Fichas técnicas para cada uno de los indicadores.
- Medios de verificación.

Presupuestación y cumplimiento de metas:

- Inclusión del Programa en Presupuesto.
- Avance en el cumplimiento de metas programadas para componentes en el ejercicio fiscal.

También se señala que en las auditorías de desempeño son coincidentes su alcance temporal con el ciclo presupuestal anual al cual puede retroalimentar, sin que ello sea obstáculo para que se utilice por el Órgano Técnico tanto información histórica de anualidades pasadas como elementos actuales o simultáneos a la auditoría, considerando en este último caso que la misma busca mejorar la gestión y no exclusivamente regularizar hechos pasados o retrotraer acciones de mejora, que en la mayoría de los casos es materialmente inviable.

Respecto a los antecedentes del proceso de fiscalización, éstos ya se detallaron en el apartado correspondiente.

En lo correspondiente al contexto general de la materia a auditar se describe brevemente el origen y la evolución de la política pública, así como la unidad responsable del Programa materia de la auditoría.

Al respecto, se establece que el Programa Presupuestario objeto de la revisión se seleccionó a partir de la información

proporcionada por el sujeto fiscalizado en los informes financieros trimestrales, en la cuenta pública y en su respuesta al requerimiento de información que le fue formulado por el Órgano Técnico, considerando para ello la asignación presupuestal, el cúmulo y la calidad de la información que sirvió de sustento para su construcción metodológica.

De igual forma, se refiere que es importante para el municipio de Doctor Mora, Gto., según lo establecido en su Programa, buscar fortalecer la estructura educativa, propiciando evitar la deserción escolar y promover el aprovechamiento estudiantil, a través de impulsar y brindar estímulos a los estudiantes doctormorenses.

Por lo anterior, el Programa «Aprovechamiento Estudiantil», contó con los elementos necesarios para realizar un análisis de su diseño, al tener información presupuestal y con una Matriz de Indicadores para Resultados justificada en un análisis de problema-objetivos, misma que presenta información en cada uno de sus elementos: Resumen narrativo, indicadores, medios de verificación y supuestos.

En la parte correspondiente a la unidad responsable, se establece que de acuerdo a la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, para el despacho de los diversos ramos de la administración pública municipal, el ayuntamiento de Doctor Mora, Gto., estableció la Dirección de Educación y Cultura, la cual es responsable del Programa «Aprovechamiento Estudiantil».

En la parte conducente a criterio general, se señala que la Ley General de Contabilidad Gubernamental tiene por objeto establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización, y en general, contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingresos públicos.

En este orden de ideas, el artículo 54 del referido ordenamiento establece que la información presupuestaria y programática que forme parte de la cuenta pública debe relacionarse con los objetivos y prioridades de la planeación del desarrollo; debiendo incluir también los resultados de la evaluación del desempeño de los programas municipales, así como los vinculados al ejercicio de los recursos federales que les hayan sido transferidos, para lo cual se deben utilizar indicadores que permitan determinar el cumplimiento de las metas y objetivos de cada uno de los programas, así como vincular los mismos con la planeación del desarrollo.

Por su parte, el artículo 61 de la citada Ley establece que los municipios incluirán en sus presupuestos de egresos, apartados específicos con la aplicación de los recursos conforme a las clasificaciones administrativa, funcional, programática, económica y, en su caso, geográfica y sus interrelaciones que faciliten el análisis para valorar la eficiencia y eficacia en el uso y destino de los recursos y sus resultados; señalando que en el proceso de integración de la información financiera para la elaboración de los presupuestos, se deberán incorporar los resultados que deriven de los procesos de implantación y operación del presupuesto basado en resultados y del sistema de evaluación del desempeño, establecidos en términos del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Asimismo, el artículo 6 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental consigna que el Consejo Nacional de Armonización Contable es el órgano de coordinación y tiene por objeto la emisión de las normas contables y lineamientos para la generación de información financiera que aplicarán los entes públicos, los cuales adoptarán e implementarán las decisiones del Consejo con carácter obligatorio, de acuerdo a lo señalado en el artículo 7 de la citada Ley.

En razón de lo anterior, el Consejo Nacional de Armonización Contable emitió los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología del Marco Lógico, mismos que son obligatorios para todos los entes públicos. Conforme a los citados lineamientos, para la generación, homologación, actualización y publicación de los indicadores de desempeño de los programas operados por los entes públicos deben considerar la Matriz de

Indicadores para Resultados, definida por dichos lineamientos.

Los artículos 3, fracción XXV y 102 sexies de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato establecen que el Sistema de Evaluación al Desempeño es el conjunto de elementos metodológicos que permiten realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores que permitan conocer el impacto social de los programas y de los proyectos. En el caso de los municipios la Tesorería Municipal emitirá y aplicará dicho Sistema.

Finalmente, se establece que el artículo 70 de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato refiere que los ejecutores del gasto serán los responsables de la gestión por resultados, por lo que deberán cumplir los objetivos y metas contenidos en sus programas presupuestarios, conforme a lo dispuesto en los presupuestos de egresos, programas de Gobierno y demás normativa aplicable.

b) Resultado del proceso de fiscalización.

Por lo que se refiere a este punto, se presentan los resultados de la auditoría realizada, estableciendo las recomendaciones formuladas al sujeto fiscalizado, plasmando en cada una las acciones preventivas y correctivas que se deben llevar a cabo para subsanar las situaciones detectadas durante el proceso de auditoría.

Derivado de lo anterior, se formulan los resultados y recomendaciones contenidos en los rubros de Formulación y Justificación del Programa Presupuestario; Contribución a las Metas y Estrategias de la Planeación para el Desarrollo Municipal; Consistencia de la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario; y Presupuestación y Cumplimiento de Metas.

En tal sentido, en el rubro de Formulación y Justificación del Programa Presupuestario, se formularon las recomendaciones plasmadas en los puntos 1, correspondiente al resultado número 1, referente a diagnóstico de la situación-problema; 2, contenido en el resultado número 2, relativo a población potencial y objetivo; 3 del resultado número 3, referido a árbol de problemas; 4 del resultado número 4, correspondiente a árbol de objetivos; y 5 del resultado número 5, relativo a correspondencia entre los árboles. Respecto al apartado de Contribución a las Metas y Estrategias de la Planeación para el Desarrollo Municipal, el punto 6 del resultado número 6, relativo a alineación con los instrumentos de planeación. En cuanto al rubro de Consistencia de la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario, los puntos 7 del resultado número 8, correspondiente a propósito; 8 del resultado número 9, referente a componentes; 9 del resultado número 10, relativo a actividades; 10 del resultado número 11, referido a supuestos a nivel propósito y a nivel fin; 11 del resultado número 12, correspondiente a supuestos a nivel componentes y actividades; 12 del resultado número 13, referente a indicadores a nivel propósito; 13 del resultado número 14, relativo a indicadores a nivel componente; 14 del resultado número 15, correspondiente a fichas técnicas para los indicadores; y 15 del resultado número 16, referido a medios de verificación. Por lo que hace al apartado de Presupuestación y Cumplimiento de Metas, se formulan las recomendaciones plasmadas en los puntos 16 del resultado número 17, referente a inclusión de programa en presupuesto; y 17 del resultado número 18, referido a avance en el cumplimiento de metas programadas para componentes en el ejercicio fiscal.

En el caso del resultado número 7, relativo a fin, del apartado de Consistencia de la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario, éste no generó recomendaciones por parte de la Auditoría Superior del Estado.

c) Resumen de las recomendaciones.

En este punto se establece un resumen de los resultados que generaron recomendación, producto de un área de oportunidad o mejora sugerida por la Auditoría Superior del Estado, los cuales se clasifican agrupados bajo su respectiva

vertiente, con la síntesis de la valoración efectuada, precisando que el sujeto fiscalizado no dio respuesta al pliego de recomendaciones, por lo que se determinó que las 17 recomendaciones persistieron. De lo anterior, dará seguimiento el Órgano Técnico en la etapa correspondiente.

d) Conclusión General.

La Auditoría Superior del Estado concluyó en cuanto a la formulación y justificación del Programa Presupuestario objeto de la auditoría, que el municipio de Doctor Mora, Gto., siguió de manera parcial la Metodología del Marco Lógico conforme a la normativa y mejores prácticas en la materia; no obstante se señala que cuenta con áreas de oportunidad para mejorar la justificación del Programa revisado, así como para fortalecer la identificación de su población objetivo o área de enfoque, como se desprende de las recomendaciones formuladas en el informe de resultados.

Con respecto a la contribución a las metas y estrategias de la Planeación para el Desarrollo Municipal se verificó que el Municipio presenta un área de oportunidad en cuanto a la vinculación específica entre los instrumentos de planeación actualizados y el programa auditado.

Por lo que hace a la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario se informa que el sujeto fiscalizado presenta diversas áreas de oportunidad en cuanto al cumplimiento de los postulados que establece la normativa y metodología aplicables para dicha matriz de control, monitoreo, seguimiento y evaluación, como herramienta de la gestión para resultados, por lo que se plantean algunos hallazgos que se describen en el informe de resultados.

En cuanto al cumplimiento de metas, el municipio de Doctor Mora, Gto., cuenta con la oportunidad de asignar metas al Programa y realizar acciones para su monitoreo y cumplimiento.

También en esta parte se destaca que el sujeto de fiscalización no dio respuesta al pliego de recomendaciones en el plazo establecido por la norma.

De igual forma, se refiere que las recomendaciones emitidas en el informe de resultados, son con el único objetivo de que el municipio de Doctor Mora, Gto., logre los resultados esperados, partiendo de que su apropiado o correcto diseño, le permita cumplir en su operación con las dimensiones de eficacia, eficiencia, economía y calidad, premisas que mandata la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Finalmente, se informa que el seguimiento a las recomendaciones respecto de las cuales el sujeto fiscalizado realizará acciones o mejoras en un plazo determinado, se efectuará por la Auditoría Superior del Estado, hasta la total implementación de las mismas, de conformidad con lo establecido en la normativa aplicable.

V. Conclusiones:

Como ya lo habíamos señalado en párrafos anteriores, el artículo 38 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato establece que los informes de resultados solamente podrán ser observados por las dos terceras partes de los diputados integrantes del Congreso del Estado, cuando: I. En perjuicio del sujeto de fiscalización no se haya otorgado el derecho de audiencia o defensa; II. No se hayan valorado las documentales aportadas por el sujeto de fiscalización durante el procedimiento de fiscalización hasta la notificación del informe de resultados; y III. No se observen las formalidades esenciales del proceso de fiscalización. Señalando que en tales casos la Auditoría Superior del Estado, deberá atender las observaciones correspondientes.

En este sentido, quienes integramos esta Comisión analizamos el informe de resultados materia del presente dictamen, considerando las hipótesis referidas en el precepto anteriormente señalado.

Como se desprende del informe de resultados, el Órgano Técnico dio cumplimiento al artículo 58 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, al haberse notificado las

recomendaciones derivadas de la auditoría al sujeto fiscalizado, concediéndole el plazo que establece la Ley para atender las recomendaciones formuladas por el Órgano Técnico. Al respecto, cabe mencionar que el sujeto fiscalizado no dio respuesta al pliego de recomendaciones.

De igual manera, existe en el informe de resultados la constancia de que éste se notificó al sujeto fiscalizado. En tal virtud, se considera que fue respetado el derecho de audiencia o defensa por parte del Órgano Técnico.

Finalmente, del informe de resultados podemos inferir que el Órgano Técnico en el desarrollo del procedimiento de auditoría, dio cumplimiento a las formalidades esenciales que la misma Ley establece para el proceso de fiscalización, al haberse practicado la auditoría que estaba contemplada en el Programa General de Fiscalización 2017, aprobado por el Auditor Superior del Estado. Asimismo, la auditoría se efectuó atendiendo a lo establecido en la normatividad aplicable en la materia, cumpliendo lo estipulado por el artículo 3 y el Capítulo VI del Título Segundo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, así como el artículo 28 del Reglamento de dicha Ley.

En razón de lo anteriormente señalado, concluimos que el informe de resultados de la auditoría de desempeño practicada a la administración municipal de Doctor Mora, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2016, debe sancionarse por el Congreso en los términos presentados por la Auditoría Superior del Estado y proceder a su aprobación, considerando que no se presenta alguno de los supuestos contenidos en el artículo 38 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, razón por la cual no podría ser observado por el Pleno del Congreso.

Por lo expuesto, con fundamento en el artículo 204 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, nos permitimos someter a la consideración de la Asamblea, la aprobación del siguiente:

A C U E R D O

Único. Con fundamento en el artículo 63 fracción XIX de la Constitución Política para el Estado, en relación con los artículos 3, fracción V, 5, fracción IV, 56, 59 y 60 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato y 28 del Reglamento de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, se aprueba el informe de resultados formulado por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, de la auditoría de desempeño practicada a la administración municipal de Doctor Mora, Gto., correspondiente al periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 2016.

Se ordena dar vista del informe de resultados al ayuntamiento del municipio de Doctor Mora, Gto., a efecto de que se atiendan las recomendaciones contenidas en el informe de resultados, informando a la Auditoría Superior del Estado de las acciones realizadas para ello, con objeto de que esta última realice el seguimiento correspondiente, previsto en los artículos 37, fracción VII, 65 y 66 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato y 77 del Reglamento de dicha Ley.

Remítase el presente acuerdo junto con su dictamen y el informe de resultados al ayuntamiento del municipio de Doctor Mora, Gto., así como a la Auditoría Superior del Estado, para los efectos de su competencia.

Guanajuato, Gto., 2 de octubre de 2017. La Comisión de Hacienda y Fiscalización. Dip. Elvira Paniagua Rodríguez. Dip. Angélica Casillas Martínez. Dip. María Alejandra Torres Novoa. (Con observación) Dip. Juan Carlos Muñoz Márquez. Dip. María Guadalupe Velázquez Díaz.»

-El C. Presidente: Si alguna diputada o algún diputado desean hacer uso de la palabra en pro o en contra, manifiéstenlo indicando el sentido de su participación.

En virtud de que no se han registrado participaciones, se pide a la secretaría que proceda a recabar votación nominal de la Asamblea, a través del sistema electrónico, a efecto de aprobar o no los dictámenes puestos a su consideración. Se abre el sistema electrónico.

-La Secretaría: En votación nominal, por el sistema electrónico, se consulta a las diputadas y a los diputados si se aprueban los dictámenes puestos a su consideración.

(Votación)

-La Secretaría: ¿Falta alguna diputada o algún diputado por emitir su voto?

-El C. Presidente: Se cierra el sistema electrónico.

-La Secretaría: Diputado presidente, le informo que se han registrado 31 votos a favor y ningún voto en contra.

-El C. Presidente: Los dictámenes han sido aprobados por unanimidad de votos.

En consecuencia, remítanse los acuerdos aprobados, junto con sus dictámenes y los informes de resultados, a los ayuntamientos de Huanímaro, Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Manuel Doblado, Irapuato, Jaral del Progreso, Doctor Mora, Salamanca y Tierra Blanca, así como a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato para los efectos de su competencia.

De igual forma, remítanse los acuerdos aprobados relativos a las cuentas públicas de los ayuntamientos de Jaral del Progreso, Doctor Mora y Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, al Titular del Poder Ejecutivo del Estado para su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Se pide a la secretaría dar lectura a la propuesta que suscriben la diputada y los diputados integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, relativa a la modificación en la integración de las Comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y Para la Igualdad de Género de esta Sexagésima Tercera Legislatura.

PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA QUE SUSCRIBEN LA DIPUTADA Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y COORDINACIÓN POLÍTICA, RELATIVA A LA MODIFICACIÓN EN LA INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES Y PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO DE ESTA SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA.

-La Secretaría: Con gusto presidente.

(Leyendo) **»C. Dip. Angélica Casillas Martínez. Presidenta del Congreso del Estado. Presente.**

Los que suscribimos diputada y diputados integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, ante esta Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato, con fundamento en el artículo 72, fracción V de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, formulamos la siguiente propuesta de modificación en la integración de las Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y Para la Igualdad de Género, en los términos que a continuación exponemos:

Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales: Dip. Luis Vargas Gutiérrez, Vocal, en sustitución de la Dip. Verónica Orozco Gutiérrez.

Comisión para la Igualdad de Género: Dip. Verónica Orozco Gutiérrez, Vocal, en sustitución del Dip. Luis Vargas Gutiérrez.

Sin otro particular, solicitamos se le otorgue al presente el trámite parlamentario correspondiente y aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Guanajuato, Gto., 24 de octubre d 2017. Diputados y diputada integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política. Dip. Éctor Jaime Ramírez Barba. Dip. Rigoberto Paredes Villagómez. Dip. Beatriz Manrique Guevara. Dip. Alejandro Trejo Ávila. Dip. Eduardo Ramírez Granja. »

-El C. Presidente: Muchas gracias diputada secretaria. La propuesta está a su consideración señores diputados. Si tienen algún interés en hacer uso de la palabra en pro o en contra, manifiéstenlo a esta presidencia.

En virtud de no haberse registrado participaciones corresponde, en los términos del artículo 76 de nuestra Ley Orgánica, se proceda someter a votación las modificaciones de la integración de las Comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y para la Igualdad de Género, para lo cual se recabará votación por cédula a través del sistema electrónico. Para tal efecto, se abre el sistema electrónico.

(Votación por Cédula)

¿Falta alguna diputada o algún diputado de emitir su voto?

-El C. Presidente: Se cierra el sistema electrónico.

-La Secretaría: Señor diputado, le informo que se registraron 28 votos a favor, 2 votos en contra, con un total de 30 votos.

-El C. Presidente: La propuesta ha sido aprobada por mayoría de votos.

En consecuencia, se declara modificada la integración de las Comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y para la Igualdad de Género, conforme a la propuesta aprobada.

ASUNTOS GENERALES

-El C. Presidente: Corresponde abrir el registro para tratar asuntos de interés general. Me permito informarles que previamente se ha inscrito la diputada Beatriz Manrique Guevara para hablar del tema »sector salud» Si algún otro integrante de esta Asamblea desea inscribirse, manifiéstenlo por favor a esta presidencia.

¿Diputada Arcelia María González González?

C. Dip. Arcelia María González González: Sí presidente, para notarme con un Punto de Acuerdo con respecto al presupuesto.

-El C. Presidente: ¿Me puede repetir el tema?

C. Dip. Arcelia María González González: Punto de Acuerdo, tema presupuesto.

-El C. Presidente: Diputado Juan Carlos Muñoz Márquez, ¿cuál es el tema?

C. Dip. Juan Carlos Muñoz Márquez: Sí, para un exhorto.

-El C. Presidente: Gracias diputado.

Diputada Beatriz Manrique Guevara, tiene el uso de la tribuna.

LA DIPUTADA BEATRIZ MANRIQUE GUEVARA, INTERVIENE CON EL TEMA »SECTOR SALUD»



C. Dip. Beatriz Manrique Guevara: Muchas gracias. Con el permiso de la presidencia. Compañeras y compañeros.

En Guanajuato el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México siempre ha luchado por las mejoras significativas de los servicios básicos que desde el gobierno del estado o de los gobiernos municipales se prestan a los ciudadanos, entre los cuales reconocemos como fundamental el servicio de la salud, pilar del bienestar de los y las guanajuatenses y uno de los derechos humanos elementales para cualquiera.

Uno de los elementos claves para brindar el servicio de la salud a la altura de lo que la población se merece, es que el personal que está cargo de este servicio tenga todas sus prestaciones, deben contar con un salario, prestaciones dignas y a la altura de sus necesidades, para así corresponder en atención del primer nivel y con calidez como parte de su trabajo. En esta área en específico, existe el acuerdo de coordinación para la descentralización integral de los servicios de salud, celebrado con fecha 20 de agosto de 1996 entre la federación y Guanajuato.

En su cláusula XVIII, el gobierno del Estado de Guanajuato acepta la obligación de garantizar a los trabajadores el respeto de

todos sus derechos, prerrogativas, beneficios y prestaciones contenidas en las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud, como lo es el Fondo de Ahorro Capitalizable. A la vez, las condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud en su artículo 1°, indican que las mismas son obligatorias y aplicables para los trabajadores de los organismos públicos descentralizados de las entidades federativas, por lo que a través del impulso de los propios trabajadores se logró la creación de un fondo de ahorro con características similares a las que tienen como prestación los trabajadores de plaza federal.

Es así que desde enero de 2014 se inicia la operación del fondo de ahorro para los trabajadores eventuales regularizados, para que mediante un descuento quincenal vía nómina, se hicieran aportaciones por parte de los trabajadores elegibles, que se verían complementadas con aportaciones del Instituto de Salud Pública para el Estado de Guanajuato, el ISAPEG y una cuota sindical; de tal modo que al final del primer ciclo previsto para dicho fondo, esto es en julio de 2015, toda persona trabajadora que cumplió con la totalidad del ciclo, recibió poco más de 16 mil pesos como una suma de aportaciones individuales, aportaciones del ISAPEG y la aportación del Sindicato, además del rendimiento sobre la aportación global.

En continuidad a dicha prestación, mediante un oficio circular de fecha 3 de septiembre de 2015, el Director General de Recursos Humanos del ISAPEG, Fernando Reynoso Márquez, anunció a los jefes de jurisdicción, directores de hospitales y a los directores de laboratorio y otros órganos del Sistema Estatal de Salud, que el fondo de ahorro sería renovado e incluiría al personal estatal regularizado y formalizado y que el nuevo ciclo correría hasta septiembre de 2016. No obstante estar anunciado por medio de comunicación oficial durante el ciclo 2015-2016, el fondo de ahorro en mención sufrió una merma respecto de las aportaciones de ISAPEG que modificó la contribución de un día y medio de salario mínimo burocrático federal vigente por cada participante, reduciéndolo drásticamente en el monto a recibir por cada trabajador y trabajadora con derecho a recibirlo, pretendiendo dar a cada uno de ellos casi la mitad de lo que se ahorró durante el ciclo 2014-2015. Dicha situación derivó en un descontento generalizado entre los agremiados del sindicato y gracias a su movilización y a la movilización de diversos actores públicos, se logró que el ISAPEG hiciera la aportación que se había obligado, resultando en que se hiciera el pago completo del fondo de ahorro para los trabajadores estatales regularizados y federalizados tal como la habían de recibir. Pareciera ser, en ese momento, que no obstante no tener lo »presupuestado» pareciera que no lo tenían presupuestado; sin embargo, fueron capaces de sacar de un día para otro más de 30 millones para cumplir con la obligación con los trabajadores. Este Congreso en el siguiente período no hemos disminuido el presupuesto asignado para el ISAPEG, en virtud de lo cual el fondo debería estar ahí.

A pesar del descontento que se generó en ese momento por la modificación unilateral y no informada de prestaciones y lo que ello implicaba para los trabajadores beneficiados por el Fondo de Ahorro en cuestión, el 27 de septiembre de 2016 se informó a quienes estaban en el mismo, que se suspenderían los descuentos de las aportaciones personales porque el fondo no estaría activo hasta en tanto se analizaran y autorizaran por la Junta de Gobierno del ISAPEG, las bases y lineamientos del funcionamiento del fondo de ahorro. En ese momento se reiteró el compromiso público y manifiesto tanto del servidor público Fernando Reynoso Márquez por parte de ISAPEG, como de José Martín Cano, Secretario General de la Sección 37 del Sindicato, de hacer subsistir el Fondo de Ahorro en beneficio de los Trabajadores Regularizados con un plazo máximo de 3 meses para su reactivación. El fondo de ahorro aún no ha reiniciado en este 2017, tan es así que en agosto de este año, apenas se nombró la Comisión de Gestión y Revisión del Fondo de Ahorro Voluntario. Los esfuerzos del personal sindicalizado no han tenido una respuesta tan expedita como debiera ser; no obstante los llamados hechos también, por la otra Sección, la 46 y a casi un año con su líder Bernardo, y a casi un año de haberse anunciado la suspensión *del fondo de ahorro para regularizados estatales y formalizados,* no parece haber voluntad,

compromiso, bases o instrumentos que impliquen la materialización de dicho fondo y, por lo tanto, el beneficio para quienes tienen derecho al mismo; lo anterior por completo desconociendo que los fondos de ahorro son una prestación laboral y como toda prestación integra el salario de los trabajadores en término de lo previsto por la legislación en la materia.

Luego entonces, al no tratarse de una concesión gratuita ni graciosa, sino una prestación derivada de un acuerdo y que ya se había entregado con anterioridad en dos ocasiones, de manera unilateral no puede ser suspendido, modificado, ni se puede entregar al placer o al contentillo de unos cuantos, nosotros venimos a esta tribuna a solicitar que este fondo de ahorro sea reactivado de inmediato, sin dejar pasar un mes más en hacerlo; además tomando en consideración que su reactivación no podría tener efectos retroactivos al no haberse hecho el descuento a los trabajadores de su aportación durante el tiempo en que este fondo ha estado cesado.

En una época en que hemos visto por distintos motivos aumentar la carga de las y los trabajadores de la Secretaría de Salud en sus trabajos y el incremento que no se ha visto acompañado por el incremento, -a la par-, en sus prestaciones, además porque para nadie es desconocido que la capacidad adquisitiva de los salarios es apremiante para los trabajadores, este fondo de ahorro es necesario, es urgente para los más de 8 mil trabajadores de base estatal, regularizados y formalizados y para que este fondo sea restablecido como una prestación a la que tienen derecho a la brevedad.

Por ello, desde esta tribuna los diputados del Verde hacemos llegar un llamado al Ejecutivo del Estado, recordándole que el presupuesto del ISAPEG no fue reducido en 2017 y que en 2016, recordándole, sin tener lo presupuestado, lograron sacar más de 30 millones de pesos que parecían y yo insisto, parecían no presupuestados pero pudieron sacarlos y otorgarle a los trabajadores lo que según el ISAPEG, decían, no estaba previsto. Si nosotros los diputados le otorgamos exactamente el mismo presupuesto, en recurso tendría que estar ahí; y de ahí que nosotros hacemos un llamado al Ejecutivo del Estado para que por conducto del ISAPEG garantice la presupuestación y programación de los recursos que se integrarán al fondo de ahorro de los trabajadores de base, estatales, regularizados y formalizados, contemplándolos en la iniciativa de Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018, para que se presente ante esta Asamblea para su aprobación, y se nos explique lo que no se ejerció y que sí estaba y debería estar presupuestado por parte del ISAPEG en el ejercicio 2017.

No olvidemos compañeras y compañeros diputados que todos los que estamos aquí somos representantes no solamente de la gente de nuestros paridos, somos representantes de todos los guanajuatenses y que todos los que hemos sido electos tenemos la obligación de llevar los reclamos que sean justos, sentidos y fundamentados para que lleguen a buen puerto por parte de la sociedad, hacer todo lo que está en nuestras manos y estamos obligados a hacer y reconocer que las prestaciones laborales de más de 8 mil trabajadores guanajuatenses no federalizados, puedan tener acceso a su fondo de ahorro porque ellos también trabajan con pasión y trabajan según las instrucciones del Ejecutivo del Estado, con calidez. Por su atención, muchísimas gracias.

-El C. Presidente: Diputada Arcelia María González González, tiene usted el uso de la tribuna y le recuerdo que es hasta por diez minutos, por favor.

INTERVENCIÓN DE LA DIPUTADA ARCELIA MARÍA GONZÁLEZ GONZÁLEZ, PRESENTA UN PUNTO DE ACUERDO RESPECTO AL PRESUPUESTO.



C. Dip. Arcelia María González González: Muchas gracias. Con el permiso del presidente de la mesa directiva.

»Diputada Angélica Casillas Martínez. Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Guanajuato. Presente.

Las y los diputados que integramos el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional ante la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57 primer párrafo de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; 167 y 204 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, la presente propuesta de Punto de Acuerdo para exhortar al Gobernador Constitucional del Estado de Guanajuato, para que en la asunción de su responsabilidad de elaborar la iniciativa de Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2018, se reflejen acciones y decisiones de alta disciplina y austeridad presupuestal, atendiendo a las siguientes:

CONSIDERACIONES

En una democracia es constante la dificultad de explicar cómo sigue siendo compatible el cobro de impuestos con un ejercicio del gasto público en conceptos insostenibles, y que consistentemente son blanco de la demanda ciudadana a sus gobiernos para una actuación por la que decididamente incorporen a dicho gasto mayores acciones de racionalidad y austeridad, sobre todo en lo que justamente se ha identificado como gastos superfluos y de privilegio para los servidores públicos. Claramente la voz ciudadana se ha estructurado en un imperativo para sus mandatarios, mismo que no puede desvirtuarse en forma alguna ni atenderse con disimulo.

Las diputadas y los diputados de esta honorable Soberanía ya hemos tomado decisiones correctas y rendido cuentas claras en diversas materias, y gracias a la voluntad política, a la altura de miras y a un fiel entendimiento del mandato que nos ha sido conferido, han marcado un hito en la función legislativa del estado de Guanajuato, a saber, el diseño constitucional de un sólido sistema anticorrupción y el retiro del fuero constitucional a todos los funcionarios públicos de la entidad.

Precisamente, el haber legislado con este nivel de conciencia política y social, abreviando la artificiosa distancia entre gobernantes y gobernados, a usanza de tiempos afortunadamente proscritos, nos resulta innegable e impostergable que esta Soberanía se mantenga en la ruta y nuevamente ofrezca solo las mejores soluciones que nos permitan transitar como sociedad y gobierno a espacios de entendimiento y convivencia que nos permitan la evolución institucional tan gradualmente edificada.

La delicada situación de las finanzas públicas ha hecho evidente, una vez más, la distancia entre una clase política que goza de privilegios y una ciudadanía a la que se le exige hacer sacrificios bajo el discurso de que los recursos públicos siempre son escasos. En este momento de discutir nuevas formas de cuidar el dinero público, mediante acciones concretas y realizables de racionalidad y austeridad presupuestal y control al gasto superfluo, no podemos dejar de lado la búsqueda de una austeridad de los servidores públicos.

Hoy el servicio público ha sido tensionado por un cúmulo de gastos inerciales y de aprobación prácticamente automática, que por su tradición se han falazmente estimado como indisolubles y hasta condicionantes para el buen servicio. Si bien es cierto que las diferentes acciones administrativas hasta ahora anunciadas por los diferentes entes públicos en materia de racionalidad y austeridad en el ejercicio de sus presupuestos pueden entenderse como debidas y oportunas, también es cierto que, precisamente por su naturaleza administrativa, no alcanzan el impacto, la generalidad y la obligatoriedad en todo el sector público a fin de trazar la solución suficiente en sustitución de medidas temporales producto del ejercicio de facultades discrecionales.

La austeridad buscada debe ser un equilibrio entre el reclamo y la sensatez, pero no puede ser una simulación en forma alguna. Una austeridad sensata que parta del abandono del privilegio sin razón y que ha

conducido a que los altos y medios mandos del servicio público vivan por encima de las posibilidades del ciudadano común, lastimando la dignidad por el servicio público al ser visto en muchas ocasiones como un botín en lugar de un honor, y lo que es más grave, incrementando la débil confianza ciudadana en sus instituciones.

Parafraseando a Mark Blyth, en su libro *La austeridad: Historia de una idea peligrosa*, presenta a la austeridad como una forma de deflación voluntaria por la cual la economía entra en un proceso de ajuste basado en la **reducción de los salarios, el descenso de los precios y un menor gasto público, algo cuya mejor y más pronta consecución exige el recorte de los presupuestos públicos y la disminución de la deuda y el déficit**.

A tono de lo señalado, el numeral 55 de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato establece que los sujetos de la Ley serán responsables de la estricta observancia de los criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal, para optimizar la aplicación de recursos en conceptos de gasto corriente; y que para estos efectos deberán emitir las medidas permanentes para la reducción y racionalización del gasto corriente, previendo un uso eficaz y transparente de los recursos públicos.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de la Asamblea, el siguiente Punto de Acuerdo:

Único. Se exhorta al Gobernador Constitucional del Estado de Guanajuato para que en la asunción de su responsabilidad de elaborar la iniciativa de Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2018, se reflejen en el mismo acciones y decisiones de alta disciplina y austeridad presupuestal, al menos en los siguientes conceptos de gasto corriente:

I. Contratación de personal de carácter eventual y transitorio;

II. Pago de primas por concepto de seguro de vida y seguro de gastos médicos cuando el servidor público goce de tales prestaciones a cargo de las instituciones de seguridad social a las que se encuentren incorporados;

III. Creación de plazas, salvo que así se justifique por la entrada en vigor de una ley o por la realización de movimientos compensados en el gasto;

IV. Asignación de vehículos institucionales a servidores públicos con funciones administrativas;

V. Asignación de combustible para vehículos particulares y oficiales afectos a funcionarios con actividades meramente administrativas;

VI. En materia de viajes de funcionarios públicos;

VII. Asignación de telefonía celular o radiocomunicación, salvo los requeridos para el desempeño de funciones de campo, seguridad y emergencia;

VIII. Pago de peajes por traslado al centro de trabajo y de este al lugar de residencia de los servidores públicos; y

IX. Gasto de alimentación de los servidores públicos.

Atentamente. Guanajuato, Gto., a 26 de octubre de 2017. Dip. Arcelia María González González»

Por lo antes expuesto, agradezco su atención. Es cuánto presidente, muchas gracias.

-El C. Presidente: Muchas gracias diputada. ¿Nos va a dejar la propuesta?

C. Dip. Arcelia María González González: Se la entrego señor presidente.

-El C. Presidente: Se recibe la propuesta y de conformidad con el primer párrafo del artículo 152 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; se enlistará en el orden del día de la siguiente sesión, para el trámite legislativo correspondiente.

Tiene el uso de la voz diputado Juan Carlos Muñoz Márquez, hasta por diez minutos.

INTERVENCIÓN DEL DIPUTADO JUAN CARLOS MUÑOZ MÁRQUEZ, PARA PRESENTAR UNA PROPUESTA DE PUNTO DE ACUERDO, A TRAVÉS DEL CUAL SE INSTRUYE A LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE GUANAJUATO PARA QUE INTEGRE EL EXPEDIENTE RELATIVO A LA AUDITORÍA INTEGRAL PRACTICADA A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE LEÓN, GTO.



C. Dip. Juan Carlos Muñoz Márquez: Con la venia del presidente.

Presidente de este Honorable Congreso y a todos los compañeros.

Quienes integramos el Grupo Parlamentario de Acción Nacional en esta Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57, primer párrafo de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, 177 y 204 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, nos permitimos presentar y someter a consideración de esta Honorable Asamblea, la presente propuesta de Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, mediante el cual se instruye a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato para que integre los expedientes relativos a la Auditoría Integral practicada a la administración pública de León, Gto., por los meses de octubre, noviembre y diciembre del ejercicio fiscal 2012, así como por los ejercicios fiscales del 2013 y 2014, así como los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto del 2015, a efecto de que remita dicha documental en copia certificada a la Auditoría Superior de la Federación y, por otro lado, se exhorte a la misma para que al amparo de su competencia y previa imposición de la documental remitida y antes referida, se pronuncie ante el Ministerio Público Federal en coadyuvancia a la indagatoria radicada en dicha Representación Social; lo anterior de conformidad a las siguientes consideraciones:

En atención a lo referido en el oficio 330/2017 de fecha 25 de octubre de 2017, suscrito por el licenciado Navigio Agustín Gallardo Romero, Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato, del cual el Congreso del Estado dio cuenta en sesión ordinaria del 26 de los corrientes y, mediante el cual se informa a este Honorable Asamblea sobre la situación que guardan las denuncias derivadas del ejercicio de la función de fiscalización de este Poder Legislativo, y en particular sobre la que recayó un acuerdo de competencia ante la Procuraduría General de la República, y como se indica en el citado escrito, el procedimiento penal remitido a la dependencia federal está vinculado con la Auditoría Integral practicada a la administración Pública de León, Gto., por los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2012, así como los años 2013 y 2014 y el año 2015 hasta el mes de agosto, mismas que fueron aprobadas en el Pleno de este Congreso del Estado con fecha 15 de diciembre de 2016 y de cuya aprobación derivó la presentación de las denuncias en mención. Asimismo, se desprende del escrito referido que el acuerdo de competencia descarga en la naturaleza de los recursos aplicados en las observaciones que fundan las denuncias correspondientes a éste, es el ejercicio en donde dichos recursos tienen su naturaleza federal.

Ante estas circunstancias, se impone a esta legislatura la obligación de proveer y coadyuvar con las instancias federales en el esclarecimiento de los hechos denunciados para tal propósito, se derive en la necesidad de remitir los resultados de las Auditorías antes mencionadas, como lo es el informe de resultados y anexos a la Auditoría Superior de la Federación, a fin de que en el ámbito de sus competencias se impongan las observaciones apropiadas y, de ser procedente, coadyuve con la Procuraduría General de la República en la investigación correspondiente, reiterando que es fundamental dicha participación por la naturaleza federal de los recursos ejercidos.

Antes de pronunciar el acuerdo, también quiero hacer mención que es competencia de la federación dar seguimiento a este tema; queremos exhortar a la Procuraduría Federal que no se quede en el escritorio. Todos los guanajuatenses, y estoy seguro que todos los diputados de esta legislatura, queremos trasparencia; se habla mucho de la transparencia, pero se tiene que demostrar que existe transparencia, si existe algún delito que seguir, que se persiga a los responsables y que demos cuenta de ello.

Derivado de los argumentos anteriormente expuestos, nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente punto de acuerdo:

Primero. Se instruye a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG), se sirva integrar el expediente relativo a la Auditoría Integral practicada a la administración pública de León, Gto., por los meses de octubre, noviembre y diciembre del año fiscal del año 2012; por los ejercicios fiscales de los años 2013 y 2014, así como por los meses de enero a agosto del 2015, respecto de las observaciones en las que se hayan determinado presuntas responsabilidades penales y cuyo origen de los recursos públicos fiscalizados sea de naturaleza federal, a efecto de que remita dicha documental en copia certificada a la Auditoría Superior de la Federación.

Segundo. Se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación para que al amparo de sus competencias y previa imposición de la documental remitida y referida en el punto anterior, se pronuncie ante el Ministerio Público Federal, en coadyuvancia a la indagatoria radicada en dicha representación social.

Yo creo que vale la pena que expliquemos a los ciudadanos en español, y en un idioma correcto; estamos hablando de una indagatoria donde una obra en nuestra ciudad, que debió haber costado 42 millones de pesos, y se da un fallo y éste se le otorga a una empresa, pero posteriormente se declara desierta, estos recursos provenían de la federación y deberían de haberse administrado de una manera justa y precisa.

Por alguna sospechosa razón, que no entendemos, posteriormente a la misma empresa se le da la obra, pero por asignación directa, pero en lugar de ser por 42 millones de pesos, fue por 49 millones de pesos; y al cuestionamiento de porqué aumentó el valor, porqué se le dio a la misma empresa habiéndose declarado desierta, ninguno de los argumentos tuvo absolutamente nada qué ver con el tema económico, fueron temas técnicos que se subsanaron, pero que de ningún motivo debían de haber aumentado el valor de esta obra.

Es por esto que queremos que esta iniciativa se apruebe, queremos pedir a todos nuestros compañeros que sí se apruebe la obvia resolución, que todos estemos de acuerdo en que tienen que seguir las indagatorias, y si son inocentes, ¡adelante que lo demuestren!, pero si son culpables, ¡adelante, que paguen, porque para eso nos pagan!, para generar justicia y dar certidumbre a los guanajuatenses.

Es cuánto señor presidente. Dejo copia del escrito.

-El C. Presidente: Se recibe la propuesta y de conformidad con el primer párrafo del artículo 152 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se enlistará en el orden del día de la siguiente sesión, para el trámite legislativo correspondiente.

-La Secretaría: Señor presidente, me permito informarle que se han agotado los asuntos listados en el orden del día. Asimismo, le informo que la asistencia a la presente sesión fue de 33 diputadas y diputados.

Asimismo le informo que se registraron las inasistencias de las diputadas María Alejandra Torres Novoa y Luz Elena Govea López, así como del licenciado Santiago García López, justificadas en su momento por la presidencia.

De igual manera le comunico que la diputada Angélica Casillas Martínez se retiró de la presente sesión con permiso de la presidencia.

-El C. Presidente: Muchas gracias secretaria.

En virtud de que el quórum de asistencia a la presente sesión es de 32 diputadas y diputados, el cual se ha mantenido hasta el momento, no procede instruir a un nuevo pase de lista.

CLAUSURA DE LA SESIÓN

Se levanta la sesión siendo las dos de la tarde con veinticinco minutos y se les comunica a las diputadas y a los diputados que se les citará para la siguiente por conducto de la Secretaría General. [26]

LXIII LEGISLATURA
CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

Junta de Gobierno y Coordinación Política

Dip. Éctor Jaime Ramírez Barba
Dip. Rigoberto Paredes Villagómez
Dip. Beatriz Manrique Guevara
Dip. María Alejandra Torres Novoa
Dip. Alejandro Trejo Ávila
Dip. Eduardo Ramírez Granja

Secretario General del
H. Congreso del Estado
Lic. Christian Javier Cruz Villegas

El Director del Diario de los Debates y
Archivo General
Lic. Alberto Macías Páez

Transcripción y Corrección de Estilo
L.A.P. Martina Trejo López
*
Responsable de grabación
Ismael Palafox Guerrero

[26] (Duración: 2:49:59 horas)